CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1993

DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
PRESIDENTE

LICDO. RODRIGO MOLINA A. LICDO. RAÚL TRUJILLO MIRANDA

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
PRESIDENTA

LICDO. JOSÉ MANUEL FAUNDES DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
PRESIDENTE

DRA. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DR. ARTURO HOYOS

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

ÍNDICE

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ELECTRÓNICA ROBINSON, S. A. EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO CIVIL DE COLON,- APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA DRA. ALMA LÓPEZ DE VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DEL DR. MARIO A. LARREATEGUI EN CONTRA DE LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR JACK MALCA MALCA EN CONTRA DEL JUEZ SEXTO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN REPARTIDO EL 10 DE JUNIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 3

EL LICENCIADO LUIS QUINTERO POVEDA SOLICITA QUE SE INVALIDE EL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL BANCO ANTIOQUEÑO S. A., EN CONTRA DEL JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, (APELACIÓN), FECHADO 21 DE ABRIL DE 1993, DICTADO POR EL PLENO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 4

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ EN CONTRA DEL JUEZ CUARTO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 5

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA ASESORES JURÍDICOS ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR GABRIEL BTESH BTESH EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 6

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR LEONEL JUVENAL ARAUZ CASTAÑEDAS CONTRA EL FISCAL DEL CIRCUITO DE DARIÉN, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 8

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO CAMILO ENRIQUE RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA JOVEN CARMEN A. MORENO POLO EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 9

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA RUBIO Y RUBIO EN REPRESENTACIÓN DEL DR. ORIEL OLMEDO PORTUGAL EN CONTRA DE LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 10

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A. EN CONTRA DEL JUEZ SÉPTIMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 10

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO DIOGENES AROSEMENA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ISAÍAS CAMACHO CONTRA EL JURADO DE ELECCIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS REPRESENTADOS POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADA: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 11

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR JAIME PADILLA BELIZ EN CONTRA DEL JUEZ CUARTO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 12

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ANÍBAL HERRERA PEÑA BETHANCOURT EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ BLANCO MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD VERACRUZ PANAMÁ, S. A. EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. REPARTIDO EL 4 DE JUNIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 13

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LICENCIADA ANA I. BELFON VEJAS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO PABLO SAAVEDRA EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) 14

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR GENARINO ROSAS EN CONTRA DEL JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 18

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ROBERTO SANJUR PÉREZ EN CONTRA DEL JUZGADO SECCIONAL DE MENORES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 19

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR MARIO ABEL DEL CID GÓMEZ EN CONTRA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 20

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO DOMINGO SANTIZO PÉREZ EN REPRESENTACIÓN DE LUIS E. ORTIZ EN CONTRA DEL GERENTE DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 21

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO FIDEL VÁSQUEZ CEBALLOS EN REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL Y EN CONTRA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 22

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA VERÓNICA GONZÁLEZ EN CONTRA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 23

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA EMMA OLIVEROS EN CONTRA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN. REPARTIDO EL 29 DE JUNIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES.PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 23

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA CLARA TENORIO LORENZO EN CONTRA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 24

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LCDO. CARLOS A. JAIME DE FREITAS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR DIEGO ARTURO DE SEDAS Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER DICTADA POR LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 25

AMPARO DE GARANTÍAS PROPUESTO POR CHAVARRÍA, RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTA YOLANDA ESCALA VÁSQUEZ EN CONTRA DE LA DELEGADA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL MINISTERIO DE SALUD. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 26

ACCION DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA SEÑORA KENIA ELIZABETH CÁRDENAS APOLAYO EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DG-1187-93 DE 12 DE JULIO DE 1993, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IRHE INGENIERO GONZALO CÓRDOBA C. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 27

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LCDO. FIDEL VÁSQUEZ CEBALLOS EN REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL Y EN CONTRA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 27

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. RICARDO LACHMAN VARELA EN REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES LUIS MARÍA OSTIZ Y JOSÉ ANTONIO OSTIZ EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 28

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ LUTTRELL EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ANTONIO GONZÁLEZ Q., Y EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, ENCARGADO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 28

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ECUATORIANA DE AVIACIÓN, S. A. Y EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 29

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ROBERTO KOURUKLIS I. EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA HILDA YOLANDA DE HERNÁNDEZ, ADMINISTRADORA JUDICIAL DE LA EMPRESA SNACK BAR TOCUMEN, S. A. EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 30

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR GERARDINO CEDEÑO CONTRA EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO CIVIL DE COLON, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 32

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR SANTIAGO MONTILLA EN CONTRA DEL JUEZ SEGUNDO SUPLENTE DEL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 33

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR BREDIO BENAVIDES Y EN CONTRA DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, (APELACIÓN). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 34

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LOS LICENCIADOS RINA GEDALOV Y BENIGNO VERGARA EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO LUIS A. NARVAEZ R., EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 35

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR RODRIGO MIRANDA EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 36

RECURSO DE HABEAS CORPUS 38

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR FRANKLIN LEZCANO GUERRA Y EN CONTRA DEL SEÑOR FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 38

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAVID BAKER EN CONTRA DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) 39

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR LÁZARO CÓRDOBA EN CONTRA DEL FISCAL QUINTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 40

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JULIÁN CABALLERO EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CON SEDE EN DAVID, CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 41

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES RICARDO SALAS BRENES Y RONALD SOLORZANO Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 42

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SR. PASCUAL HERRERA Y EN CONTRA DEL FISCAL DEL CIRCUITO DE COCLÉ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 43

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, ocho (8) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). . . . 43

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ZULEYKA CECILIA STOUT MINE EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN (SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 44

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO CAMACHO ALEMÁN Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 45

SANCIÓN DISCIPLINARIA DECRETADA CONTRA EL LICENCIADO FÉLIX A. PÉREZ ESPINOSA, FISCAL QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CHIRIQUÍ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 45

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR DANILO SOUSA JAÉN CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 46

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUY LORENZO SALAS SERRET CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 48

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR SALIM MORDOCK EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 49

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR HAVIV AVIAD EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON, MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 49

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR RICHARD ABREGO NÚÑEZ Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 50

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR EURÍPIDES LEMUS CORNEJO Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ.

PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 51

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR FELIPE CAMARENA CAMARENA Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 51

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FRANCISCO MONROY VARGAS Y EN CONTRA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 52

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR EL LICENCIADO. EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, A FAVOR DE JORGE E. RAMOS H. CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 54

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JULIO CESAR QUINTANA Y EN CONTRA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 54

HABEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLÁS ADON ROJAS EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. REPARTIDO EL 25 DE JUNIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 55

HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CARLOS PEREA ROSE EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 56

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES LEONEL CONTRERAS MARTÍNEZ Y RUBÉN DARIO MAXWELL RODRÍGUEZ EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 56

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ULTIMINIO BORBÚA Y EN CONTRA DE LA DIRECTORA DE CORRECCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO. PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 57

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ALÍ JARAMILLO Y EN CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 58

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES FERNANDO FRANCO, ROBERTO CZARKOWSKY, ROBERTO LEWIS Y LUIS ALEJANDRO NAVAS Y EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN (SECRETARIA DE DROGAS). MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 59

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELA RAFAELA CARRERA DE LEMUS EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 60

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 61

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS E. AYALA MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES EDUARDO LÓPEZ Y OTROS EN CONTRA DEL DECRETO EJECUTIVO N°171 DE 22 DE JUNIO DE 1992. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 61

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ A. PÉREZ EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA SANDRA BRUGIATTI Y OTROS EN CONTRA DEL DECRETO No. 65 DE 1990, EXPEDIDO POR EL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, nueve (9) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 63

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LOS LICENCIADOS RAFAEL MURGAS TORRAZZA Y ROLANDO MURGAS TORRAZZA DEL ARTICULO i DE LA LEY 20 DE 22 DE JULIO DE 1991, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 65

CALIFICACIÓN DEL IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO RAÚL TRUJILLO MIRANDA DENTRO DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 1 DE 1985 PRESENTADA POR EL ABOGADO MANUEL BELOI GARCÍA ALMENGOR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 66

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. RAÚL E. NÚÑEZ CÁRDENAS CONTRA EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 1320 DEL CÓDIGO CIVIL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 67

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LOS LICENCIADOS GUILLERMO A. COCHEZ, RAÚL JERÓNIMO OSSA Y MILTON HENRÍQUEZ SASSO, EN CONTRA DEL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 2 DEL ARTICULO 206 DE LA LEY 49 DE 4 DE DICIEMBRE DE 1984, MODIFICADO POR LA LEY 7 DE 27 DE MAYO DE 1992. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO

MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 67

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS RIVERA Y RIVERA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR WELLINGTON FUNG LOW, EN CONTRA DEL RESUELTO ALP-094 DE 30 DE AGOSTO DE 1983, MEDIANTE EL CUAL EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CREA UNAS TASAS POR LA FUMIGACIÓN A PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN CONCEPTO DE SELLOS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) 68

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO GUILLERMO A. DE LEÓN LEE, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, RUBÉN DARIO CARLES, Y EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 124, 125 Y LA FRASE FINAL DEL ARTICULO 487 DEL CÓDIGO ELECTORAL. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 69

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO. CARLOS E. CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JACOBO LERNER ZIMMERMAN Y EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 315 DE 3 DE DICIEMBRE, DICTADA POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 70

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL DR. RICARDO LACHMAN EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR LUIS A. TAYLOR Y EN CONTRA DE LA SENTENCIA PJ-2 DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 2 (PROCESO LABORAL: LUIS A. TAYLOR -VS- IMPRENTA GÓMEZ, S. A.) MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 71

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. ADOLFO ALBERTO BENEDETTI E., EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA RAQUEL V. DE HERNDON EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 29 DE JULIO DE 1976, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 72

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO FLORENCIO CASTILLO ESPINOSA EN REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE DE CHIRIQUÍ EN CONTRA DEL ARTICULO 991 DEL CÓDIGO DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 73

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO FELIPE C. RANGEL F., EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN Y EN CONTRA DEL ARTICULO 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 74

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. BRAULIO CARRERA EN CONTRA DEL ARTICULO 405 DEL CÓDIGO DE TRABAJO (PROCESO DECLARATIVO LABORAL: SINDICATO LA UNIÓN DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE PANAMÁ- VS - PACIFIC ASSOCIATES INC). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 74

PETICIÓN PRESENTADA POR LA LICENCIADA NORA SANTA DE SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DEL MAESTRO MARCO A. ALARCÓN P., MINISTRO DE EDUCACIÓN, PARA QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SE PRONUNCIE SOBRE LA INTERPRETACIÓN CORRECTA DEL ARTICULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 75

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL GONZÁLEZ, Y EN CONTRA DEL ARTICULO 501 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, (PROCESO LABORAL: CHIRIQUI LAND COMPANY -VS-SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CHIRIQUI LAND COMPANY, DIVISIÓN DE BOCAS DEL TORO.) MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 75

TRIBUNAL DE INSTANCIA 76

ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA POR LA ALCALDESA DEL DISTRITO CAPITAL MAYÍN CORREA DELGADO POR MEDIO DE APODERADO JUDICIAL Y EN CONTRA DEL LICENCIADO CLARO AMADO RENDEROS, FISCAL ELECTORAL POR DELITO DE INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DEL SERVIDOR PUBLICO. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 76

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL LCDO. SIDNEY SITTON URETA CONTRA EL LCDO. EUSEBIO MARCHOSKY, MAGISTRADO DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EL LCDO. ALVIN WEEDEN, POR EL DELITO DE CONCUSIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 78

INCIDENTE DE FALTA DE COMPETENCIA PRESENTADO POR LA LICENCIADA XENIA DE ZALDÍVAR DENTRO DE LA DENUNCIA PENAL PRESENTADA POR LOS SEÑORES RODRIGO AROSEMENA, EUSEBIO MARCHOSKY, LEO GONZÁLEZ Y ALVIN WEEDEN EN CONTRA DEL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, POR EL SUPUESTO DELITO DE CONCUSIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 79

JUICIO SEGUIDO AL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL LEGISLADOR LEO GONZÁLEZ Y LOS LICENCIADOS RODRIGO AROSEMENA DE ROUX, EUSEBIO MARCHOSKY Y ALVIN WEEDEN, POR EL SUPUESTO

DELITO DE CONCUSIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 80

INCIDENTE DE DESACATO PRESENTADO POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA MONTERO DENTRO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA EN CONTRA DEL DECRETO LEY 3 DE 9 DE OCTUBRE DE 1989. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 82

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 84

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO 85

DIMAS MORRIS QUINTERO APELA DE LA SENTENCIA DE 28 DE FEBRERO DE 1992, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CHIRIQUI LAND COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 85

RECURSO DE CASACIÓN 87

BANCO GANADERO, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SAMUEL MARÍN Y DOMINGO GALLARDO. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 87

PEAT MARWICK, MITCHELL & CO. RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JAVIER ROMERO. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 88

ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED RECURRE EN CASACION EN LA SOLICITUD DE TITULO CONSTITUTIVO DE DOMINIO FORMULADA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 89

EVELIA CANO Y MARÍA LUISA LLORENTE VDA. DE SAAVEDRA RECURREN EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO (EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN) PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 92

HOTELERA EL PANAMÁ, S. A. Y BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, RECURREN EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE DISTINTA JURISDICCIÓN Y FALTA DE COMPETENCIA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO PROPUESTO POR CONSORCIO HOTELERO, S. A. CONTRA BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Y HOTELERA EL PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE. RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 93

JARDINERÍA DE SEDAS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO QUE LE SIGUE A NORIS C. HASSÁN GÓMEZ Y ARTURO HASSÁN GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, SEIS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 94

CELESTINO LESCANO MIRANDA RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO INTERPUESTO POR FÉLIX ANTONIO ARAÚZ DENTRO DE LA ACCION DE SECUESTRO INCOADO POR CELESTINO LEZCANO MIRANDA CONTRA GRACIELA ESTHER ARAÚZ CONCEPCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. 98

MICHAEL DELGADO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JULIO C. ZAMORA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 99

PEAT MARWICK, MITCHELL & CO. RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE JAVIER ROMERO. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 102

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, R. L. RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO SUMARIO QUE LE SIGUE CHARLES HARMAN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 103

DALYS DE GARCÍA DE PAREDES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARÍA TROITIÑO DE FREIRE. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 104

MARÍA ELENA ARANGO DE MORENO GÓNGORA, MIGUEL ÁNGEL MORENO GÓNGORA Y LOUIS MARTINZ, RECURREN EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A EL SIGLO, S. A., CORPORATION UNIVERSAL DE INFORMACIÓN (JMJ), S. A. Y ANTIGUA INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO. MIRANDA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 104

FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE NULIDAD Y LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO PROMOVIDO EN LA ACCION DE SECUESTRO INCOADA POR BACVEL, S. A. CONTRA FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 105

LESBIA JUDITH VERGARA GARCÍA DE GÁLVEZ Y BORIS HUMBERTO VERGARA CEDEÑO RECURREN EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO DE NULIDAD DE TESTAMENTO QUE LE SIGUEN A EUFEMIA VERGARA ESCUDERO Y RITO SERVIO TEJADA DÍAZ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 106

CRISTINA RODRÍGUEZ MONTERO (ANTES DE SOUSA) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUE RUBÉN DARIO SOUSA DIEZ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 106

EDUARDO AROSEMENA Y CARLOS CHAVARRÍA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA (ACCION DE SECUESTRO) QUE LE SIGUE VARELA HERMANOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 109

JOSEFINA CEBALLOS MONCAYO DE CORONEL RECURRE EN CASACIÓN EN LA SOLICITUD DE MEDIDAS CONSERVATORIAS DE PROTECCIÓN PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL Y FRANCISCO CORONEL CORONEL CONTRA FINANCIERA COMERCIAL GISPSI, S. A. Y OTRAS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 109

MARIO CÉSPEDES BLANCO RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BANCO EXTERIOR, S. A. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 110

MAUREEN M. DAVIS Y OTROS RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE LANZAMIENTO PROPUESTO POR BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 113

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO RODRIGO MOLINA A. EN EL RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO POR METROPOLITANA DE SEGUROS DE VIDA, S. A. EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE PETRONIA MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 115

LINO BEITÍA RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO DE COSA AJENA, INTRODUCIDO EN EL JUICIO ORDINARIO PROMOVIDO POR LUCILA JOVANÉ VDA. DE BATISTA Y BRENDA LIRIETH BATISTA JOVANÉ CONTRA ISIDORA BATISTA JIMÉNEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. 116

EDILMA ELENA LASSO DE MADRID Y JOSÉ PRUDENCIO MADRID GIL RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A LEOVIGILDO CANTO PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 116

PLACIDO CASTILLO Y VIRGILIO CASTILLO TORIBIO RECURREN EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE ANSELMO ORTEGA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 117

HILARIO PÉREZ DE GRACIA RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE JOVINA JUDITH BARBA CAMARGO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 119

EDWIN QUINTERO RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A IRIS DEL CARMEN OLMOS DE GRACIA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 119

METROPOLITANA DE SEGUROS DE VIDA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE PETRONIA MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 120

EVELIA CANO Y MARÍA LUISA LLORENTE VDA. DE SAAVEDRA RECURREN EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO (EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN) PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTINUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. 121

CLAUDIA VILLARREAL DE GONZÁLEZ Y FERNANDO GONZÁLEZ JURADO, RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE LE SIGUEN A ANTONIA GUERRA o ANTONIA GONZÁLEZ GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A.PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 121

MANUEL SALVADOR ROBLES RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LEÓN ROBLES. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 122

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 123

ACUSACIÓN PARTICULAR 124

ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA CONTRA ROGELIO AUGUSTO ORTEGA RAMÍREZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDWIN MARÍN CORTEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 124

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 125

JUICIO CONTRA ESPERANZA GARIBALDI POLO, SINDICADA POR EL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO DE ESTHER CEBALLOS LOBON. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 125

AUTO APELADO. JUICIO SEGUIDO CONTRA GUSTAVO ORTIZ, DANILO ENRIQUE ALVARADO ZORRILLA, JOSÉ INÉS SANGUILLÉN, JACQUELINE VERÓNICA SMITH BROWN Y JOSÉ FÉLIX BENE BARRERA, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE HERIBERTO MARTÍNEZ MELÉNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 127

AUTO APELADO. JUICIO SEGUIDO CONTRA EVIDELIO GONZÁLEZ DE GRACIA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RAFAEL DE JESÚS GUEVARA PINZÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 128

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 129

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA EDGARDO ANTONIO ESCUDERO GALLARDO, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO EN PERJUICIO DE LA ESCUELA HIPÓLITO PÉREZ TELLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 129

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA SERGIO CAMAÑO GONZÁLEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS, EN PERJUICIO DE LUIS ARISTIDES BERNAL GAITÁN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) 130

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA CALISTRO SANTOS SANTANDER Y RUFINO BORDONES, SINDICADOS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL COMETIDO EN PERJUICIO DE JOHANA SANTANDER FLORES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 132

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA CRISTÓBAL COLON DESPAIGNE VALERO Y MARÍA EUGENIA LÓPEZ DE DESPAIGNE, SINDICADOS POR EL DELITO DE EXTORSIÓN EN PERJUICIO DE INVERSIONES TU VIVIENDA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 133

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA GUILLERMO JOSÉ WONG GUIZADO, SINDICADO POR EL DELITO EN CONTRA DEL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE ALBERTO BOLÍVAR CONTE. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 136

RECURSO DE CASACIÓN. RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA FELIPE CAMARGO AMAYA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE CARLOS FERNANDO ALFARO HART. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 136

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA DILCIA BABB, SINDICADA POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 137

INCIDENTE DE CONTROVERSIA 140

INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO CONTRA JORGE RAMÓN VALDES CHARRIS, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, ENCARGADO, DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS A FRANKLIN PEDRO ZAYDMAN HAHN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 140

INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO CONTRA JORGE RAMÓN VALDES CHARRIS,PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN ENCARGADO, DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA RAFAEL SÁNCHEZ SALAZAR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 141

INCIDENTE DE NULIDAD 141

IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO FABIÁN A. ECHEVERS DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA LUCIANO CONTRERAS VARGAS, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) 141

QUEJA 142

QUERELLA PRESENTADA CONTRA RODRIGO HERNÁN AROSEMENA DE ROUX, DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, POR LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA EN PERJUICIO DE MIGUEL BUSH. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 142

RECURSO DE REVISIÓN 142

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA EDGAR SAMUEL QUINTERO, POR EL DELITO DE HURTO EN PERJUICIO DE BASSÁN ALMEDINE Y MIGUEL ANTONIO CASTILO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 142

SENTENCIA APELADA 143

JUICIO SEGUIDO CONTRA LUIS ALBERTO BETHANCOURT CABALLERO, SINDICADO POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO, VIOLACIÓN CARNAL Y ROBO, EN PERJUICIO DE LINETH FUENTES AGUIRRE, MARÍA ISABEL EDVARSSON PEÑA Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 143

JUICIO SEGUIDO CONTRA ELEUTERIO EDIL MARTÍNEZ DE LA CRUZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EFIGENIO MENESES MORENO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 144

SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA NORA ARGENTINA BARRIOS GONZÁLEZ, SINDICADA POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE ERNESTO ENRIQUE DE LEÓN VILLARREAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ. DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 146

JUICIO CONTRA DOMINGO GONZÁLEZ ESTRIBÍ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDWIN OLMEDO CHAVES BRAVO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 148

JUICIO SEGUIDO A EDUARDO SUIRA RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE SAN MARTÍN GONZÁLEZ NÚÑEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 150

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL 151

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL INTERPUESTA DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA CARLOS JUAN PÉREZ ALONSO, SINDICADO POR EL DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 151

TRIBUNAL DE INSTANCIA 152

DENUNCIA PRESENTADA CONTRA GUILLERMO FORD, RAÚL FIGUEROA, GABRIEL PEREIRA, MARIO GALINDO Y GUILLERMO ELÍAS QUIJANO, ALFREDO ARIAS GRIMALDO, TERESITA YANIZ DE ARIAS Y OTROS EN RELACIÓN A LOS CONVENIOS DE ASISTENCIA ENTRE PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE PECULADO Y APROPIACIÓN INDEBIDA (CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 152

SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA BLAS VELASQUEZ, JEFE DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, SINDICADO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD EN PERJUICIO DE JACOBO BRAWERMAN BARRANTES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 153

ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA CONTRA CARLOS CESAR LANDERO MORENO, SUB-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, SINDICADO POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, FALSEDAD Y NO ACATAR LAS NORMAS CONSTITUCIONALES EN PERJUICIO DE STEPHEN DE CASTRO ROBLES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 154

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO. SUMARIAS SEGUIDAS EN AVERIGUACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN PERJUICIO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 155

DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA GUILLERMO LEBLANC JR. Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE ZONAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SINDICADOS POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PECULADO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 155

DENUNCIA CRIMINAL INTERPUESTA CONTRA FRANCISCO DENIS DURAN, GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (I.N.T.E.L.), POR ABUSO DE AUTORIDAD Y CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EN PERJUICIO DE SOIKA ELIZABETH CASTILLO ORTEGA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 156

DENUNCIA INTERPUESTA POR EL LEGISLADOR ABELARDO E. ANTONÍO CONTRA RODRIGO HERNÁN AROSEMENA DE ROUX, SINDICADO POR EL DELITO EN QUE HAYA INCURRIDO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 158

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 160

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN 161

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PEDRESCHI Y PEDRESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE TELESISTEMAS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO. GG-05-93 DE 16 DE FEBRERO DE 1993, EMITIDO POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 161

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RAMSEY, PÉREZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALFREDO VILLARREAL, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL NO. 26 DE 3 DE MAYO DE 1993, EMITIDO POR EL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 161

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL E. COLLINS NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE YADIRA JUDITH LOAIZA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 499 DE 11 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 162

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. HERACLIO SANJUR MARCUCCI, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N DE 15 DE FEBRERO DE 1993, EMITIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 163

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEX H. GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°1 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1991, EXPEDIDA POR EL CONSEJO TÉCNICO DE SALUD, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 164

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROLANDO MARCOS-HERMOSO CORDICH, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 4742-92-DPN DE 5 DE AGOSTO DE 1992, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 164

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROLANDO PALACIOS EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL MEMORÁNDUM NO. 93(213-02)137 DE 2 DE ABRIL DE 1993, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 165

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GIGANTE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 28 DE 29 DE ENERO DE 1991, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 166

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, interpuesta por la firma Arias, Fábrega y Fábrega, en representación de B.P. CARIBBEAN TRADING, INC., para que se declare nulo por ilegal, el acto contenido en la Resolución No.213-3277 de 7 de julio de 1988, emitido por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, doce (12) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 167

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DE SERAFÍN QUIEL JARAMILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°797 DE 28 DE JULIO DE 1992, EXPEDICIÓN POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 168

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ ALVAREZ CUETO, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR ESTRADA GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°44-92 DE 9 DE MARZO DE 1992, EMITIDA POR EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 170

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE, ARIAS, CASTRO Y REYES, EN REPRESENTACIÓN DE TEÓFILO ALVARADO KINKEAD, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DE 25 DE AGOSTO DE 1992, EMITIDA POR LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y SUBSIDIOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 171

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDISA ISABEL FLORES DE LA ROSA, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL RESUELTO S/N DE 28 DE JUNIO DE 1991, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y

ELECTRIFICACIÓN (IRHE), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 172

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RUBÉN ELÍAS RODRÍGUEZ AVILA, EN REPRESENTACIÓN DE NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURG, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3122-91 DG DE 21 DE FEBRERO DE 1991, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 172

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. NELSON ROVETTO, EN REPRESENTACIÓN DE EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°8 DE 9 DE OCTUBRE DE 1991, EMITIDA POR LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 173

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°57-91 DE 14 DE MARZO DE 1991 Y LA N°58-91 DE 21 DE MAYO DE 1991 DICTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 174

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS ARROCHA ROMERO, EN REPRESENTACIÓN DE ELISA GONZÁLEZ VDA. DE SAVAL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 2052-84 DE 19 DE DICIEMBRE DE 1984, EMITIDO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 177

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE SANIDAS, EN REPRESENTACIÓN DE NORIS ELIDA TORRALBA BETHANCOURT, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL MEMORÁNDUM DE 11 DE MARZO DE 1993, SUSCRITO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 178

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA NORA AROSEMENA DE BATINOVICH EN REPRESENTACIÓN DE AUTO IMPORT, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°213-2083 DE 5 DE JULIO DE 1989, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 179

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE YADIRA DELGADO Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO N° GG-100-152-90 DE 12 DE DICIEMBRE DE 1990, SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 182

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. JORGE E. CARRERA CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ODILIO SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOL. NO. 3511-91-D.G. DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1991, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 186

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EDUARDO II. SINCLAIR CRUISE, EN REPRESENTACIÓN DE CELINDA ESILDA GRAHAM DE NIÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N°. 2299 S/PNAL DE 29 DE DICIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR LA JEFA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 187

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. ROBERTO E. FUENTES, EN PROPIO NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ANTONIO SOSSA DUTARY Y CARLOS LISANDRO LÓPEZ SCHAW, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO CONSTITUIDO POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO QUE NIEGA A LOS DENUNCIANTES LA RESPECTIVA INVESTIDURA PARA HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS DEL ESTADO SOBRE LOS DINEROS DEL TESORO NACIONAL QUE HA ADQUIRIDO ILEGALMENTE LA EMPRESA REFINERÍA PANAMÁ, S. A., MEDIANTE COMPRAS HECHAS POR EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 188

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY & DÍAZ EN REPRESENTACIÓN DE L.A. GEAR INC. PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 9409 DE 27 DE JUNIO DE 1990, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE:

MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 190

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ELSA MONTILLA GARCES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ NO. 20-89 DE 5 DE JULIO DE 1989, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. . 192

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ CEBALLOS, EN REPRESENTACIÓN DE EXPORTADORA MUNDIAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 261 DE 14 DE DICIEMBRE DE 1989, DICTADA POR LA DIRECCIONA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ,TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 193

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE MARITZA CORTEZ DE VÁSQUEZ Y MARITZA FERNÁNDEZ DE EVANS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL PARÁGRAFO DEL RESUELTO DE PERSONAL N° 03 DE 13 DE ENERO DE 1992, EMITIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LOS CASINOS NACIONALES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 194

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR CARLOS DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO COBOS Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO N°GG-100-154-90 DE 17 DE DICIEMBRE DE 1990, SUSCRITO POR EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (INTEL), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 195

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE VICENTE EUCLIDES RÍOS RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL FORMULARIO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 1991, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 197

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDGAR DOMINGO MORALES MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR MCKAY, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 174 DE 20 DE JULIO DE 1992, EMITIDO POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 200

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SANTIAGO SANFORD URRIOLA, EN REPRESENTACIÓN DE JULIO R. GONZÁLEZ S., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N°78 DE 30 DE ABRIL DE 1991, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE REGULACIÓN DE PRECIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 201

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO Y VISUETTI, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS CARLOS RÍOS SERRACÍN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO NO.170 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1991, EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 203

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 206

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. GASPARINO FUENTES TROESCHT, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO.22 DE 31 DE ENERO DE 1992, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 206

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA LUQUE, CORONELL Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE MOTORES INTERNACIONALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR EL ILEGAL, EL ACUERDO NO. 101.40-22 DE 20 DE AGOSTO DE 1992, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 209

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA CIRCULAR 38 DISPRO DE 7 DE ABRIL DE 1993, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 210

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL OFICIO NO. DGI-174-91 DE 16 DE ABRIL DE 1991, SUSCRITO POR LA DIRECTORA GENERAL DE

INDUSTRIA DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y EL OFICIO NO. 121-91 DE 7 DE JUNIO DE 1992, SUSCRITO POR EL VICEMINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 210

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, interpuesta por la firma Rivera y Rivera, en representación de ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLON, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 03-91 de 29 de julio de 1991, expedida por la JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 211

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, interpuesta por la firma Galindo, Arias y López en representación del CONCEJO NACIONAL DE PUBLICIDAD, para que se declare nulo por ilegal, la Resolución No.30 de 19 de noviembre de 1991, expedido por el Director General de Salud. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, dieciséis (16) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 212

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, ALEMÁN Y MORA, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES LAS RESOLUCIONES NO.305 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1991, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GABINETE, Y, EL CONTRATO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1991, CELEBRADO ENTRE AIR PANAMA INTERNACIONAL, S. A., EL MINISTRO DE HACIENDA EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD PANAMA AIR INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMA, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 213

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR CASTILLO RÍOS, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN No. 21 DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1991, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 213

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL DR. ALEJANDRO ROMÁN SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE HÉCTOR VARGAS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACÁPITE I DEL ARTICULO PRIMERO, EL ARTICULO TERCERO Y CUARTO DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 46 DE 24 DE FEBRERO DE 1992, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 214

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, interpuesta por la firma Trujillo, Vidal y Miranda, en representación de CARLOS RODRIGO ORTIZ CEDEÑO Y FRANK MOSTINER SURGEON BROWN para que se declare nulo por ilegal, el artículo primero en su numeral 1.2.5.61 del Acuerdo N°8 de 26 de febrero de 1987, emitido por el CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DAVID. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 217

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD interpuesta por el Dr. Rolando Villalaz, en representación de NELSON NOVARRO CERRUD, para que se declaren nulas por ilegales, las elecciones de Decano y Vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, celebradas el 14 de agosto de 1991. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 219

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICDO. HERNÁN ARBUES BONILLA G., EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD V-IMPORT, INC., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA NO. 032-DMHYT DE 11 DE ENERO DE 1991, DICTADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 221

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL BUFETE ARTURO VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE CESAR BATISTA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO NO. 1 DE 26 DE ENERO DE 1990, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 223

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA Y BOLÍVAR, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLON, PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES NO. 01-87 DE 11 DE FEBRERO DE 1987, LA NO. 06 DE 17 DE JUNIO DE 1992, Y LA NO. 10-93 DE 24 DE MAYO DE 1993, EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE COLON. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 224

EXCEPCIÓN 225

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BALBINO VALDÉS RIVERA, EN REPRESENTACIÓN DE JAVIER ARMANDO LICONA GÓMEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A MOISÉS GIROLDI VERA Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 225

JURISDICCIÓN COACTIVA 226

EXCEPCIONES DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, EXTINCIÓN DE LA FIANZA POR ACTO IMPUTABLE AL ACREEDOR, POR FALTA DE IDONEIDAD DEL TITULO EJECUTIVO, DE PETICIÓN DE MODO INDEBIDO Y AUSENCIA DE LA CAPACIDAD JURISDICCIONAL,

INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ Y ALEMÁN EN REPRESENTACIÓN DE PAN AMERICAN DE PANAMÁ, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO AL CONSORCIO EMPRESAS CONSULTORA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S. A. (ECAISA)- GROUNDWATER DEVELOPMENT CONSULTANTS (INTERNATIONAL) LTD y a PAN AMERICAN DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, (1°) PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 226

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DEUSDEDITH F. ESCOBAR, EN REPRESENTACIÓN DE CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A CECILIO GERARDO STERLING Y/O CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 228

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ERIC SIERRA EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS, GUSTAVO G. REAL Y HUMBERTO E. MARCIAGA. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 229

TERCERÍA COADYUVANTE, interpuesta por el Licenciado Omar Solano en representación del BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo, que el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (Casa Matriz), le sigue a JACINTO A. CÁRDENAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, trece (13) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 229

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS GARCÍA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, LE SIGUE A MÁXIMO A. GUERRA, SARA C. DE GUERRA, TEODORO MATHEWS Y LUIS GARCÍA. MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA. 231

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL LCDO. JUAN A. MORALES, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO GÓMEZ ESTRIBÍ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 232

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DEUSDEDITH F. ESCOBAR, EN REPRESENTACIÓN DE CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO A CECILIO GERARDO STERLING Y CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 232

EXCEPCIÓN DE FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA, interpuesta por la firma forense Chen, Estrada y Wong, en representación de DALYS SEE, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, veintitrés (27) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). 234

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE ROSAURA RODRÍGUEZ DE ARANDA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, LE SIGUE A MÁXIMO A. GUERRA, SARA C. DE GUERRA, TEODORO MATHEWS Y LUIS GARCÍA. 235

EXCEPCIÓN DE FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO, INTERPUESTA POR LA FIRMA RUBIO Y RUBIO EN REPRESENTACIÓN DE AGRÍCOLA Y GANADERA EL BAYANO, S. A. DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LE SIGUE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 235

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 236

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. MARTÍN MOLINA, EN REPRESENTACIÓN DE BONLAC, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MELVA C. CANDELARIA ODREMAN VS BONLAC S. A. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 236

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR LA FIRMA JAÉN Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE SEVERINO HERRERA, CONTRA LA SENTENCIA DE 2 DE MARZO DE 1993, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MANUEL FALCÓN, CARLOS FALCÓN Y OTRO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 236

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICDO. CARLOS E. GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NESTLÉ PANAMÁ, S.A. CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: NESTLÉ PANAMÁ, S.A. -VS- LUIS A- NÚÑEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 237

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICDO. CARLOS DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE AVELINO SEGUNDO, CONTRA LA SENTENCIA DE 13 DE ABRIL DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO

LABORAL: AVELINO SEGUNDO -VS- CONGREGACIÓN DE MISIONERAS DE LA CARIDAD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 238

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICDA. MARITZA ROYO, EN REPRESENTACIÓN DE ORLANDO ORTIZ PONCE, CONTRA LA SENTENCIA DE 10 DE MARZO DE 1993, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ORLANDO ORTIZ PONCE -VS- LABORATORIO CONMEMORATIVO GORGAS Y OTRAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ,VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 239

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA ORDOÑEZ, SÁNCHEZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CERVECERÍA NACIONAL, S. A. Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 1992, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CERVECERÍA NACIONAL y DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. -vs- ELIECER RUDAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 240

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICDO. ALVARO MUÑOZ FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE SANTANA GÓMEZ O SANTANA GÓMEZ QUINTERO, CONTRA LA SENTENCIA DE 15 DE ABRIL DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: SANTANA GÓMEZ Ó SANTANA GÓMEZ QUINTERO -VS- CHIRIQUI LAND COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 243

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAFAEL E. COLLINS NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JACQUELINE DE MEDINA, CONTRA LA SENTENCIA DE 5 DE MARZO DE 1993, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JACQUELINE DE MEDINA -VS- DROGUERÍA ARROCHA, S. A. Y ARROCO, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 244

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ENOCH A. RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO GÓMEZ, CONTRA EL AUTO DE 28 DE JUNIO DE 1993, EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LUIS ALBERTO GÓMEZ -VS- COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, S. A. Y/O COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO. 246

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ENOCH A. RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO GÓMEZ, CONTRA EL AUTO DE 28 DE JUNIO DE 1993, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LUIS ALBERTO GÓMEZ -VS- COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, S. A. Y/O COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 246

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE EVANGELISTO SANTANA S., CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EVANGELISTO SANTANA -VS- FERRETERÍA Y JARDINERÍA, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 246

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 249

CARTA ROGATORIA 250

COMISIÓN ROGATORIA No.003 DEL 23 DE JULIO DE 1992 LIBRADA POR EL JUZGADO DIECIOCHO (18) DE SANTA FE COLOMBIA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO (FILIACIÓN NATURAL) INTERPUESTO POR LA SEÑORA RAQUEL CASTRO EN CONTRA DE GIORGIO HELMSDORFF. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 250

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NO.6 DE SALAMANCA, (ESPAÑA) DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO INSTAURADO POR LA SEÑORA RAMONA MARÍA LUZ LÓPEZ REGALADO EN CONTRA DEL SEÑOR CARLOS HERNÁN SILVERA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 250

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA DENTRO DEL PROCESO DE ASISTENCIA CRIMINAL EN CONTRA DEL SEÑOR EDISON ROSS Y OTROS, PROCEDENTE DE GRAN BRETAÑA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 251

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE MÉXICO, D.F. DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO INSTAURADO POR LA SEÑORA ADRIANA GARCÍA CERRILLO -VS- WILSON GUTTING CHONG JR. MATHEWS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 252

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE JIDRICHUV HRADEC DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO INSTAURADO POR LA SEÑORA IVANA SANCHEZOVA EN CONTRA DEL SEÑOR FÉLIX ALBERTO SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 253

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 253

EL LICENCIADO ALFONSO ROGERS, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ LA SENTENCIA DE DIVORCIO DEL CONDADO DE PALM BEACH. MAGISTRADA PONENTE: AURA

E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 253

RINA MARGOT MELFI, SOLICITA SE RECONOZCA Y EJECUTE LA SENTENCIA DE LA CORTE DEL CIRCUITO DEL CONDADO DE KANHAWA, WEST VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 254

CELESTINA KOONG, SOLICITA A LA CORTE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ, LA SENTENCIA DE DIVORCIO QUE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE ELLA Y THOMAS DOUGLAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 254

ELSIE IBARRA DE MARTÍNEZ, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ, LA SENTENCIA DE DIVORCIO DEL SEÑOR ROBERT LEWIS DE 1° DE NOVIEMBRE DE 1984 DICTADA POR LA CORTE DEL DISTRITO DE EL PASO, COLORADO, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 255

EXHORTO 256

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ATENAS, DENTRO DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA SOCIEDAD ANÓNIMA "TRAPEZA KRITIS AE" (BANCO DE CRETA) EN CONTRA DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS BOCHNER INVESTMENT COMPANY INC., DAWBER CORPORATION, ANSPACH CORPORATION, WERNICK COMPANY INC., HAWORTH INVESTMENTS, S. A. Y LA SOCIEDAD ANÓNIMA SWITT MANAGEMENT INC. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 256

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR PENAL DE PÉREZ ZELEDÓN, EN LA CAUSA PENAL N° 121-90-L, POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO Y HOMICIDIO CALIFICADO CONTRA ORLANDO SANTOS MADRIZ Y OTROS EN PERJUICIO DE PORFIRIO RIVERA CEDEÑO Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 257

EXHORTO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN CAUSAS FAMILIARES DEL SEÑOR DIETER WOLF CONTRA LA SEÑORA MARIELA ORTIZ JARAMILLO, A TRAMITAR EN CUMPLIMIENTO DEL ORDINAL 3° DEL ARTICULO 101 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 257

EXHORTO LIBRADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA PÚBLICA DE LA REPÚBLICA HELÉNICA DE GRECIA, QUE SE REFIERE AL INFORME DE ESTIMACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE MIKONOS PARA NOTIFICAR A LA SOCIEDAD MELTEM HOLDINGS, S. A. CON DOMICILIO EN LA CALLE 53 TORRE BANCO SUR, URBANIZACIÓN OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 258

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 21 DE MADRID, ESPAÑA, EN LOS AUTOS N° 640-1988 INSTAURADOS POR EL SEÑOR JORGE BARCO VARGAS EN CONTRA DE JOSÉ DÍAZ HERRERA TORRES, ALFONSO TORRES ROBLES Y OTROS, EN DONDE SE REQUIERE DEL REGISTRO PUBLICO REFERENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CIA. ZUALET CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 258

EXHORTO SUSCRITO POR EL JUZGADO CIVIL DE CAÑAS, GUANASCATE, ESTABLECIDO POR ISIDRO GONZÁLEZ MURILLO, PARA QUE EL BANCO "DEUSTSH SUDAMERIKANISHE BANK" DEPOSITE EN LA CUENTA DE ESE JUZGADO (CUENTA N° 2962-9 DEL BANCO DE COSTA RICA) LA SUMA DE VEINTE MIL CIENTO SESENTA DÓLARES CON DIECISÉIS CENTAVOS, MÁS LOS RESPECTIVOS INTERESES QUE HAYA ACUMULADO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 259

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE LIMA (PERÚ) EN LOS AUTOS SEGUIDOS POR DOÑA VALENTINA CARMELA SMITH DE BISSO LOREDO, SOBRE INVENTARIO DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE POSEE CON SU ESPOSO SEÑOR CARLOS BISSO LOREDO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 260

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PRIMERO PROVISIONAL, RAMO PENAL, CONTRA PASTOR YOUNG, POR EL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA Y CONTRA LA FE PÚBLICA EN AGRAVIO DE ELVA MARÍA VIOLETA PASTOR YOUNG (PERÚ) MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 261

EXHORTO LIBRADO POR LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DIVISIÓN DE LA MAGISTRATURA DE LA REINA, QUE SE REFIERE A LA NOTIFICACIÓN QUE SE DEBE PRACTICAR A LA SOCIEDAD EURO-AMERICAN INTERNACIONAL HOLDING, S. A., CON DOMICILIO SOCIAL EN EL EDIFICIO INTERSECO, ULTIMO PISO, N° 10, CALLE ELVIRA MÉNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 261

LAUDO ARBITRAL 262

EL LICENCIADO LUIS A. ORTEGA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR RAFAEL BIANCO FERNÁNDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PEZGOLFO, C.A., SOLICITA LA EJECUCIÓN DE MEDIDA PRECAUTORIA SOBRE M/N "OMAIRA" EX "TOPWAVE". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 262

TRIBUNAL DE INSTANCIA 265

SOLICITUD PARA QUE LAS AUTORIDADES MILITARES DE LOS ESTADOS UNIDOS PUEDAN ENTREVISTAR A JUAN MANUEL ALTAMIRANDA ORTEGA, QUIEN SE ENCUENTRA DETENIDO A ORDENES DE LA JUEZ SÉPTIMA DEL CIRCUITO PENAL DE ANCÓN, POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 265

ACUSACIÓN POR FALTA DE ÉTICA JUDICIAL FORMULADA POR EL LICDO. RODOLFO MURILLO HERNÁNDEZ EN CONTRA DEL JUEZ QUINTO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, LICDO. JUAN BOSCO MOLINA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 265

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

JULIO 1993

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ELECTRÓNICA ROBINSON, S. A. EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO CIVIL DE COLON,- APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma de abogados Carrillo Broux y Asociados ha presentado recurso de apelación contra la sentencia expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá el 17 de mayo de 1993, dentro del proceso de amparo de garantías constitucionales l.promovido por Electrónica Robinson, S. A. contra el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Civil.

El Primer Tribunal Superior de Justicia no acogió el amparo impetrado por la parte demandante debido a que, en su opinión, "el amparista no ha acreditado haber agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución objeto de este recurso, requisito indispensable para que pueda proceder el amparo, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, según quedó reformado por el artículo 1° Decreto de Gabinete N°50 de 1990". Agrega el Primer Tribunal que "de conformidad con el artículo 1549 del Código de Comercio, el quebrado puede reclamar contra el auto que declare la quiebra con tal que pida la reposición dentro de los ocho días siguientes a dicha declaratoria".

El Pleno coincide con los criterios vertidos por el Primer Tribunal Superior de Justicia por cuanto es evidente que la parte demandante no ha agotado los medios de impugnación previstos en el Código de Comercio en relación con la resolución de 31 de marzo de 1993 expedida por el Juzgado Primero de Circuito, de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Colón, en virtud de la cual se declara en estado de quiebra a la Sociedad Electrónica Robinson, S. A. El Libro III del Código de Comercio que regula la declaratoria de quiebra establece claramente en su artículo 1549 lo que se denomina 'demanda de reposición' la cual constituye el medio idóneo para impugnar el auto que declara la quiebra. El mismo establece que dicho auto "quedará ejecutoriado de pleno derecho pero el quebrado, sus representantes o herederos podrán reclamar contra él, con tal de que pidan la reposición dentro de los ocho días siguientes a dicha declaratoria." Con fundamento en el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, el Pleno ha reiterado que el proceso de amparo de garantías constitucionales tiene un carácter extraordinario y que sólo debe acudirse a él cuando no existan otros medios de impugnación, lo cual no se da en este caso porque existen otros medios para impugnar el acto objeto de la presente demanda.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 17 de mayo de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual no se acoge el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la firma Carrillo Broux y Asociados en representación de la Sociedad Electrónica Robinson, S. A. en contra del Juez Primero de Circuito, de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Colón.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.)RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA DRA. ALMA LÓPEZ DE VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DEL DR. MARIO A. LARREATEGUI EN CONTRA DE LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La doctora Alma López de Vallarino ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales contra orden de hacer contenida en la resolución N°736 S.C., expedida por el Tribunal Tutelar de Menores el 11 de junio de 1993, mediante la cual se dispone, entre otras medidas, "OTORGAR **provisionalmente** a IDA DEL CARMEN AROSEMENA la Guarda, Crianza y Educación de sus (2) menores hijos ROSA MARIA Y MARIO ABDIEL LARREATEGUI AROSEMENA, los cuales deben ser reintegrados inmediatamente al hogar materno junto con sus efectos personales ...".

Según expresa la demandante, la resolución que impugna es violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso consagradas en el artículo 32 de la Carta Constitucional vigente, que señala que los procesos y las resoluciones que en ellos se adopten deben surtirse "conforme a los trámites legales", así como del artículo 17 constitucional.

La acción de amparo fue admitida, con el fin de obtener un conocimiento más amplio sobre el caso, en el que se encuentran comprometidos derechos fundamentales de dos menores de edad. Como es sabido, es un principio elevado a rango superior por el constitucionalismo moderno el que establece la obligación estatal de asistir y brindar amplia protección al niño para asegurar su desarrollo integral, brindando una especial tutela a su derecho a la salud, tanto física como mental y moral, a la educación, a la seguridad y previsión sociales, lo que hace efectivo a través de sus órganos jurisdiccionales (artículo 52 C.N.).

A pesar de las serias dudas que pueda albergar la Corte acerca de la conformidad constitucional y legal de la decisión provisional emitida por el Tribunal Tutelar de Menores, tiene que inhibirse en el conocimiento del **mérito o fondo** de la pretensión constitucional que se examina. El informe de conducta arroja luces sobre un elemento de juicio omitido en el libelo, cual es el de que, antes de acudir a esta vía procesal extraordinaria, la amparista no agotó, "los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate", presupuesto esencial requerido a estos efectos por el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial.

Según el informe de conducta, "el Amparista (presentó), a través de su apoderada judicial, recurso de apelación que le ha sido concedido en el momento de su presentación" (f.108), por lo que resulta imperativo conocer las consecuencias a que, en la vía ordinaria, conduce el ejercicio de los recursos que la ley pone a disposición de la parte agraviada por la orden que motiva esta actuación.

Por las consideraciones antes expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la doctora Alma López de Vallarino en representación de Mario Augusto Larreategui.

Notifíquese y cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR JACK MALCA MALCA EN CONTRA DEL JUEZ SEXTO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN REPARTIDO EL 10 DE JUNIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense **CARRILLO BRUX Y ASOCIADOS**, en nombre y representación del señor **JACK MALCA MALCA**, interpuso ante el Primer Tribunal Superior de Justicia amparo de garantías constitucionales contra el auto de 13 de junio de 1992, dictado por el Juzgado Sexto de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se abre causa criminal contra **JACK MALCA MALCA** por delito contra la salud.

El Primer Tribunal, mediante resolución de 31 de mayo de 1993, no admitió la acción interpuesta por considerar que el amparista no había demostrado que había agotado previamente la vía ordinaria de impugnación. Estos fueron los argumentos que utilizó dicho tribunal para no admitir el amparo:

> "Ahora bien, la amparista presentó junto con la demanda de amparo una Certificación de la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia donde se establece que el auto de enjuiciamiento objeto de este amparo se encuentra debidamente ejecutoriado.
>
> Sobre el particular debe aclarar esta Superioridad que tal certificación no acredita que se hayan agotado los medios o trámites previstos en la Ley para atacar dicho acto de enjuiciamiento. Del hecho cierto de que una resolución que admite recurso de apelación esté debidamente ejecutoriada pueden desprenderse dos situaciones, a saber: primero que la resolución haya sido apelada; y, segundo, que la parte afectada con el auto de llamamiento a juicio no ejerció el recurso de apelación a que tenía derecho.
>
> Si el amparista se encontraba en la primera situación debió haber acreditado junto con la demanda de amparo que el superior jerárquico del Juez demandado había resuelto el recurso de apelación interpuesto, cosa que no hizo. Y si el amparista no hizo uso del recurso de apelación al cual tenía derecho, queda claro entonces que no hizo uso de los medios o trámites previstos en la ley para enervar la orden atacada.
>
> En resumen, no habiendo la actora acreditado haber agotado todos los medios y trámites previstos en la Ley para la impugnación del acto acusado de ilegal, este Tribunal considera la demanda manifiestamente improcedente; y, en consecuencia, estima no debe acogerla en base a lo preceptuado en el artículo 2611 del Código Judicial vigente, según quedó reformado por el Decreto de Gabinete N° 50 de 20 de febrero de 1990."

Contra la anterior resolución, el amparista interpuso recurso de apelación, motivo por el cual ingresa a esta Superioridad el amparo promovido.

Observa el Pleno que efectivamente no se ha acreditado en este proceso constitucional que la vía ordinaria de impugnación ha sido agotada previamente a la interposición de la presente acción.

Si bien lo anterior es así, conviene aclarar que los argumentos exteriorizados por el Primer Tribunal Superior de Justicia, no son apropiados para sustentar la inadmisión del amparo promovido por la firma forense CARRILLO BRUX & ASOCIADOS.

En efecto, la certificación presentada por la amparista para demostrar que había agotado los medios ordinarios de impugnación, no constituye un medio probatorio válido para acreditar dicho extremo. En ese sentido, el artículo 184 del Código Judicial es bien claro cuando establece que:

"Los Secretarios no pueden certificar sobre lo que conste en los procesos. **Cuando se desea acreditar en un proceso, hechos ocurridos en otro y consignados en el respectivo expediente, se deberá pedir en debida forma, copia de las piezas conducentes. En tales casos ninguna otra prueba será válida**, salvo cuando el expediente de donde haya de compulsarse la copia esté perecido o extraviado.

El Secretario que viole la prohibición será sancionado por su superior con multa de diez balboas (B/. 10.00)" (el énfasis y la subraya es del Pleno).

Como quiera que el recurrente no ha procedido acorde a lo normado por el artículo antes transcrito, lo correcto es declarar inadmisible el amparo presentado.

Por ello, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución recurrida.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS V. (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL LICENCIADO LUIS QUINTERO POVEDA SOLICITA QUE SE INVALIDE EL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL BANCO ANTIOQUEÑO S. A., EN CONTRA DEL JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, (APELACIÓN), FECHADO 21 DE ABRIL DE 1993, DICTADO POR EL PLENO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución de 26 de mayo de 1993, notificada por edicto N°515, fijado el 4 de junio de 1993, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, rechazó de plano el recurso de revisión propuesto por el licenciado **LUIS QUINTERO POVEDA**, en representación de **VICENTE MAGALLÓN ORTEGA**, contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Pleno de esta Corporación Judicial, con fecha 21 de abril del año en curso, que decidió la alzada en la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el **BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO, S. A.** contra el Juez Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Dentro de los dos días siguientes a la ejecutoria de esa resolución, el apoderado de VICENTE MAGALLÓN ORTEGA, presentó escrito contentivo de un recurso de reconsideración, el cual fue recibido por insistencia, con base al artículo 476 del Código Judicial.

Si el recurso de revisión que se intentó contra una decisión del Pleno en un caso de amparo de garantías constitucionales, fue rechazado de plano por su manifiesta improcedencia, cabría aplicar la misma ponderación jurídica al recurso de reconsideración presentado, pero en vista de que el recurrente hace una serie de apreciaciones referentes al fallo emitido y a la participación en el Tribunal colegiado de uno de sus miembros, cabe considerar los puntos de vista emitidos por el licenciado QUINTERO POVEDA, pues no se trata de juicios aislados sino de una pertinacia que exige la debida aclaración.

Se califica de "totalmente errada" la decisión del Pleno contra la que se recurre, a sabiendas de que el recurso de revisión, por su carácter extraordinario, al igual que el de casación, sólo puede invocarse en todos aquellos casos en los que la Ley y la Constitución los concedan. La causa que representa el recurrente puede estar desbordante de pruebas a favor de su cliente, pero la utilización de vías procesales incorrectas no contribuye a la mejor defensa de los intereses que se le confían.

La única razón que motivó el conocimiento de este caso por el Pleno de la Corte, fue a través de una de las instituciones de garantía conocida como la acción de amparo de garantías constitucionales y por ello ese control de la constitucionalidad, reservado a la Corte Suprema de Justicia por las distintas Constituciones Políticas que han regido en el país, participa de una naturaleza y efectos jurídicos distintos a las atribuciones legales comunes. De allí que sus decisiones en esta materia sean finales, definitivas y obligatorias. Si tales actos fueran recurribles la facultad contralora de la constitucionalidad y de la legalidad asignada al Tribunal Supremo en un Estado de Derecho sería inocua.

En cuanto al señalamiento que de manera insistente se ha hecho sobre un supuesto impedimento que recae sobre el Magistrado FABIÁN ECHEVERS, basado en que la firma forense ECHEVERS, BERRÍOS Y ASOCIADOS son los abogados de los bancos ANVAL y ANTIOQUIA, S. A., ya en un fallo anterior se hizo la aclaración pertinente y además, la vía correcta para recusar a un Juez o Magistrado es a través de un incidente, tal como lo prevé el artículo 758 del Código Judicial.

Si en el presente caso se registran actos abiertos de mala fe, pruebas simuladas, sociedades de papel, dolo y engaño, la ley le ofrece al recurrente diversos caminos legales para acreditar y hacer valer sus "ubérrimas" pruebas sobre lo que afirma reiteradamente.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, MANTIENE su decisión calendada el 26 de mayo de 1993.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ (fdo.)CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.)EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ EN CONTRA DEL JUEZ CUARTO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante proveído de 27 de mayo del año en curso, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación promovido por la Juez Cuarta de lo Civil del Primer Circuito Judicial en la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por **FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ** en su contra.

El presente expediente se inicia con la acción de amparo de garantías constitucionales promovida ante el Primer Tribunal Superior de Justicia contra la orden de hacer contenida en la resolución de 10 de mayo de 1993 dictada por la Juez Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el proceso ejecutivo que FRANCISCO SOLÍS le sigue a KREPORT INVESTMENTS, INC. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A.

El Tribunal de primera instancia después de considerar los hechos que fundamentan la acción y cotejarlos con las copias remitidas por la parte demandada, hace los siguientes señalamientos:

> "Llama la atención a este Tribunal, que un acto de tal magnitud, como lo es el ejecutado por la Juez demandada, se haya decidido con un proveído de mero obedecimiento, cuando ya esa misma materia había sido resuelta en el auto 514 que se encontraba apelado.
>
> Llama aún más la atención que se haya proferido la orden impugnada en Amparo, cuando consta en el proceso que a la funcionaria demandada se le había advertido, por parte del apoderado de la actora en el proceso ejecutivo, los efectos del artículo 982 del Código Judicial (Véase memorial que según los antecedentes obra en el proceso principal a fojas 613 a 616 y que fuera presentado al Tribunal antes de que se dictara el proveído ordenando el cumplimiento de la resolución impugnada, o sea, el 4 de mayo de 1993).
>
> En efecto, considera el Tribunal que si bien es cierto el artículo 1123 en su numeral 2 dispone en cuando (sic) la apelación se concede en el efecto devolutivo "no se suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada ni el curso del proceso", dicha norma no puede ser interpretada aisladamente, sino como parte de todo el Código y especialmente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 982 invocado por el amparista, el cual es diáfano al señalar el tratamiento que se le da a una resolución cuando se ha concedido una apelación en el efecto devolutivo y "exista retención de bienes o se trate de una medida que pueda causar perjuicios irreparables".

Se añade finalmente que "si bien la Juez concedió el recurso de apelación contra la resolución que decidió la nulidad, está haciendo cumplir dicha resolución a través del proveído que ordena que se comunique la misma".

Por su parte, la apelante, a través de su apoderado, en el escrito que obra de folios 46 a 49 manifiesta su disconformidad con el fallo impugnado porque la resolución de 10 de mayo de 1993, objeto de la acción de amparo es un mecanismo procesal accesorio al auto apelado, el cual se encuentra para su revisión y decisión por el Primer Tribunal Superior de Justicia y como consecuencia que es del auto 514 de 28 de abril de 1993, no debió admitirse, por desatender las restricciones legales que exigen que las resoluciones judiciales objeto de acciones de amparo de garantías constitucionales, "hayan agotado los medios y trámites de impugnación de que se trate". En lo sustancial del escrito de sustentación de la apelación, se lee:

> "El Recurso de Amparo de Garantías constitucionales es un medio extraordinario que busca en primer sentido garantizar el debido proceso, por lo que no debe entenderse el mismo como medio para atacarse resoluciones de forma escondida (toda vez que acogen un Amparo que trae como consecuencia anular lo actuado en Resolución no recurrida en Amparo de Garantías, por la naturaleza de ambas resoluciones), conocemos con exactitud lo sabio del Tribunal Superior, pero a nuestro leal saber y entender consideramos así lo siguiente:
>
> - Que este Tribunal profirió Resolución del 10 de mayo de 1993 (proveído de mero obedecimiento) a fin de dar un cumplimiento accesoriamente a lo actuado en el Auto 514 del 28 de mayo de 1993, en el cual ya se ordenaba remitir la mencionada nota.
>
> - Que la actuación recurrida iba cónsona al efecto devolutivo en que fue concedida la apelación del Auto principal, (efecto devolutivo).
>
> - Que se redacta Proveído de mero obedecimiento ya que existían actuaciones posteriores al momento en que debió ser girada la nota al Registrador, a lo que el Tribunal como forma de impulso ordena su remisión mediante el proveído que se ataca.

- Que por existir recurso de Apelación pendiente de resolver sobre la Resolución principal, no era acogible dicho Amparo.

- Que no debieron ser accedidas la pretensiones escondidas de la parte Amparista de anular los efectos de un Auto que nisiquiera (sic) se ha resuelto Apelación.

- Como punto final y de importancia constatable en Autos del juicio Ejecutivo donde es demandante FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ, que el señor FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ no es parte interesada, toda vez que este cedió sus derechos a una sociedad de la cual éste no es parte. Ha sido reiterada la doctrina Constitucional tanto de la Honorable Corte Suprema de Justicia como de los Tribunales superiores que debe acreditarse como requisito SINE QUAN NON que el amparista debe demostrar su interés, interés que se extingue cuando el señor Solís (amparista) cede sus derechos a un tercero al caso.

Por todo lo anterior, solicitamos a su digna Colegiatura REVOQUE lo proferido por el Tribunal Superior de Justicia en Resolución del 21 de mayo de 1993, y mantenga en todas sus partes lo actuado por este Tribunal".

Como se puede apreciar, los puntos controvertidos que fundamentan la apelación se dan en cuanto a la interpretación del artículo 982 del Código Judicial, el cual trata sobre los efectos de las resoluciones judiciales. Por una parte, según consta en autos, la Juez Cuarta de Circuito, Ramo Civil, a instancia de la parte demandada y con base al numeral 2° del artículo 1123 de la misma excerta, consideró que el concepto de perjuicio irreparable de que trata el artículo 982 le era aplicable a la parte demandada, mientras que el Primer Tribunal Superior al decidir la acción de amparo en el fondo, arriba a la conclusión de que el proveído que ordena comunicar la resolución que decidió la nulidad de lo actuado, es un medio de hacer cumplir dicha resolución, y con tal proceder no sólo se desatiende lo dispuesto en el artículo 982 del Código Judicial, sino que se reitera el contenido de la resolución en un proveído de mero obedecimiento, sin dar la oportunidad a las partes de impugnarla.

En efecto, la Corte considera que el auto N°514 de 28 de abril de 1993, dictado en el juicio ejecutivo de mayor cuantía propuesto por FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ contra KREPORT INVESTMENTS, INC. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A., no podía ser objeto de una acción de amparo de garantías constitucionales porque había sido impugnado en apelación, se había concedido el recurso en el efecto devolutivo y el caso reposaba en el mismo tribunal de amparo, por otra causa. Fue el proveído de mero obedecimiento, de 10 de mayo de 1993, el que originó la acción de amparo, ya que por su naturaleza, no admitía recurso alguno, a pesar de que en el oficio N°585 de la misma fecha (fs. 28 y 28 vuelta) se le advertía al Director General del Registro Público que el auto que decretaba la nulidad de lo acusado, había sido apelado y concedido por el Tribunal en el efecto devolutivo, para los fines legales consiguientes.

El debido proceso no sólo se refiere a la garantía de defensa a los principios de contradicción, igualdad, oportunidad, etc. y demás garantías incorporadas al proceso, sino también al estricto cumplimiento por el Tribunal de los trámites y procedimientos que la ley establece en cada caso en particular. En el juicio ejecutivo en que se dicta la orden de hacer impugnada, habían bienes retenidos y para ese aspecto la resolución (auto 514) no debía cumplirse, pese al efecto devolutivo en que fue concedido el recurso. En ello radica, esencialmente, la violación de la garantía constitucional invocada, ya que todo lo que hace referencia al Auto 514 de 28 de abril, tantas veces mencionado, es del conocimiento y decisión del Tribunal Superior en virtud de la alzada a que fue sometido.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 21 de mayo de 1993, dictada en el presente caso.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.)EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA ASESORES JURÍDICOS ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR GABRIEL BTESH BTESH EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense ASESORES JURÍDICOS ASOCIADOS ha promovido amparo de garantías constitucionales en nombre de TEQUENDAMA, S. A., en contra del Director General de Aeronáutica Civil, a fin de que se revoque la orden de hacer que impartió, a través de la Directora de Finanzas, a.i. de AERONÁUTICA CIVIL, al Administrador del Aeropuerto Internacional de Tocumen para que la accionante desaloje el depósito que ocupa en el edificio del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Admitido el recurso de amparo se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación o, en su defecto, un informe acerca de los hechos materia del recurso.

En una lacónica nota el señor Director General de Aeronáutica Civil remite copias autenticadas del expediente. Así dice dicha nota:

> "... Me es grato hacer referencia a su Nota N°650 del 16 de junio de 1993, con relación al Amparo de Garantías Constitucionales, propuesta por el Licdo. Ricardo A. Landero, Apoderado Judicial del Sr. Gabriel Btesh Representante Legal de TEQUENDAMA, S. A., en contra de la orden de hacer contenida en el Oficio N°0.236/93 DF-OC-DAC del 9 de junio de 1993 enviada por el Director de Finanzas, a.i. al Representante Legal de Tequendama, S. A.
>
> Adjunto envío copias autenticadas del expediente de Tequendama, S. A.
>
> Sin otro particular, nos suscribimos de usted, con las seguridades de mi distinguida consideración.
>
> Atentamente,
>
> ZÓSIMO GUARDIA VARELA
> Director General"

En el libelo de demanda, al referirse a la orden de desalojo se expresa que ha sido impartida por el Director de Finanzas, Edgar Rojas, subalterno del Director General, sin que se exprese qué funcionario tomó la decisión que allí se notifica. Sin embargo, por tratarse de un servidor público, subalterno del Director General, se promueve la acción contra éste, bajo la presunción de que la misma ha sido dada por dicho funcionario.

Del expediente enviado a esta Corporación, queda claramente establecido que la persona jurídica TEQUENDAMA, S. A. obtuvo mediante la Licitación No.02/91 DAC la adjudicación de los locales números 112 y 113 ubicados en el área conocida como Zona Libre del Aeropuerto Internacional de Tocumen, para ser usados como oficina y depósito. Según consta en esa documentación enviada, el contrato fue firmado el día 6 de marzo de 1992 con una duración de cuatro años que comenzarían a contarse a partir del 16 de febrero de 1992, renovables por igual período y hasta por tres períodos consecutivos. En la cláusula vigésima constan las causales por las cuales puede darse por terminado el contrato administrativo. Existe además una cláusula especial que se reproduce por su relación al desalojo ordenado por Aeronáutica:

> ...
> DÉCIMOTERCERA: DISPOSICIÓN DE ESPACIOS OTORGADOS EN CONCESIÓN - Convienen las partes que si durante la vigencia del presente Contrato, AERONÁUTICA necesita por alguna razón, disponer de los espacios otorgados en concesión, AERONÁUTICA pondrá a disposición de EL CONCESIONARIO otros espacios de superficie similar e igual y EL CONCESIONARIO aceptará el cambio. En tal caso resolverán si es preciso el presente Contrato, y celebrarán uno por el resto del término del contrato original. ...".
>
> Aparece dentro de este expediente, que el día 12 de febrero de 1993 la Directora de Finanzas le envió un oficio al representante legal de TEQUENDAMA, S. A. para comunicarle que "Por medio de la presente se le informa que debe desalojar el depósito de 63.45 M2 que tienen (sic) su empresa en el primer piso del Aeropuerto Internacional de Tocumen. En compensación le ofrecemos un depósito de 36.41 M2 localizado en la planta baja del mismo aeropuerto, cuenta usted, hasta el 28 de febrero de 1993 para llevar a cabo este desalojo".
>
> También aparece copia de otra nota, remitida el día 9 de junio de 1993, que dice "En reitero de nuestra nota No.0.55/93-DF-OC-DAC del 12 de febrero de 1992, le informamos que debe desalojar el depósito que ocupaba su empresa en el primer piso del Aeropuerto Internacional de Tocumen. En compensación le ofrecemos un depósito de 36.41 M2 localizado en el planta baja del mismo aeropuerto; sírvase coordinar con el señor Guzmán Marciaga, Jefe de Contabilidad, teléfono 38-3145, la entrega de llaves de ambos locales. Cabe señalar que, cuenta usted con un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del recibo de la presente nota, para llevar a cabo este desalojo".

En contestación del 31 de mayo de 1993, el representante legal de TEQUENDAMA, S. A. se refiere a las notas a que hemos hecho referencia. Sostiene que se pretende una resolución unilateral del contrato sin que exista ninguna causa que lo justifique.

En el amparo se invoca como violadas con la orden de desalojo, las garantías consagradas en el artículo 32 de la Constitución Política de la República.

El debido proceso consagrado en la disposición constitucional que señala como infringida, garantiza a toda persona el derecho a ser juzgado por funcionario competente, a ser oído por ese funcionario, a presentar pruebas y contrapruebas que considere oportunas, a poder utilizar los recursos otorgados por la ley para impugnar las resoluciones o fallos que se dicten.

Oportuno es reproducir al Doctor Arturo Hoyos cuando dice: "Para que una persona pueda ser escuchada constituye un requisito preliminar que ella se entere de que se ha entablado este proceso o de que se va a practicar una diligencia dentro del mismo o de sucesos de relevancia en el proceso. Para ello se requiere entonces que la persona sea debidamente notificada con anticipación razonable de tal manera que se le coloque en posición de defenderse" (Revista Lex, Enero-Junio, 1986, **La Garantía Constitucional del Debido Proceso Legal**, pág. 97).

En el caso subjúdice, se envían dos notas al representante legal de TEQUENDAMA, S. A. en donde se le informa de una decisión adoptada por AERONÁUTICA CIVIL sin que se hayan otorgado los más elementales medios de defensa. Esa comunicación no emerge de ningún proceso administrativo y, menos aún, es el producto de alguna resolución. Es más,

la razón del desalojo se vincula a intereses particulares de otra empresa, extraño al interés del público.

No se necesita, ante lo expuesto, mayor esfuerzo para concluir que efectivamente la orden emanada violenta las garantías consagradas en el artículo 32 de la Constitución Política de la República y, como consecuencia, quebranta el artículo 17 de la Carta Magna que obliga a las autoridades de la República, al cumplimiento de la Constitución y la ley.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la firma forense Asesores Jurídicos Asociados, en representación del señor Gabriel Btesh y REVOCA la orden impartida por el Director de Aeronáutica Civil, comunicada por el señor Edgar Rojas, Director de Finanzas, y la cual está contenida en el Oficio N°0.236/93-DF-OC-DAC del 9 de junio de 1993, dirigida al administrador del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR LEONEL JUVENAL ARAUZ CASTAÑEDAS CONTRA EL FISCAL DEL CIRCUITO DE DARIÉN, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación de Justicia, en grado de apelación, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por Leonel Juvenal Araúz Castañeda, titular del cargo de Personero Segundo Municipal del Distrito de Chepigana en Darién, contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 11 de noviembre de 1992 dictada por la Fiscal de Circuito de Darién, licenciada Ysela Alaniz de Chiari, mediante la cual se dispone aplicar al amparista la medida cautelar personal contemplada en el literal A del artículo 2147b del Código Judicial y suspenderlo del cargo de Personera Segundo Municipal del Distrito de Chepigana, por considerar que ha incurrido en las conductas ilícitas tipificadas en el artículo 331 del Código Penal.

Mediante Sentencia de 25 de mayo de 1993, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial no admitió la acción de amparo interpuesta, por considerar que para que sea viable la acción de amparo de garantías constitucionales "contra resoluciones expedidas por los funcionarios de instrucción, no basta que el postulante de la misma demuestre haber interpuesto el incidente de controversia que cabe contra dicha resolución (ver artículo 2009 del Código Judicial, reformado por la Ley 3 de 22 de enero de 1991), sino que se hace necesario además, para entender agotada la vía del incidente en cuestión que el amparista aporte con su demanda la prueba correspondiente de haber agotado el recurso que cabe contra la resolución judicial que niega el incidente en comento, por lo que se ha de concluir que el amparo propuesto deviene en manifiestamente improcedente (ver artículo 2611, reformado por el Decreto de Gabinete No.50 de 20 de febrero de 1990) y de consiguiente procede declarar su inadmisibilidad" (fs.11).

De acuerdo a las constancias procesales, antes de ocurrir ante esta vía, el amparista había promovido incidente de controversia contra la orden impugnada, indicando en lo medular que la Fiscal de Circuito había suspendido al señor Personero en merma de las garantías del debido proceso. El Juez del Circuito de Darién, mediante Resolución de 29 de abril de 1993 denegó el incidente, sin resolver sobre el fondo de la pretensión, por estimar erradamente que la vía escogida por el incidentista no era la adecuada, sino la vía del recurso de amparo de garantías constitucionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2606 del Código Judicial, porque lo que se debatía era la falta de competencia del funcionario de instrucción para suspender al incidentista de su cargo en violación de una norma constitucional (artículo 220 y 213 de la Constitución Nacional). El error en que el Juez del Circuito de Darién incurrió fue el de no tomar en cuenta que esas normas constitucionales fueron desarrolladas mediante los artículos 377,379,63,44,48 y además relacionados del Libro I del Código Judicial y que mediante los incidentes deben resolverse los conflictos legales que surjan en las investigaciones entre el Agente del Ministerio Público y el imputado.

Contra esta decisión, el amparista no recurrió en apelación.

Con su demanda el amparista acompaña copia autenticada de la Resolución del 11 de marzo de 1993, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, por la cual se resuelve la acción de habeas corpus promovida por el licenciado Guillermo Quintero a favor de Leonel Juvenal Arauz Castañedas, y contra la Fiscal del Circuito de Darién, y se declara ilegal la restricción de la libertad personal de Araúz Castañedas, ordenada en la diligencia de 11 de noviembre de 1992, que constituye la orden de hacer impugnada en la presente acción de amparo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2160 del Código Judicial, la orden de detención de un funcionario público lleva consigo la de suspensión del ejercicio del cargo público que desempeña y en el caso que nos ocupa, la orden de detención ha sido revocada mediante la sentencia de habeas corpus de 11 de marzo de 1993 dictada por el Segundo Tribunal Superior, por haber sido decretada por un funcionario sin competencia para hacerlo.

Como quiera que la existencia de dicha orden de suspensión podría violar la garantía constitucional consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política, y tomando en consideración que el incidente de controversia promovido por el amparista contra la orden de hacer que aquí impugna no fue decidido en el fondo, el Pleno de la Corte estima que el amparo de garantías constitucionales promovido debe admitirse, previa revocatoria de la resolución de primera instancia.

Esta Corporación admitió y resolvió en el fondo una acción de amparo de garantías constitucionales contra una orden de suspensión del cargo de un agente del Ministerio Público, dictada por autoridad sin competencia para hacerlo, a pesar de que no se agotaron previamente los demás recursos que la Ley establece para la impugnación de estas órdenes, tomando en consideración la evidencia de la violación y la inminencia del daño causado (cfr, Sentencia de 14 de enero de 1993, dictada en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado Miguel Quirós Almanza contra la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá).

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, previa revocatoria de la Resolución de 25 de mayo de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, le ORDENA que ADMITE la acción de amparo promovida por el licenciado Guillermo Quintero, en representación de LEONEL JUVENAL ARAUZ CASTAÑEDA, contra la Orden de Hacer contenida en la Resolución de 11 de noviembre de 1993, dictada por la Fiscal de Circuito de Darién, y que oportunamente resuelva el fondo de la controversia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO CAMILO ENRIQUE RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA JOVEN CARMEN A. MORENO POLO EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Camilo Enrique Rodríguez Quirós, actuando en nombre y representación de **CARMEN ANGÉLICA MORENO POLO**, interpuso recurso de amparo de garantías constitucionales en contra de la Orden de Hacer contenida en la Resolución No.92-93L del 20 de mayo de 1993, dictada por la Dirección General de Arrendamientos.

Antes de admitir la citada demanda, es imperante analizar el contenido de la misma, a fin de precisar si cumple con las formalidades legales correspondientes a este negocio.

En primer lugar, la Corte observa que en el escrito se señaló la orden de hacer que se impugna y la autoridad que la dictó; igualmente se especifican los hechos en los que se funda la pretensión y las disposiciones que se consideran infringidas. También observamos que se adjuntó como prueba copia de la resolución recurrida, lo que nos lleva a concluir que se ha cumplido con las formalidades consignadas en el artículo 2610 del Código Judicial.

Sin embargo, observamos que la orden de hacer impugnada fue emitida por la Dirección General de Arrendamientos, al resolver la apelación presentada por la recurrente contra la decisión de la Comisión de Vivienda No.1 del Ministerio de Vivienda, por lo que de acuerdo con la Ley 93 de 1973 y la Ley 1 de 1978 se ha agotado la vía gubernativa y, consecuentemente, dicha decisión puede ser impugnada en la vía contencioso administrativa mediante un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte.

Este es el criterio que ha mantenido la Corte y así podemos señalar que en la sentencia del 15 de enero de 1993, el Pleno consideró:

> "El Pleno de la Corte ha sostenido en innumerables precedentes, que las órdenes de hacer emitidas, por autoridades administrativas, de tal modo que permitan ser impugnadas por la vía gubernativa y, posteriormente, ante la Sala Tercera de la Corte, deben concurrir ante esa vía". (Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado Samuel A. de Icaza en nombre y representación del señor Jorge Mottley y en contra de la Sección de Condena y Rehabilitación, Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda).

Siendo así, el Pleno considera que en el presente caso no es posible darle curso a la acción de amparo de garantías constitucionales, en vista que cabe el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción para invalidar los actos que se demandan en este recurso.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales propuesto por CARMEN ANGÉLICA MORENO POLO contra la orden dictada por la Dirección General de Arrendamientos.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO M. RÍOS V.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA RUBIO Y RUBIO EN REPRESENTACIÓN DEL DR. ORIEL OLMEDO PORTUGAL EN CONTRA DE LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Dr. Oriel Olmedo Portugal ha promovido, mediante su apoderado judicial especial, la firma forense Rubio y Rubio, proceso de amparo de garantías constitucionales contra la Juez del Tribunal Tutelar de Menores. En acatamiento a las normas procesales que regulan este tipo de acciones, la Corte entra a dilucidar primero si el recurso cumple o no con las formalidades legales.

Mediante esta acción, se pretende que la Corte Suprema de Justicia revoque la ORDEN DE NO HACER contenida en el Auto No. 552 S. C. de 8 de julio de 1992 y en la resolución No. 158 S. C. de 25 de febrero de 1993, ambas expedidas por la Juez del Tribunal Tutelar de Menores. En la primera resolución se niega por improcedente el incidente de nulidad promovido por el demandante dentro del proceso de filiación incoado por Isabel María Pittí Núñez en contra de Oriel Olmedo Portugal y en favor de la menor Thayre Kiara Pittí. En la segunda resolución se niega por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la mencionada firma en representación del señor Portugal en el antes referido proceso de filiación.

Sobre el particular, el Pleno observa que en la parte correspondiente a las disposiciones infringidas se señalan como tales los artículos 963 y siguientes, 989 y concordantes, y el artículo 701, todos del Código Judicial. Por lo que para el Pleno es evidente que la pretensión de la parte demandante se ubica fundamentalmente en el plano de la legalidad y no en el de la constitucionalidad que es propiamente el objeto del proceso de amparo de garantías constitucionales. Por otro lado se observa que, si bien se señala como infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional, es decir, la garantía constitucional del debido proceso, la infracción a dicha norma se hace consistir en la violación a las normas legales antes indicadas que no constituyen un desarrollo legal de los elementos esenciales de la garantía constitucional del debido proceso. La Corte ha sostenido en múltiples precedentes que el proceso de amparo de garantías constitucionales no es la vía procesal idónea para plantear infracciones al ordenamiento jurídico que se ubiquen en el plano de la legalidad, pues en dicho proceso la Corte debe limitarse a examinar la constitucionalidad de los actos que puedan ser objeto de impugnación dentro del citado proceso. Esta razón hace que la demanda de amparo de garantías constitucionales sea manifiestamente improcedente.

En consecuencia, el Pleno, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el señor Oriel Olmedo Portugal en contra de la Juez del Tribunal Tutelar de Menores.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A. EN CONTRA DEL JUEZ SÉPTIMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución de 11 de junio de 1993, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó la resolución de 5 de mayo del mismo año, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que denegó el amparo de garantías constitucionales propuesto por el apoderado de la sociedad anónima CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A., contra el Juez Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

Dentro del término de ejecutoria, el licenciado **LUIS A. MORENO H.** ha presentado un escrito en el que solicita la aclaración de la sentencia.

Observa la Corte que aun cuando el abogado denomina su escrito como una aclaración de sentencia, en el fondo lo que persigue es que la Corte **reconsidere su pronunciamiento.** Ello se deduce de los siguientes argumentos:

> "La aclaración que se solicita es por lo siguiente: El día 15 de marzo de 1993 el Juez Séptimo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó unas resoluciones en donde levantaba las medidas cautelares decretadas a favor de mis representadas y sin haberlas notificado siquiera y por lo

mismo sin esperar que estuvieran ejecutoriadas procedió a dictar los oficio números 318, 319 y 320 donde comunicaba al Registro Público el levantamiento de la medida cautelar.

Contra cada uno de los oficios se interpusieron acciones de amparo de garantías constitucionales, de las que conoció el Primer Tribunal Superior en diferentes salas, lo que motivó que pese a que los amparos de garantías constitucionales eran idénticos en su contenido fueron resueltos en forma diferente así: el amparo propuesto contra el oficio número 318 lo falló el Tribunal bajo la ponencia del Magistrado RICARDO NAVARRO JURADO y por supuesto denegó el amparo; el otro propuesto contra el oficio 319 lo falló el tribunal bajo la ponencia de la Magistrada EVA CAL y esta concedió el amparo; y el propuesto contra el oficio 320 lo falló el Tribunal bajo la ponencia también del Magistrado RICARDO NAVARRO JURADO quien consistente en su posición denegó el amparo impetrado.

Contra las resoluciones del Primer Tribunal Superior que denegaban los amparos propuestos contra los oficios 318 y 320 el suscrito apeló, por lo que esta Corte ha estado conociendo los mismos en virtud del recurso vertical de apelación oportunamente interpuesto y sustentado.

Por otro lado, en cuanto el amparo propuesto contra el oficio 319, y cuyo contenido, repetimos, es igual al 318 y 320, el Primer Tribunal Superior de Justicia dijo que: "esta Superioridad es del criterio que si el Juez demandado giró o expidió el oficio 319 acusado, antes de que se encontrara debidamente notificada y en firme la resolución de 15 de marzo de 1993 que ordenó el levantamiento de la medida, el Juez demandado no imprimió el trámite legal y, en consecuencia, infringió la garantía del debido proceso".

Ahora bien, como quiera que en este máximo Tribunal de Justicia se ventilan dos recurso de apelación en amparos de garantías de idéntico contenido donde la ponencia en estos dos expedientes le tocó a Magistrados distintos, y teniendo en cuenta que uno de los fines de los fallos de la Corte es uniformar la Jurisprudencia nacional, esta aclaración de sentencia solicitada por nosotros le brinda esa oportunidad a este magno Tribunal, que uniforme la jurisprudencia, ya que el prestigio de esta corporación no queda en buena posición si con un escaso margen de días la Corte falla dos casos análogos en forme diametralmente diferente".

No cabe la menor duda de que la pretensión del licenciado Moreno no encuentra asidero en norma jurídica alguna, pues es sabido que contra las decisiones del Pleno de la Corte y de sus Salas no cabe ningún recurso. Y es precisamente por esta realidad que el recurrente utiliza el mecanismo de aclaración para provocar un nuevo reexamen de los puntos decididos por la Corte en la resolución de 11 de junio del presente año. En otras palabras, se ha disimulado un recurso de reconsideración a través de una aclaración de sentencia totalmente improcedente.

El artículo 986 del Código Judicial establece los motivos en razón de los cuales las resoluciones judiciales son susceptibles de aclaración. Al analizar este precepto, se advierte a simple vista la disociación que existe entre el supuesto de hecho legal de la norma y la pretensión del licenciado Moreno.

En tales circunstancias, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA POR IMPROCEDENTE la aclaración de sentencia solicitada por el licenciado LUIS A. MORENO H., en su condición de apoderado especial de la sociedad anónima CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS V. (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO DIOGENES AROSEMENA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ISAÍAS CAMACHO CONTRA EL JURADO DE ELECCIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS REPRESENTADOS POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADA: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma de abogados Arosemena y Arosemena, actuando en nombre y representación del señor ISAÍAS CAMACHO interpuso acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución No. 1 del 11 de junio de 1993, emitida por el Jurado de Elecciones de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Panamá.

El amparista sostiene que la orden impugnada ha infringido las garantías constitucionales contenidas en los artículos 17 y 32 de la Constitución Política en concepto de violación directa.

Al examinar la demanda de Amparo, para resolver si es admisible, se ha constatado que la Resolución No. 1 de 11 de junio de 1993 dictada por el Jurado de Elecciones de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Panamá constituye un acto administrativo, que según el amparista viola el artículo 2 de la Ley 6 de 1991.

El Pleno de la Corte ha manifestado reiteradamente que la ilegalidad de los actos administrativos es impugnable por la vía contencioso administrativa, y no mediante la acción de Amparo, reservada para obtener la revocación inmediata de ordenes de hacer que vulneren las garantías constitucionales y causen daños graves e inminentes.

En el caso en estudio, además de impugnarse la legalidad de un acto administrativo, la orden de hacer impartida es de aquellas que no requieren una reparación inmediata, ya que los artículos 9 y 10 del Reglamento para la Elección de Decano y Vice-Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas prevén que en caso de impugnación de un candidato no se suspenderá la elección y la Proclamación del Decano o Vice-Decano se hará cuando se hayan resuelto las impugnaciones presentadas.

Como la demanda es manifiestamente improcedente, por las razones expuestas, la misma no debe acogerse tal como lo dispone el artículo 2611 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por ISAÍAS CAMACHO contra la Resolución No. 1 de 11 de junio de 1993, emitida por el Jurado de Elecciones de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Panamá.

Notifíquese.

MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR JAIME PADILLA BELIZ EN CONTRA DEL JUEZ CUARTO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación de Justicia, en grado de apelación, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por Jaime Andrés Padilla Beliz contra la orden de hacer contenida en el Auto No. 532 de 30 de abril de 1993, confirmado por el Auto No. 593 de 14 de mayo de 1993, ambos dictados por la Juez Cuarta de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se impone la pena de arresto por cinco (5) días inconmutables a los señores Jaime Padilla Beliz y Omayra García de Berbey, por faltas del debido respeto a una autoridad judicial, durante el ejercicio de sus funciones. El fundamento legal de la orden de hacer impugnada es el artículo 202 del Código Judicial.

Dicha acción de amparo no fue admitida por el Tribunal Aquo, por ser manifiestamente improcedente (art. 2611 del C.J.) en vista de que la orden impugnada es una resolución que impone una pena de arresto, restrictiva de la libertad corporal, que debe ser impugnada mediante un Habeas Corpus preventivo (artículos 23 de la C.N. y 2565 en relación con los artículos 2568 y 2573 del Código Judicial). Sin embargo, esta figura jurídica del Habeas Corpus preventivo fue reconocida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 18 de noviembre de 1991, con el fin de resolver mediante esta acción todos los actos tendientes a restringir arbitrariamente la libertad de los ciudadanos. En esta sentencia el Pleno expresó:

> La intención de la Corte es clara y, a juicio del Pleno, inobjetable: concentrar dentro del instituto de habeas corpus todas las garantías procesales que permitan al ciudadano no sólo restaurar la libertad personal allí donde ésta haya sido desconocida por actos arbitrarios ilegales, sino también enervar las acciones igualmente arbitrarias e ilegales que restrinjan el pleno disfrute de ese derecho inalienable del ciudadano".

El apelante alega que el Tribunal aquo no admitió el amparo y sin embargo conoció sobre el fondo del negocio, al "analizar todas y cada una de las infracciones a la Constitución Nacional mencionadas por el amparista" (fs.41).

También alega el apelante que el Pleno debe conocer el fondo de la acción porque, en primer término, la orden impugnada viola la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional, y como consecuencia de la violación de este precepto viola "los principios de presunción de inocencia y de la privación de la libertad a la que aluden los artículos 21 y 22 de nuestra Carta Magna" (fs. 43 y 44).

Y por último el apelante afirma que al no admitir el presente amparo, su representado "ha quedado en total indefensión jurídica, pues no hay mecanismo para oponerse a la ejecución de una orden de arresto ilegal que violenta el principio del debido proceso" (fs. 42), porque la acción de habeas corpus preventiva promovida para impugnar la orden de arresto dictada contra el amparista, fue desestimada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial "al no existir norma constitucional que lo consagre expresamente".

Para resolver el presente negocio el Pleno de la Corte toma en consideración que las acciones de amparo pueden inadmitirse cuando son manifiestamente improcedentes (artículo 2611 del C.J.) como en el presente caso, en el cual la orden de hacer que se impugna es una orden de arresto, o sea una orden restrictiva de la libertad personal, que debe ser impugnada a través de la acción de habeas corpus preventivo. Tal como se expresó en esta resolución, la existencia de la acción preventiva de habeas corpus fue

reconocida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en varias sentencias dictadas para resolver Acciones de Habeas Corpus (V. Sentencia de 31 de mayo de 1993 dictada en la Acción de habeas corpus promovida a favor de Elías Enrique Contreras contra el Juzgado Tercero del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá; Sentencia de 26 de junio de 1992, dictada en la Acción de Habeas Corpus propuesta a favor de Larry Kerby y contra la Fiscal Sexta del Primer Circuito Judicial de Panamá).

Fallos como los citados constituyen lo que en la doctrina jurídica se denomina sentencias interpretativas. Este concepto doctrinal fue acogido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de 24 de Octubre de 1991, que resuelve la Acción de Inconstitucionalidad promovida contra el artículo 145 del Código Laboral. En esta Sentencia de 24 de octubre de 1991, en al cual fue ponente el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola, se expresó:

"La Corte se encuentra ante el hecho, de que frente al artículo 63 de la Constitución, dos de las situaciones contempladas en el artículo 145 del Código de Trabajo, las actividades donde no se ha señalado salario mínimo y cuando la remuneración es notoriamente inequitativa en comparación con el salario promedio existente en la industria o en la actividad de que se trate, son conformes con el artículo 63 de la Constitución, pero no lo es así tratándose de la tercera situación que contempla dicho artículo, la de violación del principio de igualdad de salario, por no ser su interpretación conforme con el artículo 63 de la Constitución Nacional.

...

"El primer Presidente del Tribunal Constitucional español y reconocido constitucionalista, MANUEL GARCÍA PELAYO, expresó:

De acuerdo con el principio de la llamada "interpretación conforme a la Constitución" cuando entre todas las posibles interpretaciones razonables que cabe hacer de una norma, hay una de ellas por la que dicha norma es conforme a la Constitución, la ley debe ser considerada como constitucional, siempre que se interprete del modo admitido o establecido por el Tribunal. Este principio ha conducido a las llamadas sentencias interpretativas en las que la constitucionalidad de la ley queda vinculada a la interpretación llevada a cabo por el Tribunal en su calidad de "interprete supremo de la Constitución". (Manuel García Pelayo "Estado Legal y Estado Constitucional de Derecho. El Tribunal Constitucional Español, página 30, Revista del 1988-1989, No.23 y 24).

Por las razones expuestas, la Corte Suprema como intérprete máximo de la Constitución Nacional considera que en lo referente a la violación del principio de la igualdad de salarios, la remuneración que se fije en la sentencia debe surtir efecto a partir del momento en que se dan las mismas condiciones de trabajo y en los otros dos casos, tal como lo regula el artículo 145 del Código de Trabajo, es decir, a partir de la ejecución de la sentencia. Así debe interpretarse esta norma, conforme con la Constitución Nacional".

Las normas legales a las cuales se refieren las sentencias interpretativas en materia de habeas corpus, antes mencionadas, deben ser aplicadas por los tribunales de la República de acuerdo con la interpretación hecha por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de Tribunal Constitucional, -de conformidad con los artículos 203 y 204 de la Constitución Nacional-, porque las decisiones mediante las cuales resuelve acciones de inconstitucionalidad son finales, definitivas y obligatorias, y contra las otras decisiones que dicta la Corte Suprema de Justicia o sus Salas no se admite recurso de inconstitucionalidad ni de Amparo de Garantías Constitucionales. O sea que las normas deben ser aplicadas por los tribunales de acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional, para lograr el fin último del control constitucional en el ordenamiento jurídico panameño que es el "mantenimiento de un determinado orden de valores", a través del desarrollo del "principio de la subordinación de la normatividad ordinaria a la normatividad fundamental o constitucional". (Carlos Bolívar Pedreschi, El Control de la Constitucionalidad en Panamá, Ediciones Fábrega, López, Pedreschi y Galindo, páginas 63 y 93, Madrid, España, 1965).

A juicio del Pleno, la sentencia apelada debe confirmarse tomando en consideración lo expuesto, esto es que la acción de amparo es manifiestamente improcedente y que las normas que regulan la acción de Habeas Corpus en general, y en especial las que se refieren al Habeas Corpus preventivo deben ser aplicadas de acuerdo con la interpretación hecha por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 27 de mayo de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, por la cual no se admite el Amparo de Garantías Constitucionales promovido por Jaime Andrés Padilla Béliz contra la Juez Cuarta Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ANÍBAL HERRERA PEÑA BETHANCOURT EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ BLANCO MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD VERACRUZ PANAMÁ, S. A. EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. REPARTIDO EL 4 DE JUNIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **JOSÉ BLANCO MARTÍNEZ**, en su condición de representante legal de la Sociedad VERACRUZ PANAMÁ, S. A., otorgó poder especial al licenciado ANÍBAL HERRERA PEÑA para que en nombre y representación de la mencionada sociedad interpusiera amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la sentencia de segunda instancia dictada el 26 de mayo de 1993 por el Tribunal Superior de Trabajo, mediante la cual, previa revocatoria de la sentencia PJ de 6 de mayo de 1992 de la Junta de Conciliación y Decisión N° 3, se declara el despido injustificado y se le ordena a la citada sociedad que reintegre al trabajador (señor DIEGO MARTÍNEZ) a sus labores habituales, más el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta la interposición del recurso de apelación.

Al analizar el extenso libelo de la demanda, se advierte que el motivo de disconformidad del amparista consiste en que, a su juicio, el Tribunal Superior de Trabajo no debió declarar el despido injustificado, porque su representada logró comprobar la causal de despido (desobediencia del trabajador de órdenes emanadas del empleador) durante la audiencia realizada en la Junta.

La Corte observa que en realidad lo que se pretende a través del presente amparo es convertir a esta Corporación de Justicia en un tribunal de tercera instancia. En efecto, para corroborar este aserto tan sólo basta echar un vistazo al siguiente extracto de los argumentos que esbozó el amparista para sustentar la violación del artículo 32 de la Constitución Nacional, que se dice infringido:

> "... la Junta de Conciliación y Decisión N° 3 (3) determinó que el hecho de que el trabajador no haya rendido los informes ordenados por la empresa constituye causa justificada de despido y que la empresa demandada probo plenamente tal desobedecimiento.
>
> Por otro lado, la autoridad acusada (Tribunal Superior de Trabajo) consideró que no obstante haber quedado demostrado que el trabajador Martínez desatendió la orden impartida, ese desobedecimiento de órdenes no constituye causa justificada de despido.
>
> Luego, la violación del artículo 32 constitucional consiste en que la autoridad acusada deja de considerar como causa de despido la invocada por mi representada en la comunicación de la terminación de la relación de trabajo, siendo que en efecto el desobedecimiento de órdenes constituye una causa justificada de despido." (sic)

Como se aprecia, lo que se le atribuye a la sentencia de segunda instancia es un supuesto error in judicando, consistente en una deficiente valoración de los medios probatorios incorporados al proceso laboral.

Ello evidencia que el tema sometido a consideración del Pleno no dice relación con la violación de la garantía constitucional del debido proceso; por el contrario, lo que se pretende es que la Corte incursione en el análisis valorativo de los medios probatorios, a efecto de determinar si, efectivamente, el tribunal ad quem cometió un error al ponderarlos y, en consecuencia, al calificar la situación jurídica llevada a sus estrados, cosa que es incompatible con la finalidad que orienta la acción de amparo de garantías constitucionales en nuestro ordenamiento.

El artículo 2606 del Código Judicial establece que el amparo de garantías constitucionales no será admitido cuando sea manifiestamente improcedente. En ese sentido, no cabe la menor duda de que la pretensión que ampara la acción promovida por el licenciado Herrera hace que la misma devenga improcedente, pues no puede convertirse el tribunal de amparo en una instancia más del proceso, a la cual se concurra para revisar supuestos errores in judicando que guardan relación con la valoración de los medios probatorios realizada por el juzgador.

Por ello, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Aníbal Herrera Peña, en nombre y representación de la sociedad VERACRUZ PANAMÁ, S. A., contra la sentencia de segunda instancia dictada el 26 de mayo de 1993 por el Tribunal Superior de Trabajo, mediante la cual, previa revocatoria de la sentencia de 7 de mayo de 1992 de la Junta de Conciliación y Decisión N° 3, se declara injustificado el despido del trabajador DIEGO MARTÍNEZ, y se ordena el reintegro a sus labores habituales, más el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta la interposición del recurso de apelación.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LICENCIADA ANA I. BELFON VEJAS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO PABLO SAAVEDRA EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **FRANCISCO PABLO SAAVEDRA**, Representante de Corregimiento de Alcalde Díaz y Las Cumbres, otorgó poder especial a la licenciada **ANA ISABEL BELFON VEJAS** para que en su nombre y representación interpusiera acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer dictada el 28 de abril de 1993 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se ordena su separación inmediata del cargo de Representante de Corregimiento, y se dispone que sea sometido a medidas de seguridad de carácter curativas.

ANTECEDENTES

Conforme se aprecia en la resolución impugnada, el señor FRANCISCO PABLO SAAVEDRA padece de psicosis maníaco depresiva, según dictámenes periciales de los médicos forense del Instituto de Medicina Legal, doctores GUILLERMO GARCÍA RUIZ y NILDA SANTAMARÍA DE MEDINA.

Con fundamento en esos dictámenes, el juzgado de primera instancia, en decisión que fuera confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, expidió un sobreseimiento definitivo en favor del sindicado pues, a pesar de que quedó comprobado en el proceso el delito de peculado cometido por SAAVEDRA, lo cierto es que su conducta queda ubicada dentro del concepto de inimputabilidad a que alude el artículo 24 del Código Penal, toda vez que en el momento en que cometió el ilícito, Saavedra se encontraba en uno de los episodios de su enfermedad.

En el auto impugnado se deja consignado, previa evaluación de los dictámenes periciales y de la cita de autores de la talla de Eduardo Vargas Alvarado y Roberto Solórzano Niño, que este tipo de padecimiento es de carácter permanente, aunque puede ocurrir, como en efecto ocurre en el caso del señor Saavedra, que existan períodos prolongados de lucidez -según afirma la doctora Santamaría de Medina- en los cuales la persona se puede conducir de manera normal.

El tribunal ad-quem, al conocer en grado de consulta el proceso penal instruido contra SAAVEDRA, dispuso la separación inmediata del cargo de Representante de Corregimiento de Alcalde Díaz y Las Cumbres, y que el señor FRANCISCO PABLO SAAVEDRA fuese sometido a medidas de seguridad de carácter curativas, que establecerá el Juez de la causa oportunamente.

Las razones que tuvo el Segundo Tribunal Superior de Justicia para proceder de esta forma son las siguientes:

> "... el señor Saavedra como Representante, tiene bajo su potestad el poder de realizar gestiones de disposición de bienes públicos, en virtud del cargo que ocupa.
>
> Lo que preocupa a esta superioridad es el hecho de que, si bien es cierto, los galenos del Instituto de Medicina Legal, determinaron que el imputado en la actualidad puede ejercer el cargo que ocupa, dicho informe habla de períodos prolongados de lucidez, empero lo anterior, se considera que el padecimiento del señor Saavedra es de tipo permanente, o sea que en cualquier momento puede resurgir ...
>
> Dicha circunstancia constituye un gran peligro en cuanto a la administración de la cosa pública se refiere, ya que el cuadro que presenta el justiciable surge cada vez que existen presiones o tensiones, y el cargo que éste ostenta, conlleva responsabilidad, por ende, lleva inserto en él las tensiones y presiones, aunadas al stress originado de sus vivencias personales.
>
> Los hechos que originan la presente encuesta penal, se dan en el lapso que va del primero (1°) de enero al 15 de julio de 1990 (fojas 5). De acuerdo a la evaluación del Dr. García Ruíz, visible a fojas 150 del infolio, para el 18 de marzo de 1991, el señor Saavedra aún estaba padeciendo la sicosis en ese momento en la fase depresiva. Ello, nos da la idea del tiempo que duran las crisis al imputado.
>
> Resulta necesario recalcar que estuvo hospitalizado del 5 al 31 de enero de 1991, en el servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid con el diagnóstico de "enfermedad maníaco depresiva e intento de suicidio" y, abandonó dicha institución de salud voluntariamente; ello significa que rehusó continuar el tratamiento médico que en ese momento le imponía estar recluido en el Hospital (fojas 124). Esto demuestra lo inseguro que resulta dejarle en el cargo pues, no es un paciente constante en su tratamiento, y no puede el Estado ponerle un "custodio" que esté al tanto de su tratamiento e informe a tiempo cuando observe que el intervalo lúcido se agota ...
>
> Creemos que resultaría un tanto irresponsable el no tener presente que los bienes estatales por él administrados estarían permanentemente en una cuerda floja, donde la comunidad a la que debe servir es la que resulta perjudicada ...
>
> Por las anteriores consideraciones, esta superioridad conceptúa que el señor Franciso Pablo Saavedra, en virtud de su estado psiquiátrico, debidamente acreditado en autos, debe ser separado definitivamente del cargo que ostenta y sometido a medidas de seguridad de carácter curativa, tal cual lo establece el artículo 113 numeral 1° del Código Penal, misma que fijará el Juez de la causa en su momento oportuno" (sic).

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE SE DICEN INFRINGIDAS

La licenciada BELFON considera que el artículo 32 de la Constitución Nacional ha resultado infringido de manera directa, por cuanto que el tribunal ad-quem no se apegó a los trámites legales previstos para lograr la separación de un Representante de Corregimiento.

Para fundamentar su punto de vista, se apoya en los artículos 8 y 22 de las leyes 105 y 106 de 1973, respectivamente, según las cuales, asevera, el Representante de Corregimiento sólo puede ser separado cuando exista una sentencia de condena ejecutoriada.

Por ello, a su juicio, mal puede separarse a su representado, si en el caso que nos ocupa ni siquiera existe un auto de llamamiento a juicio.

El otro precepto constitucional que estima infringida la amparista es el artículo 224 de la Constitución Nacional. La licenciada Belfon sostiene que al haberse dictaminado un sobreseimiento definitivo, mal podría separarse a su patrocinado, pues según el citado precepto constitucional, el cargo de Representante se pierde cuando medie condena judicial. De donde se evidencia palmariamente la infracción de dicha disposición.

CUESTIÓN DE PRINCIPIO

Antes de fallar la presente controversia, es necesario manifestar que, según ha sostenido reiteradamente esta Corporación de Justicia, el amparo de garantías constitucionales no debe ser utilizado como medio para generar una instancia más del proceso.

En ese sentido, el Pleno ha hecho hincapié en que no puede ni debe el tribunal que conoce una acción de esta naturaleza, incursionar en la ponderación de los medios probatorios que fueron valorados por los tribunales ordinarios de justicia en su debida oportunidad.

En otras palabras, le está proscrito al tribunal de amparo revisar la valoración jurídica que sobre las pruebas allegadas al proceso se hizo en las instancias procesales ordinarias: el uso indebido de los principios de la sana crítica no puede ser impugnado a través de un amparo.

Lo anterior trae como consecuencia que en este proceso constitucional no se entrará a dilucidar si la medida de seguridad de carácter curativa adoptada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia se ajusta a la realidad que emerge del proceso penal dentro del cual se decretó, porque ello supondría que la Corte tendría que entrar a valorar los informes rendidos por los peritos (médicos psiquiatras) acerca de la condición del examinado, cosa que no es posible en un amparo de garantías constitucionales, según ha quedado establecido en párrafos anteriores.

Aquí lo único que se verificará es si la separación del cargo de Representante de Corregimiento es procedente o no, porque esto sí es un aspecto que linda con una posible infracción de normas constitucionales.

Hechas estas advertencias, pasemos a fallar el fondo del asunto.

CRITERIO DE LA CORTE

La recurrente estima que el artículo 32 de la Constitución Nacional ha sido infringido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Pero es el caso que los argumentos que se expresan para fundamentar esa supuesta infracción, lo que revelan, quizá, sea la comisión de un error in iudicando, que en modo alguno tiene la virtud de producir una infracción al principio del debido proceso legal.

En efecto, el principio del debido proceso nada tiene que ver con los yerros que pueda cometer un tribunal al aplicar la ley sustantiva para resolver una causa. Por el contrario, lo que trata de garantizar este principio -visto en su forma más amplia- es que las personas o sus pretensiones sean juzgadas por un juez natural previamente establecido y conforme a los trámites legales correspondientes, durante los cuales, ha debido habérsele brindado la garantía del contradictorio, la bilateralidad y la oportunidad de aportar pruebas y contrapruebas.

Desde este punto de vista, si el Segundo Tribunal dispuso separar al señor FRANCISCO PABLO SAAVEDRA del cargo de Representante de Corregimiento, ello nada tiene que ver con la violación del principio analizado.

La licenciada Belfon también estima que se ha violado el artículo 224 de la Carta Magna. Sobre el particular caben las siguientes consideraciones.

En reciente fallo de 7 de junio de 1993, la Corte tuvo la oportunidad de establecer el principio de hermenéutica que ha de utilizarse para interpretar el artículo 224 de la Constitución. Veamos:

> "Al disponer el constituyente en el artículo 224 de la Constitución Nacional que la `representación se **perderá** ... por condena judicial fundada en delito", quiso expresar que el Representante de Corregimiento sería **separado del cargo** y no **suspendido** como erradamente dispuso el legislador en el artículo 22 de la ley 106 de 1973, modificado por el artículo 7 de la ley 52 de 1984.
>
> De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española `separar' significa `destituir de un empleo o cargo al que lo servía', mientras que el vocablo `suspensión' significa `Privación temporal del uso de un oficio, beneficio o empleo o de sus emolumentos'... En similar sentido se pronuncia, respectivamente, a fojas 386 y 578, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas ...
>
> De donde resulta que si las penas privativas de libertad corporal (penas principales, art. 46 del Código Penal) van seguidas de penas accesorias, como lo es la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas (art. 52 ibidem), con todas las consecuencias que ello trae aparejado, no cabe la menor duda de que cuando el artículo 224 de la Constitución alude al término `perderá', se está indicando que el Representante de Corregimiento de que se trate será destituido del cargo (esto es separado) y no

> suspendido como señala la ley 106 de 1973, porque siendo la suspensión una medida provisional, ello entraría en contradicción con la realidad normativa que emerge de la fusión armónica del texto constitucional y los principios de derecho penal sustantivo" (Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma forense MURGAS Y MURGAS en representación del señor ESTEBAN RODRÍGUEZ QUINTANA, contra la orden de hacer dictada por la Fiscalía Segunda Delegada de la Procuraduría General de la Nación).

En el negocio que nos ocupa, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dispuso separar definitivamente del cargo de Representante de Corregimiento de Alcalde Díaz y las Cumbres al señor FRANCISCO SAAVEDRA. En otras palabras, dicho tribunal destituyó al señor SAAVEDRA de su cargo, cosa que no podía hacer, como pasamos a demostrar.

Según la interpretación armónica del artículo 224 de la Constitución Nacional y del artículo 22 de la ley 106 de 1973, modificado por el artículo 7 de la ley 52 de 1984, los Representantes de Corregimientos sólo perderán el cargo por una de las siguientes razones:

1) el cambio voluntario de residencia a otro Corregimiento;

2) **la condena judicial fundada en delito**; y

3) la revocatoria del mandato, conforme lo reglamente la Ley.

Tanto la Constitución como la ley, al regular lo relativo al cargo de Representante de Corregimiento, le otorgan a dicha investidura sendas garantías para evitar que la realización de esa función se vea entorpecida. Es así como el citado artículo 22 de la ley 106 de 1973 dispone que los Representantes de Corregimientos sólo podrán ser detenidos por orden escrita de autoridad competente del Órgano Judicial, y **sólo serán separados por el Consejo Municipal** -y no por los tribunales ordinarios de justicia- cuando el miembro haya sido condenado, por autoridad competente, a pena de prisión, siempre que la sentencia condenatoria esté ejecutoriada.

Si bien nuestro ordenamiento jurídico sigue un sistema en el que las medidas de seguridad pueden aplicarse aun cuando medie sentencia condenatoria (art. 2413 del Código Judicial), lo cierto es que tales medidas no requieren un pronunciamiento de esa índole para ser aplicadas, pues las mismas se decretan no "en razón del delito cometido, sino para evitar futuros delitos" (MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ. Derecho Penal Panameño, parte general, Ediciones Panamá Viejo, Panamá, 1977, p. 501). Ello explica por qué el tribunal ad-quem, pese haber dictaminado un sobreseimiento definitivo, pudo aplicar una medida de seguridad de carácter curativa.

Sin embargo, como las medidas de seguridad no se aplican "en razón del delito cometido" no puede derivarse de ellas una consecuencia similar a la que deriva de una sentencia condenatoria en la que se incluya como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Hay que distinguir entre la facultad que tienen los tribunales de justicia para sancionar a un delincuente con una pena accesoria como la mencionada -y que se aplica como sanción derivada de un delito-, y la potestad que tienen para aplicar una medida de seguridad -las que como hemos visto no se decretan necesariamente como consecuencia del delito.

En otras palabras, y siguiendo el principio de **estricta legalidad** que rige en materia penal, los jueces pueden decretar la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas cuando condenan a una persona, pero no pueden proceder de manera similar cuando decretan **exclusivamente** una medida de seguridad. Por lo que si en determinado supuesto la personalidad del sujeto que va a ser sometido a medida de seguridad impide que éste pueda ejercer un cargo público, no puede el tribunal de la causa destituirlo, porque tal proceder estaría amparado en una cuestión de **hecho**, **más no de derecho:** la ley no lo autoriza para destituir a un funcionario público que va a ser sometido a alguna medida de seguridad. En todo caso corresponderá a la autoridad nominadora adoptar las medidas que se estimen convenientes.

Esta prohibición adquiere mayor trascendencia en los casos de los Representantes de Corregimientos, porque al existir una norma como la prevista en el artículo 224 de la Carta Magna, la cual, dicho sea de paso, ha sido desarrollada por el artículo 22 de la ley 106 de 1973, los jueces no pueden ordenar la destitución del Concejal, teniendo que limitarse a condenarlo, porque, según este último precepto, corresponde al Consejo Municipal separar o destituir al miembro condenado. En ese mismo orden de ideas, corresponderá a dicho Consejo adoptar las medidas que estime apropiadas en el presente negocio.

No hay que olvidar que en nuestro ordenamiento jurídico, existe una institución de seguridad social denominada Caja de Seguro Social, que puede otorgar pensiones por la incapacidad que tenga determinada persona para desempeñar sus funciones habituales, en razón de las cotizaciones que existan. Esta posibilidad podría verse lesionada, debido a la posición asumida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de destituir (separar definitivamente) al señor Saavedra del cargo de Representante. Todo lo cual, unido a lo expresado, anteriormente, hace que prospere el amparo ejercitado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por la licenciada ANA BELFON y, en consecuencia, REVOCA la Resolución dictada el 28 de abril de 1993 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, sólo en lo referente a la separación del cargo de Representante de Corregimiento de Alcalde Díaz y las Cumbres que se había decretado contra el señor FRANCISCO PABLO SAAVEDRA, no así en lo que respecta a la medida de seguridad de carácter curativa decretada en su favor.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR GENARINO ROSAS EN CONTRA DEL JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ALGIS ABDIEL ABREGO, apoderado judicial del licenciado GENARINO ROSAS, apeló de la sentencia de 2 de junio de 1993 dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA mediante la cual " DENIEGA el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por GENARINO ROSAS contra el auto No.156 de 27 de abril de 1993 proferido por el JUEZ Tercero Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sumario seguido a ARMANDO GUILLÉN y Otros por el delito de apropiación indebida en perjuicio de la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA).".

Por cumplidas las reglas de reparto el caso se encuentra en estado de resolver y a ello se procede previas las consideraciones que a continuación se expresan.

El examen de la actuación ilustra que el licenciado GENARINO ROSAS, mediante poder especial otorgado a varios abogados, interpuso demanda de Amparo de Garantías Constitucionales en contra de la "..orden de hacer contenida en el Auto No.156 del 27 de abril de 1992, proferida por el Juez Tercero del Circuito Judicial de Panamá, donde se ordena la ampliación del sumario seguido a ARMANDO GUILLÉN HERRERA, FELICIANO FONG GÓMEZ Y OSVALDO BORREL ICAZA por el delito de Apropiación Indebida en Perjuicio de COFINA y la indagatoria de mi mandante."

Ello significa, entonces, que la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, en el caso venido en grado de apelación al Pleno de la Corte, está enderezada contra la supuesta orden de hacer contenida en un auto mediante el cual el tribunal competente de la causa penal, dentro de sus facultades jurisdiccionales decisoria, ordena al funcionario de instrucción la ampliación de un sumario, determinando concreta y claramente los puntos sobre los cuales ha de versar la ampliación de conformidad con lo que dispone el artículo 2204 del Código Judicial, subrogado por el artículo 48 de Ley 3 de 22 de enero de 19991, entre estos puntos el de que se tome "... declaración indagatoria al Licdo. GENARINO ROSAS".

El Tribunal Superior al denegar el amparo de garantías propuesto por el licenciado Genarino Rosas, entre otras razones, en la sentencia apelada expresa lo siguiente:

> "Si bien la Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá en su vista No.40 que corre de (fs.1373 -1390) del sumario determinó que Genarino Rosas R. "debe responder civilmente de su irresponsable actuar" el sumario no ha concluido y es al Juez del conocimiento como consta en el acto de autoridad cuestionado a quien corresponde entre las diligencias de ampliación ordenar recibirle indagatoria a todas aquellas personas que estime vinculadas al delito investigado sin más limitaciones que las estatuidas en el artículo 2204 del Código Judicial. ..." (fs.102).

Luego, al concluir el examen de la confrontación de la orden acusada, el Tribunal A-Quo en la sentencia apelada advierte que la misma no infringe la norma que consagra el debido proceso ni el artículo 21 de la Constitución Política, disposición constitucional también invocada.

Ahora bien, cierto es que el apelante en el escrito de sustentación de la alzada aduce extensas consideraciones con la finalidad de que el Pleno de la Corte revoque la resolución apelada, y, en su lugar, conceda el amparo propuesto por el amparista. Sin embargo, de la atenta lectura de los distintos argumentos expuestos en el indicado escrito de sustentación de la alzada, sin mayor esfuerzo se colige que, en el caso subjudice, no se está ante una orden arbitraria, es decir, violatoria de los derechos y garantías fundamentales que la Carta Política consagra, como son las contempladas en los citados artículos 21 y 32, que por razón de la gravedad e inminencia del daño que pudiera representar la misma requiera de una inmediata revocación, en los términos definidos por el artículo 2606, inciso dos y tres, del Código Judicial.

En efecto, el examen de lo actuado evidencia, contrario a los razonamientos del apelante, que si bien la supuesta orden acusada está contenida en una resolución judicial, sin embargo, dicha resolución ha sido dictada por autoridad competente y conforme a los trámites legales, por lo que, en ese caso, no se puede sostener que se trata de una orden violatoria del debido proceso legal, de la forma como esta garantía fundamental aparece consagrada por la normativa constitucional.

Tampoco se puede sostener, en el caso de autos, la violación del último inciso del artículo 21 de la Constitución Nacional, como se alega en el escrito de sustetanción de la alzada, toda vez que en el sumario no existe evidencia de que se haya dictado orden de "prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles" en contra del amparista, ni la autoridad demandada, por esos motivos, haya dictado la resolución contentiva de la acusada orden, pues, está dentro de sus facultades jurisdiccionales y de competencia decretar la ampliación del sumario, para que complete la investigación, a tenor de lo dispuesto por el artículo 2606 del Código Judicial.

De lo expuesto se colige, en consecuencia, que la resolución judicial dictada por la autoridad demandada, auto de ampliación del sumario, en ese caso, como lo tiene sentado la Corte "... no contiene orden librada a cargo o contra el amparista, sino al funcionario de instrucción, para que complete la investigación, de donde resulta que,

en los términos del artículo 2606, el amparista carece de legitimación activa para proveer este (sic) acción constitucional, que por lo tanto no debía siquiera ser admitida, como en efecto ocurrió." (Sentencia de 2 de febrero de 1993, Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por SUCRE, ARIAS, CASTRO Y ROBLES, en representación de ORLANDO SÁNCHEZ AVILÉS, contra la orden " ampliación de sumarias y se le recibiera indagatoria a Sánchez Avilés).

Está claro, entonces, que la acción de amparo constitucional, conforme al criterio sentado por la Corte, no procede contra la indagatoria ordenada en un auto que decreta la ampliación de las sumarias, como ocurre en el caso del Auto de 27 de abril de 1993 dictado por la Juez Tercera del Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual ordena al funcionario de instrucción a cargo de las sumarias, tomar declaración indagatoria al licenciado Genarino Rosas Rosas, en la ampliación decretada, para que se complete la investigación.

Lo expuesto, reitera el Pleno de la Corte, es así por cuanto la supuesta orden de hacer, en todo caso, está dirigida al funcionario de instrucción, porque es a él a quien corresponde cumplir los puntos concretos y claros sobre que versa la ampliación, y no a la persona que se ordena tomar declaración indagatoria, por las razones que motivaran al juzgador a ordenar la ampliación, para completar la investigación.

Por ello, con base en las razones que anteceden, el Pleno de la Corte considera que debe confirmar la sentencia apelada.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 2 de junio de 1993, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, en el proceso de amparo constitucional propuesto por el licenciado GENARINO ROSAS ROSAS en contra de la Resolución judicial dictada por la Juez Tercero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DEVILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ROBERTO SANJUR PÉREZ EN CONTRA DEL JUZGADO SECCIONAL DE MENORES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial ingresó al Pleno de la Corte, en grado de apelación, la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por **ROBERTO SANJUR PÉREZ** en contra del Juzgado Seccional de Menores de la Provincia de Veraguas, la cual fue resuelta mediante fallo de 24 de junio de 1993, el que deniega el amparo presentado.

Con motivo del medio de impugnación anunciado por el licenciado IVÁN AGRAZAL, a través del telegrama que aparece a folios 58 del expediente, la Corte debe revisar la resolución expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, a fin de establecer si el recurso presentado justifica alguna modificación en cuanto al contenido y decisión adoptada por la sentencia de 24 de junio, mencionada.

De acuerdo con el libelo de la demanda presentada, la resolución N°024 de 15 de febrero de 1993, emitida por el Juzgado Seccional de Menores de la Provincia de Veraguas contentiva de una orden de hacer, violenta las disposiciones constitucionales distinguidas con los números 17, 18 y 32 en virtud de que se decidió una solicitud de pensión de alimentos pre-natal sin el debido cumplimiento de las garantías del debido proceso. En el informe presentado por la licenciada MARLENE MORALES DE PONCE, en su calidad de Juez Seccional de Menores de la Provincia de Veraguas, señaló que la parte demandada en todo el proceso tramitado en su despacho fue asistida por abogado y presentó distintos medios de impugnación, tanto el de reconsideración como el de apelación, al cual se le dio el trámite correspondiente convalidándose las distintas resoluciones mediante las notificaciones de los abogados que representaron a ROBERTO SANJUR en este caso.

El tribunal no sólo tomó en cuenta el informe de la Juez acusada, sino también los fundamentos de hecho y de derecho presentados por el amparista, arribando a la conclusión de que no emergen con claridad las violaciones al debido proceso que alega el licenciado AGRAZAL, en virtud de que no sólo se acredita la presencia de la defensa durante las distintas fases del proceso, sino que se incurre en el error de impugnar las resoluciones posteriores a la dictación de las órdenes de hacer o de no hacer, como es el caso de impugnar la resolución que niega una apelación sin haber agotado antes, ante el mismo tribunal la presentación oportuna de un recurso de hecho. Tal es la situación que recoge el expediente y sobre estos mismos puntos el Pleno se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que el amparo de garantías contra resoluciones judiciales debe ajustarse a las reglas previstas en el artículo 2606 del Código Judicial y por lo tanto sólo procederá cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos por la ley para la impugnación oportuna de dichas resoluciones, lo que no ha ocurrido en este caso al impugnarse la resolución N°024 de 15 de febrero de 1993 que se limita a rechazar la apelación interpuesta, sin que la parte afectada, convencida de que cabe el recurso de apelación, haya presentado el recurso de hecho con el que se agotarían los medios de impugnación.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de 24 de junio de 1993 expedido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en este caso.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.)CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR MARIO ABEL DEL CID GÓMEZ EN CONTRA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO.

VISTOS:

El licenciado DIDACIO IBARRA SÁNCHEZ, en representación del señor **MARIO ABEL DEL CID GÓMEZ**, mediante escrito dirigido a esta Corporación Judicial, calendado el 15 de junio del año que decurre, presentó amparo de garantías constitucionales en contra de las órdenes de hacer contenidas en los autos de 25 de mayo de 1993, expedidas por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante los cuales se admite a cuatro acusadores particulares para que a nombre del doctor **WINSTON SPADAFORA FRANCO**, promuevan acusación particular contra los distintos encausados que aparecen en el juicio penal que se sigue a los autores y partícipes en el homicidio del doctor **HUGO SPADAFORA FRANCO**.

Con el escrito contentivo de la acción de amparo se adjuntan 15 folios, de copias debidamente autenticadas, en las que aparece el escrito de formalización de la acusación particular propuesta por el doctor Winston Spadafora Franco contra Manuel Antonio Noriega y los cuatro autos, todos fechados el 25 de mayo de 1993, en virtud de los cuales se admite la acusación particular interpuesta por el doctor Spadafora Franco contra Manuel Antonio Noriega, Demetrio Rodríguez Gutiérrez, Julio César Miranda y Agustín Olmedo De Gracia; contra Luis Antonio Córdoba Morales, Mario Abel Del Cid Gómez y Jorge Antonio Villa Morales y contra Francisco Eliécer Rivera De Gracia y Adán Pittí Guerra.

Como quiera que el expediente se ha pasado a este Despacho para los efectos de su admisibilidad, es indispensable determinar si el libelo que contiene la presente acción de amparo de garantías constitucionales se adecua a las previsiones a que se refieren los artículos 2606 y 2610 del Código Judicial, que regulan los aspectos formales que deben reunir estas acciones de conformidad a su naturaleza. En el presente caso el abogado Ibarra Sánchez actúa mediante poder conferido por Mario Abel Del Cid Gómez, presentado ante el Juez Primero del Circuito de Chiriquí. La acción hace mención expresa de las cuatro órdenes impugnadas y señala el nombre del servidor público que impartió dichas órdenes. A través de 11 puntos relata los hechos en que se fundamenta la demanda y dentro de los mismos incorpora la cita de las normas constitucionales que estima infringidas.

Es notorio que en el enunciado del poder como en el texto del mismo, se menciona específicamente al licenciado Luis Mario Carrasco en su calidad de Magistrado Presidente de ese Tribunal, como la persona contra la cual se dirige la presente acción, sin embargo, en todos los autos de 25 de mayo de 1993, impugnados, aparece la Corporación Judicial completa firmando dichas resoluciones, pues no se trata de decisiones en Sala Unitaria. Por otra parte, se infringen los requisitos especiales que establece el artículo 2610 del Código Judicial cuando se omite plantear, por separado y con la debida precisión, las garantías fundamentales que se consideran violadas y el concepto en que lo han sido. En este caso, como se anotó antes, el accionante incluye estos requisitos dentro de los hechos décimo y décimo primero, lo cual es una impropiedad.

Por otro lado, al impugnar las resoluciones judiciales, el amparista debe tomar en cuenta las restricciones que establece el artículo 2606 del Código de Procedimiento, que exige que se hayan agotado todos los medios y trámites necesarios establecidos por la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate. En este caso, los autos fueron dictados el 25 de mayo, se notificaron en la primera semana de junio y desde el 6 de julio todos los sujetos procesales han participado en el desarrollo de la etapa plenaria, lo que demuestra la improcedencia de la acción de amparo de garantías constitucionales como mecanismo destinado a enervar resoluciones judiciales que no fueron impugnadas oportunamente y que han sido aceptadas tácitamente por las partes mediante gestiones posteriores en el proceso.

Finalmente, cabe señalar que el accionante pretende censurar cuatro autos de manera simultánea con una sola acción, resoluciones judiciales de las cuales, solo una de ellas pudiera afectar a su defendido, no así los tres autos restantes que se refieren a la acusación particular contra procesados quienes no le han conferido poder alguno para asumir su representación. La Corte en distintos fallos ha señalado que no hay legitimación activa contra órdenes de hacer o no hacer cuando no se ostenta poder legalmente conferido por el afectado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado Didacio Ibarra Sánchez en representación de MARIO ABEL DEL CID GÓMEZ.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.)FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Sub-Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO DOMINGO SANTIZO PÉREZ EN REPRESENTACIÓN DE LUIS E. ORTIZ EN CONTRA DEL GERENTE DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 21 de junio del año en curso, se dispuso en sala unitaria admitir la acción de amparo de garantías constitucionales promovida ante esta Sala por el Lcdo. DOMINGO SANTIZO PÉREZ en representación de LUIS E. ORTIZ, por considerar que en esta ocasión se habían subsanado los defectos formales advertidos en el fallo de 26 de abril de 1993, de esta Corporación, que inadmitió la demanda de amparo.

El sub-Gerente General de la Zona Libre de Colón, señor Gerardo E. Harris en respuesta al telegrama que se le cursó para que diera cumplimiento al informe que establece el artículo 2612 del Código Judicial, expresó lo siguiente:

> "La presente es en atención a su telegrama, fechado el 23 de junio y recibida en nuestro despacho a las 4:00 p.m., relacionado con el amparo de garantías constitucionales, propuesto por el Lic. Domingo Santizo en nombre y representación del Sr. Luis Ortiz, en contra de una supuesta orden verbal, dictada por nosotros en calidad de Gerente General de la Zona Libre de Colón.
>
> A continuación y dentro del término concedido procedemos a presentar informe acerca de los hechos, materia de este recurso, aunque hacemos la salvedad de que a la fecha no hemos recibido copia del mencionado amparo.
>
> Desde 1987 la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón, aprobó la Resolución 01-87, que regula el Transporte de Carga, dentro de la Zona Libre de Colón. Esta Resolución que había sido derogada, fue posteriormente restituida en su vigencia mediante Resolución de Junta Directiva de la Zona Libre de Colón N°06-92.
>
> Esta Resolución establece una Comisión de Transporte integrada por representantes de las siguientes entidades: Cooperativa de Transporte de Carga Serafín Niño R. L., Sindicato de Propietarios de Transporte de Carga, Asociación de Propietarios de Transporte de Carga de Colón, Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, el Director de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia, y el Representante de la Administración de la Zona Libre de Colón, quien la preside.
>
> Le corresponde a esta Comisión, estudiar y recomendar las solicitudes de pases vehiculares para el transporte de carga en esta área segregada.
>
> En reunión celebrada con posterioridad al paro de transporte que se verificó el año pasado y a efectos de cumplir con los compromisos contraídos por el Excelentísimo Señor Presidente con los gremios de transporte, se decidió suspender el otorgamiento de nuevos pases para vehículos de transporte hasta tanto se elaborara un nuevo Reglamento de Transporte de Carga.
>
> Posteriormente la Comisión de Transporte, acordó otorgar pases vehiculares solamente a aquellos vehículos de transporte que habitualmente hubiesen estado prestando el servicio en el área de la Zona Libre, indistintamente del gremio o corporación a la cual pertenecieran, y así se ha estado haciendo.
>
> El 15 de marzo de 1993 se recibió en el Depto. de Asesoría Legal de la Zona Libre de Colón, una solicitud de la Corporación de Empresarios de Transporte de Carga de Colón, para que se excluya a la Asociación de Transporte de Carga de Colón de la Comisión de Transporte. Dicha solicitud se elevó a la Junta Directiva de la Zona Libre, la cual tomando en cuenta de que existe una disputa a nivel de la dirigencia de esos gremios, decidió no tomar una decisión definitiva hasta tanto los gremios en disputa resuelvan sus problemas internos de dirigencia con la supervisión del Ministerio de Gobierno y Justicia.
>
> Estos son, en forma sucinta los hechos que pensamos pudieron motivar el amparo propuesto. Como verá no existe una orden de hacer o no hacer por parte de la gerencia de esta Institución, contra el Sr. Ortiz. Existe sí una decisión postergada respecto a una solicitud formulada por este señor a la Junta Directiva de la Zona Libre.
>
> Sin otro particular y confiados en haber contribuido a esclarecer los hechos, nos suscribimos reiterándole nuestros muestras de estima, consideración y respeto".

En el texto del libelo, la orden impugnada consiste en una orden de no hacer, de carácter verbal, que prohíbe la entrada al área de la Zona Libre de Colón a los miembros de la Corporación de Empresarios de Transporte de Carga de Colón y como normas constitucionales infringidas se anotan los artículos 17, 18, 19 y 60.

Con respecto a las dos primeras normas, el Pleno reitera la doctrina de la Corte en el sentido que tales artículos si bien aparecen en el capítulo correspondiente a las garantías individuales, por su naturaleza declarativa contienen enunciados programáticos, de alcance general, sin consagrar derechos específicos de titularidad personal, por tanto, al aducirlos en una acción de amparo de garantías constitucionales carecen de eficacia para definir o singularizar los derechos que se indican como conculcados con las medidas u órdenes adoptadas en contra del accionante.

Sobre la infracción del artículo 19 de la Carta Fundamental que prohíbe los fueros y privilegios fundados en factores étnicos, nacionalidad, sexo, clase social, religión o ideas políticas; del texto del informe suministrado por el Sub Gerente de la Zona Libre de Colón, se deduce que las restricciones vigentes sobre la libre circulación de vehículos de carga en esa área, emanan de la Resolución No.06-92 de la Junta Directiva de esa institución, que le confiere facultades a una Comisión de Transporte para que regule lo referente a esta materia. Se indica, además, que en esa comisión están representados cooperativas, corporaciones y asociaciones de transporte, de empresarios y propietarios de transporte de carga, al igual que los usuarios de Zona Libre. También se informa sobre una pugna entre los grupos que manejan el transporte de carga, hasta el extremo de que a través del Departamento Legal de la Zona Libre de Colón -tal como lo anota el Sub Gerente Harris en su nota- se ha recibido una solicitud de la empresa accionante para que se excluya de la Comisión de Transporte a la Asociación de Transporte de Carga de Colón y ello ha dado lugar a que no se tomen otras decisiones sobre autorización de pases de entrada a estos transportes hasta que se despejen los desacuerdos.

Lo anterior es demostrativo que la orden de no hacer impugnada a través de esta acción, no es la que genera la supuesta conculcación de las garantías constitucionales aducidas, ya que se trata del cumplimiento de una medida que no es del arbitrio del Gerente o sub gerente de la Zona Libre de Colón, sino de una Comisión de Transporte que si bien preside el Gerente de Zona libre, es un ente distinto y contra esa decisión cabrían otros remedios procesales.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Domingo Santizo Pérez en representación de LUIS E. ORTIZ contra la orden de no hacer verbal del Gerente de la Zona Libre de Colón.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO FIDEL VÁSQUEZ CEBALLOS EN REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL Y EN CONTRA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.
VISTOS:

El licenciado **FIDEL VÁSQUEZ CEBALLOS** actuando en representación de los Magistrados del Tribunal Electoral ha presentado acción de Amparo de Garantías Constitucionales en contra del señor Contralor General de la República, quien se negó a pagar la orden de compra N°2858 del 8 de marzo de 1993, y a refrendar y pagar la orden de compra N°2961 del 1° de abril de 1993 para la adquisición de tres automóviles para el Despacho Superior del Tribunal Electoral.

Acogida la acción de amparo, se solicitó el informe de actuación correspondiente al señor Contralor General de la República, el cual contestó en los siguientes términos:

> "En todo caso, por razón de lo dispuesto en la Ley N°17, de 30 de junio de 1993, por la cual se hicieron reformas al Código Electoral y que entró en vigencia a partir del 1° de julio de 1993 - al ser publicada en la Gaceta Oficial N°22,319, de 1° de julio de 1993, por razón de lo dispuesto en el artículo 69 de la citada Ley N°17 de 1993 -, se sustrajo de mi conocimiento y competencia lo relativo al pago de la cuenta, por un monto de B/.39,500.00, que accede a la orden de compra N°2858 y la participación de la Controlara General en la expedición de la Orden de Compra N°2961, por un valor de B/.21,500.00. En consecuencia, ya no le corresponde a este despacho el pago de la cuenta en cuestión ni el refrendo de la última Orden de Compra N°2961, ni el pago de la cuenta que corresponda a ella.
> ...
> La expedición de las órdenes de compra y el pago de las cuentas a las cuales se refiere el amparo, son por cuantías que no exceden de B/.50,000.00 y en virtud de lo dispuesto en la disposición transcrita, son negocios que a partir del 1° de julio de 1993, deben ser atendidos exclusivamente por el Tribunal Electoral, sin intervención de la Controlara General de la República.
>
> Con ocasión de lo anterior, en el día de ayer le remití al Dr. Eduardo Valdés E., Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, la Nota N°D.C. 1561-93, mediante la cual le devuelvo la documentación pertinente a estos asuntos. Con la presente le remito copia autenticada de la nota en cuestión".

Se colige de lo expuesto por parte del señor Contralor General de la República que no le corresponde a la Controlara General de la Nación refrendar y pagar las órdenes

de compra N°2858 de 8 de marzo de 1993 y 2961 de 1° de abril de 1993, en virtud de que al entrar en vigencia la Ley 17 de 1993, las órdenes de compra y cheques que expida el Tribunal Electoral, cuya cuantía no exceda de B/.50,000.00 sólo requieren la aprobación, mediante firma, de los funcionarios autorizados del propio Tribunal Electoral, situación que nos conduce a señalar que ha desaparecido el objeto litigioso del negocio, produciéndose el fenómeno de sustracción de materia, dado que sobre la pretensión sujeta a decisión por parte de este Tribunal no puede recaer pronunciamiento de mérito al devenir el proceso sin objeto.

Por las anteriores consideraciones, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado FIDEL VÁSQUEZ CEBALLOS en representación de los Magistrados del Tribunal Electoral.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA VERÓNICA GONZÁLEZ EN CONTRA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos R. Ayala Montero, actuando en virtud de poder especial que le fue conferido por María Verónica González, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden verbal de hacer de 15 de junio de 1993, proferida por el Ministro de Educación que consiste en la retención del cheque que corresponde a la primera quincena del mes de junio de 1993.

Por admitida la demanda de amparo, esta Superioridad observa que en el procedimiento administrativo de traslado, la funcionaria agotó la vía gubernativa. Tal afirmación se comprueba del informe de conducta rendido por el Ministro de Educación.

Mediante Nota DNAJ/284 de 10 de mayo de 1993 de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación se comunica a la afectada lo siguiente:

> "Tomando en consideración que ya hizo uso de todos los recursos al alcance y los cuales fueron fallados, le indicamos que debe presentarse al lugar de trabajo que establece el Resuelto No.205 del 9 de febrero de 1993".

Del análisis del expediente se desprende que la pretensión planteada debe instaurarse en la vía contencioso - administrativa y no mediante una acción de amparo de garantías fundamentales.

Sobre este particular, existe constante jurisprudencia del Pleno de la Corte, en la cual se indica que en los asuntos relacionados con el movimiento de personal dentro de la administración pública; esto es despidos, traslados, suspensiones temporales o definitivas de funcionarios, el mecanismo procesal idóneo para impugnar el acto es la **vía contencioso - administrativa de plena jurisdicción.**

Por las razones anteriores el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado Carlos R. Ayala Montero en representación de María Verónica González.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA EMMA OLIVEROS EN CONTRA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN. REPARTIDO EL 29 DE JUNIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES.PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS R. AYALA MONTERO**, interpuso amparo de garantías constitucionales en representación de la señora **EMMA OLIVEROS** en contra de la orden de hacer dictada por el Ministro de Educación a través del Resuelto N° 207 del 9 de febrero de 1993 mediante el cual se dispone trasladarla al Primer Ciclo Renacimiento, Provincia de Chiriquí.

El examen del libelo revela que la resolución impugnada Constituye un acto administrativo cuya revocatoria no es viable mediante la acción de amparo de garantías constitucionales, ya que ha sido doctrina jurisprudencial de esta Corporación de Justicia que tales actos deben ser impugnados a través del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción que conoce la Sala Tercera de esta Corte Suprema de Justicia.

Por consiguiente, al no haberse escogido la vía idónea de impugnación, procede declarar inadmisible la acción instaurada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado CARLOS R. AYALA MONTERO en representación de EMMA OLIVEROS.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA CLARA TENORIO LORENZO EN CONTRA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado CARLOS R. AYALA MONTERO en nombre y representación de la señora CLARA TENORIO LORENZO, presenta acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer proferida por el Ministro de Educación el día 15 de junio de 1993, mediante la cual se le retiene a su representada el cheque correspondiente a la primera quincena del mes de junio de 1993.

En cumplimiento de las ritualidades procesales inherentes a este recurso, se le solicitó al funcionario acusado que enviara la actuación o, en su defecto, rindiera el informe a que se refiere el artículo 2611 del Código Judicial. Consta a fojas 13 y 14 del expediente el informe rendido, el cual en su parte pertinente se lee así:

> "...
> Es necesario destacar que la funcionaria en mención, se le instruyó un expediente disciplinario que concluyó, con una decisión de traslado; contra esta decisión la parte afectada hizo uso de todos los Recursos que confiere la Ley, situación que se puede confirmar por medio de la Resolución 18 de 3 de mayo de 1993, que en su aspecto resolutiva dice lo siguiente:
>
> "Artículo Único: Mantener la decisión de traslado recaída en la persona de Clara Tenorio Lorenzo, cédula (sic)2-87-2650, contenida en el Resuelto 204 de 9 de febrero de 1993, que en su aspecto sustantivo dice:
>
> "Trasladar a Clara Tenorio Lorenzo, cédula 2-87-2650, Seguro Social 83-3318, posición 14951, Trabajadora Manual II, 9011-032, de la Escuela de Las Tablas, La Pintada, Coclé, al Primer Ciclo Cusapín, Bocas del Toro, a partir de la fecha de la ejecutoria de este Resuelto..."
>
> Cumplida la notificación de la orden de traslado de esa funcionaria, al Primer Ciclo Cusapín, Bocas del Toro, y habiendo agotado la vía gubernativa y culminado el mes de mayo, la señora Clara Tenorio Lorenzo, desatendió la decisión de Traslado del Ministro de Educación.
>
> Mediante el Oficio DNAJ/283 de 10 de junio de 1993, el Ministro de Educación le comunicó a la señora Clara Tenorio Lorenzo, lo siguiente:
>
> "Tomando en consideración que ya hizo uso de todos los recursos al alcance y los cuales fueron fallados, le indicamos que debe presentarse al lugar de trabajo que establece el Resuelto N°204 del 9 de febrero de 1993. De lo contrario, se procederá a declararse insubsistente el nombramiento por abandono del cargo."

De lo expresado anteriormente se puede expresar con suficiente claridad, que de la fecha de notificación de la Resolución N°18 de 3 de mayo de 1993, al 10 de junio de 1993, han transcurrido un número plural de días laborables, situación que a la luz del artículo 19 del Resuelto 1066 de 1970, se puede calificar como abandono del cargo; en consecuencia, procede declarar insubsistente el nombramiento de dicha funcionaria.

No obstante, el Ministerio de Educación, no ha procedido a solicitar la declaratoria de insubsistencia y en su lugar procedió a retener la entrega del cheque y el envío del mismo al nuevo lugar de trabajo, sin embargo al no presentarse la señora Clara Tenorio Lorenzo, al Primer Ciclo Cusapín, Bocas del Toro, el referido cheque fue devuelto a la Oficina de Pagos del Ministerio de Educación, lugar donde reposa en la actualidad."

Corresponde ahora, a esta Corporación resolver la presente acción, y a esta tarea se dedica, previas las posteriores consideraciones jurídicas.

Sostiene la parte demandante en este proceso sumario de amparo, que con la orden verbal dictada por el señor Ministro de Educación, el 15 de junio de 1993, consistente en la retención injustificada del cheque, así como también haber ordenado su traslado de la Provincia de Coclé a la Provincia de Bocas del Toro, ha incurrido el Ministro de Educación en violación del artículo 32 de la Constitución Nacional, al obviar el procedimiento de traslado que establece la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946 (Ley Orgánica de Educación). Por su parte, el Ministro de Educación, en el informe enviado, señala que a la señora CLARA TENORIO LORENZO se le instruyó un expediente disciplinario y que el mismo concluyó con una decisión de traslado, dictada el 3 de mayo de 1993. Contra dicha decisión la parte afectada hizo uso de todos los recursos que le confiere la ley.

Luego de un estudio minucioso del caso, esta alta Corporación considera que se dieron todas las garantías procesales. Es más, la demandante al agotar todos los trámites administrativos podía recurrir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, si no estaba conforme con las resoluciones recurridas.

Todo lo anterior nos hace arribar a la conclusión que en el proceder del Ministro de Educación no se ha infringido el artículo 32 de la Constitución Política Nacional, invocado por el apoderado judicial de la demandante, ya que en todas las instancias la afectada contó con las garantías que consagra nuestra Carta Magna en cuanto al debido proceso.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado CARLOS AYALA MONTERO en representación de CLARA TENORIO LORENZO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LCDO. CARLOS A. JAIME DE FREITAS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR DIEGO ARTURO DE SEDAS Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER DICTADA POR LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Carlos A. Jaime de Freitas, actuando en representación del señor DIEGO ARTURO DE SEDAS, ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales contra la señora Juez del Tribunal Tutelar de Menores, con el objeto de dejar sin efectos las órdenes contenidas en la resolución S/N S.C. de 9 de junio de 1993 emitida por dicha juez dentro de una querella de desacato interpuesta contra la señora Arleene Fábrega Conte por el incumplimiento de un reglamento de visitas de la menor Ana Gabrielle de Sedas Fábrega. En dicha resolución se resuelve dejar sin efecto el Reglamento de visitas establecido mediante resolución No. 108 S.C. de 5 de febrero de 1993 y se establece un nuevo reglamento de visitas para el señor De Sedas, se le advierte a la señora Fábrega que de incurrir en desacato será sancionada y se ordena la práctica de una evaluación psiquiátrica al señor Diego Arturo De Sedas y a la señora Arleene Fábrega por parte del departamento de Paido-Psiquiatría de la Caja de Seguro Social.

La parte demandante señala como infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional. El artículo 32 de la Constitución Nacional establece la garantía constitucional del debido proceso que es una institución instrumental, en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente predeterminado por la ley, independiente e imparcial de pronunciar respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales materiales y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

Alega la parte demandante que la resolución impugnada viola la garantía fundamental contenida en el artículo 32 de la Constitución Nacional ya que la resolución impugnada deja sin efecto la resolución No. 108 S.C. del 15 de febrero de 1993 cuando la misma se encuentra en grado de apelación ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, por lo cual, alega la parte actora, no puede la Juez reformarla o dejarla sin efecto en un expediente de querella de desacato interpuesta contra la señora Fábrega, que es quien precisamente incumple dicha resolución. Agrega la parte actora que la Juez de menores debió fallar si existía o no el desacato alegado, sin embargo esta última se limita a ignorar dicha situación y a considerar otros aspectos no solicitados en la querella antes mencionada. Finalmente, agrega el demandante, se le deniega justicia al señor De Sedas quien lleva dos años tramitando un reglamento de visitas para poder relacionarse con su hija, lo cual hasta la fecha no ha podido llevarse a cabo. Más aún, agrega, con la resolución impugnada se vuelve a noviembre de 1990 al decretarse pruebas que ya se practicaron. Por otro lado, el nuevo régimen de visita se estableció sin audiencia del señor De Sedas estableciendo como uno de los días de visita el viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., horas estas que el señor De Sedas se encuentra laborando lo cual causaría que fuera entonces el señor De Sedas quien incurra en desacato. A juicio de la parte actora se ha incurrido en extra petita, abuso de autoridad y no se ha oído a la parte afectada en la audiencia dejándola en estado de indefensión.

La señora Juez del Tribunal Tutelar de Menores contestó el informe de conducta solicitado mediante Nota S/N fechada el 17 de junio de 1993 señalando que la decisión del Tribunal se fundamentó en la manifestación de la señora Fábrega de falta de transporte para trasladarse a las instalaciones del Tribunal en Tocumen, en que el Tribunal Tutelar considera que al no haberse dado en mucho tiempo las relación entre la menor y su padre la misma no debe darse de una manera amplia por no estar la menor acostumbrada a ello, por que el Tribunal detectó desajustes en las relaciones entre el señor De Sedas y la señora Fábrega por lo cual considera este Tribunal que ambos deben recibir ayuda profesional, por las observaciones que hace el psiquiatra del Tribunal de que en dicha familia se observa a dos menores quienes a edad gestante sufrieron maltrato psicológico (rechazo paterno) por lo que el Tribunal considera necesaria la intervención de psiquiatría forense y la reforma del reglamento de visitas. Por último, señala esta funcionaria, no pudo remitir a esta Corporación el expediente principal por encontrarse este último en el Primer Tribunal Superior de Justicia, en grado de apelación.

Esta Corporación considera que, efectivamente, se ha producido la violación al debido proceso alegada por la parte actora por cuanto resulta claro que la resolución impugnada, es decir, la Resolución No. S. C. de 9 de junio de 1993 dejó sin efecto la Resolución No. 108 S. C. de 5 de febrero de 1993 dentro de una querella por desacato. Ello es así pues se observa que lo que motivó la expedición de la resolución s/n de 9 de junio de 1993 es una querella por desacato por lo que mal podía el Tribunal Tutelar de Menores decidir otro asunto que no era comtemplado, ni objeto de la querella. Obviamente, ese proceder en opinión del Pleno, viola la garantía del debido proceso legal al no poder el recurrente hacer valer sus derechos frente a la modificación del régimen de visitas pendiente de apelación.

En el presente negocio esta Corporación considera que el Tribunal Tutelar de Menores infringió las normas procesales antes aludidas y en este sentido, advierte la violación de la norma constitucional citada.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por el Lcdo. Carlos A. Jaime de Freitas en representación del señor Diego Arturo De Sedas y en contra de la orden de hacer dictada por la Juez del Tribunal Tutelar de Menores y REVOCA la orden dictada por dicha funcionaria mediante resolución S/N de 9 de junio de 1993 que deja sin efecto la Resolución No. 108 S. C. de 5 de febrero de 1993 expedida por ese mismo Tribunal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS PROPUESTO POR CHAVARRÍA, RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTA YOLANDA ESCALA VÁSQUEZ EN CONTRA DE LA DELEGADA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL MINISTERIO DE SALUD. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La arquitecta YOLANDA ESCALA VÁSQUEZ, mediante poder especial otorgado a la firma forense CHAVARRÍA, RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ, ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales en contra de la ordenes "contenidas en las notas 076-DC-D-CIB de 19 de marzo de 1993 y 121 -DC-D-CIB-93 de 23 de abril de 1993, emitidas por CAROLINA I. BRANDAO,en su condición de DELEGADA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA en el MINISTERIO DE SALUD y en la cual se condiciona el pago de los honorarios de nuestra representada al registro y firma de la hora de entrada y salida al sitio donde presta sus servicios contractuales.

"Por cumplidas las reglas de reparto el Pleno de la Corte en primer lugar debe decidir, si admite o no la demanda de Amparo propuesta a tenor de lo dispuesto por los artículos 2610 y 2511 del Código Judicial. Veamos:

El examen de la demanda de amparo revela, que si bien, en general, dicho libelo cumple con los requisitos comunes a todas las demandas, así como también con las exigencias contempladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del precitado artículo 2610 ibídem, sin embargo, en cuanto al funcionario público demandado, cabe señalar lo siguiente:

EL artículo 2607 del Código de Procedimiento Civil en cita, al fijar la competencia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere el artículo 50 de la Constitución Política, establece que son competentes:

"1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República, o en dos o más provincias; ..."

En el caso de la demanda de Amparo en estudio, salta a la vista que el funcionario que aparece como demandado es la "Delegada del Contralor General de la República en el Ministerio de Salud", y no, así, el Contralor General de la República quien, en todo caso, es la autoridad o funcionario con mando y jurisdicción en toda la República de conformidad con la Ley.

Por otra parte, según los documentos que se acompañan con la demanda de Amparo, los cuales aparecen a fojas 12, 14 y 15 a 19, todo indica que la orden que se pretende impugnar mediante la acción de Amparo ha sido expedida por el señor Contralor General de la República, y no por la persona que funge como su delegada en el Ministerio de Salud, razón por la cual la demanda, en ese caso, debió enderezarse contra el Contralor

General de la República, para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia pueda asumir la competencia conforme a la Ley.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la Arquitecta YOLANDA ESCALA VÁSQUEZ en contra de la "DELEGADA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA" en el MINISTERIO DE SALUD", señora CAROLINA I. BRANDAO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA SEÑORA KENIA ELIZABETH CÁRDENAS APOLAYO EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DG-1187-93 DE 12 DE JULIO DE 1993, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IRHE INGENIERO GONZALO CÓRDOBA C. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada **KENIA ELIZABETH CÁRDENAS APOLAYO**, presentó acción de amparo de garantías constitucionales, contra la orden de no hacer proferida por el DIRECTOR GENERAL DEL IRHE, identificada como resolución No DG-1187-93, de 12 de julio de 1993, por medio de la cual mantiene la decisión de rechazar la solicitud de la amparista de acogerse al plan de retiro voluntario, y de rechazar por improcedente el recurso de apelación en este caso.

El Pleno de la Corte debe examinar en primer lugar si la acción interpuesta cumple con las exigencias de los artículos 2610 y 2611 del Código Judicial.

Considera la Sala plenaria de la Corte en funciones constitucionales, que el acto recurrido debe ser impugnado por la vía contencioso administrativa, que es el proceso natural en que las partes cuentan con todos los medios de defensa para hacer valer sus derechos y no a través de una acción de amparo, que es un proceso sumario en que las partes no pueden aportar pruebas ni cuentan, por la naturaleza sumaria del proceso, de formas amplias de defensa, como requiere el caso bajo examen, que también requiere la intervención del Procurador de la Administración.

Consta en autos que a la amparista no se le admitió el recurso de apelación en subsidio, lo que de acuerdo con el artículo 36 numeral 2 de la ley 135 de 1943, produce el agotamiento de la vía gubernativa. El mencionado numeral 2 del Artículo 36, dice así: Se considerará agotada la vía gubernativa: 2. Cuando no se admita al interesado el escrito en que interponga cualesquiera de los recursos señalados en el artículo 33.

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE LA ACCION DE AMPARO propuesta por la licenciada KENIA ELIZABETH CÁRDENAS APOLAYO, en contra de la resolución No DG-1187-93 dictada por el Director General del IRHE.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LCDO. FIDEL VÁSQUEZ CEBALLOS EN REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL Y EN CONTRA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Fidel Vásquez Ceballos, en representación del Tribunal Electoral, ha propuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales en contra del señor Contralor General de la República, quien se negó a incluir en la planilla el pago de los salarios y honorarios correspondientes a cuatro funcionarios de dicho Tribunal.

Acogida la acción de amparo, se le solicitó informe correspondiente al Contralor General de la República, el cual contestó, en la Nota No. 352-DC de 7 de julio de 1993 informando que mediante Nota No. D.C. 1561-93 de 6 de julio de 1993 se le comunicó al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral que dejara sin efecto la orden de no hacer objeto de la presente acción de amparo. En dicha nota, la cual aparece visible a foja 37 del expediente, se señala claramente que el Señor Contralor General de la República ha dado instrucciones al auditor de la Contraloría General en el Tribunal Electoral para que proceda de inmediato a hacer efectivos la inclusión en la planilla respectiva.

Se colige de lo expuesto por parte del Contralor General de la República, que el nombramiento de la señorita Rita Moreno Pretto y los contratos por servicios profesionales de los señores Dimas Marcial Lombardo Rodaniche, Néstor Julio Justiniani Méndez y José Del Carmen Moreno Martínez ya fueron incluidos en planilla, situación que nos conduce a señalar que ha desaparecido el objeto litigioso, por lo que no tiene sentido seguir con este proceso, por haberse producido el fenómeno de Sustracción de Materia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el Licenciado Fidel Vásquez Ceballos.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. RICARDO LACHMAN VARELA EN REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES LUIS MARÍA OSTIZ Y JOSÉ ANTONIO OSTIZ EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los señores Luis María Ostiz y José Antonio Ostiz han promovido, por intermedio de su apoderado judicial especial el Licdo. Ricardo Lachman Varela, proceso de amparo de garantías constitucionales contra el juez del Tribunal Marítimo de la República de Panamá.

En la demanda se pide a la Corte que revoque la orden contenida en el auto de 7 de julio de 1993 dictado por el funcionario demandado y mediante el cual no se admite la postura efectuada en remate por los demandantes en este proceso.

Observa el PLENO que a fojas 16 y 17 del expediente obra escrito mediante el cual el Licdo. Ricardo Lachman V. presenta recurso de reconsideración contra la decisión de no adjudicar a los demandantes la motonave que se remata por lo que es evidente que existe un recurso pendiente sobre el tema que se debate en la demanda. Por esta razón estima la Corte que no se han agotado los presupuestos ordinarios necesarios para que pueda ser admitida una demanda de amparo de garantías constitucionales contra una resolución judicial según lo dispuesto en el artículo 2606 del Código Judicial.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentado por el Licdo. Ricardo Lachman Varela en representación de los señores Luis María Ostiz y José Antonio Ostiz contra el Juez del Tribunal Marítimo de la República de Panamá.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ LUTTRELL EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ANTONIO GONZÁLEZ Q., Y EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, ENCARGADO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado José Luttrell, actuando en representación del Señor ANTONIO GONZÁLEZ Q., ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución No. 581 de 1 de junio de 1993, dictada por el Procurador General de la Nación, Encargado, por medio de la cual se declara insubsistente el nombramiento del Licenciado ANTONIO GONZÁLEZ QUINTERO, del cargo de Fiscal Segundo Delegado de la Procuraduría General de la Nación a partir del 1 de junio de 1993.

Considera el amparista que dicha orden viola los artículos 32, 208 y 220 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Para resolver acerca de la admisibilidad de la demanda de amparo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia pasa a examinarla.

La parte actora cumplió con los requisitos comunes de toda demanda, y los requisitos de la demanda de amparo de garantías constitucionales señalados en el artículo 2610 del Código Judicial, no obstante el objeto de la presente acción es la

revocación de una orden por medio de la cual se destituye a un funcionario público, o sea, de un **acto de naturaleza administrativa**, cuya legalidad debe dilucidarse por la vía gubernativa y contencioso administrativa.

El Pleno de la Corte ha expresado en reiteradas ocasiones que la legalidad de los actos administrativos debe ventilarse por la vía contencioso administrativa, y que son manifiestamente improcedentes, de conformidad con el artículo 2611 del Código Judicial, las demandas de amparo mediante las cuales se pretende revocar actos administrativos, por lo que la presente acción de amparo es manifiestamente improcedente. (Ver Resolución de 2 de julio de 1992, dictada en el amparo propuesto por el Licenciado Lucas Antonio Olmos Vargas, en representación de Juan Olmedo Sánchez Santos, contra la acción de personal proferida por el Director General del INRENARE; y resolución de 17 de febrero de 1993, por medio de la cual se resolvió el amparo propuesto por la firma forense Guerra y Guerra, en representación de Raúl Rosales Romero, contra una orden de hacer dictada por el señor Procurador General de la Nación).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licenciado José Luttrell en representación del señor ANTONIO GONZÁLEZ Q., contra la resolución No. 581 de 1 de junio de 1993, proferida por el Procurador General de la Nación, Encargado.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ECUATORIANA DE AVIACIÓN, S. A. Y EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

EMPRESA ECUATORIANA DE AVIACIÓN, S. A. apeló en contra de la sentencia dictada el 23 de junio de 1993 por el Primer Tribunal Superior de Justicia que deniega la acción de amparo de garantías constitucionales que propuso en contra del Juez Primero de lo Civil. En su alegación manifiesta "... que el auto de secuestro dictado por el señor Juez Primero de lo Civil de Panamá, de fecha 2 de junio de 1993 viola los artículos 32, 18 y 44 de la Constitución; debido a que el Código Judicial, y específicamente los artículos 1027, 1028 y 1157 al autorizar efectuar un secuestro sin fianza con una sentencia favorable de segunda instancia no incluye a una sentencia abstracta, porque si ello fuere así, el legislador lo hubiera autorizado en el artículo 983 del Código Judicial que está dentro del Capítulo II del Título VIII del Libro Segundo que se refiere a la "Liquidación de Condena en Abstracto".

"Y en vista de que el Secuestro sin fianza con una condena en Abstracto no está autorizada por nuestra legislación, el auto de secuestro decretado por el Señor Juez es arbitrario y viola las garantías establecidas por la Constitución Nacional a favor de una empresa, y por extensión, de quien no es parte en el proceso ni ha sido vencida en juicio como lo son las Agencias de Viajes".

Como puede apreciarse, sostiene el apelante que la actuación del juzgador de primera instancia, al librar un auto de secuestro sin exigir la caución, constituye violación del debido proceso y, como consecuencia, se viola la garantía consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política de la República.

Por su lado la sentencia que es materia de censura concluye que no se lesiona ninguna garantía constitucional, que no se da indefensión para la parte que impugna la decisión del juzgador y que, al dictarse el auto por parte del Juez Primero Civil, se hace legítimamente y conforme a su facultad de administrar justicia. Para llegar a esta conclusión, el tribunal señala:

> "De modo que, intentando una síntesis en este piélago de argumentaciones tergiversadoras de una verdadera relación procesal, se tendría que el Amparo de Garantías interpuesto se fundamenta en los supuestos hechos de que se ha intentado un secuestro sin haberse garantizado la caución de rigor, como puede entenderse de los razonamientos del accionante. Con bastante dificultad esto se puede colegir del contenido de los HECHOS, SÉPTIMO y DÉCIMO, que hacen énfasis en este aspecto. Pues los otros Hechos señalados en el escrito de Amparo dibujan situaciones que no pueden ni deben dilucidarse por medio de esta acción extraordinaria o excepcional, sino por incidentes: como sería si se ha determinado o no una suma líquida respecto al lucro cesante que debe resarcir la demanda a la demandante, "al no poder reemplazar oportunamente la mercadería", y que deberá liquidarse conforme al trámite que señala el Art.983 del C.J., respecto del elemento probatorio que se pretende y las utilidades reales que hubiere podido derivar la demandante, tal cual lo señala la Sentencia del Primer Tribunal Superior, de fecha 30 de abril de 1991.
>
> De los hechos Séptimo y Décimo, en concordancia con la norma constitucional señalada como el Art. 32, respecto del principio del debido proceso, que parece ser la espina dorsal de esta acción, es que este Tribunal de Amparo debe pronunciarse, y no precisamente siguiente la interpretación a que subsume el amparista el contenido y alcance del

Art.1157 del Código Judicial, que es muy particular si se relaciona, como ha sido relacionada, con los mandatos de los arts.1027 y 1028 del C.J. Esto es así, por cuanto que, de la interpretación literal que se hace del artículo precitado (1157 del C.J.) bien puede advertirse que el mismo en ningún momento puede extenderse a que la condena sea líquida o no haya sido determinada, sino que plantea la situación jurídica de que "el demandante favorecido por una sentencia en segunda instancia, que condena al demandado, podrá obtener un secuestro o cualquier otra medida cautelar que reconozca la ley, sin necesidad de fianza". En todo caso la interpretación que hizo el Juez de instancia debe ventilarse dentro del proceso y no en una acción de amparo.

Esta es la situación o eventualidad procesal que surge diáfana, si no se hacen tergiversaciones e interpretaciones antojadizas, como se ha querido plasmar con este Amparo. Y si ello es así, como en efecto lo es, deben desecharse todos los razonamientos vertidos en los hechos que tratan de informar las pretensiones del amparista. De manera que, si además de que el Art.18 de la Constitución es programático y de que el Art.44 de la misma excerta invocado, no tiene sustentación jurídica frente a la realidad fáctica de lo ocurrido en el juicio principal, mucho menos tiene relevancia su invocación en esta acción de Amparo."

El Pleno, no obstante participar de los argumentos esgrimidos por el Primer Tribunal Superior de Justicia, considera que el amparo se admitió en violación de lo señalado por el artículo 2606 del Código Judicial. En dicha disposición se establece expresamente que contra las resoluciones judiciales es posible la acción extraordinaria de amparo sujeta a que se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para su impugnación.

En el caso presente, el Juzgado de Circuito ordenó una cautelación contra la cual cabe medios de impugnación. El artículo 1116 establece que son apelables los autos que decreten medidas cautelares. Si bien la medida cautelar se tramita sin audiencia del demandado, ello en manera alguna implica que contra esa medida no puede recurrir esa parte; es más, las resoluciones que el Tribunal Superior de Justicia dicte sobre oposiciones o levantamientos o exclusiones en procedimientos cautelares, pueden ser objetos de recursos de casación.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 23 de junio de 1993 y DECLARA NO VIABLE el amparo de garantías constitucionales promovido por EMPRESA ECUATORIANA DE AVIACIÓN, S. A. en contra de la orden de hacer contenida en el auto de 2 de junio de 1993 dictada por el Juez Primero de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ROBERTO KOURUKLIS I. EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA HILDA YOLANDA DE HERNÁNDEZ, ADMINISTRADORA JUDICIAL DE LA EMPRESA SNACK BAR TOCUMEN, S. A. EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado **ALBERTO KOURUKLIS IVALDY**, actuando en nombre y representación de la señora **HILDA YOLANDA DE HERNÁNDEZ**, administradora judicial de la empresa SNACK BAR TOCUMEN S. A. y de acuerdo con poder legalmente otorgado, ha presentado ante esta Corporación Acción de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer fechada 23 de junio de 1993, que fue dictada por el Director General de Aeronáutica Civil, Zósimo Guardia. La orden impugnada ordena el desalojo de la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A. del local que ocupa en la Zona Libre del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El Licenciado Kouruklis fundamenta su demanda en los siguientes hechos:

"**PRIMERO**: La señora HILDA YOLANDA DE HERNÁNDEZ se constituyó en administradora judicial de un secuestro de bienes y administración de la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A., el cual se practicó el día viernes 25 de junio de 1993 y fue promovido por los trabajadores de la empresa.

SEGUNDO: La medida cautelar fue promovida debido a que la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S.A, había perdido la Licitación Pública en la cual participó para optar por la concesión para explotación del servicio de Restaurante, Bar y Cafetería en la Zona Libre del Aeropuerto Internacional de Tocumen, dado que dicho hecho constituía un inminente peligro de clausura de la empresa y la posibilidad de que los bienes fuesen traspasados, enajenados, disipados, ocultados, etc.

TERCERO: El día 5 de marzo de 1993, se adjudicó a la empresa MAPISA la concesión y según la Dirección de Aeronáutica Civil, se le comunicó a la empresa perdedora que tenían 15 días para el desalojo del local. Además, dicha Dirección comunicó un segundo plazo para el desalojo que vencía el

día 4 de junio de 1993 y finalmente se estableció el día 5 de julio de 1993.

CUARTO: El día lunes 5 de julio de 1993, un representante de la administración del aeropuerto de Tocumen se acercó el local de SNACK BAR TOCUMEN, S. A. y le manifestó verbalmente a mi representada que tenía órdenes expresas del Director de Aeronáutica Civil de desalojar el local por intermedio de un Capitán del Aeropuerto.

QUINTO: El secuestro laboral hizo variar el estatus de la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A. en el sentido que existe una nueva administración a la cual no se le ha notificado formalmente el desalojo; ni está enterada de ningún tipo de notificación del desalojo, aunado al hecho de que hasta el momento no se le ha notificado a mi representada ninguna demanda de lanzamiento que conlleve a que se dicte una resolución que ordene el mismo, constituye una abierta violación al Debido Proceso".

El demandante señala como normas constitucionales infringidas, los artículos 32, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Admitido el amparo, se corrió traslado a la parte demandada para que nos remitiera un informe de los hechos dentro del término que establece el artículo 2612 del Código Judicial.

El Licenciado Bernardo Díaz de Icaza, Director General Encargado de Aeronáutica Civil, respondió a nuestra solicitud, mediante Nota N°298-AJ-SDGADM-DAC de 8 de julio de 1993, mediante informe explicativo de los hechos, que resumimos a continuación:

1- El 22 de septiembre de 1982, la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A. suscribió contrato N°187/82 con la Dirección de Aeronáutica Civil sobre un local en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

2- El 8 de marzo de 1993, la Dirección de Aeronáutica Civil realizó Licitación Pública N°010-92/DAC para otorgar en concesión comercial el local N°109, que estaba ocupado por la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A. En dicha licitación participaron MAPISA, S. A., SNACK BAR TOCUMEN, S. A. y otros.

3- Mediante Resolución N°126-AJ-DG-DAC de 11 de mayo de 1993 se otorgó definitivamente la Licitación Pública N°010-92/DAC a la empresa MAPISA, S. A.

4- Aeronáutica Civil le comunicó al representante legal de la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A., mediante Nota N°0.217/93/DF-OC-DAC de 31 de mayo de 1993 que debe desalojar que ocupa en un término de quince días calendarios.

5- El 23 de junio de 1993, mediante Nota N°00.46/93/DG/DF/OC/DAC de la Dirección General de Aeronáutica Civil dirigida al Capitán Jorge Rodríguez, Administrador del Aeropuerto Internacional de Tocumen en la que se le señala que "le comunique a la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A. que deben desalojar el local que ocupan en la zonita libre del Aeropuerto Internacional de Tocumen a más tardar el día 5 de julio de este año".

6- El funcionario demandado alega "... que la Dirección General de Aeronáutica Civil ha procedido a solicitar el desalojo del local N°109 ocupado por la empresa SNACK BAR TOCUMEN, en virtud de lo establecido en el numeral 7 del Capítulo III del pliego de cargos de la licitación pública N°010-92. Pliego de cargo al cual quedo (sic) sometido la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A. al momento de participar el acto de licitación pública N°010-92. Así como por ser el concesionario que ocupaba el local N°109 al momento de efectuar la Licitación Pública 010-92. De igual forma por lo preceptuado en el Artículo 32 del Decreto 33 de 1985".

Después de haber analizado las consideraciones de ambas partes, procedemos al análisis del amparo en cuestión.

Es prudente señalar que el local N°109, localizado en la Zona Libre del Aeropuerto Internacional de Tocumen, es de propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por consiguiente, el secuestro decretado por la Junta de Conciliación y Decisión número seis sobre los bienes y la administración de la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A., no puede recaer sobre dicho local, porque no le pertenece a esta empresa.

También debemos aclarar que la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A., al participar de la Licitación Pública N°010-92, de Aeronáutica Civil, quedó sometida a lo establecido en el pliego de cargos de este acto. El mismo señala en el numeral 7 del Capítulo III, lo siguiente:

"Participación de Concesionarios actuales: Las empresas que actualmente gocen de un local o área ubicada dentro del Aeropuerto Internacional de Tocumen, o cualquiera de las áreas objeto de este acto público, desalojarán el local comercial, bodegas y oficinas, a más tardar en quince (15) días, después de su adjudicación definitiva en caso de no ser ellos los favorecidos en el acto público de concurso de precios".

Esto significa que, 15 días después del 11 de mayo de 1993, fecha en que se expidió la Resolución N°126-AJ-DG-DAC, mediante la cual se adjudicó en forma definitiva el local N°109 a la empresa MAPISA, S.A, la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A. debía desalojar el mencionado local.

Consecuentemente, la señora Hilda Yolanda Hernández, en su calidad de administradora judicial de la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A., debió haber cumplido con lo que la empresa había convenido. No era necesaria notificar formalmente a la señora de Hernández, porque ella no es la representante legal de la compañía ni, como ya señalamos anteriormente, posee derecho alguno sobre el local N°109.

Igualmente, cabe señalar lo establecido en el artículo 32 del Decreto N°33 de 3 de mayo de 1985, por medio del cual se reglamenta el Capítulo IV del Título I del Libro

I del Código Fiscal y que se refiere a licitación pública, concurso de precios, solicitud de precios y los respectivos contratos con el Estado.

> "ARTICULO 32: Las personas que se consideren agraviadas con la decisión final podrán interponer recurso de reconsideración ante el funcionario o corporación administrativa que expidió la resolución o el de apelación para ante el superior, o ambos, entendiéndose que los mismos serán en el efecto devolutivo. De uno y otro recurso, o de ambos, podrá hacerse uso dentro del término de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la expresada resolución.
>
> Cuando se hubiere agotado la vía gubernamental, si así lo considera el agraviado, podrá hacer uso de la acción de nulidad ante la sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia".

Queda claro entonces, que de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, la empresa SNACK BAR TOCUMEN, S. A., pudo haber recurrido en contra de la resolución que le otorgó en forma definitiva a MAPISA, S. A., el local N°109.

Como no lo hizo, se entiende que aceptó la decisión tomada dentro de la licitación pública y consecuentemente debió cumplir con la cláusula del mismo, incluyendo lo referente al desalojo.

En cuanto a las normas constitucionales que el amparista considera que han sido violadas, se encuentran los artículo 32, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

El artículo 32 de la Constitución Nacional contiene el principio del debido proceso. Cuando dentro de un amparo de garantías constitucionales se cita el artículo 32, se supone la existencia de un proceso en cuya tramitación se incurrió en omisiones o vicios que produjeron el desconocimiento de garantías constitucionales.

En el caso que nos ocupa, el amparista no ha hecho alusión a que se haya realizado proceso alguno dentro de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Lo que argumenta es que debió haberse utilizado el procedimiento correspondiente en caso de Desahucio y Lanzamiento, contemplado en los artículos 1385 a 1404 del Código Judicial.

Concluimos que el procedimiento de lanzamiento, aplicable en los casos de arrendamientos comunes, no corresponde en este caso, ya que estamos en presencia de un contrato de concesión comercial de un local que pertenece a la Dirección General de Aeronáutica Civil y que fue otorgado mediante licitación pública. No puede alegarse entonces, violación del principio del debido proceso.

Las otras dos normas que el amparista considera infringidas son los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. La Corte en reiteradas ocasiones ha señalado que estas son normas de carácter programático que no establecen garantías fundamentales; por lo cual no deben citarse aisladamente.

Como conclusión de todo lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema determina que el presente amparo de garantías constitucionales no resulta viable porque los artículos 17 y 18 constituyen normas programáticas y el artículo 32 que contempla el debido proceso, no se considera violado, porque del texto de la demanda no se desprende la transgresión de garantías procesales dentro de un determinado juicio o procedimiento administrativo.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la presente acción de amparo de garantías constitucionales.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR GERARDINO CEDEÑO CONTRA EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO CIVIL DE COLON, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Primer Tribunal Superior de Justicia, por medio de resolución de 15 de junio de 1993, no admitió la demanda de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el señor Gerardino Cedeño contra las órdenes de hacer expedidas por el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Civil, contenidas en tres (3) actos diferentes; el primero es la resolución de 14 de mayo de 1993, por la cual se revoca la resolución de 22 de enero de 1992, emitida por el propio juez, en el proceso ordinario que Gerardino Cedeño le sigue a la Compañía Interamericana de Seguros, S. A., Rosendo Toribio Santana y/o Tagarópulos, S. A.; el segundo es la resolución, también de fecha 14 de mayo de 1993, por medio de la cual se dispone devolver a su consignante el certificado de Garantía No. 05179 de 27 de febrero de 1992; y el último es la diligencia de entrega del Certificado de Garantía No. 05179 de 27 de febrero de 1992, por la suma de B/.284.297.66.

El apoderado judicial del señor GERARDINO CEDEÑO GONZÁLEZ ha interpuesto, ante esta Corporación de Justicia, recurso de apelación contra tal decisión. Por tanto, el

Pleno de la Corte Suprema procede a resolver la alzada, previas las siguientes consideraciones.

En la resolución de primera instancia el Primer Tribunal de Justicia fundamenta su decisión en las siguientes razones:

1. El amparista ataca por medio de la Acción de amparo de garantía constitucionales las órdenes contenidas en tres actos diferentes, y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 50 de la Constitución Nacional y 2610 del Código Judicial, mediante la acción de amparo de garantías se puede impugnar una sola orden y no una acumulación de órdenes como se pretende en este caso.

2. Contra la primera de las resoluciones que se ataca, mediante esta acción, no se interpusieron los recursos ordinarios correspondientes.

3. Las órdenes de hacer que se impugna, contenidas en las resoluciones emitidas por el Juez Primero del Circuito Civil de Colón, fueron dictadas en cumplimiento de decisión de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual no es válido imputarle al funcionario demandado la expedición de los actos demandados.

En su escrito de apelación el amparista sostiene, en lo medular, que el Juez de Colón en vez de cumplir con lo establecido en la sentencia de 29 de diciembre de 1992, de la Corte Suprema, que resolvió en grado de apelación amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la Compañía Interamericana de Seguros, S. A. contra el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Civil, lo que hizo fue pretermitir el proceso y adoptar medidas no contempladas en el citado fallo.

Para resolver la alzada, el Pleno de esta Corporación, en primer lugar toma en consideración que, como bien lo señala la resolución impugnada, el amparista en el libelo de la demanda (fs. 2-3) pretende atacar a través de una acción de amparo distintas órdenes de hacer contenidas en tres (3) actos o resoluciones judiciales, lo cual resulta improcedente de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 50 de la Constitución Nacional establece que "Toda persona contra la cual se expida o ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona". El artículo 2606 de Código Judicial, al desarrollar esa norma constitucional se refiere también a una orden, por lo que debe interpretarse que las órdenes violatorias de garantías constitucionales contenidas en un acto o resolución pueden ser impugnadas mediante una acción de amparo y no procede impugnar mediante una acción de amparo varias órdenes emitidas en un número plural de actos o resoluciones. La acción de amparo se rige por normas contenidas en el Título III del Libro IV del Código Judicial en las cuales no se contempla la acumulación de acciones.

En lo que se refiere a la orden de hacer, contenida en la Resolución de 14 de mayo de 1993, por la cual se revoca la resolución de 22 de enero de 1992, dictadas ambas por el Juez Primero del Circuito Civil de Colón, tal como lo afirma el Tribunal del conocimiento, el amparista no cumplió con el requisito establecido en el artículo 2606 del Código Judicial de agotar los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de dicha resolución. Por tanto, contra la orden de hacer contenida en esa resolución, la demanda de amparo no procede.

Por último, la razón de más importancia para no admitir el amparo, por ser manifiestamente improcedente, es que las órdenes de hacer contenidas en las Resoluciones dictadas por el Juez de la causa fueron emitidas en cumplimiento de la Sentencia de Amparo de Garantías Constitucionales dictada el 29 de diciembre de 1992, por la Corte Suprema, mediante la cual se revoca la resolución de 25 de diciembre de 1992 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que deniega el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la Compañía Interamericana de Seguros, S. A. contra el Juez Primero de Circuito de Colón, Ramo Civil, y se concede el amparo propuesto contra la resolución de 22 de enero de 1992 dictada por el Juez Primero del Circuito de Colón.

En mérito de lo expuesto, la resolución apelada debe confirmarse, con base en las mismas razones en que la fundamentó el Tribunal a quo.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto de 15 de junio de 1993 emitido por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que no admite la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el señor GERARDINO CEDEÑO contra el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Civil.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR SANTIAGO MONTILLA EN CONTRA DEL JUEZ SEGUNDO SUPLENTE DEL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 24 de junio de 1993, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por el doctor

JAVIER ALEXIS QUIROS MURILLO contra la sentencia de 22 de junio que deniega la acción de amparo de garantías constitucionales promovida, a nombre de **SANTIAGO MONTILLA**, contra la resolución judicial de 1° de junio de 1993, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera en el juicio de sucesión intestada de ISABEL MONTILLA.

La sentencia impugnada estima que los cargos hechos por el accionante carecen de soporte jurídico porque el Tribunal circuital se limitó a cumplir con el texto normativo del artículo 1116 del Código Judicial, que no prevé el recurso de apelación para los casos en que el Juez deba proceder conforme al inciso 3° del artículo 1592 del Código Judicial, en relación con el 1593 de la misma excerta, nombrando un partidor en los casos en que las partes no lo hayan hecho. Señala también el fallo de primera instancia que en el expediente que contiene los antecedentes, se aprecia con claridad que el Tribunal puso en conocimiento de las partes el reingreso del expediente y éstas estaban en autos sobre el término de nombramiento del partidor en el juicio de sucesión intestada y dejaron precluir el mismo sin hacer uso del derecho que les confería la ley.

En el expediente contentivo del juicio civil, a fojas 123 y siguientes consta que este es un segundo amparo en el mismo caso, ya que el apoderado del señor SANTIAGO MONTILLA ha dado muestras con ello de una excesiva litigiosidad que ha prolongado el juicio por más de cuatro años, haciendo uso de recursos dilatorios, práctica negativa que entorpece el esfuerzo tribunalicio por ofrecer a la colectividad una administración de justicia pronta y cumplida.

El Pleno, al igual que el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, al examinar los cargos formulados y las violaciones constitucionales esgrimidas, se percata que no tienen asidero legal porque se trata de un caso de estricta aplicación de la ley y un correcto apego a los procedimientos que establece el Código Judicial en esta materia.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo apelado.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR BREDIO BENAVIDES Y EN CONTRA DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, (APELACIÓN). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Corte Suprema de Justicia amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado Francisco Zaldívar S., actuando en representación de Bredio Benavides Caballero, contra la Resolución 037-RA de 2 de abril de 1993, dictada por el Gobernador de la Provincia de Panamá.

La alzada se dirige contra auto de 23 de junio de 1993, emitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual se resolvió no admitir la acción presentada.

La resolución inhibitoria del tribunal a-quo expresa:

> "1.- Se advierte que la Resolución 037-RA, de fecha 2 de abril de 1993, es consecuencia de la dictación de la Resolución No.268, de 18 de septiembre de 1992, por parte de la Corregiduría de Ancón (ver fs. 9-11); no es por tanto, la orden originaria;
>
> 2.- Conforme al contenido literal del Art. 2608, el demandado sería el funcionario público que dictó la Orden de hacer, en este caso, el Corregidor de Ancón, por lo cual mal puede enderezarse este Amparo contra el Gobernador de la Provincia de Panamá, que fue quien reestableció la vigencia de la primera. (De esta situación jurídica existen muchos precedentes establecidos por la Corte).

El Pleno observa que con anterioridad se instauró en el Juzgado Quinto de Circuito, Ramo Civil, un proceso constitucional de amparo que culminó, en primera instancia, con la sentencia N° 49 de 30 de abril de 1993. Ese fallo **denegó** el amparo propuesto contra la Resolución N°268 de 18 de septiembre de 1992, que constituye la orden originaria. Tal decisión fue apelada ante el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que la **confirmó** mediante sentencia de 24 de mayo de 1993.

De lo expuesto se desprende claramente que la orden original ha sido examinada en un proceso constitucional de doble instancia, el cual ha finalizado con una decisión sobre el fondo de la controversia. Esa comprobación permite a la Corte arribar a la conclusión de que se ha producido la consecuencia procesal de cosa juzgada, que es una excepción perentoria de mérito que debe ser reconocida de pleno derecho.

De conformidad con los artículos 682 y 2621, párrafo final, del Código Judicial, procede reconocer de oficio la excepción de cosa juzgada. Los preceptos citados establecen:

> "ARTICULO 682. Cuando el Juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, aunque ésta no se haya propuesto ni alegado, debe

reconocerla en el fallo, una vez surtida la tramitación del proceso y decidir el pleito en consonancia con la excepción reconocida ..."

"ARTICULO 2621. ... La sentencia definitiva funda la excepción de cosa juzgada.

Por las razones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 23 de junio de 1993 dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que resultara apelado en esta causa.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LOS LICENCIADOS RINA GEDALOV Y BENIGNO VERGARA EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO LUIS A. NARVAEZ R., EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los Licenciados **RINA GEDALOV y BENIGNO VERGARA**, actuando como apoderados judiciales del ciudadano **LUIS F. NARVAEZ R.**, actual Legislador de la República han presentado acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la resolución de 26 de mayo de 1993, mediante la cual se dispone recibirle declaración indagatoria a su representado por la comisión del supuesto delito de Peculado, contemplado en el Capítulo I, Título X del Libro II del Código Penal.

Fundamentan los amparistas su acción en que la orden impugnada infringe las siguientes normas constitucionales:

a. Artículo 31, según el cual sólo serán penados los hechos declarados punibles por la ley; considera que la violación es directa ya que el funcionario de instrucción ordena tomarle declaración indagatoria al señor Narváez sin que exista elemento probatorio que le vincule un hecho delictivo, "... siendo que se trata de un acto administrativo, similar y de ordinaria ejecución en todas las entidades gubernamentales" (fs.15).

b. Artículo 32, referente al principio del debido proceso, señalan los amparistas que de la resolución impugnada "... no se extrae ningún tipo de análisis objetivo en el que se funde su opinión en cuanto a la existencia del delito ..." (fs.19), lo que no se puede acreditar pues los actos realizados no constituyen delito alguno.

Recibida la acción fue admitida, en consecuencia se solicitó a la autoridad acusada que remitiera a este Despacho la actuación o un informe acerca de los hechos.

Con fecha 13 de julio de los corrientes el Fiscal Primero Delegado respondió con un informe en el que se explica su actuación, del que se destaca lo siguiente:

A. La investigación se inicia en base a denuncia que presentara el señor Miguel Palma (Presidente del Sindicato de Madereros y Afines). Esta denuncia tiene relación con el llamado que hiciera el Instituto de Recursos Naturales Renovables (en adelante INRENARE) para la venta directa de 300.000 pies tablares de madera cativo, supuestamente ubicados entre los ríos Sucurtí y Chatí en la Provincia del Darién, proveniente de un decomiso hecho en el área. De acuerdo al denunciante esta madera no existía, lo que puso en conocimiento del entonces Director del INRENARE, ingeniero Luis F. Narváez, en nota de 15 de enero de 1992 (de la que adjuntó una copia simple).

B. El 27 de enero de 1992 se celebró el acto de apertura de sobres y se adjudicó la venta, provisionalmente, al señor Antonio Pinto Bazán, quien de acuerdo a la comisión evaluadora no reunía los requisitos de paz y salvo ni el certificado de postor.

C. Este acto fue revocado por la Dirección INRENARE mediante resolución D6-015-92, ya que no había certeza de la existencia de la madera y no se conocía su "status legal".

D. Según informe de la Contraloría General de la República (nota 0441-COORD.INF. del 10 de febrero de 1993) y de los auditores del Ministerio Público, el patrimonio del INRENARE había sido afectado en ciento ochenta balboas (B/.180.00).

E. El Fiscal destaca la declaración del señor Rodolfo Jaén, Director Nacional de Desarrollo Forestal, quien dijo haber advertido verbalmente que el anuncio de venta publicado era un error. Según el Fiscal aquí se deja entrever el conocimiento previo del hecho.

F. A lo anterior se agrega la existencia de un memorándum de 11 de febrero de 1992 en el que los asesores legales del INRENARE dejan constancia que el decomiso hecho en el área (entre los ríos Sucurtí y Chartí), no existía madera cativo; así como el informe de inspección del 13 de febrero de 1990 en el que se detallaba la madera que existía en el área del decomiso.

G. Hace mención del artículo 324 del Código Penal, en relación con el 38 del mismo conjunto legal, indicando que la actuación del exdirector del INRENARE recayó en ese tipo penal.

Criterio de la Corte

Encontrándose el presente negocio para resolver a eso se apresta la Corte, previas las consideraciones que a continuación se plantean:

Primeramente, que de la lectura del informe del Fiscal Primero Delegado se desprende que conoce la calidad de Legislador de la República que ostenta el ingeniero Narváez, no obstante, no ha tomado en cuenta lo estipulado en el artículo 204 de la Ley 49 de 1984 modificado por la Ley 7 de 1992 (Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa). Según este artículo todas las acusaciones contra Legisladores de la República deberán remitirse de forma inmediata a la Asamblea Legislativa, a fin de que previo el procedimiento de rigor, la Asamblea Legislativa autorice la investigación.

El legislador Narváez renunció a la Dirección del INRENARE y se reintegró a su curul en la Asamblea Legislativa, tal como certificó el Secretario General de esa Corporación, por lo que el Ministerio Público debió remitir expediente a la Asamblea.

Desde este punto de vista, pareciera estar en lo cierto el amparista, sin embargo, ocurre que ya el Pleno de la Corte en reiteradas ocasiones ha señalado que contra la orden de indagatoria no procede la acción de amparo de garantías constitucionales, toda vez que para enervar dicha orden existe el incidente de controversia, remedio que no se ha utilizado en este caso.

Por tanto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por el Legislador ingeniero Luis F. Narváez contra la orden de hacer contenida en la resolución de 26 de mayo de 1993 proferida por el Fiscal Primero Delegado.

Notifíquese,

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR RODRIGO MIRANDA EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Dr. **RODRIGO MIRANDA MORALES** presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, fechada 18 de junio de 1993, por medio de la cual se DENIEGA la acción de amparo propuesta contra el Juez Primero del Circuito de Chiriquí en razón de haber éste dictado el auto No 639 de 4 de Junio de 1993, mediante la cual se acogió la subrogación solicitada de sustituir los bienes secuestrados por un certificado de garantía y en consecuencia levantar el secuestro sobre los bienes decretados.

Sostiene el apelante que la decisión debe ser revocada en base a los siguientes argumentos:

> "CRITICA A LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL MEDIANTE LA CUAL "NO ADMITE la Demanda de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licdo. Rodrigo Miranda Morales contra el Juez Primero del Circuito, Licdo. Nelson B. Caballero":

El Tribunal Superior de Justicia, mediante resolución de 18 de junio de 1993 decidió no admitir el recurso de amparo de garantías constitucionales que interpusimos contra el Lic. NELSON B. CABALLERO J., contra la orden de levantamiento de secuestro, mediando subrogación o consignación en efectivo, proferida en la forma que hemos explicado en párrafos precedentes.

> La opinión del Tribunal para llegar a esta decisión es que:
> `Lo resuelto a través del auto 639 del 4 de junio y lo cual ha motivado la interposición del presenta Recurso extraordinario de Amparo, es susceptible del recurso ordinario de apelación; en atención a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 536, subrogado por el artículo 8 de la Ley 15 de julio de 1991, que expresa:
>
> La resolución que ordena el levantamiento es apelable por la parte contraria, pero esta impugnación no suspenderá el cumplimiento de la misma ...
> En atención a ello, la amparista podía fácilmente esgrimir sus desacuerdos con el contenido de lo resuelto, a través de los trámites ordinarios y no con la interposición del recurso extraordinario de Amparo de Garantías Constitucionales.'
> Contra este criterio, Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es que nos alzamos en apelación.
> El Articulo 523 del C.J. que define la acción precautoria de secuestro nos dice que la misma tiene por finalidad "evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que posea." Esta

norma tiene su complemento en lo dispuesto en el Artículo 1478 del C.C. que pone fuera del comercio los bienes en litigio para asegurar las resultas del juicio.
No puede ser cierto que un Juez, ante quien cursa una acción de secuestro, se pueda permitir la ligereza de precalificar la acción del secuestrante como personal y no acción real para justificar el levantamiento y consiguiente nugatoriedad de esa acción precautoria.
Fingir que se lee otra cosa, cuando la parte demandante lo que demanda es que se obligue a la parte demandada a **restituirle** el bien en litigio.
Este criterio del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial ya fue rebatido por la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 2 de octubre de 1991 donde se "DECLARA, que NO ES INCONSTITUCIONAL el inciso tercero del Artículo 1 del Decreto de Gabinete 50 de 20 de febrero de 1990 que modificó el artículo 2606 del Código Judicial".

Dice así ese fallo trascendente:

La disposición acusada de inconstitucionalidad y modificada por el Decreto de Gabinete 50 de 1990, a la letra dice:

Artículo 1. El Artículo 2606 del Código Judicial quedará así:
Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya, o de cualquier persona.
La acción de garantías constitucionales a que se refiere este artículo, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales.
Esta acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata.
...
También se debe examinar el cargo de inconstitucionalidad contra la frase prevista en el inciso tercero del artículo 1 del Decreto de Gabinete 50 de 1990, que modificó el Artículo 2606 del Código Judicial, el cual expresa: "Cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieran de una revocación inmediata".
En primer lugar se ha de tener presente que la acción de amparo de garantías constitucionales es una de las instituciones de garantía cuya finalidad no es la de pretermitir los medios de impugnación establecidos en la vía ordinaria. Siendo ello así, la orden o acto lesivo que se impugna por la vía del amparo implica la existencia de una daño actual y de consideración, dado que precisamente la premura de la situación amerita una vía de ataque igualmente efectiva y rápida de enmienda como lo es la acción de amparo de garantías constitucionales.
De lo expuesto se infiere que la expresión "cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieran de una revocación inmediata", aunque no está contenida en el artículo 50 de la Constitución, no puede ser calificada de inconstitucional, ya que esta frase desarrolla uno de los elementos en los que se funda la acción extraordinaria de amparo de garantías constitucionales. Es precisamente la gravedad y premura de la situación que afecta las garantías constitucionales uno de los aspectos fundamentales por el cual se instituye el amparo, puesto que de no requerirse una revocación inmediata de la orden, se podría impugnar la orden acusada por la vía ordinaria.
Contribuye a reiterar el planteamiento que precede, otro elemento como es la naturaleza del procedimiento para la acción de amparo el cual es sumario, lo que evidencia la importancia de remediar la orden impugnada de manera expedita y evitar con ello que se ocasione un daño mayor. En jurisprudencia reiterada de la Corte se ha sostenido que lo que motiva el establecimiento de un trámite especial en la demanda de amparo, es precisamente la urgencia de la finalidad que persigue, la cual es eliminar inmediatamente la orden que conculca las garantías fundamentales.'
Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:
El Artículo 32 de la Constitución Nacional contiene el principio del debido proceso en favor de todos los ciudadanos. Es el derecho a ser juzgado por autoridad competente y conforme a los trámites legales.
El Señor Juez Primero del Circuito de Chiriquí ha incurrido en graves transgresiones al procedimiento que regula la acción precautoria de secuestro.
La parte actora secuestrante, ante ese agravio, intentó los remedios contemplados en la vía ordinaria los cuales resultan inanes ante la decisión del funcionario demandado de ejecutar su resolución sin siquiera notificar ni esperar a que estuviera firme la misma."

Un examen del expediente demuestra que el amparista presentó una acción de secuestro contra los bienes y la administración de la emisora ESTEREO COLOR que fue acogida en principio por el Juez Primero del Circuito de Chiriquí. Que posteriormente la parte secuestrada solicitó el levantamiento del secuestro sobre los bienes y consignó un certificado de garantías por veinticinco mil balboas (B/.25.000.00), a lo cual accedió el Juez de la causa.

Indistintamente si se trata de una acción personal o de una acción real, el auto que decretó el levantamiento del secuestro y la subrogación de los bienes por el certificado de garantía era apelable de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 536 del Código Judicial y el amparista no utilizó este recurso previo al de amparo tal como lo requiere el No. 2 del artículo 2606 del Código Judicial, que dice que sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia recurrida.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.)MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) DR. CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR FRANKLIN LEZCANO GUERRA Y EN CONTRA DEL SEÑOR FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **FRANKLIN LEZCANO GUERRA** interpuso a su favor ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, acción de habeas corpus preventivo con el objeto de que se declare ilegal y, en consecuencia, se deje sin efecto la orden de detención dictada en su contra el 7 de mayo de 1993 por la Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El Tribunal ad-quem al valorar los elementos probatorios allegados al sumario estimó que era legal la detención preventiva decretada contra el licenciado FRANKLIN LEZCANO GUERRA.

Según da cuenta el expediente principal, uno de los delitos objeto de investigación guarda relación con la falsificación de un oficio identificado como el N° 3210 de 21 de diciembre 1992 suscrito por el Fiscal Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, licenciado Virgilio Crespo G., mediante el cual se le indicaba al Director de la Cárcel Modelo que se dejara en inmediata libertad al detenido **DINO OSWALDO RENTERÍA SALAZAR**, sindicado por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas.

En las sumarias ha quedado debidamente acreditado que el mencionado Oficio no fue suscrito por el Fiscal Virgilio Crespo, y que con fundamento en la falsificación de este documento se logró obtener la libertad de una persona que estaba siendo investigada por delito relacionado con drogas.

Las razones en que se fundamentó la Fiscal Primera para decretar la detención del licenciado Franklin Lezcano, se obtienen del siguiente extracto del informe de conducta visible a fojas 17-18 del cuaderno de habeas corpus:

> "A- Existe el testimonio de ALEXANDER GONZÁLEZ, Funcionario de la Fiscalía Tercera del Circuito de Panamá, de donde emergen que el Licdo. Franklin Lezcano Guerra tenía acceso directo al expediente que en esa Fiscalía se llevaba contra DINO OSVALDO RENTERÍA y otros, por delito relacionado CONTRA LA SALUD PUBLICA, toda vez que contaba con poder especial para actuar en favor de DIOSELINA MURILLO, haciéndose constar en ese testimonio, que el día 23 de diciembre de 1992 el Licdo. Lezcano estuvo en la Fiscalía viendo el expediente.
>
> B- De acuerdo al testimonio de indagatoria y bajo juramento de MARCOS RUEDA, Jefe de Investigaciones de Migración, fue precisamente FRANKLIN LEZCANO GUERRA, quien lo presiona, y le advierte de la posibilidad de interponer un Habeas Corpus si no se liberaba ese mismo 24 de diciembre de 1992 a DINO OSVALDO RENTERÍA, de lo cual se colige que tenía interés personalísimo en que se liberara al imputado RENTERÍA, a sabiendas de que en el expediente no existía ninguna orden de libertad en su favor ni mucho menos la nota que motiva la presente encuesta.
>
> C- Es importante señalar, que de acuerdo a las constancias procesales (fs.86) el documento excurio tiene fecha de 21 de diciembre de 1992, por lo que si FRANKLIN LEZCANO GUERRA fue el 23 de ese mismo mes y año a ver el expediente, le constaba de que este documento en acción no estaba en el cuaderno instructivo. A más de lo anterior, obsérvese que la persona que falsificó la orden, conocía perfectamente bien quien tramitaba el expediente, por cuanto que puso precisamente las iniciales AG al final de la nota, correspondientes a ALEXANDER GONZÁLEZ, Oficial Mayor encargado de tramitar el expediente.
>
> CH- El hecho punible, fundamento de la detención también quedó debidamente acreditado en el expediente con la experticia de folios 157 a 158, de donde se colige que la rúbrica no pertenece al Licdo. Virgilio Crespo, que el sello donde se lee Fiscalía Tercera del Circuito de Panamá, no corresponde al utilizado por esa Fiscalía; y las escrituras mecanográficas visibles en el documento cuestionado, no fueron realizadas por ninguna máquina de las que existen en la Fiscalía, y que usaron para el muestreo comparativo.
>
> D- Como quiera que el delito de Falsedad Documental, y el uso del mismo llevan acarreado pena de prisión de dos a cinco años, y en virtud de los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, se ordenó la detención del prenombrado LEZCANO GUERRA." (sic)

Ahora bien, el licenciado Lezcano Guerra, al sustentar recurso de apelación interpuesto contra el auto de 28 de mayo de 1993 dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, advierte que la providencia en que se decretó su detención preventiva no califica el hecho imputado ni lo ubica dentro de un Capítulo o Título del

Libro II del Código Penal, lo cual violenta el principio de legalidad y trae como consecuencia la ilegalidad de la medida cautelar.

La Corte observa que no es cierto lo que asevera el apelante. A fojas 321 del expediente principal se observa la siguiente elucubración hecha por la funcionaria de instrucción:

> "Todo lo anterior nos hace concluir que FRANKLIN LEZCANO GUERRA actúo con conocimiento de la FALSEDAD, propiciando y concretando el dolo específico buscado con la misma, es decir, la evasión de un detenido. Dichas conductas constituyen DELITO CONTRA LA FE PUBLICA y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ..." (sic).

De lo anterior se evidencia que ciertamente la Fiscal Primera calificó el hecho punible investigado. Es más, la Corte comparte el razonamiento esbozado por el Tribunal ad-quem para sustentar la declaratoria de legalidad de la medida cautelar impugnada, en el sentido de que "Es obvio que al hacerse de un escrito oficial, como lo es el de una Fiscalía de Circuito un objeto apócrifo se está ante la falsedad de un documento público que el artículo 265 del Código Penal sanciona con prisión de dos a cinco años" (fojas 28).

Otro de los argumentos que externa el apelante consiste en que para aplicar cualquier medida cautelar es necesario que la resolución donde se decreta sea notificada de manera personal, máxime cuando la medida cautelar consista en la detención preventiva, por lo que al no habérsele notificado personalmente la detención preventiva se han violado sus garantías constitucionales.

Sobre el particular caben las siguientes consideraciones:

La acción de habeas corpus tal como viene normada **literalmente** en el artículo 23 de la Constitución Nacional describe al habeas corpus como una acción reparadora. Es decir, que el artículo 23 literalmente regula lo que la doctrina ha denominado habeas corpus reparador.

Es consustancial con este tipo de acción que su ejercicio o interposición no suspende los efectos de la orden de detención, por lo que una vez la persona ha sido notificada de que va a ser detenida, el paso siguiente es conducirla al centro penitenciario o ante la autoridad competente, bajo unas mismas consecuencias: permanecerá privada de su libertad corporal en tanto la autoridad que decretó su detención no la revoque o en tanto un tribunal de habeas corpus o de fianza no levante la medida.

De lo que viene dicho se deduce que la detención preventiva es notificada de manera personal, ya que a tenor de lo establecido por el artículo 22 de la Constitución Nacional, toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que sea comprensible de las razones de su detención. Y es obvio que esa información se debe dar en los precisos momentos en que es aprehendida, con lo cual se cumple el requisito de notificación personal.

Ahora bien, escudriñando el espíritu del artículo 23 de la Carta Magna, y con el objeto de ampliar las garantías fundamentales de los asociados, la jurisprudencia de la Corte ha permitido que la acción de habeas corpus no sólo sea ejercida como una medida reparadora -cuando la persona ya ha sido físicamente privada de su libertad corporal-, sino que dicha acción también puede ser ejercida como mecanismo preventivo para evitar que la detención se concretice. Es decir, la persona que tenga conocimiento, por cualquier medio, que en su contra se ha proferido una orden de detención puede interponer un recurso de habeas corpus preventivo. Y ello es precisamente lo que ha ocurrido en el presente negocio, pues el licenciado FRANKLIN LEZCANO GUERRA ha interpuesto un recurso de habeas corpus a su favor en momentos en que aún no se ha limitado físicamente su libertad corporal.

Realmente no entiende esta Corporación de Justicia en qué forma se le han podido conculcar las garantías al recurrente, si éste, sin haber sido notificado de la orden de detención, se ha mostrado sabedor de la misma y ha ejercido el presente recurso de habeas corpus. ¿Qué beneficios habría obtenido el apelante si hubiera esperado a que se le notificara personalmente la orden de detención, si, como se ha dicho, el siguiente paso a la notificación, es la captura o aprehensión de la persona notificada?

En estas circunstancias, y dado que efectivamente en autos aparece acreditado el delito de falsificación que tipifica el artículo 265 del Código Penal, estima la Corte que al existir indicios de participación en dicho ilícito del licenciado FRANKLIN LEZCANO GUERRA, la detención decretada en su contra es legal, ya que además fue proferida conforme a las formalidades legales y por autoridad competente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la resolución recurrida.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS V. (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAVID BAKER EN CONTRA DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado MANUEL JOSÉ CALVO ha elevado solicitud para que se le ordene al Ministro de Gobierno y Justicia a que cite al Embajador de los Estados Unidos "a fin de que el Gobierno de los Estados Unidos devuelva a la República de Panamá al ciudadano DAVID BAKER quien fue detenido y deportado en forma arbitraria e ilegal de territorio panameño ..."

La petición del licenciado Calvo tiene fundamento en la resolución que dictó el Pleno de la Corte Suprema el 31 de marzo de 1993, mediante la cual se declaró ilegal la detención y posterior deportación del señor DAVID BAKER, decretada por el Ministro de Gobierno y Justicia mediante resolución N° 350 de 14 de diciembre de 1992.

Pues bien, estima la Corte que la petición del licenciado Calvo no puede ser atendida debido al hecho de que la deportación había sido ejecutada en el momento en que se presentó el habeas corpus, lo cual parece indicar que hubo una gestión de parte extemporánea.

En efecto, si bien el numeral 5 del artículo 2506 del Código Judicial establece que la deportación sin causa legal es un acto sin fundamento susceptible de impugnación a través del habeas corpus, lo cierto es que la hipótesis abstracta que aparece prevista en el mencionado precepto legal, está condicionada al hecho de que la deportación no se haya ejecutado.

Ello se deduce del artículo 2594 ibidem, que a la letra dice:

> ARTICULO 2594: Siempre que un Juez o Tribunal competente tenga conocimiento por denuncia, de que se intenta confinar ilegalmente a alguna persona, dará orden a la autoridad o funcionario que juzgue oportuno, a fin de que la conduzcan inmediatamente a su presencia para resolver lo que corresponda en derecho.
>
> En caso de que la autoridad, funcionario o corporación que trata de llevar a cabo el confinamiento o la deportación , o ambas cosas a la vez, estuviere presente, se le notificará la orden. Dicha notificación surtirá todos los efectos de un mandamiento de Habeas Corpus y se obliga por lo mismo, a la autoridad o funcionario de que se trate de rendir de inmediato informe del caso, que se ajustará a las formalidades consignadas en este Capítulo".

Del anterior artículo se desprende que el habeas corpus procede en la medida en que la deportación no ha sido consumada, es decir, que la misma debe estar en estado latente: debe representar una amenaza o peligro inminente.

De donde resulta que el habeas corpus que se ejercita en estos casos es de carácter preventivo y no reparador. Y no podría ser reparador, porque una vez se ha adoptado la medida, el tribunal de habeas corpus no tiene competencia ni jurisdicción para exigir el cumplimiento de su resolución, como sí la tendría dentro del territorio de la República de Panamá, a la luz de lo que se infiere del artículo 2593 del Código Judicial.

Por otro lado, es un presupuesto indispensable para que el tribunal de habeas corpus pueda tener el poder de disposición sobre el corpus, que la persona que va a ser detenida, la detenida o la que va a ser confinada o deportada, esté a sus órdenes, según se deduce de los artículos 2582, 2584, 2585 y 2590 del Código Judicial. Y obviamente, este requisito no se cumplió en el presente proceso, porque la deportación ya se había ejecutado cuando el habeas corpus fue interpuesto, por lo que mal podría disponer esta Corporación de Justicia sobre algo que nunca ha estado bajos sus órdenes.

Desde esta perspectiva, la declaratoria de ilegalidad que se profirió, aunque suene a paradoja, tan sólo tiene el carácter de declarativa, sin ninguna repercusión positiva. Lamentablemente, esa es la realidad de nuestro ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud formulada por el licenciado Manuel José Calvo.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR LÁZARO CÓRDOBA EN CONTRA DEL FISCAL QUINTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO.

VISTOS:

El licenciado Samuel A. Quintero V., en representación de LÁZARO CÓRDOBA, presentó y sustentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, fechada el 18 de mayo de 1993, expedida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

La acción de habeas corpus contra el Fiscal Quinto del Circuito de Chiriquí pretendía que se declarara ilegal la detención de que es objeto Lázaro Córdoba porque, en su opinión, no se reúnen en la resolución que ordena la privación provisional de libertad, los presupuestos exigidos por el artículo 2159 del Código Judicial.

La sentencia impugnada sostiene que el ilícito investigado es el de atentar contra la personalidad interna del Estado y el señor Córdoba aparece vinculado en dichas investigaciones por las declaraciones de Santos Morales, José e Isabel Estribí Villarreal, estimando además que la orden de detención aparece debidamente motivada, es emitida por autoridad competente y conforme a las formalidades mínimas exigidas por la ley.

El sumario incoado por el Ministerio Público en el que aparece Lázaro Córdoba, se genera en el acto terrorista atentatorio de la personalidad interna del estado, ocurrido el 23 de Mayo de 1993 en la población de Boquete, Chiriquí, y en el que perdió la vida Pedro Gabriel Aguirre Guerra. El delito genérico contra la personalidad jurídica del Estado está plenamente establecido con los medios probatorios idóneos que demuestran la explosión de un artefacto en las cercanías del lugar en el que se celebraría una convención de un partido político a la que asistió el Presidente de la República y altos miembros de su gabinete.

Las figuras delictivas de rebelión, sedición y asonada que aparecen en el título IX, en su mayoría son unisubsistentes y conforman tipos abiertos en los que basta la realización de un solo acto para consumar la conducta propia de desestabilizar el régimen gobernante, o sea, que un solo acto es idóneo para perfeccionar el hecho punible.

Como es sabido, la fase intermedia del iter criminis, tratándose de delitos contra la personalidad interna del Estado, en virtud de una ficción legal, alcanza suficiencia para generar una conspiración. Por ello, el solo hecho de reunirse periódicamente, con armas, con el propósito de planear un cambio violento, armado, del sistema de gobierno, genera una conducta legalmente incriminada.

Los indicios graves que gravitan contra Lázaro Córdoba surgen de los señalamientos directos que le hacen tres personas distintas, que lo identifican como una de las personas que participó en varias de las reuniones de planificación del golpe terrorista de desestabilización política. En estos casos, conspirar es delinquir, pues el bien jurídico tutelado de la personalidad jurídica del Estado se proyecta tanto en la fase intermedia como en los actos preparatorios del "iter criminis".

La incriminación de Córdoba no se identifica o desprende de la de Erick Staff, pues cada uno aparece protagonizando actos diferentes, a pesar de que todos estaban encaminados al mismo propósito.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JULIÁN CABALLERO EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CON SEDE EN DAVID, CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El ciudadano Julián Caballero, mediante telegrama procedente del Corregimiento de Caizán, Distrito de Río Sereno, Provincia de Chiriquí, remitió a la Corte Suprema de Justicia un recurso de Habeas Corpus a su favor y en contra del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, con sede en David, Chiriquí.

Acogido el recurso se libró el mandamiento de Habeas Corpus contra el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, quien, mediante Telegrama No.123, fechada el 10 de junio de 1993, rindió el siguiente informe:

"A) Es cierto que ordené detención Juan José Julián Caballero, el día 5 de mayo de 1992, conforme señalamientos que se le hacían como implicado homicidio de Pedro Antonio Morales Guerra.

B) Los motivos o fundamento de hecho y de derecho para decretar dicha detención están en la investigación que actualmente es motivo de examen por esa honorable corporación, pues se encuentran resolviendo mandamiento habeas corpus favor otro implicado de nombre Franklin Morales Morales, contestado mediante Telegrama No.99 de 24 de mayo pasado. En la resolución decreto detención se indica que la misma se genera por señalamiento que surge de diligencia de reconocimiento rueda detenidos, aunado a otros indicios ubican recurrente lugar de los hechos.

C) Detenido Juan José Julián Caballero encuéntrase órdenes este despacho, pero inmediatamente será filiado disposición esa honorable Corporación, para lo cual he girado oficio No.605 a la jefatura policial Chiriquí.

Finalmente vale agregar que sumario respectivo fue enviado Corte Suprema mediante oficio 520, 24 mayo pasado, por motivo recurso habeas corpus favor Franklin Morales Morales."

Una vez estudiado el informe del Fiscal Primero Superior y las sumarias seguidas en averiguación de las causas de muerte del señor Pedro Morales (q.e.p.d.), las cuales habían sido remitidas con anterioridad a esta Corporación con motivo del recurso de habeas corpus interpuesto por Franklin Morales en torno a este mismo caso, la Corte observa que no es cierto, como alega el demandante, que su persona se encuentra privado de su libertad sin existir mérito legal para su detención. En efecto, constan en el expediente pruebas que vinculan al detenido a los hechos a él imputados. Así pues, los indicios emergentes de las declaraciones juradas de Darío Araúz quien reconoció las fotos y el retrato hablado de Juan José Julián Caballero y, posteriormente, reconoció personalmente al imputado en rueda de detenidos tal cual consta a fojas 52 y 80 del expediente contentivo de las sumarias, aunado a las declaraciones de Carlos Ernesto Dubois (fs.67 y ss.), Arturo Varela (fs.177 y ss.), Diomedes Suira Espinosa (fs.179 y ss.) y Ricardo Nicollela (fs.227 y ss.), constituyen elementos probatorios suficientes para vincular al señor Juan José Julián Caballero con el hecho a él imputado.

Por otra parte, el Fiscal Primero del Tercer Distrito Judicial ordenó la detención preventiva del señor Caballero, por escrito, mediante resolución fechada el 5 de mayo de 1992, visible a foja 90 del expediente contentivo del sumario, debido al reconocimiento en rueda de detenidos en la cual se le identifica como uno de los dos sujetos involucrados en el homicidio perpetrado en perjuicio de la persona de Pedro Antonio Morales el 14 de abril de 1992 y otros indicios que lo vinculan con el hecho punible investigado. Tenemos pues, que al tratarse del delito de homicidio, el cual tiene fijada pena de prisión mínima superior de dos (2) años, la Corte observa que la orden de detención ha sido expedida por dicho funcionario con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial.

Por todo lo anterior considera la Corte que en la detención preventiva del señor Caballero no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y, por tanto, es procedente declarar legal la detención.

Por tanto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor Juan José Julián Caballero y por tanto, DISPONE que el detenido sea puesto de inmediato a órdenes del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, con sede en David, Chiriquí.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES RICARDO SALAS BRENES Y RONALD SOLORZANO Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **EDGARDO LOO BERROA** interpuso ante la Corte Suprema de Justicia habeas corpus a favor de **RICARDO SALAS BRENES y RONALD SOLORZANO** contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Acogido el habeas corpus se libró mandamiento contra el citado funcionario, quien en su informe de conducta contestó que los detenidos no se encuentran bajo sus órdenes, pero que tenía conocimiento que los mismos se encuentran bajo custodia en la Cárcel de la Policía Nacional ubicada en Santiago de Veraguas, a órdenes del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Penonomé (fojas 5).

Enderezada la acción contra este último Tribunal, la Magistrada **DELIA CARRIZO DE MARTÍNEZ** informa que mediante Resolución de 18 de junio del presente año dicho Tribunal se abstuvo de conocer el presente negocio constitucional porque según las pruebas allegadas al proceso, el funcionario responsable de haber ordenado la detención preventiva impugnada es el Jefe de la División de Delitos contra la Fe Pública de la Policía Técnica Judicial de Ancón (fs. 10).

Con base en esta información, el sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra este último servidor público, quien informó que los detenidos se encuentran bajo su custodia, pero a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República (fs. 13).

Obviamente como es típico en el actuar de esta Corporación de Justicia, se requirió del Fiscal Auxiliar de la República, que de la manera más expedita rindiera el correspondiente informe de conducta.

Mediante Oficio N° 7570 de 1 de julio de 1993, el Fiscal Auxiliar de la República, al igual que habían informado las anteriores Autoridades, manifestó que no había ordenado la detención de los señor BRENES y SOLORZANO. Sin embargo, expresó que "En la actualidad no tenemos bajo nuestra custodia ó a nuestras órdenes a los señores antes mencionados, como tampoco, los hemos transferido a otra Autoridad Pública".

Señala el Fiscal Auxiliar que según informe Secretarial los detenidos "se encuentran en la División de Delitos Contra la Fe Pública, de la Policía Técnica Judicial, para ser indagados".

Como puede apreciarse a través de la narración de los hechos, en la actualidad las personas en cuyo favor se ha promovido el presente habeas corpus se encuentran ciertamente privadas de su libertad corporal, pero, pese a ello, no están a órdenes de ninguna autoridad.

En estas circunstancias, no cabe la menor duda de que el acto privativo de libertad corporal cuestionado resulta a todas luces ilegal, pues no es posible, en nuestro ordenamiento jurídico, que una persona esté privada de su libertad corporal por más de 24 horas sin haber sido puesta a órdenes de autoridad competente. Y en el caso que nos ocupa la violación a este principio constitucional es lo que hace contrario a derecho las detenciones impugnadas.

Por ello, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva que padecen los señores RICARDO SALAS BRENES y RONALD SOLORZANO; en consecuencia ORDENA sean puestos en inmediata libertad, siempre y cuando no tengan otra causa pendiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS V. (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SR. PASCUAL HERRERA Y EN CONTRA DEL FISCAL DEL CIRCUITO DE COCLÉ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Sr. Pascual Herrera, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, recurso de apelación contra la "Sentencia calendada 9 de junio de 1993, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva que hoy padezco en la Cárcel Pública de Penonomé".

Encontrándose el expediente en el despacho del Magistrado Sustanciador, el señor Pascual Herrera, confirió poder especial al Lic. Joel C. Luque F., el día 25 de junio de 1993, en donde lo faculta para desistir del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 9 de junio de 1993, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, de Coclé y Veraguas. Dado que el artículo 1073 del Código Judicial le otorga el derecho para desistir expresa o tácitamente del incidente, recurso o la demanda que haya interpuesto una persona, es viable el desistimiento del presente recurso de habeas corpus.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento del recurso de apelación contra la sentencia expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), el 9 de junio de 1993, mediante la cual se declara legal la detención del señor Pascual Herrera.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, ocho (8) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **RICARDO ARTURO BOZA BARSALLO** ha presentado acción de Habeas Corpus a favor de **CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ** y en contra del Director de la Policía Técnica judicial, por considerar que la privación de libertad que sufre, es ilegal.

Al librarle mandamiento de habeas Corpus al Director de esta Institución mediante oficio de 1 de julio de 1993, el referido funcionario a través de la Nota N° A.L.0155 de 1 de julio de 1993, manifestó que el interesado se encuentra bajo órdenes del Juzgado Nocturno del Chorrillo desde el 30 de junio de 1993, y que en consecuencia no se encuentra bajo su custodia.

En vista de que las sumarias del señor **CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ** se encuentran radicados en la Juzgado Nocturno del Chorrillo, procede enviar el recurso de Habeas Corpus presentado, al Tribunal competente.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA en el Juzgado de Municipal de Turno, Ramo Penal, del Circuito Judicial de Panamá, la acción de Habeas Corpus propuesta por el licenciado RICARDO ARTURO BOZA BARSALLO a favor de CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ZULEYKA CECILIA STOUT MINE EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN (SECRETARÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 23 de mayo de 1993, la señora **ZULEYKA CECILIA STOUT**, remitió desde la cárcel pública de Colón los folios que inician este cuaderno, dirigido equivocadamente al Magistrado Fabián Echevers, al Segundo Tribunal Superior de Justicia, contentivo de una acción de habeas corpus contra la Fiscalía Primera del Circuito de Colón por detención ilegal en su contra.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el 27 de mayo del año que decurre, se obtuvo respuesta el 9 de junio (fs. 6) en la que el Fiscal de Circuito informó que el caso había sido puesto a órdenes de la Secretaría Especializada en Delitos relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación. Con base a esa información, se dictó el auto inhibitorio de 24 de junio, que dispuso remitir el expediente a esta Superioridad Judicial.

Debidamente endilgada la competencia del caso, se le pidió informe al procurador General, quien en su Vista N°18 de 30 de junio señala que la detención de ZULEYKA CECILIA STOUT MINE fue ordenada por la Fiscalía Cuarta de Circuito de Colón y que posteriormente fue puesta a órdenes de la Secretaría Especializada en delitos relacionados con Drogas. Se explica también que los elementos de convicción que sirvieron de base a la privación provisional de la libertad de la señora STOUT, surgen de una diligencia de allanamiento practicada en su cuarto habitación, en la que se decomisaron 176 envoltorios de una sustancia con aspecto, consistencia y olor propio de la droga conocida como crack y aunque el examen de laboratorio indica que tales envoltorios resultaron contener fragmentos de vela, también consta en autos que la hermana de STOUT declaró que la sustitución de la droga por las velas fue consecuencia de un soborno por mil balboas entregados a un sujeto que trabajaba en la oficina del laboratorio de Drogas de Cristóbal. Para reforzar esta afirmación, se aportó la declaración de todas las personas que participaron en la diligencia de allanamiento y los mismos son contestes en manifestar que percibieron sensorialmente el color, olor y tamaño de las sustancias que aparecían bajo la cubierta de papel de aluminio y por la experiencia y conocimiento que tienen sobre esta materia, no se trataba de fragmentos de vela sino de piedra o crack, por lo que se deduce que entre el lapso que va del decomiso y el momento en que se hace análisis de la droga en el laboratorio correspondiente, se produjo una sustitución del material remitido para su identificación científica.

La Corte al examinar los antecedentes remitidos por la Procuraduría, se percata de que la accionante ha cambiado el contenido de su declaración indagatoria en varias ocasiones, ya que aparece aceptando en el acta de allanamiento que los 176 envoltorios eran de su propiedad, que su contenido era crack y que los vendía como medio de subsistencia a razón de B/1.25 cada uno, posteriormente se niega a declarar amparada en el artículo 22 constitucional, días después señala que la sustancia decomisada era cera de velas, las que entregaba a las personas que acudían a su cuarto para que les vendiera drogas, confundiéndola con el antiguo arrendador de la vivienda que aparentemente se dedicaba a dicha actividad ilícita. En una tercera oportunidad manifestó que había mentido porque su hermana le había indicado que dijera eso, pero que desconocía quién y cuánto se había pagado por el cambio de droga por velas.

El texto del escrito contentivo del amparo retoma la declaración anterior y solicita su libertad porque la sustancia que le decomisaron no era ilícita y por tanto no se le puede restringir o privar de libertad si no hay mérito para ello.

La situación actual es la de que no hay cuerpo del delito en cuanto a la posesión y tráfico de drogas, pero como se trata de un proceso en su etapa sumarial, nada impide que se logre acreditar el hecho punible posteriormente con mejores elementos de juicio. Con relación al soborno al que se refiere el Señor Procurador, la pena que fija la ley penal no permite detención preventiva y la participación de STOUT MINE, si la hubo, denota un papel de complicidad y no de autoría.

En consecuencia, la **CORTE SUPREMA**, **PLENO**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **DECLARA ILEGAL** la detención de la señora **ZULEYKA CECILIA STOUT MINE** y **ORDENA** su libertad, si no existe orden de detención por otra causa.

Notifíquese y cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO CAMACHO ALEMÁN Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Edilberto Vásquez Atencio**, actuando en representación de **FERNANDO CAMACHO ALEMÁN**, ha presentado recurso de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial y en favor de su representado, ya que según el recurrente se encuentra detenido por órdenes de esa autoridad.

Recibido el presente negocio se le dio el trámite de rigor y se expidió el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió el mismo mediante oficio A.L.-141-93 y dijo no haber ordenado la detención del recurrente y que el mismo se encontraba bajo su custodia, pero a órdenes de la Personería 2da. Municipal de la Provincia de Colón.

Encontrándose en etapa para resolver, el representante legal del señor Camacho Alemán presentó escrito mediante el cual desistió del recurso presentado. En vista que las normas del Código Judicial, señala que la parte demandante puede desistir de su acción en cualquier etapa del proceso y que sí cumple con todos los requisitos de Ley el juez debe aceptarlo y ordenar el archivo del expediente, el presente escrito de desistimiento ha llenado los requisitos de ley por tanto debe ser aceptado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento presentado por el señor FERNANDO CAMACHO ALEMÁN del recurso de habeas corpus presentado contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA (fdo.) DÍDIMO RÍOS V.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SANCIÓN DISCIPLINARIA DECRETADA CONTRA EL LICENCIADO FÉLIX A. PÉREZ ESPINOSA, FISCAL QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CHIRIQUÍ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

VISTOS:

En informe que rindiera el licenciado Asunción Castillo, este último en su calidad de magistrado del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, sustanciador dentro de proceso iniciado en virtud de acción de habeas corpus presentada en favor de Luis Carlos Martínez, el Fiscal Quinto del Circuito de Chiriquí, autoridad acusada, expresó lo siguiente:

> "... en caso de que este Recurso sea apelado y elevado a conocimiento de la honorable Corte Suprema de Justicia de Panamá, queremos dejar constancia que un hermano del señor Luis Carlos Martínez es asistente del Magistrado Fabián Echevers, razón por la cual se deben tomar las providencias del caso para que éste último no interfiera en el desarrollo de la decisión a tomar."

Se trata, a todas luces, de una referencia injuriosa que atenta contra la integridad de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con ocasión del ejercicio del cargo, y que ofende también la dignidad de los integrantes del Pleno de esa Corporación, lo que coloca la conducta del aludido agente del Ministerio Público en el supuesto que contempla el artículo 92 del Código Judicial.

Por las consideraciones anteriores, quien suscribe, actuando en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **IMPONE** al licenciado Félix A. Pérez Espinosa, Fiscal Quinto del Circuito de Chiriquí, **PENA DE MULTA DE CINCUENTA BALBOAS (B/.50.00)**, por haberle faltado el debido respeto.

Se advierte al funcionario sancionado que, una vez ejecutoriada esta resolución, debe comprobar de inmediato ante este Despacho el pago de la multa impuesta, a los efectos de lo previsto en el inciso final del numeral 1o. del artículo 202 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
Magistrado Sustanciador
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR DANILO SOUSA JAÉN CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Donaldo Sousa Guevara ha promovido Acción de Habeas Corpus a favor de Danilo Sousa Jaén y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

El señor Danilo Sousa Jaén está detenido en la Cárcel Modelo a órdenes del señor Fiscal Auxiliar de la República, quien ordenó su detención preventiva dentro de las sumarias que se instruyen por el delito de homicidio en perjuicio de VIELKA LIZBETH MARTÍNEZ VELÁZQUEZ.

Alega el licenciado Sousa Guevara que en las referidas sumarias no existen pruebas que vinculen a Danilo Sousa Jaén, siquiera en forma indiciaria, con la comisión del hecho que se investiga, y que se ha incurrido en un error en el sujeto al identificar a su defendido como el presunto autor del hecho delictivo, porque la descripción de los posibles autores del hecho que hacen las declarantes en la presente investigación, no corresponde a la del detenido Sousa Jaén.

Acogida la acción de habeas corpus, se libró el mandamiento correspondiente contra la autoridad demandada, a fin de que pusiera el detenido a órdenes de esta Corporación y rindiera, en el término de Ley, un informe sobre las razones que motivaron la expedición de la orden de detención preventiva.

Mediante oficio No. 7327, de 28 de junio de 1993, el Fiscal Auxiliar de la República informó que había ordenado la detención preventiva de Danilo Heberto Sousa Jaén, en providencia calendada el día 10 de junio de 1993, con fundamento en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Con su oficio acompañó el expediente contentivo de las diligencias practicadas para investigar el delito de homicidio cometido en perjuicio de Vielka Lizbeth Martínez Velázquez.

Dicha investigación se inició con la diligencia de levantamiento del cadáver de la occisa Vielka Lizbeth Martínez Velázquez, el cual fue encontrado "boca abajo en la rivera izquierda del río Matasnillo, en la Calle No. 14 final (Pueblo Nuevo) detrás de la compañía Transalma ... el cuerpo presentaba rasguños en el cuello, en la cadera parte izquierda, hematomas en la cara ... el cadáver no portaba ninguna identificación ..." (fs. 2). Consta en el informe de comisión del Jefe de la División de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas, de la Policía Técnica Judicial, que se lee a fojas 3, que la occisa fue reconocida en la Morgue del Hospital Santo Tomás por las jóvenes Arelis Mitzila Hernández Escalante y Nuria Alvarez Solano.

De acuerdo al protocolo de necropsia, que forma las fojas 66 a 80 de las sumarias, la causa de la muerte de Vielka Lizbeth Martínez Velázquez fue la asfixia por estrangulación. Su cadáver presentó, al practicarse la autopsia, lesiones traumáticas recientes y premortem en la cara, el cuello, el tórax anterior, el abdomen, la cadera derecha, el miembro superior derecho, ambas muñecas y la región perianal (fs. 69, 70 y 71). Según el médico forense los hallazgos en la vulva, el himen, la vagina y el ano "surgieren coitos recientes y violentos" (folio 78).

Las testigos NURIA ALVAREZ SOLANO y ARELIS MITZILA HERNÁNDEZ ESCALANTE, quienes reconocieron el cadáver de la occisa, declararon que tanto ellas como la occisa VIELKA MARTÍNEZ se dedicaban a la prostitución clandestina, y ambas la vieron por última vez poco antes de las doce de la noche del 18 de febrero del año 1992 en el "área que está justo detrás de la Caja de Ahorros de la Vía España" (fs. 16). Según estas testigos, esa noche, dos hombres que afirmaban eran de la Fuerza de Inteligencia, las contrataron en Vía España, se las llevaron en un auto blanco, en el cual trataron de esposarlas y las amenazaron con violarlas y cuando fueron liberadas, en el monumento a Morelos, de Panamá Viejo, regresaron a la Vía España, lugar donde acostumbran merodear en busca de clientes, para decirle a Vielka que esos hombres eran peligrosos, pero no la encontraron y no volvieron a verla, a pesar de que la esperaron hasta las tres de la madrugada. Estas testigos describen el automóvil en que las recogieron y a los hombres que las agredieron, así:

Nuria Alvarez Solano:

"... uno era de tez blanca con pecas en la cara, de estatura aproximada de 1.80 mts., peso aproximado de 200 libras, cabello amarillo enrulado, estaba vestido con un suéter blanco manga larga, pantalón crema liso, Señor Fiscal el otro sujeto era moreno, tenía entradas en la frente cabellos bajo, tenía lentes, desconozco su vestimenta pero su estatura era pequeña de una aproximación de 1.60 mts., y peso de 160 libras".

...

"... el auto era Toyota, color blanco, cuatro puertas, vidrios ahumados no le pude ver la placa" (fs. 14).

Arelis Mitzila Hernández:

"... el vehículo en mención era de color blanco, de cuatro puertas, con vidrios ahumados, pero no le pude ver la placa, ni una etiqueta que portan en el vidrio con el número de la placa, además los sujetos que viajaban eran así: el conductor era un sujeto joven como de veintisiete a veintiocho años de edad, el mismo tenía el pelo cresposo, y un poco largo, con dos entradas pronunciadas, de tez trigueña, y tenía unas lentes medicadas de color chocolatoso y de aros de carey de color chocolate y vidrios claros, también vestía una camisa de color verde pero no me fijé en el pantalón de qué color era; el otro sujeto, el que trato de esposarme era un sujeto alto, blanco, pecoso, un poco grueso o agarrado, el cabello, como quemado del sol y era enrrulado, y tenía puesto un suéter de color blanco con mangas largas y cuello de tortuga y este sujeto tenía la voz un poco gruesa, eso es lo que puedo decir en relación a los dos sujetos" (fs. 18-19).

Al lado de la víctima se encontró unos "lentes de aro plástico, color chocolate y vidrios sin color, en apariencia para uso de hombre", similares a los que portaba unos de los hombres descritos por las testigos, pero el detenido Danilo Sousa no fue

identificado por Nuria Alvarez Solano, en la diligencia que se lee a fojas 53 del Sumario, como uno de los dos hombres que la agredió el 19 de febrero de 1992.

Al sumario se ha allegado, además de la declaraciones juradas rendidas ante la Fiscalía Auxiliar de la República por NURIA ALVAREZ SOLANO y ARELIS MITZILA HERNÁNDEZ ESCALANTE, las declaraciones juradas rendidas por LOURDES ELIZABETH VALDEZ GONZÁLEZ y MARILIA MARMOLEJO VALDESPINO ante la Fiscalía Auxiliar de la República.

Además de las mencionadas diligencias de investigación en el sumario reposa la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos practicada con la intervención de la señora LOURDES ELIZABETH VÁLDEZ GONZÁLEZ (fs. 55-56), quien en ese acto identificó al señor DANILO SOUSA JAÉN como uno de los dos sujetos que una semana antes del asesinato de VIELKA MARTÍNEZ, la contrató a ella, le preguntó por su amiga VIELKA, y después que ella abordó el auto conducido por este sujeto, él y su acompañante la golpearon e intentaron violarla (fs. 41 a 45). Esta declarante afirma que el hombre que la encontró le mostró un carnet y se identificó como miembro de las Fuerzas de Inteligencia, y describe a los dos sujetos y el automóvil que ella abordó en compañía de ellos así:

> "... un carro de color negro con franjas de color blancas, a bordo iban dos sujetos uno era de tez blanca y tenía pecas en su rostro y parte de su cuerpo o sea abajo del cuello, en los hombros, como de 20 a 28 años, contextura gruesa, musculoso, cabellos castaños de corte bajo, como corte militar, con acento de autoridad como acostumbrado a mandar, tenía una camiseta de color celeste, pantalón Jeans prelavado, era bastante velludo en sus brazos y pecho, tenía bozos, ojos chocolates, y las cejas delgadas del color de sus cabellos, el otro era de tez negra, como de 20 a 24 años de edad, labios normales, cara redonda, era bastante ñato, no tiene bozos, ni barba, corte bastante bajo, como militar, contextura gruesa como el otro, musculoso, brazos cortos y de baja estatura, ojos negros achinados, estaba vestido con camisa manga largas, no recuerdo más, se acercaron hasta donde mí su auto y el de tez blanca era el conductor, me preguntó ¿Dónde esta tu amiga Vielka? yo le respondí que ella no estaba trabajando y en eso me preguntó que cuánto yo cobraba para que me fuera con él, yo le respondí que cobraba 25 balboas y él me dijo que por qué yo era tan cara, si tu amiga Vielka me cobra 10 dólares" (fs. 41 - 42).

En relación con la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos practicada por la Fiscalía Auxiliar, en la cual Lourdes Elizabeth Váldez González reconoció a Danilo Sousa Jaén como su agresor, es conveniente reproducir el informe secretarial que explica las razones por las cuales en el sumario reposan dos diligencias de contenido distinto, una firmada y otra sin firmar:

"INFORME SECRETARIAL

SEÑOR FISCAL:

> Con relación a la diligencia de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PRESOS, de conformidad al artículo 2135 del Código Judicial y que obra a fojas 54 y 55 del presente sumario, informo a usted lo siguiente:
> Para la fecha del día 16 de junio del año próximo pasado, fue comisionado para que en 'FUNCIONES DE AGENTE ESPECIAL' de conformidad al artículo 394 del Código Judicial, me trasladara a la División de Homicidio de la Policía Técnica Judicial, con sede en Ancón, a fin de que practicara una diligencia de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PRESOS en la que tomarían parte activa la señora LOURDEZ ELIZABETH VÁLDEZ GONZÁLEZ (reconocedora) y el detenido DANILO SOUSA (sujeto que se trataría de reconocer).
>
> Por lo que luego de formada la fila de presos y previo juramento legal y llenadas todas las formalidades exigidas por ley para este tipo de diligencias judiciales, se llamó a la señora LOURDEZ ELIZABETH VALDEZ GONZÁLEZ, quien inmediatamente reconoció al señor DANILO SOUSA como uno de los sujetos que para el mes de enero la golpeó e intentó violarla y que este mismo sujeto le preguntara por su amiga VIELKA que posteriormente fue asesinada.
>
> En cuanto a que en el sumario a fojas 54 y 55 aparece una diligencia de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PRESOS firmada por la reconocedora y otra sin firma de ésta. Sucedió lo siguiente:
> En la diligencia de fojas 55 que esta firmada por la RECONOCEDORA se dice que el sujeto reconocido DANILO SOUSA fue el que VIOLO Y ASESINO A LA JOVEN VIELKA LILIBETH MARTÍNEZ y lo que en realidad se quiso decir fue que el citado DANILO SOUSA fue reconocido por la señora LOURDEZ ELIZABETH VÁLDEZ GONZÁLEZ, como uno de los sujetos que para el mes de enero LA GOLPEO E INTENTO VIOLARLA Y QUE LE PREGUNTARA POR SU AMIGA VIELKA que posteriormente fue asesinada.
> A fojas 54 se transcribe la diligencia con la finalidad de corregir el error de redacción, pero como quiera que no se pudo dar con el paradero de la señora LOURDES ELIZABETH VALDEZ GONZÁLEZ, es por lo que esta aparece sin firma" (fs. 107-108).

El imputado DANILO SOUSA JAÉN, al rendir declaración indagatoria ante el Fiscal Auxiliar de la República (fs. 59-61), negó haber conocido a la occisa VIELKA MARTÍNEZ y a LOURDES ELIZABETH VÁLDEZ GONZÁLEZ, (quien lo reconoció en rueda de detenidos), manifestó que no frecuentaba lugares de prostitución clandestina, y que la noche de los hechos que se investigan, estaba en su casa durmiendo. Sin embargo, aceptó que fue denunciado antes por el delito de violación carnal "lo cual nunca fue cierto y el problema se debió a un desacuerdo en la tarifa que debí pagar" (fs. 62). El indagado se refería a la denuncia que en su contra interpuso Marilía Marmolejo Valdespino, quien, al rendir declaración en el presente sumario (fs. 48 a 50), afirmó que la violó el 4 de junio de 1992 y que pudo ser él quien violó y asesinó a su amiga Vielka Martínez. El indagado fue sobreseído provisionalmente en el sumario que se le instruyó con motivo de la denuncia de la señora Marmolejo Valdespino porque aún cuando fue identificado como la persona que la contrató para tener relaciones sexuales con ella, hecho que el denunciado aceptó, la denunciante no compareció para ser examinada por el Médico Forense y no se comprobó si efectivamente había sido violada, como ella lo afirmó.

Al examinar la orden de detención, dictada por el señor Fiscal Auxiliar de la República, el día 10 de junio de 1993, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que la misma cumple con los requisitos formales exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, ya que los hechos delictivos que se investiga están sancionados con pena de prisión mayor de dos años. Además, dicha diligencia señala los elementos probatorios allegados al sumarios para la comprobación del hecho punible y los elementos que figuran contra la persona cuya detención se decreta, que son las declaraciones testimoniales comentadas y la diligencia mediante la cual Lourdes Elizabeth Váldez González reconoció al imputado como la persona que intentó violarla y el hecho de que después del homicidio, el imputado fue denunciado por el delito de violación en perjuicio de Marilía Marmolejo Valdespino, hecho ilícito del cual fue sobreseído provisionalmente porque la denunciante no compareció para ser examinada por el médico forense.

Estos hechos, a juicio de la Corte, si bien vinculan al detenido con otros delitos, cuya existencia no aparece probada en autos, no lo vinculan, hasta ahora, con la violación y el homicidio de Vielka Lilibeth Martínez Velázquez, delitos que sí aparecen probados en el sumario en estudio.

Es notoria la lentitud y falta de diligencia con que se ha instruido el sumario en examen. El homicidio ocurrió el 18 de febrero de 1992 y después de 17 meses la investigación está en su fase inicial y aún no se han practicado pruebas que a la fecha pueden haberse perdido o diluido.

A juicio del Pleno de la Corte es necesario que el Agente del Ministerio Público competente para instruir el sumario aprehenda su conocimiento, a la mayor brevedad posible.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención de DANILO SOUSA JAÉN, ordenada por el fiscal Auxiliar de la República mediante providencia de 10 de junio de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUY LORENZO SALAS SERRET CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO.

VISTOS:

El abogado de esta localidad, Eliécer Chacón Arias, en representación del señor **GUY LORENZO SALAS SERRET**, presentó acción de habeas corpus en contra del Fiscal Auxiliar de la República, por haber ordenado "de manera injusta e ilegal" la detención del premencionado Sala Serret.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, el 19 de mayo se obtuvo la información que aparece a fojas 5 de este expediente, en la que el licenciado Juan Bautista Acosta B., Fiscal Auxiliar de la República, expresa que la agencia del Ministerio Público a su cargo, no ordenó ni verbalmente, ni por escrito, la detención del señor Guy Lorenzo Salas Serret y por tanto no existen razones o argumentos de hecho o de Derecho que sustenten la supuesta orden, no lo tiene bajo su custodia, ni se han levantado investigaciones de ninguna naturaleza en su contra en esa Fiscalía. Esta respuesta dio lugar a que se indagara en todos los centros penitenciarios de la ciudad y la Policía Técnica Judicial sobre la posibilidad de que el señor Salas se encontrara privado de libertad en alguno de los mismos o que tuvieran conocimiento de alguna orden cursada para que se llevara a cabo su detención, y la respuesta obtenida de las instituciones penitenciarias como de la Policía Técnica Judicial (ver fs. 8 y 9) es similar en cuanto a que no existe registro de ningún interno con ese nombre.

Si la acción presentada envolvía un habeas corpus preventivo, tampoco hay el más leve indicio de que tal orden de detención fuera dada hasta la fecha. Ante la realidad captada a través de las diligencias realizadas, carece de objeto la continuidad de este proceso.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA EL CESE de todo trámite procesal en la presente acción de habeas corpus presentada por el licenciado Eliécer Chacón Arias en representación de GUY LORENZO SALAS SERRET.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR SALIM MORDOCK EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha llegado a esta Corporación la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 16 de junio de 1993, dentro de la acción de habeas corpus que promoviera SALIM MORDOCK, mediante apoderado judicial, en contra del Fiscal Primero del Circuito de Colón, en la que se ordenó el archivo del expediente, en virtud de que el peticionario se encuentra gozando de libertad provisional mediante el beneficio de una fianza de excarcelación.

Quien recurre ante el Pleno, pretende que la Corte se adentre al estudio de la sumaria que se levantan en contra de SALIM MORDOCK, ante la Fiscalía Primera del Circuito de Colón para determinar sí la detención decretada en su contra reunía los requisitos exigidos por el Código Judicial. Así también solicita que se deje sin efecto las medidas cautelares a que está sometido el hoy favorecido por la excarcelación bajo fianza, entre ellos el impedimento de salida del país.

El artículo 2565 del Código Judicial establece que la persona que estuviere detenido fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la ley tiene derecho a un mandamiento de habeas corpus. La detención, para que proceda el mandamiento, debe haber sido hecho sin fundamento legal, por lo que la norma siguiente de ese cuerpo de leyes menciona algunos actos que se califican como tales. No obstante lo expuesto, el mismo Código Judicial expresamente indica "el procedimiento de habeas corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado, por cualquier causa, su libertad corporal, ..." (artículo 2572 del C.J.).

Existe a foja 13 del expediente, la contestación dada por el Juez Segundo del Circuito de Colón, Ramo Penal, a petición de Magistrado JOAQUÍN ORTEGA, Sustanciador en primera instancia. En ella se dice:

> "En contestación a su solicitud referente al recurso de habeas corpus interpuesto a favor de SALIM MORDOCK, infórmole que el señor SALIM MORDOCK, se le concedió una libertad provisional mediante fianza (bonos) el día 10 de junio de 1993 of.502, dirigido a la señora MARÍA DEL CARMEN MORALES, Inspectora Jefe de la Policía Técnica Judicial de Colón. El mismo hasta el momento se encuentra gozando de libertad provisional. La fianza fue consignada en este Juzgado mediante certificado de garantía 024747 de 11 de junio 1993 (sic.) y el Lic. Ramón Malca es el fiador. La cuantía es de B/.20,000.00."

Como puede observarse, dentro del presente proceso extraordinario, lo resuelto por el tribunal a-quo no se aparta de la realidad legal y procesal existente. La misma es acorde con el mandato del artículo 2572 mencionado anteriormente.

En cuanto a la expresa petición que el apelante hace de que se deje sin efecto el impedimento de salida vigente, conviene recordar que una de las causales de cancelación de la fianza, según preceptúa el artículo 2182 del Código Judicial es la de que quien goza del beneficio de excarcelación bajo fianza, no puede salir fuera de los límites del territorio de la República sin el permiso del tribunal de la causa.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el día 16 de junio de 1993.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS V. (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR HAVIV AVIAD EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON, MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la resolución de 11 de junio de 1993, dictada por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL mediante la cual "DECLARA: que ha cesado el procedimiento de Habeas Corpus, porque el señor HAVIV AVIAD, obtuvo su libertad corporal, en consecuencia, ORDENA archivar el cuadernillo de tramitación y remitir el expediente con una copia de la presente resolución, a la Fiscalía Primer del Circuito de Colón."

El caso se encuentra, por tanto, en estado de fallar y a ello procede el Pleno de Corte, seguidamente, con vista de los autos de conformidad con lo ordenado por el artículo 2599 del Código Judicial, y previas las consideraciones siguientes:

La decisión del Tribunal A-quo, en el caso de la resolución apelada, se fundamenta en el artículo 2572 del Código Judicial que expresamente dispone que: " El procedimiento de Habeas Corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado, por cualquier causa, su

libertad corporal, pero podrá el agraviado denunciar o acusar a la autoridad o funcionario que ordeno la detención o prisión arbitrarias.".

Por ello, según las constancias de autos, al obtener el señor HAVIV AVIAD su libertad provisional bajo fianza durante la sustanciación de la acción de habeas corpus interpuesta por el peticionario, el Tribunal del conocimiento procedió con base en lo normado por el precitado y transcrito artículo del Código Judicial, o sea, declarar, como lo hizo, el cese del procedimiento de Habeas Corpus y ordenar el archivo del expediente respectivo.

El apelante, sin embargo, al sustentar la alzada entre sus consideraciones se refiere a la naturaleza y finalidad del instituto de Habeas Corpus, así como a los efectos del beneficio de la excarcelación bajo fianza en el proceso penal, cuando la persona sindicada obtiene la libertad provisional en los casos y la forma en que este beneficio procede por ministerio de la Ley. Para sostener así, en el caso de la detención preventiva, que "se mantiene tanto una supuesta orden de detención, que ha ido garantizada con caución mediante fianza de excarcelación, y los impedimentos de salida del país, a través de los impedimentos correspondientes que derivan tanto de la orden primaria, como de la consignación de la fianza, la cual mantiene dichos impedimentos."; y de esa manera concluir: "Por ende, la causa origen del recurso, se mantiene. Existen acciones judiciales que consideramos contrarias a derecho y que restringen el pleno disfrute de la libertad ambulatoria del señor AVIAD. Contrario a las motivaciones del fallo impugnado.".

Así las cosas, es bien sabido que la jurisprudencia de la Corte ha sido invariable, y constante, en cuanto a la aplicación de la normativa del artículo 2572 del Código Judicial, en los casos en que el detenido haya recuperado, por cualquier causa, su libertad, durante la sustanciación de la acción de Habeas Corpus, y el Tribunal del conocimiento, ordena, como en el caso en estudio, el cese del procedimiento y el archivo del expediente.

Por otra parte, el examen de los autos revela que la acción de Habeas Corpus interpuesta por el peticionario, en este caso, está enderezada contra la orden de detención comunicada "mediante Oficio 796 de 22 de marzo de 1993" a la Policía Técnica Judicial, solicitándose a su vez que se declare ilegal la detención del señor AVIAD y en su defecto se ORDENE su libertad" (Fojas 5).

De donde se colige que al darse el presupuesto contemplado por el artículo 2572 en comento, el Tribunal Superior del conocimiento de la acción de habeas corpus tuvo que ordenar el cese del procedimiento, por expreso mandato de la Ley.

En ese sentido, a juicio del Pleno de la Corte, la decisión recaída en la resolución apelada, por tanto, resulta jurídicamente inobjetable, al sostener el sentenciador, en el caso subjúdice, que en tratándose del proceso constitucional de Habeas Corpus "... una vez la persona en cuyo beneficio ha sido formulada la misma, obtiene su libertad, desaparece el motivo de la controversia penal", esto es, que por mandato de la Ley se produce el cese del procedimiento.

Finalmente, en adición a lo expuesto, el Pleno de la Corte considera oportuno advertir que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2599 ibídem, todo indica que contra la resolución que ordena el cese del procedimiento de Habeas Corpus, por las razones legales antes expresadas, no procede recurso de apelación, al establecer dicho inciso que sólo cabe este recurso impugnativo en el efecto suspensivo, "... en el caso de que se declare procedente la detención." (Subraya la Corte); pero no cuando la resolución tiene como fundamento el tantas veces comentado artículo 2572 del Código Judicial, esto es, por haber sido el detenido favorecido con el mandamiento de Habeas Corpus, recuperando su libertad corporal dentro del respectivo procedimiento de la acción de Habeas Corpus.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA la resolución apelada.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR RICHARD ABREGO NÚÑEZ Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado HARMODIO ERNESTO MARISCAL RUIZ, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **RICHARD ABREGO NÚÑEZ** y en contra del **Fiscal Auxiliar de la República** a quien considera responsable "de la falta de libertad que afrenta" el favorecido con esta acción, indicando además que el mismo "tiene 17 días de estar detenido sin justa causa".

Librado el mandamiento de habeas corpus en contra de la autoridad acusada, la misma envió el informe de rigor en los siguientes términos:

"...
A. No es cierto que este Despacho ha ordenado la detención preventiva de RICHARD ABREGO NÚÑEZ, ni verbal, como tampoco por escrito.

B. Este Despacho, dispuso aplicar al señor RICHARD ABREGO NÚÑEZ, medidas cautelares de carácter personales, contempladas por la Ley 3 de 22 de Enero de 1991.
C. No tenemos bajo nuestra custodia, ni a nuestras órdenes al señor RICHARD ABREGO NÚÑEZ.
...".

Como señala el funcionario en el informe que antecede y consta en el cuadernillo adjunto con el mismo, contentivo de las sumarias seguidas al prenombrado ABREGO NÚÑEZ por el delito de hurto, el Fiscal Auxiliar dictó resolución de 25 de mayo de 1993 (fojas 46 a 47) por la cual dispuso aplicarle una de las medidas cautelares personales señaladas en el artículo 2147-B del Código Judicial, específicamente las previstas en los literales b y c que establece:

"... b) El deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública;
c) La obligación de residir en un determinado lugar comprendido dentro de la jurisdicción correspondiente;

Aunado a lo expuesto, se solicitó a la Policía Técnica Judicial y a la Cárcel Modelo certificaciones en el sentido de que si **ABREGO NÚÑEZ**, se encontraba detenido en dichas agencias, confirmando ambas entidades públicas en escritos visibles a fojas 13 y 15 respectivamente, que dicho ciudadano no aparece registrado como detenido.

Lo anterior demuestra que el favorecido con esta acción constitucional no se encuentra privado de su libertad corporal, al sustituirse su detención por la medida cautelar antes citada, de allí que el procedimiento de habeas corpus debe cesar conforme lo preceptúa el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE del procedimiento de la acción de habeas corpus propuesta a favor RICHARD ABREGO NÚÑEZ y en contra del FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA y el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR EURÍPIDES LEMUS CORNEJO Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 22 de junio del presente año, EURÍPIDES LEMUS CORNEJO, a través de su apoderado legal, licenciado GIUSEPPE BONISSI, presentó acción de habeas corpus contra el FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA quien ordenó su detención preventiva en las instalaciones de la Policía Técnica de Ancón.

Librado el mandamiento de habeas corpus el Fiscal Auxiliar de la República informó el 6 de julio mediante oficio N°7856, que no había ordenado la detención preventiva del señor Lemus Cornejo, que dicha persona no se encuentra bajo su custodia y que por el contrario el mismo goza de libertad condicional (cfr. f. 5).

Con posterioridad a la respuesta del Fiscal Auxiliar de la República, se incorporó al expediente un escrito de desistimiento que data del 23 de junio (ver f. 6), lo que es demostrativo de que no se justifica la continuación del proceso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACEPTA EL DESISTIMIENTO de la acción y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR FELIPE CAMARENA CAMARENA Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante un breve escrito que aparece a folio 1 de este expediente, el licenciado **MÁXIMO MEJÍA ORTEGA** presentó recurso de habeas corpus a favor de **FELIPE CAMARENA CAMARENA** y en contra del Fiscal Auxiliar de la República, a quien acusa de haber detenido injustamente en la cárcel modelo a su representado sin que exista causa o motivo legal para ello.

Librado el mandamiento de habeas corpus en la fecha de presentación del recurso, se solicitó a la autoridad acusada el informe correspondiente sobre las razones y el fundamento legal que tuvo para ordenar la privación de libertad de FELIPE CAMARENA CAMARENA, a lo que respondió mediante el oficio N°7879, que aparece a folios 4 y que ingresó a la Secretaría General de la Corte el 12 de julio, en el que el licenciado OMAR A. MACÍAS SALINAS, Fiscal Auxiliar de la República, acepta que ordenó la detención preventiva del accionante, a quien se le sindica por el delito de actos libidinosos en perjuicio de la menor **MILENA YAJEYRY ALVARADO BARBA.** Además, adjuntó el expediente de 40 folios que contiene la investigación adelantada con motivo de la denuncia presentada por la señora **ROSMERY ELENA BARBA DE ALVARADO**, en representación de su menor hija, por el delito de violación carnal y contra FELIPE CAMARENA CAMARENA.

En la documentación que integra el expediente mencionado aparecen diferentes declaraciones de las partes involucradas en el hecho, además de la constancia de nacimiento de la menor afectada y el dictamen pericial procedente del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por el doctor JUAN GUTIÉRREZ, médico forense patólogo, en el que aclara que el examen físico hecho a la menor MILENA YAJEYRY ALVARADO BARBA, de diez años de edad, no demuestra que haya sido objeto de atentado sexual, en virtud de que no se encuentra desflorada, no existen señales de violencia con fines sexuales y no se encuentra embarazada. Como consecuencia de este dictamen, la calificación inicial que se hizo del delito de violación carnal se corrigió por el de actos libidinosos y en proveído de 30 de abril de 1993 (fs. 23-24) el representante del Ministerio Público dispuso ordenar la detención de FELIPE CAMARENA CAMARENA por considerar que se habían reunido las exigencias previstas por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. También constan las diligencias realizadas con motivo de la solicitud de fianza de excarcelación formulada por JUAN SEVERIANO CASTILLO DE LEÓN a favor de FELIPE CAMARENA CAMARENA, solicitud que fue resuelta en auto de 27 de mayo, que le concede el beneficio de excarcelación y fija la misma en B/.1,000.00 (mil balboas).

Ante la realidad procesal a la que se ha hecho referencia, el Pleno debe tomar en consideración las normas que regulan las medidas cautelares de tipo personal que conllevan la privación de libertad, a efecto de establecer si la detención ordenada por el Ministerio Público se encuentra en los supuestos previstos por los artículos 2147 y 2148 del Código Judicial. El delito que se le imputa a CAMARENA CAMARENA está tipificado en el artículo 220 del Código Penal que fija pena de prisión de uno a tres años y un aumento de una tercera parte a la mitad, si concurren algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 219 de la misma excerta; esto significa que aún en el supuesto de que se aplicaran las agravantes descritas por la ley, la pena mínima no superaría los dos años de prisión y por tanto no cabe la detención preventiva ordenada por el Fiscal Auxiliar de la República.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de FELIPE CAMARENA CAMARENA y ORDENA su libertad inmediata si no existe otra causa en su contra.

Notifíquese y cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FRANCISCO MONROY VARGAS Y EN CONTRA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Olmedo Arrocha, actuando como apoderado judicial del ciudadano colombiano **LUIS FRANCISCO MONROY VARGAS,** ha presentado acción de habeas corpus contra el Director General de Aduanas, ya que a la fecha se mantiene vigente la orden de detención librada por esta autoridad por la que se mantiene recluido a su representado en la Cárcel Modelo.

Recibida la presente acción se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada quien respondió a través de la nota No.704-01-20 fechada 2 de junio de 1993, que es del siguiente tenor:

> "A) La detención preventiva del señor **LUIS FRANCISCO MONROY VARGAS** fue ordenada de manera escrita por el Jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de Aduanas mediante Providencia fechada catorce (14) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992).
>
> B) La orden de detención preventiva obedeció a que el señor LUIS FRANCISCO MONROY VARGAS, de nacionalidad colombiana, fue detenido infraganti por Inspectores de Narcóticos el día 13 de septiembre de 1992, cuando pretendía adquirir, de manos del señor Henry Ramírez Zuluaga, un pasaporte falsificado de nacionalidad española con los sellos de entrada y salida de Panamá y un pasaje con destino a Nueva York de la Aerolínea Ecuatoriana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
>
> C) En la actualidad el señor LUIS FRANCISCO MONROY VARGAS se encuentra detenido preventivamente en la Cárcel Modelo y con motivo del mandamiento de Habeas Corpus librado a su favor, queda de inmediato el detenido a órdenes de la Corte Suprema de Justicia".

Citó como fundamento de derecho para decretar la detención del señor Monroy Vargas los artículos 2, 12 y numeral 6 del artículo 14 de la Ley 16 de 29 de agosto de 1979, además, los artículos 15, 40 literal a) y 45 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984.

El mandamiento de habeas corpus fue resuelto por el departamento legal de la Dirección General de Aduanas, en vista que el señor Director se encuentra de vacaciones.

Encontrándose el presente negocio en estado de resolver, a ello se apresta esta Corporación, para lo cual se analizarán los hechos en los que se fundamenta la acción:

1. El Tribunal de habeas corpus ha podido constatar que el señor Luis Francisco Vargas fue detenido casi simultáneamente con el señor Henry Ramírez Zuluaga, ciudadano que se menciona en el informe arriba transcrito.

2. Las pruebas acopiadas por la Dirección General de Aduanas revelan que Monroy Vargas al llegar a Panamá, procedente de Bogotá, traía en su estómago 86 envoltorios o comprimidos, que luego expulsó de su organismo y que en informe del laboratorio toxicológico contenido en la nota LT-55/92 de 14 de septiembre de 1992, suscrito por el licenciado Ricardo Gutiérrez S., se califica como "morfina".

3. Sin embargo, en informes posteriores, el último de los cuales aparece en nota DC0406-93 de 27 de enero de 1993, las pruebas de la sustancia encontrada en el organismo de Monroy Vargas resultaron negativas.

4. La situación anterior dio lugar a que la Corte Suprema, en fallo de 14 de mayo de 1993, determinara que la detención del supuesto cómplice Henry Ramírez Zuluaga "no cumple con las formalidades exigidas por los numerales 2 y 3 del artículo 2159 del Código Judicial, y que, en vista de que las pruebas eran insuficientes para comprobar la existencia del hecho punible, declaró ilegal su detención y ordenó su inmediata libertad.

5. En vista de lo anterior, y con fundamento en el fallo arriba mencionado, la Fiscal Segunda del Circuito del Primer Circuito Judicial, en resolución fechada el 26 de mayo de 1993 ordenó la libertad del señor Monroy Vargas, la cual no se pudo hacer efectiva ya que, previamente a la orden de detención librada por el Agente del Ministerio Público, existía la detención preventiva girada por la Dirección General de Aduanas el 14 de septiembre de 1992.

Frente a los hechos así planteados, el Tribunal de habeas corpus ha considerado necesario revisar el expediente levantado por la Dirección General de Aduanas en este caso, ya que existe una evidente contradicción en el resultado de los exámenes de laboratorio realizado a los comprimidos que traía en su estómago Monroy Vargas.

El estudio de dicho expediente, revela que Monroy Vargas, en su declaración rendida el 14 de septiembre ante el Jefe del Departamento Nacional de Investigaciones Técnicas de Aduanas, en ningún momento negó que traía los comprimidos en su estómago, y lo que es más, tampoco negó que los mismos contenían droga. En efecto, de la referida declaración transcribimos textualmente lo siguiente:

> "PREGUNTADO: Diga el indagado quién fue la persona que le facilitó los ochenta y seis (86) comprimidos que en su interior se presumen contienen cocaína. CONTESTO: Señor, los ochenta y seis (86) comprimidos del cual me habla y que fueron encontrados en mi estómago me fueron facilitados por el señor Arcelio y los ingerí en la ciudad de Bogotá.
>
> PREGUNTADO: Diga el indagado si usted tenía que encontrarse con alguna persona en especial a su llegada a Madrid, España, CONTESTO: Señor, en efecto al momento y si todo hubiese salido bien, debía de haberme esperado un señor moreno, alto, fornido y a su vez el señor HENRY RAMÍREZ le facilitaría la descripción de mi maleta y de los lentes que cargo en estos momentos en mi cintura. PREGUNTADO: Diga el indagado si usted devengaría algún dinero por este trabajo, en caso afirmativo díganos qué cantidad y en que forma se lo pagarían.
>
> CONTESTO: Señor, el arreglo era en total cuatro mil quinientos balboas (B/.4,500.00), divididos en dos partes, ya que se me entregó la suma de dos mil quinientos (B/.2,500.00) en Colombia y a mi llegada a España el señor que me iba a esperar me entregaría el restante o sea dos mil balboas (B/.2,000.00) y además de esta plata tenía que pagar los gastos de impuestos de salidas de los aeropuertos".

Del contenido de dicha declaración se observa, además, que Monroy Vargas llegó a confesar la suma que iba a recibir por transportar la droga en su organismo, de Bogotá a Madrid, España.

En razón de las consideraciones expuestas, el Tribunal de habeas corpus considera necesario ordenar la práctica de pruebas adicionales que aclaren de una vez por todas esta situación.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA la práctica de las siguientes pruebas:

1. Solicitar a la Dirección General de Aduanas, informe cuál fue el procedimiento que se utilizó para hacer llegar a las autoridades del Ministerio Público, la sustancia encontrada en el organismo de Monroy Vargas el día 14 de septiembre de 1992.

2. Solicitar a la Secretaría Especializada en Delitos relacionados con Droga de la Procuraduría General de la República, informe el nombre de los funcionarios que tuvieron acceso a la sustancia encontrada en el cuerpo de Monroy Vargas y el procedimiento que se utilizó para rendir el informe correspondiente.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR EL LICENCIADO. EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, A FAVOR DE JORGE E. RAMOS H. CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edilberto Vásquez Atencio ha interpuesto "formal recurso de habeas corpus a favor de Jorge Enríquez Ramos Herrera y en contra de supuesta orden de detención expedida por el Director de la Policía Técnica Judicial".

Sostiene el letrado que miembros de ese organismo de seguridad, a quienes identifica debidamente, realizan actos de persecución y hostigamiento que se manifiestan en frecuentes allanamientos de la residencia de Ramos, durante los cuales "han mostrado una supuesta orden de detención que afecta a mi representado". Según expresa, a pesar de averiguaciones que tiene realizadas en la Fiscalía Auxiliar de la República y en la División de Captura y Delitos contra la vida e Integridad de las Personas de la Policía Técnica Judicial, no ha podido comprobar la existencia de tal orden de detención, a pesar de lo cual Ramos "se ha tenido que esconder como un prófugo".

Por concedido el mandamiento de habeas corpus, de conformidad con el mandato de los artículos 2576 y 2577 del Código Judicial, se recibió de la autoridad demandada un informe en el que expresa que no ha ordenado la detención de Ramos y en el que alega en el sentido de impugnar expresamente la concesión del mandamiento por la autoridad de habeas corpus (f.6). En la misma fecha de tal informe se recibió por Secretaría General escrito del licenciado Vásquez Atencio en el que comunica el hecho de que, encontrándose en la residencia de Ramos conversando con la esposa de éste último, "miembros de la Policía Técnica Judicial, en forma violenta y fuertemente armados irrumpieron en forma ilegal en la residencia de dicha señora sin una orden de allanamiento y mucho menos los acompañaba un funcionario del Ministerio Público".

Habida cuenta de la parquedad e impertinencia del informe de conducta que fuera remitido por la autoridad demandada, se le requirió un complemento del mismo con el objeto de allegar nuevas luces sobre la causa. En la nueva comunicación remitida con tal motivo se afirma que Ramos "sí ha sido investigado, pero dichas investigaciones se encuentran hoy a cargo de los funcionario de instrucción, por tal razón nos es imposible hacerle llegar" el expediente correspondiente. Al nuevo informe se adjuntaron copias de "oficios por medio de los cuales se pasó a conocimiento, ante el funcionario de instrucción; los expedientes que guardan relación con el hecho citado". La lectura de estos documentos permite establecer que en ninguno de ellos se menciona siquiera el nombre de Jorge Ramos Herrera.

La anterior reseña de esta actuación permite afirmar que a) Ramos Herrera no se encuentra actualmente detenido, b) que la autoridad demandada no ha ordenado su detención, y c) que no se ha podido comprobar la existencia de tal orden, de donde resulta que no se puede entrar a conocer el fondo de la pretensión procesal.

Por las anteriores consideraciones la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA EL CESE de este procedimiento.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JULIO CESAR QUINTANA Y EN CONTRA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **LUIS A. CAMARGO.** compareció ante el Pleno de la Corte con el objeto de interponer acción de habeas corpus a favor del señor **JULIO CESAR QUINTANA.** La acción se promueve contra el señor Procurador General de la Nación, quien mediante escrito visible a foja 8,9 y 10 del expediente remitió su informe de conducta.

Mientras se surtida el trámite de lectura del proyecto de resolución, el recurrente presentó escrito mediante el cual desiste de la acción de habeas corpus que presentara a favor del señor JULIO CESAR QUINTANA.

La Corte ha sostenido que en materia de habeas corpus es viable el desistimiento, siempre y cuando quien lo manifieste sea el detenido o la persona que interpuso la acción.

Al analizar la situación planteada por el licenciado CAMARGO, el Pleno nada tiene que objetar y, por tanto, procede a su admisión.

En tales circunstancias, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus interpuesta a favor del señor JULIO CESAR QUINTANA, en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Copiése y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLÁS ADON ROJAS EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. REPARTIDO EL 25 DE JUNIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se ha interpuesto recurso de habeas corpus a favor de **NICOLÁS ADON ROJAS** contra el Director Nacional de Migración y Naturalización.

Acogido el recurso y librada la acción de habeas corpus, el Director Nacional del Departamento de Migración y Naturalización remite a esta Corporación, mediante escrito de 2 de julio de 1993 visible a fojas 7, su informe de conducta en el que expresa:

1) Que el señor **ADON ROJAS** fue aprehendido en sus oficinas y puesto a órdenes del Director de Migración, ya que no cumplía con los requisitos legales para permanecer en el país.

2) Que el señor **ADON ROJAS** se le había vencido el período de tres (3) meses que le correspondía como turista.

3) Que cuando al señor **ADON ROJAS** se le concedió prórroga de su Visa de Turista, no cumplía con los requisitos para obtenerla porque no tenía pasaje de regreso para su país de origen y que lo que presentó fue un pasaje de la Compañía TICABUS para Costa Rica; de lo que se desprende que la prórroga fue obtenida en complicidad con la funcionaria que lo atendió.

4) Que el señor **ADON ROJAS** solicitó permiso para permanecer en Panamá porque se le estaba venciendo el período de turista, sin mencionar que iba a contraer matrimonio con la ciudadana panameña **FAUSTINA MONTALVO**, con la que se casó 2 días antes del vencimiento de su permiso; lo que hace suponer que dicho matrimonio fue para obtener la residencia.

5) Que el señor **ADON ROJAS** se apersonó a las oficinas 18 días después del vencimiento de su permiso, es decir el 23 de junio y la fecha del vencimiento del permiso era el 5 de junio, razón por la que fue aprehendido para que abandonase el territorio nacional.

6) Que los motivos de derecho se fundamentan en el Decreto Ley 16 de 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 de 20 de septiembre de 1965, y la Ley 6 de 5 de marzo de 1980, específicamente los artículos 38, 58, 60, 65 y 85.

Ahora bien, al analizar las piezas procesales, se advierte que luego de la aprehensión de que fuera objeto el señor **ADON ROJAS** no se dictó la correspondiente resolución para mantener la detención preventiva que debía tener lugar hasta tanto se realizara la deportación.

En reciente sentencia de 25 de junio de 1993, el Pleno estimó que era ilegal el acto privativo de libertad cuando, luego de la aprehensión, hubiesen transcurrido más de veinticuatro (24) horas sin que se dictase la correspondiente orden de detención. (Artículo 2158 del Código Judicial).

Estos fueron los argumentos que esbozó esta Corporación de Justicia:

> "... esta superioridad observa que las ciudadanas dominicanas han permanecido privadas de su libertad desde el 17 de mayo de 1993, sin que el Departamento de Migración y Naturalización de la República de Panamá haya dictado orden escrita de detención en su contra ...".

Las autoridades migratorias al comprobar que las señoras de nacionalidad dominicana, **CUETO SOSA Y RODRÍGUEZ** no poseían la documentación válida que acreditara su permanencia legal en territorio panameño, luego de aprehenderlas, debieron dictar mandamiento escrito de privación de libertad en contra de las mismas, y si fuere el caso, ordenar su deportación y notificarles dicha resolución a las interesadas para que en tiempo oportuno pudieran presentar los recursos que la Ley establece contra la resolución que se dictara, (arts. 65, 66 y 67 del Decreto Ley No. 16 de 1960).

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva del señor

NICOLÁS ADON ROJAS y, en consecuencia, ORDENA sea puesto en inmediata libertad, siempre que no tenga otro caso pendiente.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CARLOS PEREA ROSE EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La ciudadana Ivette Sánchez interpuso acción de habeas corpus a favor de JUAN CARLOS PEREA ROSE, por la detención que en su contra ordenó el Corregidor de San Felipe, quien según informe de dicha autoridad, se encuentra a órdenes de la Policía Técnica Judicial.

Ingresado el expediente a esta Corporación se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director de la P.T.J., que informó en forma inmediata, conforme lo establece el artículo 2582 del Código Judicial, que el señor Perea Rose no se encuentra bajo su custodia y que tiene conocimiento que desde el 28 de junio de 1993 goza de libertad.

A pesar de lo informado, a través del Secretario General de la Corte se requirió al Director de la Cárcel Modelo certificara si en dicho Centro Penitenciario se encontraba detenido el prenombrado PEREA ROSE.

En ese sentido como consta en Oficio No.2407-SJ de 9 de julio de 1993 contestó expresando que "según Nuestros Archivos Centralizados de Secretaría Judicial, Cárcel Modelo, NO existe registrado ningún interno con nombre JUAN CARLOS PEREA ROSE".

Luego de verificar el estado de libertad del favorecido con esta acción constitucional, lo procedente es ordenar el cese del procedimiento.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento de habeas corpus propuesto a favor de JUAN CARLOS PEREA ROSE y el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINA MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A.ECHEVERS (fdo.)JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES LEONEL CONTRERAS MARTÍNEZ Y RUBÉN DARIO MAXWELL RODRÍGUEZ EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En acción de Habeas Corpus ha recurrido ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia los señores LEONEL CONTRERAS MARTÍNEZ y RUBÉN DARIO MAXWELL RODRÍGUEZ, representados por las madres de ambos Magda Esther Rodríguez y Glenda Elizabeth Martínez, respectivamente.

Antes de entrar al fondo de lo planteado en el presente recurso, el Pleno observa que el señor Leonel Contreras Martínez, se encuentra en libertad en virtud de la resolución del 30 de junio de 1993 dictada por la Fiscalía Auxiliar de la República. De manera que respecto del señor Leonel Contreras el Pleno se abstiene de considerar el recurso al darse el fenómeno jurídico de sustracción de materia.

Admitido el presente recurso, se libró mandamiento de Habeas Corpus, en primer lugar, en contra del Director de la Policía Nacional y, en segundo lugar, en contra del Director de la Policía Técnica Judicial, en vista de que en la contestación al mandamiento enviado a estos funcionarios afirmaron que no habían participado en la detención del señor Rubén Darío Maxwell. Librado el mandamiento contra el Fiscal Auxiliar de la República, este contestó el 2 de julio de 1993 mediante oficio No. 7579 visible a foja 11 del expediente que, en efecto, su despacho había ordenado la detención preventiva de Maxwell Rodríguez por delito de tráfico ilícito de drogas mediante proveído fechado 30 de junio del presente año. Así mismo, informó el Fiscal Auxiliar, que la detención preventiva del señor Maxwell Rodríguez se fundamentaba en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En el recurso de Habeas Corpus se aduce que Rubén Darío Maxwell Rodríguez se encuentra detenido y privado de su libertad corporal sin que se le haya informado por escrito ni verbalmente el motivo de su detención.

El Pleno considera que no es cierta la afirmación anterior afirmación por cuanto a foja 22 del expediente contentivo de las sumarias se observa una orden de detención escrita expedida por autoridad competente como lo es el Fiscal Auxiliar de la República y en la cual se ordena la detención preventiva de Rubén Darío Maxwell Rodríguez por implicársele en hechos que tipifican el delito de tráfico ilícito de drogas.

También se observa, a foja 24 del expediente el informe rendido por el Laboratorio Técnico Especializado en drogas, en el cual consta que el material incautado en el lugar de los hechos es la droga denominada "COCAÍNA" en la cantidad de 1.10 gramos.

El Pleno de esta Corporación considera que el informe de captura expedido por los 3 agentes de la Policía Nacional , el reporte de incidente policial, aunado al informe rendido por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, constituyen hechos probatorios suficientes para vincular al señor Rubén Darío Maxwell Rodríguez con los hechos a él imputados. Además, el delito de tráfico ilícito de drogas tiene fijada pena de prisión superior a dos años según la Ley 23 de 1986, razón por la cual en la detención del señor Rubén Darío Maxwell Rodríguez no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, y, por lo tanto, es procedente declarar legal dicha detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA en cuanto a la detención de LEONEL CONTRERAS MARTÍNEZ y DECLARA LEGAL la detención del señor RUBÉN DARIO MAXWELL RODRÍGUEZ y, por tanto, dispone que el detenido sea puesto a órdenes del señor Fiscal Auxiliar de la República.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ULTIMINIO BORBÚA Y EN CONTRA DE LA DIRECTORA DE CORRECCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO. PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ultiminio Borbúa ha presentado, en su propio nombre, acción de habeas corpus con el objeto de que se declare ilegal la detención que sufre como consecuencia del cumplimiento de condena impuesta por el Juzgado Segundo del Circuito de Colón, que consiste en la pena de 40 meses de prisión por el delito de robo cometido en perjuicio de Luisa Mireya Rowe de Domínguez.

Por concedido el mandamiento de Habeas Corpus, el informe de conducta que remitiera la autoridad demandada en cumplimiento del mandato del artículo 2582 del Código Judicial explica la situación procesal y administrativa del peticionario en los siguientes términos:

> "... Ultiminio Borbúa Barrows fue condenado por el Juzgado Segundo del Circuito de Colón, mediante sentencia del 21 de agosto de 1991, a la pena de "40 meses de prisión/inhabilitación de funciones pública", por el delito de Robo cometido en perjuicio de la Sra. Luisa Mireya Rowe de Domínguez.
>
> El sentenciado ingresó a cumplir la pena el 26 de marzo de 1990, se evadió el 2 de septiembre de 1990, es recapturado el 10 de septiembre de 1990. Intentó evadirse el 15 de noviembre de 1991.
>
> De acuerdo a nuestros cómputos cumple su pena total por este delito el 2 de agosto de 1993, tal como consta en la copia del mandamiento que adjuntamos.
>
> El Juzgado Nocturno de Policía de Colón le impuso al precitado interno 90 días de arresto por la evasión, pena esta que iniciará el 2 de agosto de 1993, cuando cumpla la pena total de Mandamiento N° 1262-DNC. del 8 de septiembre de 1992.

Según se aprecia de la lectura del informe contra el actor de esta demanda de habeas corpus ha recaído sentencia condenatoria. Asimismo, se observa que mediante Oficio N° 867, de 18 de noviembre de 1991, el reo fue puesto a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección para la ejecución de la sentencia. Igualmente se comprueba de la lectura del informe que Borbúa Barrows se ha evadido en una ocasión y en otra intentó hacerlo.

Existe además constancia de que, después de cumplir la pena de 40 meses de prisión, el 2 de agosto de 1993, todavía le queda por cumplir 90 días de prisión por el delito de evasión.

Se evidencia también que al detenido no se le ha tramitado su libertad condicional pues no califica para la misma, en virtud de que no reúne los requisitos que preceptúa el artículo 85 del Código Penal.

Por las razones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de

ULTIMINIO BORBÚA y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ALÍ JARAMILLO Y EN CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante esta Corporación de Justicia, la señora FULVIA M. DE JARAMILLO, ha interpuesto formalmente recurso de habeas corpus a favor del ciudadano ALÍ JARAMILLO y en contra del Director de la Policía Técnica Judicial, por considerar que la detención del prenombrado ALÍ JARAMILLO es ilegal y violatoria de sus derechos ciudadanos.

Librado mandamiento de habeas corpus en los términos ordenados por el artículo 2576 del Código Judicial, el despacho del Director de la Policía Técnica Judicial de Panamá, en el informe de ley, expresa lo siguiente:

"Señor Magistrado:

Respetuosamente me dirigido a usted, para dar contestación a mandamiento de HABEAS CORPUS, presentado a favor del señor ALÍ JARAMILLO, contra el suscrito señor Director de la Policía Técnica Judicial.

De acuerdo a lo establecido mediante el artículo 2582 del Código Judicial, me permito rendir el siguiente informe:

A. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor ALÍ JARAMILLO.

B. No tiene razón de ser, en base al punto anterior.

C. No tenemos bajo nuestra custodia ni a nuestras órdenes al señor ALÍ JARAMILLO.

El señor ALÍ JARAMILLO, es miembro de la Policía Técnica Judicial desde el día 17 de abril de 1990.

El pasado 5 de julio del año que decurre en las instalaciones de la Academia de detectives de la Policía Técnica Judicial se produjo un hecho que se relaciona con violación de Derechos Humanos cometidos en perjuicio de la tercera promoción de dicha Academia, en virtud de la cual y de acuerdo a lo establece el artículo 44 de nuestra Ley Orgánica, se le ordenó al Departamento de Responsabilidad Profesional realizara la investigación respectiva, razón por la que se procedió al traslado de los señores RICARDO PUGLIESE, ANGÉLICA PUERTA, ELPIDIO FUENTES, JOSÉ RUISANCHEZ, ALÍ JARAMILLO, ANAYANSI ZAMBRANO; del Departamento de Adiestramiento a la Sección de Mantenimiento por razón de la investigación a realizarse. En ese sentido se hizo tal comunicación a través del Boletín Informativo No.122 del 9 de julio de 1993 y en donde se explica claramente que el señor ALÍ JARAMILLO al igual que otras personas han tenido que cumplir con el traslado y hacer sus funciones en igualdad de condiciones que otros miembros de la Policía Técnica Judicial, por ello jamás ha estado detenido.

De esta forma damos contestación a la providencia de fecha 13 de julio de 1993, emitida por esa máxima autoridad de Justicia.

Atentamente,

JAIME ABAD
Director General."

Como del informe anterior se desprende que el beneficiario de esta acción de habeas corpus es miembro de la Policía Técnica Judicial y al mismo no se le ha privado de su libertad en ningún momento. A JARAMILLO se le trasladó a otro departamento para que ejerza sus funciones en igualdad de condiciones, en virtud de que el Departamento de Responsabilidad Profesional de la Policía Técnica Judicial tiene a su cargo la investigación de un hecho, en que se le relaciona con unión de otros miembros de la institución, por supuesta violación de los derechos humanos. Ante esa realidad procede declarar el cese de todo procedimiento, tal como lo dispone el artículo 2572 de la citada legislación.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO en el recurso de habeas corpus propuesto a favor de ALÍ JARAMILLO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES FERNANDO FRANCO, ROBERTO CZARKOWSKY, ROBERTO LEWIS Y LUIS ALEJANDRO NAVAS Y EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN (SECRETARIA DE DROGAS). MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado FLAVIO GASPAR SÁNCHEZ S. promovió acción de habeas corpus en contra del Procurador General de la Nación en favor de los señores FERNANDO FRANCO, ROBERTO CZARKOWSKY, ROBERTO LEWIS y LUIS ALEJANDRO NAVAS. Admitida la demanda, se libró el mandamiento en contra de funcionario demandado y se le solicitó el informe escrito en los términos que dispone el artículo 2582 del Código Judicial.

El señor Procurador General de la Nación, en Vista N°22 de 8 de julio de 1993, cumplió con lo ordenado por el Magistrado Sustanciador y junto con el informe remitió las copias auténticas correspondientes a la investigación realizada.

En el libelo de demanda se indica que las personas detenidas están involucradas en el supuesto delito de tráfico de drogas. Se asevera que al momento de la detención, no se le comunicó a los detenidos las razones por las cuales se les privaba de su libertad, ni cuáles eran sus derechos legales y fundamentales. Se incumplió, en esta forma, con lo preceptuado por los artículos 21 y 22 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, contrario a lo expuesto por el accionante, la Procuraduría General de la Nación considera que la detención se ajusta a los preceptos legales. Así lo expresa en su informe, cuya parte pertinente se transcribe:

> "...
> La orden de detención de los señores antes mencionados fue decretada por este despacho, mediante resolución de 30 de junio del presente año.
>
> Los fundamentos de hecho que dieron margen a la detención de FERNANDO FRANCO, ROBERTO CZARKOWSKY, ROBERTO LEWIS y LUIS ALEJANDRO NAVAS, se desprende entre otras cosas, por los siguientes hechos:
>
> En enero de 1993, la Policía Federal Alemana recibió informaciones de que un grupo de sujetos de diferentes nacionalidades tenían la intención de importar hacia ese país una suma considerable de Cocaína desde Panamá. La persona encargada de la organización del transporte, fue identificada por la Policía Federal Alemana como ROBERTO CZARKOWSKY, de nacionalidad Polaca, a través de un agente encubierto el cual le ofreció realizar el transporte de la Cocaína por medio de su empresa de carga, y que tras varias negociaciones se llegó a un acuerdo para el transporte de 30 kilogramos de Cocaína.
>
> El día 28 de mayo de los corrientes ROBERTO CZARKOWSKY, le entregó al agente encubierto de la Policía Federal Alemana en Panamá, un vehículo marca Mitsubishi, Modelo Lancer (fs. 2 - 6) y en cuyo maletero se encontraba una maleta color chocolate, marca Sansonite, con una etiqueta de Lacsa y que ella se leía el nombre de FERNANDO FRANCO, teléfono 33-1029, País Panamá, encontrándose en su interior 30 paquetes forrados con cinta adhesiva color chocolate, de aproximadamente un (1) kilogramo cada uno que contenía cierta cantidad de una sustancia de color blanca que se presume sea la droga conocida como COCAÍNA.
>
> Una vez recibido el vehículo junto con la maleta que contenía la supuesta droga se trasladó al agente encubierto junto con detectives de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial a un lugar predeterminado para la práctica de las pruebas de campo a la sustancia ilícita que se presume fuera de COCAÍNA, para así seguir ésta rumbo a Alemania vía Costa Rica, para continuar con las investigaciones relacionadas con el Tráfico Internacional de Drogas, en ese país europeo, lográndose posteriormente la detención en este país (Alemania), de varios sujetos involucrados en la presente investigación.
>
> Por otro lado, aquí en Panamá se tenía conocimiento que el señor ROBERTO CZARKOWSKY de nacionalidad polaca, se encontraba hospedado en el Hotel Costa Inn, por lo que se dispuso la práctica de una diligencia de allanamiento a dicho lugar. Al momento de practicarse la misma se encontraban en la habitación del mencionado CZARKOWSKY el señor ROBERTO LEWIS, quien es mencionado en el informe del Oficial de Enlace de Estupefacientes de la Embajada Alemana en Costa Rica, como integrante de esta organización internacional (fs.15), como también estaban presentes LUIS ALEJANDRO NAVAS de nacionalidad costarricense, SABIN LARREATEGUI LLAMAS, de nacionalidad española, éste último conocido traficante de armas quien fuera detenido el 3 de marzo pasado en la provincia de Chiriquí por estar involucrado en el Tráfico de Armas, desde Costa Rica, país en donde recide (sic), hacia Panamá, y el mismo se encontraba gozando de una medida cautelar ordenada por el fiscal de Chiriquí.
>
> En cuanto al señor FERNANDO FRANCO TORRES, natural de Colombia a quien se le ha investigado y llamado a juicio en ocasiones anteriores por delitos relacionados con drogas, pesan en su contra los señalamientos hechos por

el agente encubierto, de haberle entregado a éste la cantidad de $2,500.00 dólares americanos en billetes de a cien y quien era el responsable de contactar con Colombia el envío de la droga. De la misma manera, como mencionamos anteriormente la maleta marca Sansonite que contenía los 30 kilos de COCAÍNA pertenecía al prenombrado FRANCO TORRES.

El fundamento de derecho para ordenar y mantener la detención de los sindicados FERNANDO FRANCO, ROBERTO CZARKOWSKY, ROBERTO LEWIS y LUIS ALEJANDRO NAVAS, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Actualmente los sindicados se encuentran detenidos y filiados a órdenes nuestras, mediante nota No.DPG-SD-2342-93 del 1° de julio de 1993.

Adjunto al presente informe, le remito copias debidamente autenticadas constantes de ciento trece (113) fojas útiles y, además, le informo que hemos puesto a los sindicados antes mencionados a órdenes de esa corporación, tal como lo exige el artículo 2580 del Código Judicial.

De los Honorables Magistrados,

DR. JORGE RAMÓN VALDÉS CH.
Procurador General de la Nación, a.i.".

Corresponde a la Corte, luego del estudio pertinente, establecer si la detención de los sindicados se ajusta al querer de las normas del Código Judicial referente a la medida cautelar adoptada en contra de los sindicados.

El artículo 2148 del Código Judicial establece que procede la detención preventiva cuando el delito tenga señalada pena mínima de dos años de prisión o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito. La detención, sin embargo, se decretará en diligencia en que se indique cuál es el hecho imputado, los elementos probatorios para la comprobación del hecho punible y los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

En el expediente consta que la Procuraduría General de la Nación, con fundamento a toda la investigación realizada hasta ese momento, mediante diligencia del 30 de junio de 1993 ordenó la detención de todos los encartados, dentro de los cuales se encuentran los cuatro detenidos a cuyo favor se interpuso la acción de habeas corpus.

La detención se ordena por la introducción de droga al territorio nacional en tráfico internacional con destino hacia otros países, delito que apareja pena mínima mayor de dos años.

Por otro lado, dentro de las sumarias aparece la investigación realizada por la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial en unión de funcionarios internacionales en contra del tráfico ilícito de cocaína, tanto de la República Federal de Alemania como de la República de Costa Rica, que llevó a la actual detención de los involucrados en la presente sumaria. Aparece debidamente comprobado que a través de la Policía Federal Alemana se encautaron treinta kilogramos de cocaína que fueron trasladados en operación encubierta, vía Costa Rica, hasta Alemania para lograr desmantelar la red de distribuidores de drogas existentes entre nuestro país, vía Costa Rica con la República Federal de Alemania. Existen suficientes pruebas que establecen que desde el mes de enero de 1993 las autoridades alemanas, en unión de los funcionarios de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial lograron la identificación de las personas que estaban implicadas en Panamá en el tráfico de drogas provenientes de Medellín con destino a Alemania. Existen evidencias que determinan que ROBERTO CZARKOWSKY era la persona que sirvió de enlace en el exterior para la venta de la mercancía ilícita. Así como que FERNANDO FRANCO, nacido en Colombia, era el encargado de la recepción de la cocaína proveniente de su país natal. ROBERTO LEWIS, quien fue detenido en la Habitación CZARKOWSKY, era la persona que servía de intermediario en todo lo relacionado con el cargamento que fue decomisado. LUIS ALEJANDRO NAVAS, cuñado de CZARKOWSKY, estuvo presente con éste durante todo el tiempo en que efectuó la operación para el traslado de la droga.

Los indicios que surgen en contra de todos los detenidos son de tal gravedad que justifican plenamente la detención ordenada por el señor Procurador General de la Nación.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de los señores FERNANDO FRANCO, ROBERTO CZARKOWSKY, ROBERTO LEWIS Y LUIS ALEJANDRO NAVAS y ORDENA que sean puestos nuevamente a órdenes del Procurador General de la Nación.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELA RAFAELA CARRERA DE LEMUS EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante escrito del 29 de junio, el señor Marcos Aurelio Lemus presentó acción de Habeas Corpus a favor de su esposa, la ciudadana dominicana **ANGELA RAFAELA CARRERA DE LEMUS**, contra el Director de Migración y Naturalización por mantenerla detenida ilegalmente.

La señora Carrera de Lemus fue detenida por autoridades de la Policía Nacional en la ciudad de Santiago de Veraguas el día 26 de junio de 1993, pese a que el demandante no lo señala claramente en su escrito, se entiende que está a órdenes de la Dirección Nacional de Migración.

En la misma fecha que se interpuso la acción esta Corte libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada (Fs. 4), luego de habérsele requerido varias veces (Fs. 5) el Director de Migración respondió, mediante nota de 6 de julio de 1993. En su respuesta señaló que no había ordenado la detención de la señora Angela Rafaela Carrera de Lemus, que la misma fue detenida por unidades de la Policía Nacional en la ciudad de Santiago de Veraguas, y como fundamento de hecho para dicha detención señaló que "se encontraba ilegal en nuestro país al momento de requerírsele sus documentos." (Fs. 6). Cito como fundamento de derecho el artículo 62 de la ley 16 de 30 de junio de 1960, modificado por el decreto ley 13 de septiembre de 1965 y la Ley 6a. de marzo de 1980. Finalmente señala que para esa fecha la señora Rafaela Carrera de Lemus ya no se encontraba detenida, pues se le había dado libertad el viernes 2 de junio de 1993.

La Corte no puede dejar pasar por alto la injustificada demora (de cinco días) que tuvo el funcionario demandado para responder el mandamiento de habeas corpus, cuando según la ley debe responderse en el término de dos horas más el de la distancia (artículo 2580 del Código Judicial). La acción de Habeas Corpus es un proceso de previo y especial pronunciamiento, en el que todo funcionario o autoridad de quien se requiera cooperación debe brindarla sin dilación y con preferencia a cualquier otro asunto (artículo 2571 Código Judicial). La actitud arbitraria del Director de Migración demuestra un total desprecio por el imperio de la ley y la justicia en nuestro país.

Luego de las consideraciones anteriores y en vista que la demandante ha recobrado su libertad la Corte debe declarar que se ha operado el fenómeno jurídico de sustracción de materia por lo que debe ordenarse el cese del proceso, tal como lo señala el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA EL CESE del presente negocio y ordena el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS E. AYALA MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES EDUARDO LÓPEZ Y OTROS EN CONTRA DEL DECRETO EJECUTIVO N°171 DE 22 DE JUNIO DE 1992. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS E. AYALA MONTERO** actuando en nombre y representación de los señores **EDUARDO LÓPEZ**, **ROGELIO GONZÁLEZ**, **JOSÉ HERRERA**, **GIL SANTOS RICO Y ALBERTO SÁNCHEZ**, presentó acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 171 de 22 de junio de 1992 y publicado en la Gaceta Oficial No. 22,087 de 28 de julio del mismo año, por medio del cual se estableció el Reglamento Interno del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Admitida la demanda y después de cumplirse todos los trámites del proceso constitucional, pasa el Pleno de la Corte a decidir la controversia planteada, previa las consideraciones que la motivan.

Sostiene el demandante que el Decreto Ejecutivo impugnado viola los artículos 297, 179 y 300 de la Constitución Nacional, el primero en concepto de violación directa y los otros dos mencionados en el concepto de indebida aplicación.

El recurrente explica las infracciones alegadas de la siguiente forma:

> "El artículo 297 de la Constitución Política Nacional es infringido en concepto de violación directa al ser desconocido por el Decreto Ejecutivo N° 171 de 22 de junio de 1992, al pretender legislar sobre materias reservadas de manera exclusiva por la Constitución Política Nacional a la Ley. El artículo 297 de nuestra Carta Magna establece que lo que se denomina una reserva legal, es decir, la necesidad de que las materias de administración de personal al servicio del Estado, específicamente en lo que se refiere a nombramientos, traslados, ascensos, destituciones, cesantía y jubilaciones. Tal facultad no puede ser interpretada como la posibilidad de que se pueda determinar por un Decreto en sustitución de la norma descrita como ley, pues tal como lo expresa el Dr. César Quintero, siguiendo la doctrina universalmente aceptada, la norma a la que se refiere la Constitución al hacer la reserva legal, es una ley **Materia**, es decir, aquella que es aprobada por la Asamblea Legislativa, según el

procedimiento ordinario de aprobación de las leyes y no puede ser suplantada por una norma de rango inferior, tal como ocurre en el presente caso.

El Decreto Ejecutivo No. 171 desarrolla de manera autónoma, normas relativas a traslados, ascensos, destituciones, jubilaciones, etc. referente a los servidores que laboran en el Ministerio de Gobierno y Justicia, lo cual hace que el mismo colisiones con lo expresado por el citado artículo 297 de la Constitución Política Nacional.

También es violado el artículo 179 de la Constitución Política Nacional de modo directo por indebida aplicación, pues se ha interpretado esta norma como si la misma facultara al Órgano Ejecutivo para dictar Reglamentos que normen materias de nombramientos, ascensos, traslados, suspensiones, destituciones, jubilaciones y otras referente a la administración de personal al servicio del Estado, cuando en realidad ni el artículo 179 ni ninguno otro de la Constitución Política Nacional facultan al Órgano Ejecutivo para reglamentar las materias descritas, antes bien, como hemos descrito arriba, tales temas son materia de reserva legal en nuestro Ordenamiento Constitucional. En consecuencia, la dictación de una norma como el Decreto 179 de la Constitución Política Nacional que al listar las facultades del Órgano Ejecutivo no incluyó la de legislar sobre las materias que versa al Decreto demandado.

Finalmente, el Decreto Ejecutivo N° 171 del 22 de junio de 1992 es violatorio, de manera directa por indebida aplicación, del artículo 300 de la Constitución Política Nacional, el cual señala que las Carreras Públicas, incluida la Administrativa, se establecerán por Ley de la República. En tal sentido, son válidos los argumentos que hemos señalados para demostrar la violación del artículo constitucional N° 297, pero además, es importante recalcar que el Decreto Ejecutivo demandado establece una especie de Carrera Administrativa para los servidores públicos del Ministerio de Gobierno y Justicia al contener normas de carácter general, que se pueden resumir en Derechos y deberes de estos funcionarios (lo cual significa en esencia una real carrera administrativa) y tal condición, tal como señala la Corte Suprema de Justicia (pleno) en su fallo de 13 de marzo de 1991, hace que dicho Decreto sea en su totalidad inconstitucional.

No es un Decreto Ejecutivo el instrumento legal idóneo para establecer una carrera administrativa, sino una Ley material, aprobada por el Órgano Legislativo, según el procedimiento constitucional de aprobación de las leyes; tal situación es lo que determina que el Decreto impugnado sea inconstitucional y como tal debe ser declarado".

El Procurador de la Administración coincide con el demandante de que el Decreto Ejecutivo acusado es inconstitucional. Expresa su opinión de la siguiente forma:

"A nuestro juicio le asiste la razón al demandante, ya que corresponde a la Ley establecer los deberes y derechos de los servidores públicos, sus nombramientos, ascensos, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones. Por lo tanto se consagra una categórica reserva legal, y se establece que es a la Asamblea Legislativa a quien corresponde emitir leyes sujeción a los procedimientos constituciones pertinentes".

Un estudio de la demanda demuestra que el reglamento interno acusado de inconstitucionalidad, determina los deberes y derechos de los servidores públicos, de los artículos 36 a 65, comprendidos en el Título III; estableciendo regulaciones sobre ascensos, menciones sobre jubilaciones y pensiones. En el Título IV establece medidas disciplinarias, del artículo 66 al artículo 76, regulando en esta sección casos en que se deben dar suspensiones, causales para destituciones, así como un procedimiento para el trámite de la destitución. Finalmente el Título V regula los casos de nombramientos permanentes y traslados de personal.

El artículo 297 de la Constitución Nacional establece de manera clara, que los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones, serán determinados por la ley. Por lo expuesto, se desprende inequívocamente que un reglamento interno de un Ministerio del Estado o cualquiera otra entidad oficial, no puede establecer normas sobre deberes y derechos de los servidores públicos, ni sobre nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones, ya que éstos principios sólo pueden ser desarrollados por **ley**, por ser propios de las carreras públicas, como la carrera administrativa, la judicial, docente, diplomática y consular, sanitaria y militar, y las otras carreras que determine la **ley**. El Reglamento Interno podría desarrollar estos principios sólo cuando ya existan en la ley de carrera respectiva.

La Corte, en un fallo reciente, de 13 de marzo de 1991, declaró inconstitucional el Reglamento Interno del Ministerio de Hacienda y Tesoro, por las mismas consideraciones que ahora se aducen.

Por lo expuesto la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INCONSTITUCIONAL el Decreto Ejecutivo No. 171 de 22 de junio de 1992.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.)MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ A. PÉREZ EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA SANDRA BRUGIATTI Y OTROS EN CONTRA DEL DECRETO No. 65 DE 1990, EXPEDIDO POR EL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, nueve (9) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado JOSÉ ANTONIO PÉREZ, apoderado judicial de la ciudadana SANDRA BRUGIATI, dentro del proceso o juicio de cuentas promovido por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, ha presentado advertencia de inconstitucionalidad contra el Decreto N°65 de 1990, expedido por el Contralor General de la República "por el cual se dicta el reglamento de determinación de responsabilidades", que según el recurrente sería aplicado al caso que se adelanta a su poderdante en esa institución. Considera el advirtente que este Decreto contradice los artículos 32 y 212 de la Constitución Nacional.

Cumplidos los trámites de rigor, la advertencia fue admitida a través de resolución fechada 6 de noviembre de 1992, y en la misma se ordenó el traslado al Procurador de la Administración para que, dentro del término de ley, emitiera concepto.

Mediante Vista N° 38 de 21 de enero de 1993, luego de un prolijo estudio de la norma impugnada, el Procurador de la Administración concluye que la advertencia no debió ser admitida por razones formales y que, en todo caso, debe ser desestimada porque el Decreto advertido de inconstitucional no contradice norma alguna de nuestra Carta Magna.

En cuanto al estudio realizado por el Procurador, este Pleno considera conveniente resaltar los razonamientos que a continuación se resumen:

En relación a que vulnera el artículo 32 de la Constitución Nacional, relativo al debido proceso, observa el Procurador que la entidad encargada de velar por el patrimonio estatal es la Contraloría General de la República, con fundamento en el artículo 276 de la Constitución Nacional, desarrollado por la Ley 32 de 1984, su Ley Orgánica. Esta función de fiscalización es reglamentada a través del Decreto 36 de 1990, que crea la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, que en el artículo 2 le da competencia a esa Dirección para actuar en situaciones de responsabilidad patrimonial y señala lo siguiente:

> "Aunado a lo anterior, el propio artículo 2° del Decreto de Gabinete N°36 de 1990, ya citado, dispone que el Procedimiento para llevar a cabo dichas actividades (de fiscalización) están establecidos en el articulado del Decreto de Gabinete N°36 que lo contiene; de allí que los trámites legales para decidir sobre responsabilidades de funcionarios públicos en sus gestiones con fondos estatales también fue declarado constitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
>
> Este mismo artículo 2° del Decreto de Gabinete N°36 de 1990, anuncia un reglamento por medio del cual se desarrollará este Decreto de Gabinete que crea la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y señala que lo dictará el Contralor General de la República.
>
> En efecto, dicho reglamento se convirtió en el Decreto N°65 de 1990, acusado de inconstitucional, por medio de la presente advertencia y aduce la demandante que los aspectos que lo hacen inconstitucional se deben a que no fue desarrollado mediante ley formal, puesto que se refiere a una norma de rango constitucional."(Fs.30-31)

También señala que el artículo 1 del Decreto 65 advertido de inconstitucional, contiene disposiciones de carácter normativo referentes a la responsabilidad patrimonial y administrativa, que es competencia de la Contraloría General de la República, y no de los tribunales penales. Agrega, que ninguno de los artículos de la citada norma modifica o varía la legislación penal vigente sobre la materia.

En relación a la violación del artículo 212 Constitucional, sobre los principios inspiradores de las normas procesales, dice el señor Procurador de la Administración:

> "... siempre que se trate del debido proceso en materia distinta a la rama del derecho penal, las normas con rango constitucionales podrán ser desarrolladas aún por Decretos que tengan la característica de ley material, no así de ley formal, por lo que el Decreto N°65 de 1990, al ser una ley material que desarrolla un aspecto del artículo 32 de la Constitución Nacional, no es violatorio del mismo por no revestir las formalidades de una ley emitida por la Asamblea Legislativa.
>
> Aunado a lo anterior, el Decreto N°65 no es violatorio del artículo 212 de la Carta Magna, toda vez que no va en contra del principio de economía procesal ni aumenta los trámites; simplemente establece una vía para llevar a cabo las investigaciones y tomar las medidas necesarias para recuperar bienes estatales malversados, sin violar los derechos consignados en la ley que para este particular se denomina DEBIDO PROCESO.
>
> Nos encontramos frente a una facultad ejercida por delegación legal ..., que se concede al Contralor General de la República la tarea de reglamentar el procedimiento a utilizar en los casos en que interviene la Dirección de Responsabilidad Patrimonial con lo que podemos afirmar que el Decreto N°65 de 1990, emitido por el señor Contralor cumple con un mandato legal y desarrolla disposiciones de jerarquía de Ley, que contiene el Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990." (Fs.34-35).

En base a estos razonamientos concluye el Procurador de la Administración que no existe contradicción entre el Decreto N°65 de 1990 y la Constitución Nacional.

Remitido el expediente a esta Superioridad, se publicó en un periódico de la localidad el edicto 146 a fin de que las personas interesadas presentaran argumentos a

favor o en contra del presente negocio. Este término fue utilizado solamente por la parte actora quien presentó escrito de alegato.

CRITERIO DE LA CORTE

En vista de que el presente negocio se encuentra en estado de fallar, el Pleno de la Corte hace los siguientes señalamientos:

1. En cuanto a la advertencia en estudio tenemos que en su parte enunciativa señala lo siguiente:

> "Se advierte a los Honorables Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial que **el Decreto N°65 de 1990**, expedido por el señor Contralor General de la República que contiene el Reglamento de la Determinación de Responsabilidades que se debe aplicar en la presente encuestra (sic) es, **a mi juicio**, **violatorio de los artículo 32 y 212 de la Constitución Política**, por lo que le solicito, antes de aplicarlo, se sirva elevar consulta al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que el Pleno de nuestra más alta corporación de justicia declare si dicho elemento jurídico es constitucional o inconstitucional antes de que sea aplicado".(Fs.16-17) (Negrilla de la Corte)

Del párrafo transcrito se infiere que el advirtente impugna en su totalidad el Decreto en cuestión y señala como normas violadas los artículos 32 y 212 de la Constitución Nacional.

De acuerdo al artículo 2551, tanto en la demanda, como en la consulta o la advertencia de inconstitucionalidad su libelo debe contener la transcripción literal de la disposición, norma o acto acusado de inconstitucional y la indicación de las normas constitucionales que se estimen infringidas y el concepto en que lo han sido. En los casos que se demande la inconstitucionalidad de una ley u otro documento publicado en la Gaceta Oficial, no habrá necesidad de acompañar la copia y bastará con citar el número y la fecha de la Gaceta Oficial respectiva.

En relación a este punto la Corte se ha pronunciado en el fallo de 4 de julio de 1990 de la siguiente manera:

> "Por ello, salta a primera vista que el advirtente en el escrito anteriormente transcrito ni siquiera expresa con claridad si la advertencia de inconstitucionalidad es contra toda la Ley 16 de 6 de junio de 1987, o, por el contrario, lo es contra los artículos de dicha excerta supuestamente aplicable al caso, en cuyo caso debió al menos cumplir con los elementales requisitos de transcribir literalmente las disposiciones, normas o actos acusados de inconstitucionales y explicar el concepto de la infracción, pero no limitarse a enunciar el principio contenido en la norma constitucional ..."

En la presente advertencia, la parte actora no transcribió la norma tachada de inconstitucional ni citó la gaceta oficial en la que se publicó dicha norma tal como lo exige la Ley.

2. Al formular los conceptos en que fundamenta su advertencia señala:
a. El artículo 32 ha sido violado en forma directa, pues la determinación del procedimiento y responsabilidades debe reglamentarse a través de ley y no de decretos: "Esta disposición constitucional ha sido violado en forma directa, toda vez que al expedirse el procedimiento para la determinación de responsabilidades, y el grado de tales responsabilidades, utilizó el mecanismo de un Decreto, en ejercicio de facultades reglamentarias, instrumento jurídico que la norma constitucional prescribe que ha de ser mediante Ley formal..., el acto expedido por la Asamblea Legislativa..." (Fs.17-18).
b. En relación al artículo 212 considera que ha sido violado en forma directa, casi por la misma razón que el anterior. En forma casi ininteligible explica el advirtente que, por razón de que el propósito del procedimiento contenido en el Decreto 65/1990 es asegurar "el reconocimiento de derecho sustanciales que corresponden al Tesoro Nacional, tal procedimiento debió quedar consignado en una Ley Formal y no en un Decreto Reglamentario". Esta situación contradice, a su juicio, lo dispuesto en el artículo 212 de la Constitución.

3. Como ha señalado la Corte en fallos anteriores, para que proceda la advertencia de inconstitucionalidad la norma sobre la cual ésta recae, no debe haber sido aplicada al proceso, situación que no se da en este caso, pues para iniciar el proceso o juicio de cuentas contra la señora Brugiati, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial se basó en el procedimiento establecido, tanto en el Decreto de Gabinete 36 de 1990 como en el Decreto No. 65 del mismo año que es su reglamento, por lo que la Corte considera que en términos generales la norma impugnada ya fue aplicada.

4. Con relación a la cuestión de fondo, señalamos lo siguiente:
a. El Decreto 65 de 1990 advertido de inconstitucional forma parte de un conjunto de normas relacionadas con la fiscalización de los fondos públicos y la determinación de las responsabilidades que resulten de actos ilícitos que resulten de su manejo. Este conjunto de normas tiene su base constitucional en el artículo 276 de la Constitución Nacional, que fue desarrollado, en parte, por el Decreto de Gabinete 36 de 10 de febrero de 1990, que tiene carácter de Ley material según jurisprudencia de la Corte. El Decreto 65 de 3 de marzo de 1990, cuya constitucionalidad se impugna en el presente negocio, viene a desarrollar lo consignado en aquel Decreto de Gabinete.

Las normas citadas ya han sido objeto de demandas de inconstitucionalidad. Así vemos que el Decreto de Gabinete 36 de 1990 fue impugnado en su totalidad por considerar los demandantes, que violaba los artículos 32 y 212 de la Constitución Nacional. Toda vez que este Decreto de Gabinete está estrictamente relacionado con la norma en estudio, ya que es la base de ésta, y a los dos se les acredita el vicio de crear un sistema de doble juzgamiento por el mismo acto, el Pleno considera necesario hacer mención de este fallo, en el que la Corte concluyó que "NO ES INCONSTITUCIONAL LA TOTALIDAD DEL DECRETO DE GABINETE N°36 de 10 de febrero de 1990" y declara inconstitucionales algunas frases contenidas en los artículos 2, 4, 14 y 18 del mismo Decreto.

Para comenzar, en aquel fallo la Corte aclaró que los procesos que lleva adelante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, escapan a la esfera penal, tal como lo explica el siguiente extracto:

> "El Decreto de Gabinete en comento cambia la orientación de los Tribunales de Cuentas que aparecían en la ley 32 de 1984, y le asigna a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial un carácter eminentemente administrativo, más propiamente de justicia fiscal, y de allí que sus resoluciones, a diferencia de lo señalado por el artículo 71 antes mencionado, adquieran el carácter de un acto administrativo, totalmente matizado por la naturaleza de la institución de donde procede."

Este argumento lo fundamento la Corte en un fallo del Consejo de Estado Colombiano que estudiaba el mismo tema, en el que concluyó que en los casos de pérdida o daño de los bienes del Estado, la investigación penal la debe adelantar el juez correspondiente, según el delito y la calidad de las personas sindicadas, pero la investigación fiscal corresponde a la Contraloría General de la República.

Posteriormente, la licenciada Edisa Flores de De la Rosa demandó la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 4 del Decreto 65 de 1990 que se demanda en este negocio, pues consideraba que violaban los artículos 153, numeral 1; 276; 2 y 31 de la Constitución Nacional. En esta ocasión el Pleno apuntó:

> "En el caso que nos ocupa es evidente que la Constitución ha otorgado a la Contraloría General de la República la potestad reglamentaria, según se desprende claramente del numeral 2 del artículo 276 de aquélla que dispone que la Contraloría General puede regular los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos a fin de que se realicen con corrección y según lo establecido en la ley...y también la faculta, en el numeral 6 del artículo 276, para establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que sean efectivos los créditos a favor de las entidades públicas ..."
>
> "Considera el Pleno que como la Contraloría General de la República tiene potestad reglamentaria, para expedir reglamentos de ejecución de leyes y reglamentos independientes, dentro de las materias a las que se refieren los numerales 2 y 6 del artículo 276 de la Constitución, el Contralor estaba facultado para expedir el Decreto N° 65 de 23 de marzo de 1990, que reglamenta la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República. Por esta razón es evidente que no se han infringido los artículos 153, 276 ni 2 de la Constitución.
>
> "En cuanto al artículo 31 de la Constitución se refiere, al Pleno coincide con la opinión de la representante del Ministerio Público en cuanto señala que el artículo 4, literal c del Decreto N°65 no erige en delito ninguna conducta, ni establece pena alguna por lo que tampoco se ha producido infracción de esta norma."(fallo de 8 de febrero de 1992. Demanda de Inconstitucionalidad, Edisa Flores de De la Rosa, contra los artículo 1 y 4 del Decreto 65 de 3 de marzo de 1990).

En base a los argumentos expuestos, la Corte declaró que los artículos 1 y 4 del Decreto en cuestión no son inconstitucionales.

En los fallos anteriores la Corte ha dado, pues, respuesta a los planteamientos del advirtente, ya que el fallo del 8 de febrero de 1992, le reconoce a la Contraloría la potestad para reglamentar los procesos de cuentas, teniendo como base la jurisprudencia de la Corte que le reconoció carácter de ley material a los Decretos de Gabinete emitidos mientras la Asamblea Legislativa no estaba sesionando.

El Decreto de Gabinete 36 de 1990, dictado en estas circunstancias, autoriza al Contralor General de la República para reglamentar dicho Decreto de Gabinete, por lo que el Decreto 65 de 1990 tiene completo sustento constitucional.

Del análisis hecho la Corte Suprema concluye que la norma impugnada de inconstitucional no vulnera norma alguna de la Constitución Nacional.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el Decreto 65 de 1990 emitido por el Contralor General de la República "Por el cual se dicta el reglamento de determinación de responsabilidades".

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO M. RÍOS V.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LOS LICENCIADOS RAFAEL MURGAS TORRAZZA Y ROLANDO MURGAS TORRAZZA DEL ARTICULO i DE LA LEY 20 DE 22 DE JULIO DE 1991, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los licenciados Rafael y Rolando Murgas Torraza, actuando en sus propios nombres, han presentado demanda de inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 20 de 22 de

julio de 1991 por la cual se aprobó el Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América sobre asistencia mutua en asuntos penales.

Consideran los demandantes que dicha norma viola los artículos 1, 24, 25, 28, 31, 40, 43, 198, 199, 216 y 157 numeral 1 de la Constitución Nacional.

La presente demanda se encuentra para resolver sobre su admisibilidad, a lo que se avoca este Pleno, previas las siguientes consideraciones:

Según el informe secretarial que reposa a fs. 43 del expediente, el Pleno de la Corte ya se ha pronunciado con relación a esta materia, en resoluciones fechadas 28 de julio de 1992 y 26 de febrero de 1993, conforme a las cuales se resolvió demandas de inconstitucionalidad presentadas por los mismos abogados contra el mismo cuerpo legal. La primera de ellas demandaba la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley 20 de 22 de julio de 1991 y en esa ocasión la Corte declaró como inconstitucionales algunas frases del artículo demandado. Posteriormente, la resolución del 26 de febrero de 1993 resolvió la demanda en la que se impugnaban los acápites (a) y (d) del ordinal 2 del artículo 1; ordinal 1 del artículo 2; acápites (b) y (d) del ordinal 1 del artículo 3; ordinal 3 del artículo 4; acápite (c) del ordinal 1 del artículo 7; ordinales 5 y 6 del artículo 7; artículo 9 y artículo 10. En esta ocasión la Corte consideró que la acción de inconstitucionalidad no era viable, para ello se basó en el siguiente razonamiento:

> "La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados sale al encuentro de las posibles consecuencias prácticas de la teorías monista, la que reconoce, estableciendo mecanismos idóneos otros que el de la enmienda por acuerdo directo surgido entre las partes (a.39). Es el caso de la nulidad de un tratado sobrevenida de la violación de una disposición del derecho interno de uno de los contratantes, concerniente a la competencia para convenir, "cuando esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su Derecho interno" (a.46) y, en virtud del "jus cogens", cuando el tratado se encuentre en oposición a una norma imperativa de Derecho Internacional, incluso en el evento de que tal norma surja con posterioridad a la firma del tratado (a.64), con las consecuencias jurídicas derivadas de la nulidad que son regladas por el artículo 71."
>
> Las consideraciones anteriores colocan este proceso constitucional en igual situación a la analizada por la Corte en su sentencia de 15 de octubre de 1965, cuando todavía no existía el compromiso vinculante de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que en nuestro país entró en vigor el 27 de enero de 1980, luego de su ratificación mediante la ley 17 de 1979. Esta última circunstancia refuerza la convicción de que no están presentes en la causa sub-judice razones de valor que justifiquen variar el precedente que sienta esa sentencia." (Fs.51-52)

La sentencia de 1965 a la que hace referencia el fallo antes citado resolvió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Domingo H. Turner contra el Tratado del Canal de Panamá de 1903, entre nuestro país y los Estados Unidos de América. En esa ocasión la Corte se expresó de la siguiente manera:

> "un estado no puede a través de sus órganos jurisdiccionales declarar inválido un convenio internacional porque viola las normas y principios de su Constitución, ni porque sea incompatible con su existencia y con su desarrollo institucional. Estima la Corte que un tratado internacional suscrito por el Estado panameño no puede ser desconocido por nuestro país que, en prueba de su madurez y aptitud para la vida independiente, ha consagrado en las tres Cartas que ha regido sus destinos desde que se advino al concierto internacional el principio pacta sunt servanda ...". (Citado por la Corte a Fs.46)

Los párrafos transcritos demuestran que el Pleno de la Corte ya se pronunció sobre la materia y no se han presentado circunstancias que hagan variar el criterio planteado por la Corte en la sentencia citada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la república y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE, la acción de inconstitucionalidad propuesta por los licenciados Rolando y Rafael Murgas Torraza contra el artículo 1° de la Ley 20 de 22 de julio de 1991, por la que se aprobó el Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América sobre asistencia mutua en asuntos penales.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO M. RÍOS V.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DEL IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO RAÚL TRUJILLO MIRANDA DENTRO DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 1 DE 1985 PRESENTADA POR EL ABOGADO MANUEL BELOI GARCÍA ALMENGOR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El magistrado Raúl Trujillo Miranda ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema se le separe del conocimiento de demanda de inconstitucionalidad presentada por el

abogado Manuel Beloi García Almengor contra el artículo 7 de la Ley N°1 de 28 de febrero de 1985, que grava con el impuesto sobre la renta a una tasa del 5%, con retención en la fuente, los gastos de representación que perciben los servidores públicos.

Tal solicitud la fundamenta el Magistrado Trujillo en el numeral 3 del artículo 2562 del Código Judicial. El precepto en referencia señala que es causal de impedimento: "tener el magistrado su cónyuge, o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, interés en la decisión del caso."

Como quiera que el fallo que se dicte en este negocio constitucional pudiera afectar a todos los funcionarios que, por razón del cargo que ocupan, reciben gastos de representación, se advierte que resulta fundado el impedimento que se impetra.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el magistrado Raúl Trujillo Miranda para conocer del presente proceso de inconstitucionalidad y DISPONE llamar a su suplente personal, Dr. Jorge Fábrega Ponce, para que integre el tribunal accidental.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO RÍOS V.
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. RAÚL E. NÚÑEZ CÁRDENAS CONTRA EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 1320 DEL CÓDIGO CIVIL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Tribunal de Apelaciones y Consultas del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo de lo Civil, ha sometido a la consideración de esta Superioridad, la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por el licenciado Raúl Núñez Cárdenas, apoderado judicial del señor Desmond Santamaría Benavides, dentro del Juicio de Lanzamiento promovido por Transportistas de la Terminal de Veraguas, S. A. contra su poderdante.

El licenciado Núñez Cárdenas advierte la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 1320 del Código Civil.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda presentada, el Pleno de la Corte observa que la misma no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 2551 del Código Judicial, ya que el que advierte no expone los hechos que le sirven de fundamento a su pretensión, ni el concepto de la infracción, limitándose a transcribir la norma acusada de inconstitucional, y a indicar las disposiciones constitucionales que estima violadas. Como la demanda presentada no cumple con los requisitos señalados no puede ser admitida, ya que así lo dispone el artículo 2552 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Advertencia de Inconstitucionalidad promovida por el licenciado Raúl A. Núñez Cárdenas, en representación de Desmond Santamaría Benavides dentro del Proceso Sumario de Lanzamiento incoado en su contra por TRANSPORTISTAS DE LA TERMINAL DE VERAGUAS, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LOS LICENCIADOS GUILLERMO A. COCHEZ, RAÚL JERÓNIMO OSSA Y MILTON HENRÍQUEZ SASSO, EN CONTRA DEL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 2 DEL ARTICULO 206 DE LA LEY 49 DE 4 DE DICIEMBRE DE 1984, MODIFICADO POR LA LEY 7 DE 27 DE MAYO DE 1992. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los Legisladores **GUILLERMO A COCHEZ, RAÚL JERÓNIMO OSSA Y MILTON HENRÍQUEZ SASSO,** presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 del artículo 206 de la ley 49 de 4 de diciembre de 1984, modificado por la ley 7 de 27 de mayo de 1992.

Acogida la demanda se le dio traslado al Procurador de la Administración, quien se opuso a la declaratoria solicitada. Cumplido todos los trámites procesales establecidos por el libro cuarto del Código Judicial, pasa la Corte a decidir la controversia constitucional planteada.

Un examen del caso constitucional bajo estudio revela, que ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el tema de la constitucionalidad de la exoneración de los automóviles de los legisladores de la República. En efecto, mediante sentencia de 16 de julio de 1987, bajo la ponencia del Magistrado Camilo O. Pérez, (Registro Judicial julio de 1987 pág. 36 a 42) la Corte sostuvo que no era inconstitucional el numeral 2 del artículo 206 de la ley 49 de 4 de diciembre de 1984, que había sido demandado por el Dr. Carlos Iván Zúñiga. El Artículo impugnado por los Legisladores **Cochez**, **Ossa** y **Henríquez**, es el mismo, con la modificación que le hizo la ley 7 de 27 de mayo de 1992, que ahora lo identifica con numeral 2 del artículo 227 de la ley Orgánica, que regula el Régimen Interno de la Asamblea Legislativa. Este artículo solamente cambia en cuanto a que el suplente de Legislador tendrá ese privilegio cada tres años mientras que antes de la reforma el privilegio era por una sola vez.

El párrafo final del artículo 203 de la Constitución Nacional establece que las decisiones de la Corte en ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la gaceta oficial. Como se aprecia, las sentencias dictadas en los procesos constitucionales son finales y definitivas. Por finales se entiende cosa juzgada constitucional y por tanto no puede volver a plantearse el mismo problema decidido por la Corte en casos anteriores y por definitivas se entiende que contra la decisión la Corte no cabe recurso alguno. En el presente caso estamos en presencia de una sentencia final de la Corte, del 16 de julio de 1987.

La doctrina contenida en la sentencia de 16 de julio de 1987 se integra al bloque de la constitucionalidad y, por lo tanto, debe ser aplicada por la Corte en este proceso constitucional.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el numeral 2 del artículo 206 de la Ley 49 de 1984 modificado por la Ley 7 de 27 de mayo de 1992 que ahora se identifica como el numeral 2 del artículo 227 del reglamento Orgánico, que regula el Régimen Interno de la Asamblea Legislativa.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS RIVERA Y RIVERA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR WELLINGTON FUNG LOW, EN CONTRA DEL RESUELTO ALP-094 DE 30 DE AGOSTO DE 1983, MEDIANTE EL CUAL EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CREA UNAS TASAS POR LA FUMIGACIÓN A PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN CONCEPTO DE SELLOS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense RIVERA Y RIVERA, actuando en nombre y representación de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, ha interpuesto acción de inconstitucionalidad contra el Resuelto ALP-094-ADM de 30 de Agosto de 1983 dictado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

De acuerdo a los hechos que fundamentan la pretensión, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario estableció en la República de Panamá, a través del resuelto impugnado, el cobro de unas tasas por diferentes servicios que presta, en concepto de sellos, retención de productos, inspección veterinaria, aspersión, desinfección, fumigación e inspección cuarentenearia a todo animal, planta o subproducto de los mismos y/o vehículo aéreo, marítimo o terrestre que ingrese por los aeropuertos o recintos aduaneros de la jurisdicción nacional.

A juicio de la firma recurrente, el citado resuelto -que aparece publicado en la Gaceta Oficial N°19.899 de 16 de septiembre de 1983- es violatorio de los artículos 48; 153, numeral 10; 179, numeral 14; y 17 de la Constitución Nacional.

El Procurador General de la Nación, a quien correspondió emitir concepto en la presente acción de inconstitucionalidad, luego de un extenso análisis, considera que el resuelto impugnado no infringe los preceptos constitucionales que se dicen infringidos.

Ahora bien, como quiera que la Corte resolvió en sentencia reciente de 5 de mayo de 1993 una acción de inconstitucionalidad en la cual el objeto debatido era muy similar a la situación que se presenta en este proceso constitucional, no se harán mayores referencias a los puntos de vista jurídicos esbozados por quienes han tenido participación en este negocio.

Partiendo de esta premisa, conviene destacar que la Ley 51 de 2 de diciembre de 1972, expedida por el Consejo Nacional de Legislación, autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para establecer el cobro de tasas por servicios que preste. Dicha Ley fue publicada en la Gaceta Oficial N°18.477 de 14 de diciembre de 1977, y según el artículo 4 entraría a regir a partir de su promulgación.

Los artículos 1 y 2 de la citada ley son los que han servido de sustento a la expedición del Resuelto que en esta instancia judicial se impugna, pues tales disposiciones preceptúan lo siguiente:

> "ARTICULO 1.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para cobrar tasas en concepto de fumigación e inspección de cuarentena a todo vehículo aéreo, marítimo o terrestre que ingrese al país, por cualesquiera de los puertos, aeropuertos o fronteras del territorio nacional".
>
> Exceptúase de este pago, todo vehículo a motor, nave o aeronave, propiedad del Estado o de los municipios".
>
> "ARTICULO 2.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el cobro por la expedición y renovación de permisos de exportación, importación, tránsito o traslados de animales y de productos o subproductos de origen animal o vegetal.
>
> Todas las entidades públicas nacionales o municipales estarán exentas de este pago".

Ahora bien, observa la Corte que en realidad lo que hace el Resuelto ALP-094-ADM de 30 de agosto de 1983, es desarrollar los preceptos legales que consagra la ley 51 antes mencionada. En otras palabras, dicho resuelto pretende reglamentar la ley 51.

Sobre el particular, resultan elocuentes los razonamientos que expuso el Pleno en la sentencia de 5 de mayo de 1993:

> "No es posible en tal virtud, de acuerdo al tenor literal de ese precepto (artículo 179, numeral 14 de la Constitución Nacional), a una interpretación sistemática del magno estatuto y a la costumbre constitucional, desarrollar o reglamentar una ley por medio de un simple **resuelto ministerial**, que ignora la formalidad constitucional sustantiva de la participación del Presidente de la República en la formación del acto" (Acción de inconstitucionalidad interpuesta por la firma de abogados RIVERA Y RIVERA, en representación del señor WELLINGTON FUNG LOW, contra el Resuelto ALP-036-ADM de 4 de septiembre de 1991, mediante el cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario crea unas tasas por la fumigación de productos y subproductos agropecuarios).

Como puede apreciarse en la transcripción anterior, los resueltos ministeriales, que vienen a ser actos administrativos de **carácter individual** amparados en una costumbre constitucional cuya vigencia ha permitido, que no poseen la virtud de constituirse en mecanismos a través de los cuales se puedan desarrollar o reglamentar preceptos legales.

Ello es así, por la sencilla razón de que el artículo 179, numeral 14 de la Constitución Nacional, atribuye de manera **exclusiva** al Presidente de la República la potestad reglamentaria, que no es otra cosa que la facultad que tiene el Mandatario para reglamentar -a través de un Decreto que también es firmado por el Ministro del ramo respectivo- las Leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.

Desde este punto de vista, si un resuelto ministerial -que es un acto firmado por el Ministro y Viceministro del ramo respectivo- desarrolla o reglamenta una Ley formal o un Decreto con valor de ley que no ofrezca dudas sobre su constitucionalidad, es obvio que a la luz del artículo 179, numeral 14 de la Carta Magna, deviene en un acto eminentemente contrario a la Constitución y, en consecuencia, inconstitucional por vicio de forma.

En mérito de los razonamientos que preceden, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el Resuelto ALP-094-ADM de 30 de agosto de 1983 dictado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Notifíquese y Publíquese en la gaceta oficial.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO GUILLERMO A. DE LEÓN LEE, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, RUBÉN DARIO CARLES, Y EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 124, 125 Y LA FRASE FINAL DEL ARTICULO 487 DEL CÓDIGO ELECTORAL. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

El Lic. GUILLERMO A. DE LEÓN LEE, en su condición de abogado de la Dirección de Asesoría Legal de la Contraloría General de la República y en virtud de la autorización y el poder que le otorgara el señor Rubén Carles, Contralor General de la República, ha presentado demanda para que se declaren inconstitucionales "la totalidad de los artículos 124 y 125 del Código Electoral, modificados por los artículos 12 y 13, respectivamente, de la Ley 17, de 30 de junio de 1993, así como la frase final del artículo 487 del mencionado Código, modificado por el artículo 66 de la misma Ley 17 de 1993." En su petición añade "Subsidiariamente solicito que se declaren inconstitucionales los numerales 2 y 3 del inciso segundo y el tercer inciso del artículo 124 del Código Electoral, tal como quedó modificado por el artículo 12 de la Ley 17 de 1993 y los incisos 1° y 2° del artículo 125 tal como quedó modificado por el artículo 13 de la citada Ley."

Los artículo 2251 y 2252 del Código Judicial establecen los requisitos necesarios que deben atenderse en la formulación de las acciones de inconstitucionalidad. Así, el

libelo debe contener los requisitos comunes a toda demanda, la transcripción literal del acto impugnado y la indicación de las normas constitucionales que se consideren violadas, con la explicación del concepto de esa infracción. Se debe acompañar copia auténtica del acto acusado de inconstitucional o, cuando se omita, señalar la causa por la cual no se haya podido obtener esa copia; tratándose de ley u otro documento publicado en la Gaceta Oficial mencionar el número de ella y su fecha.

A grandes rasgos la demanda subjúdice reúne las exigencias de las normas señaladas. No obstante, cuando se da cumplimiento a la obligación de señalar "La cosa, declaración o hecho que se demanda; ..." (numeral 5, artículo 654 del Código Judicial) el pretensor divide el petitum en una declaración de inconstitucionalidad de la totalidad de los artículos 124 y 125 y la frase final del artículo 487, todos del Código Electoral, y otra declaración de tipo subsidiaria respecto a dos numerales del artículo 124, un inciso del mismo artículo y dos incisos del artículo 125 de ese mismo cuerpo legal. Esta solicitud subsidiaria no tiene asidero dentro de nuestro ordenamiento jurídico y la jurisprudencia sentada por esta Corporación.

Cuando el tribunal constitucional estudia la norma legal o el acto acusado como violatoria de la Carta Magna, procede a su revisión sobre el señalamiento a él presentado. De tal manera que si, como el caso contemplado en esta acción, se han impugnado los artículos 124 y 125 y la frase final del artículo 487 todos del Código Electoral, la Corte analizará todo el contenido de los dos primeros artículos y únicamente la frase final del último artículo ante las normas constitucionales para establecer su pureza. Si considerara que los artículos 124 y 125 son constitucionales, este tribunal está imposibilitado para posteriormente volver a realizar un estudio sobre parte de esas normas, ya que esos artículos han sido materia de censura constitucional y los fallos de la Corte son finales, definitivos y obligatorios.

Sabia ha sido la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia que resuelve la preocupación aparente del demandante. La resoluciones expedidas referentes al control constitucional, dado su carácter final, definitivo y obligatorio, por mandato legal, conllevan una confrontación del acto tachado de inconstitucional "con todos los preceptos de la Constitución" y en ellas la Corte, si así estimare oportuno, puede declarar sólo parte de la norma o acto impugnado inconstitucional. Recientemente, en fallo dictado el 19 de febrero de 1993, se declaró inconstitucional la última frase del artículo 405 del Código de Trabajo; no obstante haberse solicitado la inconstitucionalidad de todo el párrafo segundo de ese artículo en donde estaba incluida la frase meritada.

En la obra inédita "La Interpretación Constitucional" del Dr. Arturo Hoyos, próxima a publicarse, al referirse al principio de divisibilidad de las normas impugnadas, nos dice: "La Corte Suprema, frente a la impugnación de un texto legal, puede concluir que sólo una parte del mismo es incompatible con las normas que integran el bloque de constitucionalidad. De esta forma, se preserva la parte de la ley u otro acto que no es inconstitucional. Este principio es muy sano y de gran importancia en nuestra interpretación constitucional pues tiende a preservar el ordenamiento jurídico y a hacer cesar la vigencia sólo de las partes de la ley o acto que sea estrictamente necesario para mantener la supremacía de la Constitución. Un ejemplo de esta tendencia es la sentencia de 23 de mayo de 1991 que declaró inconstitucional el parágrafo de la Ley 25 de 1990, cuya constitucionalidad había sido impugnada en su totalidad".

Luego de los anteriores razonamientos, la Corte considera viable el recurso presentado en cuanto a la inconstitucionalidad solicitada en su primera parte y desecha la petición señalada como subsidiaria.

Ante lo expuesto, SE ADMITE la demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 124 y 125 del Código Electoral, modificados por los artículos 12 y 13, respectivamente,de la Ley 17 de 30 de junio de 1993, así como la frase final del artículo 487 del mencionado Código, modificado por el artículo 66 de la misma Ley 17 de 1993.

Se corre traslado al señor Procurador General de la Nación para que emita concepto dentro de un término no mayor de diez días, contados a partir del recibo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO. CARLOS E. CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JACOBO LERNER ZIMMERMAN Y EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 315 DE 3 DE DICIEMBRE, DICTADA POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos E. Carrillo Gomila ha presentado acción de inconstitucionalidad contra la resolución 315, de 3 diciembre de 1992, confirmada por la resolución N° 9 de 10 de marzo de 1993, ambas dictadas por el Presidente de la República con participación del Ministro de Gobierno y Justicia.

Corresponde determinar, en primer lugar, si esta acción constitucional ha sido presentada con apego a los presupuestos formales establecidos por la ley.

Con el examen del libelo se observa claramente la pretermisión de algunas formalidades. Así, el proponente de la acción se esmera por atender y cumplir las exigencias a que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo 2551 del Código Judicial, de naturaleza especial y referidos a este tipo particular de iniciativas procesales, no

así una de carácter general, de entre las regladas por el inciso primero de dicha norma bajo el título de "requisitos comunes a toda demanda", como lo es el deber de señalar "**Los hechos** que sirven de fundamento a las pretensiones, determinados y numerados en cifras o por medio del adjetivo ordinal correspondiente" (artículo 654, numeral 6, C.J).

Asimismo, el artículo 2550 exige que la persona que ocurre ante la jurisdicción por la vía de la acción de inconstitucionalidad principal o directa lo haga "**por medio de apoderado legal**", lo que implica fatalmente el otorgamiento de un poder especial, con el objeto de acreditar la debida representación dentro de un proceso judicial que es autónomo, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la acción incidental de inconstitucionalidad, originada en y que accede a un proceso ordinario, en el que se encuentran previa y satisfactoriamente constituidas las representaciones judiciales. La lectura del cuaderno que recoge esta actuación permite comprobar que el licenciado Carrillo Gomila no está investido de las facultades necesarias para actuar en representación de Jacobo Lerner Zimmerman, como afirma hacerlo, condición indispensable para la viabilidad de la acción.

Por otra parte, es oportuno recordar que el régimen de derecho organiza y pone a disposición de los particulares vías procesales y remedios jurídicos, idóneos y específicos, para la defensa de sus derechos y para permitirles conjurar agravios sufridos. En el orden constitucional el nuestro autoriza, con generosidad que desborda la previsión de otros sistemas, el ejercicio de una acción popular de ancho espectro, a los efectos de que "cualquier persona" pueda impugnar una **amplia gama** de objetos procesales, sin someterla a un régimen expreso de incompatibilidades. Sin embargo, estas características no le restan a nuestro proceso constitucional la excelencia que en todas las latitudes le es propia en cuanto a su naturaleza y fines, la que con lamentable frecuencia es desvirtuada por una actividad forense de rango inferior que pretermite los deberes de lealtad y buena fe, como el de obrar sin temeridad en el ejercicio de los derechos procesales, que deben presidirlo (a.215, C.J.). Así, se recurre a la esfera constitucional como una vía cualquiera de acceso a la jurisdicción, aun sin ser específica, confundida en el ejercicio, simultáneo o alterno, de otras acciones procesales, por el empeño de satisfacer una misma o singular pretensión, con la natural consecuencia del perjuicio que ello ocasiona al esfuerzo de la administración de justicia en el orden laboral. Apreciada esta cuestión desde otro ángulo, este fenómeno testimonia la expansión y arraigo que la justicia constitucional experimenta en el medio forense, lo que da lugar a que temas cada vez más numerosos de interés de los particulares sean llevados a sus estrados.

En el caso de la acción que motiva estas consideraciones, se advierte que el letrado proponente interpuso recurso de reconsideración contra la resolución No. 315, de 3 de diciembre de 1992, mediante la cual se concede la extradición de Jacobo Lerner Zimmerman, reclamada por el gobierno de los Estados Unidos de América, recurso que fuera decidido mediante pronunciamiento confirmatorio No. 9, de 10 de marzo de 1993. En adición al ejercicio de ese medio de impugnación, la defensa técnica de Zimmerman, primero a través del licenciado Omar Samaniego y luego del propio licenciado Carrillo Gomila, introdujo sendos incidentes de objeciones dentro del proceso de extradición seguido en su contra, los que aun se encuentran pendientes de decisión en la Sala Segunda de la Corte Suprema. Antes de la acción de inconstitucionalidad que ahora se examina, el licenciado Carrillo interpuso otra idéntica, la que fuera desestimada por razones formales mediante resolución de la Corte Suprema de 11 de junio de 1991. Se trata, pues, de una actividad forense inusitada que no debe ser ignorada por el Pleno.

Por las anteriores razones, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la presente acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL DR. RICARDO LACHMAN EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR LUIS A. TAYLOR Y EN CONTRA DE LA SENTENCIA PJ-2 DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 2 (PROCESO LABORAL: LUIS A. TAYLOR -VS- IMPRENTA GÓMEZ, S. A.) MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior de Trabajo ingresa a la Corte advertencia de inconstitucionalidad presentada por el doctor RICARDO LACHMAN dentro del proceso laboral promovido por **LUIS A. TAYLOR** contra **IMPRENTA GÓMEZ, S. A.**

Según se observa en el cuadernillo, la Junta de Conciliación y Decisión N° 2, mediante sentencia PJ-2 de 2 de febrero de 1993, declaró injustificado el despido y condenó a IMPRENTA GÓMEZ, S. A. a reintegrar al trabajador **LUIS A. TAYLOR.**

En el escrito de sustentación del recurso de apelación interpuesto, el doctor Lachman, apoderado especial de la parte demandada, en el último párrafo hace la siguiente solicitud:

"Por todo lo expuesto, en aras de la correcta administración de justicia, solicitamos a los distinguidos magistrados del Tribunal Superior de Trabajo, según su mejor criterio, sanear en la apelación (art.940), revocar la resolución que apelamos o consultar ante la entidad competente la posible inconstitucionalidad de lo actuado por

violación al debido proceso que consagra nuestra carta magna." (La subraya es de la Corte).

Ahora bien, tras examinar el escrito de apelación, observa la Corte que la supuesta advertencia de inconstitucionalidad que nos ocupa encuentra respaldo en la parte que ha sido subrayada en la transcripción que antecede: "consultar ante la entidad competente la posible inconstitucionalidad de lo actuado por violación al debido proceso que consagra nuestra carta magna".

De conformidad con el inciso segundo del numeral 1 del artículo 203 de la Constitución Nacional, la advertencia de inconstitucionalidad **únicamente** procede "Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la **disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional** ..." (la subraya y el énfasis es del Pleno).

De lo anterior se concluye sin lugar a duda que la presente advertencia de inconstitucionalidad resulta manifiestamente improcedente. En efecto, a la luz del artículo 203 de la Carta Magna no es posible elevar un proceso, a través del mecanismo de consulta, ante la Corte Suprema de Justicia, para que el Pleno de esta Honorable Corporación revise "la posible inconstitucionalidad de lo actuado por violación al debido proceso".

Ello es así porque el tema susceptible de discusión en una advertencia o consulta de inconstitucionalidad viene establecido por la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso controvertido. En otras palabras, el propósito que se persigue con el mecanismo de consulta, es el de evitar que el funcionario encargado de impartir justicia **aplique** un precepto legal o reglamentario que sea contrario a alguna norma de jerarquía constitucional.

De donde resulta que no son consultables **per se** las resoluciones que emitan los funcionarios encargados de impartir justicia, así como tampoco lo son los procesos mismos. Es más, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que cuando la norma aplicable al caso controvertido ha sido efectivamente aplicada por quien imparte justicia, la advertencia o consulta de inconstitucionalidad que se haga sobre dicho precepto, deviene improcedente.

En otro orden de ideas, la ocasión es propicia para reiterar una vez más la posición que este Tribunal ha mantenido, en el sentido de que los jueces y magistrados están autorizados para rechazar una advertencia de inconstitucionalidad, cuando observen que la advertencia encuadre dentro de alguno de los supuestos mencionados en el párrafo anterior.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE, la advertencia de inconstitucionalidad formulada por el doctor RICARDO LACHMAN dentro del proceso laboral promovido por LUIS A. TAYLOR contra IMPRENTA GÓMEZ, S. A.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. ADOLFO ALBERTO BENEDETTI E., EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA RAQUEL V. DE HERNDON EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 29 DE JULIO DE 1976, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado **Adolfo Alberto Benedetti E.**, actuando en nombre y representación de la señora **RAQUEL V. DE HERNDON**, presentó acción de inconstitucionalidad contra la sentencia de 29 de julio de 1976, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

La Corte debe examinar en primer lugar si la acción propuesta reúne los requisitos que establecen la Constitución y la ley.

Sostiene el demandante que la sentencia que considera inconstitucional, fue objeto del recurso de casación. Efectivamente, la Sala Civil de la Corte Suprema, decidió mediante sentencia de 29 de junio de 1977, NO CASAR la sentencia recurrida.

El Pleno de la Corte Suprema considera que esta sentencia del Primer Tribunal Superior, que no fue casada por la Sala Civil de la Corte, al estimar que no se daban las violaciones de los artículos 1801, 1765, 1760, 1227 y 1767 del Código Civil, así como del artículo 686 del Código Judicial, no puede ser objeto del control de la constitucionalidad, por disponerlo así el Artículo 204 de la Constitución, que establece que no se admitirán recursos de inconstitucionalidad contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia y sus Salas, pues, al no casar la Sala Civil de la Corte la sentencia del Primer Tribunal Superior Civil, se le atribuye a la Corte dicho fallo, por ser el último Tribunal en conocer del caso.

En un caso similar, la Corte dijo en sentencia de 3 de abril de 1990, en que el demandante era el Dr. CLEMENTE PATRICK GARNES, lo siguiente:

"El Pleno de la Corte considera que esta sentencia del Tribunal Superior, que NO FUE CASADA por la Sala Tercera de la Corte, no puede ser objeto del control de la constitucionalidad por disponerlo así el artículo 204 de la Constitución, que establece que no se admitirán recursos de inconstitucionalidad contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o de sus Salas, pues, al prohijar la Sala Tercera de la Corte la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, el valor de dicho fallo se le atribuye a la Corte por ser el último Tribunal en conocer del caso. Además, esto se demuestra examinando la situación contraria: si la Corte hubiera CASADO la sentencia, no se hubiere podido tampoco recurrir contra esa decisión, y menos se hubiere podido pensar en interponer demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo revocada. El hecho de NO CASAR la sentencia equivale a confirmar la decisión del Tribunal de Trabajo. Igual sería si se presentara una demanda de inconstitucionalidad contra una sentencia de un Tribunal Superior, Penal o Civil, a pesar de que la Corte, como Tribunal de Apelaciones hubiere confirmado la decisión recurrida lo que a todas luces sería inadmisible. Si bien la casación no es una nueva instancia, como lo es la apelación, para los efectos del caso en estudio sería lo mismo, ya que no procede una demanda de inconstitucionalidad contra una decisión de un Tribunal Superior de Trabajo que hubiere sido objeto de pronunciamiento en casación por la Sala Tercera, Laboral, de la Corte Suprema de Justicia.

El Procurador de la Administración dice acertadamente al respecto:

`Pareciera, entonces, que habiendo prohijado la Sala Tercera la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo que se acusa en este proceso, esta sentencia no es susceptible de ser atacada en vía constitucional con arreglo a lo establecido en el artículo 204 de la Carta Política, que dispone que no se admitirán recursos de inconstitucionalidad contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o de sus Salas.

Y más adelante agrega:

Por otro lado, en el evento de que la demanda de inconstitucionalidad prosperase y, en consecuencia, se declarase inconstitucional la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, ello plantearía la existencia de sentencias contradictorias, puesto que quedaría en pie la de la Sala Tercera, que mantuvo en vigencia la del Tribunal Superior de Trabajo y la del Pleno, que declararía inconstitucional (y sin existencia jurídica) a esta última.
Por tanto, este aspecto debe ser previamente deslindado por esa Alta Corporación de Justicia, antes de continuar con la tramitación del proceso.'

Las consideraciones anteriores hacen imposible que la Corte pueda entrar a fallar el fondo de este negocio"

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la sentencia de 29 de julio de 1976, dictada por el Primer Tribunal Superior Civil.

Notifíquese.

(fdo.)EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO FLORENCIO CASTILLO ESPINOSA EN REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE DE CHIRIQUÍ EN CONTRA DEL ARTICULO 991 DEL CÓDIGO DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce este despacho sobre la admisibilidad de la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Florencio Castillo contra los numerales 7 y 8 del artículo 991 del Código de Trabajo.

Esta advertencia se presenta dentro del proceso que se adelanta ante el Ministerio de Trabajo, en la Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, en el cual se impugna la elección para la escogencia de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne de Chiriquí.

La norma impugnada tiene relación con el procedimiento que se debe seguir en todos aquellos procesos laborales para los cuales la ley disponga un trámite abreviado.

El caso que tenemos presente se trata de una impugnación de elecciones sindicales, que según las normas laborales se puede resolver a prevención en los Tribunales de Trabajo o ante el Ministerio de Trabajo, dependiendo de la vía que se siga, se aplicará el Código de Trabajo (artículo 394) o la Ley 53 de 1975, respectivamente; en el presente negocio, los demandantes escogieron la vía que regula esta última ley.

Así las cosas, el trámite que se sigue se surtirá íntegramente de acuerdo a lo estipulado por la ley 53 de 1975, y en ningún momento se aplicará lo establecido en el artículo 394 del Código de Trabajo, sobre el procedimiento abreviado, por lo que tampoco se aplica la norma advertida de inconstitucionalidad.

La Corte ha señalado en reiteradas ocasiones, que la advertencia de inconstitucionalidad procede únicamente sobre aquella norma legal o reglamentaria aplicable al caso, siguiendo el texto del artículo 203 de la Constitución Nacional.

En vista que el artículo 991 del Código de Trabajo no es aplicable al proceso que se adelanta en el Ministerio de Trabajo, la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta no es viable.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Florencio Castillo Espinosa contra los numerales 7 y 8 del artículo 991 del Código de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO FELIPE C. RANGEL F., EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN Y EN CONTRA DEL ARTICULO 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **FELIPE RANGEL FREDERICKSON**, actuando en su propio nombre, presentó demanda de inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, mediante el libelo manuscrito que aparece de fojas 1 a 4 de este expediente.

Sometido a las reglas de reparto, ha ingresado al despacho para resolver sobre su admisibilidad, a lo que se procede dentro del marco legal que establecen los artículos 2550, 2551 y 2552 del Código Judicial.

Al cotejar el contenido de la demanda con las exigencias formales establecidas en el capítulo IV, del Título I, Libro IV del Código Judicial, se advierte de inmediato que el demandante omitió adjuntar la copia autenticada de la ley cuyo artículo específico considera inconstitucional y por otro lado tampoco se acoge a la alternativa que otorga el artículo 2552 de la excerta citada, que permite citar el número y la fecha de la Gaceta Oficial en la que fue publicada, ni explica las razones por las cuales no ha podido obtener dicha copia.

A todo lo anterior es necesario señalar que el demandante no dirige su escrito al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tal cual lo prevé el artículo 102 del Código Judicial y en cuanto a la norma censurada no especifica con claridad a que ley se refiere, pues como es sabido, la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social ha sido objeto de un plural número de reformas.

La inobservancia de los requisitos establecidos por la ley en estos casos, produce su consecuente inadmisibilidad.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de inconstitucionalidad presentada por el licenciado FELIPE C. RANGEL F., contra el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.)CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. BRAULIO CARRERA EN CONTRA DEL ARTICULO 405 DEL CÓDIGO DE TRABAJO (PROCESO DECLARATIVO LABORAL: SINDICATO LA UNIÓN DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE PANAMÁ- VS -PACIFIC ASSOCIATES INC). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Braulio Carrera ha promovido advertencia de inconstitucionalidad del artículo 405 del Código de Trabajo, dentro del proceso declarativo laboral y solicitud de pago de cuotas sindicales que el Sindicato La Unión de Empleados de Comercio de

Panamá le sigue a Pacific Associates Inc. Dicha advertencia ha sido formulada ante el Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, quien remitió la misma a esta Corporación.

Cumplidos todos los trámites procesales que establece el Código Judicial estas acciones, el Pleno pasa a resolver el fondo de la misma.

Observa el Pleno, que ya en sentencia de 19 de febrero de 1993 a raíz de la petición incoada por la firma de abogados Troyano y Visuetti se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 405 del Código de Trabajo, objeto de la presente advertencia. En efecto, en esa sentencia se decidió que, respecto al artículo 405 citado, sólo era inconstitucional la frase del párrafo segundo, "que a la letra dice: `...aún cuando la proporción de sindicalizados no alcance la señalada en dicho artículo para la cotización obligatoria`".

El artículo 2564 del Código Judicial, estipula que son finales, definitivas y obligatorias las decisiones que emita la Corte Suprema de Justicia en materia constitucional.

El PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la advertencia de inconstitucionalidad formulada por el Lcdo. Braulio Carrera dentro del proceso declarativo laboral y solicitud de pago de cuotas sindicales que sigue el Sindicato La Unión de Empleados de Comercio de Panamá a Pacific Associates Inc.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PETICIÓN PRESENTADA POR LA LICENCIADA NORA SANTA DE SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DEL MAESTRO MARCO A. ALARCÓN P., MINISTRO DE EDUCACIÓN, PARA QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SE PRONUNCIE SOBRE LA INTERPRETACIÓN CORRECTA DEL ARTICULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada **NORA SANTA DE SÁNCHEZ**, actuando en nombre y representación del Ministro de Educación, **MARCO ANTONIO ALARCÓN PALOMINO**, solicita a la Corte, "que por vía de interpretación se pronuncie sobre la aplicación correcta del artículo 65 de la Constitución Nacional".

La Corte aprecia de inmediato la improcedencia de la solicitud de interpretación, ya que no estamos en presencia de un caso en que el Ministro de Educación, advierta, dentro de un proceso en que administra justicia dentro de su ramo, que la norma que debe aplicar, para resolver un negocio determinado, sea inconstitucional.

Para que una advertencia o consulta sobre la constitucionalidad de una norma proceda, debe reunir las siguientes condiciones: 1) Que la advertencia o consulta la haga un funcionario público. 2) Que la advertencia o consulta la realice el funcionario público con ocasión de un proceso en que administra justicia administrativa, civil, penal o de cualquiera jurisdicción, y antes de decidir la causa; y 3) La advertencia o consulta tiene que referirse a la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso.

La Corte tiene sentada innumerable jurisprudencia al respecto y así se ha pronunciado en fallos de 4 de diciembre de 1946, en relación con una consulta planteada por el Presidente de la Comisión Legislativa Permanente; de 26 de mayo de 1949, en una consulta formulada por un Magistrado del Tribunal Superior de Trabajo, sin que tal consulta haya sido originada dentro de un proceso concreto.

Por lo expuesto la Corte Suprema, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN, presentada por el Ministro de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL GONZÁLEZ, Y EN CONTRA DEL ARTICULO 501 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, (PROCESO LABORAL: CHIRIQUI LAND COMPANY -VS-SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CHIRIQUI LAND COMPANY, DIVISIÓN DE BOCAS DEL TORO.) MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel González, quien actúa como apoderado judicial del Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company, División de Bocas del Toro, presentó advertencia de inconstitucionalidad del artículo 501 del Código de Trabajo dentro del proceso de declaratoria de ilegalidad de huelga presentado por la Empresa Chiriquí Land Company, que se encuentra en segunda instancia en el Tribunal Superior de Trabajo.

El párrafo de la norma que el peticionario advierte como inconstitucional es del siguiente tenor:

> "ARTICULO 501 ... La audiencia se celebrará en una fecha no menor de dos ni mayor de cuatro días a la fecha de la resolución que ordene su celebración".

Corresponde determinar si esta demanda constitucional de naturaleza incidental cumple con los presupuestos formales que exigen el artículo 203, párrafo segundo, de la Carta Fundamental y 2551 del Código Judicial.

Las advertencias de inconstitucionalidad deben recaer sobre disposiciones legales o reglamentarias aplicables al conflicto jurídico al cual acceden, lo que, conforme tiene establecido la jurisprudencia, implica que la disposición en cuestión **aún no haya sido aplicada** (artículos 203 C. N., 2548 del C. J.). A falta de los antecedentes judiciales de este proceso constitucional, el libelo debe contener la información pertinente a este y cualquier otro efecto de relevancia.

Por ello, resulta necesario que el peticionario cumpla con la exigencia que establece el inciso primero del artículo 2551 en cita, concerniente a "los requisitos **comunes** a toda demanda", entre los que figura la presentación de **los hechos**, debidamente numerados, en los deberá indicar la secuencia del proceso donde se origina la advertencia.

La demanda examinada atiende el cumplimiento de los requisitos **especiales** contemplados en la excerta procesal, pero pretermite cumplir el requisito común antes indicado (artículo 654, numeral 6, C.J.).

Por las anteriores razones, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la presente advertencia de inconstitucionalidad.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA POR LA ALCALDESA DEL DISTRITO CAPITAL MAYÍN CORREA DELGADO POR MEDIO DE APODERADO JUDICIAL Y EN CONTRA DEL LICENCIADO CLARO AMADO RENDEROS, FISCAL ELECTORAL POR DELITO DE INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DEL SERVIDOR PUBLICO. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora MAYÍN CORREA DELGADO, mediante poder especial otorgado al licenciado JUAN MATERNO VÁSQUEZ DE LEÓN, propuso Acusación Particular ante el Pleno de Corte Suprema de Justicia contra el licenciado CLARO AMADO RENDEROS, Fiscal Electoral, por los supuestos delitos de "... abuso de autoridad e Infracción de los deberes de Servidor Público, descrito genéricamente en el Capitulo IV, del Título X, del Libro Segundo del Código Penal".

Por cumplidas las reglas de reparto el despacho sustanciador, antes de decidir sobre la admisibilidad de la acusación particular presentada, consideró necesario que el Pleno de la Corte se pronunciara sobre el aspecto esencial de la competencia, como en efecto lo hizo, reiterando el criterio expresado en la sentencia de 6 de mayo de 1992 (SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR EL DELITO EN QUE HAYA INCURRIDO CONTRA EL LICENCIADO RAÚL LÓPEZ, FISCAL ELECTORAL). Esto es, en el sentido de que "... el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer privativamente de los delitos comunes o faltas cometidas por el Fiscal Electoral".

De esa manera definida la competencia para conocer de la acusación particular presentada contra el Fiscal Electoral, el Pleno de la Corte procede, en consecuencia, a examinar los elementos probatorios que se acompañan con la misma, para los efectos de decidir si a la luz de las normativas del procedimiento penal que contempla el Código Judicial sobre la materia, procede o no admitir la acusación particular propuesta. Veamos:

En ese sentido, por tratarse del caso de un servidor público, sabido es que el artículo 2471, en concordancia con el 2468 del Código Judicial, expresamente exige como requisito para que la acusación particular pueda ser admitida por el tribunal penal competente, que se acompañe prueba sumaria, por cualquier medio probatorio, "... que acredite el hecho punible atribuido". Es decir, tratándose de procesos ordinarios que se sigan contra servidores públicos "... por abuso en ejercicio de sus funciones

oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino ..." a que se refiere el artículo 2468 idem.

Cabe señalar entonces, en primer lugar, que en el escrito de formalización de la acusación particular promovida por la Alcaldesa del Distrito de Panamá, en estudio, "los delitos imputados " al Fiscal Electoral son:

"....
3.1. DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS, EN EL TIPO DE COMETER EN PERJUICIO DE LA ACUSADORA HECHO ARBITRARIO NO CALIFICADO ESPECIALMENTE POR LA LEY PENAL.
DELITO DE INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDOR PUBLICO (COMO AGENTE DE INSTRUCCIÓN) EN LA ESPECIE DE RETARDAR LA REALIZACIÓN DE ACTO INHERENTE A SUS FUNCIONES.
DELITO DE INFRACCIÓN DE DEBERES DE SERVIDOR PUBLICO EN LA ESPECIE DE OMISIÓN DE DAR CUENTA A LA AUTORIDAD COMPETENTE (MINISTERIO PUBLICO) DEL CONOCIMIENTO QUE HA TENIDO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO.
..."

En segundo lugar, se acompañan como pruebas documentales las siguientes:
"1. Copia autenticada de la Denuncia por la supuesta Comisión de delito electoral presentada ante la Fiscalía Electoral por los ciudadanos CESAR ESPINOZA COPRIZ, BENIGNO VIANOR DE LEÓN SANTIAGO Y RICARDO ANTONIO CONCEPCIÓN ORTIZ, el día 26 de marzo de 1993.
2. Copia autenticada del auto cabeza de proceso, conque se admitió la indicada denuncia.
3. Copia autenticadas de las Diligencias de Declaraciones Juradas, rendidas ante la Fiscalía Electoral, como ratificación de la denuncia, rendidas por los denunciantes CESAR ESPINOZA COPRIZ, BENIGNO VIANOR DE LEÓN SANTIAGO Y RICARDO ANTONIO CONCEPCIÓN, en las que se indica recibidas a las 4 y 4:30 p.m. del día 26 de marzo de 1993.
4. Copia autenticada de una diligencia de declaración rendida por la SEÑORA MARÍA DEL CARMEN CASTILLO, denominada 'Diligencia de Ratificación de Denuncia de María del Carmen Castillo", rendida a las 4:30 p.m. del día 26 de marzo de 1993.
5. Copia autenticada de poder conferido por LA SEÑORA MAYÍN CORREA DELGADO AL LIC.JUAN MATERNO VÁSQUEZ DE LEÓN.
6. Copia autenticada de la solicitud de certificación y de la certificación expedida por el SEÑOR FISCAL ELECTORAL, haciendo constar que el abogado ITALO ANTINORI no se le había conferido poder hasta la fecha de la expedirlo (6 de abril de 1993).
7. Copias autenticadas de las Diligencias de Ampliación de Declaración (sic), hechas por los denunciantes: CESAR ESPINOZA COPRIZ, RICARDO ANTONIO CONCEPCIÓN ORTIZ Y 'declaración jurada', de BENIGNO VIANOR DE LEÓN SANTIAGO, en todas las cuales intervino, y fueron firmadas por el abogado ITALO ANTINORI arraigándose la calidad de 'Abogado Acusador', con consentimiento del FISCAL ELECTORAL.
8. Diligencia de "Ampliación de MARÍA DEL CARMEN CASTILLO", rendida el día 29 de abril de 1993, en la cual intervino y fue firmada por el abogado ITALO ANTINORI quien se arrogó, con consentimiento expreso del Fiscal Electoral, la calidad de 'Acusador Particular', sin representar a nadie.
9. Copia autenticada de la Providencia de la Fiscalía Electoral, de 30 de abril de 1993, en la cual se ordenó la acumulación de los procesos (sic) que dice el Fiscal Electoral se le siguen a la ALCALDESA DEL DISTRITO CAPITAL,SEÑORA MAYÍN CORREA DELGADO, actuando como si fuera el Tribunal del Conocimiento.
10. Copias autenticadas de los memoriales en lo que solicita práctica de pruebas, que aún no se han practicado, presentados el 2 de abril de 1993; el 20 de abril de 1993.
11. Copias autenticadas de los siguientes documentos, cuyos originales reposan en el Municipio de Panamá:
(a) Decreto No.78, de 5 de febrero de 1993, por el cual se nombra a MARÍA DEL CARMEN CASTILLO en la Dirección de Mercado.
(b) Acta de toma de posesión del cargo, de MARÍA DEL CARMEN CASTILLO,de 5 de febrero de 1993.
(c) Nota dirigida por al Jefa de Recursos Humanos del Municipio de Panamá a FRANCISCO LÓPEZ BOY, asignándole a la SEÑORA MARÍA DEL CARMEN CASTILLO, en la Coordinación de las Juntas Comunales.
(d) Carta renuncia de la SEÑORA MARÍA DEL CARMEN CASTILLO. (e) Resolución No.120, de 11 de marzo de 1993, aceptando la renuncia presentada por MARÍA DE CARMEN CASTILLO.
12. Copia autenticada de la Declaración Jurada rendida por la SEÑORA MATILDE MÉNDEZ DE SOTOMAYOR, ante la FISCALÍA ELECTORAL, el día 2 de abril de 1993.
13. Fotocopia autenticada de la constancia expedida por MARÍA DEL CARMEN CASTILLO a solicitud de la SEÑORA MATILDE MÉNDEZ, que es el mismo cuyo original ella declaró tener en su poder.
14. Declaración jurada del Notario Duodécimo de la Notaria de Panamá, en la que explica la naturaleza del su certificación puesta el pie de la fotocopia del mencionado documento.
..."

El examen de los transcritos elementos probatorios ciertamente revela que se trata de un conjunto de fotocopias autenticadas sobre la actuación procedimental de la investigación que adelanta la Fiscalía Electoral, en relación con una denuncia suscrita por varios ciudadanos contra la señora **MAYÍN CORREA DELGADO**, Alcaldesa del Distrito de Panamá, por supuesto delito electoral. Estos elementos probatorios, sin embargo, examinados a la luz del requisito exigido por la preceptiva del artículo 2471 del Código Judicial, no acreditan la existencia de los supuestos hechos punibles que se atribuyen al servidor público de la Jurisdicción Especial Electoral, en la acusación particular promovida por la Alcaldesa del Distrito de Panamá mediante apoderado judicial.

En efecto, la mencionada normativa del Código de procedimiento penal claramente define lo que debe entenderse por prueba sumaria, y en este sentido expresa, que es cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido, esto es, cuando se

trata de acusación por delito o denuncia de la clase a que se refiere el artículo 2468 del Código en cita, que se promuevan contra servidores públicos.

Por ello, para evitar denuncias o acusaciones improcedentes o dilatorias contra los servidores públicos, el comentado artículo, precisamente, exige como requisito de procedibilidad el deber de acompañar o presentar la prueba de la existencia del hecho punible, cuando la acusación o denuncia se funda en el artículo 2468 ibídem.

El análisis de los elementos probatorios, en el caso de la acusación en examen, permiten entonces sostener como conclusión de lo antes expuesto, que no existe tal prueba sumaria, toda vez que resulta evidente que con el escrito de la acusación particular promovida contra el Fiscal Electoral se presenta una serie de documentos, los cuales en vez de acreditar la existencia de los supuestos hechos punibles que se atribuyen a dicho funcionario público, como lo exige la ley, evidencian mas bien la existencia de actos o piezas referente al desarrollo de la investigación a cargo de la Fiscalía Electoral, en ejercicio de sus funciones.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL ARCHIVO de la presente Acusación Particular promovida por la Alcaldesa del Distrito de Panamá, señora MAYÍN CORREA DELGADO, contra el FISCAL ELECTORAL.

Notifíquese y cúmplase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL LCDO. SIDNEY SITTON URETA CONTRA EL LCDO. EUSEBIO MARCHOSKY, MAGISTRADO DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EL LCDO. ALVIN WEEDEN, POR EL DELITO DE CONCUSIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha recibido de la Procuraduría General de la Nación, las sumarias instruidas para investigar la denuncia presentada contra el licenciado Eusebio Marchosky, Magistrado de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, y el Licenciado Alvin Weeden, como presuntos infractores del artículo 329 del Código Penal que tipifica el delito de concusión.

En su Vista Fiscal No. 19 de 16 de abril de 1993, el señor Procurador General de la Nación, doctor Jorge Ramón Valdés Ch., solicita al Pleno de esta Corporación que se concluya la presente encuesta "con la dictación de un sobreseimiento definitivo e impersonal en atención a lo que dispone el ordinal 2 del artículo 2210 del Código Judicial" (fs. 20).

El Señor Procurador General de la Nación manifiesta en esta Vista que luego del análisis de los documentos allegados al expediente, entre los cuales está que la denuncia que dio origen a la instrucción, opina que "no existe elemento alguno que permita determinar que se ha incurrido por parte de persona alguna en el delito imputado que es el de concusión tipificado en el artículo 326 (sic) del Código Penal, ni en ninguna otra norma de dicho cuerpo legal" (fs. 20).

Citando el artículo 329 del Código Penal que establece que "el servidor público que, con abuso de su calidad o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer, indebidamente, para sí mismo o para un tercero, dinero u otra utilidad de 1 a 6 años y de 50 a 100 días multa"; el señor Procurador concluye que de lo expresado en esta norma, "se puede colegir claramente, que para que se cumpla con la conducta allí tipificada es menester que el funcionario público al que se le imputa la misma haya ejecutado acciones con el propósito deliberado de constreñir o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente para sí mismo, dinero u otra utilidad; y que ello haya quedado establecido de una manera inequívoca, lo que no ocurre en el presente caso" (fs. 20).

Las diligencias de investigación se iniciaron mediante Nota de 5 de octubre de 1992, dirigida al licenciado Rogelio Cruz Ríos, Procurador General de la Nación, en la que se solicitaba "la apertura de una investigación penal a fin de determinar la supuesta responsabilidad criminal de algunos funcionarios públicos en virtud del hecho de que supuestamente con ocasión de la elección del Presidente de la Asamblea Legislativa en el período iniciado en septiembre de 1992, presuntamente se llevó una negociación entre el Secretario General del Partido Revolucionario Democrático PRD) y el magistrado Eusebio Marchosky, por el cual los legisladores del Partido Revolucionario Democrático comprometieron sus votos a cambio de la liberación de cuatro civiles detenidos por delitos comunes" (fs. 17).

La denuncia fue admitida mediante Providencia de 7 de octubre de 1992, y se ordenó practicar todas aquellas diligencias tendientes al total esclarecimiento de los hechos, porque el Señor Procurador estimó que no era necesaria la presentación de la prueba sumaria que exige el artículo 2471 del Código Judicial, ya que el delito imputado es el de concusión, y la exigencia de la prueba sumaria sólo es aplicable a los delitos contenidos en el artículo 2468 ibídem, o sea a los procesos que se sigan contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino.

Iniciada la investigación se allegó a los autos recortes de los periódicos La Prensa y El Siglo de 7 y 8 que guardan relación con esta denuncia, y se tomó declaración jurada al señor Ernesto Pérez Balladares González Revilla, quien aceptó haberse reunido informalmente en los últimos días del mes de agosto de 1992 con los señores Marchosky y Weeden, en su residencia ubicada en Altos del Golf, Calle República de la India, No. 18, y que en dicha reunión "surgieron de manera espontánea múltiples temas del acontecer nacional, especialmente la situación política del país, cada cual según su punto de vista que, como se debe suponer, resulta divergente. No había ningún temario previamente establecido y ninguna finalidad específica" (fs. 12). El declarante afirmó categóricamente que de la conversación sostenida "no surgió ningún pacto ni compromiso ni acuerdo alguno", según el cual el partido Revolucionario Democrático (PRD), del cual es su Secretario General, votaría en la Asamblea Legislativa a favor del Honorable Legislador Lucas Zarak, candidato a Presidente de dicho Órgano del Estado, a cambio de que el Gobierno Nacional otorgase libertad a las personas que el PRD considera presos políticos y que están detenidos en distintos establecimientos carcelarios del país; aunque admitió, reiterando la inexistencia de algún pacto, que en la mencionada reunión se abordó el tema de los detenidos que su partido denomina políticos.

Finalmente, el declarante agregó "que los votos del Partido Revolucionario Democrático de la elección del Presidente de la Asamblea Legislativa fueron decididos de acuerdo a lo que se consideró como los mejores intereses del Partido y del país. Sencillamente, entre dos males, escogimos el menor, sin pactos de ninguna índole" (fs. 13).

El delito investigado se tipifica cuando funcionario público constriñe, compele o induce a alguien, con abuso de su cargo a dar o prometer, indebidamente, para sí mismo o para un tercero, dinero u otra utilidad, y en el caso en examen, no hay ni siquiera indicio de que los legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD) hayan negociado con los denunciados, votar por el candidato H. L. Lucas Zarak para la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a cambio de la libertad de los denominados presos políticos.

Por tanto, como el hecho investigado no ha sido ejecutado, a juicio del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, debe dictarse un sobreseimiento definitivo e impersonal, de conformidad con lo previsto en el ordinal 1 del artículo 2210 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVA E IMPERSONALMENTE las presentes sumarias.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.)JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE FALTA DE COMPETENCIA PRESENTADO POR LA LICENCIADA XENIA DE ZALDÍVAR DENTRO DE LA DENUNCIA PENAL PRESENTADA POR LOS SEÑORES RODRIGO AROSEMENA, EUSEBIO MARCHOSKY, LEO GONZÁLEZ Y ALVIN WEEDEN EN CONTRA DEL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, POR EL SUPUESTO DELITO DE CONCUSIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 24 de Junio del presente año, la licenciada **XENIA DE ZALDÍVAR**, abogada defensora del licenciado **ROGELIO CRUZ RÍOS**, Procurador General de la Nación, presentó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, un incidente de falta de competencia, el que fue acogido, dando lugar a la suspensión del proceso principal el cual se encontraba en ese momento en el período de presentación y objeción de pruebas.

Al incidente se le imprimió el trámite previsto para las medidas de previo y especial pronunciamiento, por lo que se le dio traslado al Procurador de la Administración por el término de tres días, acorde a lo previsto por el artículo 2276 del código Judicial.

Aunque el incidente se enuncia al margen superior como falta de competencia, en el texto del escrito se plantea como falta de legitimación para actuar, tanto de los denunciantes como del Procurador de la Administración.

Con relación a la falta de legitimación activa de los denunciantes, el Pleno se remite al artículo 2024 del Código Judicial que excluye a los denunciantes como parte en el proceso, por lo que sólo se considerarán los puntos presentados respecto a la legitimación para actuar de la que se acusa al Procurador de la Administración.

> Los tres hechos en que se funda el incidente en este aspecto, rezan así:
> **"OCTAVO:** El Procurador de la Administración tiene la facultad de instruir las sumarias por delitos y faltas en contra del Procurador General de la Nación.
>
> **NOVENO:** El Procurador de la Administración no tiene la facultad de acusar ante la Corte Suprema de Justicia al Procurador General de la Nación.
>
> **DÉCIMO:** El que tiene la legitimación para acusar ante la Corte Suprema de Justicia a las personas que deban ser juzgadas por esta corporación de justicia es el Procurador General de la Nación.

Por lo anterior, previo el trámite establecido por la Ley, pido al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia que declare lo que hemos pedido en este incidente de previo y especial pronunciamiento, con el consiguiente archivo del expediente".

En cuanto al análisis jurídico que se hace con relación al Procurador de la Administración, el cuestionamiento versa sobre la correcta interpretación del sentido y alcance del artículo 31 de la Ley 19 de 1991, que adiciona el numeral 12 al artículo 348 del Código Judicial y que trata sobre las funciones especiales del Procurador de la Administración, al asignarle la "instrucción de las sumarias a que dieren lugar las denuncias o acusaciones presentadas contra el Procurador General de la Nación por delitos o faltas". Según la abogada de la defensa, la nueva atribución especial asignada es exclusivamente la de instruir las sumarias y no la de acusar, además de que desde un punto de vista técnico su papel es el de abogado del Estado o de la Administración.

En el escrito presentado, la defensa reconoce que el sistema seguido por nuestro país a partir de 1941, en lo que respecta a las funciones del Ministerio Público es "sui generis", por cuanto desde esa fecha se elimina la figura de los jueces de instrucción y se le asigna al Ministerio Público la doble tarea de investigar los delitos y llevar la acusación en el plenario, sin embargo, para el caso presente, en su opinión, priva el texto del artículo 219 constitucional, que le atribuye al Procurador General de la Nación la función especial de "acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios públicos cuyo juzgamiento corresponda a esta Corporación".

Para resolver el fondo del incidente el Pleno constata que la Constitución Política vigente al desarrollar el capítulo 2° del Título VII que se ocupa de la Administración de Justicia, incorpora al Procurador de la Administración entre las personas que ejercen el Ministerio Público y equipara al Procurador General de la Nación y al de la Administración en cuanto a requisitos, forma de nombramiento y hasta algunas de sus funciones son compartidas en forma alterna, como ocurre en los traslados de las demandas en materia constitucional. Cabe tener presente en este caso dos elementos de interpretación teleológica de la ley, que nos permitan esclarecer con mayor precisión el verdadero sentido de la reforma introducida por la Ley 19 de 1991 sobre esta materia. Por un lado la "ratio legis" y por otro el antecedente histórico. Para qué y por qué se introdujo esa reforma? La respuesta es simple: para llenar un vacío legal de todo el ordenamiento jurídico, que, a 1991, no señalaba o asignaba al servidor público o entidad responsable de la instrucción de las causas por delitos o faltas seguidas contra el Procurador General de la Nación.

El Ministerio Público, entre otras funciones, tiene la de investigar los delitos y perseguir los delincuentes y en el plenario asume el papel de acusador y representante de la vindicta pública. ¿Por qué debe variarse esa función en este caso? La Constitución establece que es función especial del Procurador General de la Nación acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios públicos cuyo juzgamiento sea de su competencia, pero esto no puede sustentar la autoacusación, aunque sea la de un suplente del funcionario, pues la Ley le asignó esa atribución- para el caso específico en que el propio Procurador es el acusado o denunciado- al Procurador de la Administración, por ser el funcionario que debe instruir el sumario y en Panamá, a diferencia de la mayoría de los países del continente, quien instruye el sumario también acusa en el plenario, asumiendo las dualidad de juez de instrucción y de parte o sujeto procesal activo en el plenario, todo ello por mandato constitucional y ministerio de la Ley.

En el auto de valoración y calificación del sumario, de ll de mayo de 1993, se externó el criterio de esta Corporación Judicial sobre el mismo argumento que ahora se plantea en calidad de incidente de previo y especial pronunciamiento, por lo que es necesario advertir que tal acción deviene en un indicador indubitable de dilación externa del proceso, por voluntad de la defensa, apoyado en la ley y de allí que sólo nos reste reiterar lo expresado en el auto aludido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO PROBADA la causal de ilegitimidad para actuar y por tanto sin lugar la nulidad pedida.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.)EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO AL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL LEGISLADOR LEO GONZÁLEZ Y LOS LICENCIADOS RODRIGO AROSEMENA DE ROUX, EUSEBIO MARCHOSKY Y ALVIN WEEDEN, POR EL SUPUESTO DELITO DE CONCUSIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En tiempo oportuno la abogada que representa la defensa técnica del licenciado **ROGELIO CRUZ RÍOS**, presentó cuatro escritos en los que aduce y aporta pruebas en este proceso penal. Igualmente, el Procurador de la Administración dentro del término legal, mediante la Vista 306 de 23 de junio de 1993 adujo pruebas, las que fueron objetadas por la defensa.

Ante la pluralidad de escritos con propósitos probatorios, corresponde decidir su admisibilidad, para lo que se considerará por separado, las que se refieren al cargo de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los servidores públicos y las

que tienen que ver con el cargo de sustracción de documento en oficinas públicas; a su vez, se examinarán las aducidas y presentadas por la defensa y las del Procurador de la Administración.

1. Pruebas del Ministerio Público

1.1. Documentales

1.1.1. Admítese la prueba sobre la resolución de 13 de noviembre de 1992, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, recaída en la solicitud de levantamiento de aprehensión provisional de las sumas cauteladas a las Empresas Nuevo Plutón S. A. y Trianón Management S. A., pero no se ordena su incorporación al expediente, por cuanto aparece en el Registro Judicial de noviembre de 1992 (artículo 775 del Código Judicial).

1.1.2. Admítese igualmente, la prueba sobre la certificación del Despacho del Procurador General de la Nación sobre el registro de la carta de 18 de diciembre del Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica y se ordena cursar el oficio correspondiente según lo pedido.

1.1.3. Se tienen como pruebas documentales las aportadas al expediente que reúnan los requisitos de autenticidad y que sean conducentes y pertinentes al caso investigado.

1.1.4. No se admite la prueba dirigida a la Dirección General de Ingresos por no referirse a los hechos llevados al plenario (artículo 772 del Código Judicial).

1.2. Testimoniales

1.2.1. No se admiten los testimonios solicitados por cuanto no se explica su pertinencia y se desconoce su relación con los hechos investigados (artículo 772).

1.3. Periciales

1.3.1. Se admite la citación de los peritos que intervinieron en esta investigación para que declaren sobre sus dictámenes, señores Rafaela de Nimbley, Gustavo Cárdenas, Rubén Rivera y Rigoberto Avila. Se ordena la expedición de las boletas de comparendo.

2. Pruebas de la Defensa sobre el primer cargo

2.1. Testimoniales

2.1.1. Admítese el testimonio de los señores René Salerno, Licenciado Ariel Alvarado Carrasco, Licenciado Ricardo M. Alba y señor Paulino García-Toraño M. Se ordena cursar la citación correspondiente (artículo 932 del Código Judicial).

2.1.2. Documentales

2.1.2.1. Se admiten las copias auténticas de las actas de 15 de septiembre de 1992, 29 de abril de 1991 y 13 de mayo de 1992 de la Asamblea Legislativa, aportada por la defensa.

2.1.2.2. Por ser notoriamente dilatoria se rechaza la prueba referente a la "copia íntegra y auténtica del expediente que contiene cada una de las operaciones de congelamiento de cuentas, con sus respectivos cuadernillos de cuentas, a partir de diciembre de 1989 hasta 1992.

2.1.2.3. Con relación a las pruebas documentales descritas en los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 (fs. 2517 y 2518 del Tomo VI) que se refieren a expedientes que reposan en el Pleno y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, se admite la incorporación de los cuadernillos, no así de las resoluciones que han sido publicadas íntegramente en los Registros Judiciales de febrero, marzo, noviembre y diciembre de 1990 y en los de abril, septiembre y noviembre de 1992 (artículo 775 del Código Judicial). Los cargos y costos serán asumidos por la defensa (artículos 782 y 786 del Código Judicial).

2.1.2.4. Se admite la prueba que consiste en solicitar a la Presidencia de la República, copia auténtica de las cartas de 22 de julio de 1991, 25 de julio de 1991 y 6 de enero de 1992 y se ordena oficiar lo pertinente.

2.1.3. Informes

2.1.3.1. Por su ineficacia legal se rechazan los tres informes solicitados por la defensa, descritos a fojas 2518 y 2519 del Tomo VI de este expediente (artículo 772 del Código Judicial).

2.1.4. Inspección Judicial

2.1.4.1. Dada su ineficacia para los fines del esclarecimiento de los hechos enjuiciados, se rechaza la práctica de esta prueba (artículo 772 del Código Penal).

3. Pruebas de la defensa sobre el segundo cargo

3.1. Testimoniales

3.1.1. Admítase los testimonios de Esteban García, Omar Pérez, Miriam de Saied y Diana Román de Díaz. Procédase a su citación judicial.

3.1.2. Declaración de parte y juramento

3.1.2.1. Por no ajustarse a la naturaleza de esta clase de prueba y dada su impropiedad en un proceso penal, (artículo 890 y siguientes del Código Judicial) se rechaza la misma (artículo 772 del Código Judicial).

3.1.3. Documentales

3.1.3.1. Admítanse las pruebas distinguidas con los número 1 y 2 (fs. 2597 Tomo VII) y ofíciese a la Procuraduría General de la Nación y a la Embajada de los Estados Unidos de América para la obtención de la copia auténtica pedida.

3.1.3.2. Según el artículo 773 del Código Judicial no se requiere prueba de los elementos de juicio admitidos e incorporados al expediente, por tanto es válida la incorporación de la carta, objeto material del hecho investigado, de 18 de diciembre de 1992.

3.1.3.3. No se admite la prueba del Manual de Organización y Funciones del Ministerio Público por cuanto se desconoce la fecha de su aprobación y su carácter oficial y por tanto carece de idoneidad para acreditar lo que se pretende.

4. Tercer y cuarto escrito de pruebas de la defensa

Se rechazan las pruebas de inspección judicial, declaración de parte y las de carácter documental (fs. 2598 -2599 del Tomo VII) por ser reiterativas de los escritos de las pruebas examinadas en los escritos anteriores y porque concurren en ellas las mismas causas de ineficacia, inconducencia, publicación oficial y carácter dilatorio, antes anotadas.

Se admite la copia del cuadernillo que contiene la solicitud de levantamiento de aprehensión provisional de bienes cautelados presentados por las sociedades Nuevo Plutón S. A. y Trianón Management S. A., archivado en la Sala Segunda de la Corte, cuyos cargos y costos al tenor de los artículos 782 y 786 del Código Judicial, debe asumir la defensa.

Se fija como fecha de la audiencia pública del presente caso el día 26 de agosto de 1993, a partir de las 9:00 a.m.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
Magistrada Sustanciadora
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE DESACATO PRESENTADO POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA MONTERO DENTRO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA EN CONTRA DEL DECRETO LEY 3 DE 9 DE OCTUBRE DE 1989. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos R. Ayala Montero, mediante poder especial otorgado por el señor ORLANDO ABEL SANTAMARÍA, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia escrito en el cual expresa:

> "... quien me ha dado poder de representación suficiente para que denuncie en su propio nombre y representación, al Contralor General de la República, señor Rubén Darío Carles, y a la Ministra de Planificación y Política Económica, Licenciada Delia Cárdenas, como en efecto lo hago, a fin de que se dicten las medidas pertinentes para que estos funcionarios no desacaten la orden del pleno de la Corte Suprema dentro del fallo de 21 de setiembre (sic) de 1991, en el cual se declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ley No.3 de 9 de octubre de 1989."

Por cumplidas las reglas de reparto el Pleno de la Corte debe decidir antes, si la querella de desacato presentada contra los prenombrados funcionarios de la Administración cumple con los requisitos exigidos por la ley sobre la materia, para que la misma pueda ser admitida por la Corte. Veamos:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2661,inciso segundo del Código Judicial, ciertamente, cuando la Corte declara la inconstitucionalidad del acto impugnado, compete al Pleno de esta máxima corporación de justicia "... vigilar el cumplimiento de la sentencia y conocer de las quejas que se presenten por desacato al cumplimiento del fallo aludido y aplicar las sanciones correspondientes, de conformidad con el procedimiento establecido para el caso en este Código."

En ese sentido, resulta oportuno aclarar que a falta de un "procedimiento para el caso" a que alude el precitado artículo del Código Judicial, las quejas por desacato al cumplimiento de los fallos cuando la Corte declara la inconstitucionalidad del acto impugnado, le son aplicables las normas de carácter general contempladas en el Título XVII, Libro Segundo, del Código Judicial, que regula el "DESACATO A LOS TRIBUNALES".

Así, entre las normas de carácter general sobre desacato a los tribunales tiénese el artículo 1956, numeral 9, que establece que son culpables de desacato: "En general, los que durante el curso de un proceso o de cualquier actuación judicial o después de terminados, ejecuten hechos que contravengan directamente lo ordenado en resolución judicial ejecutoriada; y los que habiendo recibido orden de hacer cosa o de ejecutar algún hecho, rehusen sin causa legal obedecer al Juez". (Subraya la Corte).

Además, también figura el artículo 1960 idem., el cual al referirse a las sanciones por desacato dispone que:
"La medida se impondrá en virtud de querella de parte interesada, con la cual se acompañará la prueba sumaria del hecho que constituya el desacato, cuando a ello hubiera lugar." (Subraya la Corte).

Ahora bien, en el caso de la Querella de Desacato presentada ante el Pleno de la Corte, claramente se advierte que:

a) Con el escrito de la querella no se acompaña la prueba sumaria del hecho que constituya el desacato, el cual supuestamente se atribuye al señor Contralor General de la República y a la señora Ministra de Planificación y Política Económica, en relación con la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad del referido decreto ley, dictada por el Pleno de la Corte.

b) De las razones expuestas en el escrito que se examina, no está claro en qué consiste realmente el supuesto hecho ejecutado por el señor Contralor General de la República y la señora Ministra de Planificación y Política Económica, que contravenga directamente lo ordenado en la sentencia ejecutoriada, declaratoria de inconstitucionalidad, al sostenerse sin fundamento alguno que las notas expedidas por los aludidos funcionarios, "pretenden poner en vigencia el Decreto Ley 3 de 9 de octubre de 1989, contradiciendo el mandato de la Corte contenido en el fallo de 21 de septiembre de 1991 y por lo tanto incurriendo en desacato de dicho fallo".

Por ello, resulta evidente que la solicitud de desacato presentada por el interesado, en ese caso, no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 1956, numeral 9, y 1960 del Código Judicial, por lo que la misma no puede ser admitida.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Querella de Desacato

presentada por el señor ORLANDO ABEL SANTAMARÍA en contra del señor CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA y de la señora MINISTRA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

JULIO 1993

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO

DIMAS MORRIS QUINTERO APELA DE LA SENTENCIA DE 28 DE FEBRERO DE 1992, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CHIRIQUI LAND COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En grado de apelación conoce la Sala Civil del presente proceso ordinario marítimo interpuesto por DIMAS MORRIS QUINTERO contra CHIRIQUI LAND COMPANY. La competencia de la Corte sobre esta causa se origina en el recurso de apelación presentado por la demandante contra el numeral segundo de la parte resolutiva la sentencia dictado por el Tribunal Marítimo de Panamá, el 28 de febrero de 1992, mediante el cual se declaró probada la excepción de prescripción de la acción introducida por la demandada en este proceso.

Contenido de la sentencia impugnada

La controversia planteada se reduce a lo siguiente: ¿desde cuándo se cuenta el término de prescripción de la acción de responsabilidad civil dirigida por un trabajador contra el empleador por razón de un accidente ocurrido en el desempeño de su labor? Frente a este asunto, el Tribunal Marítimo sostuvo que como el caso se resuelve de conformidad con la ley panameña (art. 557, numeral 7, Ley 8a.), lo referente a la prescripción de la acción está regulado por el artículo 1706 del Código Civil el cual, al momento de la decisión de primera instancia, tenía el siguiente texto:

> **"ARTICULO 1706.** Prescribe por el transcurso de un año, la acción para exigir la responsabilidad civil por delitos contra el honor y las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el artículo 1644, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia penal". (El subrayado es del Tribunal).

Según el criterio del Juez a-quo la redacción de esta norma presenta cierto grado de oscuridad, ya que no especifica desde cuando se comienza a contar el término de prescripción en las demandas por responsabilidad civil extracontractual, iniciadas al amparo del artículo 1644 del Código Civil, en las que no exista la necesidad de que el agraviado logre un pronunciamiento penal previo. Para salir de la incertidumbre planteada, el Juez del Tribunal Marítimo se apoya en lo dispuesto en el artículo 1707 del Código Civil, cuyo texto es el siguiente:

> **"ARTICULO 1707.** El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse".

Al aplicar la norma previamente transcrita al caso bajo estudio, el Tribunal Marítimo llegó a la conclusión de que el término de prescripción de la acción debía contarse desde el momento en que ocurrió el supuesto accidente que en opinión del demandante debe ser indemnizado. Como la demanda se interpuso el 4 de diciembre de 1991, notificándose a la contraparte el 16 de diciembre de 1991, y siendo que el demandante alega que el accidente ocurrió el 5 de agosto de 1989, el Tribunal Marítimo estimó que se había producido la prescripción de la acción, toda vez que la notificación de la demanda de la demandada, se produjo más de un año después de ocurrido el hecho que origina la reclamación.

Contenido del recurso

El recurso de apelación plantea un solo cuestionamiento a la decisión del Tribunal de primera instancia, a saber: que el Tribunal Marítimo "erró al aplicar parcialmente el artículo 1706 del Código Civil debiendo aplicarlo en un todo. Si no hay sentencia penal ejecutoriada, -sostiene el recurrente- mal puede declararse prescrita la presente acción porque el término de prescripción no ha comenzado a correr". Como consecuencia de ello, el apelante considera "que el artículo 1707 del Código Civil es inaplicable pues el 1706 señala desde cuando comienza a correr el término de prescripción".

Criterio de la Sala

A. Naturaleza del cargo de injuricidad.

Como se observa, en el trasfondo lo que se plantea es un problema de interpretación del artículo 1706 del Código Civil de Panamá, ya que el apelante pretende que esta Corte revoque la interpretación dada por el a-quo, haciendo prevalecer otra. Es decir, que el cargo que se realiza es un típico **error iuris in iudicando**, error de derecho, por lo que está incluido dentro de los asuntos que pueden ser conocidos por esta Sala Civil, en funciones de Tribunal de Apelaciones Marítimas, de conformidad con el artículo 483 del Código de Procedimiento Marítimo.

B. En torno a la ley bajo la cual se resuelve el recurso:

La Corte coincide con el Tribunal Marítimo en cuanto a que la ley aplicable al caso es la ley panameña, tal cual lo ordena el art. 557, numeral 7° de la Ley 8a., no obstante, es preciso aclarar que al momento en que se resolvió esta causa en primera instancia, el art. 1706 del Código Civil, tenía el texto que ya se transcribió en esta sentencia, tal como había quedado luego de la reforma introducida por la Ley 1° de 1988, sin embargo, dicha norma ha tenido una nueva modificación en su contenido, de conformidad con el art. 13 de la Ley 18 de 31 de julio de 1992 (G.O. 22.094 de 6 de agosto de 1992).

Ahora bien, para los efectos del presente recurso de apelación, la Corte se ve obligada a aplicar el art. 1706 del Código Civil, en la versión que tenía al momento en que se dictó el fallo de primera instancia, es decir, tal como estaba luego de la reforma introducida por la Ley 1 de 1988.

C. La responsabilidad civil y el término de prescripción de la acción.

Antes de abordar el punto controvertido en esta apelación, es preciso realizar algunas aclaraciones en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad civil extracontractual, lo cual allanará el camino para la determinación del momento desde el cual se comienza a contar el término de prescripción de la acción. Veamos.

1. La responsabilidad civil extracontractual contenida en el art. 1644 del Código Civil: El art. 1644 del Código Civil establece:

> "ARTICULO 1644. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
>
> Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados".

Esta disposición otorga al agraviado por cualquier acto dañoso realizado por otra persona, el derecho de recibir la reparación, siempre que en el proceso se acredite el vínculo causal entre el demandado y el daño, y siempre que se compruebe que en el acto perjudicial intervino culpa o negligencia, en los términos que las define el art. 34c del Código Civil. La disposición comentada consagra la responsabilidad civil extracontractual ordinaria.

Dentro de los actos en que interviene culpa o negligencia que originan responsabilidad civil extracontractual, se incluyen aquellos actos realizados por personas determinadas que eventualmente podrían producir una sanción penal, es decir, que la jurisdicción penal los podría considerar como delitos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que desde la perspectiva de la jurisdicción civil, el proceso por responsabilidad civil que se siga por este tipo de actos es independiente de la posible sanción penal que pueda producirse sobre el mismo, es decir, que el juzgador civil se encuentra libre de emitir su fallo en cuanto a la determinación de la responsabilidad del demandado y en cuanto al valor monetario en que se tasa dicha indemnización, sin verse sometido a la prejudicialidad penal.

En opinión de la Corte, el término de prescripción de las acciones civiles extracontractuales reguladas por el art. 1644 del Código Civil, incluyendo dentro de éstas las acciones originadas por actos que podrían ser calificados como delito por la jurisdicción penal, debe contarse a partir del momento en que el agraviado tuvo conocimiento del daño y se encontró en posibilidad de ejercer la acción. En este sentido, la Corte expresa su coincidencia con el criterio del Tribunal Marítimo: pese a la oscura redacción del art. 1706 del Código Civil, según el texto que tenía de acuerdo a la Ley 1 de 1988, no es posible aceptar que en las acciones de responsabilidad civil originadas en el art. 1644 del Código Civil, el término de prescripción de la acción debe contarse "a partir de la ejecutoria de la sentencia penal", toda vez que -como se explicó- el derecho de reclamar una indemnización civil es independiente de la posible sanción penal que el mismo hecho pueda originar. Ante esta situación, la Corte considera inobjetable que el Tribunal Marítimo haya tomado como referencia para determinar el momento desde el cual se cuenta la prescripción en este caso, lo dispuesto por el art. 1707 del Código Civil.

2. La responsabilidad civil extracontractual "derivada del delito":

Esta responsabilidad civil, si bien participa de los principios doctrinales que inspiran al art. 1644 del Código Civil, encuentra su fundamento legal en el Libro I, Título VI del Código Penal, denominado "RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO", en concordancia con el procedimiento establecido por el Capítulo II, Título I, del Libro III del Código Judicial, denominado "DE LA ACCION CIVIL". El art. 119 del Código Penal, que es el que inicia al aludido Título VI, establece lo siguiente:

> "ARTICULO 119. De todo delito emana responsabilidad civil para las personas que resulten culpables del mismo."

En opinión de la Sala, cuando se demanda a una persona por responsabilidad civil derivada del delito, es necesario comprobar que se ha cometido un delito y que la persona demandada ha resultado culpable de cometerlo, lo cual sólo se puede acreditar con una sentencia penal, en firme, que así lo indique.

En lo que respecta al término de prescripción de la acción de este tipo de responsabilidad civil, es obvio que el mismo comenzará a contarse desde el momento en que se encuentre en firme la sentencia penal que declara a una persona culpable de un hecho tipificado como delito.

D. En cuanto al fondo del recurso:

El recurrente argumenta que el término de prescripción de la acción en la presente causa, se debería comenzar a contar desde el momento en que surgiera una sentencia penal que -según su opinión- eventualmente podría merecer el hecho que origina la reclamación. No obstante, como no se ha producido esa sentencia penal, considera que el término de prescripción no ha comenzado a correr, en vista de lo cual el apelante opina que la acción no ha prescrito.

El anterior razonamiento de la demandante, no coincide con el sentido que en la doctrina y en la ley se le otorga a la acción de responsabilidad civil extracontractual. Esta acción, tal como se ha mencionado, está dirigida a lograr la reparación que el agraviado pide por un perjuicio que le ha causado otra persona, en el que haya intervenido culpa o negligencia civil (Cfr. art. 34c. del C. C.). Esta culpa o negligencia civil puede producirse sin la necesidad de que exista un pronunciamiento penal que califique el mismo hecho como delito, por lo tanto, el término de prescripción de la acción se cuenta desde el momento en que el agraviado pudo ejercitar la acción civil, tal como lo dispone el art. 1707 del Código Civil.

En opinión de la Corte, cuando el apelante afirma que el término de prescripción de la acción de responsabilidad civil fundada en el art. 1644 del Código Civil, se

comienza a contar desde el momento en que se dicta un sentencia penal, está confundiendo la responsabilidad civil derivada del delito, tal como la regula el Código Penal, con la responsabilidad civil extracontractual que regula el art. 1644 del Código Civil. En el caso de la responsabilidad civil derivada del delito, evidentemente que es necesario que se produzca una sentencia penal, a partir de la cual se comienza a contar el término de prescripción de la acción, toda vez que este tipo de responsabilidad civil exige que una persona sea considerada culpable de un hecho delictivo en perjuicio del demandante, esta culpabilidad solo se puede acreditar con dicha sentencia. No obstante, en la responsabilidad civil regulada por el art. 1644 del Código Civil, el término de prescripción de la acción se cuenta desde el momento en que el perjudicado pudo ejercitar dicha acción, independientemente de que el hecho que origina la reclamación, eventualmente pudiera ser catalogado como delito por la jurisdicción penal.

Visto lo anterior, no hay duda de que en este caso ha prescrito la acción civil por responsabilidad civil interpuesta por el demandante en base al art. 1644 del Código Civil, toda vez que la demanda fue notificada a la demandada más de un año después del momento en que la acción civil pudo ser ejercida por el demandante.

Finalmente, se observa que en su alegato de conclusión el apoderado de la demandada sostuvo que la acción también estaba prescrita al amparo de las disposiciones pertinentes del Código de Trabajo (Art. 12, numeral 2). Sobre el particular, ya la Sala se ha pronunciado en casos similares, en el sentido de que la responsabilidad por razón de accidentes ocurridos en el trabajo de que conoce el Tribunal Marítimo, se rige por las normas que regulan la responsabilidad extracontractual en el Código Civil, decisión que por cierto, el Magistrado Sustanciador en este caso no ha compartido. Tal diferencia no amerita salvamento de voto del Magistrado disidente porque, según lo señala el apoderado de la empresa demandada, cualquiera que sea el criterio que se adopte, la acción en este caso ha quedado prescrita.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

El apelante tendrá que pagar DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00) en concepto de costas de segunda instancia, de conformidad con el art. 490 del Código de Procedimiento Marítimo.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN

BANCO GANADERO, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SAMUEL MARÍN Y DOMINGO GALLARDO. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense RUBIO & RUBIO, en su carácter de apoderado judicial del BANCO GANADERO, S. A. presentó recurso de casación en la forma en contra de la sentencia del 10 de febrero de 1992, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del juicio que había promovido en contra de SAMUEL MARÍN y DOMINGO GALLARDO. Luego de la ritualidad propia para estos recursos, habiéndose declarado la admisibilidad del mismo, corresponde a la Sala adentrarse al estudio del recurso.

El recurrente presenta como causal de forma haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley, causal que está contemplada en el artículo 1155, numeral 1, del Código Judicial. Son dos los motivos en que fundamenta la causal, así como dos las disposiciones legales que se dicen infringidas. Prudente es su transcripción, para establecer exactamente cuál es el trámite o diligencia esencial omitido según el censor, que lleva a producir perjuicios irreparables o graves por razón de la sentencia atacada:

> "MOTIVOS:
>
> PRIMERO: El Primer Tribunal Superior de Justicia, al confirmar la resolución del Juez de primera instancia, que absolvió a Samuel Marín y Domingo Gallardo, decidió, en una sola y única resolución, y tal como lo había hecho el Juez A quo, tanto la sentencia principal como el incidente, omitiendo el trámite esencial de resolver aparte el incidente sin tener que esperar a resolverlo conjuntamente con la causa principal.
>
> SEGUNDO: Al resolver conjuntamente el expediente principal con el incidente propuesto, no obstante el trámite separado dispuesto por el legislador, el Primer Tribunal Superior de Justicia le causó a nuestra representada un grave perjuicio procesal, debido a que el Ad-Quem se limitó a estudiar sólo la controversia sobre el incidente, y a referirse exclusivamente a éste último, pasando por alto razonamiento o fundamento alguno sobre la causa principal, no obstante confirmar la sentencia de primera instancia".

En un análisis de los motivos presentados por el recurrente, se concluye en que el tribunal, para el casacionista, resolvió en el fallo la causa principal y el incidente, comportamiento que causó, según su criterio, grave perjuicio procesal, ya que se limitó a estudiar la controversia sobre la parte accesoria, esto es, el incidente, omitiendo razonamiento o fundamento sobre la causal principal. Sostiene que era una obligación la del tribunal fallar en forma separada y no en conjunto.

La parte demandada, quien fue la única que se ha dejado oír ante esta Superioridad, sostiene que el tribunal de casación está impedido para conocer sobre hechos nuevos no alegados en la primera y segunda instancia. Como en el caso en estudio, la parte demandante únicamente ha sostenido en sus alegaciones, que debía declararse la nulidad de todo lo actuado por cuanto que el negocio había sido paralizado por más de un mes antes de dictarse la resolución que abría el negocio a pruebas en primera instancia y dicha resolución, contrariando la ley, se notificó por edicto y no personalmente, no puede alegar ahora una causal de casación en la forma relacionada a una situación procesal totalmente distinta.

Por otro lado, sostiene que la causal alegada no se ha producido en el proceso ya que no se trata de ninguna de aquellas a las que se refiere el artículo 1136 del Código Judicial. El hecho de que se haya fallado el negocio y en esa sentencia se haya rechazado el incidente de nulidad, en manera alguna constituye causal de nulidad, puesto que, tal como lo señala el artículo 721 del Código Judicial, la nulidad se produce por causas taxativamente consagradas en la ley. De aquí que las normas que se señalan en el recurso como infringidas no establecen formalidades especiales para fallar ni expresan en ninguna de ellas que su infracción acarrea la nulidad de lo acordado.

La Sala ha hecho un estudio a fondo de los actos, para determinar si efectivamente se ha producido la infracción señalada en la causal señalada por el recurrente y ha llegado al convencimiento de que no le asiste ninguna razón.

El demandante, en su alegato presentado ante los Magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia, manifestó que la inconformidad contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, la hacía consistir en que se había violado el numeral 4 del artículo 989 del Código Judicial, por haberse notificado por edicto la resolución mediante la cual el negocio se abrió a prueba.

Sobre lo pedido por esa parte el tribunal expresó que no se dio la paralización del proceso por un período que excediera a lo previsto por la norma citada en la sustentación de la apelación, en virtud que la resolución mediante la cual se admitió la demanda se le notificó personalmente al demandante el día 11 de septiembre de 1990 y la providencia en que se abrió el negocio a prueba se dictó el día 1° de octubre de ese mismo año, la cual fue notificada mediante edicto fijado el día 5 de ese mismo mes.

Importante es advertir que el tribunal, contrario a lo que dice el recurrente, no pasó por alto la debida valoración de la causa principal al confirmar la sentencia de primera instancia. Sobre el particular afirmó que "... adquiere plena validez la decisión de fondo del Juez del conocimiento, ya que resultaba obligante por parte del Banco Ganadero, S. A. acreditar la pretensión demandada, por cuanto que los señores Samuel Marín y Domingo Gallardo en el escrito de contestación se opusieron de forma terminante a la misma (ver párrafo primero del artículo 773 del Código Judicial), lo que, como bien lo dejó anotado el Juez A- quo, no fue cumplido por la parte actora". Es más, la sentencia al referirse a lo resuelto en primera instancia aclaró "Como ya lo dejó expresado esta Superioridad en líneas anteriores, el Juez de la causa desestimó la pretensión perseguida por el Banco demandante, ya que este último no aportó, en la etapa procesal correspondiente ningún elemento de juicio o convicción en favor de la misma".

Lo anterior determina que el tribunal sí hizo el estudio pertinente del proceso, pero lo que aconteció fue que el demandante no aportó prueba alguna que sirviera de sostén al petitum.

Relevante es, por otro lado, lo que establece el artículo 1179 del Código Judicial, cuyo tenor se transcribe:

> ARTICULO 1179. El Recurso de Casación en cuanto a la forma no será admisible si no se hubiere reclamado la reparación de la falta en la instancia en que se haya cometido y también en la siguiente, si se cometió en la primera, salvo si el reclamante hubiere estado legítimamente impedido para hacerlo o se tratare de un vicio insubsanable o no convalidable.
>
> Si la causa que motiva el receso ha tenido lugar en la última instancia y no ha habido posibilidad de reclamar con ella, se admitirá el recurso".

El defecto procesal que dice existir no fue señalado en la segunda instancia, por lo cual, al tenor de la norma precitada no cabe invocarlo en el recurso de casación.

La causal alegada se desestima.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 1° de febrero de 1992 por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario promovido por el Banco Ganadero, S. A. en contra de Samuel Marín y Domingo Gallardo.

Las obligantes costas se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00.).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PEAT MARWICK, MITCHELL & CO. RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JAVIER ROMERO. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Honorable Magistrado **RAÚL TRUJILLO MIRANDA** solicita al resto de esta Sala de lo Civil, se le declare impedido para conocer del presente recurso de casación interpuesto por **PEAT MARWICK, MITCHELL & CO.** dentro del juicio ordinario que le sigue a **JAVIER ROMERO.**

En dicha manifestación de impedimento, el Magistrado Trujillo Miranda, expresa lo siguiente:

> " Antes de ser designado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, formaba parte de la firma forense TRUJILLO, MIRANDA Y ASOCIADOS, hoy, TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA. Como integrante de dicha firma forense promoví acción ordinaria en contra de una persona jurídica de la cual el señor JAVIER ROMERO es su Presidente y mayor accionista. Ese proceso aún no ha finalizado.
>
> El artículo 645 del Código Judicial establece que lo que se diga de las partes se entiende dicho de los apoderados judiciales, cuando la ley no distingue expresamente.
>
> Por otro lado, el artículo 749, en su numeral 11, establece como causal de impedimento "Tener alguna de las partes proceso, denuncia o acusación pendiente o haber tenido dentro de los dos años anteriores, contra el Juez o Magistrado, su cónyuge, o sus ascendientes, descendientes o hermanos".
>
> En esta situación considero ineludible se separe del conocimiento de este negocio, máxime cuando el proceso en donde intervine como apoderado judicial dio margen a otros procesos, lo que haría que mi intervención pudiera ser, en cualquier forma, calificada por el señor JAVIER ROMERO, como parcializada.
> ..."

Concluido el examen de rigor del presente negocio, se observa que la circunstancia anotada, efectivamente configura la causal de impedimento invocada en esta manifestación de impedimento. Por lo que, a juicio del resto de la Sala conforme a lo dispuesto en el artículo 754 y concordantes del Código de Procedimiento Civil, accede a lo solicitado.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado RAÚL TRUJILLO MIRANDA, lo separa del conocimiento y DISPONE que se llame al Magistrado de la Sala Segunda que le corresponda, conforme al orden alfabético de apellidos.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.)SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED RECURRE EN CASACION EN LA SOLICITUD DE TITULO CONSTITUTIVO DE DOMINIO FORMULADA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala de la Corte declaró admisible el recurso de casación en el fondo interpuesto por la firma forense "ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA", apoderados generales de la sociedad ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED, constituida de acuerdo a las leyes de las Islas Bahamas según constancia del Registro Público, contra el auto de 29 de noviembre de 1985 dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial dentro del proceso especial de edificación sobre terreno ajeno.

La sustanciación del recurso de casación se hizo mediante traslado al señor Procurador General de la Nación por disposición expresa de la Ley, quien opinó mediante Vista N°4 que consta a fojas 103 a 110.

El negocio se encuentra en estado de decidir y a ello se procede, previas las consideraciones siguientes:

La causal única de fondo alegada por la sociedad impugnante es la **"VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANTIVA**, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado", y la cual aparece fundamentada en los motivos siguientes:

"Motivos de la Causal

> 1. ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED construyó a sus expensas mejoras consistentes en tanque de almacenamiento de productos de petróleo identificado como tanque N°17 construido bajo concesión administrativa No. 2206 de 1o. de julio de 1969 otorgada por el extinto gobierno de la Zona del Canal de Panamá y que se encuentra ubicada en áreas revertidas en la República de Panamá, de conformidad con las disposiciones del Tratado del Canal de Panamá de 1977.
>
> 2. Estas mejoras fueron construidas por nuestro poderdante en terreno ajeno en virtud de contrato consistente en concesión expedida por el extinto gobierno de la Zona del Canal de Panamá, antes del 1ero. de

octubre de 1979 entidad que ejercía autoridad sobre la ex- Zona del Canal de Panamá antes del 1ro. de octubre de 1979.

3. El extinto gobierno de la Zona del Canal reconoció a ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED el derecho de propiedad sobre dichas mejoras.

4. El juzgador de primera instancia reconoció a ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED el derecho de propiedad sobre el tanque N°17 mediante auto fechado el 12 de noviembre de 1984 expedido por el Juzgado Quinto del Circuito de Panamá, Ramo Civil.

5. Pese a lo expuesto en los motivos anteriores, el auto impugnado al revocar el auto de primera instancia, niega a nuestra poderdante el reconocimiento de título de propiedad sobre las mejoras construidas en terreno ajeno consistentes en el tanque N°17 desconoce el derecho de propiedad de ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED sobre ésas últimas.

Seguido de esos motivos, la censura sostiene que el auto acusado infringe las normas de derecho siguientes:

"Disposiciones Legales Infringidas, en la Causal:

El auto impugnado ha violado los siguientes artículos de la Ley sustantiva:

a) El artículo 1770 del Código Civil que es del siguiente tenor:

"ARTICULO 1770: La persona que edifique o haya edificado en terreno ajeno, en virtud de contrato con el dueño del suelo, podrá inscribir su título constitutivo de dominio, de conformidad con el Código Judicial".

b) El numeral 3 del artículo IX del Tratado del Canal de Panamá de 1977, ley de la República promulgada en la Gaceta Oficial No. 18,451 del 1ro. de noviembre de 1977, que expresa lo siguiente:

"ARTICULO IX: ...

3) Los derechos de propiedad, como los reconocen los Estados Unidos de América, de que disfrutan las personas naturales o jurídicas privadas, en edificios y otras mejoras ubicados en el territorio que constituyó la Zona del Canal, serán reconocidos por la República de Panamá de conformidad con sus leyes".

C) El artículo 1895 del Código Judicial, que prescribe lo siguiente:

"ARTICULO 1895: La persona que edifique o haya edificado sobre terreno ajeno en virtud de contrato con el dueño del suelo, podrá inscribir su título constitutivo de dominio de conformidad con las reglas siguientes:

1. Exhibirá ante el Juez del respectivo Circuito el título o contrato referente al terreno, y comprobará con declaraciones de testigos recibidas con asistencia del Fiscal, que el edificio ha sido hecho a sus expensas y que le pertenece en propiedad;

2. De la correspondiente solicitud se dará conocimiento al público por medio de un edicto que se fijará en la Secretaría del tribunal y en el cual se expresará el nombre del solicitante, la situación del inmueble, sus linderos, y sus dimensiones. En el mismo edicto se citará a los que se crean con derecho al inmueble para que se presenten a hacerlo valer. El edicto permanecerá fijado durante treinta días y copia de él se publicará por tres veces en un periódico de la localidad si lo hubiere a partir de la fijación del edicto; (De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto de Gabinete No. 113 de 22 de abril de 1969, el término de fijación del edicto es de diez días).

3. El Tribunal, una vez vencido el término del edicto de emplazamiento declarará que el solicitante tiene el derecho que reclama y ordenará la inscripción si comprobare las circunstancias expresadas en la regla 1ra. y no se hubiere hecho oposición a la solicitud de inscripción, o si hecha tal oposición y tramitada en la forma que expresa el artículo 901, resultare infundada;

4. En las mismas diligencias del título constitutivo fijará el tribunal el valor de la propiedad oyendo el concepto de dos peritos; uno que nombrará el solicitante en su demanda y otro que nombrará el tribunal en la providencia que la acoja".

Concepto de la Infracción en la Causal:

a) El auto recurrido ha infringido directamente, por omisión, el artículo 1770 del Código Civil según el cual la persona que edifique en terreno ajeno en virtud de contrato con el dueño del suelo, podrá inscribir su título constitutivo de dominio, ya que al no reconocer el derecho de ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED a que se le reconozca título constitutivo de dominio sobre las mejoras identificadas como el Tanque N°17 desconoció dicho derecho consagrado en la mencionada norma del Código Civil.

b) El auto impugnado ha violado directamente, por omisión, el numeral 3 del artículo IX del Tratado del Canal de Panamá de 1977 que establece que los derechos de propiedad como los reconocen los Estados Unidos de América de que disfrutan las personas en mejoras ubicadas en el territorio que constituyó la Zona del Canal, serán reconocidas por la República de Panamá, de conformidad con su Ley, a pesar de lo cual el auto impugnado desconoce el derecho a que se le reconozca título constitutivo de dominio

> a ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED sobre mejoras consistentes en el denominado tanque N°17 construidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Tratado del Canal de Panamá.
>
> c) El auto impugnado ha infringido el artículo 1895 del Código Judicial en concepto de violación directa, por omisión. Esta norma consagra el derecho de la persona que haya edificado sobre terreno ajeno en virtud de contrato con el dueño del suelo de inscribir su título constitutivo de dominio. La violación de esta norma condujo al Tribunal Superior a desconocer en el auto impugnado el derecho de ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED a que se le reconozca título constitutivo de dominio y a inscribir el mismo en relación con las mejoras construidas sobre terreno ajeno consistentes en el tanque de almacenamiento de productos de petróleo distinguido con el N°17."

El señor Procurador General de la Nación, por su parte, en el escrito de oposición al recurso de casación, contrariamente a la tesis de los apoderados judiciales de la recurrente, sostiene entre otros argumentos, los siguientes:

> "a) De conformidad con el artículo 1o. de la Ley No. 17 de 29 de agosto de 1979, reformado por el artículo 1o. de la Ley No. 19 de 29 de septiembre de 1983, fueron declarados de dominio público todos los bienes que revirtieron a la República de Panamá por virtud de los tratados del Canal de Panamá de 1977, y sus acuerdos conexos".
> ...
>
> "Dentro de las características de los bienes de dominio público está la "Inalienabilidad", los mismos están fuera del comercio, porque para lograr la continuidad de los servicios públicos y la función pública que estos bienes están llamados a desempeñar, es necesario que estén en una situación jurídica que impida su salida del Estado. Tratándose de una "Inalienabilidad Parcial", toda vez que por tratarse de bienes normalmente apropiables, sólo por su afectación quedan fuera del comercio. Al cesar ésta, tales bienes entran a formar parte del dominio privado del Estado o del Municipio, recobrando, consecuentemente, su carácter de enajenables".
> ...
>
> "No es válido el argumento del recurrente de que el Tratado del Canal de Panamá reconoce los derechos de propiedad como lo reconocen los Estados Unidos de América, de que disfrutan las personas naturales o jurídicas privadas, sobre edificios y otras mejoras ubicadas en el territorio que constituyó la Zona del Canal, porque la misma disposición contempla una reserva legal al condicionar el reconocimiento de tales derechos de propiedad al cumplimiento de las exigencias de las leyes panameñas".
> (Vista Fiscal N°4 del 26 de febrero de 1988, fs. 103 a 110).

Así las cosas, la Corte procede a dilucidar los reparos hechos por el recurrente a la resolución impugnada con el fin de determinar si se han presentado las aludidas violaciones a la ley.

En sentencia dictada por esta Sala el 24 de agosto de 1990, se resolvió un recurso de casación con similares características al presente, en el cual la misma persona jurídica que ahora funge como recurrente, solicitó el reconocimiento de título constitutivo de dominio sobre mejoras efectuadas en la antigua Zona del Canal de Panamá. En esa decisión se dejaron sentados los siguientes planteamientos jurídicos:

I.- El área de terreno en la que se autorizó a la Concesionaria originaria para construir el tanque destinado al almacenamiento de productos derivados del petróleo y disponer de su mantenimiento, está comprendida en lo que se llamó "Zona del Canal de Panamá",territorio de la República de Panamá.

II.- La relación jurídica que se originó entre la Concesionaria y lo que se denomina el "extinto gobierno de la Zona del Canal", concerniente a las mejoras construidas sobre tierras revertidas a la República de Panamá, se dio dentro del marco de una situación atípica, pues, ni está contemplada en las disposiciones contenidas en el Código Civil panameño vigente, ni podría hacerse valer por el procedimiento civil señalado en el Código Judicial de 1917. De allí que la impugnante se ha visto precisada a recurrir al argumento de la "analogía", para sostener que es aplicable el procedimiento señalado en el artículo 1895 del Código Judicial.

Sin embargo, lo cierto es que ni siquiera, por esa vía de analogía tendrían aplicación las citadas excertas legales de los Códigos Civil y Judicial sobre la materia; toda vez que, de conformidad con el ordenamiento jurídico panameño existente, ellas tienden a regular derechos y obligaciones entre personas privadas, capacidad de las mismas en lo concerniente a sus bienes, actos y contratos. De forma tal que los tribunales de justicia, en ese caso, sólo estarían facultados, constitucional y legalmente, para reconocer en sus decisiones jurisdiccionales relaciones jurídicas encuadradas dentro de los presupuestos establecidos por el legislador en las normas de derecho que aquéllos han de aplicar.

III.- El área de terreno sobre la cual la censura alega haber construido las mejoras, consistente en un tanque para el almacenamiento de gasolina, es y ha sido del dominio absoluto de la Nación panameña, es decir, antes, después y durante la vigencia del Tratado del Canal de Panamá de 1977. Luego, entonces, si estos es así, el "dueño del suelo" es el Estado.

IV.- El área de terreno perteneciente al Estado panameño y sobre la cual se alega haber construido o edificado, en virtud de la otorgada "Concesión Administrativa (Licencia)", ha sido declarada de dominio público, por expresa disposición del legislador patrio al revertir tales bienes a la República de Panamá. (Ley 17 de 29 de agosto de 1979, reforma por la Ley 19 de 29 de septiembre de 1983).

Ello significa que todos los bienes revertidos a la República, como consecuencia de la aplicación del Tratado del Canal de Panamá de 1977, entre éstos, el área de

terreno sobre el cual la impugnante alega haber construido o edificado el tanque para almacenamiento de gasolina, tendrían que ser desafectados por el propio legislador, para que a tales bienes revertidos pudiera dárseles un destino o status distinto al declarado en las comentadas leyes.

Tomando como fundamento los anteriores razonamientos esta Sala decidió en aquella oportunidad que el recurrente carecía del derecho de dominio que alegaba tener. A nuestro entender, las apreciaciones realizadas en la sentencia comentada son perfectamente aplicables al presente proceso. Por lo cual concluimos en que no es válida la violación a la ley que el recurrente le endilga a la sentencia impugnada.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el 29 de noviembre de 1985, referente a la solicitud promovida por ESSO MARINE SUPPLY COMPANY LIMITED relativa al otorgamiento de título constitutivo de dominio sobre las mejoras construidas en el área del territorio de la República que se denominó "Zona del Canal", consistente en la adquisición de un tanque de petróleo identificado como tanque N°17.

Copíese, Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EVELIA CANO Y MARÍA LUISA LLORENTE VDA. DE SAAVEDRA RECURREN EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO (EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN) PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Procedente del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial ha ingresado a esta Sala de la Corte el negocio que contiene el recurso extraordinario de casación en el fondo, interpuesto por la firma forense Rubio & Rubio, actuando como apoderada judicial de las señoras EVELIA CANO RODRÍGUEZ y MARÍA LUISA LLORENTE VDA. DE SAAVEDRA, contra la Resolución del 13 de noviembre de 1992 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el incidente de previo y especial pronunciamiento (extinción de la pretensión) aducido por el Banco Nacional de Panamá dentro del proceso ordinario que contra esta institución bancaria han incoado las prenombradas señoras Cano y Llorente Vda. de Saavedra.

Surtidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso extraordinario, esto es, reparto de rigor, fijación en lista del negocio para alegatos en cuanto a la admisibilidad, toca a esta Sala decidir si el recurso ha sido concedido mediante la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3. Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y,

4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley.

Se observa, en primer lugar, que la resolución objeto del recurso es susceptible de impugnación por esta vía extraordinaria, ya que se trata de una resolución de segunda instancia proferida por un Tribunal Superior de Justicia dentro de un incidente que accede a un proceso con una cuantía superior a los cinco mil (B/.5,000.00) balboas.

El recurso fue interpuesto en tiempo oportuno y por persona hábil, habida cuenta, que el recurrente es la persona agraviada con la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia.

En lo atinente al escrito de formalización del recurso, el casacionista ha invocado una sola causal: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por aplicación indebida de la norma, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", fundamentada en cuatro motivos. En la forma como están expuestos dichos motivos, es fácil observar, que el primero de los mismos está redactado en forma de alegato, sin precisar en forma clara el cargo que se le endilga a la resolución de segunda instancia; el segundo motivo precisa el cargo al igual que el tercero; y, el último no contiene un cargo, más bien se trata de una consideración subjetiva.

Las normas de derecho que se consideran infringidas por el fallo impugnado son los artículos 1080 y 1081 del Código Judicial, así como también el 974 y 1500 del Código Civil. El opositor a este recurso, en cuanto a este requisito que debe contener el escrito de formalización señala:

> "... el mismo se interpuso en el fondo y en él se alega la infracción de normas adjetivas, de derecho, como lo son los artículos 1080 y 1081 del Código Judicial y de conformidad con el artículo 1154 del citado Código y de reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el Recurso de Casación en el fondo procede solo cuando se ha incurrido en infracción sustantivas de derecho, por ello es improcedente y su admisión debe ser denegada".

Resulta importante señalar, que la ubicación de una norma en uno u otro código constituye simplemente un indicio, pero, no da su naturaleza. La doctrina ha discutido ampliamente la distinción entre normas procesales y normas sustantivas sin llegar a un acuerdo, y, esta Corporación de Justicia, en forma reiterada, ha señalado que le corresponde a la misma (Corte), analizar los hechos alegados en relación con la excerta legal que se considera infringida para luego determinar la naturaleza de la norma. En el caso que ocupa la atención de la Sala no encuentra una incongruencia entre causal y normas de derecho infringidas.

Debe subsanarse lo anotado en cuanto a los mismos.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del presente recurso de casación interpuesta por la firma forense RUBIO & RUBIO
en representación de las señoras EVELIA CANO y MARÍA LUISA LLORENTE VDA. DE SAAVEDRA, para lo cual concede el término de cinco (5) días conforme lo establece el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HOTELERA EL PANAMÁ, S. A. Y BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, RECURREN EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE DISTINTA JURISDICCIÓN Y FALTA DE COMPETENCIA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO PROPUESTO POR CONSORCIO HOTELERO, S. A. CONTRA BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Y HOTELERA EL PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE. RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

HOTELERA EL PANAMÁ, S. A. y el **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ** han interpuesto recurso de casación, en la forma y en el fondo, contra la resolución de 27 de enero de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en virtud del Incidente de Nulidad de Distinta Jurisdicción y Falta de Competencia propuesto dentro del proceso ordinario declarativo seguido por **CONSORCIO HOTELERO, S. A.** a los recurrentes.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, presentado sus escritos tanto el opositor (fs.132) como los recurrentes (fs.133 a 134 y 135 a 136) respectivamente.

Por tanto, la Sala pasa al examen de cada recurso, a fin de determinar la concurrencia o no de las exigencias dispuestas en el artículo 1165 del Código Judicial requeridas para la admisibilidad de los mismos. En este sentido, la norma enumera lo siguiente:

1. Si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3. Si el escrito de formalización cumple con los requisitos contenidos en el artículo 1160 ibídem. O sean, la determinación de la causal o causales, los motivos que sirven de fundamento a la causal, y la citación de las normas de derecho infringidas con la correspondiente explicación.

4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley.

Luego del estudio del recurso de casación propuesto por el licenciado **Ricardo A. Landero M.**, en representación de **HOTELERA EL PANAMÁ, S. A.** (fs.72 a 80), se constató que la casación en la forma cumple con los requisitos antes citados, por lo que procede su admisibilidad. Sin embargo, el recurso de casación en el fondo propuesto por el mismo recurrente presenta un defecto, visible a fojas 81 y 83. En este sentido, la norma sustantiva citada es el artículo "1141 del Código Civil" (f.81), y posteriormente desarrolla el concepto de la infracción de la disposición procesal correspondiente al "Artículo 1131, numeral 1 del Código Judicial". Lo que denota un error tanto en la determinación numérica como en la del texto legal.

Consecuentemente el recurrente debe corregir la casación de fondo en este aspecto, de modo que quede claro, a qué norma se refiere, y si está contenida en el Código Civil o en Código Judicial.

El otro recurso de casación, interpuesto por el licenciado **FRANCISCO VÁSQUEZ QUINTERO**, apoderado especial del **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**, lo es también en la forma y en el fondo (fs.89 a 124). Este recurso cumple con el primero, segundo y cuarto de los requisitos contemplados en el artículo 1165 del citado Código, pero no así con la totalidad de los presupuestos del tercer numeral. La deficiencia constatada se evidencia en el contenido de algunos motivos, que han sido expresados como fundamento de la causal de forma y en la de fondo. Veamos:

Dentro de la causal de forma invocada, consistente en "<u>la carencia de Competencia improrrogable en el Tribunal Sentenciador</u>, ..." se comprueba que los motivos no se limitan a indicar el obligante defecto que se atribuye a la resolución recurrida, en que supuestamente incurrió el sentenciador, sino que en los mismos se alude a consideraciones personales del recurrente, y del extenso contenido del quinto y sexto ni siquiera se percibe cargo alguno.

En otro orden de ideas, la misma deficiencia se evidencia en la causal de fondo, es decir respecto al contenido de los motivos. El defecto es obvio en el primer motivo, que se refiere a circunstancias antecedentes del caso, aludiendo además a una norma de derecho lo que no es propio de este apartado sino del siguiente.

El segundo motivo expresado en esta causal de fondo, no contiene cargo alguno, pues indica más bien motivaciones y expectativas del recurrente sobre su actuación y la del Ad-quem.

La jurisprudencia de la Sala ha mantenido en forma constante el criterio de que los motivos del recurso de casación, deben ser cargos de injuridicidad contra la sentencia impugnada, guardando siempre relación directa con a causal invocada. Los alegatos que puedan hacerse en este recurso, deberán incluirse en el apartado previsto por la ley para explicar el concepto en que presumiblemente se han infringido las normas de derecho.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación en la forma, y se ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso en el fondo propuesto por HOTELERA EL PANAMÁ, S. A. Además ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso, en la forma como en el fondo, propuesto por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ dentro del término establecido por el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JARDINERÍA DE SEDAS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO QUE LE SIGUE A NORIS C. HASSÁN GÓMEZ Y ARTURO HASSÁN GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, SEIS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro de la liquidación de la condena en abstracto pronunciada en contra de NORIS HASSÁN GÓMEZ y ARTURO HASSÁN GÓMEZ en el juicio ordinario que le siguiera JARDINERÍA DE SEDAS, S. A., la actora promovió recurso de casación en contra del auto dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 8 de junio de 1992. Recibido el negocio en la Sala de lo Civil, realizado el reparto correspondiente, se procedió a escuchar las partes acerca de la admisibilidad del recurso.

El Tribunal al estudiar sobre el aspecto formal, consideró admisible dicho recurso. Se procedió posteriormente a fijar el término para escuchar a las partes en cuanto al fondo de la censura instaurada. Aprovechada como fue esa oportunidad, corresponde al tribunal resolver acerca de los planteamientos señalados por los litigantes.

La recurrente presenta tres causales de fondo, las cuales serán consideradas separadamente, tal como lo prescribe la ritualidad para estos casos.

La primera causal es la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

Sostiene el recurso, en los tres motivos en que fundamenta la causal, que hubo una valoración errónea de las diligencias periciales allegadas a los autos que constan a las fojas 98 a 106 y 107 y 108. Indica que al peritaje rendido por RIGOBERTO AVILA H. y AURA LASSO (fojas 98 a 106) se ha valorado erróneamente al concedérsele valor de plena prueba, siendo solamente suscrito por RIGOBERTO AVILA H., Ingeniero Agrónomo Zootecnista y presentado, pero no suscrito, por AURA LASSO. Además, expresa que también se valora erróneamente el peritaje rendido por GUILLERMO DE LEÓN L. (fojas 107-108) quien ha indicado que no hubo perjuicios morales. Da como disposiciones legales infringidas los artículos 953, 960, 967 del Código Judicial y 986 y 991 del Código Civil.

En sus alegaciones la recurrente hace algunas consideraciones sobre el daño moral, así indica:

> "...
> 5) La reputación de una persona jurídica no solo puede verse afectada por comisión (ataque a la misma), sino también por omisión. Y en este caso, la negativa de los demandados a cumplir fielmente lo pactado con la actora, se tradujo en una serie de circunstancias que mermaron la producción y desmejoraron la atención a los clientes de esta; lo cual afectó sin lugar a dudas la reputación de Jardinería De Sedas, S. A. como empresa reconocida y de primera línea en la actividad de la jardinería en general. Todo lo cual en la actualidad también ha convertido el comportamiento procesal de los demandados en infracción de normas de derecho por comisión. ...".

Observamos en esta posición adoptada por la parte actora, que no se refiere a la pericia atacada en el recurso que realizaron los peritos Avila y Lasso y limita su ataque a lo expuesto por el perito GUILLERMO DE LEÓN LEE, en cuanto a los daños morales que sufriera JARDINERÍA DE SEDAS, S. A.

Por su parte el apoderado de la parte demandada en el alegato sobre el fondo poco es lo que manifiesta en relación a las pruebas que se dicen mal valoradas. Así sólo hace el siguiente señalamiento:

"... Algo en lo cual es forzoso entrar en detalle es el peculiar tratamiento que le da el Tribunal de Segunda Instancia al daño moral, el cual según él está vedado para las personas jurídicas; desconociendo que si bien es cierto, éstas no poseen afectos ni sentimientos, si tienen una reputación, la cual en muchos casos es más frágil que la propia reputación de las personas naturales. Aceptamos que una persona jurídica no puede sufrir por un daño moral, pero si puede ir a la bancarrota, lo cual en algunos casos es aún peor.

El problema del daño moral, en cuanto a las personas jurídicas se refiere, es meramente semántico, ya que erróneamente se especula que solamente el ser humano puede ser afectado moralmente, lo cual es tan solo un concepto restrictivo, ya que lo moral en sentido amplio es todo aquello que, no perteneciente al orden jurídico, pertenece al fueron inmaterial adjunto con la ética.

Afortunadamente este último es el sentido que nuestro legislador le ha dado al daño moral en las recientes reformas introducidas al Código Civil el año próximo pasado ...".

Al estudiar esta causal la Corte, considera conveniente indicar que la ejecución pretendida por la parte actora tiene su origen en el juicio ordinario promovido por JARDINERÍA DE SEDAS, S. A., en contra de NORIS CECILIA HASSÁN GÓMEZ y ARTURO HASSÁN GÓMEZ, con cuantía señalada en el libelo de demanda en la suma de DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00) de capital, desatado en segunda instancia mediante sentencia en que se hicieran las siguientes declaraciones:

"A) Que Noris Cecilia Hassán Gómez celebraron con Jardinería De Sedas, S. A., representada por Rogelio Antonio De Sedas, el día 31 de enero de 1985, contrato de arrendamiento, con opción de compra sobre la finca de propiedad de los señores Hassán Gómez, distinguida con el número 12135, inscrita al tomo 351, folio 208, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, Registro Público, mediante Escritura Pública 1376, expedida por la Notaría Primera del Circuito de Panamá, registrada en el tomo 348, folio 311, asiento 271, 024, Sección de Arrendamientos del Registro Público;

B) Que en virtud de la cláusula Séptima del contrato aludido en la declaración anterior, los arrendadores otorgan al arrendatario el área de su interés,

C) Que Jardinería De Sedas, S. A., en virtud de la opción de compra aludida en la declaración segunda, ha comunicado a los demandados Noris Cecilia Hassán Gómez y Arturo Hassán Gómez, el área que le interesa en los términos pactados y según plano levantado por el agrimensor Baudilio Alvarez Morales;

D) Se ordena a los demandados Noris Cecilia Hassán Gómez y Arturo Hassán Gómez, que deben proceder a la vista (sic) (fs.26, renglón 7°) y segregación del lote de terreno en los términos pactados y de conformidad con el plano indicado en la declaración anterior a Jardinería De Sedas, S. A.;

E) Que los demandados Noris Cecilia Hassán Gómez y Arturo Hassán Gómez, están obligados a venderle a Jardinería De Sedas, S. A., el lote de terreno de conformidad con su interés y el plano levantado por el agrimensor Baudilio Alvarez Morales.

F) Que los demandados Noris Cecilia Hassán están obligados a pagarle a Jardinería De Sedas, S. A., los daños y perjuicios, las costas y gastos del proceso.

Los daños y perjuicios deberán cuantificarse mediante el procedimiento de liquidación de condena en abstracto según el artículo 983 del Código Judicial.

Las costas del proceso a cargo de la parte demandada por razón de las declaraciones A°), B), B°), C°) y D°) se fijan en dos mil seiscientos balboas (B/.2,600.00); y en las relativas a los daños y perjuicios (declaración E°), en el 20% de la cuantía definitiva en aquellos conceptos".

Esta sentencia, de fecha 31 de agosto de 1988, se reformó a petición de parte el 21 de octubre, en donde se expresó los siguiente:

"...
Bien, según el apoderado de los demandados, la cuantía fijada inicialmente por la parte demandante fue de diez mil balboas (B/.10,000.00) y el método seguido por esta Corporación para fijar las costas daría lugar a una doble condena por razón de costas "que las harían desproporcionadas a la cuantía de la demanda". (f.296)

Concluye el peticionario luego de considerar otras argumentaciones, que se tome como punto de partida para los cálculos de costas, la suma que la propia parte demandante fijó como cuantía de su demanda y que "sean las comprobaciones que ésta presente sobre los daños que dice haber sufrido la que sirva de parámetro para la determinación de costas" (f.296).

Es decir, pues, que las costas sólo se deben imponer en una sola ocasión, teniendo como base exclusivamente la cuantía de la demanda, que fue de diez mil balboas (B/.10,000.00) y no costas por las declaraciones reconocidas, y costas por la condena en abstracto cuando se cuantifiquen los daños y perjuicios, ya que estos están incluidos en la cuantía de la

referencia; y esto parece que tiene un sentido lógico, es justo y con perfecto adecuamiento legal.

En efecto, al intentarse la acción cautelar de secuestro de que tratan las fojas 3 y 4, se apoderó a la firma forense que representa a la parte demandante no solo para que pidiese secuestro contra los demandados hasta la concurrencia de diez mil balboas (B/.10,000.00), sino también para que interpusiese "juicio Ordinario declarativo de Mayor Cuantía en contra de Noris Cecilia Hassán Gómez y Arturo Hassán Gómez" hasta la concurrencia de diez mil balboas (B/.10,000.00).

De modo que hubo o hay un límite dinerario sobre la pretensión reconocida en la sentencia de segunda instancia y las costas deben fijarse teniendo como base ese límite o cuantía de la demanda, siendo que en esto asiste razón al apoderado de la parte demandada.

Significa entonces que las costas en cuanto al trabajo en derecho fijadas en la sentencia de este Tribunal del 31 de agosto de 1988 (f.278-290) deben modificarse o aclararse como lo solicita el apoderado de la parte demandada, para fijarlas en una cantidad que resulte del cómputo que se haga sobre la cuantía de diez mil balboas (B/.10,000.00) que cubre las pretensiones en su totalidad.

De acuerdo con la nueva tarifa de honorarios de abogados aprobada por la Corte Suprema de Justicia, en los procesos ordinario de mayor cuantía, se fijará el 20% sobre una cuantía de B/.5,000.00 hasta B/.20,000.00; de consiguiente el 20% de B/.10,000.00, sería DOS MIL BALBOAS (B/.2,000.00) que es el monto de las costas en este proceso.

Ahora bien, la condena o reconocimiento de la pretensión es mixta, una parte reconocida en cuanto a las declaraciones hechas y otra abstracta en cuanto a daños y perjuicios. Sobre esto último hay que reconocer para el solo efecto de fijar las costas, que la propia demandante los estimó en B/.3,587.50, según lo admite la propia parte demandada (primer párrafo pág. 296). Aún así, habiéndose reconocido toda la pretensión reclamada, el quantum de la misma no puede ir más allá de los diez mil balboas (B/.10,000.00) fijados como cuantía en el poder que JARDINERÍA DE SEDAS, S. A. otorgó a la firma forense que la apodera y en la solicitud de secuestro (f.3 y 4).

Por tanto, la cuantía de las costas en cuanto al trabajo en derecho por toda la pretensión es de DOS MIL BALBOAS (B/.2,000.00), incluida la parte relativa los daños y perjuicios, quedando eliminados el 20% de la cuantía definitiva en esos conceptos que se señaló en la sentencia. Así que las costas para toda pretensión es por la referida cantidad, dos mil balboas.

Por otra parte el anuncio de casación contra la sentencia de segunda instancia se hizo dentro del término y como se trata de resolución que por su naturaleza y cuantía es susceptible de ese recurso (arts. 1148 y 1149 del Código Judicial) se dispone proceder como lo faculta la disposición que contiene el artículo 1159 del Código Judicial.

En cuanto a los argumentos de la firma que apodera a la demandante, que se refiere a un fenómeno procesal de índole laboral que denomina allanamiento tácito el fallo de segunda instancia, por haber la demandada anunciado casación el 6 de septiembre de 1988, y al día siguiente, pidió entonces la modificación de las costas, no es del procedimiento civil como el propio letrado lo reconoce y sin más consideraciones se desecha por razones obvias.

Por todo lo expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve:

Primero: Modifica las costas, en cuanto al trabajo en derecho, en el sentido de señalarlas en la cantidad de dos mil balboas (B/.2,000.00) por el reconocimiento de todas las declaraciones pedidas, incluyendo la relativa a los daños y perjuicios; y
...".

Recurrida en casación la Sala Civil, en sentencia de 2 de agosto de 1989, no casó la resolución.

Se continúa el proceso en cuanto a los daños y perjuicios no cuantificados, presentando el actor una liquidación por la suma de QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS BALBOAS CON CINCUENTA CENTÉSIMOS (B/.501,686.50). Al corrérsele traslado, la contraparte se opone a la liquidación. Luego de la tramitación correspondiente, el tribunal de primera instancia fijó la suma que deberían pagar los demandados por daños y perjuicios en la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO BALBOAS CON NOVENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (B/.34,538.95). Esta decisión fue apelada por las partes y el tribunal, en el auto que se impugna con este recurso, resolvió fijar en la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS BALBOAS (B/.5,200.00) los daños y perjuicios que en forma solidaria los demandados NORIS CECILIA HASSÁN GÓMEZ y ARTURO HASSÁN GÓMEZ deben pagar a JARDINERÍA DE SEDAS, S. A.

Al resolver sobre esta liquidación, el tribunal descartó las pruebas documentales acompañadas en el escrito de liquidación denominado por el actor "Informes Periciales", por cuanto que los mismos no tienen tal carácter. Así dice que "No obstante los referidos informes se observa que no se incorporaron al proceso, luego de someterse a los rigores del procedimiento probatorio, toda vez que no fueron producto de la práctica de prueba de carácter pericial, aducida o promovida durante la etapa o fase procesal de ley, la cual comprende período de objeción, admisión, o rechazo, y en el primer caso, la práctica de pruebas".

Como puede observarse, el tribunal no le concedió valor probatorio a las pruebas documentales, que el demandante llama "informes periciales". Sin embargo, dentro del recurso promovido por esta parte en cuanto a la valoración o apreciación de la prueba, el recurrente se abstrae de referirse a esa prueba presentada por él y se limita a atacar la diligencia pericial practicada por Avila y Lasso quienes determinan el daño material en CINCO MIL DOSCIENTOS BALBOAS (B/.5,200.00).

La técnica de casación no permite alejarse de los mandatos claros de la ley. Es obligatorio referirse en forma exclusiva a la causal o causales invocadas en el escrito de formalización del recurso, tal como lo prevé el artículo 1180 del Código Judicial. Por otro lado, al examinar separadamente cada una de las causales lo hará con base a los motivos o fundamentos de la causal, según taxativamente lo manda el artículo 1177 de ese mismo cuerpo legal. Al motivar la causal, la recurrente ataca la diligencia pericial practicada por Avila, Lasso y De León, por no tener el valor de plena prueba. No obstante, nada dice sobre cuales eran las pruebas que demostraban el error de apreciación que se hizo de esas experticias. Es más, si se hubiere desechado dichas pericias, el tribunal de segunda instancia, luego de no darle valor probatorio a los llamados "informes periciales" no hubiere tenido ningún soporte para establecer a cuanto ascendían los daños y perjuicios. No encuentra la Sala que en la apreciación de la diligencia pericial se hubiere incurrido en los errores a que se refiere el recurrente, por lo que se desestima la Primera causal alegada.

Se indica, en segundo lugar, que se produce la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Como fundamento de esta causal la recurrente presenta tres motivos, los cuales se pasan a transcribir para una mejor comprensión:

> "1) El Primer Tribunal Superior de Justicia, en el auto cuestionado por el presente recurso, desconoce a pesar de existir en los autos, las pruebas documentales presentadas por la parte actora adjuntas con el libelo de demanda, las cuales corren de fojas primera (1) a 56 A del expediente. Adoleciendo así de injuricidad.
>
> 2) El Primer Tribunal Superior de Justicia, en el auto atacado por el presente recurso, descarta el valor probatorio de los documentos aportados con su demanda por el actor, antes aludidos, a pesar de que los mismos no fueron objetados y redargüidos de falsos como lo exige la ley procesal vigente. Adoleciendo así de injuricidad.
>
> 3) El Primer Tribunal Superior de Justicia, en la sentencia impugnada por el presente recurso, ignora por completo que el actor en su libelo de demanda denunció "como fuente de prueba el expediente principal de esta causa, sin necesidad de reproducción", o sea, adujo como prueba el expediente que contiene el proceso ordinario declarativo al cual accede el presente trámite de liquidación de condena en abstracto. Adoleciendo así de injuricidad".

En cuanto a los motivos primero y segundo, conveniente es recordar lo expuesto al resolver la causal anterior sobre la apreciación de las pruebas documentales acompañadas con el libelo de demanda. Es necesario insistir, tal cual lo ha hecho en varias ocasiones la Corte, que la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en la existencia de la prueba, no tiene absolutamente nada que ver con la valoración que se le da a una prueba en el proceso. Hay error de hecho cuando una prueba que ha sido presentada no se valora, esto es, se ignora totalmente. Cosa distinta ese cuando la prueba se estima, se aprecia, pero se le niega el valor que la ley le asigna, lo que produce una causal de error de derecho en la apreciación de la prueba que infringe la ley sustantiva. Aparentemente ha existido confusión al considerar que por el hecho de que el Primer Tribunal Superior descarta el valor probatorio que esos documentos tienen según la actora, ello constituye un error de hecho; en este caso, no hubo falta de apreciación de la prueba, el tribunal lo que hizo fue restarle valor probatorio a las pruebas presentadas por la parte recurrente. Estas pruebas no fueron ignoradas en la sentencia, por lo que mal se puede hablar de error de hecho, tal como se ha alegado en la causal.

En cuanto al tercer motivo, es importante aclarar que cuando alguien señala "como fuente de pruebas" un expediente, es indispensable que la prueba contenida en el expediente sea identificada; cosa distinta sería cuando se presenta como prueba el expediente principal sin usar el término fuente, ya que esta expresión se refiere al lugar donde está la prueba que va a ser utilizada.

Al fallar la demanda se consideró que en el expediente no existían las pruebas que permitieran una cuantificación de los daños y perjuicios reclamados. Correspondía a la parte favorecida con la sentencia probar, mediante el proceso de liquidación, cual era la cantidad que cubría la indemnización. Valorar nuevamente la prueba existente en el expediente principal, sin aportar ningún nuevo elemento probatorio, en caso de que esa hubiera sido la intención de quien presentó la liquidación, en nada influiría en el fallo que debería dictarse en la liquidación; el valor de esas pruebas había sido establecido en otra etapa del proceso.

En consecuencia, se descarta la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en la existencia de la prueba.

La tercera causal y sus motivos los señala el recurrente en los siguientes términos:

TERCERA CAUSAL:

> "Infracción de normas sustantivas de derecho por indebida aplicación de estas al caso, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo de la resolución".
>
> Esta causal, tal como se indicó, está consagrada en el artículo 1154, del Código Judicial.

MOTIVOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA CAUSAL:

> 1) El Primer Tribunal Superior de Justicia, en su auto de 8 de junio de 1992, reformó "el auto No.342 de primero de abril de 1991, dictado por el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el sentido de fijar en la suma de B/.5,000.00, los daños y perjuicios que deben pagar en forma solidaria los demandados Hassán Gómez a Jardinería De Sedas, S. A.; auto en el que se aplican indebidamente las reglas sustantivas del Código Civil relacionadas con el daño moral. Adoleciendo así de injurídicas.
>
> 2) El Primer Tribunal Superior de Justicia, en el auto impugnado por el presente recurso, al aplicar las normas civiles concernientes al daño moral, incurre en infracción de la ley sustantiva por efecto de indebida aplicación de estas al caso, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo atacado".

Conviene dejar claro que hay indebida aplicación de una norma "cuando un texto legal perfectamente claro ha sido aplicado a un caso no reglado por él o cuando a una cuestión de hecho que no se discute, se aplica una norma que no es pertinente" (Pérez Vives, Recurso de Casación).

Nos dice la recurrente que el auto en que se fijó la suma que debía pagar la demandada por los daños y perjuicios, aplicó indebidamente las reglas sustantivas del Código Civil relacionadas con el daño moral. Señala que estas normas indebidamente aplicadas son el artículo 991, 986 y 1644 del Código Civil.

En cuanto al primero de estos artículos, dice que al ser aplicado por el tribunal excluyó, "como en efecto lo hizo de su esfera normativa, a las personas jurídicas". Hace un análisis en cuanto a que si bien es cierto que existe una diferencia entre personas naturales y jurídicas, en cuanto al ámbito del derecho de obligaciones, tanto unas como las otras son sujetos de derechos en iguales condiciones.

Respecto al artículo 986 del Código Civil, se indica que se aplicó limitándose los daños y perjuicios en cuanto a la cuantía de la demanda original. Indica que desde el momento en que se decide al trámite de la liquidación de condena en abstracto, se está aceptando que en ese momento le es imposible al tribunal determinar el monto líquido de la condena, por lo que las partes se liberan de los parámetros establecidos con la demanda original.

Por último, en lo que se refiere al artículo 1644 del Código Civil, también se dice que se violenta directamente por comisión, porque al tribunal le niega a la actora el derecho a reclamar el perjuicio por daño moral, bajo el pretexto de que se trata de una persona jurídica y no de una persona natural, lo que considera totalmente errado.

Se infiere, tanto en lo referente a las normas que se dicen infringidas como a los motivos que sirven de fundamento a la causal, que la posición adoptada por la casacionista, nada tiene que ver con la aplicación de la ley sustantiva a un hecho no reglado por ella o a un presupuesto que lo rechaza. Por el contrario, el casacionista se refiere a que ha habido interpretación equivocada de la ley sustantiva; en otras palabras, pretende o sostiene que se le dio a la norma un alcance distinto del que tiene, por lo que las consecuencias en el fallo son distintas a lo expresado en dicha disposición. No se trata de una indebida aplicación como reclama la parte actora. Las normas del Código Civil aplicadas son las pertinentes por lo cual no procede la causal.

Por todo lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA el auto de 8 de junio de 1992, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro de la liquidación por daños y perjuicios presentados por JARDINERÍA DE SEDAS, S. A. en contra de NORIS C. HASSÁN GÓMEZ y ARTURO HASSÁN GÓMEZ.

Las obligantes costas se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CELESTINO LESCANO MIRANDA RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO INTERPUESTO POR FÉLIX ANTONIO ARAÚZ DENTRO DE LA ACCION DE SECUESTRO INCOADO POR CELESTINO LEZCANO MIRANDA CONTRA GRACIELA ESTHER ARAÚZ CONCEPCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

JOSÉ MARÍA LEZCANO, profesional del derecho y quien representa los intereses del señor **CELESTINO LEZCANO MIRANDA**, no conforme con el auto definitivo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el día ocho (8) de febrero del presente año en el negocio contentivo del incidente de levantamiento de secuestro interpuesto por **FÉLIX ANTONIO ARAÚZ** dentro de la medida cautelar de secuestro promovida por **CELESTINO LEZCANO MIRANDA** contra **GRACIELA ESTHER ARAÚZ CONCEPCIÓN**, anunció y formalizó recurso extraordinario de casación, en el fondo, contra el precitado acto jurisdiccional. Corre a fojas 70 y vuelta el auto que ordena el envío del negocio a esta Corporación de Justicia.

Recibido el expediente en esta Sala de la Corte y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 1164 del Código de Procedimiento, el Sustanciador ordenó fijar el

asunto en lista por seis días para que, dentro de los tres primeros, la parte opositora alegara sobre la admisibilidad; y, dentro de los tres siguientes el recurrente replicara. Precluido dicho término, sin que los interesados lo aprovecharan, le corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso presentado, tomando en cuenta para ello lo que prescriben los artículos 1160 y 1165, ambos de la citada legislación.

Observa la Sala que el recurso se endereza contra una resolución que es susceptible de impugnarse por esta vía, por cuanto que se trata de un incidente de levantamiento de secuestro que accede a este procedimiento cautelar (secuestro) en donde se ventilan intereses particulares con una cuantía superior al mínimo que prescribe la ley, y ha sido interpuesto en tiempo y por persona hábil.

Al confrontar el escrito de formalización del recurso con las exigencias de forma prescritas en el artículo 1160, es fácil comprobar que se cumple con los dos primeros requisitos, más sin embargo, se presentan defectos de forma subsanables en cuanto a la citación de las normas de derecho infringidas y explicación de cómo lo han sido.

La estructuración del recurso extraordinario de casación exige exponer en primer término la norma o normas que establece el valor de la prueba y posteriormente las de carácter sustantivo, ello cuando se trata de una causal probatoria como lo invocada por el casacionista.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del presente recurso de casación, para lo cual concede el término que prescribe el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MICHAEL DELGADO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JULIO C. ZAMORA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados SOLÍS, ENDARA Y GUEVARA, apoderados especiales de **MICHAEL DELGADO**, parte demandada en el proceso ordinario declarativo que le sigue **JULIO C. ZAMORA**, formalizó el recurso de casación que en tiempo oportuno anunció interponer en contra de la sentencia de 12 de mayo de 1992, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

Por admitido el recurso extraordinario interpuesto y cumplidos los trámites de la sustanciación ordenada por la ley ritual, el caso se encuentra en estado de fallar y a ello se procede seguidamente previo el examen de la causal de fondo invocada y de sus fundamentos.

La causal única de fondo alegada por la parte recurrente en el recurso de que conoce la Sala de la Corte, consiste en "la infracción de normas sustantivas de Derecho por error de Derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

La alegada causal probatoria aparece fundamentada en los motivos que a continuación se transcriben:

> "PRIMERO: La parte actora presentó como prueba y obran a fojas 27 y 31 del proceso consistente en documentos privados que emanan de terceros pretendiendo demostrar daños y perjuicios materiales sufridos por el señor JULIO CESAR ZAMORA.
>
> SEGUNDO: El Tribunal Superior en la sentencia recurrida, al realizar la función valorativa de estas pruebas, le atribuyó el carácter de plena prueba por el solo hecho de que se encuentran debidamente autenticadas ante Notario además del hecho de que fueron incorporadas al proceso por el propio otorgante, en circunstancias en que se trata de documentos privados emanados de un tercero de carácter dispositivo (fojas 31) y testimonial (fojas 27) a los que no se les aplica la regla de reconocimiento tácito que sólo opera respecto a los documentos suscritos por la parte contraria, en circunstancias en que por tratarse de un documento privado emanado de tercero, este debió comparecer al proceso a reconocerlo o ratificarse de su contenido, según sea la naturaleza del documento, error que condujo a la violación de normas sustantivas de Derecho que incidieron, sustancialmente, en lo dispositivo del fallo impugnado.
>
> TERCERO: El Primer Tribunal Superior de Justicia al dictar la sentencia calendada 12 de mayo de 1992, en segunda instancia modificando la proferida en primera instancia pero únicamente en el quántum de la condena, le atribuyó un valor que no tienen, según la Ley, a los documentos privados consistentes en recibo de pago de Rubén Moncada Luna (fojas 27) y Contrato de Honorarios profesionales que regulaba la relación profesional entre el Licenciado Napoleón Aguilar Moreno (fojas 31), error de valorización que condujo a la violación de normas sustantivas de Derecho.
>
> CUARTO: La sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia al apreciar erróneamente las pruebas documentales antes mencionadas, lo

> indujo a considerar que se habían causado daños y perjuicios materiales al señor JULIO C. ZAMORA llegando a la conclusión que debía condenar al señor MICHAEL DELGADO, todo lo que ha influido, sustancialmente, en lo dispositivo del fallo impugnado."

De esa manera se acusa a la sentencia de segunda instancia, recurrida en casación, de infringir de modo directo por omisión los artículos 845 y 858 del Código Judicial; y, como consecuencia de dichas violaciones también se acusa a la recurrida sentencia de infringir de modo directo por omisión los artículos 1644 y 1100 del Código Civil.

Expuesto lo anterior como marco de referencia e ilustración sobre el contenido de fondo del recurso de casación, la Sala procede entonces al examen de la causal invocada y de sus fundamentos, a fin de determinar si está o no justificada.

Pero antes de emprender ese cometido, considerase necesario destacar algunos aspectos generales relacionados con los antecedentes del caso, como son:

El señor JULIO C. ZAMORA interpuso proceso ordinario en contra del señor MICHAEL DELGADO, a fin de que fuera condenado a pagarle la suma de B/.100.000.00, más las costas, gastos e intereses "... en concepto de daños y perjuicios morales y materiales causados en detrimento del señor JULIO C. ZAMORA"; fundándose para ello en que el demandado mediante apoderado especial propuso Acusación Particular en su contra por el supuesto delito de calumnia e injuria, pero el Juzgado Primero del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante resolución de 22 de junio de 1988, lo sobreseyó definitivamente y el tribunal de la causa penal en la misma resolución consideró infundada la acusación particular sosteniendo que cabía la aplicación del artículo 2016 del Código Judicial.

El Juez Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, por sentencia No.97 de 16 de mayo de 1991 CONDENO al demandado, recurrente en casación, a pagar la suma de B/.25.000.00 en favor de JULIO CESAR ZAMORA, en concepto de daños y perjuicios ocasionados.

Del referido fallo de la primera instancia apeló la parte demandada y de esa manera el negocio civil ingresó al Primer Tribunal Superior para que se surtiera la alzada, y, en efecto, surtidos los trámites correspondientes, MODIFICO "... la sentencia apelada en el sentido de que la parte resolutiva lea así: SE CONDENA al señor MICHAEL DELGADO al pago de la suma de B/.10.333.33 en concepto de daños y perjuicios, tanto morales como materiales, a favor del señor JULIO C. ZAMORA y SE CONDENA al apelante al pago de la suma de B/.2.516.33 en concepto de costas de primera y segunda instancia".

Es, pues, contra esa última resolución dictada por el Tribunal Ad-Quem que la parte demandada ha interpuesto el recurso de casación de que conoce la Sala de la Corte. Veamos:

De la atenta lectura de los motivos que sirven de fundamento a la causal invocada, anteriormente transcritos, salta a primera vista que en todos ellos se formula el mismo cargo en contra de la sentencia impugnada. En síntesis, dicho cargo lo hace consistir el impugnante, en que el sentenciador colegiado de la segunda instancia al realizar la función valorativa de los documentos que obran a fojas 27 y 31 del proceso, atribuyó a dichos medios el carácter de plena prueba por el solo hecho de que se encuentran autenticados ante Notario Público, en circunstancias de que se trata de documentos privados emanados de terceros, de carácter dispositivo y testimonial respectivamente, a los que no se aplica la regla del reconocimiento tácito que sólo opera respecto a los documentos suscritos por la parte contraria, por lo que el tercero en ese caso debió comparecer al proceso para reconocer el documento o ratificarse de su contenido, según la naturaleza del documento privado.

Por ello, según la impugnación el señalado error probatorio condujo al Tribunal Superior de la acusada sentencia a la violación de normas sustantivas de derecho, incidiendo, así, sustancialmente, en lo dispositivo del referido fallo de segunda instancia.

Veamos entonces si conforme al señalado cargo probatorio la causal invocada, como aparece fundamentada en los motivos anteriormente transcritos, está o no justificada a la luz de las normas de derecho citadas por el censor.

En orden a lo antedicho tiénese lo siguiente:

De los autos de la presente litis se advierte que el Tribunal Superior del fallo impugnado admite la existencia en el proceso de una gran cantidad de pruebas (documentales, periciales y testimoniales) aportadas, tanto por el actor como por el demandado, a fin de sustentar sus posiciones dentro del contradictorio.

En ese sentido el sentenciador colegiado al valorar los mencionados elementos probatorios allegados al proceso por las partes, sostiene que ha estudiado dichas probanzas y entre sus consideraciones admite la existencia como hecho cierto la acusación particular que en la esfera penal interpusiera el demandado MICHAEL DELGADO en contra el demandante JULIO C ZAMORA, caso en el cual fue sobreseído definitivamente el acusado, declarándose además infundada y no probada de modo alguno la acusación particular; por lo que el sentenciador de la causa penal estableció, en ese caso, que procedía la aplicación del artículo 2016 del Código Judicial, el cual dispone que el acusador será condenado a indemnizar, cuando la acusación haya sido declarada judicialmente falsa y temeraria, y lo será en los siguientes casos:

"1.Cuando la acusación sea infundada o no se pruebe de modo alguno; ..."

De esa forma el Ad-Quem al ponderar los elementos probatorios (documentos privados) que constan a fojas 27 y 31, en relación con la fuerza probatoria que a los mismos reconoció, sostiene lo siguiente:

> "A fin de demostrar los daños y perjuicios sufridos, tanto de orden material como moral, el señor JULIO ZAMORA presenta recibo relativo a los gastos en que se vio obligado a incurrir con motivo de su defensa, los

> cuales ascienden a B/.5.000.00, tal como consta a fojas 27, en recibo cuya firma se encuentra debidamente autenticada ante notario, amén del hecho de que ha sido incorporado a este proceso por su propio otorgante. También presenta, a fojas 31 'Contrato de Honorarios Profesionales', suscrito entre el actor y el Licenciado Napoleón Aguilar, donde el primero se compromete a pagar la suma de B/.7,000.00 por su defensa '... ante las autoridades del Ministerio Público y el Órgano Judicial, la Primera Instancia, Segunda Instancia y la Corte Suprema de Justicia ...'.
>
> En cuanto a este contrato es necesario señalar que del mismo se infiere que la suma de B/.7,000.00 comprendía la defensa del señor ZAMORA hasta posibles instancias superiores a las cuales jamás llegó la Acusación Particular interpuesta en su contra. Además, existe el hecho cierto de que dicho documento constituye un contrato, no es un recibo. Siendo ello así, esta Colegiatura estima que no puede ser reconocida la suma total cuyo pago se alega basado en el documento en mención (fs.31) sino que, tomando en consideración lo pactado, así como el hecho de que el proceso finalizó con el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Circuito Penal; es decir, que como sólo se realizaron gestiones en una tercera parte de las etapas procesales contempladas en el 'Contrato de Honorarios Profesionales', es justo reconocer la suma de B/.2.333.33 (una tercera parte de los B/.7.000.00), aun cuando la tarifa de Honorarios Profesionales establece la suma de B/.1.250.00 aproximadamente.
>
> Estas son las únicas pruebas relativas a gastos, y en base a ellas el Juzgador A-quo fijó en B/.25.000.00 los daños y perjuicios, sin distinguir entre los daños materiales y morales y sin expresar en su parte motiva en qué se basa para establecer esa suma, es decir no hace una explicación de cómo fue calculadas.
>
> Sumados los B/. 5.000.00 pagados al Dr, Rubén Moncada Luna y los B/ 2,333,33 que se reconocerán por el contrato celebrado con el Licenciado Napoleón Aguilar, esta Superioridad condenará en la suma de B/7.333.33 en concepto de daños materiales. ..." (fs.560 a 561).

Del análisis probatorio del sentenciador de la segunda instancia, parcialmente transcrito, se deduce entonces que, ciertamente, a fojas 27 consta un recibo según el cual el licenciado RUBÉN MONCADA LUNA expresa haber recibido de JULIO CESAR ZAMORA la suma de cinco mil balboas en concepto honorarios profesionales, por el "JUICIO PENAL RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ", cuya firma aparece autenticada en octubre 29 de 1989 ante el Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, conforme se lee al reverso de dicho documento privado.

La prueba, en ese caso, es un documento privado auténtico a tenor de la regla del inciso 1 del artículo 843 del Código Judicial, ya que, si bien es cierto emana de un tercero, no menos cierto es que está reconocida ante Notario. De allí que, sin negar a dicho documento su naturaleza dispositiva como sostiene el censor, lo cierto es que la sentencia impugnada no infringe el artículo 845 ni el concordante 858 del Código Judicial, toda vez que a juicio de la Sala el sentenciador estimó correctamente la prueba documental de la referencia, por tratarse de un recibo.

En efecto, el artículo 858, último de los citados, del Código Judicial al referirse a la estimación de la prueba documental emanada de terceros, textualmente reza así:

> "Salvo que se disponga otra cosa, los documentos emanados de terceros sólo se estimarán por el Juez:
>
> 1. Cuando sean de naturaleza dispositiva, si se han reconocido expresamente por sus autores u ordenado tener por reconocidos; y
>
> 2. Cuando sean de carácter testimonial, si su contenido se ha ratificado en el proceso, mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos."

Está claro entonces que el transcrito artículo del Código en cita, en el inciso 1o. claramente establece como una de las reglas para que el Juez pueda estimar como prueba los documentos emanados de terceros cuando sean de naturaleza dispositiva como resulta del recibo que consta a fojas 27, si se han "... reconocido expresamente por sus autores".

De lo cual se colige entonces que si el documento proviene de un tercero en la relación procesal y está reconocido expresamente por su autor ante Notario, siendo de naturaleza dispositiva, sí puede ser estimado por el sentenciador como ocurre con la prueba documental aportada por la parte actora, en el caso subjudice.

El anterior criterio por cuanto el documento emanado de tercero, en ese caso, al cumplir con uno de los requisitos o circunstancias de la autenticidad del documento, según las regla contenida en el inciso 1 del artículo 858 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 845 idem, es evidente que existe certeza de la persona que ha elaborado o expedido el documento, y por ende el documento privado emanado de tercero tiene el mismo valor que el público.

Por ello, el Ad-Quem al estimar como lo hizo el documento que consta a fojas 27 no incurrió en el yerro probatorio de que se acusa a la sentencia impugnada, y, en consecuencia, el cargo en ese sentido no prospera.

La situación, sin embargo, en el caso del "CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES", también aportado como prueba por la parte actora conforme consta en la fotocopia de fojas 31 del proceso, a juicio de la Sala de la Corte es totalmente distinta, procesalmente hablando, a la expresada en relación con el documento de fojas 21. Esto es así, por cuanto del análisis probatorio que aparece en la impugnada sentencia se advierte, por una parte, que el sentenciador reconoce que "...existe el hecho cierto de

que dicho documento constituye un contrato, no un recibo ..." (la frase última subrayada).

No obstante, por otra parte, erróneamente reconoce eficacia probatoria al contenido del documento emanado de un tercero a pesar de que se trata de un "contrato, no un recibo", pues, en cuyo caso, el tercero debió comparecer al proceso para ratificar el contenido del documento, mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigo, conforme a lo dispuesto por el último inciso del comentado artículo 858 del Código Judicial.

El Tribunal Ad-Quem, en consecuencia, el estimar como lo hizo el documento de fojas 31 evidentemente incurrió en el yerro de darle a la prueba documental, de la referencia una fuerza probatoria que no tiene.

En ese sentido, al prosperar el cargo fundado en la errónea valoración de la referida prueba documental emanada de tercero, consistente en el "Contrato de Honorarios Profesionales " suscrito entre el demandante y el licenciado Napoleón Aguilar, la sentencia impugnada violó los artículos 845 y 858 numeral 2. del Código Judicial, toda vez que es evidente que con base en el señalado error de derecho también se condenó al demandado a pagar la suma de B/.2.333.33 adicional en concepto de perjuicios materiales, y, como consecuencia la sentencia violó la norma que consagra el derecho sustantivo aplicable al caso subjudice.

La Corte al encontrar de esa manera justificada la causal única invocada en el recurso debe proceder, en consecuencia, a la invalidación del fallo impugnado y dictar la sentencia de reemplazo como tribunal de instancia. Veamos:

La realidad de los autos del presente proceso ordinario ciertamente demuestra que, como se afirma en los hechos de la demanda, la parte demandada propuso Acusación Particular en contra del demandante por los delitos de calumnia e injuria; siendo que el Juez de la causa penal mediante Resolución de 22 de junio de 1988 sobreseyó definitivamente al acusado JULIO C.ZAMORA, de los cargos formulados en la acusación particular contra el demandante MICHAEL DELGADO, y en la misma resolución que declara el sobreseimiento definitivo, como se ha expresado anteriormente, señaló:

> "Considera este Tribunal, que la Acusación, ha sido infundada, y que no se ha probado de modo alguno, lo sustantivo de la misma, y en consecuencia cabe la aplicación del artículo 2016 del Código Judicial, y debe este despacho SOBRESEER DEFINITIVAMENTE en favor del señor JULIO C. ZAMORA." (FS.5)

Es evidente entonces que el precitado artículo 2016 del Código de Procedimiento Penal citado por el Juez de la causa penal en el auto parcialmente transcrito, dispone que el "... acusador será condenado a indemnizar, cuando la acusación haya sido declarada judicialmente falsa y temaria, y lo será en los siguientes casos: 1. Cuando la acusación sea infundada o no se pruebe en modo alguno; ...".

De lo expuesto resulta, en consecuencia, que la acción indemnizatoria para exigir daños y perjuicios, se origina, en este caso, de la norma legal contenida en el citado Código de Procedimiento Penal, parcialmente transcrita. Es decir, es la ley la que establece la obligación civil de indemnizar los presuntos daños y perjuicios ocasionados, cuando la acusación particular haya sido declarada judicialmente falsa y temeraria en la esfera penal, como ocurre en el caso de la presente litis.

Por ello, al adentrarse la Corte en el análisis de las circunstancias de autos básicamente coincide con las mismas conclusiones a las que ha llegado el Juez de la instancia primaria, en el sentido de que se han aportado al proceso suficientes pruebas, documentales, periciales y testimoniales, que acreditan plenamente que la parte demandada está obligada a indemnizar al demandante los daños y perjuicios ocasionados, por razón de haberse declarado judicialmente infundada la acusación particular que interpuso por los supuestos delitos de calumnia e injuria contra Michael Delgado.

La Corte, sin embargo, luego de ponderar los elementos probatorios allegados al proceso, para la determinación del monto de los perjuicios, materiales y morales, considera que en lo referente a los primeros sólo consta el documento de fojas 27, referente a los gastos de su defensa los cuales ascienden a la suma de B/.5.000.00, y se trata de un recibo cuya firma está autenticada ante Notario.

En cuanto al daño moral también reclamado por el demandante, la Corte coincide con el sentenciador de la instancia primaria, en el sentido de que a la luz de las pruebas del proceso el daño moral no se ha acreditado.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 12 de mayo de 1992 dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, y en su lugar FALLA:

REFORMA la sentencia de 16 de mayo de 1991 dictada por el JUZGADO CUARTO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ RAMO CIVIL, en el sentido de CONDENAR al señor MICHAEL DELGADO a pagar la suma de CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.5.000.00) a favor del señor JULIO C.ZAMORA, en concepto de daños y perjuicios materiales causados.

Las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada se fijan en la suma de OCHOCIENTOS BALBOAS CON 00/100. (B/.800.00.)

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PEAT MARWICK, MITCHELL & CO. RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE JAVIER ROMERO. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES actuando en su carácter de apoderados especiales de **PEAT MARWICK, MITCHELL & CO.**, interpuso recurso de casación en el fondo contra la Resolución de 16 de febrero de 1993, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario que la recurrente le sigue a **JAVIER ROMERO.**

Al ingresar el negocio a la secretaría de la Sala y por el término señalado en la ley a fin de que las partes alegaran por escrito, sobre la admisibilidad del recurso, solo el recurrente presentó escrito sosteniendo la admisibilidad del recurso.

Vencido de esa forma el término de lista a que se refiere el artículo 1164 del Código de Procedimiento Civil, la Corte, debe examinar el escrito de formalización del recurso de casación interpuesto, a fin de determinar si el mismo a sido concedido por el Tribunal Superior de la sentencia recurrida, mediante la concurrencia de los requisitos expresamente establecidos en los numerales del artículo 1165 del Código Judicial, o sean:

1) La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2) El Recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3) El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 y;

4) Las causales expresadas son de aquellas señaladas por la ley.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por PEAT MARWICK MITCHELL & CO. dentro del proceso sumario que le sigue a JAVIER ROMERO.

Notifíquese,

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, R. L. RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO SUMARIO QUE LE SIGUE CHARLES HARMAN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado Vicente Garibaldi Camacho en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, **COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES R. L.**, interpuso recurso de casación dentro del Proceso Sumario que le sigue **CHARLES HARMAN**, contra la sentencia de 10 de febrero de 1992, dictada por el Primer Tribunal Superior de JUSTICIA del Primer Distrito Judicial.

Cumplidas las reglas de reparto, conforme lo establece el artículo 1164 del Código Judicial, se fijó el negocio en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, derecho que no fue ejercido por las partes.

Así las cosas la Corte procede a determinar si el recurso cumple con los requisitos señalados por el artículo 1165, de forma tal que se decida en cuanto a la admisibilidad del mismo.

Luego del examen de rigor, la sala concluye en que, en términos generales el presente recurso cumple con los requisitos del antes citado artículo, es decir que:

1.- La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la Ley;

2.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3.- El escrito del mismo reúne los requisitos que ordena el artículo 1160 y,

4.- La causal que se expresa es de las señaladas por la Ley.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, R. L. en el Juicio Sumario que le sigue CHARLES HARMAN.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DALYS DE GARCÍA DE PAREDES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARÍA TROITIÑO DE FREIRE. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RODOLFO GARCÍA DE PAREDES JOVANÉ apoderado legal de la parte actora en el presente proceso ordinario de mayor cuantía, anunció y formalizó oportunamente recurso extraordinario de casación contra la sentencia dictada el 11 de marzo de 1993, por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, la cual puso fin a la segunda instancia del proceso civil surgido con motivo de la demanda incoada por DALYS APOLAYO DE GARCÍA DE PAREDES contra MARÍA TROITIÑO DE FREIRE.

El recurso propuesto es de casación en el fondo y corresponde ahora, una vez precluido el término de fijación en lista, en donde ninguna de las partes alegó, a determinar si debe o no admitir el mismo o, en otro caso, ordenar su corrección. Tal misión requiere la confrontación del recurso presentado con el artículo 1160 del Código Judicial.

La resolución cuya impugnación se impetra, es una sentencia dictada en segunda instancia, por un Tribunal Superior de Justicia, dentro de un proceso ordinario en donde se ventilan intereses particulares con una cuantía superior a la señalada en el artículo 1148 de la citada legislación.

Consta en autos que se anunció y formalizó en el tiempo concedido para tal efecto.

En cuanto concierne a los requisitos establecidos en el artículo 1160 de la precitada ley, se observa lo siguiente:

1. En innumerables pronunciamientos la Sala le ha señalado a las partes recurrentes en casación que el escrito de formalización debe dirigirse a los Honorables Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y no a los Magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, porque es el Tribunal Superior quien pone a disposición de la parte recurrente el expediente e igualmente es él quien ordena el envío del mismo expediente a la Corte Suprema, si el recurso cumple con las exigencias que se establece en el artículo 1162. De fojas 154 a 167 de este negocio consta el escrito de formalización y en el mismo puede observarse que está dirigido a el "Honorable Magistrado Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia;

2. La causal invocada está consagrada en la ley;

3. De los seis (6) motivos que fundamentan la causal de fondo podemos decir que: a) no son congruentes con la causal invocada, más bien constituye un extenso alegato sobre las constancias procesales; b) en el motivo cuarto, el recurrente incurre en el gravísimo error de referirse a aspectos que pueden dar lugar a otra causal de fondo, distinta a la aducida; c) en los motivos cuarto y sexto se citan normas de derecho infringidas, lo cual no compagina con la técnica del recurso extraordinario de casación; y

4. Para que prospere la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba es necesario que se citen en primer lugar, las disposiciones referentes al valor de las pruebas y, posteriormente, las normas sustantivas violadas como consecuencia de dicho error.

En el presente caso se incurre en el error de citar normas en relación con la interpretación de contratos que no puede ser atendida en una causal probatoria. Por otra parte, cita disposiciones infringidas en cuanto a la imposición de costas, norma no recurrible en el recurso extraordinario de casación.

Deben ser subsanados los defectos anotados.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en el fondo, propuesto por la señora DALYS DE GARCÍA DE PAREDES, mediante apoderado judicial, para lo cual concede el término de cinco (5) días conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARÍA ELENA ARANGO DE MORENO GÓNGORA, MIGUEL ÁNGEL MORENO GÓNGORA Y LOUIS MARTINZ, RECURREN EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A EL SIGLO, S. A., CORPORATION UNIVERSAL DE INFORMACIÓN (JMJ), S. A. Y ANTIGUA INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO. MIRANDA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La sentencia definitiva de segunda instancia pronunciado el 10 de febrero de 1993 por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el proceso ordinario interpuesto por

MARÍA ELENA ARANGO DE MORENO-GÓNGORA, MIGUEL ÁNGEL MORENO-GÓNGORA y LOUIS MARTINZ ANDERSEN contra EL SIGLO, S. A., CORPORATION UNIVERSAL DE INFORMACIÓN (J.M.J.), S. A. y ANTIGUA INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO, S. A., ha sido impugnada mediante recurso extraordinario de casación en la forma y en el fondo, que interpusiera el apoderado judicial de la parte actora en este proceso. A través de la resolución fechada el 30 de marzo de 1993, el Tribunal Superior ordenó remitir el expediente a esta Superioridad.

Una vez ingresó el presente negocio a la Secretaría de esta Sala se surtió el reparto de rigor, fijándose posteriormente el negocio en lista por seis (6) días para que, dentro de los tres primeros, la parte opositora alegara sobre la admisibilidad y, dentro de los tres días siguientes, el recurrente replicara, período que no fue aprovechado por ninguna de las partes. Precluido el término de fijación en lista, es tarea de esta Sala decidir si el recurso debe admitirse o no, en todo caso, ordenarse la corrección del mismo al tenor de lo dispuesto en el artículo 1166 del Código Judicial.

Es indiscutible que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, por cuanto se trata de una sentencia de segunda instancia dictada por un Tribunal Superior. El recurso se anunció y formalizó en tiempo.

El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne, de manera general, los requisitos ordenados por el artículo 1160 del Código de Procedimiento Civil. Las causales de forma y de fondo invocadas, cuales son: "Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda, porque se resolvió sobre punto que no ha sido objeto de la controversia", y la de fondo, "Infracción de normas sustantivas de derecho, en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida" están señaladas como tales en la ley. Se han expuesto debidamente los motivos, mencionadas las disposiciones legales infringidas y explicado como lo han sido.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación en la forma y en el fondo, propuesto por MARÍA ELENA ARANGO DE MORENO-GÓNGORA, MIGUEL ÁNGEL MORENO-GÓNGORA y LOUIS MARTINZ ANDERSEN, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE NULIDAD Y LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO PROMOVIDO EN LA ACCION DE SECUESTRO INCOADA POR BACVEL, S. A. CONTRA FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Felicia del Carmen de Puy de Romero ha interpuesto recurso de casación en el incidente de nulidad y levantamiento de secuestro promovido dentro de la acción de secuestro incoada por BACVEL, S. A. contra la recurrente, en contra del fallo proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el 2 de abril de 1993.

Repartido al suscrito Magistrado Sustanciador, se fijó en lista el presente caso por el término de seis días, para que dentro de los tres primeros la parte opositora al recurso alegara sobre la admisibilidad y para que el recurrente replicara dentro de los tres siguientes.

Vencido el término de alegatos en cuanto a la admisibilidad y habiendo sido utilizado únicamente por el recurrente, ha sido devuelto este expediente a fin de resolver la admisibilidad del recurso, a lo cual procedemos, previas las siguientes consideraciones.

El recurso ha sido formalizado en tiempo oportuno y fue presentado por persona hábil; la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, de acuerdo con el ordinal 4 del artículo 1149 del Código Judicial, ya que se trata de un auto proferido por el Tribunal Superior en el cual se decide negar el levantamiento de un secuestro.

Al examinar el escrito de formalización, se observa que el recurso ha sido interpuesto en la forma, por lo cual, además de los requisitos que deben concurrir en todo escrito de casación y que establece el artículo 1160 del Código Judicial, tratándose de esta especie de recurso, también se requiere a tenor de lo dispuesto en el artículo 1179, que se hubiere reclamado la reparación de la falta en la instancia en que se haya cometido y también en la siguiente si se cometió en la primera, salvo en los casos que: a) hubiere estado legítimamente impedido o b) se tratare de un vicio insubsanable o no convalidable.

En el caso que analizamos hemos podido observar que la única causal de forma invocada ha sido enunciada correctamente, de acuerdo con el ordinal 2 del artículo 1155 del Código Judicial. Los motivos han sido correctamente expuestos y guardan relación con la causal señalada. Las normas que se consideran infringidas y el concepto de la infracción han sido citadas de acuerdo con lo señalado por la ley y la jurisprudencia.

En cuanto al requisito establecido por el artículo 1179 vemos que también se cumplió, ya que la reparación de la falta se reclamó en ambas instancias.

Siendo así, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en la forma, interpuesto en este proceso.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala de lo Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LESBIA JUDITH VERGARA GARCÍA DE GÁLVEZ Y BORIS HUMBERTO VERGARA CEDEÑO RECURREN EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO DE NULIDAD DE TESTAMENTO QUE LE SIGUEN A EUFEMIA VERGARA ESCUDERO Y RITO SERVIO TEJADA DÍAZ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución fechada 10 de junio de 1993, ordenó la corrección del escrito de formalización del recurso de casación interpuesto por **LESBIA JUDITH VERGARA GARCÍA DE GÁLVEZ Y BORIS HUMBERTO VERGARA CEDEÑO,** por conducto de su apoderado legal licenciado EFRAÍN ERIC ANGULO, contra la sentencia de 11 de febrero de 1993 dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial dentro del Proceso Ordinario de Nulidad de Testamento seguido a **EUFEMIA VERGARA ESCUDERO Y RITO SERVIO TEJADA DÍAZ.**

A fin de corregir el recurso de casación interpuesto se le concedió al casacionista el término de cinco (5) días conforme a lo dispuesto por el Artículo 1166 del Código Judicial. Sin embargo, tal cual como se desprende del informe secretarial legible a fojas 126 del expediente, el recurrente dejó precluir el término sin cumplir con la corrección ordenada en la resolución dictada por esta Sala de la Corte.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido por el artículo precitado, la pretermisión del recurrente conlleva la sanción de inadmitir el recurso propuesto.

Por las consideraciones vertidas, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el presente recurso de casación propuesto por LESBIA JUDITH VERGARA GARCÍA DE GÁLVEZ Y BORIS HUMBERTO VERGARA CEDEÑO contra la resolución de 11 de febrero de 1993 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Se condena en costas al recurrente, las cuales se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CRISTINA RODRÍGUEZ MONTERO (ANTES DE SOUSA) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUE RUBÉN DARIO SOUSA DIEZ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del juicio ordinario que RUBÉN DARIO DE SOUSA DIEZ promoviera en contra de CRISTINA RODRÍGUEZ MONTERO, el apoderado judicial de la demandada presentó recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 30 de noviembre de 1992. Admitido como ha sido el recurso y vencido el término que se concedió a las partes para que alegaran en cuanto al fondo, corresponde a esta Corporación adentrarse al estudio de las dos causales de fondo contenidas en la impugnación.

La primera causal que se presenta es la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

En los motivos en que fundamenta la causal, la demandada sostiene que no se tomó en cuenta, al pronunciar la sentencia, las pruebas documentales que aparecen en el expediente y mediante las cuales queda acreditado que las partes en este juicio estuvieron unidos matrimonialmente durante el período de 1984 a 1988, unión de la cual nació una hija. Según expresa en estos motivos, el no tomar en cuenta la existencia de estas pruebas documentales se produce la decisión que la obliga al reembolso de dinero pagada por el demandante por la compra o adquisición de una vivienda mediante un préstamo otorgado por la Caja de Seguro Social. Expresa el pretensor, que este error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba llevó al sentenciador "... a que no se tomara en cuenta la norma sustantiva pertinente, aplicable al caso que regula las relaciones de familia, o sea que regula las relaciones de los esposos y de los padre con sus hijos".

Explica que se han infringido los artículos 769, 819, 821, numerales 2 y 3 del Código Judicial y los artículos 111,233, 234, numerales 1 y 2, 1024 y 1025 del Código Civil.

Al hacer un análisis de la sentencia frente a la causal alegada, es notorio que el tribunal no se refirió a ninguna de las pruebas a que se refiere la demandada. En el fallo se decidió sin que el tribunal valorara estos documentos.

Sin embargo, si el tribunal de casación realiza un estudio de la sentencia, llega necesariamente a la conclusión que, si bien es cierto que dicha omisión se dio, esta omisión no conlleva a establecer que se ha producido la causal, por cuanto que la no valoración de esta prueba, en manera alguna, influye sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, tal como lo exige el párrafo tercero del artículo 1154 del Código Judicial.

En el caso sub-judice, el demandante sostiene que la demandada debe cancelarle una suma de dinero que le adeuda en concepto de pago que había efectuado a cuenta de la obligación hipotecaria que esta última tenía para con la Caja del Seguro Social. Así nos indica en los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la demanda que se transcriben:

"PRIMERO: La demandada es propietaria de la finca número 109,928, inscrita al Rollo 7147, Complementario, Documento N°5 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, oficina del Registro Público.

SEGUNDO: La demandada tiene dada en hipoteca y anticresis a la Caja de Seguro Social en suma elevada a la cantidad de B/.25,259.12 la finca descrita en el hecho anterior.

TERCERO: Mi mandante, señor RUBÉN DARIO SOUSA DIEZ ha pagado a la Caja de Seguro Social la suma de VEINTITRÉS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO BALBOAS (B/.23,165.00) en concepto de abono de B/.10,000.00 y de los pagos aplicados mediante abonos por descuento directo (B/.13,165.00) a la obligación hipotecaria y anticrética que la demandada adeuda a la mencionada institución.

CUARTO: A pesar de los requerimientos formulados por mi poderdante a la demandada, señora CRISTINA RODRÍGUEZ MONTERO (antes de Sousa), ésta se niega reembolsarle la expresada suma de VEINTITRÉS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO BALBOAS (B/.23,165.00)".

Por su parte la demandada se opone a que se haga tal condena y en su parte medular manifiesta, al contestar los hechos tercero y cuarto, lo siguiente:

"TERCERO: El hecho no es del todo cierto, ya que el actor no manifiesta que la cantidad pagada la hizo en consideración que era para su esposa e hijos del matrimonio que nacieran. Por eso lo niego.

CUARTO: No es cierto como está redactado, por eso lo niego. El actor ha pagado dicha suma de dinero como consecuencia del matrimonio existente entre él y mi representada; siendo dicha suma de dinero el aporte al hogar conyugal donde nació CRISTINA AMILURYS SOUSA RODRÍGUEZ, el día 21 de diciembre de 1984; a partir de la fecha del divorcio que se produjo en el mes de diciembre de 1988, el Sr: SOUSA DIEZ sigue pagando la suma de B/.300.00 (TRESCIENTOS BALBOAS) en concepto de Pensión Alimenticia mensualmente; que corresponde a alimentos, vivienda, educación, medicina y demás; que aunque parezca un poco hazme reir, lo que el pagaba en la casa es más o menos lo que paga actualmente en concepto de Pensión".

El sentenciador de segunda instancia dijo:

"Este tribunal observa que en el expediente reposan una gran cantidad de pruebas documentales. Veamos:

a) A foja 5 aparece Certificación del Registro Público, válida al tenor del artículo 821 del Código Judicial, que señala a la señora Cristina Rodríguez Montero como propietaria de la finca N°109928;

b) A fojas 4 tenemos Certificación de la Caja de Seguro Social que indica que al señor Sousa Diez le estuvieron efectuando descuentos para el pago de Compromiso Hipotecario N°2011-23 desde la primera quincena de junio de 1984 hasta la segunda quincena de diciembre de 1988 a razón de B/.239.40 mensuales;

c) a fojas 43 se encuentra visible Certificación de la Caja de Seguro Social que señala que la señora Rodríguez tiene con la institución, compromiso hipotecario N°2011-23, el cual ha empezado a cubrir mediante descuento directo desde la primera quincena de enero de 1989;

d) a fojas 57 se encuentra una Certificación, también de la Caja de Seguro Social, donde se indica que la institución otorgó préstamo con garantía hipotecaria a la señora Cristina Rodríguez, constituyéndose el actor como Co-deudor;

e) y por último, a fojas 65 tenemos Certificación de la Caja de Ahorros, donde se hace constar que el señor Sousa Diez retiró de su cuenta N° 9850 la suma de B/.10,000.00 mediante cheque Certificado a nombre de la Caja de Seguro Social "para abono a compra de casa".

De las pruebas antes detalladas se desprende: que la que señora Cristina Rodríguez Montero constituyó préstamo hipotecario con la Caja de Seguro Social para la compra de una casa; que la obligación hipotecaria es la identificada con el número 2011-23, de la cual el señor Rubén Dario Sousa Diez es co-deudor; que el mismo efectuó un abono de B/.10,000.00 a la institución (Caja de Seguro Social); así como sucesivos pagos de B/.239.40 mensuales durante 55 meses, lo que totaliza la suma de B/.13,167.00.

El artículo 1024 del Código Civil establece:

> ARTICULO 1024: La concurrencia de dos o más acreedores, o de dos o más deudores en una sola obligación, no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir, ni cada uno de estos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Solo habrá lugar a esto, cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria." (El subrayado es nuestro)
>
> Y el artículo 1025 de la misma excerta legal señala:
>
> "ARTICULO 1025: Si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros". (El subrayado es nuestro).
>
> Toda vez que el señor Sousa Diez se constituyó en co-deudor de la obligación y no se especificó la solidaridad de la misma, es aplicable entonces lo dispuesto en el artículo 1025 antes transcrito. Siendo ello así, el actor tiene derecho a que se le revierta lo que en exceso hubiese pagado de la mitad de la deuda (capital más intereses), en caso de que hubiese tal exceso".

La ignorancia de la existencia del matrimonio y de la menor hija, al pronunciarse el fallo, en manera alguna va a influir en la parte resolutiva de la sentencia. Ello sólo sería posible si esa omisión llevara al tribunal a una concepción equivocada de la realidad procesal que lo conduce a violar las leyes sustantivas. La obligación del cónyuge en cuanto a los gastos de alimentos y demás de la familia no se violenta al ignorar la prueba documental mencionada, puesto que ello no era el aspecto fáctico de la controversia.

Dentro de esta causal, sin que de los motivos se pudiere desprender alguna relación con ellos, se indican como violados los artículos 1024 y 1025 del Código Civil en el concepto de indebida aplicación.

La técnica de casación es clara cuando establece que hay indebida aplicación de normas sustantivas al aplicarse a casos no reglados por ella o cuando una cuestión de hecho que no es materia del litigio se le aplique una norma que no es pertinente, sin que exista errada interpretación de ella. Ello da origen a una causal de casación en el fondo totalmente distinta a la probatoria señalada en el recurso.

Por todo lo expuesto, se desestima esta causal.

La segunda causal que se ha invocado lo es la infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

Mantiene la demandada que se está frente a una donación que liberaba la parte demandada de la acción de reembolso interpuesta por el actor, por lo que el fallo no aplicó la norma sustantiva sobre la donación. Indica que los pagos efectuados por el demandante para la compra de la finca eran donaciones que hacia en razón de la familia que tenía constituida. Que la inaplicación de la norma al caso controvertido originó la sentencia en los términos expuestos por el tribunal. Explica la violación del artículo 939 del Código Civil, en el sentido de que la sumas de dinero abonados para adquirir o comprar una vivienda mediante un préstamo hipotecario con la Caja de Seguro Social fueron dados como actos de mera liberalidad por motivos de la relación de familia que existía entre las partes.

La verdad es que el tribunal al revocar la resolución de primera instancia, condena a la demandada a pagar "lo que en exceso de la mitad del préstamo hipotecario y anticrético (capital e intereses a la fecha) haya pagado el señor RUBÉN DARIO SOUSA DIEZ, así como las costas, montos éstos que serán fijados mediante liquidación motivada, la cual deberá ser presentada de acuerdo a lo establecido en el artículo 983 del Código Judicial".

La liquidación anterior, según mandato del juzgador "2.- Deberá tomarse en consideración que tanto el señor Rubén Darío Sousa Diez como la señora Cristina Rodríguez Montero estaban obligados a amortizar el préstamo por partes iguales, desde el inicio y haciendo abonos tanto a capital como a intereses".

Realmente el tribunal de casación no entiende como puede haberse violado directamente por omisión el artículo 939 del Código Civil, máxime cuando la donación de una cosa mueble debe hacerse por escrito y, en caso de ser verbal, requiere la entrega simultánea de la cosa donada (artículo 953 del Código Civil). No debe pasarse por alto que cuando se está ante la violación directa, el tribunal de casación no está en condiciones de adentrarse al estudio de la prueba y debe tomar como cierta la valoración hecha por el tribunal ad-quem, en donde en ningún momento se habla de donación y, muy por el contrario, se indica que los pagos hechos por RUBÉN DARIO SOUSA DIEZ los hizo como co-deudor. Mal cabe, entonces, considerar que debió aplicarse una norma que nada tiene que ver con la materia que ha sido resuelta en la sentencia. Se desestima también esta causal.

En virtud de lo expresado, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 30 de noviembre de 1992.

Se condena en costas a la parte recurrente en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EDUARDO AROSEMENA Y CARLOS CHAVARRÍA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA (ACCION DE SECUESTRO) QUE LE SIGUE VARELA HERMANOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

A través de resolución de fecha 13 de mayo de 1993, esta Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ORDENO LA CORRECCIÓN del recurso extraordinario de casación interpuesto en el fondo por el apoderado judicial del recurrente, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía propuesto por VARELA HERMANOS, S. A. contra EDUARDO ENRIQUE AROSEMENA ROMÁN y CARLOS CHAVARRÍA. Para tal efecto, se le concedió al recurrente el término de cinco (5) días conforme lo pauta el artículo 1166 del Código de Procedimiento Civil.

El informe secretarial que corre a foja 279 de este negocio, señala que ha vencido el término concebido para efectuar la corrección y la parte recurrente ha cumplido con lo ordenado por esta Sala, por lo que la misma pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso propuesto, previas las consideraciones siguientes:

1. La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3. El escrito por medio del cual fue interpuesto, reúne de manera general los requisitos ordenados por el artículo 1160 del Código Judicial, y

4. La causal expresada es de las señaladas por la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación propuesto por EDUARDO AROSEMENA y CARLOS CHAVARRÍA, mediante apoderado judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSEFINA CEBALLOS MONCAYO DE CORONEL RECURRE EN CASACIÓN EN LA SOLICITUD DE MEDIDAS CONSERVATORIAS DE PROTECCIÓN PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL Y FRANCISCO CORONEL CORONEL CONTRA FINANCIERA COMERCIAL GISPSI, S. A. Y OTRAS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Procedente del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, ha sido remitido a esta Corporación, el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de JOSEFINA CEBALLOS MONCAYO DE CORONEL, contra el auto dictado por ese Tribunal el 8 de marzo de 1993 y que confirma en todas sus partes el auto de 28 de mayo de 1992, dictado por el Juez Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá del ramo civil, en el cuaderno de medidas conservatorias de protección presentadas dentro del proceso ordinario propuesto por Luis Fernando Coronel Coronel y Francisco Coronel Coronel contra Financiera Gipsy, S. A. y otras.

Repartido al Magistrado Sustanciador, se fijó en lista este negocio por el término de seis días para que dentro de los tres primeros la parte opositora al recurso alegara sobre su admisibilidad y para que dentro de los tres siguientes, replicara el recurrente.

Vencido el término de alegatos aludidos y habiendo sido utilizado por ambas partes, ha ingresado el presente expediente a este despacho a fin de resolver la admisibilidad del recurso.

La Sala observa que el auto objeto del recurso es de aquellos contra los cuales la ley concede la posibilidad de impugnarlo por esta vía, ya que se refiere al levantamiento de medidas conservatorias de protección; fue interpuesto en tiempo oportuno y el recurrente es persona hábil para interponerlo, ya que constituye la parte agraviada con el auto recurrido.

Observamos que el recurso se interpuso en la forma y en el fondo por lo cual examinaremos en primer lugar, el recurso de casación en la forma.

En cuanto a la causal citada, observamos que ésta ha sido bien enunciada y por consiguiente, no objetamos nada al respecto. En cuanto a los motivos, las disposiciones infringidas y el concepto en que lo han sido, nos parece que en términos generales, llenan los requisitos establecidos.

En relación al recurso de casación en el fondo notamos que la causal ha sido enunciada correctamente y que los motivos están bien expuestos y contienen cargos de

injuricidad. Las normas infringidas y los conceptos de dichas infracciones, nos parecen adecuados en primer examen.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el presente recurso, tanto en la forma como en el fondo.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala de lo Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARIO CÉSPEDES BLANCO RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BANCO EXTERIOR, S. A. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

MARIO CÉSPEDES BLANCO, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de casación contra la sentencia de 30 de octubre de 1991, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso que el prenombrado le sigue a Banco Exterior, S. A. El mencionado recurso fue admitido por esta Sala de la Corte mediante auto de 16 de marzo de 1992 (f. 185), encontrándose la causa pendiente de resolver en el fondo, a lo cual se procede.

Antecedentes

Mario Céspedes Blanco interpuso demanda ordinaria de mayor cuantía, por un monto de ciento sesenta y cinco mil balboas (B/.165.000.00), contra el Banco Exterior S. A., argumentando que dicha entidad bancaria se negó a seguir ciertas instrucciones por parte del demandante en relación con la cuenta cifrada N°5555/69. La primera instancia de este proceso concluyó con la sentencia fechada 3 de enero de 1991 (f. 114), proferida por el Juzgado Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo civil, mediante la cual se absuelve al Banco Exterior S. A. del pago de la cantidad pedida por la demandante. Esta sentencia se basó fundamentalmente en que las pruebas allegadas al expediente no habían demostrado que el demandante era el titular de la cuenta cifrada N°5555/69, más bien, dichos elementos probatorios, concluye el Juez, demuestran que la titular de la cuenta es GLORIA B. DE CÉSPEDES (cédula 8-90-579). En la sentencia del a-quo también se negó la excepción de prescripción de la acción alegada por el demandado, de conformidad con el artículo 1650 del Código de Comercio, en vista de que dicho Juzgado consideró que si el demandante no tenía un vínculo activo con la pretensión (**legitimatio ad causam**), por no ser el titular de la cuenta, tampoco resultaba posible que perdiera, por el transcurso del tiempo, el derecho a reclamar algún presunto derecho relacionado con la mencionada cuenta bancaria.

La sentencia del a-quo fue apelada por la demandante, provocando la sentencia de fecha 30 de octubre de 1991, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial (f.154), mediante la cual se confirmó en todas sus partes el criterio del a-quo. Este fallo del Tribunal Superior es el impugnado en el recurso de casación que conoce la Sala en esta oportunidad.

Contenido del recurso

Se trata de un recurso de casación en el fondo, en el cual se ha invocado una sola causal; "Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba". Esta causal está sustentada en tres motivos, a saber:

> "1) A la sentencia impugnada le hacemos el cargo de injuricidad consistente en afirmar que el demandante no ha probado la celebración y por ende su existencia del contrato de cuenta bancaria cifrada, no obstante que existen en el expediente documentos con valor probatorio que se leen a fojas 24, 31, 33, 34, 35, 38 y 104.
>
> 2) A la sentencia impugnada le hacemos el cargo de injuridicidad consistente en afirmar que el demandante carece de causa de pedir; que no tiene "legitimatio ad causam" y que no ha comprobado que es cuentahabiente del banco demandado, no obstante que existen en el expediente documentos con valor probatorio que se leen a fojas 24, 31, 33, 24, 35, 38 y 104.
>
> 3) A la sentencia impugnada le hacemos el cargo de injuridicidad consistente en haber ignorado en su decisión la existencia de las pruebas documentales de los folios 24, 31, 33, 34, 35, 38, 104 y 105."

Como consecuencia de los cargos contenidos en los motivos, el casacionista considera que se han infringido los artículos 769, 770, 883, 885, 972, 973 del Código Judicial; los artículos 337, 976. 986, 991 y 993 del Código Civil y los artículos 2 y 9 de la Ley N°18 de 28 de enero de 1959, que regula las cuentas bancarias cifradas.

Criterio de la Corte

La causal invocada obliga a la Sala a revisar las pruebas supuestamente ignoradas, a fin de establecer si se ha dado el error probatorio alegado por el recurrente, a saber:

A f. 24 aparece parte de la indagatoria rendida por JOSÉ A. PÉREZ SALAMERO, en aquel entonces Gerente del Banco Exterior S. A., fechada 12 de junio de 1978, realizada dentro del sumario iniciado por la acusación particular interpuesta por Mario Céspedes Blanco contra Banco Exterior S. A. y José A. Pérez Salamero, sustanciada ante la Fiscalía 4ta. del Circuito de Panamá. A la pregunta que se le hiciera en aquella ocasión

al Gerente Salamero, sobre quien era el autorizado "para ordenar pagos con cargo a la cuenta cifrada 5555 del Banco Exterior S. A.", se obtuvo la siguiente respuesta: "Por mis facultades profesionales quedo imposibilitado de contestar la pregunta".

A f. 31 se encuentra parte de un escrito presentado por la defensa dentro del sumario mencionado. En dicho escrito se sostiene que el Sr. Céspedes Blanco no es el titular de la cuenta cifrada 5555, del Banco Exterior.

A f. 34 se encuentra la respuesta dada por el Banco Exterior S. A. a la nota anteriormente mencionada. En esta misiva, fechada 18 de octubre de 1978, el banco no dice nada en lo referente a quien es el titular de la cuenta comentada.

A f. 105 encontramos una boleta de depósito, fechada 14 de octubre de 1969, del Banco Exterior S. A., referida a la cuenta 5555. En esta boleta no se dice nada respecto de quien es el titular de la cuenta.

Como se observa, ninguna de las pruebas analizadas hasta el momento respaldan la tesis esgrimida por el recurrente, en el sentido de que el demandante es el titular de la cuenta cifrada No. 5555/69, del Banco Exterior S. A. No ocurre lo mismo, en cambio, con el análisis de los documentos que constan a fs. 33, 35 y 38, que parecieran conducir a otra conclusión. Veamos.

A f.35 se observa la ampliación a la indagatoria rendida por José A. Pérez Salamero, dentro de las sumarias aludidas, fechada 19 de septiembre de 1979. En esta ampliación, el indagado declara lo siguiente: "**... las instrucciones para su apertura** [de la cuenta cifrada No. 5555/69] **fueron dadas por el señor Mario Céspedes a mi persona, estableciendo como único titular y persona autorizada para disponer de la cuenta No. 5555-69 a Gloria B. Céspedes.**" A juicio de la Corte, esta afirmación del Gerente del Banco Exterior, S. A., revela un hecho fundamental: que si bien en opinión de las autoridades del Banco el demandante Céspedes Blanco no tenía potestad para disponer de la cuenta luego, sí participó en su apertura. Por otra parte, la redacción del documento de f. 38, donde consta la solicitud de apertura de la cuenta, parece confirmar este criterio. Dicho documento es del siguiente tenor:

"No. 5555/69

BANCO EXTERIOR, S. A. Apartado 242A.
Panamá, R. de P. Zona 9A

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE IMPOSICIÓN A PLAZO FIJO.

La Señora GLORIA ISABEL BERGUIDO DE C. de nacionalidad panameña provisto de Cédula de Identidad 8-90-579 de 30 años de edad, estado casada domiciliada en Panamá calle Avda. Grecia- No. 9-A Nuevo Reparto El Carmen Teléfono 23-96-25 Negocio o Profesión s/l.

El señor y por su orden y cuenta de nacionalidad ..... provisto de Cédula de Identidad ..... de ..... años de edad, estado ..... domiciliado en ..... calle ..... No. ..... Teléfono ..... Negocio o profesión D (sic.) Mario Céspedes.

... solicitan del BANCO EXTERIOR, Sociedad Anónima la apertura de una Cuenta de imposición a plazo fijo con sujeción a las condiciones establecidas por esta clase de cuentas y especialmente a las que se consignan al dorso.

Panamá, 14 de octubre de 1969.

Fecha Apertura
14-X-69

(fdo.) Gloria B. de Céspedes

Importe del Depósito
38,000

Por conocimiento de las firmas
que anteceden

(fdo. ilegible)...
Vo. Bo.
El jefe del Departamento.
REGISTRADO
Informes:
Correspondencia:
Poderes y firmas:" (f. 38).

Si bien este documento lleva la firma de Gloria B. de Céspedes, se observa que la firmante lo hace "por su orden y cuenta ... D.. Mario Céspedes". Aunque la redacción del formulario del Banco da pie a una cierta confusión, la misma no puede ser oponible al demandante, a más de que la inclusión de su nombre en el documento de apertura de la cuenta, unida a la reseñada declaración del Gerente del Banco (f. 35), permiten a la Corte entender que Mario Céspedes Blanco era el dueño de los fondos con los que se abrió la cuenta cifrada, contra la cual probablemente sólo podría girar en el futuro la señora Gloria B. de Céspedes, en base a los numeros convenidos en el documento de apertura. Incluso, puede afirmarse que la propia señora Gloria B. de Céspedes parecía desconocer que ella era la única titular de la cuenta, como se observa en la nota de f. 33, fechada 2 de octubre de **1978**, firmada por Gloria B. de Céspedes, dirigida al Gerente del Banco Exterior S. A. Esta nota fue enviada luego de que el Banco denegó el acto de disposición sobre la comentada cuenta, realizado por Mario Céspedes el 19 de mayo de 1978 (f. 21). En la aludida carta del 2 de octubre de 1978, Gloria de Céspedes le solicita al Banco que entregue "a la firma ALFARO, FERRER Y RAMÍREZ la totalidad de los fondos que se encuentren depositados en la Cuenta Cifrada 5555, en concepto de principal e intereses a la fecha " (f.33), y luego agrega: "Doy esta autorización en atención a que he tenido conocimiento de que soy la única persona autorizada para girar contra dicha cuenta" (subraya la Corte, f. 33). En opinión de este Tribunal, resulta muy extraño que todavía en 1978, nueve años después de abierta la cuenta, la señora de Céspedes sostenga que ha "tenido conocimiento" de que es "la única persona autorizada para girar contra dicha cuenta", esta circunstancia constituye un indicio que, analizado conjuntamente con los

demás medios de prueba, parece conducir ante la realidad de que el verdadero propietario de los fondos era el demandante.

Los anteriores razonamientos han servido de base a esta Sala para llegar a la conclusión de que el Tribunal ad-quem desconoció los documentos de fs. 33, 35 y 38, porque, pese a que de dichos documentos se deduce la vinculación del demandante con el objeto litigioso, el ad-quem afirma que carecía de legitimación positiva para demandar al Banco Exterior. Más específicamente, la Corte considera que el ad-quem infringió los artículos 769, 770 y 883 en los términos en los que lo señala el recurrente. Sin embargo, esta sola circunstancia no resulta suficiente para que la Sala pueda casar la sentencia impugnada, con base en la causal invocada, como se explica a continuación.

Para que la Corte pueda casar la sentencia en este caso, es necesario acreditar que el aludido error probatorio, influyó en la parte resolutiva de la sentencia, es decir, que tenga trascendencia, tal como lo ordena el párrafo tercero del art. 1154 del Código Judicial, cuyo texto es el siguiente: "Es necesario que la causal haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Sobre el particular, el Licdo. JERÓNIMO EMILIO MEJÍA EDWARD realiza los siguientes comentarios, que si bien fueron realizados a propósito de la casación penal, nos sirven de referencia toda vez que en este aspecto no existen diferencias con la casación civil. Veamos:

> "... hay que tener presente que no es cualquier error de hecho en la existencia de la prueba el que permite que la causal prospere, sino que se requiere que dicho error sea manifiesto y trascendente de manera que influya en lo dispositivo del fallo, es decir, que sea de tal envergadura que si no se hubiera cometido el fallo hubiese tenido otras consecuencias jurídicas: hubiese resuelto la causa de otra forma. Es por estas razones que la jurisprudencia ha exigido que la causal bajo estudio se invoque de la siguiente manera: error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial ..." (Mejía Edward, Jerónimo Emilio, "El recurso extraordinario de casación penal en el Derecho Positivo Panameño", Trabajo de graduación para optar por el Título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 1993, pág. 196).

Visto lo anterior, a la Corte le es lícito concluir que, en este caso particular, el señalado error de hecho sobre la existencia de la prueba ha influido en lo sustantivo de la sentencia impugnada, toda vez que, en ella, el juzgador ad-quem no analizó los principales cargos de la demanda, por considerar que el demandante carecía de **legitimatio ad causam**, lo cual, ya hemos visto que no se ajusta a la verdad. Sin embargo, a consecuencia de este error probatorio, concluye descartando de antemano dichos cargos. En consecuencia, está justificada la única causal de casación invocada por el recurrente contra la sentencia de segunda instancia, procediendo su invalidación para dictar la que deba reemplazarla conforme a la Ley y al mérito de los hechos.

Consideraciones sobre la sentencia de reemplazo.

De conformidad con lo dispuesto en el último inciso del párrafo segundo del art. 1180 del Código Judicial, procede la Sala a dictar su fallo de Segunda Instancia que reemplaza al que ha sido casado o anulado.

Pues bien, esto nos lleva a analizar, en primer término, la excepción de prescripción de la acción del demandante alegada en la contestación de la demanda y para ello tenemos, que según los hechos Tercero, Cuarto y Sexto de la demanda (f.2), el banco demandado no acató los actos de disposición sobre la cuenta 5555/69, realizados por el demandante, el 19 de mayo de 1978 y por la Sra. Gloria B. de Céspedes, el 2 de octubre de 1978, siendo desatendido este último mediante nota del 18 de octubre de 1978. Cualquiera de las mencionadas fechas en que el banco no acató los actos de disposición del demandante y de Gloria B. de Céspedes, puede ser utilizada como referencia para el inicio del término de prescripción.

Independientemente de cual se utilice, resulta evidente que la acción para reclamar contra el Banco había prescrito al momento de presentarse la demanda (2 de septiembre de 1988, f.3) y con mayor razón, al momento en que se le notificó a la demandada (11 de noviembre de 1988, f.5, reverso); toda vez que en ambos casos habían transcurrido más de los cinco años requeridos para que prescribiera la acción.

Sobre el particular la única controversia planteada por las partes es la de si nos encontramos ante una acción de tipo civil que lleva aparejada la prescripción ordinaria que contempla el artículo 1701 del Código Civil o si se trata de una acción mercantil, cuyo término de prescripción sería de cinco años a tenor de lo dispuesto en el artículo 1650 del Código de Comercio que es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 1650. El término para prescripción de acciones comenzará a correr desde el día en que la obligación sea exigible.
>
> La prescripción ordinaria en materia comercial tendrá lugar a los cinco años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando en determinados casos exige para la prescripción más o menos tiempo".

Ahora bien, del texto de la parte petitoria de la demanda se infiere que no estamos ante una pretensión en la que se reclaman del Banco daños y perjuicios dimanantes de hechos culposos o fraudulentos, relacionados con el manejo de la cuenta.

Simplemente, Céspedes Blanco demandó la devolución de los fondos depositados en la cuenta cifrada 5555/69, ya por concepto de capital, ya de intereses vencidos a la tasa de 8% anual, más las costas y gastos de la acción.

La circunstancia de que la Ley 18 de 1959 que reglamenta las cuentas cifradas no contemple una prescripción para las acciones que surjan de este tipo de negocios, no desvirtúa el hecho de que estamos ante una cuenta de depósito bancario, que como tal se rige por la ley mercantil y no por la civil.

El término de prescripción aplicable viene a ser, en consecuencia, el de la ordinaria mercantil de cinco años, el cual se cumplió con creces antes de la presentación de la demanda, tal como se explicó.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida en este proceso por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, fechada 30 de octubre de 1991; y, actuando como Tribunal de Segunda Instancia, REVOCA la sentencia No.2, de 3 de enero de 1991 (f. 114), dictada en este caso por el Juzgado Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, y en su lugar DECLARA PROBADA la excepción de prescripción de la acción.

Se libera de costas al demandante por no existir temeridad en la pretensión.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MAUREEN M. DAVIS Y OTROS RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE LANZAMIENTO PROPUESTO POR BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Por medio de resolución fechada 22 de marzo de 1993, esta Sala admitió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el licenciado Ricardo Stevens, actuando en representación de la señora MAUREEN DAVIS, contra la sentencia de 20 de julio de 1992 emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso sumario promovido por el Banco Nacional de Panamá contra su poderdante.

Agotados los términos concedidos a las partes para que presentaran sus alegatos en cuanto al fondo del recurso, sin que hicieran uso de ese derecho, se encuentra esta causa en estado de resolver, a lo que se procede, previas las consideraciones siguientes:

Antecedentes

El 28 de febrero de 1991 el Banco Nacional, a través de su apoderado legal, el licenciado Carlos Bieberach, interpuso ante el Juez de Circuito de Turno de Colón, juicio sumario de lanzamiento contra la señora Maureen Davis, de la casa U-7 ubicada en la finca N° 3913, inscrita al tomo 457, folio 444 de la sección de la propiedad de Colón, en el proyecto San Judas Tadeo, Corregimiento de Cativá, propiedad del Banco Nacional de Panamá, toda vez que la demandada mantenía una morosidad con el demandante que sobrepasaba los cinco mil balboas.

Con la solicitud de desalojo el demandante presentó certificado expedido por el Banco Nacional de Panamá en el que consta la deuda, certificado del Registro Público sobre la propiedad de la finca 3913, el contrato de promesa de Compraventa, suscrito entre el demandante y la señora Maureen Davis.

El Juzgado Primero de Circuito Civil de Colón procedió a notificar a la parte demandada y a recibir la contestación que fue presentada en representación de la demandada Davis por el licenciado Ricardo Stevens. A partir de este momento se cometen una serie de errores en la tramitación del proceso, a los cuales se referirá la Sala al dictar el fallo de instancia.

Importa destacar, no obstante, que por virtud de la resolución de 12 de febrero de 1992, el Juzgado Primero de Colón accedió a decretar el lanzamiento de la demandada, la vivienda N° U-7, ubicada en el Proyecto San Judas Tadeo, dentro de la finca propiedad del Banco Nacional, antes descrita.

La demandada apeló de esta sentencia, por lo que surtida la alzada, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, previo estudio de la actuación resolvió confirmar la resolución de primera instancia.

El recurso de casación

El recurso de casación planteado por el apoderado de la parte demandada contra la resolución de 20 de julio de 1992, por medio de la cual el Primer Tribunal Superior de Justicia confirma la resolución de 12 de febrero de 1992 dictada por el Juez Primero del Circuito de Colón, consta de dos causales: La primera, de "infracción de las normas sustantivas de derecho por violación directa" y la segunda, "infracción de las normas sustantivas de derecho por aplicación indebida".

En cuanto a la primera causal, el recurrente en dos motivos sostiene que en este caso el Tribunal a-quo accedió al lanzamiento de la demandada Davis de la Finca N° 3913, por morosidad en el pago de los abonos mensuales pactados, consecuencia que no se compadece con la naturaleza del contrato que tenía celebrado con el Banco Nacional de Panamá, que es de promesa de compraventa y no de arrendamiento. Para el recurrente, la única consecuencia jurídica a que pudiera conducir el incumplimiento por parte de la señora Maureen M. Davis del contrato realmente pactado por las partes, sería el de su resolución y de la eventual indemnización de perjuicios, pero no del lanzamiento por mora en los términos en que fue decretado por los tribunales de ambas instancias. Se alega en esta causal la violación de los artículos 1221, 1009 y 1132 del Código Civil.

La Posición de la Corte

Con relación a esta primera causal, la Sala observa lo siguiente: Que la resolución impugnada ciertamente reconoce que el contrato principal que celebraron las partes involucradas en este caso fue "de promesa de compraventa", por medio del cual el Banco Nacional de Panamá prometió vender a la señora Maureen M. Davis, un lote de terreno (y casa estilo chalet sobre el construido), ubicado en la Urbanización San Judas Tadeo, Provincia de Colón, que a su vez la demandada Davis se obligó a cancelar el precio convenido, mediante los abonos mensuales contemplados en la cláusula tercera del contrato.

Sin embargo, la resolución impugnada también advierte que en el aludido contrato las partes no se limitaron a consignar las promesas recíprocas entre promitente vendedor y promitente comprador a que se reduce el contrato de promesa de compraventa, sino que pactaron otras cláusulas ajenas al mismo, conforme a las cuales El Banco concedió a la señora Davis "la tenencia de la propiedad mencionada en la cláusula primera, obligándose a mantenerla en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo que este cumpliendo con este contrato" (ver cláusula quinta), situación que se repite en las cláusulas séptima y décima.

Precisamente, el contenido de las cláusulas que hacen referencia a la tenencia del bien, por parte del "promitente comprador" llevaron al Tribunal Superior a concluir "que la intención de los contratantes en el acuerdo de marras ... no puede ser otra que la de incorporar a la promesa de compraventa la figura del arrendamiento". Sobre el particular, se observa que, en principio, el Tribunal a-quo pareciera tener razón al concluir en la forma en que lo hizo. Sin embargo, razones legales de peso se oponen a que en este caso el promitente vendedor (El Banco Nacional) pueda hacer uso de la acción de lanzamiento, que conlleva, no sólo el desalojo del promitente comprador de la finca objeto del contrato, sino también la rescisión de éste, o con mayor propiedad, su resolución, conforme al carácter "resolutorio y restitutorio" que presenta el lanzamiento en estos casos.

Para comenzar, se advierte que por tratarse de un contrato de arrendamiento urbano, las partes debieron en principio cumplir con las formalidades exigidas por la Ley 93 de 1973 para este tipo de convenios, concretamente en los artículos 5 y 6, referente a la utilización de un formulario que para tales casos suministra el Ministerio de la Vivienda y a la consignación de una copia de dicho contrato y del primer mes de renta en la Sección de Arrendamientos de dicho Ministerio. Cabe apuntar que ya la Corte Suprema de Justicia en uno de sus fallos (Sent. de 23 de julio de 1981, Compilación de Dulio Arroyo C. 1981-1985-, pág. 123) ha señalado que "tal formalidad se exige, por lo menos, para comprobar la existencia del contrato".

Debemos reconocer, no obstante, que por tratarse de que la institución bancaria que funge de promitente vendedora (y de supuesta arrendadora) es el Banco Nacional, institución del Estado, podría reputarse que el artículo 64 de la Ley 93 de 1973, la exime de cumplir dicha formalidad, pero por otra parte, salta a la vista que la reglamentación especial que existe en torno a la figura del arrendamiento urbano, exige de las partes, cualquiera que fuese su condición o calidad, términos claros y explícitos que no den lugar a las ambigüedades que el propio Tribunal a-quo tuvo a bien observar al hacer el estudio del contrato a que hacemos referencia.

En segundo lugar, dada la precaria formalidad que rodea al presunto contrato de arrendamiento que sirve de apoyo a la decisión del Tribunal a-quo, para que la acción de lanzamiento no encontrara reparo, habría sido preciso que en el contrato quedara consignado que la intención de las partes era la de que fuera ésta, o sea, la del lanzamiento del arrendatario, la consecuencia jurídica inequívoca del incumplimiento de los términos del contrato. Contrario a lo expresado, la cláusula "décima" del mismo alude a la rescisión del contrato, y añade "que el PROMITENTE VENDEDOR queda relevado de la obligación de traspasar el dominio de la propiedad y al pago de los daños y perjuicios", pero en ningún momento se refiere al lanzamiento del arrendatario. En efecto, la cláusula en referencia estatuye:

> "DÉCIMA: EL PROMITENTE COMPRADOR conviene en que la mora en el pago de tres (3) abonos mensuales o la falta de cumplimiento de cualesquiera de las otras obligaciones por él contraídas mediante este contrato, relevará al PROMITENTE VENDEDOR de la obligación de traspasarle el dominio de la propiedad mencionada, pudiendo el PROMITENTE VENDEDOR, en consecuencia, pedir la rescisión del contrato mediante la intervención judicial, aceptando además el PROMITENTE COMPRADOR que todos los abonos que hayan efectuado hasta ese momento y las mejoras realizadas por él en la casa arrendada quedarán en favor del PROMITENTE VENDEDOR, en concepto de indemnización por daños y perjuicios" (fs. 9).

A la Sala no se le oculta que la provisión sobre el lanzamiento del arrendatario, habría sido innecesaria en un contrato de arrendamiento normal que cumpliera con las formalidades mínimas que contempla la Ley 93 de 1973. Hemos visto, sin embargo, que este no es el caso en el asunto que nos ocupa, en el que las cláusulas relativas al arrendamiento vienen inextricablemente unidas a las del contrato de promesa de compraventa, lo que conduce a concluir que la intención manifestada por las partes en el contrato, era la de que su incumplimiento acarreará "la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios", conforme lo dejaron consignado en la cláusula Décima. Pareciera que, en todo caso, las partes tuvieron en mientes que el incumplimiento pusiera fin, ante todo, al contrato de promesa de compraventa, sin reparar que ello no solucionaba el problema del desalojo inmediato del bien prometido. Frente a lo expresado en el referido contrato, no resulta conforme a derecho acceder al lanzamiento pedido sobre la base de que esta solución la autoriza la ley por virtud de lo que establece el artículo 1320 del C. Civil, ya que el artículo 1308 (referente también al arrendamiento) establece la fórmula de la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, como consecuencia del incumplimiento.

De todas formas, lo decisivo en este caso es que las partes en la cláusula transcrita únicamente tuvieron en cuenta la resolución del contrato de promesa de compraventa, la cual, una vez reconocida por sentencia judicial colocaría a la PROMITENTE COMPRADORA Y TENEDORA DEL BIEN PROMETIDO, en la necesidad de acudir a la previsión contenida en el artículo 1399 del Código Judicial para lograr el desalojo. La aludida disposición reza así:

> "ARTICULO 1399. Cuando el bien se halle ocupado sin contrato de arrendamiento con el dueño o con su apoderado o su administrador, cualquiera de estas personas podrá solicitar del Jefe de Policía que la haga desocupar y se la entregue. Si el ocupante o los ocupantes no exhibieren títulos explicativos de la ocupación, el lanzamiento se llevará a cabo inmediatamente".

Como corolario de todo lo expuesto, la Sala arriba a la conclusión de que la norma que debió aplicarse en este caso, para definir lo relativo al incumplimiento del contrato es el artículo 1221 del Código Civil que remite al artículo 1009 de la misma excerta que otorga a las parte la facultad de resolver las obligaciones, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

Se constata de esta manera la violación de las normas legales en los términos alegados por el recurrente, por lo que procede casar el fallo de segunda instancia y dictar la resolución de reemplazo.

El Fallo de Instancia

Ya en su calidad de Tribunal de instancia, la Sala considera necesario formular las siguientes observaciones previas: que inicialmente, pese a que en la parte petitoria se solicita el lanzamiento contra la demandada Maureen M. Davis, el Juzgado Primero del Circuito de Colón que la acogió, procedió a darle a la misma los trámites propios del juicio ordinario; que posteriormente rectificó dicha postura y previa la declaratoria de NULIDAD DE LO ACTUADO, (Cfr. fs. 19) le imprimió los trámites del proceso sumario, previsto en el numeral 3 del art. 1336, sin advertir que para el Desahucio y Lanzamiento existe un procedimiento especial previsto en los artículos 1385 y siguientes del mismo Código. Esta circunstancia permitió traer hasta casación un proceso como el de lanzamiento, que normalmente no es susceptible de este último recurso.

Hecha esta aclaración y por más que pareciera haber quedado demostrado que la demandada Davis se encuentra en mora en el pago de los abonos mensuales que debió hacer al precio del bien sobre el cual recae la promesa, no es posible acceder a la declaratoria de rescisión del referido contrato de promesa de compraventa, por cuanto que en la demanda el actor se limitó a solicitar el desalojo de la vivienda construida sobre el lote U-7 del proyecto San Judas Tadeo. Es bien sabido que en atención al principio de congruencia que recoge el artículo 978 del Código Judicial, no puede condenarse al demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda. Frente a esta situación no le queda a la Sala otra alternativa que la de dictar un fallo inhibitorio, a fin de que la demanda sea enderezada de acuerdo con los términos convenidos en el contrato que le sirve de soporte jurídico.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la resolución de veinte de julio de 1992 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, actuando como Tribunal de Instancia, previa REVOCATORIA de la sentencia de 12 de febrero de 1992, proferida por el Juzgado Primero del Circuito del Primer Circuito de Colón, Ramo Civil, NIEGA la pretensión de lanzamiento formulada en la demanda.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO RODRIGO MOLINA A. EN EL RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO POR METROPOLITANA DE SEGUROS DE VIDA, S. A. EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE PETRONIA MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante escrito fechado 6 de julio de 1993, el Magistrado RODRIGO MOLINA A. manifiesta impedimento para conocer del presente recurso de casación propuesto por PETRONIA MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ contra METROPOLITANA DE SEGUROS DE VIDA, S. A.

La manifestación de impedimento está concebida en los siguientes términos:

> "Respetuosamente solicito al resto de los Honorables Magistrados que integran la Sala Civil de la Corte, me separen del conocimiento de este recurso de casación propuesto por METROPOLITANA DE SEGUROS DE VIDA, S. A., toda vez que en la actualidad me encuentro amparado con una póliza de Seguro de Hospitalización con la citada institución aseguradora. (Plan B. Póliza B-3003973) (Registro 0001).
>
> Esta obligada manifestación de impedimento para conocer del caso, en el que he sido designado como Magistrado Sustanciador, la hago con fundamento en la causal contemplada en el numeral 13 del artículo 749 del Código Judicial.
>
> Panamá, seis (6) de julio de 1993.
>
> (fdo.) RODRIGO MOLINA A."

La Sala observa que la circunstancia invocada por el Magistrado RODRIGO MOLINA A., en el sentido de que es asegurado de la parte demandada, no se encuadra dentro del numeral 13 citado, ya que la misma no es una relación jurídica que pueda ser afectada por la decisión. Cosa distinta sería, por ejemplo, si se tratara de un proceso de

quiebra en que se involucre a la compañía aseguradora, en donde la relación del asegurado podía ser afectada por la decisión.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado RODRIGO MOLINA A., por tanto, debe continuar con el conocimiento del presente negocio.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LINO BEITÍA RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO DE COSA AJENA, INTRODUCIDO EN EL JUICIO ORDINARIO PROMOVIDO POR LUCILA JOVANÉ VDA. DE BATISTA Y BRENDA LIRIETH BATISTA JOVANÉ CONTRA ISIDORA BATISTA JIMÉNEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra el auto definitivo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el día 30 de setiembre del pasado año en el incidente de levantamiento de secuestro de cosa ajena interpuesto por el señor **LINO BEITÍA** dentro de la acción de secuestro incoada por **LUCILA JOVANÉ VDA. DE BATISTA y BRENDA LIRIETH BATISTA JOVANÉ contra ISIDORO BATISTA JIMÉNEZ**, la representación del incidentista anunció y formalizó, en tiempo oportuno, recurso extraordinario de casación en el fondo.

Esta Sala de la Corte, mediante resolución de 24 de junio del presente año y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 1166 del Código de Procedimiento, ordenó la corrección del escrito de formalización del recurso por no ajustarse a las exigencias de la ley y la jurisprudencia nacional.

Según consta a fojas 99 de este negocio, el Secretario de la Sala informa que ha transcurrido el término señalado para efectuar la corrección ordenada sin que fuera aprovechado por el recurrente. El no corregir el escrito durante el término señalado para tal efecto, trae consigo la inadmisibilidad del mismo (recurso) y la imposición de costas de conformidad con lo pautado en la norma legal citada en líneas anteriores.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso extraordinario de casación, en el fondo, interpuesto por el señor LINO BEITÍA, mediante apoderado judicial.

Las obligantes costas, a cargo del recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00) solamente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EDILMA ELENA LASSO DE MADRID Y JOSÉ PRUDENCIO MADRID GIL RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A LEOVIGILDO CANTO PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado José Félix Henríquez, apoderado legal de los señores **JOSÉ PRUDENCIO MADRID** y **EDILMA ELENA LASSO DE MADRID**, parte demandante en el juicio ordinario que le siguen a **LEOVIGILDO CANTO PÉREZ**, anunció y formalizó recurso de casación contra la Sentencia de 24 de marzo de 1993, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Ingresado el negocio a esta Sala, previo reparto de rigor, fue fijado en lista por el término que prescribe el artículo 1164 del Código Judicial. Dicho término ha vencido, sin que fuera aprovechado por ninguno de los interesados y por lo tanto es preciso que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad o no del recurso, tomando en cuenta para ello las exigencias formales contempladas en los artículos 1160 y 1165 del citado Código.

Observamos que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; fue interpuesto en tiempo y por persona idónea.

Sin embargo, al examinar el recurso con más detalle, para determinar si cumple con los requisitos señalados por el artículo 1160, hacemos las siguientes observaciones:

1.- En cuanto a la causal, el recurrente la invoca de la siguiente forma: "INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO EN CUANTO A LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA QUE HA INFLUIDO SUSTANCIALMENTE EN LOS DISPOSITIVOS DEL FALLO".

Vemos entonces que esta causal no corresponde a ninguno de los conceptos de la causal de fondo que establece el artículo 1154 del Código Judicial, lo que significa que ha sido mal enunciada.

2.- Del análisis de los motivos observamos que han sido expuestos en un solo texto, sin haber sido explicados coherentemente. Más bien parecen los hechos que fundamentan un escrito de demanda. Inclusive se hace alusión a supuestos fallos dictados por esta Corte, lo que no está acorde con la naturaleza de este recurso.

3.- Con relación a las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, podemos señalar que las supuestas infracciones no están explicadas suficientemente y dos de los artículos del Código Judicial que fueron mencionados como violados, no contemplan la correspondiente explicación de la infracción.

Las circunstancias arriba mencionadas motivan que el recurso presentado sea ininteligible y por ende, inadmisible.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el presente recurso de casación.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PLACIDO CASTILLO Y VIRGILIO CASTILLO TORIBIO RECURREN EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE ANSELMO ORTEGA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario presentado por ANSELMO ORTEGA contra PLACIDO CASTILLO y VIRGILIO CASTILLO TORIBIO, el apoderado de los demandados presentó recurso de casación en contra de la sentencia que dictara el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, el 13 de noviembre de 1992.

Remitido el expediente a la Corte Suprema, se procedió a darle la tramitación señalada para esta clase de recursos. Finalizada la ritualidad y luego de su admisión, entra la Sala a pronunciarse en el fondo sobre la impugnación que se hace a la sentencia dictada por el tribunal de segunda instancia.

La casación que se ha presentado es en el fondo y se invocan dos causales, las cuales serán consideradas separadamente.

La primera causal es la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba. Esta causal se sustenta en cinco motivos.

En el primer motivo el recurrente indica que no existe la prueba documental exigida por la ley que acreditaba la deuda de ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS BALBOAS (B/.11,166.00) que el señor ANSELMO ORTEGA afirma le debe PLACIDO CASTILLO y sin embargo el tribunal reconoce esa obligación.

En el hecho segundo manifiesta que no existe en el expediente ninguna prueba que acreditara la insolvencia en que, según la sentencia, se encuentra PLACIDO CASTILLO.

En los otros hechos, manifiesta que tales errores de hecho, esto es, dar por existentes pruebas que no aparecen en los autos, llevaron al sentenciador a reconocer la acción pauliana alegada por el demandante ANSELMO ORTEGA.

Estos motivos se transcriben para una mejor comprensión.

"...
Primero: El fallo objetado determinó que estaba probado el crédito por valor de B/.11,166.00 (once mil ciento sesenta y seis balboas) que el demandante (Anselmo Ortega) tenía contra el Sr. Plácido Castillo. Pero el fallo recurrido no tomó en cuenta que la prueba documental que exige la Ley sobre la existencia de dicho crédito no constaba en el proceso.

Segundo: El fallo recurrido también determinó que estaba acreditada la insolvencia del Sr. Plácido Castillo como deudor del actor (Anselmo Ortega). Pero el fallo recurrido tampoco tomó en cuenta que no existía la prueba correspondiente sobre la insolvencia del Sr. Plácido Castillo.

Tercero: El Error de Hecho en cuanto a la existencia de la Prueba, que no consta en el proceso, conllevó a la violación de la norma sustantiva pertinente, la cual no se aplicó a la presente controversia.

Cuarto: Si el fallo objetado hubiera determinado que no existía la prueba documental que probara la existencia del crédito del demandante (Anselmo Ortega), ni que existía la prueba correspondiente a la insolvencia del demandado (Plácido Castillo), habría resuelto negar lo pedido en la demanda.

Quinto: Las mencionadas infracciones influyeron sustancialmente en la parte dispositiva del fallo recurrido, lo que permitió que le reconociera al demandante (Anselmo Ortega) un crédito no probado y sele (sic) concediera la Acción Pauliana interpuesta en perjuicio de los derechos de la parte demandada (Plácido Castillo) ...".

Con fundamento a tal motivación, el recurrente cita como normas infringidas los artículos 769, 819, 821 del Código Judicial y los artículos 1103, 1100 y 996 del Código Civil.

Un estudio de la sentencia impugnada determina que no le asiste ninguna razón a la parte demandada.

Es evidente que se hace consistir la injuricidad de la sentencia en que el juzgador tomó en cuenta una prueba documental que no existe en el expediente para acreditar una obligación, como también que reconoció una insolvencia de uno de los demandados sin que tal prueba existiera en los autos, en este último caso, omitiendo indicar cual es esa prueba que se dio como existente sin aparecer en el expediente.

La sentencia, contrario a lo que expresa el recurrente, en ningún lado ha manifestado que la obligación que existe entre PLACIDO CASTILLO a favor del demandante ANSELMO ORTEGA se ha probado mediante prueba documental. Por el contrario, reconoce la existencia de esta obligación en la confesión dada al contestar la demanda. Así indica específicamente lo siguiente:

> "... Al respecto, el Tribunal advierte, que si bien no consta en autos prueba de la sentencia de fecha 25 de marzo de 1988 en la cual apoya el recurrente su crédito en contra del señor Plácido Castillo, éste último, como se dejó anotado en otro momento, se encargó de acreditar la existencia de su obligación para con el demandante, ya que al dar contestación al hecho primero de la demanda interpuesta en su contra, cuyo contenido es "El actor promovió el 3 de febrero de 1984 proceso ordinario declarativo de mayor cuantía en contra de PLACIDO CASTILLO por la suma de $12,000.00, siendo esta causa final y definitiva resuelta mediante sentencia de 25 de marzo de 1988; quedando en consecuencia y como resultado de la misma PLACIDO CASTILLO obligado a pagarle al actor la suma de $11,166.00 balboas". Contestó: "La primera parte es cierta, por eso lo acepto, la segunda también, por eso lo acepto (ver fojas 3 y 16 del expediente)".

De lo transcrito se desprende que no había ninguna necesidad de probar documentalmente una obligación que fue lisa y llanamente confesada y el tribunal, como consecuencia, al aceptar la confesión, dio por probada dicha obligación; por ningún lado, manifestó que tal existencia es probada con alguna prueba documental como pretende el recurrente.

En cuanto a la insolvencia, la sentencia estableció lo siguiente:

> "...
> Acreditada la condición de acreedor del actor, toca ahora establecer si éste último demostró en juicio haber perseguido los bienes que estaban en posesión del señor Plácido Castillo. En ese sentido se observa, que la apoderada legal del demandante hizo llegar a los autos prueba de declaración de parte del señor Plácido Castillo (ver fojas 39-43 y fojas 51-54) y del señor Virgilio Castillo Toribio (ver fojas 37-39). En igual forma incorporó al proceso prueba documental de carácter público que rola de fojas 135-155, la cual hace alusión al proceso por jurisdicción coactiva seguido en junio del año 1986 por el Municipio de Panamá contra el hoy demandado señor Plácido Castillo.
>
> Revisados los elementos de juicio de que se hizo mérito en el párrafo que antecede, esta Superioridad estima que ellos conllevan a la convicción de que la parte actora antes de la interposición de la presente demanda ordinaria declarativa (acción pauliana) agotó todos los medios a su alcance a fin de hacer efectivo su crédito, persiguiendo mediante acción cautelar de secuestro el negocio de propiedad del demandado (Central de Billares), lo que a la postre resultó infructuoso por razón de la prioridad del crédito en favor del ente público denominado Municipio de Panamá (ver respuesta dada por el señor Plácido Castillo a las preguntas octava, novena, décima, décima primera y décima segunda que le fuesen formuladas por la apoderada legal del recurrente) ...".

Se colige que no es cierto, tal como afirma el recurrente en su recurso que no existe la prueba correspondiente a la insolvencia. Para el tribunal, tal como consta en la reproducción anterior, esa prueba abunda en ese expediente y consta en los folios a que se hace mención.

Por todo lo expresado, no se ha violentado ninguna de las disposiciones a que se refiere el recurso y se desestima la causal invocada.

Como segunda causal menciona la infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa.

Fundamenta la causal en tres motivos que se transcriben seguidamente:

> "...
> Primero. El fallo revocó la Donación (sic) que Plácido Castillo hizo a Virgilio Castillo T. sobre la finca 67,684, desconociendo la norma sustantiva que permite donar bienes.
>
> Segundo. Si el fallo recurrido hubiera tomado en cuenta que la Donación (sic) es una acto permitido por la ley sustantiva, habría resuelto negar la revocación de dicha donación.
>
> Tercero. La mencionada infracción influyó sustancialmente en la parte dispositiva del fallo recurrido, lo que permitió que se revocara la mencionada donación en base a lo pedido en la demanda de Anselmo Ortega ...".

Imputa el casacionista a la sentencia la violación del artículo 939 del Código Civil. Sostiene que esta norma ha dejado de aplicarse al caso, esto es, ha sido infringida en el concepto de violación directa por omisión.

Un estudio de la sentencia permite a la Sala descartar la impugnación presentada en esta causal. En este proceso no se discute la legalidad del acto realizado entre el padre y el hijo en virtud del cual, el primero dona al segundo un bien; el meollo es otro, esto es, si la donación realizada por Plácido Castillo en favor de su hijo Virgilio Castillo T. produce efectos jurídicos ante el demandante Anselmo Ortega, acreedor del donante. El demandante pide al tribunal y éste en su fallo lo reconoce, que esa donación fue realizada maliciosamente, es decir, con el único propósito de protegerse contra cualquier acción que Anselmo Ortega iniciara en su contra.

La censura se aparta totalmente de la realidad del proceso cuando afirma que se ha desconocido la norma sustantiva que permite donar bienes y que por ello se revocó dicha donación. El tribunal en la sentencia indica que mientras PLACIDO CASTILLO no cancela la suma que le adeuda a ANSELMO ORTEGA carece de todo valor y no surte ningún efecto la donación simulada que en fraude de los derechos de su acreedor realizó PLACIDO CASTILLO a VIRGILIO CASTILLO TORIBIO de su finca N°67,684. La causal alegada se desestima.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 13 de noviembre de 1992.

Las obligantes costas a cargo del recurrente se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HILARIO PÉREZ DE GRACIA RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE JOVINA JUDITH BARBA CAMARGO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de lo Civil, mediante resolución fechada 30 de junio de 1993, ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación en el fondo, propuesto por el licenciado EDWIN PÉREZ MUÑOZ, apoderado judicial del señor **HILARIO PÉREZ DE GRACIA**, quien constituye la parte demandada dentro del juicio de filiación interpuesto por la señora **JOVINA JUDITH BARBA CAMARGO**.

Dentro del término señalado en el artículo 1166 del Código Judicial, el recurrente corrigió el escrito de formalización del recurso de casación, motivo por el cual le corresponde a esta Corporación determinar la admisibilidad del mismo.

De acuerdo con los requisitos establecidos por el artículo 1160 del citado Código, se ordenó al recurrente eliminar del escrito dos normas consideradas como infringidas que no guardan relación alguna con la causal invocada ni con los motivos que la fundamentan; además debía aclarar el concepto de la infracción del resto de las normas citadas.

Después de un minucioso estudio del escrito de corrección del recurso, la Sala observa que el casacionista cumplió satisfactoriamente con lo que se le había ordenado.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el presente recurso de casación en el fondo.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EDWIN QUINTERO RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A IRIS DEL CARMEN OLMOS DE GRACIA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución fechada 24 de junio de 1993, ordenó la corrección del escrito de formalización del recurso de casación interpuesto por **EDWIN QUINTERO**, por conducto de la firma forense ALEGRÍA & JURADO, contra la sentencia de 30 de octubre de 1992 dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial dentro del Proceso de Divorcio que le sigue a **IRIS DEL CARMEN OLMOS DE GRACIA**.

A fin de corregir el recurso de casación interpuesto se le concedió al casacionista el término de cinco (5) días conforme a lo dispuesto por el Artículo 1166

del Código Judicial. Sin embargo, tal cual como se desprende del informe secretarial legible a fojas 78 del expediente, el recurrente dejó precluir el término sin cumplir con la corrección ordenada en la resolución dictada por esta Sala de la Corte.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido por el artículo precitado, la pretermisión del recurrente conlleva la sanción de inadmitir el recurso propuesto.

Por las consideraciones vertidas, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA INADMISIBLE** el presente recurso de casación propuesto por **EDWIN QUINTERO** contra la resolución de 30 de octubre de 1992 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

METROPOLITANA DE SEGUROS DE VIDA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE PETRONIA MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense **HARRIS Y ASOCIADOS** actuando como apoderada especial de la **COMPAÑÍA METROPOLITANA DE SEGUROS DE VIDA, S. A.**, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 17 de marzo de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario que **PETRONIA MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ** le sigue a la recurrente.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que ambas hicieron según consta en escritos visibles de fojas 264 a 265 y 266 a 268 respectivamente.

Seguidamente, la Sala procede al examen del recurso de casación conforme a los presupuestos que determina el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, enumerados de la siguiente forma:

1.- Si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2.- Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3.- Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y,

4.-Si la causal expresada es de las señaladas por la ley.

En relación a lo expuesto, en este caso se observa que la resolución recurrida en casación es de aquellas que permite la ley, según lo preceptúan los artículos 1148 y 1149 del citado texto procesal.

A su vez se ha podido constatar, que el recurso ha sido interpuesto en tiempo, y que la causal expresada es de las señaladas por la ley.

En cuanto al contenido del escrito de formalización del recurso de acuerdo a las exigencias del artículo 1160 del mismo Código, se colige lo siguiente:

1.- La causal invocada es de fondo y ha sido determinada en los siguientes términos "Infracción de normas sustantivas de derecho , por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Sentencia".

2.- Se expresan tres motivos como fundamento de la causal.

3.- Respecto a las normas de derecho establecidas dentro del recurso como infringidas y la explicación realizadas en dos de las mismas.

En primer término, la cita el artículo 770 del Código Judicial, explicando el recurrente que ha sido violado en forma directa "por comisión", al considerar que el Ad-quem no ha valorado y apreciado ciertas pruebas según las reglas de la sana crítica.

La citada norma establece la forma en que el juez debe apreciar las pruebas (reglas de la sana crítica), por lo que resulta evidente que el concepto de la violación (por comisión), es incompatible con el texto de la norma.

En segundo lugar, la infracción señalada respecto al artículo 773 del Código Judicial, ha sido atribuida a la parte actora y no a la actuación del tribunal reflejada en la sentencia de segundo grado; en consecuencia debe aclararse lo referente a la infracción acusada, pues además parece aludir a la causal probatoria de error de hecho, que no es la invocada en este recurso.

Por lo expuesto, el casacionista debe corregir los defectos señalados, a fin de que el recurso pueda ser admitido.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación propuesto por METROPOLITANA DE SEGUROS DE VIDA, S. A. contra la

Sentencia de 17 de marzo de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior, conforme lo establece el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.)RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EVELIA CANO Y MARÍA LUISA LLORENTE VDA. DE SAAVEDRA RECURREN EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO (EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN) PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTINUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la resolución de 13 de noviembre de 1992 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del incidente de previo y especial pronunciamiento (extinción de la pretensión) aducido por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ dentro del proceso ordinario que contra esta institución bancaria han incoado las señoras: EVELIA CANO RODRÍGUEZ y MARÍA LUISA LLORENTE VDA. DE SAAVEDRA, la firma forense RUBIO & RUBIO, apoderada judicial de la actora, anunció y formalizó recurso extraordinario de casación, en el fondo. Ingresado el negocio a la Corte, se surtieron los trámites inherentes a este recurso y al momento de decidir sobre la admisibilidad del mismo (recurso), la Sala se vio compelida a ordenar la corrección del recurso al tenor de lo que dispone el artículo 1166 del Código de Procedimiento, por encontrarse frente a defectos formales en el segundo de los requisitos que exige el artículo 1160 de la citada ley que imposibilitaban su admisión.

Precluido el término para la corrección del recurso y habiéndose efectuado la misma dentro del término legal, es tarea de la Sala resolver en forma definitiva la admisibilidad. En esta etapa, se hace necesario realizar una confrontación entre la resolución que ordena la corrección y el escrito de formalización corregido con el propósito de que se evidencie el cumplimiento o no a lo ordenado por la Sala.

La atenta lectura del recurso corregido pone de relieve el cumplimiento de todos y cada uno de los aspectos que contiene la resolución del 5 de julio de 1993; por consiguiente:

1. La resolución, cuya impugnación aquí se impetra, es susceptible del recurso por tratarse de un auto de segunda instancia proferido por un Tribunal Superior de Justicia dentro de un incidente de previo y especial pronunciamiento;

2. En autos consta que el recurso ha sido interpuesto en tiempo y por persona hábil;

3. El escrito por medio del cual fue formalizado reúne, de manera general, todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 y;

4. La causal invocada de las señaladas por la ley.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el presente recurso de casación interpuesto en el fondo por las señoras EVELIA CANO y MARÍA LUISA LLORENTE VDA. DE SAAVEDRA, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CLAUDIA VILLARREAL DE GONZÁLEZ Y FERNANDO GONZÁLEZ JURADO, RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE LE SIGUEN A ANTONIA GUERRA o ANTONIA GONZÁLEZ GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A.PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En sentencia de 28 de junio de 1993 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia **ORDENO** la **CORRECCIÓN** del recurso de casación propuesto por **CLAUDINA VILLARREAL DE GONZÁLEZ y FERNANDO GONZÁLEZ JURADO** contra la Resolución de 21 de diciembre de 1992 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial dentro del Proceso Ordinario seguido contra ANTONIA GUERRA o ANTONIA GONZÁLEZ GUERRA.

Vencido el término otorgado al recurrente para la corrección del escrito de casación, se observa en el expediente y a su vez lo certifica informe secretarial de fojas 271, que dicha corrección no fue efectuada.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de lo normado por el artículo 1166 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación debe ser declarado inadmisible, con imposición de costas y ser devuelto el proceso al Tribunal del Conocimiento. Por lo que la Sala procede a pronunciarse en ese sentido.

Consecuentemente, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por CLAUDINA VILLARREAL DE GONZÁLEZ y FERNANDO GANDULAS JURADO contra la Resolución de 21 de diciembre de 1992 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.75.00)

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANUEL SALVADOR ROBLES RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LEÓN ROBLES. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del Proceso Ordinario Declarativo que **MANUEL SALVADOR ROBLES TREJOS** le sigue a **LEÓN ROBLES**, el licenciado Bolívar Ulloa en representación de la parte actora ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 28 de abril de 1993 dictada en dicho proceso por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que no fue realizado por ninguna de ellas.

Seguidamente, la Sala procede al examen del recurso conforme a los requerimientos establecidos por el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, a efecto de decidir su admisibilidad.

En este sentido se ha podido constatar lo siguiente:

1.- La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, conforme lo disponen los artículos 1148 y 1149 del Código Judicial.

2.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo.

3.- El escrito de formalización del recurso ha sido estructurado cumpliendo con los apartados descritos en el artículo 1160 de nuestra ley procesal.

4.- La causal expresada es de las señaladas por la Ley, entre las de fondo que consagra el artículo 1154 del citado Código Judicial.

Por tanto, al cumplirse en este caso con las mencionadas exigencias legales resulta plausible la admisión del recurso de casación.

En consecuencia, La Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación propuesto por MANUEL SALVADOR ROBLES contra la sentencia de 28 de abril de 1993, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dentro del Proceso Ordinario que le sigue a LEÓN ROBLES.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

JULIO 1993

ACUSACIÓN PARTICULAR

ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA CONTRA ROGELIO AUGUSTO ORTEGA RAMÍREZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDWIN MARÍN CORTEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El abogado Héctor E. Zavala, actuando en su condición de apoderado judicial de Rogelio Ortega, ha presentado recurso de apelación contra auto de 10 de febrero de 1993 emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se admite acusación particular promovida por David Marín Moreno en contra de su representado, por la comisión del delito de homicidio cometido en perjuicio de Edwin Marín Cortez.

Manifiesta el recurrente que la resolución impugnada es producto de vicios procesales que acarrean su nulidad. En ese sentido, argumenta que el 18 de enero de 1993 el a-quo profirió una primera resolución que ordena la corrección del libelo de la acusación particular, por no cumplir con requisitos indispensables y básicos, entre ellos la prueba de la "legitimidad jurídica" de la parte acusadora. Agrega que el Tribunal Superior, "en vez de decretar la no admisibilidad de la acusación particular, "hace consideraciones (sic) legales hacerca (sic) de la formalidad del libelo presentado" y "procede a utilizar el procedimiento civil supletoriamente de hecho" (f.50), sin "invocar el texto" de las disposiciones legales, ni cuál es el fundamento de los 8 días que otorgó para cumplir dicho trámite. También censura el hecho de que la referida resolución no fue notificada al sindicado, lo que debió tener lugar personalmente, con lo que se violó el artículo 2302, numeral 4, en concordancia con el 2298, numeral 2, ambos del Código Judicial. En opinión del impugnante la "nulidad absoluta" que le atribuye al auto de 18 de enero de 1993 afecta con el mismo vicio, por ser su fundamento, el auto de 10 de febrero de 1993, mediante el cual se admitió la acusación particular, por lo que solicita se revoque el auto impugnado y, en su lugar, se decrete la inadmisibilidad de la acusación particular.

Por su parte la Licda. Grace Eastes, actuando en su condición de apoderada legal de la parte acusadora, al contestar el traslado del escrito de apelación, externa que en el primer libelo de acusación se denunció como fuente de prueba el lugar donde se podría obtener el acta de nacimiento para acreditar el vínculo, en atención a los principios procesales que rigen los medios de prueba. Que en el presente caso el Magistrado Sustanciador cumplió con el mandato legal establecido en el artículo 1971 del libro III del Código Judicial, que autoriza la aplicación supletoria de las disposiciones del libro II, "para que no fuera en vano la solicitud hecha por el familiar de la víctima en demostrar que su hijo EDWIN MARÍN CORTEZ, había sido herido mortalmente con arma de fuego sin justificación alguna" (f.56), por lo que solicita se confirme la resolución recurrida.

En nuestro sistema jurídico el Ministerio Público, que actúa en representación del Estado, detenta el monopolio del ejercicio de la acción penal para investigar y acusar ante los Tribunales jurisdiccionales ordinarios los delitos que son perseguibles de oficio (a.1976 C.J.). Sin embargo, por autorización legal el ejercicio de esa acción penal puede ser compartida con el particular afectado por el delito, con su cónyuge o con sus **parientes dentro del segundo grado de consanguinidad** y segundo de afinidad, siempre y cuando el familiar esté en pleno goce de sus derechos civiles (a.2022 C.J.). A su vez, las personas mencionadas son las únicas consideradas por la ley como acusadores legítimos (a.2010 C.J.).

Por otra parte, para entablar una acusación particular el interesado debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2013 del Código Judicial. Obviamente que tales requisitos están condicionados a que el interesado en ejercer la acción penal, mediante acusación particular, acredite su legitimidad para actuar.

En el caso que nos ocupa es un hecho cierto que con el primer libelo de acusación no se acompañó la prueba que acreditara tal legitimidad. Aún cuando se entiende que la carga de esta prueba corre por cuenta del interesado, según afirma la licenciada Eastes, lo cierto es que denunció "como fuente el lugar donde se podría obtener el acta de nacimiento para acreditar el vínculo", y solicitó al Tribunal de la causa "que se oficie Nota al Registro Civil para que se nos certifique las generales del occiso EDWIN MARÍN CORTEZ" (f.7).

Es cierto que las normas que regulan el ejercicio de la acusación particular, para intervenir como sujeto del proceso, no establecen expresamente el trámite de corrección del libelo de una acusación, empero tampoco imponen una prohibición a esos efectos, de modo que no aparece como justificado el criterio de que deben ser interpretadas restrictivamente.

No es lo mismo la falta de comprobación de la legitimación activa que la carencia de la investidura que ella otorga, debidamente comprobada. Son dos supuestos diferentes, constituyendo el primero un defecto formal que puede ser subsanado por los procedimientos que la ley autoriza, mientras que el segundo entraña una incapacidad legal irremediable por caer bajo el imperio de una norma que no admite interpretación extensiva (a.2010 C.J.). En tal virtud se puede sostener que la falta de legitimación activa sí conduciría a una decisión con efectos de fondo, de naturaleza a impedir, en forma definitiva, la pretensión de constituirse en parte procesal.

Como bien afirma el recurrente (f.50), el artículo 675 del Código Judicial, aplicable por la remisión que autoriza el número 1971 de la misma excerta, faculta al Juez para ordenar, verbalmente y por escrito, la corrección de la demanda o de la contestación, si "adoleciere de algún defecto u omitiere alguno de los requisitos previstos por la Ley", de donde resulta el fundamento jurídico de la resolución impugnada, por figurar ésta entre las "materias que no tienen regulación expresa" en el Libro Tercero del Código Judicial (a.1971).

Finalmente, en atención a la nulidad que reclama el recurrente por falta de notificación personal al imputado del auto de 18 de enero de 1993, cabe destacar que la notificación personal a que se refiere el artículo 2302, numeral 4, del Código Judicial, tiene que ver con "El auto que admite o rechaza la acusación particular". Evidentemente que los citados supuestos -admitir o rechazar- no corresponden a lo decidido en el referido auto, puesto que en este último lo que se dispone es "el perfeccionamiento del libelo de acusación", por lo que mal puede exigirse su notificación personal, de donde resulta sin fundamento la alegada nulidad.

En razón de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 10 de febrero de 1993, que admite la acusación particular presentada por David Marín Moreno, mediante representante legal, contra Rogelio Ortega, por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de Edwin Marín Cortez.

Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

JUICIO CONTRA ESPERANZA GARIBALDI POLO, SINDICADA POR EL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO DE ESTHER CEBALLOS LOBON. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Contra el auto de 11 de noviembre de 1992, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que abre causa criminal contra ESPERANZA GARIBALDI POLO (a) "Muñeca" como presunta infractora de las disposiciones contenidas en el capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal en relación con el capítulo VI, Título II, Libro I del mismo cuerpo legal. Su abogado defensor al notificarse el 24 de marzo de 1993, anunció recurso de apelación, mismo que fue sustentado el 12 de abril y remitido a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el 4 de junio del año que decurre.

El auto impugnado, cuya parte motiva hace un recuento valorativo de los elementos de juicio aportados al sumario, sostiene que el hecho punible está plenamente acreditado con los dictámenes médicos que dan cuenta sobre el tipo de lesiones corporales sufridas, proveniente de arma de fuego y que por su naturaleza, localización y consecuencias directas, pusieron en peligro la vida de la víctima, señora YADIRA ESTHER CEBALLOS LOBON.

Con relación a la autoría del hecho punible investigado, hay prueba abundante que identifica a la señora ESPERANZA GARIBALDI POLO como la persona que se presentó al domicilio de la joven CEBALLOS LOBON, con un arma de fuego, que utilizó de inmediato haciendo blanco en el cuerpo de la víctima. Al calificar la figura delictiva dentro de la tipología penal vigente, el Tribunal a quo identificó el homicidio imperfecto en su modalidad de tentativa acabada.

La defensa técnica al momento de sustentar el recurso de apelación (fs.122-127) hace una relación de la fase externa del iter criminis y del sentido y alcance del artículo 2222 del Código Judicial en relación con el 44 del Código Penal, para concluir que en este caso lo que procede es la declinatoria del conocimiento ante autoridades judiciales inferiores, pues se trata de un delito contra la integridad física y no de un caso típico de tentativa de homicidio. En parte de su escrito se lee lo siguiente:

"LA TENTATIVA EN EL NUESTRO DERECHO POSITIVO

> El artículo 44 del Código Penal establece los requisitos de la tentativa de cualquier delito. Exige que se inicie la ejecución, por actos idóneos encaminados a su consumación y que ésta no se produzca por causas independientes del agente. Ya la doctrina ha establecido que los **actos deben ser idóneos y unívocos**, al tiempo que Scarano, con acertado criterio, opina que un disparo de arma de **fuego no dice**, **por sí solo**, nada sobre la intención de ejecutar determinado acto, por lo que recomienda investigar si hay intención de matar, amenazar o herir.
>
> La lectura del expediente informa que **ESPERANZA GARIBALDI POLO** no es experta en el uso de armas, razón por la cual no puede concluirse que tenía intenciones de causar la muerte, sobre todo si tomamos en consideración que, encontrándose a corta distancia, falló uno de los disparos. De lo anterior, se deduce que existen dudas razonables sobre la verdadera intención de ESPERANZA GARIBALDI POLO.
>
> Si lo anterior no fuera suficiente, **el propio hermano de la lesionada manifestó que mi cliente**, **luego** de sostener una encarnizada lucha con él, **continuó con la posesión del arma y se dio a la fuga**; en consecuencia, tampoco se da el segundo requisito exigido por el artículo 44 del Código Penal, pues, de haber querido, pudo haber rematado a la señora **YADIRA ESTHER CEBALLOS L.**"

Del escrito anterior se corrió traslado al representante del Ministerio Público, quien en la Vista de 6 de mayo (fs. 130-138) refuta los argumentos expuestos por la defensa y señala que el artículo 2222 del Código Judicial solo exige dos requisitos: uno de carácter objetivo, que alude a la plena prueba de la existencia del hecho punible y el otro, considerado como elemento subjetivo, y que admite cualquier medio probatorio idóneo o graves indicios que vinculen causalmente la conducta de una persona determinada

al hecho delictivo objeto de la investigación criminal. Estima el Fiscal Segundo Superior, que hay pruebas periciales y testimoniales que establecen la existencia del delito de homicidio en grado de tentativa, al igual que la debida identificación de la persona que causó la lesión que puso en peligro la vida de YADIRA ESTHER CEBALLOS LOBON. Sobre el punto específico que se debate, el Representante del Ministerio Público dice:

> "Por otra parte, los reparos del recurrente, en el sentido de que no hubo tentativa de homicidio, porque la sindicada no es experta en uso de armas y que,, de haberlo querido, ésta hubiese rematado a la joven **CEBALLOS**, lo mismo, como se ha podido observar no demuestra que no haya habido, de parte de la imputada la puesta en práctica de actos idóneos encaminados a la consumación del delito de homicidio y que, por causas independientes del agente, el mismo no se consumó. Ello es así, desde el momento en que le disparó, con un arma de fuego, un arma letal, a la anatomía de **YADIRA CEBALLOS**, hiriéndola con el primer proyectil, efectuando un segundo disparo, el cual no logra herirla, toda vez que la misma buscó refugio en su casa.
>
> Dicho en otros términos, el homicidio no se perfeccionó, no porque la imputada haya desistido de los actos, pues, lo que ocurrió fue lo contrario, ya que ésta llevó a cabo todos los actos idóneos para ejecutar el ilícito, en este caso homicidio, más por circunstancias ajenas o independientes de su voluntad, no se consumó tal delito.
>
> Por otra parte, la no experiencia en el uso de un arma de fuego, como pretende el apoderado judicial de la joven **GARIBALDI POLO**, no es prueba que indique que una persona no tenga intención de causar la muerte de otra.
>
> De igual manera, gracias a que la lesionada recibió oportunamente, tratamiento médico dio como resultado que se le salvara la vida.
>
> En resumen, un estudio atento de las distintas constancias procesales que militan en el sumario, dan cuenta de que, por parte de la sindicada, se incurrió en el delito de **homicidio en grado de tentativa**, en la medida en que ésta realizó todos los actos necesarios para que dicho acto delictivo se concretara, y que el mismo no se consumó, por circunstancias independientes a la voluntad del agente.
>
> Siendo esta la realidad que emerge del sumario, lo que procede es que se confirme el auto recurrido, por ser ajustado a derecho".

Como se puede apreciar,la disconformidad del apelante se enfoca en la calificación genérica del hecho punible, no así en la vinculación causal de dicho acto al comportamiento de una persona debidamente individualizada, por lo que la Sala se limitará a considerar si el auto valorativo del sumario se ajusta a la ley, al ponderar las evidencias incorporadas al expediente con relación a la figura delictiva objeto de investigación. Los hechos que antecedieron a la irrupción de GARIBALDI POLO a la casa habitación de CEBALLOS LOBON, colocan a la última como protagonista de una riña con AIDANES DELGADO, persona que resultó ser amiga de ESPERANZA GARIBALDI POLO, nexo amistoso que generó la solidaridad de la ofensa a su persona y a reaccionar en forma violenta, dirigiéndose a la casa de YADIRA CEBALLOS con un arma de fuego, instrumento que usó seguidamente disparando hacia la agresora de su amiga. Si bien es cierto que portar un arma de fuego no es signo inequívoco de propósitos homicidas, su uso contra las personas, especialmente cuando se alega impericia y se hace más de un disparo, hay que deducir al menos la intención de causar un daño grave.

Si ESPERANZA GARIBALDI quería vengar los golpes recibidos por su amiga, con sólo buscar a la ofensora hasta su propia casa, acompañada de varias personas, era por si un acto de intimidación o amenaza, pero si al acto vindicativo se asegura de llevar consigo un arma de fuego, no para enseñarla o esgrimirla como refuerzo, sino que la activa y dispara contra el cuerpo de la persona que busca para saldar cuentas, el animus necandi aflora de los propios actos realizados. La tentativa acabada como forma imperfecta de aparición del hecho delictivo emerge por la atención médica oportuna de la víctima, que fue el factor ajeno a la voluntad del agente que impidió la consumación, pese a ello, el disparo puso en peligro su vida, con lo que se reafirma la postura del a quo al calificar como tentativa de homicidio la conducta desplegada por ESPERANZA GARIBALDI POLO contra la vida e integridad personal de YADIRA CEBALLOS LOBON.

Cuando se trata del bien jurídico de la vida humana, que es uno de los valores más importantes, por cuanto constituye la fuente de todos los derechos reconocidos por la Ley, las dudas razonables que sustentan la favorabilidad al reo inciden por lo general en la identificación de los autores o partícipes, en las presunciones e indicios o en los hechos objetivos, no así en los actos de violencia producto de un deseo claro de venganza o retribución, en los que se hacen uso de armas calificadas para destruir ese bien de la vida. Si la verdadera intención era la de intimidar o simplemente afectar la integridad física, el disparo debió dirigirse al vacío o al suelo, no a la zona pectoral de la víctima, de allí que la calificación genérica responda a la realidad procesal.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto apelado. Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO. JUICIO SEGUIDO CONTRA GUSTAVO ORTIZ, DANILO ENRIQUE ALVARADO ZORRILLA, JOSÉ INÉS SANGUILLÉN, JACQUELINE VERÓNICA SMITH BROWN Y JOSÉ FÉLIX BENE BARRERA, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE HERIBERTO MARTÍNEZ MELÉNDEZ.

MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Los licenciados Mireya Rodríguez Monteza y Danilo Montenegro A., actuando en su condición de defensores de oficio de Jackeline Verónica Smith y José Inés Sanguillén, respectivamente, han interpuesto sendos recursos de apelación en contra de la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que decide someter a sus patrocinados a los rigores de un enjuiciamiento.

Efectivamente, se constata que el día 17 de septiembre de 1991 el referido Tribunal abrió causa criminal contra José Inés Sanguillén y otras dos personas más, como presuntos infractores del Capítulo I, Título I, del Libro Segundo del Código Penal, o sea por el delito genérico de homicidio cometido en perjuicio de Heriberto Martínez Meléndez, y contra Jaqueline Verónica Smith y José Félix Bene Barrera como presuntos infractores del Capítulo IV, Título XI, en relación con el Capítulo I, Título I, del Libro Segundo del Código Penal, es decir por el delito de encubrimiento y, por último, sobreseyó a otros tres sumariados (fs.236-256).

La defensa técnica de Jackqueline Verónica Smith manifiesta que su disconformidad con la citada resolución judicial consiste en que, si la conducta de su patrocinada ha sido calificada como encubrimiento, delito que lleva aparejada pena de 1 a 2 años de prisión, entonces la competencia para conocer del hecho le corresponde a la esfera Municipal, de conformidad con el mandato del artículo 174 del Código Judicial, por lo que solicita se decline el conocimiento de la causa (fs.317-318).

El defensor de José Inés Sanguillén plantea que la vinculación de su patrocinado con el delito se deriva del señalamiento que, mediante indagatoria y posteriormente bajo juramento, le hiciera el imputado Gustavo Ortiz (a) Cabeza. Su disconformidad consiste en que, según su criterio, el secretario de la Fiscalía Segunda del Circuito de Colón no podía recibirle declaración jurada a Gustavo Ortiz, puesto que estaba "autorizado única y exclusivamente para ampliar la declaración indagatoria a GUSTAVO ORTIZ, como lo señala de manera expresa la providencia visible a fs.81, por lo que no podía legalmente ir más allá de ese mandato, conforme lo prevé el artículo 394 del Código Judicial" (f.320). También alega este apelante que los señalamientos incriminatorios proferidos por Gustavo Ortiz contra su defendido son desmentidos por el testimonio de su propia concubina Cristina Nereida Acosta, a quien Ortiz le confió las razones que tuvo para causarle la muerte a Heriberto Martínez (fs.20-25). Igualmente sostiene el impugnante que con el testimonio de José Félix Bene Barrera se "desvirtúa la afirmación de ORTIZ de que el puñal quedó en mano de SANGUILLÉN (a) "MACHO" y demuestra evidentemente que ni SANGUILLÉN ni WIBIRI tuvieron que ver con las heridas que ocasionaron la muerte de HERIBERTO MARTÍNEZ MELÉNDEZ" (fs.128-129), por lo que concluye con solicitud de que se revoque el auto recurrido y se dicte sobreseimiento a favor de su defendido.

El representante del Ministerio Público, al contestar traslado de los recursos de apelación, sostuvo que el encubrimiento cometido por Jackeline Verónica Smith constituye un delito conexo, según lo dispone el numeral 4 del artículo 2001 del Código Judicial, por lo que el Tribunal Superior de Justicia es el competente para conocer de este delito, según el tenor del artículo 2002 del Código Judicial.

En cuanto a las alegaciones de la defensa de Sanguillén, el funcionario de instrucción advierte que las declaraciones del imputado Gustavo Ortiz encuentran fundamento en el artículo 2112 del Código Judicial, en las cuales "claramente hace el señalamiento de que DANILO ALVARADO (a) "WIBIRI" y JOSÉ INÉS SANGUILLÉN (a) "MACHO" llegaron al lugar de los hechos en el momento de darse la pelea entre él y el occiso, y quienes además se quedaron allí con el occiso" (f.328), por lo que solicita la confirmación del auto apelado.

Para resolver las alzadas pasa la Sala a pronunciarse **sólo** sobre los puntos de la resolución a que se refieren los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 2428 del Código Judicial.

El cuaderno penal permite determinar que Heriberto Martínez Meléndez murió a consecuencia de varias heridas producidas con arma blanca, en la madrugada del 1 de octubre de 1989, siendo localizado su cuerpo en la carretera de Sabanitas, próximo a la población de Río Alejandro, Provincia de Colón. El examen médico forense reveló que el cuerpo de la víctima presentaba cuatro heridas punzo-cortantes (f.42) y que la muerte fue ocasionada por "A- Hemoperitoneo masivo; B- Laceración hepática y vasos renales; C- Herido por arma blanca y politraumatismos" (f.49).

En cuanto a la solicitud que hace la defensa técnica de Jacqueline Verónica Smith, es necesario advertir que esta corporación previamente se ha pronunciado sobre la controversia del tribunal competente para conocer del delito de encubrimiento. En este sentido la Corte ha señalado que "Siendo que el delito de encubrimiento es un delito autónomo, cuya pena oscila de uno a dos años de prisión (art. 363 C.P), su juzgamiento le corresponde a los Jueces Municipales, de acuerdo con lo establecido por el artículo 174, acápite A numeral 1 del Código Judicial" (Auto del 30 de abril de 1993, Juicio seguido a Heraclides Sucre y otros sindicados por el homicidio en perjuicio de Moisés Giroldi Vera)." En esta dirección, también ha manifestado la Sala que "resulta inusual que, por la vía de la conexidad, se eleve a una instancia superior y se someta a un juicio con intervención de jurados de conciencia a personas acusadas de hechos punibles que, por su naturaleza, deben ser decididos en otras instancias y por tribunales de derecho" (Auto del 23 de diciembre de 1991 dictado dentro del proceso seguido a Francisco Eliécer González Bonilla y otros, sindicados por el delito de homicidio en perjuicio de Hugo Spadafora Franco).

Luego de los anteriores pronunciamientos, los cuales contienen un análisis hermenéutico de las normas que se refieren a la competencia del delito de encubrimiento, los argumentos presentados por la defensa técnica de Jacqueline Verónica Smith no exigen mayor justificación jurídica para acceder a la pretensión de declinar la competencia de la causa a la jurisdicción municipal de Colón.

Para decidir la situación jurídica de José Inés Sanguillén, la Corte advierte que el tribunal de la causa ordenó su enjuiciamiento fundado en que "constan los cargos formulado bajo la gravedad del juramento por el imputado ORTIZ, quien los ubica en el teatro de los acontecimientos y les vincula con el hecho punible" (f.251). También es importante señalar que el imputado Gustavo Ortiz sostuvo que "yo tenía mi arma blanca encima (cuchilla) y la saqué para defenderme lo que si no recuerdo es qué momento lo herí pero en medio de la pelea me vi lleno de sangre...casi al instante se presentaron al lugar...donde yo pelie con el indio, los sujetos a quienes conozco por el nombre de DANILO ALVARADO, conocido con el apodo de "WIBIRI" y JOSÉ SANGUILLÉN, conocido como MACHO, ellos llegaron, Wibiri sujeto al indio en el suelo y Macho recogió el cuchillo que se me había caído en la pelea del suelo ... les dije que me iba de allí y ellos se quedaron con el indio" (fs.77-78).

Un estudio detenido de las piezas obrantes en el cuaderno se aprecia que el tribunal a-quo fundamentó el encausamiento de José Inés Sanguillén con base en el testimonio exclusivo de Gustavo Ortiz. No obstante, observa la Corte que en diligencia de careo con Danilo Alvarado, Ortiz expresó que no se ratificaba de la declaración indagatoria, visible a fojas 74-80 del cuaderno, porque "en ningún momento yo he rendido declaración en contra de DANILO ALVARADO, ni del ciudadano JOSÉ SANGUILLÉN ... Esa declaración me la hicieron rendir a punta de golpes y maltratos" (f.143). Esta situación fáctica permite determinar que la declaración indagatoria en la cual Ortiz hace imputaciones en contra de Sanguillén pierde eficacia probatoria. Cabe señalar que a pesar que el imputado denunció agresiones físicas que viciaban su voluntad, el funcionario de instrucción no realizó las debidas diligencias orientadas a la comprobación de esa denuncia y para establecer el valor real de lo declarado por Ortiz.

También resulta de relevante importancia que José Félix Bene Barrera informó que a su casa se apersonó imputado Ortiz (a) Cabeza, quien "me dijo que había tenido una pelea con una persona, Cabeza portaba un puñal en su mano" (f.129). Este relato no coincide con lo manifestado por el indagado Ortiz el cual a fojas 77 del cuaderno advirtió que "Macho recogió el cuchillo que se me había caído en la pelea del suelo".

Las anteriores consideraciones permiten determinar que si bien se ha comprobado el hecho punible, no existen elementos probatorios que vinculen debidamente al imputado Sanguillén en el Homicidio de Heriberto Martínez, aunado a que por mandato del artículo 905 del Código Judicial un sólo testimonio no hace plena prueba, pero sí gran presunción según las condiciones del declarante, situación que no es la prevista en el presente caso, por lo que es pertinente que se declare un sobreseimiento provisional con fundamento en el artículo 2211 numeral 2 del Código Judicial.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto del 17 de septiembre de 1991, en el sentido de SOBRESEER PROVISIONALMENTE José Inés Sanguillén; DECLINA la causa penal de Jacqueline Verónica Smith Brown por el delito de encubrimiento al juzgado municipal en turno, del Distrito de Colón y lo CONFIRMA en todo lo demás.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO. JUICIO SEGUIDO CONTRA EVIDELIO GONZÁLEZ DE GRACIA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RAFAEL DE JESÚS GUEVARA PINZÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial abrió causa criminal contra Evidelio González De Gracia mediante auto de 9 de febrero de 1982, "como infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título XII, Libro Segundo del Código Penal, o sea por el delito de homicidio, en perjuicio de RAFAEL DE JESÚS GUEVARA PINZÓN" (fs.246-247). Contra esta decisión jurisdiccional anunciaron recurso de apelación tanto el representante del Ministerio Público como la defensa técnica.

El Fiscal Primero Superior interviniente sostiene que su antecesor debió solicitar la declinatoria de competencia, "ya que estamos en presencia de un homicidio culposo" (f.285), por cuanto "no hubo intención directa en causar perjuicio al occiso", ya que el hecho se inicia motivado por el estado de euforia ocasionado por el consumo de alcohol"; que si bien la embriaguez no exime de culpabilidad y de responsabilidad, lo cierto es que "las mentes excitadas producto del consumo de licor, enardecen los ánimos y en consecuencia, pueden acarrear trágicos finales", como el presente caso. Indica que el ofendido antes de su deceso tuvo la oportunidad de rendir declaración jurada, y que en la misma "jamás hizo acusación directa alguna contra EVIDELIO DE GRACIA, razón por la cual se deduce ampliamente, que dicha situación fuera producto de la embriaguez en que ambos se encontraban" (f.287), por lo que concluye solicitando la declinatoria de la competencia a la esfera circuital.

Por su parte, la defensa técnica del encausado fundamenta su apelación en que, a su juicio, no esta comprobado que hubiere existido una riña convenida entre Evidelio González y el hoy difunto Rafael Guevara Pinzón, puesto que las pruebas revelan que todo se debió a un lamentable hecho fortuito, conforme lo dejó consignado el Médico Forense en su informe de folio 219. Considera el apelante que, si no hubo una relación directa entre el traumatismo sufrido por el occiso y una acción dolosa de Evidelio González De Gracia, se debe revocar el auto de llamamiento a juicio y en su lugar proferir un sobreseimiento definitivo con base en el artículo 2210 del Código Judicial.

Según consta en autos, Rafael Guevara fue conducido el 18 de marzo de 1980 al Hospital Santo Tomás, procedente de Nuevo Caimitillo de Chilibre, para que lo atendieran

de lesiones que sufrió "al ser agredido por un vecino" (f.3), falleciendo el 4 de mayo de 1980 (f.48).

Según el Protocolo de Necropsia, se trataba de un "varón joven, adelgazado que presenta evidencias de trauma que le produjo lesión medular (C3,C4) con broncoaspiración que fue la causa de la muerte y es complicación usual con estos traumatismo" (f.59). Entre los hallazgos anatomo-patológicos significativos se destaca "5- Luxación de vértebras C3, C4, con lesión medular" (f.58), para concluir que la muerte se originó en la Broncoaspiración y Trauma Cervical (f.59).

El Dr. Enrique Rodríguez Alvarez, Neurocirujano en el Hospital Santo Tomás, explicó que "Este paciente tuvo una luxación anterior de C3 sobre C4, o sea, la vértebra cervical 3 sobre la vértebra cervical 4, anterior significa que la vértebra 3 se luxó hacia adelante de la vértebra 4, lo cual es compatible con un golpe recibido en la parte posterior del cuello ... posteriormente se intervino quirúrgicamente practicándosele una fusión, que es tratar de pegar la vértebra C3 con la C4 por medio de un injerto de huesos. Posteriormente el paciente falleció a causa de complicaciones respiratorias (broncoaspiración alimentaria y bronconeumonía consecuente)" (f.164).

El acervo probatorio de autos permite establecer que la lesión sufrida por el occiso, que lo mantuvo convaleciente en el Hospital Santo Tomas desde el 18 de marzo hasta el 4 de mayo de 1980, fue producto de un golpe que recibió cuando sostuvo una riña con el encausado. Si bien éste último niega que ocurriera tal riña, alegando que cuando Guevara quiso pasar "por donde yo estaba, tropezó conmigo perdiendo el equilibrio, ya que estaba bastante tomado y cayó al suelo, dándose un fuerte golpe en la cabeza" (f.33), pero que no lo llegó a tocarlo. Lo cierto es que el occiso antes de morir declaró que González De Gracia "me invitó a pelear ... yo le dije que estaba bien debido a que yo me encontraba en estado de embriaguez y comenzamos pues a luchar, y en lo que luchábamos, él me dio un golpe en el cuello, el cual e "sic" inmediatamente me dejó inconsciente ... o sea que al recibir este golpe en la nuca yo caí al suelo y de allí no me pude parar más hasta la fecha ... en ningún momento yo caí antes de recibir dicho golpe al suelo" (fs.28-29). Esta afirmación fue corroborada por el testigo Salomón Alaín Muñoz quien, refiriéndose a González y Guevara, afirmó que "ellos se agarraron a pelear y se agarraron a la lucha y se cayeron, sobre un tronco que había allí, y como Guevara, iba debajo yo creo que se dio con el tronco en la nuca (f.39).

La prueba testimonial examinada sustenta lo expuesto en el auto recurrido, en el sentido de que la conducta del sujeto activo encuentra adecuación típica en lo que el Código Penal vigente a la época del hecho denominaba "**homicidio preterintencional**, ya que Guevara recibió golpe de su contrincante Evidelio González De Gracia en una riña convenida y a consecuencia de su caída sufrió una lesión que resultó mortal" (f.246).

Siendo que el homicidio preterintencional contemplado en el Código Penal de 1922 (a.315) corresponde a la conducta que el Código Penal vigente denomina lesiones agravadas por resultado muerte (a.138), resulta necesario establecer, en atención al principio de favorabilidad, cuál de las dos normas debe ser aplicada, con evidente consecuencia en cuanto al establecimiento del concepto de prescripción de la acción penal, que a tenor del artículo 100 del Código Penal puede ser declarada de oficio.

El artículo 315 derogado establecía que "El que por actos destinados a causar una lesión personal, ocasione la muerte de alguien, incurrirá en la pena de reclusión por **uno a seis años** en el caso del artículo 311; de cinco a diez años en el caso del artículo 312, y de diez a quince años en el caso del artículo 313", en tanto que el artículo 138 del Código Penal vigente dispone que "Si las lesiones descritas en los artículos anteriores **causan la muerte** de la persona, la sanción será de **tres a cinco años** de prisión". La confrontación de ambas penas deja ver claramente que la norma más favorable resulta ser el artículo 138 del Código Penal vigente.

Se encuentra demostrado que el delito de lesiones agravadas por resultado de muerte fue consumado el día 1 de marzo de 1980, por lo que desde ese momento comenzó a correr el término de la prescripción de la acción penal. Ese término se vio interrumpido por el auto de proceder, dictado el 9 de febrero de 1982 (a.95), comenzando a correr nuevamente la prescripción interrumpida a partir de esa misma fecha. Desde la fecha en que se dictó el auto de proceder han transcurrido más de los 6 años que establece el artículo 93, numeral 3, del Código Penal para que se tenga por cumplida la prescripción considerada, no pudiendo exceder ese término por mandato del artículo 95 ibídem, de donde resulta el deber de formular la declaración correspondiente.

Por las anteriores consideraciones LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PRESCRITA LA ACCION PENAL en la causa seguida contra Evidelio González De Gracia por el delito de lesiones agravadas por resultado muerte, cometido en perjuicio de Rafael De Jesús Guevara Pinzón.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA EDGARDO ANTONIO ESCUDERO GALLARDO, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO EN PERJUICIO DE LA ESCUELA HIPÓLITO PÉREZ TELLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

Dentro del término de lista que, de conformidad al artículo 2443 del Código judicial, debe otorgarse para que las partes tengan conocimiento del ingreso al tribunal de casación del recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de segunda instancia dictada en el juicio penal seguido contra **EDGARDO ANTONIO ESCUDERO GALLARDO** (a) "Mano de Seda", por el delito de hurto en perjuicio de la Escuela Hipólito Pérez Tello, el abogado recurrente, quien es el defensor de oficio del Circuito Judicial de Herrera, presentó por Secretaría un escrito que es del siguiente tenor:

> "Yo, EDWIN RAÚL HERRERA CEDEÑO, Defensor de Oficio del Circuito Judicial de Herrera y del encartado EDGARDO ANTONIO ESCUDERO GALLARDO, en las sumarias que cursan ante ustedes, y siguiendo instrucciones del mismo, con mi acostumbrado respeto y consideración les manifiesto que desistimos del recurso de casación que interpusimos a su nombre, pues nos a manifestado que ese es su deseo.
>
> Chitré, 31 de mayo de 1993".

Como quiera que la ley permite el desistimiento en materia penal, por voluntad del procesado, y en el caso presente la defensa pública siguió las instrucciones de su defendido y se trata de un recurso extraordinario cuyo juicio completó los principios de contradicción y defensa indispensables para garantizar los derechos del procesado, procede aceptarlo.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado en este caso y dispone su devolución al Tribunal de origen.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA SERGIO CAMAÑO GONZÁLEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS, EN PERJUICIO DE LUIS ARISTIDES BERNAL GAITÁN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

Cumplidos los trámites procesales correspondientes, se encuentra pendiente de decisión recurso extraordinario de casación interpuesto por el licenciado **HUMBERTO JOSÉ CHANG** contra la sentencia de segunda instancia dictada el 28 de julio de 1989 por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que confirmó la sentencia de 7 de septiembre de 1988 del Juzgado Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Penal, mediante la cual se condenó a **SERGIO CAMAÑO GONZÁLEZ** a cumplir la pena de dos años de prisión, cien (100) días multa e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término.

La sentencia impugnada fue dictada dentro del proceso que se le seguía al prenombrado **CAMAÑO GONZÁLEZ** por el delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos, que se describe y sanciona en el artículo 280 del Código Penal.

Al formalizar el recurso de casación, el recurrente, en escrito visible a fojas 542-550, adujo tanto casación en la forma como en el fondo, admitiendo únicamente la Sala la casación en el fondo tal como consta a fojas 561 y 562 vuelta del expediente, lo que supone la imposibilidad de examinar los cargos de forma que se le formulan a la sentencia recurrida.

El recurrente invoca como causal única para fundamentar la casación en el fondo la prevista en la parte final del ordinal 1 del artículo 2434 del Código Judicial, es decir, infracción de la ley sustancial en concepto de indebida aplicación de ésta al caso juzgado.

Ahora bien, antes de proceder a emitir cualquier consideración de fondo, es necesario advertir que todo parece indicar que en este proceso la acción penal pudiera encontrarse prescrita. Veamos los argumentos que sustentan este parecer.

El negocio que nos ocupa acumula cuatro procesos penales que se inciaron en razón de diferentes denuncias suscritas por el señor LUIS BERNAL GAITAN, con el objeto de que investigaran los delitos de expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos, supuestamente cometidos por el señor SERGIO CAMAÑO al girar unos cheques a favor del denunciante y contra la cuenta N° 030-04-4-00-18069 del Banco Exterior, sucursal de Santiago.

El primer sumario se inició el 31 de mayo de 1985 (Fs. 1), con base en la denuncia que hizo el señor BERNAL para que se investigara al señor CAMAÑO por haber expedido los días 21 de octubre y 12 de noviembre de 1984 los cheques Nos. 86189 y 293397 por la suma de B/.5,000.00 y B/.1,996.00, respectivamente, sin que el girador contara con dinero disponible.

El segundo sumario se inició el 5 de agosto de 1985 (fs. 106) y tuvo como propósito investigar el supuesto delito cometido por SERGIO CAMAÑO al expedir el 12 y 28 de diciembre de 1984 los cheques Nos. 293395 y 293392 por la suma de B/399.00 y B/2169.00, respectivamente, sin que el girador contara con fondos disponibles.

El tercer sumario también se inició el 5 de agosto de 1985 (fs. 180), siendo su objeto investigar el supuesto delito cometido por el señor SERGIO CAMAÑO al expedir el 21 de enero de 1985 el cheque No. 296788 por la suma de B/3,000.00, sin que el girador

tuviere fondo. Estos tres sumarios fueron instruidos por el Fiscal Primero del Circuito de Veraguas.

El 9 de agosto de 1985, se inició el cuarto sumario (fs. 288), con el fin de investigar el supuesto delito cometido por SERGIO CAMAÑO al expedir el 21 de octubre y el 21 de noviembre de 1984 los cheques Nos. 86190 y 293398 por la suma de B/.4,039.00 y B/.1,807.00, respectivamente, sin que el girador tuviere fondo. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Segunda del Circuito de Veraguas.

Ahora bien, en cada uno de los sumarios antes mencionados se expidió auto de llamamiento a juicio contra el denunciado. Para una mejor ilustración de lo ocurrido, se pasará a señalar la fecha de expedición y de ejecutoria de cada auto de enjuiciamiento, siguiendo el mismo orden en que han sido enunciados anteriormente los sumarios instruidos:

En el primer sumario el juez de la causa dictó auto de proceder el 26 de agosto de 1985, mismo que fue confirmado el 6 de febrero de 1986. Esta resolución quedó ejecutoriada el 16 de febrero de 1986.

En el segundo sumario, el juez de la causa dictó auto de proceder el 31 de octubre de 1985 (fs. 135-136), el cual fue confirmado el 23 de abril de 1986 (fs. 151-156), quedando ejecutoriado el 30 de abril del mismo año.

En el tercer sumario, el juez de la causa dictó auto de proceder el 14 de julio de 1987 (fs. 268-269), y quedó ejecutoriado el 16 de julio del citado año.

En el cuarto sumario, el juez de la causa dictó auto de proceder el 4 de julio de 1986 (fs. 388), quedando ejecutoriado el 9 de agosto de ese año.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 95 del Código Penal, la prescripción de la acción penal "se interrumpe por el auto de enjuiciamiento". Ello significa, según se deduce del mismo precepto, que el término que se había computado desde la consumación del delito hasta la ejecutoria del auto de proceder, se borra y que el inicio del cómputo del tiempo para la prescripción así interrumpida, "corre de nuevo desde el día de la interrupción", pero el nuevo término "no puede prolongar el término de la acción penal por un tiempo que exceda de los plazos fijados en el artículo 93".

El delito que se le imputa al sindicado es el de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos (art. 280 del Código Penal), el cual aparece sancionado con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 100 días-multas.

Conforme al numeral 3 del artículo 93 ibidem, la acción penal prescribe "Cumplidos los 6 años después de la comisión del hecho punible, si la pena señalada en la ley es mayor de 6 meses y no excede de 6 años de prisión".

Al coordinar este último precepto con el artículo 95 del Código Penal, se advierte que no puede ser superior a seis años, el tiempo para que se produzca la prescripción de la acción penal que se vio interrumpida por la expedición de los autos de proceder dictados contra el imputado.

Ahora bien, es importante determinar cómo se debe computar en este proceso ese término, teniendo en cuenta que hubo una acumulación de procesos (fs. 281-283), la cual fue decretada con posterioridad a la dictación de los mencionados autos de proceder. ¿El término se computa independientemente, es decir, desde la expedición de cada auto de proceder?, o, por el contrario, se toma en cuenta el primer auto de proceder o el último?

Si se toma en cuenta la fecha en que cada auto de proceder quedó ejecutoriado, tenemos que la acción penal estaría prescrita en tres sumarios, no así en el sumario dentro del cual el auto de proceder se expidió el 14 de julio de 1987. Sin embargo, si se toma en cuenta la ejecutoria del primer auto de proceder, no queda la menor duda de que la acción penal estaría prescrita, pero si se toma en cuenta la fecha de ejecutoria del último auto de proceder ocurriría lo contrario.

La Sala estima que el problema debe resolverse mediante la aplicación armónica de los principios procesales y sustantivos del derecho penal.

La acumulación de procesos, de acciones o de pretensiones, como ha sido denominada por distintas corrientes doctrinales, supone, en materia penal, el agrupamiento de varios procesos en uno sólo, ya sea porque contra un mismo imputado se instruyen diversos sumarios por la comisión de un mismo o varios delitos, o porque en determinada causa existe conexidad (artículos 2001, 2002, 2003, 2291 y concordantes del Código Judicial).

Observa la Corte que en el presente negocio, el tribunal que conoció el proceso en segunda instancia decretó la acumulación de los cuatro sumarios mediante auto de 9 de octubre de 1987 (fs. 281-283). En ese sentido, todo parece indicar que tal acumulación obedeció al hecho de que se estimaba que los cuatro sumarios contenían la investigación de cuatro delitos autónomos de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondo. Ello queda evidenciado en la sentencia de primera y segunda instancia, pues para dosificar la pena se aplicaron las reglas del concurso real de delitos (artículo 64 del Código Penal).

Sin embargo, advierte esta Corporación de Justicia que si bien se justificaba la acumulación de los cuatro sumarios, tal necesidad obedecía al hecho de que se instruían cuatro sumarios **por un mismo delito** y no por varios delitos como erradamente se consideró.

En efecto, los cuatro sumarios que se instruyeron con fundamento en las cuatro denuncias, en realidad no reflejan la comisión de cuatro delitos de cheque sin fondo, sino que por el contrario, tales expedientes recogen la comisión de un sólo delito de esta naturaleza.

Ello es así porque la expedición de todos los cheques, hecha en diversas fechas, tuvo como propósito pagar una **deuda única**, lo cual evidencia que las distintas acciones de giro, tenían un sólo designio. Ello, unido al hecho cierto de que todos los cheques fueron presentados al Banco el mismo día, trae como consecuencia que estemos frente a un sólo delito de expedición de cheque sin fondo.

Si bien la fecha en que los cheques fueron presentados para su cobro, no juega en este negocio penal un papel trascendental para los efectos de determinar cuántos delitos se cometieron en realidad, pues para tales efectos basta conocer cuál era la intención con que los mismos fueron girados (pagar una deuda), lo cierto es que es de sumo interés dejar plasmado que la Corte Suprema de Justicia sigue el criterio doctrinal según el cual el delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos se consuma cuando el girado (el banco) rehúsa pagar el cheque por carecer la cuenta bancaria de fondos. Desde este punto de vista, debemos tener en cuenta que el delito objeto del presente proceso se consumó el día en que los cheques fueron presentados al banco para su cobro.

La Corte no sigue el criterio según el cual este delito se consuma en el instante en que se gira el cheque a sabiendas de que no existen fondos. Varias son las razones por las cuales no se sigue este sistema, todas las cuales llevan implícitamente el hecho cierto de que lo importante para que se configure el delito es que no se realice el pago, pues el cheque es un documento de pago, aun cuando la conducta delictiva haya sido tipificada como delito contra la fe pública. Veamos las razones.

En primer lugar, se presentan situaciones en que el girador expide un cheque y en esos momentos su cuenta no tiene fondo para pagarlo, no obstante, el cheque es pagado, pues cuando el beneficiario lo presenta al banco, en esos momentos existen fondos para cancelarlo.

En segundo lugar el criterio que asume la Corte es el que mejor responde a la política bancaria nacional, ya que a menudo ocurre que cuando el cheque es presentado, el girado no cuenta con dinero suficiente fondo para pagarlo, pero por aquella confianza que tiene el banco en el girador, muchas veces el cheque presentado se paga.

En estos casos, el pago se realiza y el beneficiario se siente satisfecho con el cobro del cheque. Si se siguiera el criterio según el cual el delito que nos ocupa se consuma en el instante en que se expide un cheque sin que haya provisión de fondos, se evidencia que sería casi remota la posibilidad de que la autoridad inicie alguna investigación, porque si el beneficiario con el cheque no recibe perjuicio, el agente de instrucción normalmente no podría tener acceso a la notitia criminis para poder iniciar un sumario. Por ello, razones de índole prácticas aconsejan adoptar la posición asumida por esta Corporación de Justicia. Además, esta es la postura que actualmente sigue la doctrina mayoritaria.

Pues bien, siendo que en el caso que nos ocupa existe un sólo hecho punible, el principio de favorabilidad sugiere que, para poder determinar si la acción penal se encuentra ejecutoriada a la fecha, es necesario que se tome en cuenta el día en que el primer auto de proceder quedó ejecutoriado.

En ese orden de ideas, no cabe la menor duda que en estos momentos la acción penal está prescrita, ya que si tenemos presente que el primer auto de proceder quedó ejecutoriado el 16 de febrero de 1986, a la fecha en que se dicta esta resolución ha transcurrido con creces el término de seis años a que alude el artículo 93, numeral 3 del Código Penal.

Es menester destacar que, si bien el recurrente no ha solicitado la declaratoria de prescripción de la acción penal, tal declaratoria puede realizarse de oficio, incluso por el tribunal de casación, a la luz del artículo 1982 del Código Judicial en concordancia con el artículo 100 del Código Penal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la sentencia de segunda instancia dictada el 28 de julio de 1989 por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, DECLARA PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL en este proceso.

Devuélvase y Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario-Sala Penal

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA CALISTRO SANTOS SANTANDER Y RUFINO BORDONES, SINDICADOS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL COMETIDO EN PERJUICIO DE JOHANA SANTANDER FLORES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

El Juzgado Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Penal, mediante sentencia de 27 de marzo de 1992 condenó a CALISTRO SANTOS SANTANDER y a RUFINO BORDONES a cumplir la pena de 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por 3 años, por haber sido encontrados responsables del delito de violación carnal cometido en perjuicio de JOHANA SANTANDER, hecho ocurrido el 29 de julio de 1991.

Esta sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 18 de enero de 1993. Contra esta resolución, el licenciado Félix Enrique Troya, abogado defensor de los procesados, interpuso recurso de casación en el fondo.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso, por resolución de 31 de mayo de 1993, que el recurrente corrigiera los errores formales de que adolecía el recurso impetrado, tal como lo autoriza el artículo 2444 del Código Judicial. Para tales propósitos otorgó un término de 5 días.

Consta en el proceso que el citado término ha vencido y que el recurrente ha corregido oportunamente su escrito, motivo por el cual es necesario analizar lo relativo a su admisibilidad.

Observa la Corte que en el recurso corregido cada causal está seguida de sus correspondientes motivos y de las disposiciones legales que se estiman infringidas. Sin embargo, en esta última sección (en la destinada a indicar las normas infringidas y el concepto en que lo han sido), el casacionista obvia señalar las normas de carácter sustantivos que han resultado violadas como consecuencia del error de hecho y de derecho que se le imputa al tribunal de segunda instancia a través de las dos causales de índole probatoria que consagra nuestra legislación.

Esta omisión repercute desfavorablemente en la pretensión del casacionista pues, siendo que el recurso de casación supone la infracción de normas sustantivas, si el interesado no señala los preceptos de esta naturaleza que a su juicio han sido violados, el recurso así formalizado peca de una estructura deficiente, a la que hace falta unos de los principales presupuestos. Ello excluye la posibilidad de que la Corte de Casación realice cualquier análisis de fondo.

En consecuencia,la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado FÉLIX ENRIQUE TROYA contra la sentencia de segunda instancia dictada el 18 de enero de 1993 por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso penal que se le siguió a CALISTRO SANTOS SANTANDER y RUFINO BORDONES.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA CRISTÓBAL COLON DESPAIGNE VALERO Y MARÍA EUGENIA LÓPEZ DE DESPAIGNE, SINDICADOS POR EL DELITO DE EXTORSIÓN EN PERJUICIO DE INVERSIONES TU VIVIENDA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

El abogado **JUAN DE LA CRUZ GARCÍA** anunció y formalizó en tiempo oportuno recurso extraordinario de casación en el fondo contra la sentencia de 26 de septiembre de 1989, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, por medio de la cual se reformó la sentencia dictada por el Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, en el proceso seguido a **MARÍA EUGENIA LÓPEZ DE DESPAIGNE** y **CRISTÓBAL COLON DESPAIGNE VALERO** por el delito de extorsión cometido en perjuicio de **ALVARO PEYNADO QUINTERO.**

Consta en autos (fs. 187 y siguientes) que el juzgador de primera instancia declaró penalmente responsable a los señores **DESPAIGNE VALERO** y **LÓPEZ DE DESPAIGNE** y que los condenó a la pena de 26 y 24 meses de prisión, respectivamente, por el delito de extorsión, sanción que fue modificada por el tribunal de segunda instancia, al añadir a la pena privativa de libertad antes mencionada, la pena de inhabilitación para ejercer cargos o empleos públicos y de elección popular por tres (3) años después de cumplida la pena principal.

Tras la admisión del recurso formalizado, se corrió traslado al Procurador General de la Nación, tal como aparece a fojas 259 y siguientes.

BREVE RELATO DE LOS HECHOS

De acuerdo a las constancias procesales, el señor ALVARO PEYNADO QUINTERO presentó el 31 de octubre de 1986 denuncia criminal para que se investigara la comisión del delito de extorsión, supuestamente cometido por los señores CRISTÓBAL COLON DESPAIGNE y MARÍA EUGENIA LÓPEZ DE DESPAIGNE.

En el proceso ha quedado acreditado que el denunciante y la señora MARÍA EUGENIA LÓPEZ DE DESPAIGNE eran socios, por partes iguales, de la sociedad denonimada "INVERSIONES TU VIVIENDA, S. A.", relación que a la postre resultó ser de hecho, pues la sociedad no aparece inscrita en el Registro Público, según da cuenta el informe y la certificación emanada de dicha institución gubernamental (fs. 85 y 86).

El denunciante asevera que el día 11 de septiembre de 1986, recibió a tempranas horas de la mañana una llamada de la señora DE DESPAIGNE, quien le informaba que en las oficinas donde funcionaba la sociedad se había cometido un robo (término que es utilizado para hacer referencia al delito de
hurto).

Señala el señor PEYNADO QUINTERO que inmediatamente se dirigió a las oficinas de la empresa, lugar donde lo estaban esperando los denunciados, y que al llegar, el señor CRISTÓBAL COLON DESPAIGNE cerró la puerta y le dijo lo siguiente: "NO BUSQUES AL CULPABLE, YO HE SIDO EL QUE SE HA LLEVADO TODO, Y ME LO LLEVE PORQUE QUIERO QUE ME DEVUELVA LAS APORTACIONES QUE HA HECHO MI MUJER EN AMBAS SOCIEDADES O MEJOR DICHO EN UNA SOCIEDAD QUE ES LAS INVERSIONES TU VIVIENDA S. A." (sic). Afirma que el señor DESPAIGNE sacó a relucir un machete y lo "golpeó dos veces de PLANO", produciéndole una cortada

en la cabeza y en la oreja, y que acto seguido dicho señor (DESPAIGNE) le manifestó que tenía que firmar dos cheques o lo mataba, por lo que no le quedó otra opción de acceder a lo pedido.

EL RECURSO DE CASACIÓN Y SUS CAUSALES

El recurrente esgrime como causal de casación el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustantiva. Esta causal aparece prevista en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, y se encuentra fundamentada en siete motivos, los cuales se pasan a analizar por separado, tal como lo prescribe el artículo 2450 del Código Judicial. Sin embargo, por razones de conveniencia analizaremos en conjunto los dos primeros motivos:

> "PRIMERO: El Segundo Tribunal Superior manifestó a fs. 225 y 226 que el dolo específico en este delito de extorsión surge de las pruebas testimoniales y documentales. Sin embargo el Juzgado de segunda instancia está poniendo en boca de los testigos algo que ninguno ha dicho, pues los testigos, el (sic) mismo denunciante, Bolívar Bethancourt (f. 65, Romualdo Martínez (f. 63), Roberto Paz, (f. 68), José Osvaldo Murillo (fs. 69), María Erney Galviz (f. 70), José Omar Quier Guevara (f. 84), Daniel Ballesteros (f.87) Juan Luis Rodríguez Barría (f.88), Mario Díaz Castro (f.89) ninguno manifiesta que estuvo presente en las oficinas de la compañía sino en sus puestos de trabajo de construcción; tampoco manifestaron que les consta la extorsión que denunció el señor Alvaro Peynado, y ni siquiera que vieron cuando se produjo la lesión. En consecuencia el Segundo Tribunal Superior ha incurrido en error de hecho sobre la existencia de la prueba, al dar por sentado un cosa que no existió ni está probada.
>
> SEGUNDO: El segundo Tribunal Superior de Justicia, pese reconocer que el examen Médico Legal practicado reveló que el denunciante "no presenta evidencia de trauma" (f. 72) afirmó a fs. 222 que mi representado golpeó al Sr. Peynado con machete. Sin embargo, aparte de no acreditarse el cuerpo del delito, ni las lesiones, ninguno de los ocho testigos cuyas deposiciones corren de fs. 63 a 89, manifestó que presentó el hecho de las lesiones que dice el denunciante le infirió con un machete mi poderdante. Por tanto, al dar por existente un hecho sin que existiera y sin que estuviera acreditado el Segundo Tribunal Superior incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba".

Al analizar los cargos que se formulan a través de estos motivos y confrontarlos con los argumentos vertidos por el tribunal ad-quem, observa la Corte que es cierto que dicho tribunal estimó que de las versiones de algunos de los testigos que menciona el recurrente se deduce que hubo intimidación o amenazas graves por parte de los denunciados para que el señor PEYNADO firmase los cheques, aun cuando pericialmente no se acreditó la lesión que sufrió el sujeto pasivo del delito.

Sin embargo, es conveniente señalar que para llegar a tal conclusión, el ad-quem se apoyó en la opinión del Fiscal Superior, según la cual, el hecho de que la pericia no haya dado resultados positivos, ello se debe a que tal diligencia se practicó cuando habían transcurrido más de dos meses del día en que se suscitaron los acontecimientos.

La Corte considera correcto el razonamiento que hizo el tribunal de segundo grado por cuanto que, tanto la víctima como varios de los testigos aportados por ésta describieron las lesiones como leves. Si bien estas personas no poseen conocimientos médicos, lo cierto es que el sumario cuenta con otros medios probatorios que conducen a la conclusión de que efectivamente el día 11 de septiembre de 1986 hubo un incidente entre el denunciante y los denunciados, del cual el primero salió con ciertas lesiones en la cabeza y en un área cercana a la oreja izquierda.

Así, el mismo CRISTÓBAL COLON DESPAIGNE no descarta la ocurrencia de este incidente, pues en su declaración indagatoria manifiesta que tuvo que defenderse de las ofensas que les infirió el denunciante. Si bien a juicio de la Corte este argumento no prueba la coartada que el imputado trató de corroborar con los testimonios de los señores Goodrich y , quienes aseveran que lo que hubo el día de los hechos fue un intercambio de golpes entre PEYNADO y DESPAIGNE, lo cierto es que tal versión permite concluir que efectivamente el denunciante fue golpeado por DESPAIGNE y que como consecuencia de esa acción, el señor PEYNADO QUINTERO se vio en la necesidad de girar dos cheques, cuyo total asciende a la suma de B/.61,750.00, en favor de la señora MARÍA EUGENIA DE DESPAIGNE.

Desde este punto de vista, la Sala considera que es correcta la valoración de las pruebas testimoniales y documentales hecha por el Segundo Tribunal y, en consecuencia, pierden consistencia los cargos formulados en los dos motivos analizados, así como el cargo que se formula en el cuarto motivo, por extensión.

Ahora bien, como quiera que los motivos quinto, sexto y séptimo guardan mucha relación entre sí, la Corte procederá a analizarlos en conjunto. Cabe destacar que la Sala no entra analizar el tercer motivo, toda vez que el mismo no formula un cargo que tenga la virtud de alterar el valor de los razonamientos hechos por el tribunal de segunda instancia.

> "QUINTO: El Segundo Tribunal Superior afirmó a fs. 225 que mis representados procuraron un lucro indebido para sí, al tomar una disposición patrimonial en perjuicio del señor Alvaro Peynado. Sin embargo, no consta perjuicio económico alguno sufrido por el señor Peynado, ni por la sociedad ya que los cheques girados corresponden a la participación de mis representados como socios. Por tanto el Segundo Tribunal Superior incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba al dar por probado un perjuicio que no consta ni existió.
>
> SEXTO: A pesar de que a fs. 36 sí consta un documento de acuerdo de Devolución Participación en las cuales las partes declararon que su

> celebración se hace "por voluntad libre y espontánea sin coacción de ninguna índole", el cual fue suscrito y presentado al proceso por el mismo denunciante, y a pesar también que a fs. 146 y 147 consta un documento de Compromiso, en el cual Inversiones Tu Vivienda, S. A. y Alvaro Peynado Quintero "declaran que no han recibido perjuicio alguno por cualquier tipo de acción que Cristóbal Colón Despaigne y María Eugenia López de Despaigne hayan efectuado", el Segundo Tribunal Superior dejó de considerar estas pruebas legales incurriendo en error de hecho sobre la existencia de la prueba porque deliveradamente se abstuvo de tomar en cuenta estos documentos que demuestran la ausencia de perjuicio en el demandante.
>
> SÉPTIMO: Ese error probatorio, de hecho, en que incurrió el Segundo Tribunal de Justicia implicó infracción de la ley Sustantiva Penal, toda vez que por culpa de dicho error el Juzgado de Segunda instancia aplicó indebidamente una norma sustantiva para condenar a mis representados y confirmó la sentencia de primera instancia." (sic)

El análisis de estos tres cargos conduce a la comprobación de la causal invocada y, como consecuencia, a la absolución de los procesados.

En efecto, el tribunal ad quem no valoró el documento que reposa a fojas 145 y 146 que recoge una declaración firmada, entre otros, por ALVARO PEYNADO QUINTERO con posterioridad al inicio de este proceso y que consiste en que ni él ni INVERSIONES TU VIVIENDA, S. A. recibieron perjuicio por las acciones ejecutadas por CRISTÓBAL COLON DESPAIGNE Y MARÍA EUGENIA LÓPEZ DE DESPAIGNE.

Este es un error de hecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley penal sustancial, porque al no observar el tribunal esta prueba, aplicó una norma penal indebidamente.

El artículo 187 del Código Penal establece que comete delito de extorsión quien, para procurar un lucro indebido para sí o para terceros, obligue a otro, mediante intimidación o amenazas graves, a tomar una disposición patrimonial **perjudicial** para sí o para un tercero.

Es obvio que al no contar el proceso con elemento probatorio alguno que demuestre perjuicio patrimonial sufrido por ALVARO PEYNADO o por INVERSIONES TU VIVIENDA, S. A., la inobservancia del documento visible a fojas 145-146 por parte del tribunal de segunda instancia produce un error de juicio (de hecho en la apreciación de la prueba) que conduce a una indebida aplicación del artículo 187 del Código Penal pues, de acuerdo a esta norma, es de fundamental importancia que las acciones intimidativas generen un perjuicio en el patrimonio de la persona intimidada o de un tercero.

Conforme a la doctrina más autorizada, la causal denominada error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba se produce en uno de los siguientes tres supuestos: cuando el tribunal toma en cuenta una prueba que no aparece en autos, cuando no toma en cuenta una que aparece (que fue lo que ocurrió en este negocio) y cuando distorciona un medio probatorio haciéndole decir más o menos de lo que realmente dice, sin que esa distorsión provenga de un error de derecho cometido al valorar jurídicamente el medio probatorio. A lo anterior hay que añadirle que el error de hecho debe ser trascendente, es decir, esencial, de manera tal que influya en lo dispositivo del fallo.

En otro orden de cosas y con el objeto de cumplir con el objetivo de uniformar la jurisprudencia, la Corte considera necesario advertir que en este proceso penal también se hubiera podido atacar la sentencia de segundo grado, mediante la invocación de la causal conocida como indebida aplicación de la ley sustancial, que se produce cuando una disposición clara ha sido aplicada a un supuesto de hecho distinto del supuesto de hecho que consagra el tipo.

En efecto, uno de los elementos constitutivos del delito de extorsión viene establecido por la exigencia de que la persona que ejerza la acción intimidativa persiga "un lucro indebido" con su actuar, es decir, un provecho ilícito.

En el caso que nos ocupa, la acción de los esposos DESPAIGNE no procuraba un "lucro indebido", porque simple y sencillamente el dinero que estas personas reclamaban correspondía a la suma representada por las acciones o participaciones que la señora DE DESPAIGNE tenía en la sociedad de hecho. Ello significa que sus pretensiones no estaban amparadas en la obtención de un lucro indebido o de un provecho ilícito.

Pero si lo expresado anteriormente permite que se descarte la comisión del delito de extorsión, conviene manifestar que la forma en que los denunciados procedieron no era la más correcta. Y esto es tan cierto y reprochable, que conducta de los procesados se adecua al delito denominado por la doctrina como delito contra la autonomía personal, que tipifica y sanciona el artículo 151 del Código Penal. Según este precepto comete dicho delito, "El que mediante violencia o amenaza obligue a otro a tolerar, hacer u omitir alguna cosa..." (la subraya es de la Sala).

Sin embargo, dada la característica de nuestro ordenamiento jurídico, este último delito no podría ser sancionado en esta oportunidad (por carecer la Corte de competencia funcional) ni en otra (porque a tenor de lo establecido por el artículo 1969 del Código Judicial "Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho aunque se modifique su calificación o se afirmen nuevas circunstancias" (la subraya es de la Corte).

En estas circunstancias, y en atención a todo lo expuesto anteriormente, no le queda otra opción a la Sala que casar la sentencia recurrida y, en consecuencia, absolver a los procesados.

Por ello, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 26 de septiembre de 1989 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y ABSUELVE, de los cargos que por el delito de extorsión fueron enjuiciados, a MARÍA LÓPEZ DE DESPAIGNE, mujer, colombiana, casada, con residencia en San Francisco, calle 72, casa N° 34; y a CRISTÓBAL COLON DESPAIGNE VALERO, varón, panameño, casado, comerciante, con cédula de identidad N°8-132-

596, nacido el 31 de julio de 1947, con residencia en San Francisco, calle 72, casa N° 34 San Francisco.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA GUILLERMO JOSÉ WONG GUIZADO, SINDICADO POR EL DELITO EN CONTRA DEL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE ALBERTO BOLÍVAR CONTE. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Atendiendo las observaciones que le fueran formuladas sobre defectos formales en que incurriera, el licenciado Jacinto A. Cárdenas M. ha presentado un nuevo libelo que corrige el recurso de casación interpuesto contra sentencia de 17 de noviembre de 1992, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirma la proferida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual se condenó a Guillermo Wong Guizado a la pena de 50 meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, como responsable del delito de Hurto agravado cometido en perjuicio de Alberto Bolívar Conte Magdaleno.

Aún cuando en el nuevo libelo el recurrente omite enumerar los motivos, de su lectura se colige que es uno sólo, por lo que se tiene por bien presentado. Corresponde entonces decidir sobre la admisibilidad de esta iniciativa procesal, a lo que se procede.

El recurso ha sido interpuesto contra sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de un proceso por delito de hurto agravado que tipifica el artículo 184, numeral 1, del Código Penal, cuya pena de prisión es superior a dos años. Estas comprobaciones dan lugar a tener el recurso como interpuesto de conformidad con lo establecido por el artículo 2434 del Código Judicial.

En cuanto al examen correspondiente a los requisitos que enumera el artículo 2443 del Código Judicial, se advierte que la resolución es de las que admite el recurso, el cual fue interpuesto en tiempo oportuno; que en su formalización se exponen la historia concisa del caso, la causal, el motivo, y las disposiciones legales infringidas, siendo aducida la causal de "error de derecho, al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del imputado, en los hechos que la sentencia dé por probados", contemplada en el artículo 2434, numeral 11, del Código Judicial, por lo que resulta procedente su admisibilidad.

En razón de lo expuesto LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto dentro del proceso que se le sigue a Guillermo Wong Guizado, por la comisión del delito de hurto agravado en perjuicio de Alberto Bolívar Conte y DISPONE correrle en traslado al Procurador General de la Nación por el término de Ley.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN. RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA FELIPE CAMARGO AMAYA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE CARLOS FERNANDO ALFARO HART. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El abogado Carlos E. Carrillo Gomila formalizó recurso de casación, en el fondo y en la forma, contra sentencia de 30 de noviembre de 1992 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, por la cual se confirma sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condena a Felipe Camargo Amaya a la pena de cuarenta meses de prisión (3 años, 4 meses), como reo de delito contra la libertad individual cometido en perjuicio de Carlos Fernando Alfaro Hart (fs.497-502).

Se comprueba que el recurrente ha subsanado los defectos que oportunamente le fueran advertidos, por lo que corresponde ahora formular un pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso.

El recurso ha sido interpuesto contra sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de un proceso seguido por delito contra la libertad individual tipificado en el artículo 160 del Código Penal, con pena de prisión superior a dos años, comprobaciones estas que viabilizan la interposición del recurso de conformidad con el artículo 2434 del Código Judicial.

Por lo que hace a los requisitos que enumera el artículo 2443 del Código Judicial, se constata que la resolución atacada es de las que permite el recurso, el cual fue

interpuesto en tiempo oportuno. En el escrito de formalización, debidamente corregido (fs.512-549 y 560-597), se exponen con claridad la historia concisa del caso, las causales, los motivos y las disposiciones legales infringidas. En lo atinente a las causales, se anuncian las siguientes: 1) "Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en concepto de violación directa"; 2) "Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial"; 3) "Cuando se sancione un delito, no obstante existir alguna circunstancia eximente de responsabilidad"; 4) "Cuando la sanción impuesta no corresponda a la calificación aceptada respecto del delito, o a la responsabilidad del imputado o de las circunstancias que modifiquen su responsabilidad" y 5) "Falta de competencia del Tribunal", consagradas las cuatro primeras en el artículo 2434, numerales 1, 5 y 12 y la quinta en el 2437, numeral 1, del Código Judicial. Las anteriores comprobaciones dan lugar a la viabilidad de la alzada.

En razón de lo expuesto LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto dentro del proceso que se le sigue a Felipe Camargo Amaya, por delito contra la libertad individual, cometido en perjuicio de Carlos Fernando Alfaro Hart y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación por el término de ley.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA DILCIA BABB, SINDICADA POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 2 de febrero de 1993, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de casación formalizado por la defensa de **DILCIA BABB**, sindicada de delito contra la salud pública que consagra el Capítulo V, Título VII del Libro Segundo del Código Penal.

Verificada la audiencia oral que establece el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por la Sala.

ANTECEDENTES

De las constancias procesales se observa que el proceso se inicia por razón de allanamiento practicado al cuarto número 1 de la casa 2233, ubicada en la Calle Once de Parque Lefevre, el día 1° de abril de 1991.

En dicho allanamiento fue encontrada una cierta cantidad de sustancia que luego se comprobó que era CRACK (COCAÍNA) en cantidad de 21.6 gramos.

Al momento del allanamiento se encontraba en el lugar la señora DILCIA BABB quien inicialmente negó toda vinculación con la sustancia encontrada en el cuarto, pero luego en el acto de la audiencia oral de la causa se declaró responsable del hecho y arrepentida del mismo.

Al resolver la causa, el Juez Cuarto del Circuito del Primer Circuito de Panamá declaró responsable a la procesada por el delito de posesión ilícita de drogas y la condenó a cumplir la pena de seis meses de prisión, cincuenta días-multa e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y se ordenó el comiso de los valores hallados en el apartamento allanado.

Al resolver la impugnación contra la decisión de primera instancia, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial modificó la sentencia recurrida y fijó la pena de prisión en cinco años, por el delito de tráfico de drogas, eliminó la pena pecuniaria, aumentó la pena de inhabilitación y la confirmó en todo lo demás.

La sentencia de segunda instancia, de 16 de junio de 1992, fue objetada por la defensa de la procesada quien en tiempo oportuno anunció y formalizó el recurso de casación que motiva esta actuación.

CAUSALES INVOCADAS Y MOTIVOS

La recurrente expone cuatro causales para fundamentar el recurso de casación que promovió, indicando brevemente los motivos que fundamentan cada causa:

Primera Causal

Se aduce el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

El motivo que sustenta la causal invocada radica en el hecho de que el Segundo Tribunal Superior deduce de la carta visible a fs. 62, la intención de "vender" drogas por la procesada, al tiempo que ignoró la confesión y arrepentimiento que se hallan contenidos en la misma carta.

Segunda Causal

Alega la recurrente el haber incurrido la resolución impugnada en error de derecho al calificar el delito si la calificación ha debido influir en el tipo o en la extensión de la pena aplicable.

Con motivo para la causal aducida, se menciona que el Tribunal Superior se conformó con la manifestación de la procesada de que la droga era para su venta, sin haber acreditado dicho hecho por otros elementos probatorios.

Tercera Causal

Se alega que el fallo recurrido incurre en una interpretación errada de la ley sustancial al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes o atenuante de responsabilidad criminal.

Para fundamentar la causal, advierte como motivo de la misma el no haber tomado en cuenta las atenuantes que la ley consagra en favor de la procesada, tales como la confesión y el arrepentimiento, los cuales según la recurrente fueron oportunos.

Cuarta Causal

La casacionista señala también la causal que surge cuando la sanción impuesta no corresponde a la calificación aceptada respecto del delito, o a la responsabilidad del imputado o de las circunstancias que modifiquen su responsabilidad.

Se menciona como motivo que se ha impuesto una pena de cinco años de prisión que no corresponde a la calificación aceptada respecto del delito, ya que se le condenó por tráfico ilícito de drogas y la calificación es de posesión; por otra parte, a la pena impuesta no se le aplicó ninguna atenuante de responsabilidad, como la confesión y el arrepentimiento.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Según la recurrente, la sentencia de segunda instancia infringe los artículos 770, 774, 781 y 882 del Código Judicial y los artículos 66, numerales 4 y 5 y 260 del Código Penal.

Se considera que el artículo 770, 774, 781 y 882 del Código Judicial fueron infringidos por interpretación errónea el primero y por indebida aplicación los restantes.

Respecto del Código Penal, se alega la interpretación errónea de los numerales 4 y 5 del artículo 66 y la indebida aplicación del artículo 260, ya que no fue aplicado en la forma que debió hacerse.

CONCEPTO DEL PROCURADOR

En opinión del Procurador General de la Nación, la sentencia impugnada no debe ser casada por ninguna de las cuatro causales invocadas por la recurrente.

El representante del Ministerio Público considera que la primera causal invocada no existe en nuestro ordenamiento jurídico, pues se invoca como una sola dos causales distintas y excluyentes entre sí.

A juicio del Procurador "la no aplicación de las circunstancias atenuantes que modifican la responsabilidad penal, tal como sostiene la parte recurrente, no puede fundamentar una causal de índole probatoria, como la que nos ocupa, ya que mediante esta causal, se impugna una incorrecta apreciación sobre la existencia de la prueba" (fs. 152).

Más adelante el Procurador señala que la segunda causal invocada no "tiene relevancia para demostrar el supuesto cargo de injuridicidad que se le endilga a la resolución atacada porque no hay asidero valedero para enmarcar la conducta de la justiciable en el primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, puesto que la droga incautada de 21.6 gramos no puede ser considerada como posesión; amén de que se encontró dinero producto de las actividades ilícitas de la acusada y ella misma acepta dedicarse a la venta o tráfico de drogas" (fs. 152).

Por otra parte, el Procurador descarta la tercera causal incoada en el recurso, ya que considera que "el tribunal de la segunda instancia, acertadamente consideró que no había lugar a conceder disminución o aumento de la pena, a falta de las circunstancias modificadoras de las responsabilidad penal" (fs. 153).

Respecto de la cuarta y última causal invocada por la recurrente el Procurador considera que la defensora "no ha determinado con precisión, cual de las tres circunstancias contempladas aquí, sustentan su inconformidad con la resolución recurrida", ya que -agrega-la pena impuesta está "correctamente aplicada de acuerdo a la norma tipificadora de la conducta delictiva, probada en este proceso, es decir, el artículo 260, párrafo segundo del Código Penal" (fs. 155-156).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

A juicio de la Sala, le asiste razón al Procurador cuando objeta la primera causal invocada en el recurso.

La no aplicación de atenuantes no es motivo para fundar la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba o de derecho en cuanto a su apreciación.

La causal de hecho dice relación con una prueba que existe en el proceso y que no ha sido tomada en cuenta por el tribunal de segunda instancia, o en sentido contrario que el Tribunal considere una prueba inexistente en el proceso, por lo que mal puede fundamentarse tal causal, de exclusiva índole probatoria, en la no aplicación de algunas circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.

La motivación de la causal efectuada por la recurrente, sin lugar a dudas, es deficiente. En todo caso debió aludir a la existencia de una prueba que no fue valorada por el Tribunal Superior o que fue apreciada mal por dicho tribunal.

La segunda causal alegada por la defensora de la procesada, sin embargo, pone de manifiesto la existencia de un error de derecho en la calificación del delito, que influye o en el tipo aplicable o en la extensión de la pena imponible.

Se trata de errada calificación de la ley aplicable al caso, que da margen a la utilización de una norma que no procede cuando en realidad debió aplicarse otra.

La defensa de la procesada destaca que en el proceso no hay elementos que vinculen a su defendida con la venta de drogas, por lo que la imposición de pena por un delito de tráfico ilícito de drogas es improcedente.

Sobre este aspecto, es de lamentar que la recurrente no profundice en mayores consideraciones, ya que se trata de un aspecto de suma importancia a la hora de decidir la viabilidad del recurso de casación.

En esta causal se pone en evidencia que se trata de una errada calificación de la norma aplicable por el Tribunal Superior, que estimó que la declaración de la procesada contenida en la carta dirigida al tribunal y que aparece visible a fs. 62 es suficiente para acreditar que se dedicaba a la venta de drogas.

Al decir la procesada que hizo "muy mal al tomar esa medida de la venta de droga" se pone en evidencia el ánimo o deseo de realizar un hecho punible reprobable y reprochable, pero que sólo denota una intención en la persona, que por esa simple afirmación no puede ser reputada como confesión del delito de tráfico de drogas.

Yerra el Segundo Tribunal al apreciar en su sentencia de 16 de junio de 1992, visible a fs. 94 y siguientes, el documento que aparece a fs. 62 del proceso, ya que el mismo no puede ser tenido como una "confesión" de la procesada.

Confesión, en estricto sentido, es la aceptación de la responsabilidad que el sindicado o procesado efectúa ante el agente del Ministerio Público o el tribunal de la causa, según que se trate de un sumario o un plenario, por lo que el documento que aparece a fs. 62 no tiene tal connotación.

El documento en cuestión, que no aparece firmado por la procesada, no es una confesión en los términos del Código Judicial, ya que es una simple carta que la sindicada envió a la juzgadora para manifestarle su arrepentimiento, pero del mismo no se puede deducir más grado de responsabilidad en contra de la autora de dicha manifestación.

Si la procesada hubiera sabido que estaba confesando un delito mayor es evidente que no habría mandado tal documento, por lo que se deduce que tales afirmaciones no fueron efectuadas con el ánimo de confesar ningún delito de tráfico de drogas, ya que sólo acepta el tener la droga para su venta sin que reconozca haber vendido la misma.

Por otra parte, la aplicación del párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal forma parte del supuesto de que se encuentra a una persona en posesión de una cantidad apreciable de drogas, lo que hace pensar que se dedica al tráfico (venta o traspaso ilegal) de dichas sustancias, por lo que se le pena con una sanción que oscila entre cinco y diez años de prisión.

Aquí, sin embargo, no estamos en presencia de una cantidad apreciable en el sentido de la ley, ya que 21.6 gramos no puede tenerse como tal. Situación distinta hubiera sido si a la procesada le encuentran una cantidad superior a cien o doscientos gramos, que suponen un cuarto o media libra de drogas.

A juicio de la Corte, la aplicación del párrafo segundo del artículo 260 se efectuó indebidamente, ya que se presumió que tal cantidad era excesiva para aplicar la mera posesión.

En el caso que nos ocupa, se trata de un delito de posesión de 21.6 gramos de crack (cocaína) en el que la persona declara que eran para la venta.

Si el tribunal de segunda instancia aplica una pena de cinco años de prisión es porque consideró que la droga poseída por la procesada era considerable, ya que el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal sólo permite la agravación de pena en la posesión cuando la cantidad poseída es considerada más allá de una simple posesión, lo que implica que dicha cantidad se posee para la venta o traspaso ilegal.

Mal podía el Tribunal Superior aplicar el párrafo segundo del artículo 260 si la cantidad no era apreciable, y no puede decirse que 21.6 gramos sea una cantidad apreciable.

Por otra parte, la recurrente pone de manifiesto que no hay evidencia de que su representada se dedique a la venta de drogas, ni que haya encontrado material necesario para tal venta en el cuarto de su patrocinada, lo que pone de manifiesto una errada calificación de los hechos constitutivos del ilícito.

La cantidad de 21.6 gramos no es suficiente para fundar un cargo por el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal, ya que tal cantidad no implica necesariamente dedicarse a la venta o traspaso de drogas. Por otro lado, la mera declaración de la procesada de su finalidad no es suficiente para configurar el delito en cuestión, si la cantidad encontrada en su poder no fuere apreciable o considerable en atención a su finalidad.

Distinta fuera la situación si se tratara de un caso en donde se hallare involucrada una cantidad de cientos de gramos o uno o más kilos.

Cuando se tiene una cantidad escasa, la simple manifestación de la intención de traspasar dicha droga no es suficiente para condenar por tráfico o posesión de grandes cantidades, ya que ello equivale a querer castigar la intención del sujeto sin que haya efectuado todavía comportamiento alguno.

De otra forma, tampoco queda demostrado que el dinero encontrado en la habitación de la procesada provenga de la venta de drogas, y, en ese sentido, las conclusiones a que llega el tribunal superior se fundan en meras presunciones.

No hay prueba alguna que vincule a la procesada y al dinero hallado en su habitación con la venta efectiva de drogas, por lo que el comiso de dicho dinero es improcedente.

No puede presumirse la procedencia ilegal del dinero si no está comprobada la venta o traspaso de drogas por la procesada, quien tiene derecho a que se le devuelva el importe encontrado en su habitación el día del allanamiento.

Ordenar el comiso es una medida que carece de fundamento, ya que la procesada nunca ha admitido que haya vendido droga alguna, por lo que tal medida se tomó con fundamento en una presunción que es inaceptable en el Derecho procesal penal moderno.

Todas las razones expuestas, por tanto, ponen de manifiesto que se debe acceder a la petición de la defensora de la procesada en este recurso de casación, lo que exime a la Sala de continuar analizando el resto de las causales invocadas.

Procede, por tanto, casar la sentencia recurrida y condenar a la procesada por el delito de posesión previsto en el párrafo primero del artículo 260, como hizo el tribunal de primera instancia.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia recurrida dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 16 de junio de 1992 y CONDENA a DILCIA BABB a la pena de seis meses de prisión, cincuenta días multa e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por dicho tiempo, una vez cumplida la pena principal y ordena la devolución de los valores hallados en el apartamento de la procesada.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE CONTROVERSIA

INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO CONTRA JORGE RAMÓN VALDES CHARRIS, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, ENCARGADO, DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS A FRANKLIN PEDRO ZAYDMAN HAHN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 9 de junio del presente año, el licenciado **ABRAHAM R. ROSAS ARAUZ**, de la firma forense **MORENO, ARJONA & BRID**,en representación del señor **FRANKLIN PEDRO ZAYDMAN HAHN**, presentó en la Secretaría de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia un incidente de controversia contra el Procurador General de la Nación, con motivo de la aprehensión provisional de una cuenta bancaria dentro de un caso presuntamente relacionado con delitos de drogas.

En respuesta al traslado que se le hizo de este negocio, el Señor Procurador General de la Nación en su vista N°21 de 5 de julio (fs. 6-7) solicita que se decline el incidente a la esfera circuital, por razón de que el conocimiento de este tipo de delitos compete a esos Tribunales y no a la Sala Segunda de la Corte.

La admisión inicial de este incidente obedeció esencialmente al hecho de que se dirigía contra el más alto representante del Ministerio Público y si bien es cierto que hay precedentes reiterados en los que se afirma que, conforme al artículo 2009 del Código Judicial, toda controversia que surja debe ser resuelta por el Tribunal jurisdiccional de la causa con total independencia del funcionario de instrucción que adelante la investigación del caso, no puede perderse de vista que del contenido del incidente se colige una pretensión distinta, cual es la de un levantamiento de la aprehensión provisional de las cuentas bancarias afectadas y el artículo 24 de la Ley 23 de 1986, daría margen a la intervención de esta Corporación Judicial.

No obstante, la solicitud específica del incidentista se resume cuando señala que su pretensión consiste en que esta Sala "le ordene al Procurador General de la Nación que concluya el sumario correspondiente a este proceso, para que el Tribunal correspondiente pueda hacer la calificación de la investigación realizada".

No cabe duda alguna que la solicitud mencionada no genera una controversia propiamente tal, ya que el incumplimiento de los términos en cualquier etapa del proceso, cuando perjudique sensiblemente a las partes, aparece en alguno de los numerales del artículo 440 del Código Judicial, que no corresponde al incidente de controversia presentado.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA IMPROCEDENCIA de este incidente.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO CONTRA JORGE RAMÓN VALDES CHARRIS,PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN ENCARGADO, DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA RAFAEL SÁNCHEZ SALAZAR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma de abogados Moreno, Arjona y Brid ha promovido Incidente de Controversia contra el Procurador General de la Nación. Según la incidentista, desde el 28 de diciembre de 1989 la Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la retención de dineros depositados en la cuenta N°61641.CH 558 del Banco Industrial Colombiano de Panamá, S. A., de propiedad de Rafael Sánchez Salazar. Sigue indicando que el expediente fue remitido a la Secretaría Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación, despacho que ha practicado otras diligencias para cumplir los propósitos de las sumarias, donde actualmente se encuentra. Sostiene el incidentista que desde el momento en que se hizo la retención de los fondos a la fecha han pasado más de tres años y cinco meses, término que rebasa los dos meses para la conclusión de las sumarias, prorrogables por igual período cuando se trate de varios imputados o hechos punibles, según el artículo 2060 del Código Judicial. Concluye el incidentista que su pretensión es la de que se le ordene la Procurador "que concluya el sumario del mencionado proceso a fin de que el mismo pueda ser calificado por la autoridad jurisdiccional correspondiente".

Al dar respuesta del traslado que le fuera corrido, el Procurador General de la Nación expresa que el incidente propuesto está indebidamente dirigido, toda vez que debe ser conocido por el Tribunal competente para conocer del proceso, con fundamento en el artículo 2009 del Código Judicial. Además, que así lo determinó la Sala Segunda de la Corte Suprema en auto de 28 de diciembre de 1990, cuya parte pertinente cita. En conclusión, solicita que sea declinado ante la esfera circuital, por ser ésta la autoridad competente para juzgar los delitos relacionados con drogas.

De lo expuesto tanto por el incidentista como por el Procurador General de la Nación se desprende que las sumarias a que accede este incidente investigan la comisión de un delito relacionado con drogas. Ahora bien, si por disposición legal el incidente de controversia "será resuelto por el Tribunal competente para conocer el proceso" (a. 2009 C.J.), su conocimiento corresponde a la autoridad competente para conocer el delito investigado la que, como bien advierte el Procurador, radica en la esfera de circuital.

En razón de lo expuesto LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA el conocimiento del presente Incidente de Controversia ante la esfera de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD

IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO FABIÁN A. ECHEVERS DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA LUCIANO CONTRERAS VARGAS, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El magistrado **FABIÁN A. ECHEVERS**, a quien le fuera repartido el incidente de nulidad presentado por el licenciado **LUIS GUILLERMO ZÚÑIGA**, dentro del proceso seguido contra **LUCIANO CONTRERAS VARGAS** por delito contra la Administración Pública, ha manifestado que se encuentra impedido conforme al supuesto contenido en el numeral 2 del Artículo 749 del Código Judicial, es decir, por tener "interés debidamente acreditado en el proceso".

La situación descrita por el manifestante se enmarca dentro de la causal invocada, toda vez que guarda relación directa con denuncia que fuera presentada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual se considera fundada la solicitud que nos ocupa.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, **SALA DE LO PENAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **DECLARA LEGAL** el impedimento manifestado por el magistrado **FABIÁN A. ECHEVERS**; en consecuencia lo separa del conocimiento del presente proceso, y dispone que conforme a lo establecido por el artículo 78 del Código Judicial, se designe al honorable Magistrado ARTURO HOYOS para que, actuando en calidad de miembro principal, integre la Sala en este proceso.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA

QUERELLA PRESENTADA CONTRA RODRIGO HERNÁN AROSEMENA DE ROUX, DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, POR LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA EN PERJUICIO DE MIGUEL BUSH. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Procurador General de la Nación remitió a la Sala Penal el expediente que contiene sumarias instruidas en virtud de querella presentada por el legislador Miguel Bush Ríos contra Rodrigo Arosemena de Roux, Director General de Aduanas.

En Vista N° 21 de 30 de marzo de 1993, el Jefe del Ministerio Público considera que el investigado no ha procedido con dolo, razón por la cual no se tipifican los delitos de **calumnia e injuria**. En consecuencia solicita que, al decidirse sobre el mérito legal de las sumarias, se profiera un sobreseimiento definitivo a favor del querellado, con fundamento en el ordinal 1° del artículo 2210 del Código Judicial.

Según se afirma, los delitos atribuidos al Director de Aduanas tienen origen en entrevistas que concediera a diversos medios de comunicación social los días 27, 28 y 29 de noviembre de 1991, tales como los diarios La Prensa, El Siglo y Crítica Libre, así como en las televisoras Canal 4 y 13, donde "me acusó de ser CONTRABANDISTA y adicional a ello se refirió a mi persona como maleante" (f.3).

Un examen del expediente demuestra que la investigación no está completa, lo que impide a la Sala realizar una adecuada calificación legal de las sumarias. Por ello, en cumplimiento del mandato del artículo 2204 del Código Judicial, es pertinente ordenar la ampliación de la encuesta penal sobre los puntos que a continuación se detallan:

PRIMERO: Que se autentiquen las fotocopias de todas las noticias aparecidas en los diarios La Prensa, El Siglo y Critica Libre que fueron aportadas por el querellante, obrantes a fojas 5, 6, 7 y 8 del expediente. Asimismo, se debe solicitar al Ministerio de Gobierno y Justicia que haga la transcripción y certifique la autenticidad de los dos video cintas que se adjuntan como antecedentes.

SEGUNDO: En las sumarias consta que al Director de Aduanas se le remitió cuestionario y se le solicitó, entre otras preguntas, que contestara la siguiente: "diga el declarante si usted en sus declaraciones se refirió en algún momento al H.L. Miguel Bush, acusándolo de contrabandista y maleante? (preg. 4). Como repuesta a dicha interrogación el querellado expresó: "... **constituye, además de un delito, un acto de mera maleantería**" (f.25). De esa afirmación se colige la existencia del hecho punible y la probable vinculación del querellado, por lo que debe procederse a recibirle indagatoria, con fundamento en el artículo 2115 del Código Judicial.

TERCERO: En las video cintas presentadas por el querellante como pruebas se advierte que el Director de Aduanas anunció que presentaría ante la Procuraduría una denuncia contra el querellante. Es fundamental que se acredite esta circunstancia, si tal denuncia llegó a ser presentada, a los efectos de lo previsto en el artículo 177 del Código Penal.

CUARTO: Se autoriza al funcionario de instrucción para que practique cualquier otra diligencia que a su juicio contribuya al esclarecimiento de los hechos.

Por las razones expuestas la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA la ampliación de estas sumarias con el objeto de que se practiquen las diligencias indicadas en la parte motiva de esta resolución, para lo cual el agente instructor cuenta con el término de ley.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA EDGAR SAMUEL QUINTERO, POR EL DELITO DE HURTO EN PERJUICIO DE BASSÁN ALMEDINE Y MIGUEL ANTONIO CASTILO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El abogado Ismael Rodríguez E. ha presentado recurso de reconsideración contra el auto de 23 de junio del año en curso, mediante el cual no se admitió el recurso de revisión que presentara contra la sentencia N°56, de 29 de noviembre de 1989, proferida por el Juzgado Cuarto del Circuito de Chiriquí, Ramo Penal, en la que se condenó a su representado Edgar Samuel Quintero a 4 años, 10 meses y 20 días de prisión.

Como fundamento de su solicitud anuncia que el recurso lo fundamenta en el artículo 2458, ordinales 3 y 5 del Código Judicial y acompañó copias auténticas de las denuncias presentadas por los ofendidos, copias de las declaraciones de las hermanas Araúz y de la sentencia dictada por el Juez Cuarto del Circuito de Chiriquí, como

también de informe pericial rendido por el cabo de las ex-Fuerzas de Defensa Heriberto Cedeño y de su declaración.

A juicio del recurrente, los documentos aportados acreditan los motivos que le tuvieron las hermanas Maritzel y Rosa Araúz para falsear sus declaraciones. Con respecto al informe pericial opina que fue favorable a su defendido, pero que no fue valorado debidamente. Finalmente expresa que, con base en esas consideraciones, "esperamos salvar las formalidades omitidas" (f.12), por lo que solicita se admita el recurso.

El recurrente insiste en que las declaraciones de las hermanas Araúz constituyeron la prueba fundamental para condenar a su representado, testimonios que califica de falsos. Sin embargo, sobre la alegada falsedad no existe pronunciamiento alguno de autoridad jurisdiccional competente, de donde resulta que su aseveración es de valor meramente subjetivo, ineficaz para que la Sala pueda tomarla como causal de revisión, a tenor de lo que dispone el artículo 2458, ordinal 3, del Código Judicial.

Al señalar también el recurrente que el peritaje del Cabo Heriberto Cedeño no fue valorado debidamente, resulta claro que su pretensión se dirige a que la Sala vuelva a evaluar una prueba que ya fue considerada por el Tribunal de Instancia. Esa pretensión sólo es posible en el evento de que "se descubran **nuevos hechos** que, por sí mismos o combinados con las pruebas anteriores, pudieran dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa" (a.2458, ord.5, C.J.). Por cuanto que la prueba presentada no constituye un nuevo hecho, por tanto no considerado en la sentencia objeto de la revisión que se solicita, también queda excluida como causal de revisión.

En razón de lo expuesto LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, MANTIENE el auto de 23 de junio de 1993, que no admite el recurso de revisión presentado por el licenciado Ismael Rodríguez E., actuando en su condición de apoderado judicial de Edgar Samuel Quintero.

Notifíquese y archívese.

FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

JUICIO SEGUIDO CONTRA LUIS ALBERTO BETHANCOURT CABALLERO, SINDICADO POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO, VIOLACIÓN CARNAL Y ROBO, EN PERJUICIO DE LINETH FUENTES AGUIRRE, MARÍA ISABEL EDVARSSON PEÑA Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha ingresado, en grado de apelación, el expediente que contiene la sentencia de 21 de diciembre de 1992, dictada contra **LUIS ALBERTO BETHANCOURT CABALLERO**, en la cual el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial lo condenó a cumplir la pena principal de 20 años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas durante igual término, mientras se cumpla la pena principal.

Dicha sentencia fue dictada después que el jurado de conciencia declaró a BETHANCOURT CABALLERO culpable de los delitos de homicidio cometidos en perjuicio de LINETH FUENTES AGUIRRE, de 20 años de edad, violación carnal, en perjuicio de MARÍA ISABEL EDVARSON PEÑA y de robo, cometido en perjuicio de esta última y de otras personas que viajaban como pasajeros en un bus de paseo desde la Feria de Boquete.

El recurso fue interpuesto por el licenciado RAFAEL SANTAMARÍA G., defensor de oficio del sentenciado. En un breve escrito sustentador, el letrado solicita se reforme la sentencia, en el sentido de que se fije una pena menos drástica. Así, resalta como aspectos fundamentales los siguientes:

1. Que su defendido no pudo ser la única persona que cometiera los tres delitos, por lo que el haberle impuesto la pena máxima, no está acorde con la realidad de los hechos.

2. Que en el expediente está "acreditado claramente" que ÁNGEL ORTIZ CONCEPCIÓN (a) Tito, y JOHNATHAN BLADIMIR PRADO ALVARADO o LINO MOJICA RODRÍGUEZ, son los verdaderos autores de los hechos.

3. Que a sabiendas de que existieron profundas dudas sobre la autoría de este hecho, debe aplicársele el mínimo para el delito principal y luego hacer la operación a que alude el artículo 64 del Código Penal.

Con relación al primer punto, la Sala reconoce que le asiste la razón al sustentante. El 22 de abril de 1990, fueron dos las personas que asaltaron a los pasajeros que iban en el bus de paseo y entre los dos cometieron los diferentes delitos que se han investigado.

De acuerdo a las descripciones físicas que dan los ofendidos, así como a las vestimentas que cargaban los asaltantes, esta Sala concluye que fue el acompañante de BETHANCOURT CABALLERO y no éste, el que cometió la violación carnal en perjuicio de la joven EDVARSON PEÑA. Ella señala en su declaración que quien la violó fue un sujeto de mediana estatura, más trigueño que claro, delgado, tenía una gorra, suéter color verde caña (o amarillo, según otros testigos) y pantalón jean (f. 114). Señas éstas que son distintas de las ofrecidas para el autor del homicidio y de los robos, el cual, según los testigos era trigueño, delgado, de mediana estatura, de bigotes delgaditos, de cabello con ondas, no crespo, vestía camisa de cuadros azules, de mangas largas y

cargaba lentes claros. Descripción que a criterio de la Sala, corresponde a BETHANCOURT CABALLERO.

Si bien reconocemos que el sentenciado no fue el autor de la violación carnal, cabe ubicar su participación dentro de la complicidad secundaria, pues no tomó parte en la realización de este delito, ni prestó al autor un auxilio sin el cual el hecho no habría podido cometerse, sino que, mientras éste (el autor) cometía la violación, BETHANCOURT lo auxilió "de cualquier otro modo" poseyendo el arma de fuego para seguir intimidando al resto de los pasajeros, quienes, por órdenes de los asaltantes, estaban acostados boca abajo en el suelo del potrero al cual fueron llevados.

El artículo 216 del Código Penal sanciona con una pena de 3 a 6 años de prisión el delito de violación carnal cuando se cometa ejerciendo violencia o intimidación contra la víctima. Esta disposición debe ser vista en concordancia con la 61, según la cual a los autores secundarios se les aplicará una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito. En términos matemáticos esto significa que la conducta de complicidad secundaria del sentenciado para el delito de violación, debe oscilar entre 1 año y 6 meses a 3 años de prisión. La Sala la fija en 2 años.

En cuanto al segundo punto alegado por el recurrente, sobre el hecho de que ORTIZ CONCEPCIÓN y PRADO ALVARADO son los verdaderos autores de los hechos, existe una decisión del jurado de conciencia, la que no puede ser revocada a través de esta vía.

La Sala cuando resolvió en segunda instancia el auto de llamamiento a juicio, sostuvo en su auto de 14 de enero de 1992, que contra ORTIZ CONCEPCIÓN existían ciertos indicios que parecían vincularlo con los hechos, situación que al no haber sido evaluada por el Tribunal de primera instancia, no podía ser considerada por esta Sala.

En los folios 147 y 173 del acta de audiencia (fs.810 y 826), la defensa del enjuiciado manifestó que él pide que se reabra la investigación y así se lo exige al Ministerio Público, pues -en su opinión- fueron aquellos dos (ORTIZ y PRADO), los que perpetraron los delitos investigados.

Frente a lo planteado por el sustentante, el Código Judicial contempla el procedimiento legal a seguir en el caso en que se solicite reapertura del sumario respecto de quienes hayan sido sobreseídos provisionalmente. Y es así como debe procederse para requerir la reapertura.

Finalmente, el sustentante hace mención de que a BETHANCOURT CABALLERO debió aplicársele el mínimo de sanción para el delito principal, debido a las dudas que existieron sobre la autoría del delito.

Contrario a lo que alega el defensor, la Sala observa que el Tribunal favoreció al sentenciado cuando consideró que la agravante por motivo de reincidencia de BETHANCOURT era aplicable al caso, sin embargo, no fue computada con la amplitud que permite el artículo 59 del Código Penal, según el cual la sanción aumentada en razón de esta agravante, puede sobrepasar el máximo de la pena impuesta para el delito. Esta es la única excepción que prevé nuestra ley penal para que la pena máxima de 20 años de prisión pueda ser sobrepasada de su límite.

En el caso que nos ocupa, de haber sido aplicada correctamente la norma, la sanción a imponer a BETHANCOURT sería de 25 años de prisión (los 20 años aumentados hasta una cuarta parte), no obstante, el tribunal a quo no sobrepasó de los veinte años de prisión. Razón que es suficiente para desestimar este aspecto de las alegaciones.

La Sala considera oportuno expresar que en los juicios con intervención de jurado de conciencia, el deber de estos debe limitarse a emitir un veredicto absolutorio o condenatorio en atención a las evidencias que resulten del juicio. Una vez se emita veredicto de culpabilidad, le corresponde al tribunal de la causa examinar la participación del declarado culpable, a fin de ubicarlo dentro de la categoría de autor, cómplice primario, cómplice secundario o instigador, operación ésta que debe llevarse a cabo con sumo cuidado, máxime en casos como este en el que fueron varios los delitos cometidos y hubo co-participación.

Analizados los argumentos del impugnador, es del caso reformar la sentencia, porque ha variado la calidad del sentenciado en lo que respecta al delito de violación carnal.

En virtud de lo anotado, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia apelada y FIJA en 18 años de prisión la pena principal que debe cumplir LUIS ALBERTO BETHANCOURT CABALLERO y la mantiene en todo lo demás.

Devuélvase y notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO CONTRA ELEUTERIO EDIL MARTÍNEZ DE LA CRUZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EFIGENIO MENESES MORENO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

A la Sala Segunda Penal ha ingresado expediente procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial relacionado con la muerte de **EFIGENIO MENESES MORENO.** El ingreso del mismo se debe a recurso de apelación interpuesto por el

abogado defensor del justiciable, **ELEUTERIO EDIL MARTÍNEZ DE LA CRUZ**, contra la sentencia condenatoria proferida el 10 de septiembre de 1992 (fojas. 372-380), más un incidente de nulidad de todo lo actuado; y apelación también interpuesta por el Fiscal Primero Superior.

Se trata de un proceso en el que aparecen el menor **SANTANA MARTÍNEZ DE LA CRUZ** y su hermano **ELEUTERIO MARTÍNEZ DE LA CRUZ**, el primero como supuesto autor de la muerte de **MENESES MORENO**, hecho que ocurre el 17 de abril de 1987, entre 6:30 de la tarde por razón de una riña en el lugar denominado LAS MENDOZAS, Distrito de la Chorrera, después de haber tenido un encuentro de "pulseo" entre **Santana Martínez** y el occiso, en el que este último perdió, y disgustado, golpeó a su contrincante **Santana Martínez.** Posteriormente, su hermano mayor **Eleuterio** fue a reclamarle su actitud, produciéndose una discusión entre los tres, al extremo, de que uno sacó un arma cortante al darse cuenta de que el otro, el occiso, hacia uso de unas piedras para lanzárselas, lo que provocó que **ELUTERIO MARTÍNEZ** le infiriera una herida en la espalda, lo que ocasionó su muerte. (Páginas 12 y 19).

Las investigaciones del hecho fueron adelantadas por el Fiscal Duodécimo de Circuito de La Chorrera. Entre tales aparece el reconocimiento del cadáver, efectuado en la Morgue del Hospital Nicolás Solano con la asistencia de dos peritos que manifestaron haber encontrado el cuerpo de un sujeto de un metro setenta y dos (1.72) centímetros, con peso aproximado de 160 libras.

"Por otro lado, el cuerpo presenta heridas cortantes de 5.5 por 2 centímetros de ancho ubicadas en la región escapular izquierda a siete (7) centímetros del borde izquierdo interno del escápulo y a un centímetro y medio de la línea media; la herida es profunda de origen vital, es decir, hecha en vida." Foja 6.

En la continuación de las investigaciones se tomaron varias indagatorias de los dos supuestos implicados en el hecho trágico, es decir, de los hermanos **Santana** y **Eleuterio Martínez de la Cruz**, donde el primero acepta haberle producido la herida en la espalda a **Efigenio Meneses Moreno**, describiendo la manera cómo empleó el arma cortante y que "la sustrajo de la media donde la tenía." Foja 19.

Eleuterio Edil Martínez (foja 210), relata en forma detallada cómo se da la acción ocurrida entre él y su hermano y el fallecido **Eleuterio Meneses**, aduciendo que aproximadamente a las 5:30 de la tarde del domingo 16 de abril, se encontraba en el campo de juego de Las Mendozas en compañía de su hermano, hallándose en el mismo lugar **Efigenio Meneses** y su hermano **Ismael**, invitando el fallecido a **Santana** "a hechar una pulseada con él y probar así su fuerza"; luego que **Santana** le ganara en el pulseo a **Efigenio Meneses** éste se disgustó por haber perdido y quiso pelear con el mismo, evitando el otro que pelearan y los separó, pero de pronto el hermano fue atacado por **Meneses** y le propinó un puñetazo en el ojo izquierdo que le ocasionó un moretón en el pómulo y herida en el párpado. Cuenta además, que al día siguiente lunes, invitó a su hermano **Santana** a que fueran a tratar de resolver el problema con **Efigenio Meneses** con el objeto de que eso terminara allí, y observó que al llegar a las afueras de Las Mendozas vieron sentado a **Meneses** en la Casa Comunal y le preguntó por qué a su hermano lo había herido de un puñetazo el día anterior, y aquél "se aceleró", contestándole textualmente lo siguiente: "te pegué una vez y te vuelvo a pegar". El indagado hace una descripción de la manera cómo actuó y la instancia en que lo lesionó con el cuchillo cuando **Efigenio** cayó en una zanja; aceptó que portaba un cuchillo, aclarando que no fue éste el que se usó contra **Efigenio Meneses** sino uno que cargaba su hermano. La Fiscalía recibe certificado de nacimiento del menor **Santana Martínez**. Foja 179.

En las sumarias levantadas por el Fiscal del Distrito de La Chorrera aparecen declaraciones de hermanos, de otros parientes, y testigos del suceso ocurrido, que señalan a **Santana Martínez de la Cruz** como supuesto autor de la muerte de **Efigenio Meneses**, sin mostrar ninguna implicación de parte de Eleuterio Martínez. Fojas 31, 35, 58, 61 y 66.

Al concluir el Fiscal Duodécimo del Circuito de La Chorrera las investigaciones, las mismas fueron remitidas al Fiscal Superior de Turno del Primer Distrito Judicial; posteriormente este Despacho las envía a la Fiscalía Duodécima para que se practicaran varias actuaciones y completar las omisiones anotadas. Fojas. 127 y 176.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia en atención a la recomendación formulada por la Fiscalía Primera Superior mediante Auto de 13 de julio de 1990, abre causa criminal contra **ELEUTERIO MARTÍNEZ DE LA CRUZ**, señalándolo como infractor del Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal, o sea, por el delito genérico de homicidio en perjuicio de **EFIGENIO MENESES MORENO** (Q.E.P.D.). (Subrayado de la Sala). Fojas 199 y siguientes.

Al llevarse a cabo la audiencia con Jurados de Conciencia, el Presidente lee un cuestionario al Jurado y que dice lo siguiente: "El procesado **ELEUTERIO EDIL MARTÍNEZ DE LA CRUZ** es culpable o inocente de haber participado en la muerte violenta de **EFIGENIO MENESES MORENO**, quien falleció a consecuencia de: "shock hemorrágico", A) Perforación de la Aorta Toráxica, B) Herida punzo-cortante en la región escapular izquierda...". Posteriormente luego de finalizada la Audiencia el Jurado dicta su veredicto de **CULPABLE**".

Como el imputado gozaba de medida cautelar mediante fianza excarcelaria, la misma fue cancelada en la noche del juicio, enviándose al justiciable a la Cárcel Modelo.

Posteriormente el Tribunal dicta la sentencia correspondiente imponiéndosele pena de prisión de nueve (9) años y cuatro (4) meses, y la accesoria de ocho (8) años para el ejercicio de funciones públicas. Fojas 372 a 380.

Notificado el abogado defensor de **Eleuterio**, éste anuncia recurso de nulidad contra lo actuado, alegando entre otras consideraciones, que el Tribunal incurrió en error en la denominación del delito investigado, ubicándolo como infractor del Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal; y al someter el cuestionario al jurado de conciencia, dicho cuestionario lo enmarca dentro del Título III, Capítulo II del Código Penal, lo que se evidencia a página 273 del expediente.

El Tribunal rechazó de plano el incidente de nulidad interpuesto por el abogado defensor. Fojas 394 a 398.

Por otro lado, el Fiscal Primero Superior apeló de la sentencia dictada (foja 401), aduciendo lo que se transcribe textualmente de parte de su alegato, al sustentar su razonamiento:

> "De lo antes expuesto, surge el hecho de que la conducta de **Eleuterio Martínez** en el resultado muerte Efigenio Meneses (sic). No puede calificarse ni de autoría ni de cómplice primario, pues ni realizó la conducta descrita como punible (Artículo 38 del Código Penal) ni tomó parte en la realización del hecho punible, ni prestó al autor un cuchillo sin el cual el hecho no habría podido cometerse (sic).
>
> "Ante esa situación, somos de opinión que la conducta del mencionado **Eleuterio Martínez de la Cruz** se enmarca en la disposición penal de que trata el Artículo 40 del Código Penal. Es por ello que solicitamos a los Honorables Magistrados se reforme la sentencia apelada por la defensa y en su defecto se fije al imputado una sanción, privativa de libertad tomando en consideración la regla señalada en el párrafo segundo del Artículo 61 del Código Penal".

La Sala Segunda Penal, luego de exhaustivo examen y análisis de todo lo que encierra el proceso a decidir, observa lo siguiente:

1. La muerte de **EFIGENIO MENESES MORENO** acaece por razón de una agresión que el último propinara al menor **Santana Martínez** produciéndole lesión en el ojo izquierdo y advirtiéndole que lo haría nuevamente, como se ha advertido.

2. La acción ejecutada por **ELEUTERIO MARTÍNEZ**, hermano mayor de **Santana** que iba a ser víctima del lanzamiento de una piedra de parte de **Efigenio Martínez** no hizo blanco en su cuerpo al éste eludirla con tiempo.

3. El juicio celebrado con Jurado de Conciencia declaró **CULPABLE** de homicidio al imputado siguiendo el cuestionario planteado por el Presidente de la Audiencia verificada.

4. En los autos no aparece que el imputado sea autor o cómplice primario, ni que haya sido sancionado por delito alguno y su intervención de complicidad secundaria se originó por la conducta adoptada por el occiso en contra de su hermano.

Por otro lado, el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial en su Vista del 16 de diciembre de 1992, al referirse a la apelación contra la sentencia del abogado defensor de **Martínez De La Cruz**, sustenta que:

> "Ante esta situación, somos de opinión que la conducta del mencionado **ELEUTERIO MARTÍNEZ DE LA CRUZ** se enmarca en la disposición penal de que trata el Artículo 40 del Código Penal. Es por ello que solicitamos a los Honorables Magistrados se reforme la sentencia apelada por la defensa y en su defecto se fije al imputado una sanción privativa de la libertad tomando en consideración la regla señalada en el párrafo segundo del Artículo 61 del Código Penal".

La Sala Segunda Penal, por lo tanto, tomando en consideración por otra parte la personalidad del victimario, que no respondió sino a una agresión provocada, contra su hermano, vista la situación que se dio de acuerdo con la posición entre agresor y agredido, se puede colegir que su conducta es la de cómplice secundario y no de autor del homicidio. Se procede por ello, en nombre de la República y por autoridad de la ley, a REVOCAR la sentencia dictada por el Tribunal a quo, en el sentido de fijar la pena en cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión; y la accesoria de cuatro (4) años y cuatro (4) meses para no ejercer funciones públicas.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA NORA ARGENTINA BARRIOS GONZÁLEZ, SINDICADA POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE ERNESTO ENRIQUE DE LEÓN VILLARREAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ. DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia ingresa a la Sala Segunda de la Corte Suprema el sumario seguido contra NORA ARGENTINA BARRIOS GONZÁLEZ, quien se encuentra sindicada por el delito de homicidio cometido en perjuicio de ERNESTO ENRIQUE DE LEÓN VILLARREAL.

Mediante auto fechado 30 de septiembre de 1992, el tribunal a quo decretó un sobreseimiento definitivo en favor de la imputada con fundamento en el artículo 2210, numeral 3, y dispuso remitir el proceso a esta Corporación de Justicia para que revisara la actuación, toda vez que la sindicada posee la calidad de servidor público y, en tal virtud, la resolución proferida debe ser revisada por el superior a través del mecanismo de consulta, conforme al artículo 2481 del Código Judicial.

El sobreseimiento definitivo que en esta instancia judicial se consulta está fundamentado en la causa de justificación que consagra el artículo 20 del Código Penal, denominada por la doctrina estado de necesidad.

Luego de haber analizado los elementos probatorios allegados al proceso, el tribunal de primer grado externó el siguiente razonamiento:

> "Todas las declaraciones presentes en la encuesta sumarial, en cuanto al hecho objeto de la investigación, con la excepción de las de Franklin Eduardo Chong Villarreal, Gustavo Enrique Torres y Elkin Castro Segura, expresan que la imputada sólo actuó después de advertir al hoy occiso y que el mismo en vez de escuchar a la advertencia, les disparase a su hermano y a su cuñado y luego intentase dispararle a ella con un arma igual de potente que la que ella portaba.
>
> Se colige que el occiso tenía una actitud agresiva, la cual puso en peligro la vida de varias personas antes de poner en peligro la de la imputada y las de sus familiares.
>
> Observamos que la intención de la sindicada no era la de matar al atacante, cuando todos, inclusive los acompañantes del hoy occiso, coinciden en que ella le dio los primeros auxilios y luego lo llevó al hospital, aún después que las personas presentes decían que no lo hiciera.
>
> Siendo esta la actuación que se refleja en el expediente, conceptuamos que la actuación de la imputada, **NORA ARGENTINA BARRIOS GONZÁLEZ**, se enmarca dentro de los requisitos establecidos en el artículo 20 de nuestro Código Penal, por lo que sus actos se encuentran amparados por una causa de justificación" (sic).

BREVE RELATO DE LOS HECHOS

De acuerdo a las piezas procesales, el hecho punible fue cometido aproximadamente en horas del mediodía del 22 de diciembre de 1989, en las inmediaciones de la escuela Santiago de la Guardia, ubicada en el Valle de San Isidro, distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá.

Momentos antes del desenlace fatal, el ahora occiso, con la anuencia de FRANKLIN EDUARDO CHONG VILLARREAL, GUSTAVO ENRIQUE TORRES y ELKIN CASTRO SEGURA, había realizado algunos disparos contra los vidrios de un auto sedán, chico, color vino, con el propósito de apoderarse de dos galones de gasolina que se encontraban en el asiento trasero de dicho vehículo.

Según aparece acreditado en el expediente, un vecino notificó a la sindicada acerca de la acción consumada por estos señores, y fue cuando NORA ARGENTINA BARRIOS GONZÁLEZ, en compañía de un hermano y de un cuñado suyo, salió a capturar a los delincuentes, no sin antes tomar un fusil AK-47 que tenía en su casa por razón del trabajo que desempeña y del momento histórico por el que atravesaba el país.

La imputada y sus acompañantes abordaron el citado vehículo y procedieron a dar varias vueltas por los alrededores del lugar con el propósito de ubicar a los delincuentes. Al cabo de unos minutos éstos fueron divisados y, tras dárselas la voz de alto, el ahora occiso accionó el fusil T-65 que llevaba y disparó una ráfaga contra las personas que acompañaban a la sindicada, quienes tuvieron de protegerse detrás de uno de los muros de la escuela Santiago de la Guardia.

Acto seguido el ahora occiso apuntó a la sindicada, pero ésta rápidamente accionó su AK-47, logrando herirlo en el cráneo, específicamente en la región parietal derecha, tal como lo demuestra el informe suscrito por el médico forense a fojas 33 del expediente.

El proceso da cuenta que con posterioridad a estos acontecimientos, la imputada y sus acompañantes procedieron a darle al herido los primeros auxilios y a conducirlo al hospital, pese a que las personas que presenciaron los hechos les decían que lo dejaran allí tirado porque este señor y sus acompañantes momentos antes venían haciendo fechorías.

ANÁLISIS DE FONDO

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, tras considerar que en el presente negocio penal existe una causa de justificación, ubicó la conducta del agente dentro de los parámetros establecidos por el artículo 20 del Código Penal.

Sin embargo, a juicio de la Corte, si bien los hechos que recoge el sumario demuestran que existe una causa de justificación que borra la antijuridicidad de la conducta desplegada por el agente, lo cierto es que la misma no corresponde a la reconocida por el tribunal a quo (estado de necesidad), sino que dicha causa de justificación viene consignada en el artículo 21 del Código del Código Penal, porque lo que se desprende de los hechos es que la señora NORA ARGENTINA BARRIOS GONZÁLEZ actuó bajo los postulados de la legítima defensa.

De acuerdo al artículo 21 de la mencionada excerta legal, la legítima defensa tiene lugar cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Agresión injusta, actual o inminente del que resulte afectado por el hecho;

2. Medio racional para impedir o repeler la agresión;

3. Imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera; y

4. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende.

Al analizar los medios probatorios allegados al proceso, observa la Sala que los requisitos anteriores concurren de manera inobjetable. Veamos el análisis de cada uno de ellos.

El primer requisito que ha de concurrir para que opere la legítima defensa viene representado por la necesidad de que exista una agresión, esto es, un ataque que **lesione** un bien jurídicamente tutelado o que tienda a poner en **peligro real** ya sea a la persona atacada, a sus derechos propios o a los derechos de terceros. Aunado a lo anterior es necesario que la agresión sea actual, inminente e injusta, es decir, ilegítima, contraria a derecho.

Si bien para que opere el estado de necesidad también es necesario que exista un peligro real, actual o inminente, lo cierto es que una de las notas distintivas entre esta causa de justificación y la legítima defensa viene constituida por el hecho de que en el estado de necesidad el sujeto realiza una **acción** dirigida a impedir que las circunstancias potenciales de peligro logren lesionar un bien jurídico propio o ajeno, mientras que en la legítima defensa quien se defiende ejecuta una **reacción** contra el ataque ilegítimo de su ofensor. En ese sentido, la legítima defensa parte del supuesto de que existe una colisión entre la pretensión ilegítima del atacante y el derecho legítimo del agredido para defenderse. En cambio, el estado de necesidad parte del supuesto de que, frente a determinada situación de peligro, se encuentran en pugna dos derechos equivalentes, uno de los cuales puede verse afectado por la salvaguardia del otro.

En el negocio que nos ocupa, la sindicada **reaccionó** para repeler la agresión en potencia de que iba a ser objeto -y que representaba un peligro real, actual e inminente-, pues así lo revela el hecho de que el ahora occiso la estuviera apuntando con un fusil T-65 luego de haber realizado varios disparos contra las personas que la acompañaban.

Lo hasta aquí expresado sirve para descartar la aplicación del estado de necesidad en este negocio penal.

En cuanto al segundo requisito para que prospere la legítima defensa como causa de justificación, esto es, la utilización de un medio racional para impedir o repeler la agresión, caben las siguientes consideraciones.

En el caso que nos ocupa esta condicionante aparece claramente comprobada, ya que, incluso, así lo demuestra el análisis **abstracto** de los medios utilizados por el agresor y el agredido -análisis que, a decir verdad, normalmente, no es el más recomendable para determinar esa proporcionalidad. En efecto, tanto el agresor como el agredido portaban armas de fuego de similar potencial: el difunto se hacía de un fusil T-65, mientras que el agredido contaba con un fusil AK-47.

El tercer requisito que ha de concurrir para la legítima defensa también está acreditado en el proceso.

La doctrina estima que en algunas ocasiones la huída constituye un mecanismo eficaz para evitar una agresión; y ello en modo alguno puede catalogarse como un acto de cobardía. Sin embargo, también están de acuerdo los tratadistas de que en muchas ocasiones esta conducta resulta imposible de realizar. Y es precisamente en estos casos en que la persona queda autorizada y legitimada para reaccionar y afrontar la agresión ilegítima de que es o va a ser objeto, mediante el empleo de un medio racional y proporcional al utilizado por el agresor.

En el presente negocio, ciertamente, la forma en que los hechos se desarrollaron y el blanco fácil que representaba la imputada para las pretensiones de su agresor, hacía imposible que ésta eludiera el ataque de que iba a ser objeto.

Finalmente, en autos también está acreditado la falta de provocación de la sindicada. Por ello, al satisfacerse a cabalidad los requisitos de la legítima defensa, lo procedente es la confirmación del sobreseimiento definitivo.

Por las razones que preceden, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto recurrido.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO CONTRA DOMINGO GONZÁLEZ ESTRIBÍ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDWIN OLMEDO CHAVES BRAVO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante sentencia de 20 de enero de 1993, condenó a DOMINGO GONZÁLEZ ESTRIBÍ a cumplir la pena principal de 14 años de prisión y la pena accesoria de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, a partir del cumplimiento de la pena principal, por el homicidio que cometió en perjuicio de su compañero recluta EDWIN OLMEDO CHÁVEZ BRAVO, hecho ocurrido en la entonces Base Militar de Río Hato, el 15 de octubre de 1989.

Contra esa sentencia, la defensora de oficio de González Estribí interpuso en tiempo oportuno recurso de apelación, el cual le fue corrido en traslado al agente de instrucción competente.

La resolución impugnada fue dictada con posterioridad a la celebración del acto oral, en el que el jurado de conciencia declaró culpable al enjuiciado, quien por su parte, desde un inicio confesó su acción y expresó que asumía la responsabilidad de los hechos.

Para dictar sentencia el Tribunal Superior consideró y ubicó la conducta del sujeto activo dentro del tipo de homicidio calificado, pues según su criterio, en el actuar de éste concurrieron las circunstancias agravantes específicas que mencionan los numerales 2 y 3 del artículo 132 del Código Penal, es decir, la premeditación y el motivo fútil. En base a ello, fijó la pena base en 12 años. Esta fue aumentada en una tercera parte por la concurrencia -según el tribunal- de la circunstancia agravante común "emplear medios que debiliten la defensa del ofendido" (artículo 67, numeral primero, C.P.), dando como resultado 16 años; y por haber sido reconocida la atenuante de confesión espontánea y oportuna del agente, se procedió a hacer la disminución de una sexta parte de la pena, quedando, de acuerdo a cálculos del tribunal, en 14 años de prisión.

La oposición de la defensa se basa en que la conducta del sentenciado se enmarca dentro de lo que establece el artículo 131 del Código Penal, por cuanto que en su opinión en el presente caso no concurren ninguna de las circunstancias específicas tomadas en cuenta por el tribunal de la causa.

Así, sostiene que en la conducta de González Estribí "jamás hubo un plan, una consideración, una reflexión sobre lo que iba a hacer, lo hizo y ni él mismo se explica por qué lo hizo". Según la letrada, lo que sucedió fue algo repentino, no premeditado. Alega que González "actuó luego de haber sido humillado públicamente, pero jamás pensó cometer ese delito; jamás se sentó a pensar: voy a matar a fulano" (fs.292-294).

Al referirse a este aspecto la resolución apelada señala que el imputado, fusil en mano, acechó a la víctima y permaneció en el dormitorio de los reclutas esperando que Chávez terminara de almorzar, por lo que concluye que González "ponderó y deliberó" sobre el hecho que estaba a punto de concluir; cuando la víctima regresó al dormitorio -relata la sentencia- el imputado le quitó el seguro al fusil, lo puso "en tiro a tiro, y le disparó más o menos tres balas, causándole la muerte (f.287).

Ciertamente, los hechos sucedieron como los describe el juez a-quo. González cometió el homicidio voluntariamente y este delito fue precedido de una deliberación o resolución previa de cometerlo y concluyó con una efectiva ejecución.

Es incorrecto afirmar que el actuar del sentenciado reviste características de repentino. A esta afirmación se opone el contenido de la declaración del indagado, quien al relatar los hechos expresó que primeramente pensó en dos posibilidades (presentar las quejas ante la sala de guardia y agarrar a Chávez a golpes con el tolete), pero después las descartó y fue allí cuando pensó en tomar su fusil y dispararle, porque temía hacerle algún daño y que quedara vivo. Con esa idea se mantuvo; lo esperó sentado en el dormitorio: "mientras estaba solo agarré mi fusil nervioso y temblando pensando cómo iba a cometer el hecho acaecido, a cada rato miraba para el rancho para ver cuándo acababa todo por la Patria para verlo venir a Chávez ...". Cuando Chávez regresó al cuarto, González se dirigió hacia él y le disparó, causándole la muerte (fs.28-35).

Con relación a la agravante motivo fútil, la Sala no comparte el criterio esbozado en la sentencia. No fue la simple pelea de una caja de jabón lo que motivó que González procediera en la forma que lo hizo. Sin que se pretenda justificar su conducta, del contenido de la declaración del sentenciado se percibe que no era la primera vez que el hoy occiso lo ofendía verbalmente. El incidente en el cual Chávez se apoderó sin permiso del jabón que otro compañero le había prestado a González, vino a ser el detonador de las anteriores situaciones en las que éste se sintió humillado por las ofensas de que fue objeto por parte de Chávez.

Relató González que antes de retirarse a su dormitorio a ver qué iba a hacer para remediar la situación, de buenas maneras le pidió el jabón que Chávez tenía en su poder y, éste le "empujó con el brazo derecho la quijada y se me cuadró en forma de pelea diciéndome que si yo quería pelear con él" (f.30). Posteriormente, según expresó el investigado, Chávez fue al cuarto donde aquél se encontraba y le ofendió su honor de hombre.

El criterio de la Sala es que no puede tenerse por fútil todo lo que va precedido de peleas o forcejeos. Y en este caso en particular, no puede decirse que por razones insignificantes González le causó la muerte a Chávez. Hubo por parte de él una conducta de apoderamiento de un objeto que le habían prestado a González; hubo también un requerimiento por parte de éste para que dicho objeto le fuera devuelto y en medio de ese intento, lo que recibió fueron ofensas y humillaciones, además de la provocación por parte de Chávez de invitarlo a pelear.

La sentencia que se estudia hace mención de que el procesado empleó medios que debilitaron la defensa del ofendido, por cuanto éste se encontraba en estado de indefensión, desarmado y desprevenido. La Sala considera que esta agravante común no concurre: una cosa es que la víctima se encontraba en estado de indefensión por encontrarse desarmada y desprevenida, y otra muy distinta es que el sujeto activo haya empleado medios que debilitaron la defensa o que colocaron al ofendido en ese estado de indefensión.

El empleo de medios a que se refiere el numeral primero del artículo 67 del Código Penal, debe tener como propósito ubicar a la víctima en condiciones de inferioridad o indefensión (v. gr. el agente suministra a la víctima un narcótico y luego le da muerte; la priva de fuerzas o de armas; ocultamiento del arma que utilizará en la ejecución del delito). El empleo de esos medios debe estar encaminado a crear las circunstancias de debilitamiento de la defensa y este no es el caso del sentenciado. Este análisis conduce a la Sala a eliminar, en favor de González Estribí, la agravante considerada por el tribunal de la causa.

Por esa razón, la sanción impuesta a González debe ser reformada. Al no prosperar dicha agravante, la atenuante confesión espontánea y oportuna del agente, que disminuye la pena en una sexta parte, debe ser aplicada a la pena base de 12 años que impuso el

tribunal, lo que da un resultado de diez (10) años, pena que debe cumplir el sentenciado.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia de 20 de enero de 1993 dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial y FIJA en 10 años la pena de prisión que debe cumplir DOMINGO GONZÁLEZ ESTRIBÍ y la mantiene en todo lo demás.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO A EDUARDO SUIRA RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE SAN MARTÍN GONZÁLEZ NÚÑEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial ingresa a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el proceso seguido a EDUARDO SUIRA RODRÍGUEZ, quien se encuentra sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de SAN MARTÍN GONZÁLEZ NÚÑEZ, hecho de sangre ocurrido el 25 de mayo de 1990, aproximadamente a las 10:45 de la noche, en la Barriada Revolución de la ciudad de David, Provincia de Chiriquí.

El tribunal de la causa, mediante sentencia de 4 de junio de 1992, procedió a imponer la pena a que se hacía merecedor el procesado, luego de que un jurado de conciencia lo encontrara culpable de la muerte de quien en vida se llamó SAN MARTÍN GONZÁLEZ NÚÑEZ. En ese sentido, el tribunal a quo, en atención a lo que establece el artículo 56 del Código Penal, fijó una pena base de 10 años de prisión, la cual se convirtió en pena líquida debido a que no se reconocieron circunstancias modificativas de responsabilidad penal.

El defensor del procesado interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación contra la sentencia anterior. El principal motivo de disconformidad que plantea el apelante consiste en que, a su juicio, la pena impuesta es excesiva si se tiene en cuenta la condición de delincuente primario del procesado y que contra el mismo se siguen en la actualidad procesos por violación carnal y lesiones personales, lo cual lo coloca en una "situación sumamente difícil, pues, no sabemos que pena se le impondrá para aquellos delitos, en el evento de que sea condenado ..." (sic).

En consecuencia, el recurrente solicita la reforma de sentencia impugnada, pues ello se impone debido a que los procesos no fueron acumulados, tal como lo preceptúa el artículo 2291 del Código Judicial.

Por su parte el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial considera que la sentencia impugnada debe ser confirmada en todas sus partes. A su juicio la pena que el tribunal a quo estableció con fundamento en el artículo 131 del Código Penal es correcta, y el argumento de la defensa, en el sentido de que la pena impuesta es injusta porque no se decretó la acumulación de este proceso con los que se le siguen a su representado por los delitos de violación carnal y lesiones personales, no tiene mayor consistencia toda vez que de conformidad con el artículo 2291 del Código Judicial, la acumulación de procesos debe ser solicitada por las partes, y en el expediente no consta que esto último fuere realizado.

Para decidir se adelantan las siguientes consideraciones: En el proceso está acreditado tanto el hecho punible como el autor del mismo. Los medios probatorios corroboran la adecuación típica que realizó el tribunal a quo al estimar que la conducta desplegada por el agente se encuentra sancionada por el artículo 131 del Código Penal. Por otro lado, estima la Corte que la pena base de 10 años de prisión es cónsona con la gravedad del hecho punible que nos ocupa, con los elementos objetivos y subjetivos concomitantes a su producción, con la personalidad del procesado (ver a fs. 199-204 el análisis del psiquiatra forense) y con su condición de delincuente primario.

En ese sentido, sólo resta ponderar el argumento esgrimido por la defensa -y que consiste en los perjuicios que ocasiona la falta de acumulación procesal- a objeto de determinar si efectivamente la sentencia recurrida debe ser reformada. Veamos.

El artículo 2291 del Código Judicial preceptúa que "Hay lugar a la acumulación de procesos cuando contra un mismo individuo o por un mismo delito se siguen dos o más actuaciones distintas ..."

El propósito de esta institución no puede ser otro que el de reunir en un solo proceso todos los sumarios que se adelantan en distintas agencias de instrucción contra una misma persona y juzgarlos bajo una misma cuerda, siempre y cuando la acumulación no ocasione un gran retardo (art. 2003 ibidem). Con ello se satisface el principio de economía procesal y se le garantiza al inculpado una pena justa en el evento de que sea condenado. Esto último es así, porque la aplicación de una acumulación jurídica de penas, cuyo fundamento aparece consignado en las reglas contenidas en el Capítulo III del Libro I del Código Penal, evita la acumulación material de las mismas y con ello el posible perjuicio que surgiría de las sanciones que se impondrían separadamente en los diferentes procesos.

Sin embargo, a la luz de lo establecido por el artículo 2291 del Código Judicial, para que proceda la acumulación de procesos es necesario que medie solicitud de parte, pues la acumulación oficiosa sólo procede cuando los diversos procesos se encuentran en

un mismo tribunal, según se deduce de la interpretación armónica de los artículos 2291, 2296, 1971 y 709 de la mencionada excerta legal.

En el caso que nos ocupa, observa la Sala que ni el imputado ni su defensor solicitaron la acumulación de procesos. Consta en autos, eso sí, que al expediente se allegó, por otros medios y por fines distintos, cierta información relacionada con la supuesta comisión de los delitos de violación carnal y lesiones personales (ver fojas 136, 208, 209, 210 y siguientes).

Pero pese a que esta información aparece en el proceso, y ante la inercia de parte interesada, obviamente, el tribunal de la causa no podía ordenar la acumulación oficiosamente, porque tales procesos no estaban en dicho tribunal.

No obstante lo anterior, la Corte considera que, si bien el tribunal a quo estaba impedido para acumular de oficio los procesos, lo cierto es que para imponer la pena sí debió tomar en consideración el hecho de que contra el imputado se estaban instruyendo otros sumarios.

Desde este punto de vista, la Sala es del criterio que la sentencia recurrida debe ser reformada en favor del procesado. Por ello, una pena de 9 años de prisión resulta razonable, vistos los elementos objetivos y subjetivos que recoge el infolio.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia de 4 de junio de 1992, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en el sentido de condenar a EDUARDO SUIRA RODRÍGUEZ, de generales conocidas en el proceso, a la pena de nueve (9) años de prisión, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de SAN MARTÍN GONZÁLEZ NÚÑEZ; y la CONFIRMA en todo lo demás.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL INTERPUESTA DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA CARLOS JUAN PÉREZ ALONSO, SINDICADO POR EL DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

ROSA ELVIRA MONROY CARBONERO, mediante su apoderado legal, presentó solicitud de liberación de unos bienes que fueran cautelados provisionalmente con motivo del proceso penal seguido a **CARLOS PÉREZ ALONSO** por delito contra la salud pública.

En apoyo a su solicitud expresa lo siguiente:
"HECHOS EN QUE BASO MI SOLICITUD:
PRIMERO: Que el señor CARLOS PÉREZ ALONSO, fue condenado por el Juez Segundo Penal de Chorrera a 40 meses de prisión, por Tráfico de Drogas, mediante auto N°33 de abril de 1992.

SEGUNDO: Que al momento de la detención del encausado se ocupo prendas que no son parte del Ilícito.

TERCERO: Que las prendas ocupadas son de mi mandante, no son partes del proceso, y además el condenado fue sancionado por tráfico de drogas y las prendas no son parte del hecho.

CUARTO: Que mi mandante como mujer del condenado no debe responder por los hechos de éste máxime que ha quedado demostrado su inocencia en la presente causa.

QUINTO: Que las prendas ocupadas por los miembros de Hacienda y Tesoro se encuentran en custodia de la Procuraduría de la Nación.

SEXTO: Que hemos de advertir conforme el artículo 1993 que las prendas ocupadas son bienes exentas del Ilícito y no son parte del hecho criminal imputado a CARLOS PÉREZ ALONSO.

SÉPTIMO: Mi representada, requiere de la entrega de dichas prendas para seguir viviendo y así os pido máxime que las prendas ocupadas no son parte del Ilícito.

OCTAVO: Solicitamos que acogida nuestra solicitud, se ordene la liberación a las prendas ocupadas y la aprehensión de que viene siendo objeto por parte del Ministerio Público".

También adjunta a su escrito copias informales sobre la resolución expedida por el Juzgado Segundo del Tercer Circuito Judicial de Panamá, con sede en La Chorrera, calendada el 19 de mayo de 1992, en virtud de la cual se condena a Carlos Juan Pérez Alonso, de nacionalidad cubana, a la pena de cuarenta meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, sin tomar decisión sobre los bienes aprehendidos durante la diligencia de allanamiento en su residencia.

El Procurador General de la Nación, quien recibió el negocio para emitir concepto, mediante su vista N°15 de 3 de junio de 1993, externa su opinión sobre esta solicitud, en los términos que siguen:

> "Después de analizar la documentación recibida, estamos en condición de opinar de la siguiente manera: Se trata de unas pertenencias que fueron incautadas y posteriormente aprehendidas como consecuencia de una diligencia de allanamiento que se realizara y por la que se capturó y enjuició al señor CARLOS JUAN PÉREZ ALONSO.
>
> Aduce el solicitante que si bien es cierto que las pruebas fueron aprehendidas dentro de esta causa y el señor Pérez Alonso finalmente condenado, las prendas aludidas no son propiedad del sentenciado, sino de su Mandante, esposa del procesado. Ahora bien, si observamos la copia del fallo allegada a esta acción, el Juzgador que decidió la causa, en ningún momento tomó decisión con relación a esos bienes.
>
> Como quiera que la aprehensión que de ellos se hizo en su momento por considerarlos como productos del ilícito y fundamentado en lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, correspondía al Juez de la causa haber dispuesto sobre ello en el momento que decidió la misma.
>
> No siendo así, consideramos que en estos momentos corresponde a esta Honorable Corte Suprema de Justicia decidir al respecto, decisión que acataremos de inmediato".

Al tenor de la Ley 23 de 1986, la Sala Segunda de lo Penal tiene competencia para conocer de la petición de levantamiento de la aprehensión provisional de instrumentos, valores y demás bienes que estuvieran aprehendidos provisionalmente a órdenes de la Procuraduría General de la Nación, con motivo de la investigación de delitos relacionados con drogas, esencialmente de la tenencia provisional de dichos bienes. No obstante, en el caso que nos ocupa, el Tribunal jurisdiccional competente que debía adoptar una decisión sobre el destino de tales bienes, decidió en forma definitiva sobre la causa, pero omitió tomar previsiones sobre los bienes distintos a los empleados en la comisión del delito de tráfico de drogas, a pesar de que, según consta en su propia sentencia, el imputado entregó a los inspectores las facturas que amparaban la compra de joyas de fantasía y oro que le fueron incautadas en la diligencia de allanamiento y que se encuentran descritas en las actas N°3498, 3499 y 3500.

Si bien es cierto que se trata de un volumen de consideración de joyas de fantasía y de oro, que para los fines de venta debe ajustarse a las normas y reglamentos que se ocupan de la actividad mercantil al detal o en buhonería, el Tribunal que tuvo a su cargo la dilucidación jurídica del caso, no expresa que encontró vinculación entre la droga decomisada y los artículos de joyería incautados, como instrumento o producto de la actividad de narcóticos. Sin embargo, el solicitante no ha presentado prueba de la propiedad y preexistencia de la mercancía decomisada, y de allí que su afirmación no sea suficiente para disponer el levantamiento de la medida cautelar adoptada.

En consecuencia, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL, DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el levantamiento de la aprehensión provisional decretada sobre la joyería de fantasía y de oro que se describe en las actas 3498 y 3499 de la Administración Regional del Ministerio de Hacienda y Tesoro, de 9 de octubre de 1991, practicada en la población de Arraiján, en la residencia 3094, alquilada por CARLOS JUAN PÉREZ ALONSO.

Notifíquese y cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DENUNCIA PRESENTADA CONTRA GUILLERMO FORD, RAÚL FIGUEROA, GABRIEL PEREIRA, MARIO GALINDO Y GUILLERMO ELÍAS QUIJANO, ALFREDO ARIAS GRIMALDO, TERESITA YANIZ DE ARIAS Y OTROS EN RELACIÓN A LOS CONVENIOS DE ASISTENCIA ENTRE PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE PECULADO Y APROPIACIÓN INDEBIDA (CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

El Procurador General de la Nación, mediante Vista Fiscal # 34 del 28 de mayo de 1993, remitió ante la Sala Segunda de lo Penal de esta Corte el sumario instruido con ocasión de la denuncia presentada por el señor **HÉCTOR ANTONIO AVILA BONILLA**, contra los señores **RAÚL FIGUEROA**, **GABRIEL PEREIRA**, **GUILLERMO FORD**, **MARIO GALINDO**, **GUILLERMO ELÍAS QUIJANO**, **ALFREDO ARIAS GRIMALDO**, **TERESITA YANIZ DE ARIAS Y OTROS**, por los supuestos delitos de peculado y apropiación indebida.

El 15 de junio de 1993, se procedió a efectuar el reparto correspondiente, a fin de que se decidiera sobre el mérito legal del negocio. Sin embargo, la Sala observa que entre los denunciados se encuentran tres Ministros de Estado, a saber: Mario Galindo, Ministro de Hacienda y Tesoro, Guillermo Quijano, Ministro de Vivienda y Alfredo Arias Grimaldo, Ministro de Obras Públicas; razón ésta que hace variar la competencia, ya que de conformidad con el artículo 87, numeral 2, literal b, del Código Judicial, es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el organismo jurisdiccional que tiene la competencia privativa para conocer de las causas por delitos comunes o faltas cometidas

por los Ministros de Estado. Por ello la Sala debe inhibirse de conocer esta causa y, proceder a efectuar la declinatoria correspondiente.

En virtud de lo expuesto, la **CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL,** administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se **INHIBE** de conocer este negocio y **DECLINA** la competencia del mismo ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA BLAS VELASQUEZ, JEFE DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, SINDICADO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD EN PERJUICIO DE JACOBO BRAWERMAN BARRANTES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación ingresó ante esta Corte el expediente que contiene las sumarias adelantadas con relación a la denuncia presentada por el señor **JACOBO BRAWERMAN** en contra del ingeniero **BLAS VELASQUEZ,** Director de Seguridad y Comunicaciones de la Autoridad Portuaria Nacional por el supuesto delito de abuso de autoridad.

El negocio fue remitido con la Vista Fiscal N°35 del 2 de junio de 1993, en la cual el Jefe del Ministerio Público solicita el archivo de la denuncia, por cuanto que -según su opinión- la misma no reúne los requisitos propios de los procesos seguidos contra servidores públicos.

Sostiene el Procurador que este proceso se tramitó con un procedimiento equivocado, y que con la labor investigadora que se llevó a cabo de manera oficiosa se ignoró que la carga de la prueba en este tipo de procesos especiales le corresponde a la parte actora, o sea, al denunciante.

Y finalmente destaca que la pretensión formalizada a través de la denuncia carece de sustento jurídico, toda vez que no se acompañó con la misma la prueba sumaria del relato, por lo que debe procederse a ordenar el archivo en base a lo que dispone el artículo 2471 del Código Judicial.

La denuncia fue presentada el 9 de julio de 1992 y en la misma se expuso que en nota del 8 de julio de 1992 el señor Blas Velásquez informó que en el establecimiento de propiedad de Brawerman se harán restructuraciones temporales y mejoras, por lo que debe prohibírsele la entrada al local a éste y a sus empleados.

El abuso de autoridad consiste -según el afectado- en que Velásquez no puede prohibirle la entrada al local. Y, en ese sentido, agrega que una vez termine las mejoras arreglará los permisos necesarios de aduana para poder operar y abrir el establecimiento nuevamente, pero no se le puede impedir la entrada al recinto Portuario sin haber una resolución de la Autoridad Portuaria Nacional.

El denunciante aportó como prueba copia de la nota cuya fecha correcta es 7 de julio de 1992, en la cual ciertamente consta que el denunciado Velásquez impartió la orden de que se le prohibiera a aquél y a sus empleados la entrada a la empresa CUBRAMOS, S. A. que opera en Coco Solo.

La referida denuncia fue presentada ante el Personero Tercero Municipal del Distrito de Colón, donde se dio inicio a la investigación. Posteriormente este despacho dispuso remitir lo actuado ante la Fiscalía Superior de Turno (f.10), agencia de instrucción que procedió a enviar los autos al Procurador General de la Nación (f.13), para que éste a su vez los remitiera ante la Fiscalía Delegada. Cabe anotar que todas estas remisiones se hicieron a pesar de que a folio 9 reposa nota del Administrador del Puerto de Cristóbal donde consta que Blas Velásquez desempeña el cargo de Jefe de Seguridad Portuaria y Comunicación a nivel nacional, o sea que es un funcionario con mando y jurisdicción en todo el territorio de la República.

Tres meses después de presentada la denuncia, el señor Brawerman compareció ante la Fiscalía Primera Delegada de la Procuraduría General de la Nación para manifestar que desiste de dicha acción por no considerarla necesaria, pues "luego de sostener conversaciones sostenidas con él (Velásquez), y aclararle ciertos puntos que él desconocía, me autorizó la entrada al muelle" (f.20).

Dada la manifestación de desistimiento del autor de la acción penal, el Ministerio Público decide enviar el negocio ante el Segundo Tribunal Superior, con la recomendación de que decrete el cierre del sumario y el archivo del expediente. Recibido éste en dicho tribunal colegiado, por razones de competencia las sumarias son remitidas ante esta Sala, con fundamento en lo que establece el artículo 95 (1) del Código Judicial.

Es así como recibido el expediente, la Sala procedió a enviarlo al Procurador General de la Nación, quien emitió la opinión ya comentada. Y además, con fundada razón expone que independientemente de que el denunciante haya presentado desistimiento de la denuncia, la clase de delito denunciado no se encuentra entre la lista de acciones penales que son susceptibles de ser desistidas, casos en los cuales se da por terminado el proceso y se ordena su archivo.

En este aspecto le asiste la razón al Procurador. Si el delito de abuso de autoridad no es de los procesos que admiten desistimiento, deberá procederse de

conformidad con lo que dispone el artículo 1975 del Código Judicial, según el cual el procedimiento en los procesos penales siempre será de oficio. Si asociamos este artículo con el artículo 1984 de la misma excerta, debe entenderse que al no ser de los procesos que admiten desistimiento, el procedimiento deberá conducir el negocio hasta que se dicte la resolución judicial que le ponga fin.

Es por eso que la Sala pasa a considerar otro aspecto, y es el referente a la conducta denunciada, aspecto que está relacionado con la prueba sumaria cuya aportación es requerida por la ley procedimental en esta clase de negocios.

Considera la Sala que la acción denunciada por Jacobo Brawerman no constituye delito. Del presente caso se desprende que la medida de no permitir el acceso al lugar se tomó como consecuencia de que la empresa tenía que renovar en la Dirección de Aduanas el permiso de operación y según el denunciante, una vez terminara con las mejoras, arreglaría los permisos necesarios para operar.

Prueba de que la conducta denunciada no constituye delito es el hecho de que en la misma denuncia el afectado manifestó que debió haber una resolución que expusiera la causa justificada que le impedía entrar al recinto portuario. Esto, a criterio de la Sala, guarda relación directa con la posible violación de la garantía fundamental del debido proceso, que es algo muy distinto a la comisión del delito de abuso de autoridad.

Si bien el denunciante aportó copia auténtica del hecho que denunció, en manera alguna éste puede equipararse a una conducta delictiva. Siendo que la conducta denunciada no constituye delito, la nota aportada no puede tener el carácter de prueba sumaria del relato. Estas razones son suficientes para que se proceda a ordenar el archivo del expediente previo a la dictación de un sobreseimiento definitivo con base en el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

En virtud de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA,** administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **SOBRESEE DEFINITIVAMENTE** en la presente sumaria y **ORDENA** el archivo del negocio.

Fundamento legal: Artículos 1975, 2471 y 2210 ordinal 2° del Código Judicial.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA CONTRA CARLOS CESAR LANDERO MORENO, SUB-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, SINDICADO POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, FALSEDAD Y NO ACATAR LAS NORMAS CONSTITUCIONALES EN PERJUICIO DE STEPHEN DE CASTRO ROBLES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de 24 de mayo de 1993, no admitió la acusación particular presentada por la defensa de **STEPHEN DE CASTRO** en contra de **CARLOS LANDERO MORENO**, en ese entonces Subdirector de la Policía Técnica Judicial.

Con la solicitud de que esa resolución sea revocada, el defensor de DE CASTRO interpuso recurso de reconsideración, basándose fundamentalmente en que no tiene la facultad de un funcionario de instrucción para practicar pruebas, dando a entender que por esa razón no le fue posible aportar la prueba sumaria de su relato. Además indica que en cuanto a los otros delitos acusados (violación de los derechos humanos y falsedad), no se requería de la prueba sumaria del relato y son delitos que se deben investigar de oficio, por lo que -sostiene- procedía admitir la acusación en cuanto a estos delitos. Refiriéndose a este último aspecto, el recurrente expresa que "con solamente ésta denuncia se tenía que conceder de oficio las investigaciones de lo aquí planteado".

Es de conocimiento público que hasta el 15 de junio de 1993, el licenciado CARLOS LANDERO MORENO desempeñó el cargo de Sub Director de la Policía Técnica Judicial. Diez días después, o sea, el 25 de junio de 1993, el defensor de DE CASTRO fue notificado de la resolución que no admitió la acusación particular, tal como consta al reverso del folio 45, y seguidamente interpuso recurso de reconsideración.

La competencia que tenía la Sala al momento de ser presentada la acusación particular, por razón de que el acusado en ese instante desempeñaba un cargo con mando y jurisdicción en todo el territorio de la República, desaparece precisamente cuando la persona acusada deja de ocupar el referido cargo. Situación que tiene incidencia en el pronunciamiento que a través de este recurso de reconsideración requiere el sustentante.

En efecto, actualmente la Sala Segunda no tiene la competencia para emitir este nuevo pronunciamiento y por ello debe inhibirse de resolver este recurso.

En virtud de lo anotado, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE de resolver este recurso de reconsideración y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO. SUMARIAS SEGUIDAS EN AVERIGUACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN PERJUICIO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Daniel R. Batista, Fiscal Segundo Delegado de la Procuraduría General de la Nación, ha manifestado impedimento para conocer, como funcionario instructor, de "Las sumarias seguidas en averiguación de los responsables del delito Contra la Administración Pública en perjuicio de la Corporación Financiera Nacional (COFINA)".

Expone el manifestante que en las sumarias consta que Cofina otorgó préstamos y avales a la Sociedad Cauchos de Panamá, S. A., por la suma de B/.2,513,975.95. Que en virtud de que la empresa Cauchos de Panamá incumplió con la obligación contraída con Cofina, esta última vendió el crédito de la primera a la Sociedad Desarrollo Comercial y Financiera, S. A., en la suma de B/.450.000.00. Que con relación a estos hechos, los auditores de la Contraloría elaboraron un informe donde concluyen que Cofina se vio afectada por esa operación en B/.2,407.011.51. Con respecto a ese faltante, además de la responsabilidad que pudiera caberle a los directores de Cofina de esa época, los auditores sugieren la posible participación dolosa de las sociedades Cauchos de Panamá y Desarrollo Comercial y Financiera, S. A.

Conforme a los hechos expuestos, el manifestante explica su impedimento en los siguientes términos:

> "A foja 323 del expediente consta un certificado del Registro Público de la Sociedad DESARROLLO COMERCIAL Y FINANCIERA, S. A., donde aparezco como suscriptor de dicho pacto social.
>
> A pesar de que desconozco todo lo relacionado con esta operación que hoy se investiga, ya que mi participación se limitó a la suscripción de este pacto social, es conveniente que se realice una investigación libre de toda suspicacia, y que se agote la misma con el fin de determinar si se ha cometido un delito, y quienes son los responsables" (f.391).

Se aprecia que, efectivamente, en las sumarias consta el documento aludido por el manifestante, que lo acredita como suscriptor de la Sociedad Desarrollo Comercial y Financiera, S. A.(f.323), e igualmente se constata el señalamiento que en el referido informe de auditoría se hace en contra de las aludidas sociedades anónimas (fs.202-203, 210-211). En tal circunstancia, las razones del impedimento que se califica están expresamente comprendidas en el artículo 749, numeral 12, del Código Judicial, por lo que es del caso acceder a la solicitud y proceder de conformidad con lo preceptuado en el artículo 390 de la misma excerta legal.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la manifestación de impedimento formulada por el Licdo. Daniel R. Batista para conocer de esta investigación, LO SEPARA de su conocimiento y llama al Fiscal Primero Delegado de las Procuraduría General de la Nación para que se ocupe de la instrucción de las sumarias.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA GUILLERMO LEBLANC JR. Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE ZONAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SINDICADOS POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PECULADO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En virtud de denuncias que fueran presentadas se procedió a la instrucción de sumarias contra Guillermo Leblanc Jr., Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá y contra el Consejo de Directores de Zonas de los Cuerpos de Bomberos de la República, por los delitos de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos y Peculado. Encontrándose el negocio para la calificación del mérito legal de las sumarias, el Jefe del Ministerio Público ha remitido otro expediente instruido por los mismos hechos y contra las mismas personas, con la finalidad de que se decida sobre su acumulación, de conformidad con lo que establecen los artículos 1973 y 2291 del Código Judicial.

El examen del segundo expediente en referencia permite comprobar que contiene documentos, en su mayoría, iguales a los que constituyen el segundo tomo del cuaderno principal radicado en este Despacho, remitidos al Procurador General por el Fiscal Primero Delegado (f.849). Entre esos documentos se destaca el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, de 19 de febrero de 1992 (f.1), vinculado con "las operaciones financieras del Cuerpo de Bomberos de Panamá relacionada exclusivamente

con el manejo de los Fondos del 5% (Impuesto sobre Primas de Seguros Contra Incendio)". Este documento se encuentra a fs.369 y 587 del expediente principal. Adicionalmente, constan en el expediente recién enviado las declaraciones juradas de Guillermo Leblanc (fs.24 y 391), Hiram Othon Oduber (fs.233 y 386), y de Leopoldo G. Mojica (fs.252 y 395), personas éstas, entre otras, vinculadas a la investigación principal por los mismo hechos, conforme la Vista del Procurador (f.943).

Como quiera que en ambas sumarias se investiga la misma conducta delictiva y que existe identidad de las personas presuntamente implicadas, es del caso acceder a la solicitud de acumulación, con fundamento en el artículo 2291 del Código Judicial.

En razón de lo expuesto LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA ACUMULACIÓN de los cuadernos que contienen las sumarias instruidas contra Guillermo Leblanc Jr., Leopoldo Mojica C., Hiram O. Oduber Luis C. Endara y los miembros del Consejo de Directores de Zonas del Cuerpo de Bomberos de Panamá, sindicados por los delitos de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos y Peculado.

Para el mejor manejo del expediente, SE DISPONE mantener como tomo tercero el cuaderno acumulado, con la debida corrección de la foliación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA CRIMINAL INTERPUESTA CONTRA FRANCISCO DENIS DURAN, GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (I.N.T.E.L.), POR ABUSO DE AUTORIDAD Y CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EN PERJUICIO DE SOIKA ELIZABETH CASTILLO ORTEGA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, reingresó a esta Corporación Judicial el expediente que recoge la investigación a que dio lugar la denuncia criminal interpuesta contra FRANCISCO DENNIS DURAN, Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), sindicado por los delitos de abuso de autoridad y actos violatorios de los derechos humanos en perjuicio de SOIKA ELIZABETH CASTILLO ORTEGA, denuncia que fuera presentada en representación de la afectada el 25 de agosto de 1992, por el Legislador Guillermo A. Cochez, en ejercicio profesional de la abogacía (f.29).

Con anterioridad, esta Sala mediante auto de 16 de febrero de 1993, después de recibir el sumario instruido por el Procurador General de la Nación en este mismo caso, dispuso la ampliación del sumario a fin de que se practicaran algunas diligencias esenciales con relación a los hechos motivo de investigación y que se referían a una aclaración de parte del denunciado sobre algunas de sus manifestaciones al contestar el interrogatorio escrito que se le envió y para que se aportara la prueba de la calidad de servidor público que ostentaba el señor Dennis Durán al momento en que ocurrieron los hechos que originaron la presente denuncia, al igual que otras diligencias destinadas a perfeccionar el sumario.

En cumplimiento de la ampliación decretada, se incorporaron los documentos que obran de fojas 67 a 120 del expediente, en los que se aporta un ejemplar del periódico El Panamá América correspondiente al día 20 de abril de 1993, el acta de toma de posesión de Francisco Dennis Durán como Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones ante el Ministerio de Gobierno y Justicia el 11 de abril de 1991, el Decreto N°93 de 10 de abril de 1991, en virtud del cual el Presidente de la República en compañía de su Ministro de Gobierno y Justicia hace el nombramiento de Francisco Dennis Durán como Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones y el de Horacio Robles Díaz como sub-gerente de la misma institución. También se incorpora la declaración indagatoria del denunciado (fs.91-99) y las declaraciones juradas rendidas por Sotero Solís Barahona (fs.103-107) e Higuebaldo Antonio Moscoso Quintero (fs.108-113). Dentro de esa documentación a que venimos haciendo referencia, se encuentra la nota N°GRH-62-93-052 de 7 de junio de 1993, firmada por Higuebaldo Moscoso como Gerente de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, a la que adjuntó fotocopias auténticas del acta de nombramiento y toma de posesión de la señora SOIKA ELIZABETH CASTILLO ORTEGA.

Con posterioridad al ingreso del expediente a la Sala Segunda, el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Guillermo Pianetta, remitió el historial policivo y penal del señor Francisco Dennis Durán, el que se puede leer a fojas 123 y 124 de este expediente.

De conformidad a la denuncia presentada, la comisión del delito de abuso de autoridad que se le imputa al Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, obedece a que, en criterio del denunciante, la Ley 80 de 1973 al conferirle al Gerente General la potestad de "nombrar, trasladar, ascender, suspender, separar y remover el personal subalterno, determinar sus deberes y atribuciones dentro del Instituto Nacional de Telecomunicaciones", no le extiende sus facultades para cambiar títulos degradando a sus empleados, ni tampoco sus acciones pueden fundamentarse en el simple capricho o en el mero arbitrio, so pretexto de que no existe carrera administrativa, pues, esto dejaría desprotegidos a los servidores públicos al darle potestad al Estado para que actúe a su antojo violando la Constitución y la Ley. Se le acusa además de haberse valido de un traslado arbitrario, degradando, pero manteniendo con el mismo salario a la señora Castillo Ortega, encubriendo así su propósito de destituirla, lo que terminó haciendo posteriormente.

Con relación a la comisión de actos violatorios de los Derechos Humanos en el texto de la denuncia se citan los compromisos que ha adquirido la República de Panamá en acatar el Derecho Internacional y esto se reafirma en el Derecho Interno desde el momento en que ha expedido las leyes 13, 14 y 76, 15 de 1977 y la N°4 de 1980 que consagran los derechos, garantías y libertades más conocidas en la ideología de los derechos humanos. Se dice que el Gerente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, desconoció el texto de estas leyes, haciendo prevalecer su voluntad por encima de la ley, pues no sólo despojó a la señora Castillo Ortega de sus funciones, sino que la marginó y luego le prohibió su ingreso al área de trabajo a partir del 10 de agosto de 1992, en desacato de una orden de suspensión que se dio con motivo de una acción de amparo de garantías.

El más alto representante del Ministerio Público, tanto en su vista N°1 de 8 de enero de 1993 (fs.51-55), como la N°38 de 18 de junio de 1993 (fs.118-120), estima que con la documentación que acompañó la denuncia más los elementos incorporados a la investigación, no se ha logrado acreditar que existan los presupuestos indispensables para encuadrar los hechos denunciados dentro del marco de lo doloso, pues por el contrario, el servidor público acusado, de conformidad a la ley, tiene facultades para nombrar, trasladar, ascender, suspender, separar y remover el personal subalterno, determinar sus deberes y atribuciones dentro de las atribuciones propiamente administrativas referidas al personal, con evidente validez. Tal opinión la reitera en la Vista N°38 de 18 de junio del año en curso (fs.118-120) y añade que los actos denunciados, solo son atacables por la vía administrativa y que no tipifican delito alguno.

El abogado denunciante, sin haberse constituido en acusador y por tanto, sin la categoría de parte en el proceso, presentó al funcionario instructor una solicitud especial, calendada el 27 de abril de 1993 (fs.70-82) en la que pide la aplicación del artículo 2470 del Código Judicial en el sentido de decretar la detención y la subsiguiente suspensión del cargo que ejerce el señor Denis Durán como Gerente General del INTEL. Estima que la admisión de la denuncia con la prueba sumaria aportada, es indicador de que el hecho punible imputado se había acreditado y surgía la obligación del Ministerio Público de imprimir el impulso procesal del caso acatando la ley decretando la suspensión del cargo del imputado.

Agotada la ampliación ordenada cabe examinar las constancias del sumario a efecto de valorar si se ha logrado establecer la existencia de los hechos punibles denunciados y la identificación de la o las personas que con la calidad de su conducta se alinearon al tipo penal correspondiente.

Como se expresó antes, la denuncia que se hace contra el Director general del INTEL es por los delitos de abuso de autoridad y contra los Derechos humanos.

Respecto al primero, la conducta realizada por el denunciado consiste en haber trasladado a una empleada de esa institución de un cargo a otro, ubicado en distintas áreas de la ciudad de Panamá, degradándola en opinión del denunciante, por ser un cargo de inferior categoría. Para que la conducta descrita adquiera tipicidad, es necesario que la misma tenga la particularidad o calidad de adecuación al tipo que describe el hecho punible, en este caso al artículo 336 del Código Penal. Esa norma dice: "el servidor público que, con abuso de su cargo ordene o cometa en perjuicio de alguna persona cualquier hecho arbitrario no clasificado especialmente en la ley penal ...". La Corte ha clarificado el sentido y alcance de esta disposición en distintos fallos, señalando la necesidad de concurrencia de varios requisitos, propios de la estructura del tipo, que es genérico y subsidiario y que por la calidad de sujeto activo es calificado, mientras que por los verbos rectores alternativos que incluye, permite la realización o bien de un acto arbitrario no clasificado en la ley, o excederse en el ejercicio de las funciones, en ambos casos con abuso de sus funciones.

En el caso que nos ocupa, que se ventiló inicialmente por la vía administrativa, mediante los recursos correspondientes, se acudió también al control constitucional de la acción de amparo, se capta que es una acción propia del movimiento de personal, que si bien puede ser ilegal, no reviste la gravedad del injusto penal para erigirlo en conducta desvalorada, pues si se considera que todas las destituciones, traslados, insubsistencias, rebajas de categoría, etc., son actos arbitrarios propios del hecho punible conocido como abuso de autoridad, ello nos conduciría a un exceso penal, en abierta contradicción con la tendencia contemporánea en materia penal, que es la de minimizar el Derecho Penal en su aspecto represivo, seleccionando solamente las conductas graves, atentatorias de bienes jurídicos, como las que alcanzan la categoría delictiva, las otras más leves o son contravenciones o faltas de carácter administrativo o disciplinario, pero no todos los actos arbitrarios per se son delitos, menos aún cuando la persona supuestamente afectada por dicho acto en este caso, carece del beneficio de carrera administrativa y no ha ingresado en el escalafón de la institución en la que prestó sus servicios.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema tiene entre sus funciones la revisión sobre la legalidad de los actos de la administración y decidir en consecuencia. Los actos de destituciones o movimiento de personal, en los que los que los afectados consideran que se han violado los derechos que la ley les confiere, una vez agotados los medios impugnativos ordinarios, son sometidos a esa instancia, por ser la vía idónea para examinar la legalidad de los actos administrativos.

Con relación a la violación de los derechos humanos, conducta por la cual también se denuncia al Gerente General del INTEL, la Sala Segunda ha mantenido como criterio de interpretación del artículo 310 del Código Penal, segundo párrafo, que el mismo se refiere a los casos de violaciones masivas, indiscriminadas, de los derechos y garantías fundamentales, pues nuestro Código punitivo tipifica de manera particular las conductas lesivas o atentarias de cada uno de los derechos humanos, como la vida, libertad, honor, etc.

No cabe duda alguna que una administración pública eficiente, estable y eficaz es aquella donde sus servidores ingresan por el sistema de méritos, concursos u oposición y están debidamente delimitadas las funciones de todas las jerarquías, los derechos y obligaciones de todo el personal, en forma tal que el servicio civil y la carrera administrativa otorgue estabilidad en el cargo a los servidores del sector

público y no estén sujetos a los vaivenes de los cambios políticos. En Panamá, esa aspiración aún no se cumple plenamente, pocas instituciones tienen este beneficio y de allí que no se pueda trasladar a la Ley Penal como conductas punibles aquellas que no se han tipificado previamente, pues se violaría la máxima penal heredada de la época de las luces y del Derecho Penal revolucionario francés del "nullum crimen nulla poena sine proevia lege".

Por las razones anotadas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en el presente caso, con fundamento en lo previsto en el ordinal 2° del artículo 2210 del Código Judicial.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA INTERPUESTA POR EL LEGISLADOR ABELARDO E. ANTONÍO CONTRA RODRIGO HERNÁN AROSEMENA DE ROUX, SINDICADO POR EL DELITO EN QUE HAYA INCURRIDO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El legislador Abelardo Antonio presentó "denuncia popular" ante el Procurador General "en contra de la actitud asumida por el actual Director General de Aduanas, Lic. Rodrigo Hernán Arosemena De Roux", por lo que considera "una verdadera omisión", consistente en que no había "recibido respuesta" a "carta o nota" que le dirigiera para denunciar "una serie de contrabandos de maquinarias o equipos pesados" que tiene lugar en muelles de la Provincia de Colón.

La autoridad instructora aprehendió el conocimiento de tal denuncia "por el delito EN QUE HUBIESE INCURRIDO" el Director de Aduanas y, en consideración del lugar donde supuestamente han ocurrido los hechos denunciados, comisionó al Fiscal Primero del Circuito de Colón la instrucción de las sumarias.

Luego de practicadas las diligencias que considerara pertinentes para el descubrimiento de los hechos denunciados, el Fiscal comisionado declaró cumplido el encargo y dispuso devolver el negocio al despacho de origen. Por reingresado el negocio a su despacho, el Procurador General decidió remitir la actuación a la Sala Penal de la Corte Suprema, mediante Vista consultable a folios 74 a 79 del cuaderno, con la solicitud de que se ordene "el archivo de lo denunciado" (f. 79), ello con fundamento en lo que dispone el artículo 2471 del Código Judicial.

En opinión del Procurador General el trámite que corresponde a esta denuncia es el de los procesos especiales contra servidores públicos, "que exigen que la prueba sumaria presentada sea idónea y eficaz para comprobar el hecho punible denunciado" siendo que, a su modo de ver, el legislador Antonío aportó con su denuncia documentos que no se ajustan a las normas procesales por cuanto no se encuentran autenticados. Con apoyo en lo que establecen los artículos 2468 y 2471 del Código Judicial manifiesta su criterio a este respecto como sigue:

> "Dicho en otros términos, y de acuerdo al contenido de las normas supra citadas, los documentos aportados por el denunciante, no reúnen los requisitos mínimos indispensables, para probar o acreditar el delito de omisión o falta de cumplimiento de sus deberes, en el que, según criterio del Legislador Antonío, incurrió el Director General de Aduanas. Es decir, las copias de estos documentos, sin autenticar, no constituyen la prueba sumaria de ilícito alguno, amén de que no consta documentación ni actuación de ninguna naturaleza, en la que se determine que el servidor público denunciado ha omitido darle trámite a la nota enviada a él. El hecho de que el Director General de Aduanas no le haya informado de sus gestiones al denunciante, no es elemento probatorio suficiente para comprobar o acreditar el delito de omisión, en el que se dice, incurrió el funcionario en mención".

Advierte la Sala que lo que propiamente persigue esta nueva "carta o nota" del Legislador Antonío (f.1.) es formular una denuncia por no haber recibido respuesta de la carta o nota que anteriormente dirigiera al Director de Aduanas, conducta que a su juicio se representa en un incumplimiento de deberes, con lo que sujeta la actuación al procedimiento que tienen previstos los artículos 2468 y 2471 del Código Judicial, transcritos en la Vista Fiscal. La última de estas normas establece un requisito de procedibilidad de la instrucción sumarial y de la actuación judicial, consistente en que quien promueva la denuncia "deberá acompañar la prueba sumaria de su relato", exigencia esta a la que se refiere abundante jurisprudencia de la Corte Suprema, tanto del Pleno como de la Sala Penal, de la cual se ocupa la vista fiscal en dos de sus manifestaciones. La última norma en cita es definitoria al de precisar que "se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible", lo que necesariamente conduce a examinar la documentación presentada por el denunciante (fs.2 a 8) con el objeto de determinar si con ella se satisface tal exigencia legal.

Además de la comprobación de que, efectivamente, los documentos presentados por el denunciante carecen de valor legal por cuanto no se encuentran debidamente autenticados, su examen permite establecer igualmente que ninguno de ellos está dirigido a comprobar, ni directa ni indirectamente, la alegada conducta omisiva del funcionario denunciado, como tampoco a acreditar la existencia del hecho punible. De tal manera que, en razón del incumplimiento inexcusable de ese requisito, y por tratarse de un caso comprendido entre los procesos especiales contra los servidores públicos, la denuncia

no debió siquiera ser acogida. De manera que, en este momento procesal, lo conducente es proceder de conformidad con la recomendación que formula el representante del Ministerio Público en la Vista de mérito.

En base a las consideraciones expuestas, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el archivo del presente negocio.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

JULIO 1993

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PEDRESCHI Y PEDRESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE TELESISTEMAS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO. GG-05-93 DE 16 DE FEBRERO DE 1993, EMITIDO POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La firma **PEDRESCHI Y PEDRESCHI**, en representación de **TELESISTEMAS, S. A.**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° GG-05-93 de 16 de febrero de 1993, emitido por la Gerencia del Banco Nacional de Panamá, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda presentada, y se percata que consta en el libelo una solicitud especial para que se declare la Suspensión Provisional de los efectos de la resolución impugnada.

Para tal efecto, el actor ha formulado su solicitud en los siguientes términos:

> "Respetuosamente solicitamos en esta Sala, que ordene la suspensión temporal de los efectos de la adjudicación definitiva de la Licitación Pública 08-92 hecha por el Banco Nacional de Panamá a favor de Multitek Internacional, S. A., mediante los actos que se impugnan en este proceso contencioso-administrativo, hasta tanto se emita el pronunciamiento de fondo".

Frente a la petición antes transcrita, debemos señalar que no es viable acceder a la pretensión incoada, toda vez que la parte actora no ha enunciado, ni probado el perjuicio grave, notorio e irreparable, que el acto impugnado pueda ocasionar al recurrente.

En reiteradas ocasiones (Ver Auto de 30 de abril de 1992) ha señalado este Tribunal, que para proceder a suspender un acto administrativo, el mismo debe causar a todas luces un daño irreparable y este debe ser alegado, explicado diáfanamente y probado, tal como lo prevé el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, que dice:

> "El Tribunal de lo Contencioso-administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave".

Se infiere de la excerta legal antes transcrita que para que esta Sala suspenda los efectos de un acto, resolución o disposición debe estar condicionada a que a su juicio, la suspensión se justifique y sea necesaria para evitar lesión grave en el patrimonio del demandante, situación esta que no cumplió el peticionario.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de Suspensión del Resuelto N° GG-05-93 de 16 de febrero de 1993, emitido por la Gerencia del Banco Nacional de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RAMSEY, PÉREZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALFREDO VILLARREAL, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL NO. 26 DE 3 DE MAYO DE 1993, EMITIDO POR EL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La firma forense Ramsey, Pérez y Asociados ha interpuesto, en representación de LUIS ALFREDO VILLARREAL, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 26 de 3 de mayo de 1993, expedido por el Tribunal Tutelar de Menores, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Sustanciador procede en primer término, a examinar el libelo incoado en vías de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos formales de admisión.

El suscrito Magistrado Sustanciador observa que la demanda no cumple con los requisitos exigidos para su admisión debido a una evidente deficiencia en la exposición de las disposiciones violadas y el concepto en que lo han sido. El apoderado judicial del demandante se limita a mencionar las normas que considera infringidas y omite la transcripción literal de las mismas. Aunado a lo anterior, se señala como violado el Reglamento Interno de la institución sin individualizar las normas que dentro de ese reglamento se consideran infringidas. Finalmente, no se señala el concepto en que dichas

normas han sido violadas y la explicación correspondiente a la infracción alegada, todo lo cual incumple con lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 33 de 1946.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma Ramsey, Pérez y Asociados, en representación de LUIS ALFREDO VILLARREAL, y ORDENA su devolución al interesado para que la corrija, tal como lo dispone el artículo 51 de la Ley 135 de 1943.

Notifíquese.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL E. COLLINS NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE YADIRA JUDITH LOAIZA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 499 DE 11 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **RAFAEL F. COLLINS NÚÑEZ**, en representación de **YADIRA JUDITH LOAIZA**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 499 de 11 de marzo de 1993, emitida por el Ministerio de Educación, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Junto con el libelo de la demanda se ha solicitado, previa admisión de la misma, se suspenda los efectos del acto acusado de ilegal, aduciendo lo siguiente:

> "En virtud de que el traslado de mi representada le acarrea serios perjuicios económicos y familiares, además de que hasta la fecha no se le ha explicado si su traslado constituye un reconocimiento o una sanción es que le deprecamos se suspenda dicho traslado hasta tanto se resuelva esta demanda"...

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados de la Sala Tercera, entran a resolver la presente solicitud.

La parte actora pretende se suspenda los efectos de la Resolución N° 499 de 11 de marzo de 1993, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, que a la letra dice:

> "Artículo 73:
> El Tribunal de lo contencioso-administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave".

El artículo supracitado, de la Ley Contencioso Administrativa, prevé la posibilidad de suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, para evitar un perjuicio notorio, grave e inminente a persona o personas determinadas.

Más sin embargo la misma Ley Contencioso Administrativa es clara al determinar las excepciones para que no se conceda la suspensión de los actos:

> "Artículo 74:
> No habrá lugar a suspensión provisional los siguientes casos:
>
> 1. En las acciones referente a cambios, remociones, suspensión o retiro en el personal administrativo, salvo los casos de empleados nombrados por períodos;"...

En el presente caso la señora **YADIRA JUDITH LOAIZA**, es funcionaria administrativa del Ministerio de Educación, y labora desde 1978 en esta entidad gubernamental, es decir, es funcionaria permanente (Ver foja 1), por lo que le es perfectamente aplicable las excepciones antes señaladas y por ende no es dable acceder a la solicitud de suspensión impetrada contra la Resolución N° 499 de 11 de marzo de 1993, que traslada a la precitada de su centro de trabajo aquí en ciudad de Panamá, a la Provincia de Bocas del Toro. En este mismo sentido, el auto de 27 de noviembre de 1992 recoge el criterio de esta Sala, en el que se plasmó lo expuesto en líneas anteriores (ver caso **LILLIAN HILL DE VELÁSQUEZ vs MINISTERIO DE EDUCACIÓN**.).

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema (Contencioso Administrativo), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 499 de 11 de marzo de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. HERACLIO SANJUR MARCUCCI, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N DE 15 DE FEBRERO DE 1993, EMITIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Heraclio Sanjur Marcucci, actuando en su propio nombre y representación, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 204 de 15 de febrero de 1993, dictada por el señor Procurador General de la Nación, Primer Suplente Encargado; el acto confirmatorio, salvo en lo que se refiere a las vacaciones a que tiene derecho el demandante; y para que se haga otras declaraciones.

En la demanda se solicita se suspenda provisionalmente los efectos de la resolución impugnada, por las siguientes razones:

1. Se ha causado al demandante, daños notoriamente graves, de orden moral, de carácter patrimonial, inminentes, actuales y latentes;
2. Con anterioridad al despido, al suscrito demandante no se le dio la oportunidad de defensa, no "fue oído", no se le instruyó un previo, justo y debido proceso penal ni tampoco un previo, justo y debido proceso disciplinario o por falta contra la ética judicial;
3. La ley permite la suspensión provisional de los efectos del acto, como el aquí demandado, cuando se trata de "...los casos de empleados nombrados para períodos fijos" (artículo 74, numeral 1o. y artículo 77, numeral 1o., Leyes 135 de 1943 y 33 de 1946, respectivamente);
4. El Fiscal Auxiliar de la República, y Heraclio Sanjur Marcucci lo era en el momento de ser despedido, - es nombrado para un período fijo de seis (6) años (artículo 331 del Código Judicial);
5. Existe un manifiesto, evidente y ostensible choque o colisión entre las normas aplicables para remover a un agente del Ministerio Público y el o los actos acusados; y,
6. La acción principal no está prescrita.

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 preceptúa que es potestativo del Pleno de la Sala decretar la suspensión provisional de los efectos del acto originario impugnado, si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

El ordinal 1 del artículo 74 de la Ley 135 de 1943 establece que no habrá lugar a suspensión provisional en las acciones referentes a cambios, remociones, suspensión o retiro en el personal administrativo, **salvo los casos de empleados nombrados para períodos fijos.**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 331 del Código Judicial, el período de nombramiento del Fiscal Auxiliar de la Procuraduría General de la Nación es de 6 años, pero sujeto a las disposiciones de la Carrera Judicial, de manera que por tratarse de un funcionario nombrado por período fijo, esta Sala procede a examinar la solicitud presentada.

Mediante el acto originario impugnado se declaró insubsistente el nombramiento del licenciado Heraclio Sanjur Marcucci, como Fiscal Auxiliar de la República. Esta decisión se fundamentó en las siguientes razones:

1. Que desde su fecha de designación como Fiscal Auxiliar de la República, el licenciado Sanjur, no presentó ninguna relación de expediente pendientes y/o tramitados en la Fiscalía a su cargo, lo que denota una manifiesta y prolongada morosidad, incurriendo en violación directa y flagrante de la ley.
2. Que de las oficinas de la Fiscalía Auxiliar desapareció el expediente contentivo del sumario seguido a él o los responsables de la explosión ocurrida el día viernes 6 de noviembre de 1992, en el establecimiento de la Procuraduría General de la Nación, lo que denota una total negligencia y falta de cuidado en el manejo de los expedientes, por lo que se incurre en violación directa y flagrante de la Ley.
3. Que la Procuraduría General de la Nación, el día 20 de enero de 1993, con fundamento en el artículo 22 del Código Judicial, conceptuó que se debía destituir a aquellos funcionarios que en la prueba de detección de drogas, resultaran positivo; y sin embargo, el Fiscal Auxiliar de la República, sin tener en cuenta lo previsto en el artículo 22 ibidem, promovió con fundamento en el artículo 297 ibidem, un proceso disciplinario contra dichos funcionarios, que no conlleva la pena de destitución. Sobre este tema se toma en cuenta que el uso de drogas es un comportamiento incompatible con las funciones y la conducta propia de los empleados del Ministerio Público.
4. Que la Procuraduría General de la Nación requirió personal y verbalmente, ante testigos, al señor Fiscal Auxiliar de la República, que le informara diariamente de los casos y hechos de su conocimiento y trámite, y que dicho funcionario hizo caso omiso de tales requerimientos, tanto más que expresó que no tenía por que hacerlo. Constituye una atribución especial del Procurador General de la Nación, de acuerdo al artículo 347 ordinal 5, del Código Judicial, cuidar que los demás servidores públicos del Ministerio Público desempeñen fielmente sus cargos, y exigirles responsabilidad por las faltas o delitos que cometan y ejercitar las acciones correspondientes. En virtud de lo anterior, el Procurador señala en su resolución que el señor Fiscal Auxiliar no goza de su confianza.
5. Que el licenciado Sanjur Marcucci no está amparado por Carrera Judicial y se justifica su remoción, conforme lo previsto en el artículo 271 del Código Judicial, por incurrir en los hechos anteriormente señalados, y además se estima que puede ser libremente removido por el Procurador del cargo que desempeña.

Algunas de las razones antes enumeradas en las cuales se fundamenta el acto originario impugnado constituyen violaciones a la ley y por tanto a las reglas de la ética judicial, de acuerdo con el artículo 440 del Código Judicial, por tanto, aparentemente, al actor no lo ampara el fumus boni iuris o humo del buen derecho y siendo esto así la medida cautelar pedida debe negarse.

Los hechos y derecho en que el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional constituyen el fondo de la controversia, el cual será oportunamente resuelto.

De consiguiente, el Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la Suspensión Provisional de los efectos de la Resolución No. 204 de 15 de febrero de 1993, dictada por el Procurador General de la Nación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEX H. GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°1 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1991, EXPEDIDA POR EL CONSEJO TÉCNICO DE SALUD, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Lcdo. Alex H. González, actuando en representación de Santiago Augusto Peña Díaz, en el momento de notificarse de la Resolución de 28 de abril de 1993 expedida por la Sala Tercera manifestó que apelaba de la misma. En dicha resolución, se resuelve la apelación que interpuso el Procurador de la Administración contra la Resolución de fecha 17 de agosto de 1992, expedida por la Magistrada Sustanciadora que oportunamente admitió la demanda. En la Resolución de 28 de abril, la Sala Tercera no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la parte actora con el objeto que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°1 de 20 de noviembre de 1991, expedida por el Consejo Técnico de Salud.

Sobre el particular la Sala expone lo siguiente: Conforme al artículo 1114 parte final, del Código Judicial, a la parte actora sólo le es permitido interponer el recurso de reconsideración por cuanto la norma establece que admiten reconsideración aquellos autos expedidos por un Tribunal colegiado "que revoquen reformen...", resoluciones de primera instancia, siendo este el caso que nos ocupa. La situación señalada, aunada a la regla proveniente del mismo artículo, con relación a que sólo son reconsiderables aquellos autos, sentencias y providencias que no admiten apelación, demuestran que el mencionado recurso es a todas luces improcedente.

En conclusión, opina la Sala, que el recurso de apelación que nos ocupa debe ser rechazado por improcedente.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA de plano por improcedente el recurso de apelación presentado por el Lcdo. Alex H. González en representación de Santiago Augusto Peña Díaz, contra la Resolución del 28 de abril de 1993, expedida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la parte actora con el objeto que se declare nula por ilegal, la Resolución N°1 de 20 de noviembre de 1991,expedida por el Consejo Técnico de Salud.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROLANDO MARCOS-HERMOSO CORDICH, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 4742-92-DPN DE 5 DE AGOSTO DE 1992, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rolando Marcos Hermoso C., en su condición de apoderado de oficio del señor José Luis De La Guardia, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 4742-92-DNP de 5 de agosto de 1992, dictada por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

La parte actora solicita en su demanda que se requiera a la Secretaría General de la Caja de Seguro Social que autentique "en forma debida los documentos aportados como prueba en la presente demanda en vista de que hasta la fecha no han remitido la documentación autenticada que solicitara... el día 5 de mayo de 1993, mediante nota dirigida al Secretario General de la Caja de Seguro Social y nota de fecha 15 de junio de 1993" (fs. 107-108).

A fojas 94 del presente expediente reposa copia de la solicitud de las referidas copias, como prueba de la denegación de las mismas, por lo que con fundamento en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, y a fin de que se pueda comprobar si la demanda presentada cumple con los requisitos de Ley para su presentación, debe requerirse al Secretario General de la Caja de Seguro Social que remita a esta Sala copia autenticada de los actos impugnados.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA que por Secretaría se solicite al Secretario General de la Caja de Seguro Social, remita a este Tribunal en el término de cinco días, copias autenticada de los siguientes documentos:

1. De la Resolución No. 4742-92-DNP dictada el 5 de agosto de 1992 por Director General de la Caja de Seguro Social, con las constancias de su notificación;
2. De la Resolución No. 7843-93-JD dictada el 18 de marzo de 1993 por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, con las constancias de su notificación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROLANDO PALACIOS EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL MEMORÁNDUM NO. 93(213-02)137 DE 2 DE ABRIL DE 1993, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado ROLANDO ENERO PALACIOS ROBLES, en su propio nombre y representación, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el MEMORÁNDUM No. 93(213-02) 137 de 2 de abril de 1993 expedido por la Secretaría General del Banco Hipotecario Nacional.

En el libelo de su demanda el recurrente solicitó a la Sala que antes de admitir la demanda, requiera a la Secretaría General del Banco Hipotecario Nacional, que certifique si ha sido resuelto el Recurso de reconsideración interpuesto mediante Memorándum 93(120-02)317 de 6 de abril de 1993, contra el acto administrativo impugnado, en virtud de que esta certificación fue solicitada a dicha institución para probar ante esta Sala el silencio administrativo y esa petición no ha sido atendida.

De fojas 7 a 18 de este expediente reposan los escritos de recurso de reconsideración y de apelación interpuestos por el licenciado ROLANDO E. PALACIOS contra la decisión contenida en el Memorándum No. 93(213-02)137 de 2 de abril de 1993, expedido por la Secretaría General del Banco Hipotecario Nacional.

El licenciado PALACIOS, como se observa a fojas 20 y 30 del expediente, solicitó al Gerente General y al Secretaría General del Banco Hipotecario Nacional certificaran si había recaído decisión alguna sobre los recursos de reconsideración y apelación interpuestos, pero dicha certificación no consta en el expediente.

El ordinal 1o. del artículo 22 de la Ley 33 de 1946 preceptúa que interpuestos alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 20 de la Ley 33 de 1946 (Reconsideración y Apelación), se entienden negados, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 permite al Magistrado Sustanciador solicitar, antes de admitir la demanda y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina donde se encuentre el original, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación.

Con fundamento en las disposiciones antes mencionada y en virtud de la falta de respuesta del funcionario demandado, a la solicitud del recurrente, se dispone solicitar la certificación pedida por el recurrente, antes de admitir la presente demanda.

En consecuencia, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Memorándum No. 93(213-02)137 de 2 de abril de 1993, de la Secretaría General del Banco Hipotecario Nacional, DISPONE solicitar a la Secretaría de la institución bancaria antes mencionada, que expida una certificación en la cual conste si han sido resueltos los recursos de reconsideración y de apelación contra el Memorándum No. 93(213-02)137 de 2 de abril de 1993, emitido por la Secretaría General del Banco Hipotecario Nacional, y en caso afirmativo que se envíe copia autenticada de los actos mediante los cuales se resuelve dichos recursos.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GIGANTE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 28 DE 29 DE ENERO DE 1991, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La firma Vásquez y Vásquez, actuando en representación de Gigante, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 28 de 29 de enero de 1991 expedida por la Dirección General de Comercio Interior, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Se trata de un proceso marcario en el cual la sociedad denominada COTTER & COMPANY, a través de la firma forense Arias, Fábrega y Fábrega, promovió ante la Dirección General de Comercio Interior demanda de cancelación de los registros de marcas de fábrica, No. 035801 y 035795, correspondientes a la marca "MASTER MECHANIC" de propiedad de GIGANTE, S. A. Mediante resolución No. 28 de 29 de enero de 1991, la Directora General de Comercio Interior resolvió cancelar la mencionada marca de fábrica "MASTER MECHANIC". Esta resolución fue confirmada por el Ministro de Comercio e Industrias mediante Resolución No. 117 de 2 de septiembre de 1991.

La parte actora sostiene que la Resolución No. 28 de 29 de enero de 1991 y el acto confirmatorio son ilegales por cuanto violan los artículos 589, 647 ordinal 3, 722 y 1154 inciso final del Código Judicial; el artículo 91 de la Ley 32 de 1927; y el artículo 19 del Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, ratificado por Panamá mediante la Ley 64 de 1934.

El Procurador de la Administración se opone a las pretensiones del demandante mediante Vista No. 499 de 28 de septiembre de 1992.

La parte demandante alega que la resolución impugnada viola, en concepto de violación directa, el artículo 589 del Código Judicial pues, a su juicio, esta norma dispone como las sociedades extranjeras domiciliadas en otro país con negocios, o establecimientos permanentes en Panamá, adquieren personería ad procesum mediante la constitución de apoderados o agentes en el país y, en el caso que nos ocupa, no se ha exigido a la sociedad COTTER & COMPANY acreditar su existencia y la personería ad procesum, aunado al hecho de que consta en autos que esa sociedad no está inscrita en Panamá ni tiene apoderado designado.

La Sala considera que el artículo 589 que se alega infringido no es aplicable a esta situación por cuanto COTTER & COMPANY no es una sociedad "con negocios o establecimientos permanentes en Panamá", por lo cual no es requisito, su inscripción en el Registro Público, ni los demás requisitos exigidos en el artículo 589 del Código Judicial. De allí que la Sala desestime este cargo pues no se puede alegar como violado una norma que no le es aplicable al caso en estudio.

La parte demandante considera infringido el artículo 647 del Código Judicial, en concepto de indebida aplicación, por cuanto, tanto la Directora General de Comercio Interior, como el Ministro de Comercio e Industrias, aceptaron como buena la certificación expedida por las autoridades del Estado Federal de Delaware, uno de los cuarenta estados de la Unión Americana como si fuera expedida con arreglo a la ley del país de su domicilio, cuando las leyes del país a que se refiere dicha norma es la del Estado Nacional que en este caso, señala la parte actora, es la de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Sala observa, una vez examinado el expediente administrativo, que COTTER & COMPANY es una sociedad extranjera constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y domiciliada en Chicago, Illinois. Por lo tanto, como sociedad extranjera que no opera ni tiene domicilio en Panamá, a los fines de hacer valer sus derechos ante los tribunales del país, tiene que acreditar su existencia, como lo ordena el artículo 647 del Código Judicial, según el cual las sociedades extranjeras que no requieran licencia para operar en territorio panameño, no necesitan estar inscritas en el Registro Público para comparecer en el proceso, sin embargo deberán acreditar su existencia mediante una certificación expedida con arreglo a la ley del país de su domicilio, debidamente autenticada. Por otro lado, dice el referido artículo 647, el poder otorgado en el extranjero para representar en proceso a la sociedad deberá incluir dicha certificación conforme a la cual quien actúa por ella está debidamente facultado por dicho acto. Finalmente, agrega dicho artículo, que de la autenticación de la autoridad diplomática o consular se presume que los poderes y certificaciones antes aludidos están expedidas conforme a la ley local de su origen a no ser que la parte interesada pruebe lo contrario.

Al confrontar el artículo 647 antes analizado con el poder aportado por Cotter and Company se observa la certificación expedida por el Secretario del Estado de Delaware que acredita la existencia de dicha sociedad y que la misma se constituyó conforme a las leyes de dicho estado. Además, dicha certificación está autenticada por el Cónsul General de Panamá en Washington D.C., Estados Unidos de América por lo que la autenticación por parte del Cónsul General de Panamá ratifica que la certificación ha sido emitida "conforme a la ley local", y de la cual no hay prueba en contrario en el expediente. Por ello, estima la Sala, dicha certificación en la forma en que ha sido expedida y autenticada, es prueba idónea, a la luz del artículo 647 del Código Judicial, para acreditar la existencia de Cotter and Company. No procede, pues, el cargo alegado.

La parte actora señala como violado el artículo 91 de la Ley 32 de 1927, la cual regula las sociedades anónimas, en concepto de violación directa por omisión, al permitir la Dirección General de Comercio Interior y el Ministro de Comercio e Industrias en las resoluciones impugnadas, que COTTER & COMPANY, sociedad extranjera que no puede ejercer acciones de ninguna clase en Panamá, por no cumplir con el artículo 90 de la Ley 32 de 1927, actúe como demandada y demandante en la jurisdicción contencioso

administrativa, como parte en el procedimiento gubernativo en este proceso de cancelación de marca de fábrica.

La Sala observa que en el presente cargo tampoco le asiste la razón a la parte actora ya que el artículo 90 de la Ley 32 de 1927 señala los requisitos que requieren las sociedades anónimas extranjeras para tener oficinas o agencias y hacer negocios en la República y el artículo 91 que se alega infringido señala que las sociedades anónimas extranjeras que actúen dentro de la República y que no hayan cumplido con los requisitos establecidos en el artículo anterior no podrán iniciar procedimientos judiciales o de otra clase ante los tribunales o autoridades de la República. Dado que, como dijimos anteriormente, la sociedad COTTER & COMPANY no es una sociedad con negocios o establecimientos permanentes en Panamá, no le es aplicable tampoco los artículos 90 y 91 de la ley 32 de 1927 antes mencionados, por lo cual mal pueden estos dos últimos artículos alegarse como violados. Se desestima, pues, este cargo.

La parte actora señala como violado, en concepto de violación directa, por comisión, el artículo 19 de la Ley 64 de 1934, mediante la cual se ratificó el "Protocolo sobre Registro Inter-Americano de Marcas de Fábrica", al aplicarlo cuando el mismo dejó de estar vigente debido a sucesivas denuncias a partir del 18 de noviembre de 1946 y la oficina creada por dicho protocolo se cerró el 2 de noviembre de 1949, como lo certifica el Señor Ministro de Relaciones Exteriores. En cuanto a la violación del artículo 19 de la Ley 64 de 1934, la Sala observa lo siguiente: La Ley 64 de 28 de diciembre de 1934 en su artículo único aprobó la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, ambos acuerdos firmados en Washington el 2 de febrero de 1929. En la primera Convención se establece una protección de tipo marcario a los nacionales de los Estados contratantes. Por su parte, el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica crea una agencia internacional americana en la cual se haría el registro de las marcas de fábrica o comerciales. De lo que surge que ambos documentos son instrumentos jurídicos con autonomía propia e independientes el uno del otro. En efecto, esto queda demostrado al transcribirse uno de los considerandos del Protocolo que dice así:

> "Por cuanto: la adopción por separado de una convención general de carácter sustantivo y de un protocolo como éste, puede facilitar la ratificación de los Estados Contratantes y la adhesión de las Repúblicas Americanas que no han tomado parte en las negociaciones, toda vez que la aceptación de la Convención no lleva implícita la de este instrumento."

En informe expedido por el Ministro de Relaciones Exteriores visible a fojas 54 a 56 se observa que el Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas de Fábrica "dejó de estar en vigencia por sucesivas denuncias a partir del 18 de noviembre de 1946 y la oficina creada por dicho Protocolo se cerró el 2 de noviembre de 1949". Así las cosas, es claro que lo que quedó sin vigencia fue el Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas de Fábrica y no la Convención General Interamericana de Protección Marcaria.

Lo anterior significa que el Ministerio de Comercio e Industrias en modo alguno violó el artículo 19 del referido Protocolo por cuanto las resoluciones atacadas tuvieron como fundamento el artículo 8 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria que está vigente y surtiendo todos sus efectos jurídicos.

Finalmente, la parte actora señala como violado el ordinal 3ro del artículo 772 del Código Judicial a consecuencia de los errores in procedendo que el actor señala, pues a su juicio, hay ilegitimidad de la personería que causa la nulidad común a todos los procesos y, al ser desestimada la petición de rechazo de la demanda de COTTER & COMPANY se violó la norma antes citada.

La Sala estima que el cargo alegado no procede por cuanto esta Corporación ya se ha pronunciado en torno a la supuesta "ilegitimidad de la personería" de la sociedad COTTER & COMPANY cuando se pronunció en torno a la infracción del artículo 589, señalando que el mismo no ha sido infringido por no darse la ilegitimidad de la personería alegada por la parte actora. Siendo ello así, no se produce, pues, la causal de nulidad alegada ni se infringe el artículo 722 ordinal 3ro del Código Judicial. Se desestima, pues, este cargo.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso- Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la Resolución No. 28 de 29 de enero de 1991 expedida por la Dirección General de Comercio Interior y su acto confirmatorio, la Resolución No. 117 de 2 de septiembre de 1991 expedida por el Ministro de Comercio e Industrias.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, interpuesta por la firma Arias, Fábrega y Fábrega, en representación de B.P. CARIBBEAN TRADING, INC., para que se declare nulo por ilegal, el acto contenido en la Resolución No.213-3277 de 7 de julio de 1988, emitido por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, doce (12) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **ARIAS FÁBREGA Y FÁBREGA**, en representación de la sociedad **B.P. CARIBBEAN TRADING INC.** presentó demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción contra la Resolución N° 213-3277 de 7 de julio de 1988.

Mediante memorial fechado el 23 de junio de 1993 y recibido en la Secretaría de la Sala Tercera el 24 de junio del mismo año, el apoderado especial del demandante presentó escrito de desistimiento en los siguientes términos:

> "Nosotros, ARIAS FÁBREGA Y FÁBREGA, de generales que constan en autos, actuando en nombre y representación de B.P. CARIBBEAN TRADING, INC., dentro del juicio contencioso administrativo mencionado al margen superior, por este medio comparecemos respetuosamente ante ustedes con el objeto de presentar desistimiento del recurso contencioso administrativo interpuesto en contra de la Resolución N° 213-3277 del 7 de julio de 1988, dictada por el Administrador Regional Ingresos (sic) de la Provincia de Panamá, y sus actos confirmatorios"

Examinado el poder otorgado al apoderado judicial del demandante en esta demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción, se aprecia que el mismo estaba facultado expresamente para desistir, por lo que considera la Sala que el desistimiento propuesto es perfectamente viable, a tenor de lo que preceptúa el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, dado que consta la voluntad expresa del mandatario y el poder está debidamente traducido al castellano y autenticado por las autoridades competentes.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por la firma ARIAS FÁBREGA Y FÁBREGA en el presente recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, contra la Resolución N° 213-3277 de 7 de julio de 1988.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DE SERAFÍN QUIEL JARAMILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°797 DE 28 DE JULIO DE 1992, EXPEDICIÓN POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA**, en representación de **SERAFÍN QUIEL JARAMILLO**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución N°797 de 28 de julio de 1992, expedida por el Procurador General de la Nación, y para que se hagan otras declaraciones.

La parte actora sustenta su pretensión aduciendo lo siguiente:

Que el licenciado **SERAFÍN QUIEL JARAMILLO** fue destituido mediante Resolución N°797 de 28 de julio de 1992 expedida por el Procurador General de la Nación, alegándose pretermisión en las sumarias llevadas a cabo en el caso de **EDWIN** HEREDIO AMAYA. Es decir no aplicó disposiciones legales importantes y de obligatoria utilización en el precitado proceso. Que lo indicado por el jefe del Ministerio Público, carece de veracidad, dado que el licenciado **QUIEL JARAMILLO** cumplió con lo establecido en la ley, en relación a las formalidades que se exigen para tales efectos, como lo son en el sumario y en el plenario, tal como puede colegirse del precitado expediente.

Adicionalmente señala que el acto expedido por el Procurador, ha violado las siguientes normas legales: artículos 23 y 285 del Código Judicial y artículo 32 de la Ley 135 de 1943, Orgánica Contencioso Administrativo.

Posteriormente el Magistrado Sustanciador, luego de admitida la demanda, le solicitó al Procurador General de la Nación rindiera informe de conducta, en relación a la destitución del licenciado **SERAFÍN QUIEL JARAMILLO**, y el precitado funcionario señaló lo siguiente:

> "El licenciado SERAFÍN QUIEL JARAMILLO, fue nombrado, mediante Decreto N°499 de 20 de julio de 1990, Fiscal Segundo Superior, del Tercer Distrito Judicial.
>
> A través de Resolución N°797 de 28 de julio del año en curso, fue declarado insubsistente su nombramiento, con fundamento en los artículos 23, 269, 270, 346 y 440 del Código Judicial.
>
> La decisión así tomada, y expresada en la resolución supra citada, se adoptó, previa investigación realizada del desempeño de las labores del licenciado QUIEL JARAMILLO como agente de instrucción del Ministerio Público. En ésta, se pudo determinar, la pretermisión de normas de procedimiento elementales, durante la encuesta sumarial llevada por el despacho a su cargo, con el fin de verificar la causa de la muerte del señor EDWIN EREDIO AMAYA. Las faltas en que incurrió el ex-Fiscal Superior, en la fase sumarial denotan una ignorancia inexcusable, máxime cuando se llevaron a cabo diversas reuniones con el mismo y se le ofreció apoyo y colaboración, sin que ello conllevara, por parte nuestra, a inmiscuirnos en sus funciones ni mucho menos, tener ingerencia en su

> independencia judicial en la toma de decisiones, en los aspectos procesales de la instrucción del sumario en cuestión".

Del igual forma se le corrió traslado del libelo incoado al Procurador de la Administración, para que contestara, oponiéndosele a la pretensión del demandante.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados de la Sala Tercera entran a resolver la presente controversia:

La primera norma que se estima conculcada es el artículo 23 del Código Judicial, sustentando la parte actora la infracción así:

> "El artículo 23 citado ha sido violado por indebida aplicación. La resolución recurrida tomó de base legal el citado artículo, más no mencionó y menos desarrolló las causas en él anotadas y cumplidas para hacer efectiva la separación de Serafín Quiel Jaramillo.
>
> Nuestro representado no renunció, abandonó, delinquió o cometió falta alguna; si se presentó a tiempo y ejerció su puesto y no ha padecido incapacidad física o mental ...
>
> A más de no ser ciertos, ninguno de los señalamientos anotados en la resolución recurrida cumple los presupuestos de aplicación del artículo 23 citado".

Discrepamos del argumento esbozado por el demandante, dado que el Procurador General de la Nación desarrolló las causales de destitución del licenciado **SERAFÍN QUIEL JARAMILLO**, en la Resolución que declara la separación del cargo de aquél (fojas 2 a 6 del expediente) y que mediante esta demanda se acusa de ilegal.

Efectivamente, el señor **QUIEL JARAMILLO**, fue destituido por la pretermisión de normas de procedimiento elementales, en las sumarias llevadas en su despacho, cuyo objetivo primordial era verificar la causa de la muerte del señor EDWIN EREDIO AMAYA.

Lo anterior nos demuestra, que el comportamiento del precitado ex-Fiscal Segundo Superior, alegado por el jefe del Ministerio Público, se encuadra en el numeral 4 del artículo 23, específicamente la falta grave contra la ética judicial, lo que nos conduce a señalar que la causa de destitución es diáfana, y no siendo cierto que no se mencionó la causa que sirvió de base para la referida sanción. En este mismo sentido, el Procurador de la Administración señaló atinadamente lo siguiente:

> "La Ética Judicial es la piedra angular sobre la cual debe darse y promoverse cualquiera actuación dentro del campo jurídico. Su importancia y observancia por todos los que en el ambiente legal se desempeñan esta por demás demostrada, como una necesidad inherente a la conducta de todo servidor público en especial los de la esfera judicial.
>
> El artículo 440 del Código Judicial consagra la Ética Judicial y fue bajo el amparo de este precepto legal por la cual se dio la insubsistencia del cargo del Licenciado Quiel Jaramillo".

Al precitado afectado, no se le destituyó por abandono del cargo, ni por renuncia, ni por delito; más bien su despido se debió a falta grave en el ejercicio de sus funciones como Fiscal Segundo Superior, del Tercer Distrito Judicial.

Aunado a lo anterior, está el hecho de que el licenciado **QUIEL JARAMILLO**, no ingresó al cargo mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para la Carrera Judicial, que fue implementada recientemente, para los **funcionarios del Órgano Judicial**, tal como puede corroborarse en el artículo 1 del Acuerdo N°46 de 27 de septiembre de 1991, expedido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que aprobó el reglamento de la Carrera Judicial, y que diáfanamente dice:

> "Artículo 1...
> ... La carrera se aplica a todos los funcionarios del Órgano Judicial, salvo las excepciones que expresamente señalan la Constitución y el Código Judicial". (el subrayado es nuestro)

Frente a lo señalado en líneas anteriores, debemos destacar que el artículo 271 del Código Judicial establece que a determinados funcionarios del Ministerio Público se les garantiza estabilidad, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, que a continuación transcribimos:

> "ARTICULO 271. Para los efectos de todos los derechos y garantías consagradas en este Código para la Carrera Judicial, sólo gozarán de los mismos los funcionarios y empleados judiciales que hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso a dicha Carrera.
>
> No obstante esta disposición, los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, nombrados por lo menos cinco años antes de la promulgación de esta Ley que no cumplan con los requisitos señalados en este Código, se les garantizará estabilidad mientras no incurran en causa que, conforme a la Ley, justifique su remoción o separación del cargo que ocupan". (el subrayado es nuestro)

Podemos observar, que la norma dispone que los funcionarios judiciales o del Ministerio Público, nombrados cinco años antes de la promulgación de esta ley que no cumplan con los requisitos señalados en este Código, se les garantiza estabilidad mientras no incurran en causa justificada prevista en la ley, que justifique su destitución.

Sin embargo, pese a la existencia de normas de estabilidad que favorecen al funcionario del Ministerio Público, las mismas son inaplicables al licenciado **QUIEL JARAMILLO**, dado que el precitado no ha demostrado que reúne requisitos para que sea

amparado por las normas de estabilidad, por ende su destitución por parte del Procurador General de la Nación es parte de las facultades que posee este funcionario, que consisten en nombrar y remover a los servidores públicos que ocupen cargos en la entidad gubernamental que él dirige. El licenciado **QUIEL JARAMILLO** fue nombrado Fiscal Superior el 20 de julio de 1990, por tanto no tiene cinco años de nombrado en dicha posición. Por tanto no prospera el cargo impetrado.

Otra disposición que se estima infringida, es el artículo 285 del Código Judicial, argumentando la parte afectada, lo siguiente:

> "La resolución recurrida es infractora por violación directa del artículo 285 antes citado. Nuestro representado no ha incurrido en causal de sanción disciplinaria de las regladas por el artículo transcrito. ...
>
> Como se ha desarrollado en el curso de los puntos anteriores, Serafín Quiel Jaramillo no sólo actuó diligentemente en el ejercicio de su puesto, sino que su expediente es ejemplo de probidad y honestidad".

El señalamiento que hace el demandante, carece de exactitud, en virtud de que la Resolución que se acusa de ilegal y el acto confirmatorio, señalan claramente que el licenciado **SERAFÍN QUIEL JARAMILLO**, ex-Fiscal Segundo Superior, del Tercer Circuito Judicial, infringió normas de procedimiento dentro de una causa criminal, desatendiendo normas de procedimiento con la etapa sumarial, aplicándosele el mismo criterio que mencionáramos en párrafos anteriores y es por ello que no aceptamos la acusación impetrada.

Por último se señala violado el artículo 32 de la Ley 135 de 1943, por parte de la Resolución N°797 de 28 de julio de 1992, de esta manera:

> "El artículo 32 citado ha sido infringido por violación directa. La resolución recurrida impuso efectos legales sin considerar el plazo de ejecutoria ni si existían o podían existir recursos legales pendientes".

La excerta legal que se estima transgredida es diáfana, dado que permite la notificación tácita del acto administrativo, y si bien es cierto la Resolución recurrida fue emitida sin señalar los "efectos legales, sin considerar el plazo de ejecutoria", ni los recursos a utilizar, el precitado funcionario se dio por enterado, utilizando en tiempo oportuno los recursos, tal como lo exige la norma y que puede apreciarse a foja 8 y siguientes del expediente, por lo que no es viable el cargo propuesto.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución N°797 de 28 de julio de 1992.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ ALVAREZ CUETO, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR ESTRADA GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°44-92 DE 9 DE MARZO DE 1992, EMITIDA POR EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado **JOSÉ ALVAREZ CUETO** en representación de **OMAR ESTRADA GONZÁLEZ**, observa el Magistrado Sustanciador, la solicitud de Suspensión de la Resolución N°44-92 de 9 de marzo de 1992 y su confirmación, mediante la cual la Gerencia General del Banco Hipotecario Nacional resolvió lo siguiente:

> "PRIMERO: Dejar sin efecto como se hace la Resolución de Gerencia N°87-137 de 31 de octubre de 1987, mediante la cual se anula la adjudicación de la vivienda distinguida con el N°11-7 del Edificio Z-2, Los Libertadores, ubicado en la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), Corregimiento de Bethania, Distrito y provincia de Panamá, a favor de la señora LIDIA RÍOS DE TRISTÁN, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-163-2494 y debidamente representada por el Licenciado ANTONIO VERGARA, varón, panameño, mayor de edad, abogado en ejercicio, con oficinas ubicadas en Vía España, N°2004, ciudad de Panamá; con la finalidad de que se le restituya el préstamo hipotecario N°01-634C-469.
>
> SEGUNDO: Revocar por nulidad de lo actuado la Resolución de Gerencia N°61-90 de 7 de agosto de 1990, a favor de OMAR ESTRADA, varón, panameño, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°6-43-10.
>
> TERCERO: Retractar todo lo actuado a la adjudicación original, o sea a favor de la señora LIDIA RÍOS DE TRISTÁN, cuyas generales han sido descritas anteriormente".

El recurrente fundamentó su petición alegando brevemente, que desde el punto de vista económico "el acto recurrido implica un perjuicio notoriamente grave" para su mandante, debido a que el señor **ESTRADA** se ha ocupado de amortizar una serie de cuentas

atrasadas, no saldadas, por parte de **LIDIA RÍOS DE TRISTÁN**, en lo concerniente al apartamento en litigio desde 1986.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, está facultada legalmente basado en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, para suspender los efectos de un acto administrativo determinado, si a juicio discrecional de este Tribunal Colegiado, convergen suficientes elementos o circunstancias que amerite el ejercicio de dichos poderes.

Es evidente que nos encontramos frente a una situación bien delicada, dado que llegado el momento para decidirse este caso en el fondo, en el evento de que se le otorgara la razón al peticionario, al no estar suspendida la Resolución N°44-92 de 9 de marzo de 1992 emitida por el Banco Hipotecario le ocasionaríamos a él y a su familia un perjuicio irreparable, irremediable, irreversible e irresarcible, presupuestos estos indispensables para la suspensión de los actos administrativos impetrados de ilegal.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, con base al artículo 73 de la Ley 135 de 1943, NO SUSPENDEN los efectos de la Resolución N°44-92 de 9 de marzo de 1992, emitida por el Banco Hipotecario Nacional.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE, ARIAS, CASTRO Y REYES, EN REPRESENTACIÓN DE TEÓFILO ALVARADO KINKEAD, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DE 25 DE AGOSTO DE 1992, EMITIDA POR LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y SUBSIDIOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Sucre, Arias, Castro y Reyes, actuando en nombre y representación de TEÓFILO ALVARADO KINKEAD, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Resolución de 27 de enero de 1993 por la cual el Magistrado Sustanciador de la causa no admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Nota de 25 de agosto de 1992 emitida por la Jefa del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social, y para que se haga otras declaraciones.

Mediante Resolución de 26 de marzo de 1993, el resto de los Magistrados que integran la Sala dispusieron que, antes de entrar a decidir el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de 27 de enero de 1993, por la cual no se admite la demanda, debía atenderse la petición especial hecha por el demandante de solicitar al Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social una certificación en la cual conste si se resolvió el recurso de reconsideración presentado por el demandante contra el acto administrativo impugnado.

El Director Nacional de Asesoría Legal de la Caja de Seguro Social, mediante Nota No. D. DAL. N. 066-93, de 28 de junio de 1993, visible a fojas 66 de este expediente, remitió la certificación solicitada por este Tribunal. Por tanto, el resto de los Magistrados que integran esta Sala proceden a resolver la alzada.

Consta en autos que el recurrente presentó con su demanda el original del acto administrativo impugnado, que es la nota de 25 de agosto de 1992, la cual reposa a fojas 10 y 11. Además presentó escrito de reconsideración con apelación en subsidio, según consta a fojas 17 de este expediente, ante el Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social el día 21 de septiembre de 1992.

Y por último, el demandante presentó copia del memorial visible a fojas 18 del expediente, mediante el cual solicitó el día 8 de enero de 1993 al Departamento de Pensiones y Subsidios una certificación en la cual constara si había recaído decisión sobre el recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado el día 21 de septiembre de 1992.

A petición de la Sala, tal como ya se expuso, el Director Nacional de Asesoría Legal de la Caja de Seguro Social envió la Nota No. D. DAL. N. 066-93 de 28 de junio de 1993 en la cual expresa lo siguiente:

> "Posteriormente, el 25 de agosto de 1992, la Jefa del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social, da respuesta a la petición formulada por el apoderado ROBERTO ROJAS, el 21 de febrero de 1992.
> Finalmente el 21 de septiembre de 1992, el Apoderado de Alvarado Kinkead, interpone en contra de la nota s/n de 25 de agosto de 1992, recurso de reconsideración con apelación en subsidio.
> Señora Secretaria, me he permitido hacer una relación pormenorizada de este asunto porque como antes le explicara, la Caja ya había dado respuesta a las peticiones del señor Alvarado Kinkead, que como le será fácil advertir, no tenían otro objetivo que el reabrir una vía gubernativa que se agotó cuando él se notificó de la Resolución No. C de P 8708, que le concedió la Pensión de Vejez Anticipada a partir de la presentación del cese de labores.

La Caja cumplió con lo ordenado por la Resolución y la revisión a la cual se accedió de modo alguno puede dar lugar a que se dicte otra Resolución que nos obligue a volver sobre nuestros actos, por lo que la respuesta manteniendo la posición expuesta se brindará nuevamente a través de una nota" (fs. 66-67).

Es decir, que el funcionario demandado no resolvió el recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado, produciendo esta situación la negativa tácita por silencio administrativo el 21 de noviembre de 1992, de conformidad con lo establecido en el ordinal 1o. del artículo 22 de la Ley 33 de 1946, el cual preceptúa que se considerará agotada la vía gubernativa cuando interpuesto alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 20 de la Ley 33 de 1946, se entienden negados, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutiva sobre ellos.

Como el recurrente cumplió con los requisitos formales establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, agotó la vía gubernativa y ocurrió a esta jurisdicción el 21 de enero de 1993, dentro del término legal de dos meses que la ley establece, la demanda debe admitirse.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley,PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 27 de enero de 1993, ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma Sucre, Arias, Castro y Reyes, en representación de TEÓFILO ALVARADO KINKEAD, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota de 25 de agosto de 1992, emitida por el Jefe del Departamento de pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDISA ISABEL FLORES DE LA ROSA, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL RESUELTO S/N DE 28 DE JUNIO DE 1991, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada Edisa Isabel Flores de La Rosa ha presentado escrito mediante el cual solicita aclaración de la parte resolutiva de la Sentencia de 30 de junio de 1993, expedida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se DECLARA ILEGAL la nota s/n de 28 de junio de 1991, y el silencio administrativo, ambos del Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, y se ORDENA EL REINTEGRO de la señora MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ, sin derecho al pago de los salarios caídos.

La aclaración de la sentencia o la corrección por razón de error, procede de conformidad con el artículo 40 de la Ley 33 de 1946.

De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 8 de 1975, el derecho del trabajador para reclamar por despido injustificado, con derecho al pago de los salarios caídos, prescribe en el término de tres meses, contados a partir de la separación.

En el presente negocio, como la reclamación se hizo mediante un recurso contencioso administrativo, se estimó que la separación se produjo cuando se agotó la vía gubernativa, y por tanto, la solicitud de reintegro se presentó oportunamente y le asiste razón a la parte demandante cuando afirma que si se ordenó el reintegro por considerar que fue pedido oportunamente, debe también ordenarse el pago de los salarios caídos, desde la fecha del despido hasta la del cumplimiento de la orden de reintegro, de conformidad con el artículo 118 de la Ley 8 de 1975.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo corrige la sentencia dictada el 30 de junio de 1993, la cual quedará así: DECLARA ILEGAL la nota s/n de 28 de junio de 1991, y el silencio administrativo, ambos del Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, y ORDENA EL REINTEGRO de la señora María Eugenia Hernández, con derecho al pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta la del cumplimiento de la orden de reintegro.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RUBÉN ELÍAS RODRÍGUEZ AVILA, EN REPRESENTACIÓN DE NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURG, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3122-91 DG DE 21 DE FEBRERO DE 1991, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Rubén Elías Rodríguez Avila, actuando en representación de **National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh S. A.** ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N°. 3122-91 D.C. de 21 de febrero de 1991, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si se cumplen con todos los presupuestos procesales necesarios para que la misma pueda ser admitida.

Observa quien suscribe, que el Lcdo. Rubén Elías Rodríguez presentó el día 16 de junio de 1992, recurso de apelación contra la Resolución N° 3122-91 D.G. del 21 de febrero de 1991, tal como puede apreciarse de foja 20 a 25 del expediente.

Es evidente, como se desprende del estudio del caso que nos ocupa, que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social no resolvió el recurso de apelación interpuesto. De lo anterior se colige que el agotamiento de la vía gubernativa se produce dos meses después de presentado dicho recurso por falta de decisión, en virtud del silencio administrativo establecido en el numeral 1° del artículo 36 de la Ley 135 de 1943.

El demandante tenía, pues, un término de dos meses para interponer la demanda contenciosa a partir del 16 de agosto de 1991, fecha en la cual, sin que recayera decisión, se entiende negado el recurso de apelación en virtud del silencio administrativo, por lo que no debía esperar más tiempo para recurrir a esta Sala. Puede observarse a foja 45 del expediente, que la demanda fue presentada el 27 de mayo de 1993, por lo que en esa fecha había ya prescrito el derecho del demandante a interponer la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

En consecuencia el suscrito Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Rubén Elías Rodríguez Avila en representación de National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh S. A. para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 3122-91 DG de 21 de febrero de 1991, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. NELSON ROVETTO, EN REPRESENTACIÓN DE EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°8 DE 9 DE OCTUBRE DE 1991, EMITIDA POR LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Dentro del proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción instaurada por el licenciado **NELSON ROVETTO** en representación de **EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A.**, en contra de la Resolución N°8 de 9 d octubre de 1991 emitida por la Junta de Control de Juegos, este Tribunal de segunda instancia consideró pertinente para determinar la viabilidad de la admisión del libelo de la demanda bajo estudio, mediante Resolución de 7 de junio de 1993; oficiar al Ministerio de Hacienda y Tesoro para que nos proporcionara la siguiente documentación:

1) Copia auténtica de la Resolución N°8 de 9 de octubre de 1991.

2) Certificación que indique si lo anterior resolución que debidamente notificada a la sociedad **EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A.** y en que fecha.

3) Copia auténtica recurso de apelación interpuesta por la precitada empresa demandante.

4) Certificación que indique si a la fecha de presentada la demanda en cuestión en la Sala Tercera (16 de abril de 1993) había sido resuelto el recurso de apelación presentado.

El mencionado oficio se verificó el 14 de junio del año en curso recibiéndose la correspondiente contestación y la información requerida, el 23 de junio actual.

En este sentido, observa el Tribunal de alzada, producto de la documentación que nos suministrare mediante la Nota N°103-01-119-D por el Ministerio de Hacienda y Tesoro a través de su Dirección Jurídica, que la Resolución N°8 de 9 de octubre de 1991, no fue notificada a la empresa **EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A.**, no constando tampoco en este negocio los esfuerzos que haya realizado el Ministerio para notificar a la sociedad demandante. Dado lo anterior, es pausible que la Resolución precitada no estaba en firme, y en consecuencia, no transcurría el período de prescripción al que alude el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Igualmente se percata esta Corporación de Justicia, que el Recurso de Apelación incoado por la recurrente ante la supracitada institución gubernamental, fue presentado el 18 de diciembre de 1992, no siendo el mismo dilucidado hasta el 19 de abril de 1993, como consta en la referida Nota N°103-01-119-D, aprobando dicho recurso de apelación como notificación tácita del actor.

A partir del 18 de diciembre de 1992, el actor contaba con dos meses para que se le configurara el silencio administrativo contentivo de la negativa tácita de la pretensión y dos meses adicionales para accionar ante la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo, es decir hasta el Lunes 19 de abril de este año. Es evidente entonces, que el impugnante propuso en término oportuno el recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, el 16 de abril de los corrientes, por lo que este Tribunal procede previa verificación de los agotamientos de la vía gubernativa por parte del interesado y frente a la comprobación de que no prescribió el derecho del actor de incursionar procesalmente ante este Tribunal colegiado, a admitir la demanda presentada en controversia.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITEN la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción propuesto por el licenciado NELSON ROVETTO en representación de EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°57-91 DE 14 DE MARZO DE 1991 Y LA N°58-91 DE 21 DE MAYO DE 1991 DICTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA** en representación de **R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A.**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N°57-91 de 14 de marzo de 1991 y la Resolución N°58-91 de 21 de mayo de 1991, dictadas por el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, y para que se hagan otras declaraciones.

La parte actora sustenta su pretensión aduciendo básicamente que el 18 de octubre de 1990, se celebró en la Gerencia de Compras del INTEL el Acto Público de Licitación, en la cual solamente dos empresas como lo son PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A. y **R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A.**, participaron y en donde ambas propuestas fueron admitidas. Que la licitación fue adjudicada provisionalmente a PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., dado que esta empresa ofreció un porcentaje de 45.50%, mayor que el ofrecido por la otra sociedad, al Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) en sus recaudaciones anuales. Que posteriormente el expediente pasó a la Comisión Evaluadora, que por ley debe integrarse, y dictaminó que la mejor propuesta para los intereses del Instituto Nacional de Telecomunicaciones INTEL era de PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., recomendando la adjudicación definitiva de la licitación. Que no comparten la decisión de adjudicación definitiva de la licitación por parte de la Comisión Evaluadora, por varios motivos: 1. Que la solidez económica y financiera de **R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A.**, es superior a PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A. Que esta última al ser empresa colombiana, su situación financiera y económica es en base a pesos colombianos, y esta moneda está sujeta a constantes devaluaciones; y 2. Que la propuesta de PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., no cumplió con todos los requisitos en los equipos y sistemas requeridos en el pliego de cargos contrario a lo que ofreció **R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A.** que en su propuesta excedieron los requisitos del Pliego de Cargos. Por estas razones considera la empresa demandante que han sido conculcadas las siguientes normas: artículo 50 modificado por la Ley 31 de 8 de noviembre de 1984 del Código Fiscal; artículos 9 y 14 del Código Civil; y por último el artículo 49 del Código Fiscal.

Posteriormente el Magistrado Sustanciador, procedió a solicitarle al Presidente del Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), rindiera informe de conducta, en relación a la Licitación Pública llevada a cabo en esa entidad y en donde se le adjudicó definitivamente a PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., señalando el precitado funcionario lo siguiente:

> "De acuerdo a la cláusula 3.12 'Forma de Adjudicación Provisional, que aparece en la página N°114, del Capítulo III del Pliego de Cargos y Especificaciones de esta Licitación Pública, la adjudicación provisional debía otorgarse a la propuesta que ofreciera el porcentaje de participación más alto en la distribución de las recaudaciones por la facturación de anuncios, y en consecuencia, el representante del Ministerio de Hacienda y Tesoro adjudicó provisionalmente la Licitación a la empresa PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., que ofreció cuarenta y cinco punto cincuenta por ciento (45.50%).
>
> Posteriormente, las ofertas se sometieron al análisis de la Comisión Evaluadora que estuvo presidida por un funcionario del Ministerio de Hacienda y Tesoro e integrada por funcionarios del INTEL y contó adicionalmente con la colaboración de peritos de la Universidad Tecnológica de Panamá, del Centro Experimental de Ingeniería y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.).

> La Comisión Evaluadora recomendó que la Licitación Pública N°02-90 se adjudicara en forma definitiva a la empresa PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A. representante del Consorcio PUBLICAR, S. A. CARVAJAL, S. A. de Colombia, por ofrecer el porcentaje de participación sobre los cobros brutos más alto (45.50%), el cual resultó ser un 0.40% mayor a lo ofrecido por R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A. y por considerar que esta oferta cumplía con los requisitos del Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas ...
>
> El Comité Ejecutivo del INTEL, luego de revisar el expediente de la Licitación Pública N°02-90 consideró que la oferta recomendada por la Comisión Evaluadora cumplía con el Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas y representaba la mejor opción económica para los intereses del Estado y por ende para los del INTEL y en consecuencia, adjudicó definitivamente esta Licitación Pública a la empresa PUBLICAR, S. A., representante del Consorcio PUBLICAR, S. A. CARVAJAL, S. A. de Colombia, mediante la Resolución N°57-91 del 14 de marzo de 1991 ...
>
> Mediante la Resolución N°58-91 de 21 de mayo de 1991 el Comité Ejecutivo del INTEL desestimó el recurso de reconsideración de la empresa R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A. y confirmó en todas sus partes la Resolución N°57-91 del 14 de marzo de 1991, por medio de la cual el Comité Ejecutivo del INTEL adjudicó definitivamente la Licitación Pública N°02-90 a la empresa PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A.".

De igual forma, se le corrió traslado del libelo al Procurador de la Administración quien se opuso a la pretensión incoada.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados de la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia:

La primera norma que se estima conculcada es el artículo 50 del Código Fiscal reformado por la Ley 31 de 8 de noviembre de 1984, y reglamentado por el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°33 de 3 de mayo de 1985 y explica la infracción de esta manera:

> "Esta normas, interpretadas conjuntamente, han sido violadas por interpretación errónea, que ha influido sustancialmente sobre lo dispositivo de las Resoluciones N°57-91 y 58-91 del Comité Ejecutivo del INTEL.
>
> Como ya hemos destacado, para hacerle justicia a las propuestas, hace falta considerar no solamente la ventaja económica de las mismas, sino de manera sopesada y ponderada la capacidad económica, financiera, administrativa y técnica de los proponente ...
>
> En efecto, la Comisión Evaluadora le reconoció el máximo de ventaja a la propuesta de Publicar de Panamá S. A., en detrimento de las ventajas relativas de la propuesta de nuestra representada y, aún de esta manera, concluyó atribuyéndole un margen mínimo de peso preferencial de siete décimas de punto porcentual (0.70%) a la propuesta de Publicar de Panamá S. A. Cualquier cambio en la ponderación, que hubiera tomado en cuenta las ventajas relativas de la posición y propuesta de nuestra representada, ya detalladas en los hechos de este recurso, frente a la posición y propuesta de Publicar de Panamá S. A., hubiera resultado en un dictamen favorable a nuestra representada y en la recomendación de adjudicarle a ésta definitivamente la Licitación".

Frente a lo argüido por la parte actora, debemos destacar lo siguiente:

En primer lugar en lo que respecta a la calidad de los equipos de computación ofrecidos para prestarle un mejor servicio al público, pudo constatarse mediante los peritajes llevados a cabo por profesionales de computación, que la empresa PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A. cumplió a cabalidad con lo requerido en la Licitación Pública del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL). El hecho de que la empresa **R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A.** se haya excedido en las ventajas que solicitaba el pliego de peticiones de la Licitación Pública, no es argumento determinante para considerar que la propuesta de PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., no es suficiente en los requisitos exigidos por el pliego de peticiones. Claramente se colige también de la Resolución N°57-91, expedida por el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), que para adjudicar definitivamente la Licitación Pública N°02-90 a la empresa PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., se tomó en cuenta la opinión profesional vertida por peritos especializados en la siguientes áreas: Equipos Computarizados; Prueba de calidad y otros; los cuales prestan sus servicios en la Universidad Tecnologías de Panamá, en el Centro Experimental de Ingeniería y en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.). Lo anterior nos indica que la adjudicación definitiva llevada a cabo por el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), no fue una decisión a la ligera, al contrario, se contó con profesionales, tanto de esa institución, como de otras que aportaran su experiencia para dictaminar la mejor propuesta.

En segundo lugar, y en relación con la capacidad económica y financiera de las empresas, pareciera ser que la demandante, que en este caso es **R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A.**, pierde de vista que el pliego de peticiones de la Licitación Pública establece los requisitos mínimos exigidos para que las empresas interesadas presenten las propuestas. Ambas **R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A.** y PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A. fueron las únicas empresas que participaron en dicha Licitación Pública y las cuales cumplían con los requerimientos mínimos para concursar. Al ser adjudicada provisionalmente y luego definitivamente la Licitación Pública a PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., para estos actos, se tomó en cuenta la capacidad económica y financiera de la empresa precitada, que no necesariamente tenía que ser la más alta, en relación a los rubros de ingresos, activos, valor de libros, liquidez, rentabilidad y capital de trabajo, bastaba simplemente que cumpliera con lo exigido por el Pliego de Peticiones. **R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A.** puede que sea una empresa cuyo capital de trabajo y demás sea superior a las condiciones de PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., pero esto no es situación determinante para adjudicar dicha Licitación a la empresa demandante. Hay que recordar que la adjudicación de la Licitación Pública obedece a la conjugación de dos

elementos, que están dirigidos a determinar el mayor beneficio para el Estado; que son: la conveniencia económica de las propuestas y la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera de los proponentes, tal como lo prevé las normas que se estiman vulneradas, (el artículo 50 del Código Fiscal y artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°83 de 1985). PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., cumplió con todas las condiciones mínimas, tanto económicas y financieras, y como las técnicas y administrativas; y lo que es más importante su propuesta favorece al Estado en un porcentaje mayor, que el ofrecido por **R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A.** Siendo esto así, no aceptamos los cargos endilgados.

También estima la demandante que el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), violentó lo preceptuado en el artículo 9 del Código Civil, y explica su conclusión de esta manera:

> "Esta norma ha sido violada directamente por omisión por el Comité Ejecutivo lo cual ha incluido sustancialmente sobre lo dispositivo de las Resoluciones 57-91 y 58-91.
>
> En efecto, por no aplicar la norma en cuestión, el Comité Ejecutivo ha interpretado erróneamente el verdadero sentido del Artículo 50 del Código Fiscal, modificado por el Decreto de Gabinete 45 de 1990 y su Artículo reglamentario, 28 del Decreto Ejecutivo 33 de 1985, tal cual ha quedado expuesto en el aparte 1° que antecede de este recurso".

Disentimos de lo señalado por la parte actora, ya que consideramos que el Comité Ejecutivo al adjudicar a la empresa PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., la Licitación Pública 02-90, siguió los lineamientos que prevé el artículo 50 del Código Fiscal, modificado por el Decreto de Gabinete N°45 de 1990 y su artículo reglamentario N°28 del Decreto Ejecutivo 33 de 1985, ya que como señaláramos en líneas anteriores el Instituto Nacional de Telecomunicaciones favoreció a la sociedad supracitada, tomando en cuenta la conveniencia económica de las propuestas y la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera. No observamos en que consiste la inaplicabilidad de las normas que se estiman transgredidas por lo que no prospera la acusación impetrada.

En lo que se refiere a la violación del artículo 14 del Código Civil, la empresa **R.P.M. TELECOMUNICACIONES, S. A.** mediante su apoderado judicial considera:

> "El Artículo 14 del Código Civil, que dicta normas de hermenéutica jurídica, aplicables a asuntos de derecho administrativo, ha sido violado directamente por omisión, lo cual ha influido sustancialmente sobre lo dispositivo de las Resoluciones 57-91 y 58-91 del Comité Ejecutivo del INTEL.
>
> En la Resolución N°58-91, impugnada, en dos ocasiones (a fojas 6 y 31 de dicha Resolución), el Comité Ejecutivo se basa en el Artículo 49 del Código Fiscal para concluir que cualquiera que hubiese sido el resultado de una ponderación adecuada de la capacidad económica, financiera, técnica y administrativa de nuestra representada y de su mandante GTE Directories Corporation, frente a Publicar de Panamá S. A. y a sus mandantes, el consorcio integrado por Publicar S. A. y Carvajal S. A., el Artículo 49 deja al Estado o, en este caso, a la entidad gubernamental correspondiente, en libertad de adjudicar una licitación pública a la propuesta que, a su exclusivo criterio, resulte más conveniente a sus intereses".

No coincidimos con lo expresado por el demandante, dado que el artículo 49 del Código Fiscal establece en realidad, el primer requisito que debe reunir la empresa que se haga acreedora de la Licitación Pública, y es que le será aceptada su propuesta si conviene a los intereses del Gobierno, estando complementada esta norma por el artículo 50 del mismo Código, cuando recoge otras condiciones para adjudicación de la licitación. En este mismo orden de ideas, de igual forma se establece en este último precepto legal que la empresa concursante debe ofrecer mayor beneficio para el Estado. El propio demandante reconoce la interpretación exacta de la norma controvertida, cuando señala que:

> "Vista en abstracto, esta disposición pareciera facultar al INTEL para decidirse en favor de Publicar de Panamá S. A. por el simple margen de cuatro décimas de punto porcentual (45.50% 45.10%), ya aludido en este escrito, sin consideración a la superioridad financiera de nuestra representada y a las ventajas comparativas de su oferta técnica". (subrayado es nuestro)

Concluimos, que el artículo 50 del Código Fiscal, no reforma el artículo 49 del mismo Código, al contrario, lo complementa, resaltando el hecho de que la propuesta no sólo debe convenir con los intereses del Gobierno, sino que de igual forma le brinde mayor beneficios. Por lo anterior no es viable el cargo incoado.

Por último se señala como transgredido el artículo 49 del Código Fiscal, de esta manera:

> "En la Resolución 58-91, que desestima el Recurso de Reconsideración, al negarse a ponderar las respectivas capacidades de los proponentes, el Comité Ejecutivo utiliza el argumento de que en todo caso está en libertad de adjudicarle la Licitación a Publicar de Panamá S. A., si en su exclusivo criterio considera que su propuesta es la que más conviene a los intereses del INTEL. Al interpretar el Artículo 49 de esta manera, el Comité Ejecutivo rehusa darle concordancia con el Artículo 50 del mismo Código, antes citado, que restrinje la libertad absoluta,"...

Ya acotamos en párrafos anteriores, que el artículo del Código Fiscal complementa el artículo 49 del mismo Código, por lo que no hay cabida a interpretarlas de que una reforma a la otra, aduciendo criterios de hermenéutica legal. Ha quedado claro que en ambas se recalca el hecho de que las propuestas deben convenir a los intereses y brindarle mayores beneficios al Estado, situación que se verificó cuando le fue

adjudicada la Licitación Pública 02-90 a la empresa PUBLICAR DE PANAMÁ, S. A., enervándose la pretensión del demandante.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO SON ILEGALES las Resoluciones N°57-91 de 14 de marzo de 1991 y la N°58-91 de 21 de mayo de 1991, dictadas por el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL).

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS ARROCHA ROMERO, EN REPRESENTACIÓN DE ELISA GONZÁLEZ VDA. DE SAVAL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 2052-84 DE 19 DE DICIEMBRE DE 1984, EMITIDO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Lcdo. Luis Arrocha Romero, actuando en representación de Elisa González vda. de Saval, ha interpuesto recurso de apelación contra el Auto de 23 de octubre de 1993, expedido por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Arrocha, con el objeto que se declare nula, por ilegal la Resolución N°2052-84 de 19 de diciembre de 1984, expedida por el Director Nacional de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social y para que se hagan otras declaraciones.

El resto de los Magistrados que integran la Sala proceden a examinar la demanda a fin de determinar si se cumplen todos los presupuestos procesales necesarios para que aquélla pueda ser admitida.

El Magistrado Sustanciador no admitió la demanda mediante la resolución recurrida debido a que, a su juicio, la misma adolece de ciertos defectos que hacen imposible su admisión. En primer lugar el Magistrado Sustanciador estimó que la demanda había sido interpuesta de manera extemporánea por haber prescrito, el término de 2 meses preceptuado por el artículo 42b para la presentación de este tipo de acciones. Por otro lado, consideró el Sustanciador que al apoderado judicial de la parte actora tan sólo se le han conferido facultades para recurrir contra la resolución N°5251-90-JD, que es la resolución que confirma el acto original y no contra el acto original mismo.

El apoderado judicial de la parte actora sustenta el recurso de apelación alegando que el acto confirmatorio decisorio de la apelación fue expedido el 13 de septiembre de 1990, y por lo tanto, nunca pudo ser notificado el 27 de agosto de 1990, es decir, antes de su expedición. Alega a su vez que la resolución antes mencionada debió ser notificada personalmente al Lcdo. Alvaro Cabal Ducasa, apoderado original de la demandante, sin embargo, éste fue designado Juez Marítimo desde el 5 de junio de 1990 por lo cual su poder fue sustituido el 26 de noviembre de 1991. Dicho poder fue presentado al Secretario General de la Caja de Seguro Social el 12 de diciembre de 1991, "se hicieron todas la diligencias posibles para ubicar el expediente contentivo de la resolución, pero en vista de que no aparecía el poder sustituido no fue, sino hasta el 17 de agosto de 1992, por lo cual, interpuesta la demanda el 16 de octubre de 1992, la misma se encuentra en término". En relación a la limitación del poder conferido por la demandante, su apoderado judicial señala que aun cuando esta situación no constituye el fundamento para la inadmisión del recurso, si bien es cierto que en dicho poder sólo se mencionó la resolución confirmatoria y no el acto original, éste puede considerarse incluido aunque no se haya mencionado expresamente y que, además, lo que procedía era, según el artículo 616 del Código Judicial, ordenar la corrección del poder sin invalidar lo actuado e incluso su mandante podía ratificar todo lo actuado en su beneficio.

Encontrándose pendiente para resolver la apelación interpuesta por la parte actora contra la resolución que no admite la demanda, el resto de los Magistrados que integran la Sala observan que en el presente caso la no admisión de la demanda se fundamenta en la fecha de notificación de la resolución que confirma el acto impugnado. Dado que dicha fecha no estaba lo suficientemente clara lo cual impedía al resto de la Sala tomar una determinación en cuanto a si efectivamente la demanda fue interpuesta de manera extemporánea o no, el Magistrado Sustanciador de la apelación ordenó a la Secretaría General de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema que se solicitase a la Secretaría General de la Caja de Seguro Social, mediante oficio, que se remitiese a este despacho el expediente original de la Sra. Elisa González vda. de Sabal en relación a la solicitud de pensión de invalidez presentada ante la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social.

Remitido el expediente administrativo antes aludido, el resto de la Sala observa, a fojas 135 y ss., el original y dos copias de la resolución expedida por la Junta Directiva de la Caja Seguro Social y mediante la cual se confirma en todas sus partes el acto impugnado en esta demanda. Una vez examinada la resolución original y sus 2 copias el resto de los Magistrados que integran la Sala han podido comprobar que tanto la resolución original como las dos copias le fueron impresas en su parte posterior el sello de notificación el cual fue firmado en los tres casos por el Lcdo. Arrocha. Determinamos igualmente que en el sello de notificación de la resolución original aparece claramente con fecha de notificación el 17 de agosto de 1992; igualmente se aprecia la firma del Lcdo. Arrocha con su número de cédula y fuera del sello de notificación las palabras escritas en puño y letra del Lcdo. Arrocha anunciando que

recurriría ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, su firma y la fecha en que dicho anuncio fue escrito, "17/VIII/92", es decir, el 17 de agosto de 1992. En la primera copia de la resolución antes aludida, visible en la foja sin número siguiente a la foja 135, se observa que en el sello de notificación se específica igualmente como fecha de notificación el 17 de agosto de 1992. Por último, en la segunda copia se observa que en el sello se señala como fecha de notificación el 27 de agosto de mil novecientos noventa, contrario a lo que se certifica en los sellos de notificación de la resolución original y su primera copia. Por otro lado, opina la Sala, resulta a todas luces imposible que ésta última haya sido la fecha real de notificación por cuanto la resolución fue expedida el 13 de septiembre de 1990.

El resto de los Magistrados de la Sala estima que en casos como en el presente, donde existen varios sellos de notificación contradictorios entre sí, resulta aplicable el "principio in dubio pro actione o de interpretación más favorable al ejercicio del derecho de petición para asegurar más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. En materia de procedimiento administrativo el principio se traduce en que el formalismo debe ser interpretado en favor del administrado" (BREWER-CARIAS, Allan R. Principios del Procedimiento Administrativo. Editorial Civitas, Primera Edición. Madrid, 1990. p. 148.).

Se colige, pues, que la Caja de Seguro Social incurrió en un error al completar el sello de notificación de la segunda copia de la resolución original (No. 5251-90-J.D. de 13 de septiembre de 1990) y que fue la copia de esta última la que se le autenticó al demandante para su presentación ante este Tribunal.

Dado que la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa se tiene como verificada el día 17 de agosto de 1992, la parte actora contaba con un término de dos meses para la presentación de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera- Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, es decir, hasta el 17 de octubre de 1992. Consta a foja 23 del expediente, que la demanda en estudio fue presentada ante la Secretaría General de esta Sala el día 16 de octubre de 1992 a las 8:35 a. m. por lo que la misma fue presentada en tiempo oportuno y, por ende, debe ser admitida.

En torno a la supuesta limitación del poder conferido al Lcdo. Arrocha, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera-Contencioso Administrativa de la Corte Suprema observa, que si bien en el poder originalmente conferido por la señora Elisa González vda. de Saval al Lcdo. Luis Arrocha Romero se refiere únicamente a la Resolución No. 5251-90-J.D. de 13 de septiembre de 1990, que constituye el acto confirmatorio de la resolución originalmente impugnada, también consta a foja 59 del expediente la ratificación de todo lo actuado por el Lcdo. Arrocha en representación de la Señora Vda. de Saval. La validez de dicho escrito se encuentra debidamente certificada por el Lcdo. Mario Jaime De Obaldía, Notario Tercero del Circuito de Chiriquí.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera-Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA del Auto de 23 de octubre de 1992 que declara inadmisible la presente demanda, ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Luis Arrocha Romero en representación de Elisa González Vda. de Saval.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE SANIDAS, EN REPRESENTACIÓN DE NORIS ELIDA TORRALBA BETHANCOURT, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL MEMORÁNDUM DE 11 DE MARZO DE 1993, SUSCRITO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **JORGE SANIDAS**, actuando en representación de **NORIS ELIDA TORRALBA** ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el acto administrativo contenido en el MEMORÁNDUM fechado 11 de marzo de 1993, suscrito por el Ministro de Educación.

Observa el sustanciador que el recurrente incluye en su libelo una solicitud previa a la admisión de la demanda, a fin de que quien suscribe solicite al Ministerio de Educación, la copia debidamente autenticada del recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado contra el acto impugnado, así como la certificación de que ha transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 22 numeral 3° de la Ley 33 de 1946 sin que la administración se haya pronunciado en relación a los mismos.

Sin embargo, y en consonancia con el principio de Economía Procesal, es preciso determinar si el libelo instaurado cumple con los requisitos formales necesarios para su admisión.

En el caso sub-júdice se aprecia a foja 2 del expediente, que el acto demandado está fechado 11 de marzo de 1993, pero no existe constancia de la fecha en que el mismo fue notificado a los afectados.

El día 17 de marzo de 1993 supuestamente se presenta recurso de reconsideración con apelación en subsidio, más el recurso en mención no ha sido aportado debidamente, toda vez que no se encuentra autenticado.

El recurrente pretendió sanear este defecto, y a fojas 11-12 del expediente se aprecia la solicitud presentada, tanto por la Señora **NORIS TORRALBA** como por su apoderado legal, para que se autenticase el recurso incoado. Esta solicitud fue entregada al Ministerio de Educación, pero no recibió respuesta positiva por parte de la Institución.

El actor también presentó una solicitud especial para que se certificase que sobre el recurso instaurado no había recaído pronunciamiento alguno, agotándose la vía gubernativa por la ocurrencia del silencio administrativo. Tal requerimiento tampoco recibió contestación.

Una vez acaecidos estos hechos, el recurrente se presenta a la Sala Tercera con su acción de plena jurisdicción.

Quien sustancia considera que el recurrente realizó los trámites y diligencias tendientes a la consecución de los documentos necesarios para incoar la acción debidamente, y conforme a los requisitos formales exigibles por las leyes rectoras de los procesos contencioso-administrativos. Así ha quedado plasmado en el expediente, por lo cual el Sustanciador puede hacer uso de la facultad conferida en el artículo 46 de la ley 135 de 1943, cuyo texto legal preceptúa:

> "Artículo 46: Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentra el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por sustanciador antes de admitir la demanda."

En vista de que para determinar la viabilidad o no de la acción presentada se requiere examinar los documentos debidamente autenticados en que conste la notificación del acto impugnado, así como si sobre los recursos presentados en la vía gubernativa recayó o no pronunciamiento, lo cual determinará si la acción ha sido presentada dentro del plazo legal previsto en el artículo 27 de la ley 33 de 1946, es pertinente acceder a la solicitud previa del actor.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que antes de admitir la demanda en estudio se SOLICITE al Señor Ministro de Educación que remita a esta Superioridad los siguientes documentos:

1. Copia debidamente autenticada del Memorial que declaró desierto el concurso directivo No.11-1c-92 y la fecha en que el mismo fue notificado a la Señora NORIS TORRALBA BETHANCOURT.

2. Copia debidamente autenticada del recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado por la Señora NORIS TORRALBA B.

3. Certificación de si sobre el referido recurso recayó o no pronunciamiento alguno.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA NORA AROSEMENA DE BATINOVICH EN REPRESENTACIÓN DE AUTO IMPORT, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°213-2083 DE 5 DE JULIO DE 1989, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **NORA AROSEMENA DE BATINOVICH** actuando en representación de la empresa **AUTO IMPORT, S. A.**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N°213-2083 de 5 de julio de 1989 dictada por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá.

Considera el demandante que el acto impugnado es violatorio de los artículos 697 y 698 del Código Fiscal, así como de los artículos 30 y 50 del Decreto de Gabinete N°60 de 28 de junio de 1965.

De la demanda instaurada se corrió traslado al señor Procurador de la Administración, quien procedió mediante Vista Fiscal N°311 de 22 de junio de 1992, a oponerse a las pretensiones del recurrente. (Cfr. fojas 44-55 del expediente).

De igual forma se dio traslado al funcionario que expidió el acto acusado, quien procedió a rendir su informe de conducta, tal como se aprecia a fojas 40-43 del expediente.

Una vez surtidos todos los trámites legales establecidos para estos procesos, tal como se desprende del informe secretarial visible a foja 66 del expediente, procede la Sala Tercera a desatar la controversia instaurada.

Observa el Tribunal, que el litigio en estudio tiene su origen en las liquidaciones adicionales giradas por la Dirección Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá para los períodos 1986 y 1987, a la empresa **AUTO IMPORT, S. A.**, que ascienden a B/.12,042.05 para el año 1986 y B/.19,942.67 para el año de 1987, por razón de gastos de representación que la empresa dedujo de su renta gravable, y que según la Dirección Regional de Ingresos no debían ser objeto de tal deducción, dado la forma irregular en que habían sido contemplados por la empresa en un renglón de "gastos por pagar".

El primer cargo de ilegalidad aducido por el recurrente, descansa en la supuesta transgresión del artículo 697 del Código Fiscal que contiene el listado de los gastos y erogaciones deducibles de la renta bruta de los contribuyentes.

El actor señala que la norma en mención ha sido infringida por violación directa, dado que al ser deducibles los gastos de representación, por ser estas erogaciones ocasionadas en la producción de renta, y no aceptarse tal deducción a la empresa en concepto de su impuesto de renta, se vulnera directamente la norma legal aducida.

La Sala observa que en este negocio no se encuentra en discusión la posibilidad o no de deducir los gastos de representación de una empresa, lo cual es perfectamente factible a tenor de lo expresado en el artículo 697 del Código Fiscal. Lo que hay que determinar es si se ha acreditado debidamente la incurrencia de la empresa en tales gastos para que se les reconozca la deducibilidad, puesto que el parágrafo segundo del propio artículo 697 establece la eventualidad de que aún en el caso de que el gasto sea deducible, si no puede comprobarse satisfactoriamente no será considerado como un gasto ocasionado en la producción de renta o en la conservación de la fuente, y por ende, no es deducible.

> En efecto, la norma en mención, en su parte pertinente, destaca:
> "Artículo 697:
> ...
> Parágrafo Dos: No son gastos o erogaciones ocasionados en la producción de la renta o en la conservación de su fuente y, por lo tanto, no son deducibles los siguientes:
> ...
> f) Cualquier otro gasto, que aunque deducible, no pueda ser comprobado, satisfactoriamente cuando su prueba sea exigida por la Dirección General de Ingresos".

Como puede colegirse del texto legal citado, aún aquellos gastos que están dentro de los presupuestos de deducibilidad, si no se comprueban, no podrán ser deducidos, y es precisamente en este aspecto que fundamenta la Dirección Regional de Ingresos la resolución impugnada, por lo que no es procedente el cargo de ilegalidad aducido, toda vez que la Dirección Regional de Ingresos sólo ha aplicado esta norma legal a una situación en la que, conforme a las constancia de los libros de comercio, inventarios, balances, y demás documentos del contribuyente, no se han acreditado los gastos que fueron deducidos del impuesto de renta de **AUTO IMPORT, S. A.**, y en tal actuación no hay vicio legal alguno.

Es menester por tanto examinar las razones sustanciales que tuvo la Dirección Regional de Ingresos para considerar que no se había comprobado el gasto y que por consiguiente no era deducible.

El segundo cargo de ilegalidad aducido, descansa en el artículo 698 del Código Fiscal.

El texto legal cuya transgresión se impetra, literalmente señala:

> "Artículo 698. Cuando por cualquier causa el contribuyente deje de deducir gastos correspondientes a un (1) año gravable, éstos no podrán deducirse de la renta de ningún año posterior. Se exceptúan los gastos que por su propia naturaleza no fueran determinables con exactitud en el año en que debieron ser deducidos. En este caso, el gasto puede ser deducido únicamente en el año en que se determine el monto exacto del mismo".

> Al explicar el concepto de la violación indicada, el actor ha señalado que la misma se configura en virtud de que la Administración pretende que la empresa **AUTO IMPORT, S. A.** incluya sus gastos de representación en años distintos a los que supuestamente se incurrieron, por lo que se ha aplicado indebidamente la norma legal precitada.

Observa la Sala Tercera del estudio realizado a las piezas procesales que constan en el negocio, y de la fundamentación que en sus resoluciones incluyó la Dirección Regional de Ingresos, que ésta en ningún momento ha pretendido que los gastos de representación en que supuestamente incidió la empresa contribuyente, sean pagados en un período fiscal que no sea el que corresponde.

Hemos enunciado en líneas anteriores, que la objeción de deducibilidad de los gastos de representación declarados según un ajuste de **AUTO IMPORT S. A.**, en los años 1986 y 1987, estriba en la forma en que estos han sido registrados como gastos por pagar al final del año fiscal, a pesar de que según el sistema de contabilidad elegido por el contribuyente para computar sus ingresos y gastos, que es el de "devengados", los gastos deben reconocerse en el momento en que se incurren; y por otro lado, si la empresa ha elegido la opción contemplada en el artículo 50 del Decreto de Gabinete N°60 de 1965, al señalar que los gastos de representación los paga mediante asignaciones de partidas fijas a sus empleados, tal procedimiento no concuerda con el, que en la práctica, la empresa ha realizado, puesto que es al final del año que incluye en ese rubro ajustes por pagar de aproximadamente 30 mil balboas para el año de 1986 y de 47 mil para el año de 1987, y mensualmente mediante cheques, sólo pagaba B/.725.00 (Cfr. fojas 6, 15, 19-20 del expediente). Lo anterior, palmariamente demuestra que la empresa **AUTO IMPORT, S. A.**, conjugaba dos procedimientos al momento de registrar sus gastos de representación, y que tal método no sólo no es apropiado para llevar la contabilidad en la forma prevista en las leyes fiscales, sino que en este caso, la situación se torna más irregular, al no haber podido la empresa comprobar la ocurrencia de los mismos (Cfr. fojas 15, 20-21 del expediente).

En atención a estas consideraciones que dilucidan el fondo de la controversia, debemos negar el cargo de ilegalidad planteado por el recurrente en relación al artículo 698 del Código Fiscal, al quedar expuestas las irregularidades en que incurrió la empresa, y que no tienen ninguna vinculación con el texto del artículo 698 del Código Fiscal.

El tercer cargo de ilegalidad aducido por el actor, acusa la transgresión del artículo 30 del Decreto de Gabinete N°60 de 28 de junio de 1965, que reglamenta las disposiciones del Impuesto sobre la Renta contenidas en el Código Fiscal, y cuyo texto legal reproducimos a continuación:

> "Artículo 30. El contribuyente computará sus ingresos y gastos en el año fiscal según el sistema habitual de contabilidad que siga, sea el sistema denominado 'devengado' o 'recibido'. El sistema deberá ser homogéneo para los ingresos y para los gastos.
>
> Adoptado un sistema, el contribuyente podrá cambiarlo, haciendo los ajustes correspondientes en el año fiscal y poniendo previamente el cambio en conocimiento de la Dirección General de Ingresos.
>
> Sin embargo, las rentas provenientes de arrendamiento de edificios deberán declararse en el año fiscal en que fueron devengadas, aunque no hubieren sido cobradas en el mismo período. El mismo criterio se aplicará con respecto a los gastos incurridos".

Este cargo de violación se encuentra relacionado con el analizado previamente. El actor estima que la infracción legal se configura al momento de que la Administración no reconoció la deducción de los gastos de representación en que supuestamente incurrió la empresa, y que eran registrados según el sistema de "devengados".

Debemos recalcar al recurrente lo esgrimido en párrafos precedentes, en el sentido de que los gastos de representación en la forma en que fueron incluidos al final de los períodos 1986 y 1987 adolecían de irregularidades: en primer término, si el sistema de contabilidad era el de "devengado", los gastos incurridos podían pagarse, directamente (comprobándose el pago); mediante reembolso (o sea que el gasto lo realizaba cualquier persona y el contribuyente lo reembolsa, lo cual también debe comprobarse), y finalmente, la opción que el recurrente eligió, mediante asignaciones de partidas fijas a sus empleados. Pero tales partidas fueron pagadas parcialmente, para que a final de año, se abultaran en "ajustes de gastos". No puede determinarse si se trataba de ajustes, reembolsos, o asignaciones, por lo irregular de la actuación; y lo que es más anómalo, es que cualquiera que fuese la naturaleza del ajuste, no pudo ser comprobado el gasto, lo cual es un requisito exigible para tal fin, a tenor de lo dispuesto en el artículo 50 del propio Decreto de Gabinete N°60 de 1965, y del literal f del artículo 697 del Código Fiscal.

En virtud de que lo anterior es el verdadero fundamento del ajuste realizado por los auditores de la Dirección Regional de Ingresos a **AUTO IMPORT, S. A.**, debemos negar el cargo de ilegalidad esgrimido por el actor en relación al artículo 30 del Decreto de Gabinete N°60 de 1965.

Finalmente, el recurrente aduce como violado el artículo 50 del Decreto de Gabinete N°60 de 1965.

La norma en cuestión señala:

> "Artículo 50. Son deducibles los gastos de representación, dentro de los límites establecidos en este artículo.
>
> Se consideran de representación los gastos de cortesía o de atención a clientes o de agasajos a personas o entidades vinculadas a la actividad regular del contribuyente, incurridos en el curso normal de sus actividades, como una consecuencia necesaria de las mismas, para la producción de la renta gravable.
>
> Dichos gastos pueden ser pagados directamente por el contribuyente o mediante reembolso o asignaciones de partidas fijas a sus empleados. Cuando se efectúen en cualquiera de las dos primeras formas, deberán ser debidamente comprobados. Cuando se efectúen mediante asignaciones, el asignatario deberá adicionar dichas partidas fijas a su renta bruta y podrá deducir un máximo de B/.3,600.00 al año. Esta deducción solamente la podrán practicar los empleados que reciban una remuneración superior de B/.6,000.00 anuales.
>
> El total de gastos de representación, cualquiera que sea la forma en que se paguen, no podrá exceder del 2% de las rentas brutas del contribuyente".

El demandante alega que al utilizar la empresa **AUTO IMPORT, S. A.**, la opción de pago de los gastos de representación de acuerdo a la asignación de partidas fijas, no tenía obligación de comprobar tales gastos.

Sin embargo, y tal como señaláramos con anterioridad, la Administración no puede aceptar como deducibles los gastos que no puedan comprobarse, tal como ha dispuesto el artículo 697 del Código Fiscal en el literal f de su parágrafo segundo, anteriormente comentado y transcrito.

Es preciso reiterar lo que la Sala Tercera ha señalado al recurrente, en el sentido de que los gastos de representación son aquellos en que se incurre como consecuencia necesaria de las actividades del contribuyente para la producción de la renta, lo que supone que no pueden estar sujetos a premisas, hipótesis o expectativas de la renta o ingresos de la empresa, y presume que se cuenta, con los medios para hacerle frente a tales gastos, puesto que el artículo 29 del Decreto N°60 de 1965 también dispone que no pueden deducirse gastos en que se incurran con posterioridad a la obtención de las rentas.

Valederas resultan por tanto, los cuestionamientos que hacía la Dirección Regional de Ingresos (f.16 del expediente), en cuanto a los gastos en que supuestamente se incurrió, y al respecto señalaba:

> "Ante los hechos descritos realmente no nos explicamos en qué forma él o los asignatarios designados por el contribuyente, pudieron cumplir a total satisfacción con los gastos de cortesía o de atención a clientes o de agasajos a personas vinculadas a la actividad regular de la empresa a que se refiere en su segundo párrafo el Artículo N°50 del Decreto de Gabinete N°60 de 28 de junio de 1965, los cuales por su naturaleza hace imprescindible que éste o éstos, cuenten con la capacidad de pago para hacerle frente en el momento en que se incurren, cuando de un gran total de B/.39,700.85 para el año de 1986 y B/.55,900.00 para el ejercicio fiscal de 1987, reportados como Gastos de Representación en las Declaraciones Jurada de Renta del contribuyente en los mencionados años, éste o éstos, de acuerdo a la auditoría realizada recibieron efectivamente la suma de B/.700.00 en cada uno de los años señalados, reflejándose en el renglón de Gastos de Representación por Pagar el saldo o diferencia por la suma de B/.31,000.85 para el año 1986 y de B/.47,200.00 para el período de 1987, ...".

La Dirección Regional de Ingresos expone también su inquietud, en cuanto a que las irregularidades en los registros contables de la empresa pudieron encaminarse a alcanzar el 2% de deducción de sus ingresos brutos (fijado en el artículo 50 del Decreto de Gabinete N°60 de 1965), y por ende concluyó:

> "... al no aportar prueba alguna que justifique lo actuado por el contribuyente, nos permite concluir que los ajustes efectuados por AUTO IMPORT, S. A., en el rubro de Gastos de Representación, sin simplemente fueron realizados para alcanzar el 2% de deducción de los Ingresos Brutos que fija como límite el Artículo N°50 del Decreto de Gabinete N°60 de 28 de junio de 1965".

Tales afirmaciones no pueden inferirse de las constancias del expediente, pero sí es preciso aclarar, que no puede equiparse en los libros contables, la asignación fija a los empleados en concepto de gastos de representación (a la que hace alusión el artículo 50 del Decreto de Gabinete N°60 de 1965), con el renglón incluido en las declaraciones de renta de la empresa **AUTO IMPORT, S. A.** para los años de 1986 y 1987 denominado "ajustes a gastos de representación", que ha acumulado el exceso de los gastos de representación que no se habían incluido en las partidas fijas.

La Sala Tercera estima por tanto que la actuación de la Dirección Regional de Ingresos se ajusta a las normas legales que regulan la materia, y que ante las irregularidades detectadas, la Administración debía realizar las liquidaciones adicionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 720 del Código Fiscal, por lo que su proceder no está viciado de ilegalidad.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N°213-2083 de 5 de julio de 1989 dictada por el Administrador Regional de Ingresos, y NIEGA las declaraciones solicitadas por el recurrente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE YADIRA DELGADO Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO N° GG-100-152-90 DE 12 DE DICIEMBRE DE 1990, SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor **CARLOS DEL CID** actuando en nombre y representación de la señora **YADIRA DELGADO Y OTROS**, presentó demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción contra la nota de despido expedida en contra de su representada el día 12 de diciembre de 1990 por el Director General del **INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (INTEL), p**or considerarla, nula, por ilegal.

Junto con el presente proceso Contencioso Administrativo, el Doctor del Cid presentó contra el **INTEL**, por los mismos hechos y con el mismo objeto, demandas contra los despidos de los trabajadores, **LUIS ALFONSO ESTRIBÍ, ALFONSO FERNÁNDEZ URRIOLA, ELENO AUGUSTO GARCÍA CASTRO, ALEJANDRINA GORDON RIVERA, RICARDO ANTONIO GUISEPPIT PÉREZ, RIGOBERTO ISACS ROZZI, MARISOL LANDAU, NODIER MÉNDEZ, LIDIA DE MARÍN, ROLANDO ANTONIO MILLER BYRNES, NERMES ANTONIO MARÍN Y CARLOS MENDOZA**; por lo que la Sala, mediante auto de 19 de junio de 1991, ordenó la acumulación de los referidos procesos, a efectos de que fueran tramitados bajo una sola cuerda y fueran decididos en una misma resolución final, como se observa a foja 402 del 2° tomo del negocio bajo estudio.

Encontrándose los procesos acumulados en estado de ser fallados, pasa la Corte a decidir la controversia legal planteada, examinando cada caso en forma individual.

Sostiene el impugnante que el despido de la trabajadora **YADIRA DELGADO**, viola el artículo 29 de la ley 135 de 1943; los artículos 103, 114 y 2 de la ley 8 de 1975 así como el artículo 2549 del Código Judicial.

El concepto de la infracción del artículo 29 de la ley 135 de 1943, lo explica así:

> "Esta norma ha sido violada en forma directa por omisión debido a que la misma impone la obligación a las autoridades de las distintas dependencias del Estado, de llevar a cabo un negocio, proceso o actuación administrativa, en los casos de carácter nacional y terminarlos por una resolución que debe ser notificada al interesado, a su representante o apoderado. En el caso del trabajador demandante, que tiene trascendencia nacional porque afecta a otros dirigentes y miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (SITINTEL) en todo el país, la autoridad nominadora no llevó a cabo ninguna investigación, negocio, proceso o actuación administrativa sobre la causal invocada para destituirlo, despedirlo o declarar insubsistente su nombramiento, ni mucho menos pudo dictar la resolución final requerida por la ley. Solamente el Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) se limitó a comunicarle por medio de una nota u oficio la destitución, despido o insubsistencia del nombramiento al trabajador demandante sin señalarle allí los recursos que la ley pone a disposición para su defensa, pasando por alto también el término dentro del cual debían interponerse tales remedios jurídicos".

En lo referente a la infracción del artículo 114 de la Ley 8 de 25 de febrero de 1975, el recurrente señaló:

> "Esta norma es aplicable, según se desprende del contenido del artículo 5o. de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990, ya que se refiere al procedimiento o formalidades para despedir que no está contemplada en dicha ley ni la contradice. La disposición legal 114 no sólo exige que medie causa justificada prevista en la ley, sino que también se cumplan las formalidades de ésta. Sin embargo el Gerente General del INTEL, destituyó, despidió o declaró insubsistente el nombramiento del trabajador demandante sin cumplir las formalidades establecidas en la ley 8a. de 1975, al no escuchar previamente al afectado ni reconocerle el derecho de defensa, ni comprobar los cargos con investigación alguna, ni identificar al trabajador objeto de la sanción de despido como partícipe en los actos tenidos como causal de la medida tomada en su contra. Por tanto, al desconocer las formalidades que exige la ley, para poner término a la relación de trabajo, infringió el artículo 114 aquí meritado en concepto de violación directa por inobservancia".

De igual forma el actor considera infringido el artículo 103 de la Ley 8a. de 1975, exponiendo el concepto de la violación, como a continuación señalamos:

> "Esta norma ordena al empleador, en este caso el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) permitir que el trabajador demandante pudiera ejercer el derecho de ser oído y de ser acompañado por un asesor designado por el Sindicato, previamente a la aplicación de la sanción disciplinaria de la cual fue objeto. Pese a ello, este procedimiento fue totalmente desconocido por el Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), que no escuchó al trabajador demandante permitiéndole exponer alegaciones en su defensa ni designar un asesor del Sindicato, a pesar de que era obligatoria esta garantía procesal establecida a favor del trabajador, la cual es aplicable por tratarse de una formalidad que no contradice la ley 25 de 14 de diciembre de 1990 en materia de procedimiento para despedir y que más bien esta norma concurre a complementar dicha ley. Por consiguiente esta disposición aquí glosada se violó de manera directa por falta de aplicación".

Al explicar la transgresión del artículo 2 de la ley 25 de 1990, el demandante esgrimió lo siguiente:

> "La norma transcrita atribuye una facultad a las autoridades superiores de las distintas dependencias del Estado, entre ellos el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) para declarar insubsistente el nombramiento de un funcionario público que participe en los actos descritos en el artículo 1°. de dicha Ley, previa identificación; es decir, la norma condiciona la aplicación de la sanción de destitución de un funcionario cuando antes de la destitución, se hubiera procedido a identificar al servidor público que hubiese participado en dichos actos. Sin embargo, sin que el Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), hubiese cumplido previamente con este requisito de identificación del trabajador demandante como partícipe de los actos prohibidos por la ley, procedió arbitrariamente a destituirlo, desconociendo la voluntad del Legislador que exige que se haga la identificación antes de la destitución. En consecuencia, se infringió el artículo 2 de la Ley 25, en forma directa por omisión".

Por último, la parte actora considera que el oficio N° GG-100-152-90 de 12 de diciembre de 1992 mediante el cual se despidió a su representada, conculca el artículo 2549 del Código Judicial, explicando su opinión al respecto, como reproducimos a continuación:

> "La norma transcrita ordena a todo funcionario elevar la consulta a la Corte Suprema de Justicia, en el término de dos (2) días cuando alguna de las partes en un proceso hubiera advertido que una disposición legal o reglamentaria es inconstitucional. Se formuló la correspondiente advertencia de inconstitucionalidad ante el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), pero a pesar de ello, dicho organismo no le imprimió el trámite establecido por el Legislador a los casos de advertencia de inconstitucionalidad, considerando que no es un 'ente competente para conocer sobre los procesos de inconstitucionalidad de las leyes', cuando lo viable era solamente someter el asunto a la consideración de la Honorable Corte Suprema y no hacer consideraciones

sobre la competencia en relación a la advertencia. Por tanto, se infringió esta norma en forma directa por falta de aplicación".

El Director General del **INTEL** al rendir su informe de conducta en lo concerniente al despido de **YADIRA DELGADO**, relató una sucinta historia cronológica de los recursos utilizados por la interesada, indicando que los mismos fueron incoados en término oportuno, y añadiendo que estos fueron igualmente desestimados mediante las resoluciones de 18 de enero de 1991 y de 14 de febrero del mismo año.

El Procurador de la Administración al contestar las demandas acumuladas en este proceso, se opuso a las pretensiones de los interesados, alegando básicamente que el **INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (INTEL)**, cumplió y observó a cabalidad con los preceptos estauidos por la ley 25 de 1990, que regula especialmente esta materia por su carácter de posterior frente a la ley 8 de 1975, confiriéndole a los afectados el derecho a ser escuchados en el proceso a través de los recursos de reconsideración y apelación, a los cuales hicieron uso en su oportunidad y dentro de los términos que establece específicamente la ley. En este sentido considera el representante del Ministerio Público, que a tenor de la ley 25 de 1990, únicamente era necesario que el Director del **INTEL** identificara a los participantes en este paro ilegal que atentaba contra el sistema democrático panameño, acaecido los día 4 y 5 de diciembre de 1990, para que se configurara en contra de los mismos la causal justificada de despido en esta particular situación; y que por lo tanto, dichas declaratorias de insubsistencia son perfectamente legales. Todo lo anterior es legible a fojas 437-448 del 2° tomo del caso en controversia.

Los demandantes presentaron como prueba, en cada caso, una certificación del Fiscal Noveno del Circuito de Panamá, en la que se asevera que ninguno de ellos es sujeto de investigación en el sumario que se levanta por los hechos ocurridos los días 4 y 5 de diciembre de 1990, en la ciudad de Panamá, en los cuales aparece investigado el ciudadano Eduardo Herrera Hassán, aportando otras pruebas para cada caso particular. En primer lugar examinaremos el caso de la trabajadora **YADIRA DELGADO**, y que la Sala entra de inmediato a pronunciarse sobre los cargos hechos al acto administrativo impugnado.

En lo concerniente al primer cargo impetrado de ilegal, el cual recae en el artículo 29 de la ley 135 de 1943, deseamos manifestar, que discrepamos de la posición adoptada por el Doctor del Cid, y coincidimos con los planteamientos del señor Procurador de la Administración, en virtud que consta en la fotocopia autenticada de la destitución de la señora **DELGADO**, que la misma fue notificada personalmente y en debida forma a la demandante, la cual a su vez utilizó los medios de impugnación a los cuales tenía derecho como se evidencia a fojas 2-5 del tomo primero de este legajo contentivo del presente litigio. Ello implica que aunque la Institución Gubernamental no hizo alusión en la Resolución GG-100-152-90 de 14 de diciembre de 1990, a los recursos que podía interponer la señora **DELGADO** y los términos previstos para tales efectos, lo cierto es que la impugnante a la luz del texto del artículo 32 de la ley 135 de 1943, convalidó la actuación de la autoridad administrativa, al proponer tanto el recurso de reconsideración como el de apelación sin percances legales o dicho de otra manera, sin que le haya precluido el término. Veamos la inteligencia del artículo 32 de la Ley 135 de 1943:

> "ARTICULO 32. Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales". (subrayado es nuestro).

Por los motivos anteriormente expuestos no procede el cargo endilgado.

En atención a la segunda acusación de ilegalidad, estima el recurrente que la Resolución en controversia conculca el artículo 103 de la Ley 8° de 1975, sin embargo, es importante resaltar, que la ley aplicable al caso y a la señora **YADIRA DELGADO** como al resto de los demandantes en consecuencia, por disposiciones de hermenéutica legal, es la Ley 25 de 1990, la cual es posterior a la Ley 8° de 1975 y además de que regula la materia en conflicto de manera especialísima, es clara al señalar que los servidores públicos que participaron y que participen, en la organización, llamado o ejecución de acciones que atenten contra la Democracia y el Orden constitucional, y sean identificadas, serán destituídos de sus puestos de trabajo, por lo que es notorio que la entidad autónoma no infringió precepto legal alguno, sino que más bien por el contrario, aplicó adecuadamente el supuesto estatuido en el artículo 2° de la Ley 25.

Dentro del procedimiento consagrado en la precitada excerta legal, no es necesario que la trabajadora sea acompañada por su abogado o asesor designado por el sindicato de esta Institución, ya que la Dirección General del **INTEL** tenía solamente como requisito sine qua non para despedir a cualesquiera de sus empleados, el identificarlos previamente como miembros del movimiento del paro ilegal, esto último declarado por las autoridades correspondientes llamado éste que desestabilizaba la democracia recién restablecida en nuestro país, como efectivamente llevó a cabo. Por ende, no fue transgredido el artículo 103 de la Ley 8° de 1975, ampliamente señalado como no aplicable al caso.

En lo atinente al tercer cargo demandado por ilegal, materializado en el artículo 114 de la Ley 8° de 1975, aprecia la Sala como esgrimió en párrafos anteriores, que el **INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**, no violentó el contenido de las disposiciones vigentes en esta particular circunstancia, ya que la Ley 25 de 1990, es la aplicable expresamente al caso; originándose debido a la imperiosa necesidad de preservar el orden constitucional que intentaron lesionar los integrantes del grupo que llamó al paro ilegal, consagrando explícitamente esta conducta como causal justificada de despido sin mayores ritualidades.

La señora **YADIRA DELGADO** fue previamente identificada como partícipe de este paro, configurándose su proceder, dentro de los supuestos prestablecidos en la ley 25 de 1990 como causal justificada de insubsistencia. Por lo tanto, es este conjunto de disposiciones vigentes de nuestra legislación positiva la aplicable al caso, y no la Ley 8ª de 1975 la cual es evidente que se emplearían con toda rigurosidad y formalidades,

si la demandante hubiese sido destituida por causales distintas a las antes enunciadas por lo que no procede la acusación de ilegalidad.

En lo referente a la cuarta imputación impetrada por la parte actora, cual es el artículo 2° de la Ley 25 de 1990, consideramos acertada la opinión vertida por la Procuraduría de la Administración, en el sentido que "fue precisamente la identificación de estos trabajadores como participantes en las acciones atentatorias de la democracia y el orden constitucional, y más específicamente en la organización, llamado o ejecución del paro nacional que se realizó el 5 de diciembre de 1990, la que determinó la declaratoria de insubsistencia de sus nombramientos en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones."(el subrayado en nuestro).

El Diccionario de la lengua española, publicada por el grupo editorial Océano, Bogotá, 1989, s/n, define IDENTIFICAR como ..." Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca" ...

El Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, publicado por la editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1989, págs. 359-360, conceptúa IDENTIFICAR, como " la acción que permite determinar si una persona es la misma que afirma ser o, en otros casos, si puede reconocerse en ella a una persona buscada. El signo de identificación más común está representado por el nombre y apellido de una persona..."

En esta situación en concreto, era suficiente a la luz del texto artículo 2° de la Ley 25 de 1990, el simple reconocimiento de los participantes en los acontecimientos del 5 de diciembre de 1990, por parte del Órgano Ejecutivo y de los Directores de las entidades autónomas y semi-autónomas, empresas estatales, municipales y demás dependencias públicas del Estado, entre las cuales se encuentra el **INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE**S, como efectivamente sucedió con la señora **YADIRA DELGADO** según consta en la resolución que ordena su destitución. Por lo expuesto no prospera la acusación impetrada.

Con relación a la quinta acusación de ilegalidad, es pertinente señalar que el Pleno de Corte Suprema de Justicia, se había pronunciado en relación a la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990, concluyendo esta máxima Corporación de Justicia, que dicha excerta legal únicamente era inconstitucional en lo concerniente al parágrafo del artículo 2°. Por ende la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por el Doctor del Cid, no cumplía con el requisito indispensable para su remisión al Pleno. En esta línea de pensamientos, es evidente que el Magistrado Sustanciador basado en innumerables precedentes y en aras del principio de la economía procesal, podía como en efecto hizo, rechazar de plano la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el actor.

Finalmente deseamos resaltar que hay que tomar en cuenta que las relaciones del Estado con sus servidores son de carácter administrativo. El acto de nombramiento de un empleado público es un acto-condición o sea que coloca a dicho empleado en una situación general creada por la ley y no por un acto contractual de naturaleza privada. La regla entre el Estado y sus servidores es que están sometidos a una relación de derecho público, según los estatutos que para ellos existiera o se dicten posteriormente. En razón de lo expresado, el empleado no sujeto a la carrera administrativa, (en la que se ingresa por concurso de mérito y no por libre nombramiento) se halla en una situación legal y reglamentaria en que su condición está señalada de antemano por la ley y los reglamentos. Esta situación del servidor público, sus derechos y obligaciones, puede ser modificados unilateralmente por el Estado en cualquier momento, mediante una ley de orden público sin que pueda alegarse derechos adquiridos".

En consecuencia no procede el cargo de ilegalidad y por tanto **no es ilegal** el despido de la señora **YADIRA DELGADO**.

Dado que las notas de despido de lo señores **LUIS ALFONSO ESTRIBÍ**, **ALFONSO FERNÁNDEZ URRIOLA**, **ELENO AUGUSTO GARCÍA CASTRO**, **ALEJANDRINA GORDON RIVERA**, **RICARDO ANTONIO GUISEPPIT PÉREZ**, **RIGOBERTO ISACS ROZZI**, **MARISOL LANDAU**, **NODIER MÉNDEZ**, **LIDIA DE MARÍN**, **ROLANDO ANTONIO MILLER BYRNES**, **NERMES ANTONIO MARÍN Y CARLOS MENDOZA**, (todos ex funcionarios del **INTEL**) se fundamentan en los supuestos que tipifica la Ley 25 de 1990; que todos los cargos, pretensiones y objeto de las demanda son iguales diferenciándose unas de otras solo en el nombre y generales de cada uno de los poderdantes y además, que estas acusaciones de ilegalidad a su vez han sido previamente consideradas, verificadas y desestimadas por esta Sala, no nos queda más que rechazar dichos cargos, al igual que sus pretensiones, por no colisionar las notas de insubsistencia con las normas endilgadas por los recurrentes.

Además como hemos anteriormente señalado, a tenor de la Ley 25, bastaba la identificación del servidor público como participante en las actividades en ella previstas como contrarias a la Democracia Panameña, para que procediera la destitución. Así las cosas, es evidente que los despidos de los demandantes **no son ilegales**, por todos los motivos anteriormente expuestos, puesto que todos fueron identificados como coadyuvantes de paro laboral, que a todas luces era ilegal.

En este punto es interesante recordar el génesis de los acontecimientos acaecidos el 4 y 5 de diciembre de 1990, que propiciaron el nacimiento de la Ley 25 de 1990 y consecuentemente los despidos en diversas instituciones del Estado. Para ello citaremos para mayor ilustración, el fallo de 18 de diciembre de 1992 expedido por esta Sala, que explica sucintamente esta delicada situación:

> "... es necesario empezar por hacer un relato de los hechos notorios ocurridos durante los días 4 y 5 de diciembre de 1990 y como consecuencia de ellos de la promulgación de la ley 25 de 1990 y de la Resolución de Gabinete N°110 de 23 de enero de 1991.
>
> La Coordinadora de los Sindicatos Estatales "Por el Derecho a la Vida" programó una marcha de empleados públicos y de obreros del sector privado para las 4 y 30 de la tarde, del día 4 de diciembre y anunció un paro de 24 horas para el día 5 de diciembre. El Gobierno advirtió que los funcionarios públicos que desertaren de sus labores injustificadamente serían despedidos.

> El Director General del I.R.H.E., en un comunicado a sus trabajadores, advirtió a los mismos, que las autoridades nacionales han calificado el paro como ilegal, y que el 5 de diciembre de 1990 es un día regular de trabajo.
>
> El dirigente sindical de los trabajadores del I.R.H.E., Isaac Rodríguez, en un hecho público y notorio, declaró el día 4 de diciembre, durante la manifestación obrera, que el paro se prorrogaría por 24 horas,"Y si después de las 24 horas no quieren negociar, el paro se prorrogará 48 horas o 72, hasta que se caigan entonces". (Diario La Prensa, del 5 de diciembre de 1990). Ese mismo día 4 de diciembre de 1990, a las 5 y 30 de la tarde, el Coronel Eduardo Herrera Hassán, ex jefe de la Policía Nacional, acusado de atentar contra la estabilidad interna del Estado, se fugó de la cárcel de la Isla de Naos y se tomó parcialmente el Cuartel Central de la Policía Nacional. A pesar de estos acontecimientos, el paro programado para el 5 de diciembre de 1990 por los sindicatos estatales no se levantó, por lo que el gobierno consideró que existía una vinculación entre el movimiento del militar y los paros obreros. La rebelión fue sofocada aproximadamente a las diez de la mañana del día 5 de diciembre y duró cerca de diecisiete horas. Informes públicos revelaron que mientras los rebeldes permanecieron en el Cuartel Central, hubo comunicaciones entre ellos y algunos dirigentes sindicales.

El marco histórico narrado es el que sirvió de base a la expedición, por parte de la Asamblea Nacional, de la ley 25 de 14 de diciembre de 1990, que estableció con carácter retroactivo, al 4 de diciembre de 1990, la autorización para despedir a los funcionarios públicos que habían participado en la organización, llamado o ejecución de acciones que atenten contra la Democracia y el Orden Constitucional, fueran o no dirigentes sindicales. Esta ley fue desarrollada por la Resolución N°110, de 23 de enero de 1991, del Consejo de Gabinete, con el propósito de establecer qué acciones eran contra la Democracia y el Orden Constitucional.

La ley 25 de 1990 fue acusada de inconstitucional por los sectores obreros, pero la Corte Suprema de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional a través del Pleno de la Corporación, consideró, en sentencia de 23 de mayo de 1991, que sólo era inconstitucional el parágrafo del artículo 1 de dicha ley, que otorgaba facultades al Consejo de Gabinete para determinar qué acciones eran contrarias a la Democracia o al Orden Constitucional. Por lo dicho, la ley 25 de 1990 conservaba su retroactividad por los hechos ocurridos a partir del 4 de diciembre de 1990 y la Resolución 110, de 23 de enero de 1991, del Consejo de Gabinete, dejaba de ser aplicable después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 23 de mayo de 1991. Todo lo anterior demuestra que las notas de despido expedidas entre el 4 de diciembre de 1990 y el 23 de mayo de 1991, caían bajo los efectos de la ley 25 de 1990."

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES los despidos de los trabajadores YADIRA DELGADO, LUIS ALFONSO ESTRIBÍ, ALFONSO FERNÁNDEZ URRIOLA, ELENO AUGUSTO GARCÍA CASTRO, ALEJANDRINA GORDON RIVERA, RICARDO ANTONIO GUISEPPIT PÉREZ, RIGOBERTO ISACS ROZZI, MARISOL LANDAU, NODIER MÉNDEZ, LIDIA DE MARÍN, ROLANDO ANTONIO MILLER BYRNES, NERMES ANTONIO MARÍN Y CARLOS MENDOZA ALFREDO GUERRA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. JORGE E. CARRERA CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ODILIO SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOL. NO. 3511-91-D.G. DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1991, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El señor Jorge Odilio Sánchez ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra el Director General de la Caja de Seguro Social. En la demanda se pide a la Sala que declare que es nula la Resolución No. 3511-91-D.G. de 26 de noviembre de 1991 emitida por el funcionario demandado y en la cual se destituyó al demandante del cargo de auxiliar de enfermería que desempeñaba en el Hospital Rafael Hernández en la Provincia de Chiriquí y además, que decrete el reintegro del demandante a sus labores con el pago de salarios.

Observa el suscrito que el demandante no ha comprobado el agotamiento de la vía gubernativa, pues, si bien presentó una fotocopia de la Resolución No. 7841-93 J.D. de 1o. de abril de 1993, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y que confirma el acto impugnado, dicha copia no se encuentra autenticada, por una parte, y, por otro lado, el sello de notificación que aparece al reverso de la foja 6 no aparece firmado, ni autenticado, por lo que no se ha comprobado en debida forma la fecha de la notificación, necesaria para establecer si la demanda ha sido presentada en tiempo.

Además, no se enuncia en la supuesta infracción del artículo 6 de la Ley no.2 de 1962 el concepto en la cual ha sido infringido.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda presentada por el señor Jorge Odilio Sánchez contra el Director General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EDUARDO II. SINCLAIR CRUISE, EN REPRESENTACIÓN DE CELINDA ESILDA GRAHAM DE NIÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N°. 2299 S/PNAL DE 29 DE DICIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR LA JEFA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Lcdo. Eduardo I. Sinclair Cruise, actuando en representación de Celinda E. de Niño, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Nota N°. 2299 S/pnal de 29 de diciembre de 1992, emitida por la Jefa de Personal del Ministerio de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si la misma reúne los requisitos necesarios para su admisión.

Observa quien suscribe que la demanda presentada adolece de varios defectos.

En primer lugar, en la designación de las partes y sus representantes, el apoderado judicial de la parte actora, omite señalar al Procurador de la Administración como el funcionario a quien corresponde la defensa del acto impugnado, en representación de la Administración.

En segundo lugar, al examinar la demanda se observa que la misma no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, debido a que la copia del acto impugnado no se encuentra debidamente autenticada ni acreditada su notificación.

La notificación del acto impugnado es un requisito de importancia exigido por ley. Todo acto administrativo impugnado requiere no sólo su autenticación sino la constancia de la notificación del mismo para demostrar el agotamiento de la vía gubernativa. El libelo de la demanda deberá acompañarse de estas constancias, pues de no ser así, la misma se encontrará deficientemente propuesta. Incluso, estipula el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que, de encontrarse imposibilitado de cumplir con lo establecido en el artículo 44 de la ley en mención, el demandante podrá optar por enunciar las oficinas donde se encuentra ubicado el original para que sea el Magistrado Sustanciador quien las solicite previamente a la admisión de la demanda. En este caso, no se acreditó la notificación ni se formula la petición expresa a que se refiere el artículo 46 antes mencionado.

En tercer lugar, el apoderado judicial de la parte demandante presentó ante esta Sala Tercera demanda mediante escrito fechado el 3 de mayo de 1993, por haberse agotado, a su modo de ver, la vía gubernativa por silencio administrativo.

A juicio de quien suscribe, el apoderado judicial de la parte demandante incurre en un grave error al considerar agotada la vía gubernativa pues no se ha comprobado el silencio administrativo, requisito esencial para poder recurrir en demanda contencioso administrativa ante esta Sala, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943. Si bien es cierto que la parte actora utilizó los recursos administrativos que la ley dispone como son el recurso de reconsideración y el de apelación en subsidio y, no recibió respuesta de los mismos, también es cierto que dentro de la demanda el silencio administrativo no ha sido debidamente comprobado. Ha sido jurisprudencia constante de esta Sala que el silencio administrativo alegado debe ser comprobado mediante certificación o una constancia que indique que dicho recurso no ha sido resuelto, o copia de un escrito en que se pida esa certificación.

En cuarto lugar, el Magistrado Sustanciador observa que la demanda no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que requiere que en aquélla se expresen las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación. En este caso el demandante en algunas de las disposiciones citadas como violadas, no transcribe el texto de las mismas y en otras no expone las modalidades en que se ha producido la infracción la cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación.

Por todo lo antes expuesto, lo procedente es, pues, no admitir la demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Lcdo. Eduardo Sinclair Cruise, en representación de CELINDA ESILDA GRAHAM DE NIÑO, para que se declare nula por ilegal, la Nota N° 2299 S/pnal de 29 de diciembre de 1992, emitida por la Jefa de Personal del Ministerio de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. ROBERTO E. FUENTES, EN PROPIO NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ANTONIO SOSSA DUTARY Y CARLOS LISANDRO LÓPEZ SCHAW, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO CONSTITUIDO POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO QUE NIEGA A LOS DENUNCIANTES LA RESPECTIVA INVESTIDURA PARA HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS DEL ESTADO SOBRE LOS DINEROS DEL TESORO NACIONAL QUE HA ADQUIRIDO ILEGALMENTE LA EMPRESA REFINERÍA PANAMÁ, S. A., MEDIANTE COMPRAS HECHAS POR EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El señor Procurador de la Administración al recibir traslado de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma forense **COCHEZ-CASTILLO Y ASOCIADOS**, apoderados especiales sustitutos de los señores **JOSÉ ANTONIO SOSSA DUTARY** y **CARLOS LISANDRO LÓPEZ SCHAW**, instaurada para que se declare nulo por ilegal, el acto constituido por el silencio administrativo del Ministerio de Hacienda y Tesoro que niega a los demandantes la investidura solicitada para hacer efectivos los derechos del Estado sobre los dineros del Tesoro Nacional que ha adquirido ilegamente la empresa **REFINERÍA PANAMÁ, S. A.**, mediante compras hechas por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E.), ha solicitado a la Sala Tercera, se declare sustracción de materia en este negocio.

Las razones esbozadas por el señor Procurador en su Vista Fiscal N°216 de 23 de abril de 1993, y reiteradas en su Vista Fiscal N°301 de 21 de junio de 1993 al recibir el traslado de la demanda en estudio, tienen como fundamento los siguientes planteamientos:

> "Que tal como lo reconocen implícitamente los nuevos apoderados especiales de los demandantes, en el escrito de Advertencia de Inconstitucionalidad que presentaron el 4 de febrero de 1993, el Gobierno Nacional celebró recientemente un nuevo Contrato con la Empresa Refinería Panamá, S. A., distinguido como Contrato N°35, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley No.31 de diciembre de 1992, promulgada en la Gaceta Oficial N°22,198 de 6 de enero de 1993, cuya cláusula Trigésima Octava produce la extinción de la pretensión de los demandantes, ...
>
> De acuerdo con la cláusula trigésima octava pretranscrita, el Gobierno Nacional se comprometió a dar por terminada o cancelada cualquier reclamación que tuviera en contra de la Empresa Refinería Panamá, S. A., 'con motivo de la celebración, cumplimiento o terminación de contratos o acuerdos anteriores' (léase Contrato No.44 de fecha 1° de mayo de 1956), de allí que mal se podría en la actualidad acceder a la pretensión de los demandantes, esto es, investirles de personería para hacer efectivo los derechos del Estado sobre los dineros del Tesoro Nacional que supuestamente adquirió ilegalmente Refinería Panamá, S. A., mediante las compras hechas por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) de productos manufacturados o procesados por Refinería Panamá, S. A., entre el año de 1978 a 1991, sin el descuento del 10% de que trata el artículo trigésimo segundo del contrato No.44 de 10 de mayo de 1956, celebrado entre la Nación y Refinería Panamá, S. A.".

Tales señalamientos fueron replanteados por el señor Procurador de la Administración, cuando reiteró:

> En efecto Honorable Magistrado dado que la Cláusula 38 del Contrato N°35 celebrado por la Nación Panameña con Refinería Panamá, S. A., extingue toda reclamación entre las partes por razón de la contratación anterior que hubiese existido entre ellas, resulta obvio que el Estado no puede revestir de autorización alguna nadie, ni hacerlo por sí mismo, para reclamar obligaciones que deriven del incumplimiento o implementación del anterior contrato, por la razón apuntada.
>
> Con esa cláusula contenida en la Ley No.31 de 31 de Diciembre de 1992, el reclamo que hubiese podido hacerse contra Refinería Panamá, S. A., por los motivos que exponen las pretensiones de los demandantes, quedan ineficaces e imposibilitados jurídicamente, por mandato de esa norma, para demandar el pago y para que se reconozca como obligación exigible.
>
> Siendo ello así, carece de objeto que se otorgue la autorización y por tanto, que se prosiga el proceso que deviene en inocuo, por darse el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia".

Por su parte, los demandantes se oponen a la declaratoria de sustracción de materia, aduciendo lo siguiente:

> "Con el objeto de que la Honorable Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia prohije su errónea tesis de sustracción de materia, el señor Procurador de la Administración pretende que esa Alta Corporación le atribuya efectos retroactivos a la cláusula TRIGÉSIMO OCTAVA del Contrato N°35 celebrado el 15 de septiembre de 1992 entre la empresa REFINERÍA PANAMÁ, S. A. y el Estado, aprobado en función legislativa por la Asamblea Legislativa al expedir, después, la Ley N°31 de 31 de diciembre de 1992. Ley ésta que no es de orden público ni de interés social ni en ella así se expresa, por tanto, no tiene efecto retroactivo en si mismo ni puede dárselo a una cláusula contractual.
> ...
> En ese sentido, una cláusula contractual, que no forma parte de la categoría normativa legal, no tiene la capacidad jurídica de producir

> efecto retroactivo; y es obvio que una simple Ley de aprobación de un contrato, que no es de orden público ni de interés social y que nada en ese sentido se expresa en ella, no puede atribuirle a una cláusula contractual, como es el de la TRIGÉSIMO OCTAVA del Contrato N°35, un efecto retroactivo que ni ella misma tiene, como viene expresado.
> ...
> El Ministro de Comercio e Industrias, al 15 de septiembre de 1992, fecha ésta en la que celebró el Contrato N°35 con la empresa REFINERÍA PANAMÁ, S. A., no estaba facultado ni podía ser facultado para negociar y convenir cláusula contractuales en perjuicio de derechos adquiridos por el Estado, como son las sumas de dinero por decenas de millones de balboas que le debió pagar y aún le debe al Estado la empresa REFINERÍA PANAMÁ, S. A., a cambio del monopolio que le dejó ejercer, y que en efecto ejerció por casi treinta años en el territorio nacional, y menos en este caso en que el Consejo de Gabinete y el propio Ministro de Comercio e Industrias sabían de antemano que REFINERÍA PANAMÁ, S. A., no había cumplido exacta y oportunamente la cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del Contrato N°44 de 10 de mayo de 1956.
>
> Esto es así, porque el Consejo de Gabinete y el Ministro de Comercio e Industrias tienen prohibido incluir en los contratos cláusulas que se opongan al interés público, según lo estatuye el artículo 64 del Código Fiscal, respaldado por la Constitución, por ejemplo, en su Artículo 256, que se refiere al interés público, y no es válido hacerlo con la idea de que la Ley de aprobación del contrato lo puede todo y así, una cláusula contractual que en un principio no tiene efecto retroactivo en perjuicio de derechos adquiridos por el Estado, por la sola Ley de aprobación de dicho Contrato, contentivo de esa cláusula contractual ilegal, si adquiere tal efecto retroactivo;...no es posible la expedición de una Ley que, directa o indirectamente, tuviese efecto retroactivo en perjuicio de derechos adquiridos, del Estado en este caso, y más cuando, en este caso, ni siquiera sería por la voluntad legislativa sino del Órgano Ejecutivo o de un Ministro que habría arrinconado a la Asamblea Legislativa a la disyuntiva de: o me aceptas esta cláusula contractual con efecto retroactivo o tendrás que improbar el Contrato N°35".

La Sala, en esta etapa del proceso, debe analizar la pretensión del recurrente, en vías de determinar si procede o no declarar que ha operado el fenómeno de sustracción de materia.

La parte demandante solicitó al Ministerio de Hacienda y Tesoro que se les invistiera de la personería necesaria para hacer efectivos los derechos del Estado sobre dineros del Tesoro Nacional, que supuestamente ha adquirido ilegalmente la Empresa REFINERÍA PANAMÁ, S. A.

Esta adquisición ilegal se produjo -según el actor- durante la vigencia del contrato celebrado entre la Nación y Refinería Panamá, S. A., (Contrato N°44 de 10 de mayo de 1956), específicamente, entre los años de 1978 y 1991.

Durante este período de 13 años, se aduce que el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación realizó compras a la empresa **REFINERÍA PANAMÁ, S. A.**, sin que se le otorgase el descuento de 10% al que tenía derecho, de acuerdo con la cláusula del artículo 32 del referido contrato.

El Ministerio de Hacienda y Tesoro no contestó la solicitud de la parte recurrente, produciéndose el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo.

Es preciso recordar a los recurrentes, que la Sala Tercera sólo está facultada para decidir si procede o no investir de personería a un denunciante, pero no es propio de este Tribunal, el investir de personería, ni calificar la naturaleza del bien oculto, tal como ha reiterado la Sala Tercera en numerosas ocasiones (v.g. auto de 13 de julio de 1984, auto de 22 de mayo de 1984).

Si a la Sala sólo compete determinar si procedía o no investir de personería a los denunciantes, sería impropio declarar que la pretensión central de reclamar el bien oculto queda extinguida, dado que sólo al Ministerio de Hacienda y Tesoro corresponderá determinar si los bienes denunciados son o no ocultos, o si existen los mismos. Esta calificación de los bienes es propia del Ministerio de Hacienda y Tesoro y no de la Sala Tercera, y la pretensión sólo podrá tener fruto, dependiendo de las resultas de la acción que instaure el denunciante después de ser investido de personería.

Esta es una etapa aún incipiente en el proceso, por lo que será pertinente, una vez cumplidas las instancias procesales, decidir si la parte actora cumple los requisitos necesarios para que se le invista de personería para incoar la acción de recuperación de tales bienes.

Sólo a ello deberá circunscribirse la Sala Tercera al desatar la controversia (artículo 81 numeral 7° del Código Fiscal), puesto que en estos casos se surte primero el proceso para investir al denunciante, y luego la acción respectiva a nombre del Estado, en la cual se decidirá si cabe o no la posibilidad de recuperar un bien oculto por ser perteneciente a la Nación; allí se decidirá naturalmente, si el bien existe o no. Para ello requiere la concurrencia de pruebas que aquí no serán practicadas por no ser atinentes a la competencia del Tribunal.

En vista de lo anterior debemos negar la solicitud de sustracción de materia aducida por el señor Procurador de la Administración.

Quien suscribe quiere llamar la atención a las partes del proceso, en el sentido de mantener sus actuaciones dentro de los márgenes de altura, respeto y decoro que merece esta Superioridad, y las autoridades judiciales en general.

Han sido constantes los señalamientos y pugnas que a lo largo del expediente se han dirigido mutuamente, tanto la parte actora, como el Ministerio Público, todas, a

raíz de la controversia que nos ocupa. Los escritos que en lo sucesivo sean incoados, deben hacer referencia de manera exclusiva a la pretensión y a los aspectos jurídicos que se debaten.

En vista de las razones anotadas debe negarse la petición de sustracción de materia argüida por el señor Procurador de la Administración.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud del señor Procurador de la Administración, incoada dentro de su escrito fechado 21 de junio de 1993 para que se declare sustracción de materia en este negocio.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY & DÍAZ EN REPRESENTACIÓN DE L.A. GEAR INC. PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 9409 DE 27 DE JUNIO DE 1990, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Shirley & Díaz, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de L.A. GEAR INC. para que se declare nulos, por ilegales, la Resolución No. 9409 de 27 de julio de 1990, dictada por la Directora General de Comercio Interior, el acto confirmatorio, y para que se haga otras declaraciones.

Acogida la demanda se le corrió traslado al Señor Procurador de la Administración; se solicitó a la Directora General de Comercio Interior un informe explicativo de conducta; el negoció se abrió a pruebas por el término de 5 días; se admitió las procedentes y se ordenó practicarlas en el término de veinte (29) días, vencido el cual las partes tuvieron cinco (5) días para presentar sus alegatos.

Los hechos más relevantes en que la parte actora fundamenta su pretensión son los siguientes:

> "PRIMERO: Mediante Memorial presentado el 23 de agosto de 1989, la sociedad L.A. GEAR INC., constituida conforme a las leyes del Estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, solicitó al Ministerio de Comercio e Industrias el registro de la marca de fábrica y diseño L.A. GEAR, con una torre y dos palmeras, que ampara vestidos, calzados y sombrerería, clasificados en la clase 25.
> ...
> CUARTO: Es decir, el Ministerio de Comercio e Industrias negó el Registro de la marca L.A. GEAR a nombre de la sociedad L.A. GEAR INC. debido a que en esa dirección se encuentra registrada la marca L.A GEAR, también de propiedad de la sociedad L.A. GEAR INC, ambas representadas por nosotros en calidad de apoderados generales, con lo cual está reconociendo que ambas marcas, L.A. GEAR y LA GEAR, pertenecen a la misma persona, o sea, L.A. GEAR INC.
> ...
> SEXTO: Por otro lado, desconoció el Ministerio de Comercio el hecho de que la sociedad NATIONAL MANUFACTURING COMPANY, quien adquirió los derechos de INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMÁ, S. A., quien a su vez había inscrito ilegalmente la marca "LA GEAR" según el certificado de registro No. 037009 de 25 de abril de 1985 y el Resuelto No. 3412 de 2 de agosto de 1988, suscribió, aquella adquirente, documento notariado mediante el cual transfirió "todos sus derechos y la propiedad sobre la marca de comercio y de fábrica "L.A. GEAR", así como sus similares y derivados, emanados del Registro de la Marca de Comercio y de Fábrica efectuadas a su favor ante el Ministerio de Comercio e Industrias", y en ese mismo documento no solo hizo cesión de todos sus derechos litigiosos emanados de actos de comercio de cualquier otra naturaleza, sino que también reconoció a L.A. GEAR INC., como dueña única y exclusiva, en la República de Panamá y en el exterior, de dicha marca, desistiendo a su vez de toda Demanda o pretensión sobre el particular.
> SÉPTIMO: Tanto la marca LA GEAR, como la marca L.A. GEAR fue usada y registrada por primera vez por la sociedad L.A. GEAR INC en los Estados Unidos de Norteamérica y en el exterior primero que cualquier otra persona, por tanto, conforme a la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, por la cual nuestro país aprobó la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, firmado en Washington, cualquier otra persona domiciliada en otro país -y nuestro país- está obligada a respetar esa propiedad" (fs. 14-15).

Alega el recurrente que la Resolución acusada de ilegal viola el artículo 14 literal e) del Decreto No. 1 de 1939, el artículo 2011 del Código Administrativo y el artículo 12 de la Ley 64 de 1934.

Encontrándose el proceso en estado de resolver, los Magistrados de la Sala entran a dirimir la presente controversia.

El actor estima que se ha violado el artículo 14 literal e) del Decreto No. 1 de 1939 cuyo texto es el siguiente:

> "ARTICULO 14:
> No podrá registrarse marcas de fábricas que se encuentren en los casos siguientes:
> ...
> e) Las marcas de fábrica que sean idénticas a otra marca registrada o conocida y usada por otra persona para distinguir productos, artículos o mercancías iguales o similares o de las mismas propiedades de los que se desea amparar con la nueva marca" (el énfasis es nuestro.)

Manifiesta el recurrente que se ha violado esta norma por indebida aplicación ya que "la norma transcrita prohíbe la inscripción de una marca registrada conocida y usada **POR OTRA PERSONA**, es decir, por persona distinta del dueño, para distinguir productos, artículos o mercancías iguales o similares de la otra persona". Sin embargo, en el caso que nos ocupa se trata de una marca que distingue la misma mercancía, el mismo producto o artículos ampliamente conocidos y creados por nuestra representada. Además, la marca "LA GEAR y L.A. GEAR pertenecen a la misma persona, la sociedad L.A. GEAR INC. quien la inscribió y usó primero que cualquier otra persona, tanto en los Estados Unidos como en Panamá" (fs. 16).

El Procurador de la Administración, al contestar la demanda, manifiesta que le asiste razón a la sociedad demandante L.A. GEAR INC., "ya que la misma tiene derecho a inscribir su marca de fábrica y diseño L.A. GEAR en nuestro país, como propietaria y dueña de la misma" (fs. 25).

En cuanto al primer cargo, la Sala considera que le asiste razón al recurrente, toda vez que el artículo comentado prohíbe registrar una determinada marca de fábrica que sea idéntica a otra marca registrada conocida y usada por otra persona, para evitar que personas distintas sean dueñas de marcas parecidas o idénticas.

Lo que la ley prohíbe es registrar una marca que sea usada y registrada por otra persona primero, o que sea parecida y se preste a confusión con la MARCA de fábrica de quien ya la usa o tiene un registro.

No existe en la ley prohibición alguna para registrar una marca que sea parecida a otra y cuyo dueño es la misma persona que desea hacer el nuevo registro.

Dar a conocer una marca de fábrica en el mercado y lograr que tenga prestigio comercial y los productos amparados con ésta sean consumidos, es muy costoso, razón por la cual se protege jurídicamente a los dueños de marcas para que evitar que terceras personas registren marcas iguales o parecidas con el fin de aprovecharse gratuitamente del prestigio de la marca, en perjuicio de quien la tiene registrada.

Cuando una persona que tiene una marca registrada solicita el registro de una similar, los perjuicios y conflictos, que la norma a que nos venimos refiriendo trata de evitar, no se producen.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que se ha violado, por indebida aplicación, el artículo 14, literal e) del Decreto No. 1 de 3 de marzo de 1939.

El actor afirma que se ha violado también el artículo 2011 del Código Administrativo que es del siguiente tenor:

> "Artículo 2011: Las solicitudes de registros de marcas que ostenten nombres, razones sociales, retratos o facsímiles de firmas que no sean los de las personas que solicitan el registro, deben ser presentadas con la correspondiente autorización de los dueños de aquellos o de sus herederos, por la que conste expresamente que se les faculta para usar tales nombres, retratos, razones sociales o facsímiles de firmas. Carecerán de valor los registros que se hagan en contravención a lo dispuesto en este artículo".

Al exponer el concepto de la violación el recurrente expresa que "La norma transcrita establece un requisito esencial para que se proceda a registrar una marca extranjera o no perteneciente a la persona que solicite el registro, el cual consiste en adjuntar a la solicitud la correspondiente autorización de los dueños de marcas donde conste que están facultados expresamente para usar tales nombres o razones sociales. Sin embargo, el cumplimiento de este requisito no se debe exigir cuando se trata de una marca extranjera perteneciente al mismo dueño que inscribe o solicita la inscripción, como en el caso de nuestra representada quien es dueña de L. A. GEAR y de L. A. GEAR; por lo que el Ministerio de Comercio e Industrias infringió el artículo 2011 del Código Administrativo en el concepto de aplicación indebida" (fs. 17).

La Sala considera que no le asiste razón al demandante porque la norma transcrita, que no es aplicable al caso porque la sociedad L.A. GEAR es la única dueña de la marca de fábrica que pretende registrar denominada L.A. GEAR, no fue aplicada. La resolución impugnada se fundamenta en el artículo 2014, numeral 2 del Código Administrativo y el artículo 14 literal e) del Decreto Ejecutivo No. 1 de 1939. Por tanto se desestima el cargo.

Por último, el actor estima violado el artículo 12 de la Ley 64 de 1983 cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 12. Cualquier registro o depósito efectuado en uno de los Estados Contratantes o cualquiera solicitud de registro o depósito pendiente de resolver, hecha por un agente, representante o cliente del propietario de una marca sobre la que se haya adquirido derecho en otro Estado Contratante por su registro, solicitud previa o uso como tal marca, dará derecho al primitivo propietario a pedir su cancelación o denegación de acuerdo con las estipulaciones de esta Convención y a solicitar y obtener la protección para sí, considerándose que dicha protección se retrotraerá a la fecha de la solicitud cancelada o denegada" (fs. 17-18).

El actor manifiesta como concepto de la infracción que:

"Esta norma no sólo faculta al propietario primitivo de una marca, es decir a quien hubiese registrado y usado primero una marca en cualquiera de los países signatarios de la Convención, a pedir la cancelación de registro a nombre de persona distinta sino que también obliga a las autoridades de los países signatarios (Panamá) a proteger la marca registrada a nombre del propietario primitivo. Y a pesar de que la marca L.A. GEAR y la marca L. A. GEAR (con la única diferencia de los puntos) pertenecen a la sociedad L. A. GEAR INC., y que nuestro país es signatario de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, la Directora General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias se negó a proteger dicha marca a nombre de nuestra mandante con lo cual infringió el artículo 12 de la Ley 64 de 1934 en forma directa, por omisión" (fs. 18).

La Sociedad L.A. GEAR afirma en el hecho séptimo de la demanda, haber usado y registrado, primero que cualquier otra persona la marca L.A. GEAR y haber realizado el primer registro en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, no reposa en el expediente pruebas que acrediten estos hechos.

Por tanto, no se considera violado el artículo 12 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial que protege el derecho que se adquiere en cualquiera de los Estados **contratantes**, porque como el derecho que alega tener el actor no ha sido probado en autos, no pude brindársele la protección que otorga esta norma.

Como la resolución impugnada viola, por indebida aplicación, el artículo 14, literal e) del Decreto No. 1 de 3 de marzo de 1939, tal como queda expuesto, debe declararse ilegal y resolverse favorablemente las peticiones del demandante.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE SON NULAS POR ILEGALES la Resolución 9409 de 27 de julio de 1990, dictada por la Directora General de Comercio Interior y la Resolución No. 4 de 25 de enero de 1991, expedida por el señor Ministro de Comercio e Industria, y **ORDENA** al Ministerio de Comercio e Industrias que inscriba a nombre de la Sociedad L.A. GEAR INC., la Marca de Fábrica y Diseño L.A. GEAR para amparar vestidos, calzados y sombrerería.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ELSA MONTILLA GARCES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ NO. 20-89 DE 5 DE JULIO DE 1989, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La señora Elsa Montilla Garcés ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra el Consejo Académico de la Universidad de Panamá. En la demanda se pide a la Sala que declare que son nulos el acuerdo adoptado por la identidad demandada en su sesión 20-89 de 5 de julio de 1989, la recomendación 89-355 de 16 de junio de 1989 y que declare que la demandante tiene derecho a percibir una diferencia salarial de diez mil balboas (B/.10,000.00) como consecuencia de dichos actos.

La parte demandante impugna un acto del Consejo Académico de la Universidad de Panamá mediante el cual se rechazó la impugnación de la profesora Elsa Montilla Garcés contra los resultados de un concurso de cátedra celebrado en el Instituto Centroamericano de Administración y de Supervisión de la Educación (ICASE). A la demandante no se le evaluaron sus títulos en el citado concurso de cátedra porque no tenía un postgrado en la especialidad del área abierta a concurso (Administración de la Educación).

La apoderada judicial de la demandante sostiene, en la demanda presentada el 29 de agosto de 1989, que los actos por ella impugnados infringen el artículo 45 de la Ley 11 de 1981 y los artículos 127, 133 y 138 del Estatuto Universitario.

El punto central de la argumentación de la apoderada judicial de la parte demandante es que ésta, quien era investigadora y docente del ICASE desde 1981 y profesora Adjunto IV, cumplía con los requisitos legales para participar en el concurso y que, por ello, se debieron evaluar, revisar y clasificar la experiencia y los documentos que presentó la demandante para el concurso.

El Procurador de la Administración contestó la demanda mediante la Vista 450 de 29 de octubre de 1991. En ese documento se opone a las pretensiones de la parte demandante por considerar que carecen de fundamento.

Estima la Sala que no se han producido las infracciones que se le imputan a la actuación del Consejo Académico porque según lo previsto en el literal a) del artículo 133 del Estatuto Universitario sólo se tomarán en cuenta los expedientes de los aspirantes que llenen los requisitos exigidos para el concurso y la demandante no llenaba uno de esos requisitos que era el de poseer un postgrado en el área de Administración de la Educación. Este requisito había sido fijado por el Consejo Académico para este concurso en particular y la Sala no observa que el Consejo Académico haya obrado con desviación de poder al establecer ese requisito para un cargo de investigador dentro del ICASE.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES el acuerdo adoptado por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá en su sesión 20-89 de 5 de julio de 1989 ni la recomendación 89-355 de 16 de junio de 1989.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ CEBALLOS, EN REPRESENTACIÓN DE EXPORTADORA MUNDIAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 261 DE 14 DE DICIEMBRE DE 1989, DICTADA POR LA DIRECCIONA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ,TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Lcdo. José Ceballos, actuando en representación de Exportadora Mundial, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 261 de 14 de diciembre de 1989, expedida por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Se trata de un proceso marcario en el cual la sociedad denominada SONITTO INTERNACIONAL, S. A., a través de la firma forense Luque, Coronell y Asociados, promovió ante la Dirección General de Comercio Interior demanda de oposición a la solicitud de registro de la marca de comercio "PREMIER" No. 048127 en clase 9 de la Sociedad Exportadora Mundial, S. A. Mediante Resolución No. 261 de 14 de diciembre de 1989 la Directora General de Comercio Interior resolvió negar la solicitud de registro de la marca de comercio PREMIER antes mencionada. Esta resolución fue confirmada por el Ministerio de Comercio e Industrias mediante Resolución No. 97 de 12 de octubre de 1990.

La parte actora sostiene que la resolución No. 261 de 14 de diciembre de 1989 y el acto confirmatorio son ilegales por cuanto violan los artículos 495 y 770 del Código Judicial y el artículo 2023 del Código Administrativo.

El Procurador de la Administración se opone a las pretensiones del demandado mediante Vista No. 486 de 21 de septiembre de 1992.

La parte demandante alega que la resolución impugnada viola, en concepto de violación directa, por omisión, los artículos 495 y 770 del Código Judicial.

El artículo 495 del Código Judicial preceptúa que el funcionario decisor podrá decretar de oficio y sin limitación, la práctica de pruebas conducentes para aclarar los hechos que la pérdida del expediente haya hecho oscuros o dudosos. Dado que el expediente contentivo de la oposición a la solicitud de la marca de comercio se había perdido, el mismo debió ser objeto de reposición. Dicha reposición se realizó mediante una audiencia en la cual según la parte actora, la demandada sólo aportó copia autenticada de la demanda, la contestación de la demanda y de la primera audiencia celebrada. Por otro lado, la resolución confirmatoria alude a una inspección judicial sin que en el expediente haya constancia de la misma. La infracción se da por cuanto, a juicio de la parte actora, si el juzgador hubiese tenido presente el artículo 495 lo correcto hubiese sido ordenar la práctica de la citada inspección judicial, lo cual no se hizo. Por otro lado, el artículo 770 establece que el Juez deberá apreciar las pruebas según las reglas de la Sana Crítica sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos. A juicio del demandante, esta norma fue violada por cuanto la apreciación de una prueba exige, necesariamente, la existencia de la misma por lo que no puede el juzgador hacer alusión a una prueba que no consta en el expediente, y menos aún, puede apreciarla.

La Sala no concuerda con las apreciaciones de la parte actora por cuanto, el artículo 495 que se alega infringido establece claramente la posibilidad de decretar las pruebas necesarias para aclarar los hechos que la pérdida del expediente haya hecho dudosos, sin embargo, a juicio de la Sala, no existían hechos dudosos que aclarar, ya que en la resolución original, es decir, la Resolución No. 261 de 14 de diciembre de 1989 expedida por la Dirección General de Comercio Interior, se alude claramente a la inspección judicial realizada a la Sociedad Sonitto Internacional y los resultados que la misma arrojó. También se destaca el hecho de que fue imposible realizar la inspección judicial a la sociedad Exportadora Mundial S. A. por cuanto no comparecieron ese día ni el apoderado judicial, el Lcdo. José Ceballos ni el perito designado por éste. Dado que la inspección judicial a que se alude en la resolución de primera instancia señalaba claramente el derecho de la sociedad Sonitto Internacional, el Juez no consideró necesario la práctica, por segunda vez, de dicha diligencia, precisamente porque la sana crítica le permite, a discreción, discernir la necesidad de la práctica o no de dicha inspección judicial. Por otro lado, tampoco consideró necesario ordenar la práctica de la inspección judicial de la sociedad demandante Exportadora Mundial, S. A. por cuanto es a ésta última a quien le compete probar su derecho, cosa que no hizo al no comparecer a la inspección judicial a realizar sobre la compañía que representaba. Además, tal y como lo señala la Dirección General de Comercio Interior, si el apoderado judicial de la parte actora consideraba necesaria la práctica de la inspección judicial a la Exportadora Mundial, S. A. por qué entonces no solicitó dicha inspección como una prueba, al momento de interponer su apelación. En todo caso, observa la Sala, de probarse la infracción alegada, aún así, la misma quedaría subsanada en el presente proceso por cuanto, mediante auto de 11 de noviembre de 1992, la Sala Tercera, a través

del Magistrado Sustanciador de este negocio admitió como prueba presentada por la parte actora la inspección judicial a los libros y documentos que se encuentran en el local de Exportadora Mundial, S. A. ubicada en la Zona Libre de Colón, a fin de determinar la fecha en que dicha empresa inició las importaciones de cámaras fotográficas y otros productos de clase 9 marca "Premier".

Tampoco resultan mal aplicadas, a juicio de la Sala las reglas de la Sana crítica por cuanto si bien el informe de la diligencia de inspección no constaba en el expediente repuesto, los resultados fehacientes que arrojó dicha inspección quedaron claramente plasmados en la resolución No. 261 de 1989, objeto de la presente demanda. Se desestiman pues, estos dos cargos.

Por último, se señala como infringido el artículo 2023 del Código Administrativo, en concepto de violación directa por omisión. Este artículo establece que tiene derecho a adquirir la propiedad de una marca de fábrica o de comercio el individuo o compañía que primero haga uso de ella. En caso de disputa entre uno o más poseedores y de ser la antigüedad de la posesión igual, le corresponde el derecho a quien primero haya solicitado el registro en la oficina respectiva, de manera tal que resultaba favorecida Exportadora Mundial, S. A. y así debió ser declarado.

Observa la Sala que el apoderado judicial del demandante incurre en un error de interpretación al considerar aplicable en el presente negocio la última parte del artículo 2023 que le otorga derecho sobre la marca a quien primero solicite su registro cuando la primera parte del artículo le otorga la preferencia en primera instancia a quien pruebe que ha hecho uso de la marca con anterioridad, es decir, favorece al poseedor más antiguo.

Como hemos señalado anteriormente, la sociedad Sonitto Internacional había logrado demostrar, tal cual queda establecido en la resolución impugnada, que había hecho uso de la marca "PREMIER" desde mayo de 1987. Por otro lado, la sociedad Exportadora Mundial, S. A. no probó, en la vía gubernativa, derecho alguno sobre la marca puesto que no se presentó al lugar el día designado para la inspección judicial. Sin embargo, al interponer la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, se solicitó la práctica de dicha inspección judicial tal cual consta a fojas 45 y 46 del expediente. En dicha diligencia de inspección ocular se señala como pruebas las copias simples de dos facturas (5272/86 de 20 de octubre de 1986 y NST/EMA/3148/87 de 23 de enero de 1987) visibles a foja 47 y ss del expediente. A juicio de la Sala, las facturas adjuntadas a la diligencia de inspección ocular carecen de valor probatorio por cuanto se trata de copias simples carentes de autenticación o protocolización alguna. El artículo 844 del Código Judicial establece claramente que los documentos privados deben presentarse en sus originales para que tengan valor; igualmente establece los casos en que las copias de tales documentos tienen el mismo valor que sus originales. Las copias fotostáticas de las facturas antes aludidas no cumplen con los requisitos antes señalados para que las mismas tengan validez por lo cual, considera la Sala, no deben ser tomadas en cuenta en este proceso. Por otro lado, observa la Sala, en la última parte de la diligencia de inspección ocular (fs 46) se deja constancia de que el perito por parte de Exportadora Mundial, S. A. PARKASH VASWANI manifestó que él es el representante en Panamá de la empresa Skymount (Panamá) S. A. y que ha estado vendiendo cámaras de la marca "Premier" y otras diversidades de productos a Exportadora Mundial S. A. desde el año 1986. Llama la atención a la Sala esta afirmación del perito de la parte actora por cuanto pareciera ser entonces que la poseedora más antigua de la marca "Premier" en este caso lo es la Empresa Skymount (Panamá) S. A. y no Exportadora Mundial S. A. por cuanto la primera le suministraba a la última, es decir, a la demandante, las cámaras fotográficas marcas "Premier". Considera la Sala que si la parte demandante "Exportadora Mundial S. A. pretendía demostrar su mejor derecho sobre la marca "Premier" antes aludida, debió presentar como prueba facturas donde consta que Exportadora Mundial S. A. vende productos de la marca premier y no aportar una factura de compra que contradicen su alegado derecho de poseedor.

Dado que en el presente caso la demandante no logra probar su mejor derecho sobre la marca de comercio "Premier" por antigüedad de posesión, por falta de valor probatorio de las facturas antes mencionadas, la decisión correcta a juicio de la Sala es la de confirmar la resolución que niega la solicitud de registro de la marca "Premier". Se desestima, pues, este cargo.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución No. 261 de 14 de diciembre de 1989 expedida por la Dirección General de Comercio e Industrias y su acto confirmatorio.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE MARITZA CORTEZ DE VÁSQUEZ Y MARITZA FERNÁNDEZ DE EVANS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL PARÁGRAFO DEL RESUELTO DE PERSONAL N° 03 DE 13 DE ENERO DE 1992, EMITIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LOS CASINOS NACIONALES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Lcdo. Carlos Ayala, actuando en representación de MARITZA CORTES DE VÁSQUEZ Y MARITZA FERNÁNDEZ DE EVANS, ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución proferida por la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera (Contencioso Administrativa) expedida el 7 de junio de 1993, mediante la cual no se admite la demanda contencioso

administrativa de plena jurisdicción interpuesta con la finalidad de que se declare nulo por ilegal, el parágrafo del Resuelto de Personal N° 03 de 13 de enero de 1992, dictado por el Gerente General de los Casinos Nacionales, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador, mediante proveído de 12 de julio de 1993, señaló un término de tres (3) días para que sustentara la apelación. Esta resolución fue notificada mediante el edicto No.652 que fue desfijado el 14 de julio de 1993.

A foja 46 del expediente consta informe secretarial en el cual se señala que vencido el término de la apelación no se presentó escrito de sustentación de la misma. Como en este caso se trata de un recurso de apelación contra un auto, se debe declarar desierto el recurso según lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Judicial.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integra la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el Lcdo. Carlos Ayala contra la resolución fechada el 7 de junio de 1993, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta contra el parágrafo del Resuelto de Personal N°03 de 13 de enero de 1992, emitido por el Gerente General de los Casinos Nacionales y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR CARLOS DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO COBOS Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO N°GG-100-154-90 DE 17 DE DICIEMBRE DE 1990, SUSCRITO POR EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (INTEL), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Doctor Carlos Del Cid, actuando en representación de Ivanor Alonso y otros, presentó demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción con el propósito que se declare nulo por ilegal, el acto administrativo contenido en el Oficio GG-100-154-90 de 11 de diciembre de 1990, suscrito por el Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), y para que se hagan otras declaraciones.

La Sala, mediante auto de 17 de junio de 1991, suscrito por el Magistrado Sustanciador, ordenó la acumulación de estos procesos por tratarse en todos los casos de demandas contra el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y puesto que las circunstancias a las que se refieren estas acciones tienen en común los mismos hechos y además el objeto de ellas es idéntico. Se acumularon, de esa forma, los procesos iniciados por las siguientes personas:

1. IVANOR ALONSO, quien laboró como cobrador en el INTEL desde el 3 de enero de 1989 hasta que su cargo fue declarado insubsistente el día 11 de diciembre de 1990.

2. ARNOLDO AGUILAR U., quien laboró como probador en el INTEL desde el 1° de septiembre de 1982 hasta que su cargo fue declarado insubsistente el 12 de diciembre de 1990.

3. LIONEL ANGULO C., quien laboró como técnico de télex en el INTEL desde el 17 de agosto de 1981 hasta que su cargo fue declarado insubsistente el día 11 de diciembre de 1990.

4. LUIS CORONADO.

5. ELBERTO LUIS COBOS R., quien laboró como coordinador laboral en el INTEL desde el 15 de agosto de 1967 hasta que su cargo fue declarado insubsistente el 10 de diciembre de 1990.

6. CARLOS CATLINE, quien laboró como recolector de teléfonos públicos desde el 30 de diciembre de 1977 hasta que su cargo fue declarado insubsistente el 11 de diciembre de 1990.

7. JUDITH E. DE LA ROSA de CORREA, quien laboró como despachadora de daños desde el 17 de julio de 1978 hasta que su cargo fue declarado insubsistente el 12 de diciembre de 1990.

8. ALFONSO CHAMBERS, quien laboró como reparador de equipos centrales desde el 17 de junio de 1974 hasta que su cargo fue declarado insubsistente el 10 de diciembre de 1990.

9. EDUARDO COBOS, quien laboró como oficinista de campo desde el 1° de noviembre de 1984 en el INTEL hasta que su cargo fue declarado insubsistente el 17 de diciembre de 1990.

10. ORLANDO CAMARENA, quien laboró como instalador y reparador de teléfonos públicos en el INTEL desde el 10 de septiembre de 1975 hasta que su cargo fue declarado insubsistente el 10 de diciembre de 1990.

11. ALEXIS DÍAZ, quien laboró como reparador e instalador de teléfonos públicos en el INTEL desde el 1° de julio de 1982 hasta que su cargo fue declarado insubsistente el 14 de diciembre de 1990.

12. EDGAR DE LEÓN, quien laboró como reparador de teléfonos públicos en el INTEL desde el 23 de abril de 1979 hasta que su cargo fue declarado insubsistente día 10 de diciembre de 1990.

Acogidas las demandas, se le envió copia de las mismas al Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y se le corrió traslado al Procurador de la Administración a fin de que ambos funcionarios contestaran en el término de cinco (5) días.

El Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), rindió informes explicativos de conducta fechados el 8 de noviembre de 1991, visibles de foja 1127 a foja 1137 del expediente. El Procurador de la Administración también contestó las demandas mediante la Vista N°641 de 27 de diciembre de 1991, visible de foja 1588 a foja 1608 del expediente, en la cual este funcionario solicita que se denieguen las pretensiones de los recurrente, ya que no les asiste la razón en las mismas.

Los recurrentes alegan en todas las demandas que el acto administrativo acusado de ilegalidad ha violado de manera directa, por omisión, el artículo 29 de la Ley N°135 de 1943, pues el Gerente General del INTEL, sólo se limitó a comunicar a los trabajadores por medio de un oficio, que sus cargos habían sido declarados insubsistentes, sin notificarlos personalmente, sin indicarles los recursos que establece la ley para su defensa y los términos para interponerlos, situación que contraviene la mencionada ley "debido a que la misma impone la obligación a las autoridades de las distintas dependencias del Estado, de llevar a cabo un negocio, proceso o actuación administrativa, en los casos de carácter nacional y terminarlos por una resolución que debe ser notificada al interesado, a su representante o apoderado".

La Sala considera que no les asiste la razón a los demandantes por cuanto observa que si bien es cierto que, en el acto administrativo impugnado, no se les señalaron a los afectados los recursos legales ni los términos dentro de los cuales podían interponerse los mismos, también es cierto que los demandantes a tenor de lo que establece el artículo 32 de la Ley 135 de 1943, convalidaron la omisión de la autoridad administrativa, al proponer cada uno, recursos de reconsideración con apelación en subsidio, como consta en el expediente, lo que demuestra que utilizaron el derecho que la ley les otorga para ser escuchados en el procedimiento administrativo. En cuanto a que los recurrentes alegan que no se les notificó personalmente de su despido, en el expediente consta que de los doce trabajadores cuyas demandas se tramitaron ante esta Corporación de Justicia sólo seis (6) no fueron notificadas personalmente, ya que sus firmas no constan en los oficios mediante los cuales se les comunica que sus nombramientos fueron declarados insubsistentes; pero como ha expresado esta Sala en Sentencia de 30 de junio de 1993 "esta omisión de la Administración fue subsanada por los propios trabajadores despedidos, ya que los mismos en tiempo oportuno hicieron uso de los medios de impugnación que la ley les concede, produciéndose con esta la notificación a la que se refiere el citado artículo 19 de la Ley 33 de 1946". Por todo lo anterior, considera la Sala que debe desestimarse este cargo.

La parte actora considera que el acto impugnado viola de manera directa por falta de aplicación, el artículo 103 de la Ley 8a. de 1975, pues el procedimiento que establece esta norma fue desconocido por el Gerente General del INTEL, quien debió permitir que los trabajadores demandantes pudieran ejercer el derecho de ser oídos y de ser acompañados por un asesor designado por el sindicato, antes de aplicarles la sanción disciplinaria.

Opina la Sala que la violación alegada por la parte actora carece de fundamento por cuanto observa que la Asamblea Legislativa expidió el 14 de diciembre de 1990, con carácter retroactivo al 4 de diciembre de ese mismo año, la Ley 25 de 1990 en la que se autoriza al funcionario demandado para despedir a los funcionarios públicos que habían participado en la "organización, llamado o ejecución de acciones que atenten contra la democracia y el orden constitucional, fueran o no dirigentes sindicales." Por otra parte, hay que tomar en cuenta como expresó la Sala en Sentencia 30 de junio de 1993, que "la referida Ley 25 en los artículos 5 y 6 también señaló que modificaba, en cuanto le fueran contrarias, las disposiciones contenidas en la Ley 8 de 25 de febrero de 1975".

De lo expresado, considera la Sala que es pertinente agregar que dentro del procedimiento consagrado en la precitada excerta legal, no es necesario que la trabajadora sea acompañada por su abogado o un asesor designado por el sindicato de la institución, a lo que ya la Sala se pronunció en Sentencia de 23 de julio de 1993, en la que establece que "la Dirección General del **INTEL** tenía solamente como requisito sine qua non para despedir a cualesquiera de sus empleados, el identificarlos previamente como miembros del movimiento del paro ilegal, esto último declarado por las autoridades correspondientes llamado éste que desestabilizaba la democracia recién establecida en nuestro país, como efectivamente llevó a cabo". Por lo expuesto, no prospera este cargo.

Los demandantes consideran que se ha infringido por violación directa por inobservancia el artículo 114 de la Ley 8a. de 1975, por cuanto el Gerente General del INTEL, destituyó, despidió o declaró insubsistente el nombramiento de los trabajadores demandantes sin cumplir con las formalidades establecidas en esta Ley "al no escuchar previamente al afectado ni reconocerle el derecho de defensa, ni comprobar los cargos con investigación alguna, ni identificar al trabajador objeto de sanción de despido como partícipe en los actos tenidos como causal de la medida tomada en su contra".

Como se ha reiterado anteriormente la ley aplicable en este caso es la Ley 25 de 1990, que por ser de orden público y posterior, prevalece sobre la Ley 8 de 25 de febrero de 1975, durante su tiempo de duración que expiró el 31 de diciembre de 1991 y esto es así, pues ella regula de manera especialísima la materia en conflicto y es clara al señalar que se autoriza a las autoridades superiores de las distintas dependencias del Estado, previa identificación, para declarar insubsistente el nombramiento de funcionarios que participaron en los hechos ocurridos los días 4 y 5 de diciembre de 1990.

Aunado a esto, que el Gerente General del INTEL, advirtió a los empleados públicos que los que participaran en el paro del 5 de diciembre de 1990, que fue considerado ilegal, serían despedidos, lo que configura, como sostuvo la Sala en Sentencia de 23 de

julio de 1993, la causal de despido consagrada en la Ley 25 de 1990, siendo esta: "la participación en la organización, llamado o ejecución de acciones que atenten contra la Democracia y el Orden Constitucional y definió dicha actividad como tal." Por todo lo expuesto resulta totalmente infundado este cargo.

De igual forma consideran los demandantes que se ha infringido el artículo 2 de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990, en forma directa por omisión, pues la "norma condiciona la aplicación de la sanción de destitución de un funcionario cuando antes de la destitución, se hubiera procedido a identificar al servidor público que hubiese participado en dichos actos. Sin embargo, sin que el Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), hubiese cumplido previamente con este requisito de identificación del trabajador demandante como partícipe de los actos prohibidos por la ley, procedió arbitrariamente a destituirlo, desconociendo la voluntad del Legislador que exige que se haga la identificación antes de la destitución."

Opina la Sala que la violación alegada por la parte actora carece de fundamento, pues la actuación del Gerente General del INTEL, se encuadra dentro de los supuestos que señala expresamente el artículo 2 de la Ley 25 de 1990 y, que a la letra dispone:

> "Artículo 2: Las autoridades superiores de las distintas dependencias del Estado, tales como Ministros de Estado, Directores de la instituciones autónomas y semi-autónomas, de las empresas estatales; y demás dependencias públicas, el Procurador de la Nación y el de la Administración, el Contralor General de la República, los Gobernadores y Alcaldes respectivos podrán, previa identificación, declarar insubsistente el nombramiento de los funcionarios públicos que participen de los actos descritos en el artículo 1 de esta Ley."

Dado que la ley precitada señala que sólo basta la identificación del servidor público como participante en las actividades que ella prevé como contrarias a la democracia panameña para que se declare insubsistente su nombramiento y como se ha comprobado en todos los casos acumulados esta situación, considera la Sala que el Gerente General del INTEL, actuó conforme a la ley, por lo que se considera que no prospera este cargo.

Por último, los recurrentes estiman que el acto acusado de ilegalidad infringe en forma directa por falta de aplicación el artículo 2549 del Código Judicial, pues ellos expresan que formularon una advertencia de inconstitucionalidad ante el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y dicho organismo "no imprimió el trámite establecido por el Legislador a los casos de advertencia de inconstitucionalidad, considerando que no es un 'ente competente para conocer sobre los procesos de inconstitucionalidad de las leyes', cuando lo viable era solamente someter el asunto a la consideración de la Honorable Corte Suprema y no hacer consideraciones sobre la competencia en relación a la advertencia."

Considera la Sala que en relación con este cargo no le asiste la razón a los demandantes, pues las advertencias de inconstitucionalidad a las que se refiere el artículo 2549 del Código Judicial deben ser hechas por "alguna de las partes en un proceso", y, como manifestó esta Sala en Sentencia de 30 de junio de 1993 "en el INTEL no se tramitó un proceso contra los demandantes, ya que para su destitución era suficiente su identificación como participantes en los hechos del 4 y 5 de diciembre de 1990."

De lo expresado, considera la Sala que es pertinente agregar que consta en cada uno de los expedientes en estudio un escrito de advertencia de inconstitucionalidad, y que éstos fueron rechazados de plano por el Magistrado Sustanciador basándose en innumerables precedentes y en aras del principio de economía procesal, pues ya el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad advertida, mediante fallo de 23 de mayo de 1991, por lo que se considera que los despidos no fueron ilegales.

Por todo lo expuesto, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES los despidos de los trabajadores IVANOR ALONSO, ARNOLDO AGUILAR U., LIONEL ANGULO, LUIS CORONADO, ELBERTO LUIS COBOS R., CARLOS CATLINE, JUDITH E. DE LA ROSA de CORREA, ALFONSO CHAMBERS, EDUARDO COBOS, ORLANDO CAMARENA, ALEXIS DÍAZ, EDGAR DE LEÓN, efectuados por el INTEL.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE VICENTE EUCLIDES RÍOS RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL FORMULARIO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 1991, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **AROSEMENA Y AROSEMENA** ha presentado demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, en representación del señor **VICENTE EUCLIDES RÍOS RODRÍGUEZ**, para que se declare nulo por ilegal, el formulario de movimiento de personal fechado 4 de febrero de 1991 expedido por el Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Estima el recurrente que el acto impugnado es violatorio de los artículos 114; 117 y 125 de la Ley 8 de 1975; los artículos 1° y 2° del Decreto Ejecutivo N°116 de 10 de octubre de 1984; el artículo 1° del Decreto de Gabinete N°20 de 1° de febrero de 1990; el artículo tercero del Decreto de Gabinete N°48 de 20 de febrero de 1990; los artículos 29 y 33 de la Ley 33 de 1946.

De la demanda instaurada se corrió traslado al señor Procurador de la Administración, quien mediante Vista Fiscal N°264 de 1° de junio de 1992 procedió a oponerse a las pretensiones del recurrente. (Cfr.fojas 28-38 del expediente).

De igual forma se dio traslado al funcionario responsable del acto acusado, para que rindiese un informe explicativo de su actuación, encontrándose el mismo en el expediente contentivo de este negocio. (Cfr. fojas 26-27 del expediente).

Una vez surtidos todos los trámites procesales estatuidos para estos procesos, tal como se desprende del informe secretarial visible a foja 42 del expediente, procede la Sala Tercera a desatar la controversia instaurada.

Los tres primeros cargos de ilegalidad que analizará el Tribunal (de manera conjunta por la vinculación que existe entre ellos), son los artículos 114, 117 y 125 de la Ley 8 de 1975 Orgánica del I.R.H.E.

Las normas aludidas hacen referencia a la especial condición de los empleados de esa institución, que sólo pueden ser despedidos por una causa justificada prevista por ley, con una notificación previa al trabajador afectado, y que prevé la posibilidad de indemnización si no existiese causa justificada.

La Sala debe señalar que a pesar de que ciertamente los empleados del I.R.H.E. están comprendidos dentro de una reglamentación laboral especial, los Decretos de Gabinete N°1 de 1989, y 20, 21 y 48 de 1990, que también tienen rango de ley, son especiales y posteriores, a los fines de reorganizar las dependencias del Estado incluyendo aquellas sometidas a leyes especiales.

En efecto, el Decreto de Gabinete N°1 de 1989, en su artículo quinto, facultaba a los organismos Superiores de las entidades estatales para declarar insubsistentes los nombramientos de jefes, subjefes, asesores, y funcionarios con cargos directivos de tales instituciones. Sin embargo, no comprendía a aquellos servidores públicos que estuviesen regulados por leyes especiales.

En virtud de ello, los Decretos de Gabinete N°20 de 1° de febrero de 1990, y N°48 de 20 de febrero de 1990, tendientes a estabilizar la organización de los entes estatales cuyos funcionarios se rigen por leyes especiales, abarcaron a aquellos servidores públicos que no estaban comprendidos en el artículo 5° del Decreto de Gabinete N°1 de 1989.

En aplicación directa al caso en estudio, el artículo primero del Decreto de Gabinete N°48 incluye entre los funcionarios susceptibles de la aplicación de los movimientos personal, a los servidores públicos del I.R.H.E.

La norma en mención textualmente señala:

> "ARTICULO 1°: A los efectos y aplicación del Decreto de Gabinete No.20 de 1° de febrero de 1990 y del Decreto de Gabinete N°21 de 1° de febrero de 1990, se entienden comprendidos los servidores públicos de los Ministerios de Educación y Salud, del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), Autoridad Portuaria Nacional, Ferrocarril Nacional y de cualquier otra entidad autónoma o semiautónoma regida y organizada por Leyes especiales. (subrayado es nuestro)

Como ha quedado expuesto, los Decretos de Gabinete N°1 de 1989; N°48 de 1990 y N°20 de 1990, tienen aplicación especial y preferente a la Ley N°8 de 1975 tal como contempla el artículo 4° del Decreto de Gabinete N°48 de 1990, por lo cual deben descartarse los cargos de violación aducidos por el recurrente en relación a los artículos 114; 117 y 125 de la Ley 8 de 25 de febrero de 1975 que regula las relaciones de trabajo entre el I.R.H.E. y sus trabajadores.

Los dos cargos de violación próximos a analizar, comprenden el artículo 1° del Decreto de Gabinete N°20 de 1990, incluyendo su parágrafo, el cual, según el actor ha sido infringido de manera directa.

Aduce el demandante, que al señor **RÍOS** no se le comprobó ninguna conducta que autorizase su destitución, y que ello transgrede la norma legal precitada, y que en su "proceso de destitución" no se siguió el procedimiento especial previsto en la ley reguladora de la situación particular del afectado, tal como prevé el parágrafo del artículo 1° del Decreto de Gabinete N°20 de 1990.

La Sala debe señalar al recurrente que en el Decreto de Gabinete N°1 de 1989 (artículo 5°) se concedía autorización para remover a los jefes, subjefes, y altos directivos de los entes estatales, pero se excluía a aquellas instituciones que estuviesen regidas por leyes especiales.

Los Decretos de Gabinete N°20 y 48, ambos de 1990, vienen a modificar y subrogar las restricciones contemplados en el Decreto de Gabinete N°1 de 1989, en cuanto a extender las facultades de las autoridades superiores de los entes estatales para los movimientos de personal de la institución, a aquellas entidades regidas por leyes especiales, y por ello le fue aplicado al señor **VICENTE RÍOS.**

En cuanto a los señalamientos del recurrente de que fue obviado el procedimiento de destitución de la Ley 8 de 1975, aplicable en atención a lo contenido en el parágrafo del artículo primero del Decreto de Gabinete N°20 de 1990, es preciso indicar que este parágrafo fue derogado expresamente por el artículo 3° del Decreto de Gabinete N°48 de 1990, cuya parte pertinente es del tenor siguiente:

"ARTICULO 3°...
Queda, en consecuencia derogado el parágrafo del Artículo 1° del Decreto de Gabinete N°20 de 1° de febrero de 1990".

En mérito a estas consideraciones debemos descartar el cargo de ilegalidad aducido por el recurrente con relación al artículo primero del Decreto de Gabinete N°20 de 1990.

Considera el demandante que se han infringido los artículos primero y segundo del Decreto Ejecutivo N°116 de 10 de octubre de 1984.

En relación a los cargos aducidos, la Sala Tercera debe indicar que el Decreto Ejecutivo N°116 de 10 de octubre de 1984 no se encuentra vigente, toda vez que fue derogado de forma expresa por el artículo tercero del Decreto de Gabinete N°1 de 1989, que a la letra dice:

"ARTICULO TERCERO: Derogar el Decreto Ejecutivo No.116 de 10 de octubre de 1984, por su ostensible incompatibilidad con el último párrafo del Artículo 300 de la Constitución Política de la República de Panamá".

Por la razón anotada se descartan los cargos de ilegalidad alusivas al Decreto Ejecutivo N°116 de 10 de octubre de 1984.

El actor aduce también la violación del artículo tercero del Decreto de Gabinete N°48 de 1990. Esta norma legal señala la necesidad de que al producirse destituciones en los entes estatales con arreglo a los Decretos de Gabinete N°20 y N°21, se exprese la causal de destitución.

En el caso del señor **VICENTE RÍOS** se le aplicó la facultad de destitución que tienen las autoridades superiores de los entes estatales en relación a los jefes y directivos de las entidades (artículo 5 Decreto de Gabinete N°1 de 1989) con las modificaciones respectivas del Decreto de Gabinete N°20 y N°48, ambos de 1990, que extendió su aplicación entre otros, para los trabajadores del I.R.H.E., situación ésta que hemos venido analizando en los cargos de violación precedentes, por lo que debemos rechazar este cargo de ilegalidad.

Finalmente, el actor aduce como infringidos los artículos 29 y 33 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946.

Las normas en mención son del tenor siguiente:

"Artículo 29:
Las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado, o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recursos que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deban interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente".

"Artículo 33:
Por la vía gubernativa proceden los siguientes recursos en los asuntos administrativos de carácter nacional:

1. El de reconsideración ante el funcionario administrativo de la primera instancia, para que se aclare, modifique o revoque la resolución;

2. El de apelación, ante el inmediato superior, con el mismo objeto.

Estos recursos ordinarios no excluyen el de avocamiento, en la forma establecida por las leyes, decretos o reglamentos especiales".

Estima el actor que las normas en mención han sido vulneradas, en primer término, porque los recursos de reconsideración con apelación en subsidio no fueron atendidos, y porque la notificación de su destitución no se produjo mediante una resolución administrativo, ni incluía en ella los recursos que en la vía gubernativa eran procedentes, ni el plazo para la interposición de los mismos.

El Tribunal aclara en primer lugar, que contra las resoluciones administrativas de movimiento de personal emitidas con fundamento en los Decretos de Gabinete N°20 y N°48, ambos de 1990, sólo es procedente la interposición del recurso de reconsideración, tal como preceptúa el artículo 3° del Decreto de Gabinete N°48 de 1990, al disponer:

"ARTICULO 3° La autoridad u organismo estatal que proceda a una destitución al amparo de los Decretos 20 y 21 citados, expresará la causal en la que se funda su actuación. Contra dicha destitución cabe sólo el recurso de reconsideración ante la propia autoridad que dictó la decisión, agotándose con éste la vía gubernativa. ...". (subrayado es nuestro)

Lo anterior significa, que el señor **RÍOS** sólo podía interponer el recurso de reconsideración contra el acto que declaraba insubsistente su nombramiento, agotándose la vía gubernativa.

En cuanto a la notificación de insubsistencia del nombramiento, observa la Sala, que a fojas 1 y 2 se aprecia el formulario de movimiento de personal, así como la comunicación oficial (fechada 4 de febrero de 1991) para el señor **VICENTE RÍOS**, alusivas a su destitución.

Aunque en tales escritos no se informa al afectado sobre el recurso que le asistía en la vía gubernativa, en el expediente corren a fojas 5 y 6, documentos en los cuales se hace patente, no sólo que el recurrente pudo ejercitar su recurso ante el Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, sino que lo hizo en tiempo oportuno, agotando la vía gubernativa, y acudiendo ante la instancia Contencioso Administrativa en la Sala Tercera. Ello, subsana cualquier defecto de notificación que pudo haberse producido, tal como ha dispuesto el artículo 32 de la Ley 135 de 1943 modificado por la Ley 33 de 1946, cuyo texto legal es el siguiente:

"Artículo 32:
Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales".

En atención a la situación supra expuesta debemos descartar los dos cargos de ilegalidad aducidos en relación a los artículos 29 y 33 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946.

Una vez analizado íntegramente el negocio que nos ocupa, la Sala Tercera concluye que en el caso subjúdice, el Director General del I.R.H.E., en su actuación, no ha vulnerado las normas legales aducidas por el recurrente, reiterando la idea de que a pesar de estar amparado el señor **VICENTE RÍOS** por una ley especial (Ley 8ª de 1975) en cuanto a su relación laboral con la institución, esta ley quedó supeditada a los Decretos de Gabinete N°1 de 1989; N°20 y N°48 de 1990, que tienen rango jerárquico de ley, y que son posteriores y especiales para la materia por lo que tienen aplicación preferente de acuerdo con las reglas de hermenéutica legal, y que la Corte Suprema, a través de esta Sala, ha reiterado.

El propio Decreto de Gabinete N°48 de 1990, en su artículo cuarto, dispone que queda modificada cualquier disposición que le sea contraria al Decreto en mención, señalando entre otras, a la Ley 8ª de 1975, al preceptuar:

"ARTICULO 4° Este Decreto de Gabinete modifica, en cuanto le sean contrarias las disposiciones de la Ley 8a. de 25 de febrero de 1975, ... y cualquier otra disposición que le sea contraria".

Se constata igualmente que el I.R.H.E. pagó al Ingeniero **RÍOS** las prestaciones laborales que le correspondían tal como señaló el Director General de la Institución, y consta en el expediente administrativo aportado al proceso, señalándose:

"Ahora bien, al Ing. Grimaldo Céspedes en virtud de la insubsistencia declarada, se le pagaron las prestaciones laborales a que tenía derecho; no así a las indemnizaciones que solicita la parte actora, puesto que esta destitución no se rige por lo estatuido en la Ley 8va. de 25 de febrero de 1975 que es norma especial que regula las relaciones laborales obrero-patronales del IRHE, debido a que estos Decretos sustraen y modifican el conocimiento y el procedimiento para estos despidos tal cual lo regula el Artículo 4o. del Decreto de Gabinete No.48".

En atención a estas consideraciones, deben negarse los cargos aducidos y las declaraciones solicitadas por el actor.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el formulario de movimiento de personal fechado 4 de febrero de 1991, expedido por el Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDGAR DOMINGO MORALES MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR MCKAY, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 174 DE 20 DE JULIO DE 1992, EMITIDO POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **EDGAR DOMINGO MORALES MÉNDEZ** en representación de **OSCAR MCKAY**, ha interpuesto Recurso de Reconsideración contra el Auto de 15 de junio de 1993, proferido por el resto de los Magistrados de esta Sala, el cual **NO ADMITE** la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por su persona.

El actor sustenta básicamente su pretensión, aduciendo que:

"El señor Procurador de la Administración interpone la alzada en este negocio, alegando básicamente el fenómeno de la prescripción de la acción al presentar el actor la demanda en controversia, ya que el interesado contaba hasta el 21 de diciembre de 1992 para acudir ante la Sala de lo Contencioso y el mencionado libelo fue propuesto el 23 de diciembre de 1992.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el representante del Ministerio Público esgrime de igual forma en esta oportunidad, que el impugnante no proporcionó constancia o certificación del pronunciamiento del Ministerio de Obras Públicas en lo concerniente a los recursos de reconsideración y apelación incoadas por el actor, no comprobando en consecuencia, el agotamiento de la Vía Gubernativa en dicha institución estatal.

Honorables Magistrados, es cierto que en el libelo de la demanda original no reposan los documentos que comprueben el agotamiento de la Vía Gubernativa, pero en la Corrección de la Demanda si reposan estos

documentos. Al igual que en el expediente principal de mi mandante que reposa en el Ministerio de Obras Públicas" ...

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados entran a conocer el recurso:

Deseamos manifestar que no le asiste la razón al señor **OSCAR MCKAY**, dado que es cierto que no aportó la constancia o certificación de que el Ministro de Obras Públicas se había pronunciado o no, con respecto al recurso de apelación, para que se considerara agotada la vía gubernativa.

En lo que respecta a que dicha certificación fue presentada ante este Tribunal, junto a una corrección de demanda, es importante acotar que dicha corrección fue presentada posterior a la admisión de la demanda por parte del Magistrado **a-quo**, al informe de conducta por parte del Ministro de Obras Públicas, y a la apelación propuesta por el Procurador de la Administración de la admisión del libelo. Siendo esto así, no era correcto que el demandante presentara una demanda extemporánea corregida, adjuntándole documentos probatorios que debieron ser presentados dentro del término con la primera demanda.

Cabe agregar que con relación a los términos de prescripción que alude el peticionario, para la formalización de la acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción esta Corporación fue clara al manifestar que la misma se encontraba dentro del término legal establecido para ello. La demanda, como ya lo hemos mencionado no fue admitida porque no se aportó pruebas del agotamiento de la vía gubernativa.

Por ende no es viable el argumento del apoderado judicial del señor **MCKAY**, para que este Tribunal reconsidere su decisión.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto de 15 de junio de 1993, el cual NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, propuesto por el licenciado EDGAR DOMINGO MORALES MÉNDEZ, contra el Decreto de Personal N°174 de 20 de julio de 1992, emitido por el Ministro de Obras Públicas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.)ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SANTIAGO SANFORD URRIOLA, EN REPRESENTACIÓN DE JULIO R. GONZÁLEZ S., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N°78 DE 30 DE ABRIL DE 1991, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE REGULACIÓN DE PRECIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **SANTIAGO SANFORD URRIOLA** actuando en nombre y representación de **JULIO R. GONZÁLEZ S.**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N°78 de 30 de abril de 1991, expedido por el Director General de la Oficina de Regulación de Precios.

Considera el recurrente que el acto impugnado, es violatorio de los artículos 36 acápite b, y 93 del Reglamento Interno de la Oficina de Regulación de Precios, así como los artículos 43 y 70 de la Constitución Nacional.

De la demanda instaurada se corrió traslado al señor Procurador de la Administración, quien solicitó al Tribunal que fueran denegadas las pretensiones del recurrente. (Cfr. fojas 32-38 del expediente)

De igual forma se dio traslado a la entidad demandada para que rindiese un informe explicativo de su actuación, encontrándose el mismo a fojas 29-31 del expediente.

Una vez surtidos todos los trámites establecidos para estos procesos, tal como se desprende del informe secretarial visible a foja 58 del expediente, procede la Sala Tercera a desatar a controversia instaurada.

El primer cargo de ilegalidad planteado por el recurrente descansa en la transgresión del artículo 36 literal b del Reglamento Interno de la Oficina de Regulación de Precios, cuyo texto legal contempla como una de las causales de destitución, el haberse sancionado una falta grave o un delito común del funcionario de la entidad.

Según el recurrente, el acto impugnado está viciado de ilegalidad, puesto que el señor **GONZÁLEZ** nunca fue sancionado por faltas graves.

Es preciso indicar al actor, que la Oficina de Regulación de Precios está regulada a través del Decreto de Gabinete N°60 de 7 de marzo de 1969, que tiene rango legal, y por consiguiente, es de mayor jerarquía que un reglamento.

En el caso del señor **JULIO GONZÁLEZ**, existían reportes e informes de ciertas actuaciones irregulares que venían acaeciendo desde el año 1987, y que fueron objeto de investigación, concluyéndose que las faltas graves en que había incurrido el señor **GONZÁLEZ**, entre otros funcionarios, debía ser objeto de una sanción ejemplar, que

depurase la institución, tal como ha quedado expuesto a fojas 29-30 del expediente, y que reproducimos a continuación:

> "Haciendo una relación cronológica de los informes (sic) recibidos en la Dirección General en el caso que nos ocupa, tenemos:
>
> Día 31 de julio de 1990:
> El Licdo. Eduardo Estrada, auditor interno de la Institución, nos presenta un informe relacionado con la investigación sobre la Resolución de Precios No.150, del 18 de junio de 1987, en la cuál se emite precio al producto Cerelac Lacteado de 360 grms., de la Empresa Nestlé Panamá, S. A., concluyendo el mismo, que la citada Resolución fue alterada y que según su opinión el Director de la Dirección de Productos Importados y Medicinales, debió objetar la solicitud de la empresa ya que según su criterio este acto iba en detrimento de los intereses de los consumidores y que de acuerdo con la ficha del movimiento interno de personal, el señor JULIO GONZÁLEZ, fungía para esa época como Director de Productos Importados y Medicinales y que no estaba eximido de responsabilidad con relación al hecho antes mencionado,...
>
> Día 3 de agosto de 1990:
> Se recibió en el Despacho Superior un informe de la investigación del producto Lácteo Nan, distribuido por la empresa Nestlé Panamá, S. A.,referente a los márgenes de utilidad que se les estaban permitiendo y termina el auditor interno de la Institución señalando 'Con relación al manejo que ha estado dando la Dirección de Productos Importados a esta materia, creemos prudente recomendarle al señor Director se realice una depuración de personal en esta Dirección',...
>
> Día 18 de octubre de 1990:
> Este Despacho Superior recibe de parte del auditor interno de la Institución un informe que recoge informaciones verbales emitidas por el Licenciado BASILIO HUGGS, funcionario asignado a la Dirección de Productos Importados y Medicinales y subalterno directo del señor JULIO GONZÁLEZ, referente al procedimiento ejecutado en la emisión de la Resolución N°159 del 28 de junio de 1988, en donde se le fijaban precios máximos de venta al producto medicinal Sulfato de Amikacina, vial con 2ml. de 250mg., elaborado por Yung Shin Pharmaceutical Inc. Co de Taiwan y que distribuye Homab, S. A.
>
> En este informe señala el Licenciado BASILIO HUGGS, las irregularidades que se dieron por parte del señor JULIO GONZÁLEZ, que violando acuerdo suscritos con la cámara de Comercio y Procedimientos Internos de la Institución, emitió la Resolución N°159 del 28 de junio de 1989, con un criterio personal en perjuicio de los consumidores, ...".

Cabe anotar pues, que existían señalamientos concretos en relación al ex-funcionario **GONZÁLEZ** que ameritaban una sanción.

El Decreto de Gabinete N°60 de 1969 establece en su artículo octavo, la potestad del Director de la Oficina de Regulación de Precios para nombrar y remover el personal de la institución libremente, hasta tanto se incorporase el personal al régimen de Carrera Administrativa.

La norma en mención señala:

> "Artículo octavo: El Director de la Oficina de Regulación de Precios nombrará el personal subalterno y señalará las funciones del mismo, hasta tanto se incorpore el personal de esta dependencia al régimen de Carrera Administrativa. A partir de esa fecha, la escogencia y remoción del personal se hará de acuerdo con la Ley que regule la Carrera Administrativa".

En base a esta potestad, el Director de la Oficina de Regulación de Precios puede remover libremente el personal de la institución.

El Reglamento Interno resulta importante, puesto que recoge la forma en que está organizada, y el funcionamiento administrativo de la institución; sin embargo, y tal como ha reiterado esta Superioridad, éste no puede garantizarle estabilidad a un funcionario, ni imponer restricciones a la discrecionalidad de que goza el Director del ente estatal al momento de nombrar o remover personal, puesto que tal como lo ha expresado el Decreto de Gabinete N°60, en su artículo octavo, sólo una Ley de Carrera Administrativa puede concederle tales prerrogativas al servidor público, y lamentablemente tal régimen no se encuentra vigente en Panamá.

El Director de la Oficina de Regulación estaba legalmente facultado para proceder a la destitución del señor **GONZÁLEZ**, máxime cuando contra este ex-funcionario pesaban graves acusaciones que le imputaban actos contrarios a la buena imagen de la institución a la cual pertenecía, y que afectaban los intereses del público consumidor.

En virtud de ello debemos descartar el cargo de ilegalidad impetrado.

El recurrente acusa también la transgresión del artículo 93 del Reglamento Interno de la Oficina de Regulación de Precios, que señala como fecha para la entrada en vigencia de tal reglamentación, la fecha de su aprobación.

Considera el actor que se ha violado la excerta reglamentaria, toda vez que las irregularidades de que se acusa al señor **GONZÁLEZ** ocurrieron antes de la aprobación del Reglamento Interno, lo cual se produjo mediante Resolución N°47 de 28 de enero de 1991. Por ser ello así, según el recurrente, debió no sancionarse con destitución al señor **GONZÁLEZ**, sino aplicársele el Reglamento Interno anterior al 28 de enero de 1991.

La Sala observa en primer lugar, que los informes de las irregularidades acusadas contra el señor **GONZÁLEZ**, fueron presentándose desde julio de 1990 hasta finales de octubre de ese mismo año.

Tales investigaciones debían ser objeto de análisis por parte de la Institución, por lo que en ese interín se aprobó, en enero de 1991, el nuevo Reglamento Interno, que debía aplicarse desde el momento de su aprobación, para los efectos de cualquier decisión a nivel administrativo que adoptase la autoridad máxima.

No cabe por tanto la transgresión acusada por el recurrente, y lo que es definitivo es que, tal cual expresáramos en el cargo de ilegalidad precedente, la destitución del señor **GONZÁLEZ** no estaba sometida a procedimientos reglamentarios, ya que la autoridad máxima de la institución, legalmente, estaba facultado para ello, por lo que debemos desestimar este cargo de ilegalidad.

Finalmente, el actor aduce la infracción de los artículos 43 y 70 de la Constitución Nacional.

Sobre tales infracciones debe inhibirse de conocer este Tribunal, toda vez que hemos reiterado en innumerables ocasiones, que el control de la Constitucionalidad le compete de manera exclusiva al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y no a la Sala Tercera, a quien le está atribuida legal y constitucionalmente el control de la Legalidad.

Una vez analizadas de manera integral las constancias procesales, y revisada la actuación de la Oficina de Regulación de Precios, la Sala Tercera estima que su proceder se ajustó a lo dispuesto por las normas que regulan el marco legal de la entidad, por lo que el Resuelto impugnado no está viciado de ilegalidad.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Resuelto N°78 de 30 de abril de 1991, expedido por el Director General de la Oficina de Regulación de Precios.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO Y VISUETTI, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS CARLOS RÍOS SERRACÍN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO NO.170 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1991, EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **TROYANO Y VISUETTI** ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en representación de **LUIS CARLOS RÍOS SERRACÍN**, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto No. 170 de 30 de septiembre de 1991, expedido por el Contralor General de la República.

Estima el recurrente que el acto impugnado es violatorio del artículo 8 de la ley 32 de 1984, y del artículo 29 de la ley 135 de 1943 reformada por la ley 33 de 1946.

De la demanda instaurada se corrió traslado al Señor Procurador de la Administración, quien procedió a oponerse a las pretensiones del recurrente, mediante Vista Fiscal No. 44 de 26 de Enero de 1993 (cfr. fojas 24-31 del expediente).

De igual forma se dio traslado al funcionario responsable del acto acusado, quien procedió a rendir su informe explicativo de conducta, que corre a fojas 22-23 del expediente.

Una vez surtidos todos los trámites legales establecidos para estos procesos, tal como se desprende del informe secretarial visible a foja 35 del expediente, procede la Sala Tercera a desatar la controversia instaurada.

Observa el tribunal que el negocio que nos ocupa tiene su origen en la destitución del señor **LUIS CARLOS RÍOS SERRACÍN** del cargo que ocupaba como conductor de vehículo III en la Dirección de Estadísticas y Censo de la Contraloría General.

Estima el actor, que la resolución impugnada infringe el artículo 8 de la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General.

La norma legal en mención, es del tenor siguiente:

> Artículo 8. "La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo y que todo ascenso responde a justo reconocimiento de los méritos del servidor promovido. De igual manera, toda destitución o descenso de categoría deberá estar precedida por una investigación destinada a esclarecer los cargos que le atribuyen al servidor, en la cual se permita a éste ejercer su derecho de defensa.

> Se llevará un historial de servicio de cada uno de los servidores de la Institución en el que debe constar la evaluación anual de su desempeño."

Según el demandante, la disposición pretranscrita ha sido transgredida, al no haberse investigado los cargos imputados al señor **RÍOS** antes de procederse a su destitución.

La Sala Tercera, una vez analizadas íntegramente las constancias del expediente procede a externar lo siguiente:

El señor **LUIS CARLOS RÍOS SERRACÍN**, quien era un antiguo funcionario de la Contraloría General de la República, había sido objeto, a lo largo de su desempeño en la entidad, de reiteradas sanciones y amonestaciones por razón de faltas en que había incurrido en el desempeño de sus funciones.

Así, en el tomo I del expediente administrativo remitido por el ente estatal, contentivo del historial disciplinario del señor **RÍOS**, se aprecian los constantes llamados de atención, multas, y otras medidas correctivas, tomadas en virtud de los repetidos incidentes en que se veía involucrado, tales como: accidentes de tránsito, volcamientos, utilización del vehículo sin autorización, escándalos públicos y sucesos de esta magnitud, ocurridos, todos, durante horas laborables y en ejercicio de sus funciones (cfr. fojas 47-53 del expediente administrativo, tomo I).

Un áudito de la Dirección de Auditoría de la Contraloría General que investigaba las operaciones financieras y administrativas de la institución en concepto de consumo y distribución de combustible, diesel y gasolina en la provincia de Panamá por vehículos oficiales, detectó graves irregularidades en el manejo de cupones de combustible (venta ilícita de cupones de gasolina), que involucraba, entre otros ex-funcionarios de la Contraloría General, al señor **RÍOS.**

Al momento de descubrirse la irregularidades mencionadas, el Contralor General, aplicando las disposiciones del Reglamento de la Institución, y la Ley 32 de 1984, decide suspender provisionalmente de sus cargos a los involucrados, incluyendo al señor **LUIS CARLOS RÍOS**, mediante Decreto No. 77 de 11 de abril de 1991 (cfr. foja 46 del expediente administrativo, Tomo I).

Esta sanción disciplinaria, que fue notificada a las partes afectadas, desencadenó una investigación más pormenorizada de los hechos, y dentro de la cual el afectado, señor **RÍOS**, ejerció su derecho de defensa, concediendo poder a la firma de abogados que le representa en esta instancia ante la Sala Tercera, los cuales estaban facultados para realizar las diligencias tendientes a probar la desvinculación de su patrocinado con los hechos que se le imputaban, tal como se aprecia a fojas 38 y 43 del Tomo I del expediente administrativo.

Estas circunstancias evidencian que el señor **RÍOS** nunca estuvo en indefensión, dado que desde el momento en que es señalado como partícipe de las irregularidades detectadas, contó, no sólo con una defensa y representación, sino que se profundizaron las investigaciones para determinar su verdadera responsabilidad, investigaciones éstas que concluirían con un informe final de Auditoría (No. 41-2-91), en el cual se comprobaron los hechos investigados y se señaló como responsables de las irregularidades anotadas, entre otros, al señor **LUIS CARLOS RÍOS SERRACÍN.**

Al respecto, el señor Contralor General, haciendo un resumen suscinto de los hechos acaecidos, destacó:

> "En primer lugar, mediante Decreto No. 77 de 11 de abril de 1991 se procedió a suspender provisionalmente al señor LUIS CARLOS RÍOS SERRACÍN, Conductor de vehículo III en la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General, sin derecho a sueldo mientras duren las investigaciones, a partir del 11 de abril de 1991, ya que se encontraba vinculado en el proceso de investigación, de acuerdo a informativo rendido por la señora Digna Flérida Serrano, empleada de la estación JORSAN, donde lo involucra en la venta ilícita de cupones de combustible que le suministra la Institución.
>
> Después de agotado el procedimiento que marca la Ley 32 de 1984 y el Reglamento Interno correspondientes y dándole el derecho de defensa al señor LUIS CARLOS RÍOS SERRACÍN, se comprobó que éste, efectivamente incurrió en irregularidades, falta grave que riñe con la conducta que debe mantener todo funcionario de la Contraloría General.
>
> Que como resultado de la Auditoría practicada a las operaciones financieras y administrativas en concepto de consumo y distribución de combustible, diesel y gasolina de la Contraloría General, cuyo servicio de almacenaje y distribución lo realizó la estación de Servicio particular JORSAN, durante el período del 1° de enero de 1990 al 31 de enero 1991, la Dirección de Auditoría demuestra en el informe No. 41-2-91, que los señores: GALLARDO BATISTA, GUERRERO RODRÍGUEZ, ROJAS QUINTERO, CASTILLO MORA y RÍOS SERRACÍN, son los involucrados directamente en el manejo de los cupones de combustible suministrados a la Institución."

Este Tribunal observa, que en el caso del señor **RÍOS**, la Contraloría General no adoptó la decisión de destitución de manera imprevista, o sin cumplirse con una investigación previa, como aduce el demandante; por el contrario, el expediente del señor **LUIS CARLOS RÍOS S.** fue analizado, y objeto de investigaciones en varias etapas, y dentro de las cuales fue previamente sancionado con la suspensión provisional del cargo, hasta que se contó con los suficientes elementos de juicio que ameritaran una medida distinta.

El informe de auditoría fechado 4 de julio de 1991, visible en el tomo II del expediente administrativo, y que corre de fojas 1-23 del expediente, recoge las piezas procesales que incriminan al señor **RÍOS** en los hechos anómalos acaecidos, que tienen matiz delictivo (negociado de órdenes de combustible emitidos por la Institución, en combinación con despachadores de una estación de gasolina, donde se recibían cantidades

de galones de combustible inferiores a los autorizados en la orden o cupón, y distribuyéndose en dinero la diferencia). La denuncia ha pasado aparentemente al conocimiento de las autoridades del Ministerio Público a través de la Fiscalía Segunda Delegada (foja 21 del expediente administrativo, tomo I).

No cabe por ende, el señalamiento de la ausencia de una investigación en este caso, que deslindara responsabilidades, puesto que la misma se llevó a cabo de manera rigurosa y exhaustiva, y el afectado ejerció sus medios de defensa, por lo que debemos descartar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 8 de la Ley 32 de 1984.

El último cargo de ilegalidad esbozado por el recurrente, descansa en el artículo 29 de la ley 135 de 1943 modificado por la ley 33 de 1946, cuyo texto legal es el siguiente:

> Artículo 29. "Las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado, o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recursos que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deban interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente."

El cargo de violación se configura -según el actor- cuando la Contraloría General de la República no le notifica personalmente, al señor **LUIS CARLOS RÍOS SERRACÍN** del Decreto No. 170 de 30 de septiembre de 1991 que le destituye del cargo que ocupaba en dicha Institución, no le pone en conocimiento de los recursos que en la vía gubernativa le asistían para enervar dicho acto administrativo, ni el término dentro del cual podían proponerse.

La Sala Tercera, al analizar la infracción aducida, debe reiterar lo que en numerosas ocasiones ha señalado, en el sentido de que el artículo 29 de la ley 135 de 1943, pretende proteger a los posibles afectados por los actos de la administración, en cuanto a que sean debidamente enterados de las resoluciones y actuaciones que puedan afectar sus derechos, y de garantizarles que cualquiera de tales actos no será ejecutado hasta que el interesado pueda ejercer su defensa.

En el caso que nos ocupa, el Decreto No. 170 de 1991, sí fue notificado personalmente al señor **LUIS CARLOS RÍOS SERRACÍN**, tal como se aprecia a foja 3 del expediente, y aunque en tal resolución no se expresaron los recursos gubernativos que le asistían al señor **RÍOS**, éste, a través de sus representantes autorizados hizo uso del recurso pertinente (reconsideración), tal como se aprecia a foja 4 del expediente, agotándose la vía gubernativa.

Este recurso fue resuelto por la Contraloría General mediante Resolución No.169 de 31 de marzo de 1992, lo que evidencia que el interesado hizo uso de los recursos que le concede la ley, y en el plazo pertinente. De igual forma, el señor **RÍOS**, dándose por enterado que se agotaba la vía gubernativa, acudió dentro del plazo previsto en el artículo 27 de la ley 33 de 1946 ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, todo lo cual indica que se subsanó cualquier defecto de notificación que pudo haberse producido en la instancia gubernativa, tal como prevé el artículo 32 de la ley 135 de 1943, modificado por la Ley 33 de 1946, cuando preceptúa:

> Artículo 32. "Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo oportuno los recursos legales." (subrayado es nuestro)

En virtud de lo anterior, debemos rechazar el cargo de ilegalidad, alegado en relación al artículo 29 de la ley 135 de 1943.

Este Tribunal desea recalcar que en este caso, aunque nos encontramos ante la destitución de un servidor público asistido por un Régimen de estabilidad que le concede la ley Orgánica de la Contraloría General, esto no lo hace inamovible, toda vez que los funcionarios del Estado deben ajustar su conducta a los principios le Legalidad, honradez y eficiencia. A estos servidores públicos les amparan derechos, pero también les comprometen obligaciones, y deben mantener una moral y ética profesional y administrativa, libre de conductas reprochables.

El Reglamento Interno de la Contraloría prevé las sanciones que pueden imponerse a aquellos funcionarios cuyas actuaciones no armonicen con los principios aquí plasmados, y con las exigencias específicas consagradas en la ley y en las normas reglamentarias.

Así, el artículo nueve (9) de la Ley 32 de 1984 ha dispuesto:

> Artículo 9. " La estabilidad de los servidores de la Contraloría estará condicionada a la idoneidad, lealtad, antigüedad y moralidad del servicio público. Hasta tanto se dicte la ley de carrera administrativa todo el que haya laborado en la Contraloría, a satisfacción, durante un mínimo de cinco (5) años, gozará de estabilidad y no podrá ser cesado más que por causas establecidas en la ley o en el Reglamento Interno, debidamente comprobadas ...".

El Reglamento Interno por su parte, en el artículo 68 contempla los deberes de los funcionarios de la Contraloría, y que según las constancias del expediente, no fueron cumplidos a cabalidad por el señor **RÍOS**, específicamente en lo que respecta a la forma y dedicación en que cumplía su trabajo, y a la observancia de una conducta digna y decorosa.

Las irregularidades detectadas en cuanto al uso y negociado de órdenes de combustible propiedad de la Institución imputada al señor **RÍOS**, además de su reiterada conducta irresponsable, que ha quedado expuesta en su expediente de servicios, permitió que se configuraran las causales de destitución contempladas en el artículo 70 del Reglamento Interno, específicamente en los literales **c** y **e**, que preceptúan:

Artículo 70. "Son causales de destitución o de descenso de categoría:
...
c) La deslealtad al anteponer el empleado sus intereses políticos, personales o de otra naturaleza a los de la Institución.
...
e) Llevar el empleado una conducta desordenada e incorrecta que ocasione perjuicio al funcionamiento o al prestigio del servicio a que pertenece;
...

En atención a estas consideraciones, la Sala Tercera concluye, que la actuación de la Contraloría General de la República no ha estado viciada de ilegalidad, pues se ajustó a las causales y al procedimiento de destitución de sus funcionarios previsto por su ley Orgánica y su Reglamento Interno para casos como éste, garantizándole los medios de defensa al afectado, y previa comprobación de los hechos imputados.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto No. 170 de 30 de septiembre de 1991, expedido por el Contralor General de la República.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. GASPARINO FUENTES TROESCHT, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO.22 DE 31 DE ENERO DE 1992, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Gasparino Fuentes Troescht**, en su propio nombre, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto Ejecutivo N°22 de 31 de enero de 1992, emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia.

La parte actora sustenta su pretensión en los siguientes hechos y omisiones:

"PRIMERO: El Órgano Ejecutivo, integrado por el Presidente de la República y el Ministerio de Gobierno y Justicia, en forma irregular, dictó con fecha 31 de enero de 1992, el Decreto No.22, "por el cual se regula las condiciones de aptitud, derechos y funciones de los vigilantes jurados de seguridad". Este Decreto fue promulgado en la Gaceta Oficial No.21974 de 14 de febrero de 1992, por lo cual está en vigencia según establece la norma final.

SEGUNDO: El Decreto No.22 de 31 de enero de 1992, reglamenta las condiciones de aptitud, derechos y funciones de los vigilantes jurados de seguridad, materia que es propia y está regulada por el Código de Trabajo, que regula la prestación de servicios en el ámbito privado, por parte del trabajador, para el empleador, por un salario o remuneración, mediante un contrato o relación de trabajo.

TERCERO: El Decreto Ejecutivo No.22 de 31 de enero de 1992, contiene disposiciones contrarias a las del Código de Trabajo, a pesar de ser este último un cuerpo de leyes de rango superior, que solamente puede ser modificado por una ley de igual jerarquía."

Adicionalmente sostiene el actor que se han violado las siguientes disposiciones: Artículos 1, 2, 213, acápite A, del Código de Trabajo; artículo 15 del Código Civil y el artículo 46 del Código Penal.

Posteriormente el Magistrado Sustanciador, procedió a solicitarle al Ministro de Gobierno y Justicia rindiera informe de conducta en relación a la demanda de nulidad interpuesta por el licenciado **Fuentes Troescht**, el cual dicho funcionario, mediante Nota N°247 de 9 de septiembre de 1992, señaló lo siguiente:

"El Ministerio de Gobierno y Justicia dictó el Decreto impugnado con fundamento en el artículo 9° de la Ley 14 de 30 de octubre de 1990,... Dicho Artículo faculta al Órgano Ejecutivo para que en virtud de la potestad reglamentaria, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, restrinja, fiscalice, supervise y reglamente el funcionamiento y operación de las Agencias de Seguridad Privada, así como de las Empresas dedicadas a la importación de armas.
...
...Ello obedece a que en la actualidad existen un aproximado de 110 Agencias con 8,000 trabajadores dedicados a la Seguridad Privada, lo que ha implicado una Reglamentación completa, que establece las condiciones de aptitud, derechos y funciones de las personas interesadas en prestar sus servicios como Agentes de Seguridad. (Decreto Ejecutivo No.22 de 31 de enero de 1992).

Es potestad exclusiva del Estado la Seguridad Pública y la Defensa Nacional, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 305, luego entonces cuando el Estado delega parte

> de esta actividad en la empresa privada es necesariamente ineludible crear las disposiciones que reglamenten las condiciones, requisitos y restablecer el marco jurídico en que debe desarrollarse esta actividad, máxime cuando se autoriza a particulares portar armas en lugares públicos y se autoriza el uso de ellas para la protección de la vida bienes y honra de los asociados. En modo alguno se pretende con esta normatividad ejecutiva establecer pautas de carácter laboral que afecten la relación obrero-patronal, sino que se pretende establecer las condiciones mínimas que garanticen a la comunicad que aquellas personas que portan armas de fuego y se les faculta para desarrollar una actividad de seguridad pública, sean idóneas en el manejo de las mismas y reciban el entrenamiento adecuado a las delicadas funciones que pretenden desarrollar.
> ...
> ... El referido Decreto no afecta, ni modifica, ni viola de modo alguno las normas del Código Civil ya que las disposiciones reglamentarias que examinamos no alteran ni modifican la ley, solo la complementan y es de sumo y vital interés público la existencia de esta reglamentación porque priva la necesidad de poder brindarle a los asociados las mínimas condiciones que garanticen su vida, su integridad física y el respeto a sus derechos humanos,...
>
> En otro orden de ideas es importante resaltar que la seguridad pública no puede ser delegada en individuos fuera de la Ley o que padezcan problemas de drogradicción, incapacidad física mental o cualquiera otra causa que impida el libre discernimiento del vigilante de seguridad y si este, no encuadra su conducta dentro de los parámetros de la ley no puede autorizárcele (sic) que públicamente porten armas y pretendan ser garantes de una seguridad que es prioridad mantener en todo Estado que pretenda establecer civilizados sistemas de vida.
>
> En el interés de coadyuvar con la empresa privada y ante la evidente necesidad de brindar a los vigilantes jurados de seguridad una adecuada preparación, la Academia de Policía (ACAPOL) sin costo alguno ha sometido a exámenes y pruebas inherentes a las actividades que desarrollan estos vigilantes en las distintas modalidades de defensa personal, uso limitado de la fuerza, manejo de armas de fuego, principios de respeto y manejo de situaciones de peligro con multitudes y otras propias de dicha actividad toda esta actividad desarrollada en coordinación con las Agencias de Seguridad que hasta la fecha se encuentran agrupadas en Asociaciones sin fines de lucro y con cooperación del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada que cuenta con la debida Personería Jurídica otorgada por el Ministerio de Trabajo."

De igual forma se le corrió traslado al Procurador de la Administración quien se opuso a la pretensión incoada.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados de la Sala Tercera entran a resolver la presente controversia: la primera norma que se estima conculcada, es el artículo 1 del Código de Trabajo, argumentando el demandante, que los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 16 y 18 del Decreto 22 de 31 de enero de 1992, establecen requisitos que no exige la legislación laboral para aquellas personas que aspiren a prestar servicios en una empresa privada. Que las Agencias de Seguridad, son empresas privadas que están bajo las normas del Código de Trabajo, y consecuentemente regula las relaciones obrero-patronal de las personas que laboren allí. Que por ser el referido Decreto Ejecutivo de jerarquía inferior, no puede atribuirsele al Ministerio de Gobierno y Justicia, competencia y facultades que no están previstas en la ley. Por ende hay una violación directa, por omisión.

Frente a este resumido alegato, debemos señalar que no coincidimos con lo argüido por el actor, debido a que el enfoque que le ha atribuido a las normas que considera violatorias al artículo 1 del Código de Trabajo, no es el correcto. Los artículos del Decreto N°22 de 31 de enero de 1992, arriba enunciados, no tienen relación alguna con el precepto legal que se considera vulnerado. Esto último lo decimos, dado que los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 del precitado Decreto Ejecutivo establecen requisitos que debe reunir el aspirante al puesto de vigilante jurado de seguridad en las agencias de seguridad privada, tal y como lo señalara el propio demandante. El hecho de que el Ministerio de Gobierno y Justicia reglamente las condiciones necesarias en la persona que aspire a prestar servicios como agente de seguridad, esta potestad del ente gubernamental no colisiona con lo estatuido en la excerta legal considerada transgredida. Aunado a lo anterior, debemos destacar que el artículo del Código Laboral a que hacemos referencia, es una norma programática; es decir es una disposición que establece la finalidad de la ley laboral, la normatividad de las relaciones obrero-patronal y la tutela por parte del Estado en esas relaciones. En casos similares la Corte ha reiterado que las normas programáticas o directivas no pueden por sí solas constituir fundamento de derecho en las demandas, por lo que es importante que estas disposiciones estén acompañadas de alguna otra norma de carácter normativo para que puedan ser examinadas. Por lo anterior consideramos que mal podría violarse normas que consagren programas, principios, o valores, que son la base en este caso, de la legislación de trabajo. Por tanto, no aceptamos el cargo impetrado.

Otra norma que considera el licenciado **Fuentes Troescht** que ha sido violada, es el artículo 2 del Código de Trabajo, manifestando que la transgresión es directa por omisión, en virtud de que el Decreto Ejecutivo N°22 de 31 de enero de 1992 al ser de menor jerarquía, establece condiciones y requisitos distintos a los contenidos en la legislación laboral, cuando ésta última es de orden público y de obligatorio cumplimiento.

Una vez más, acotamos que el argumento esbozado por el licenciado **Fuentes Troescht** no es diáfano, puesto que generaliza la violación por parte de todo un Decreto Ejecutivo, cuando es de todos conocidos que a lo que alude el demandante es a ciertas normas del referido cuerpo legal, considerando esta Sala, que lo argüido para fundamentar la acusación impetrada, carece de claridad. Es criterio reiterado de que el afectado al presentar su demanda debe individualizar las normas que vulneran determinada

disposición y explicar claramente en concepto de que ha sido la infracción. También, indicamos que en líneas anteriores manifestamos que las normas programáticas, no pueden ser objeto de violación, ya que ellas establecen lineamientos generales en que se busca determinada legislación. El artículo 2 del Código de Trabajo, es otras disposición programática, que difícilmente puede ser violentada. En este mismo sentido, al no contener dicho precepto legal derechos susceptibles de ser alterados, mal puede acusarse al Decreto N°22 de 31 de enero de 1992, violatorio de la excerta legal antes mencionado. Por lo anterior, no prospera el cargo endilgado.

También se estima que el Decreto Ejecutivo N°22 de 31 de enero de 1992, contraviene el artículo 15 del Código Civil, en virtud del que el referido Decreto Ejecutivo fue expedido por el Órgano Ejecutivo, sin tener éste la potestad para modificar la Ley laboral, estableciendo requisitos y condiciones para las personas que desean prestar servicios como agentes jurados de seguridad que no contempla el Código de Trabajo.

Lo acotado por el demandante, carece de exactitud, en virtud de que en primer lugar, el Órgano Ejecutivo, en este caso específico, el Ministerio de Gobierno y Justicia, sí tiene potestad reglamentaria, ya que como lo indicara el Ministro de dicha Institución Gubernamental en su informe de conducta, la ley N°14 de 30 de octubre de 1990, en el artículo 9 señala textualmente lo siguiente:

> "Facúltase al Órgano Ejecutivo para que en virtud de la potestad reglamentaria, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, restrinja, fiscalice, supervise y reglamente el funcionamiento y operación de las empresas dedicadas a la fabricación, importación y venta de armas y municiones de uso permitido, estableciendo restricciones en la importación de repuestos para armas, componentes y equipo para recargar municiones, accesorios y artículos no letales para la defensa personal; así como de las agencias de seguridad privada las cuales no podrán dedicarse a la importación y venta de armas y municiones; y otras actividades relacionadas con las armas, tales como armerías, áreas de instrucción y tiro." (Subrayado es nuestro)

En este mismo orden de ideas, esta potestad reglamentaria que culminó con el Decreto Ejecutivo N°22 de 31 de enero de 1992, no fue emitida para que se modificase el Código de Trabajo. Al contrario, el mismo fue dictado con el ánimo de regular el delicado servicio que aspiraban prestar los agentes jurados de seguridad, que si bien es cierto el mismo se concretiza en una agencia de seguridad privada, no es menos cierto que las personas o los trabajadores que ahí laboren, deben reunir requisitos que son ineludibles para dichas funciones.

El Ministerio de Gobierno y Justicia, es el ente gubernamental que se encarga de la seguridad Pública por mandato Constitucional, lo que nos conduce a afirmar que es de su obligación regular todo lo que esté relacionado con la seguridad de los asociados, incluyéndose dentro de este parámetro las agencias de seguridad privada, tal como lo preceptúa la ley 14 de 30 de octubre de 1990, ya que brindan un servicio que converge con la de la Fuerza Pública, situación ésta recogida en el Decreto Ejecutivo N°21 de 31 de enero de 1992 en la parte de los Considerandos.

Para pertenecer a este cuerpo de agentes jurados de seguridad, obviamente el aspirante debe reunir cualidades específicas que le permitan desempeñarse de manera óptima en dicho cargo. Es por esto que el Ministerio de Gobierno y Justicia se ha visto compelido a dictar normas, que garanticen que estas personas serán las apropiadas para prestar el servicio de seguridad. Estas normas no pretenden reformar el Código de Trabajo, sólo se supervisa el aspirante al puesto de trabajo, imponiéndole condiciones de salud, mental y físicas, edad apropiada, escolaridad, buena conducta en la comunidad y habilidades comprobadas, previo examen, que será programado, instruido y fiscalizado por parte del propio Ministerio de Gobierno y Justicia, quien es el autorizado para dictaminar si una persona, luego de haber aportado la documentación necesaria, y de reunir los requisitos exigidos, es apta para ocupar el cargo de agente jurado de seguridad. Esto no colisiona que la ley laboral, porque aprobado el seguridad por parte de la autoridad competente, la empresa lo contrata y de aquí en adelante rige el Código de Trabajo en sus relaciones obrero patronal. El propio Decreto Ejecutivo acusado de ilegal, así lo reconoce preceptuando en el artículo 14 lo siguiente:

> "Los Vigilantes jurados dependerán, en cuanto al servicio, del Jefe de Seguridad de la empresa que contrata la seguridad, y en su defecto, del Director, Gerente, Administrador o Jefe de personal, de quienes recibirán, con exclusividad las instrucciones pertinentes para la práctica del servicio.En cuanto a sus condiciones de trabajo, salarios y percepciones a cargo de la empresa, se establecerán de acuerdo con las normas laborales vigentes."

Como podemos observar, el Decreto Ejecutivo N°22 de 31 de enero de 1992, no pretende reformar el Código de Trabajo, sólo lo complementa, y esto último lo hizo notar el propio Ministro de Gobierno y Justicia cuando al rendir informe de conducta señaló diáfanamente lo pertinente. Por tanto, no es viable la acusación incoada.

De igual forma se señala que se ha violentado lo preceptuado en el artículo 213, acápite A, del Código de Trabajo, manifestándose que esta norma es taxativa al establecer causales de despido que facultan al empleador dar por terminada la relación de trabajo, cuando el trabajador incurra en ellas o en alguna de ellas, por lo que el artículo 16 del Decreto Ejecutivo N°22 de 31 de enero de 1992, al establecer tres causales adicionales para la terminación de la relación laboral, atribuyéndose el Ministerio de Gobierno y Justicia el aplicar dichas sanciones, cuando el Código de Trabajo reserva esta potestad al empleador, que en este caso es la Agencia de Seguridad, siendo la violación directa por omisión.

Consideramos que el artículo 213, Acápite A, no ha sido conculcado por el artículo 16 del Decreto Ejecutivo N°22 de 31 de enero de 1992, dado que si revisamos el artículo 15 del propio Decreto Ejecutivo, el mismo señala que la Agencia de Seguridad "está obligada a dar cuenta a la Dirección Institucional de Seguridad Pública de las altas y bajas de los Vigilantes Jurados, tan pronto se produzcan", traduciéndose esta situación,

a que los agentes jurados no deben perder las condiciones o requisitos necesarios, que le permitieron ser merecedores de tan delicado puesto de trabajo, que los lleva a prestar un buen servicio de seguridad. De lo contrario, el propio ente gubernamental que le otorgó tal calidad, está en todo su derecho de revocar su decisión, aplicándole el artículo 16 del referido Decreto Ejecutivo, sobre todo el acápite C, previa comprobación de hechos, ya sea de oficio o a instancia de la propia agencia de seguridad, que contrató los servicios del agente jurado. En este mismo orden de ideas, mal podría argüirse que se viola el artículo 213, acápite A del Código de Trabajo ya que el acápite d) del artículo 16, corresponde a una renuncia y el acápite b) se asimila al numeral 2 del Artículo 213 - Acápite B, del mismo cuerpo legal, que contiene las causales de despido de naturaleza no imputable.

Por último, el artículo 46 del Código Penal es también considerado como transgredido, por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N°22 de 31 de enero de 1992, el cual no entraremos a analizar, ya que prevén situaciones distintas claramente y que no son aplicables al caso.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Decreto Ejecutivo N°22 de 31 de enero de 1992, emitido a través del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.)EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA LUQUE, CORONELL Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE MOTORES INTERNACIONALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR EL ILEGAL, EL ACUERDO NO. 101.40-22 DE 20 DE AGOSTO DE 1992, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La firma de abogados, Luque, Coronell y Asociados, en representación de Motores Internacionales, S. A., ha interpuesto recurso contencioso de nulidad con el propósito que se declare ilegal el Acuerdo N°101-40-22 de 20 de agosto de 1992 proferido por el Consejo Municipal de Colón.

Cumplida la etapa de la admisión del recurso, la Sala procede a analizar la suspensión provisional del acuerdo citado, conforme lo solicita la firma demandante.

Al respecto, la Sala Tercera en varias decisiones ha sentado el criterio de la viabilidad de la suspensión provisional cuando se trata de acciones de ilegalidad, modificando así las posiciones anteriores que limitaban esa suspensión a los actos que afectaban intereses particulares impugnados por la vía del recurso de plena jurisdicción (Ver resoluciones de 14 de enero y 1° de febrero de 1991). Lo fundamental de esta nueva concepción en materia de medida cautelar radica en que la suspensión en los procesos de nulidad procede para evitar potenciales violaciones al orden jurídico objetivo y al principio constitucional de separación de poderes. De allí que en el presente caso sea viable la suspensión provisional pedida.

Por otro lado, la petición que se discute podría estar en colisión con lo estipulado en el artículo 74 de la Ley 135 de 1943 que impide suspender "el pago de impuestos, contribuciones o tasas". Sin embargo, ello no resulta así al considerar la Sala Tercera que esa norma por tratarse de una excepción a la regla general a lo previsto en el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 135 de 1943 debe ser interpretado en forma restrictiva" (Auto del 15 de enero de 1992), con lo cual "debe entenderse que esta prohibición sólo rige con respecto a acciones que recaen sobre tributos nacionales y en los que se debate el monto o la procedencia del derecho del Estado a cobrar un tributo que haya sido legalmente establecido", y no respecto de tributos municipales que son establecidos mediante actos administrativos que sí pueden suspenderse.

Así las cosas, la Sala considera lo siguiente: El Acuerdo municipal impugnado crea un tributo municipal que tiende a "gravar todas las empresas por el uso de vía sin placa", con fundamento en los artículos 75, acápite 44, artículo 76, acápite 2 de la Ley 106 de 1973, reformada por la Ley 52 de 1984. Pero es el caso que el artículo 76 de la Ley 106 precisamente en el numeral 2 dice lo siguiente:

> **"ARTICULO 76:** Los Municipios fijarán y cobrarán derechos y tasas sobre la prestación de los servicios siguientes:
> ...
> 2o. Concesión de placas y otros distintivos análogos que impongan o autoricen los Acuerdos Municipales..."

O sea que lo que la Ley 106 establece sin género de duda es la tasa que incide sobre la prestación del servicio de "concesión de placas", con la cual se transita por las vías públicas, mientras que, por lo contrario, el Acuerdo 101-40-22 de 20 de agosto de 1992 del Consejo Municipal de Colón, permite el tránsito de vehículos por las vías públicas sin placa. Ello lleva a la conclusión de que el referido acto administrativo municipal contradice en forma manifiesta lo previsto en la Ley y al contradecir una norma jurídica de superior jerarquía (Ley 106 de 1973) se causa un daño no sólo al orden jurídico nacional, sino también perjuicios patrimoniales a los contribuyentes.

Por todo lo anterior, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos del Acuerdo 101-40-22 de 20 de agosto de 1992

expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Colón, que grava a "todas las Empresas por el uso de vía sin placa" e impone "un gravamen de B/.3.00 balboas a los vehículos de pasajeros particulares y B/.5.00 balboas para los otros vehículos."

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA CIRCULAR 38 DISPRO DE 7 DE ABRIL DE 1993, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala en representación del **SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS (FENASEP)**, ha promovido Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nula por ilegal la Circular No. 38-DISPRO de 7 de abril de 1993, expedida por el Contralor General de la República.

En la demanda la parte actora solicita que antes de la admisión de la misma se ordene a la Contraloría General de la República se expida copia autenticada del acto originario impugnado, ya que la misma le ha sido imposible obtenerla, y para tal efecto adjunta copia de la respectiva solicitud, con la constancia del recibo.

A juicio de la Sustanciadora, la solicitud hecha por el demandante es procedente de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, por lo que debe resolverse favorablemente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaría se solicite a la Contraloría General de la República que en el término de cinco (5) días, se remita a este despacho copia autenticada de la Circular No. 38-DISPRO de 7 de abril de 1993, expedida por el Contralor General de la República.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL OFICIO NO. DGI-174-91 DE 16 DE ABRIL DE 1991, SUSCRITO POR LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y EL OFICIO NO. 121-91 DE 7 DE JUNIO DE 1992, SUSCRITO POR EL VICEMINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista Fiscal No. 261 de 26 de mayo de 1993, el señor Procurador de la Administración promovió recurso de apelación contra la Resolución de 27 de abril de 1993, por la cual se admite la demanda contencioso administrativa de nulidad promovida por la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, en representación de Compañía de PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A., para que se declare nulo, por ilegal, el Oficio No. DGI-174-91 de 16 de abril de 1991, suscrito por la Directora General de Industrias del Ministerio de Comercio e Industrias y el Oficio No. 121-91 de 7 de junio de 1991, suscrito por el Viceministro de Comercio e Industrias y para que se haga otras declaraciones.

El señor Procurador de la Administración manifiesta que "debe revocarse la resolución en referencia, ya que el libelo de la demanda no se encuentra acompañado de copia debidamente autenticada de los dos (2) actos acusados de ilegalidad, como lo exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943" (fs. 85).

En término oportuno, la parte demandante se opuso al recurso de apelación interpuesto manifestando , "que el artículo 44 de la Ley 135 no contiene exigencia de autenticación del acto acusado, entendida como una certificación de que la copia de dicho acto es fiel reproducción de su original. Lo que manda la norma en mención es que en la copia del acto que se acompañe con la demanda se haya dejado constancia de su publicación, notificación o ejecución, según sea el caso. Esto es comprensible, pues un acto administrativo no publicado, notificado o ejecutado no surte sus efectos, y por tanto, no tendría sentido atacarlo por la vía contencioso administrativa". Pero, este caso es diferente, pues los actos acusados están contenidos en correspondencia que un funcionario estatal le dirige a otros" y "la correspondencia no se publica, ni se notifica, ni se ejecuta en el sentido en que lo entienden los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, sino que se expide y se recibe" (fs. 96-98).

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala procede a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

El recurrente presentó con su demanda, visible de fojas 20 a 23 de este expediente, copia no autenticada de los dos (2) actos administrativos impugnados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, a la demanda el actor debe acompañar copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos. Además, el artículo 46 de la misma ley señala que, "cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda".

El artículo 820 del Código Judicial, -aplicable en este negocio en virtud de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 33 de 1946-, preceptúa que los documentos que se aporten al proceso deberán ser originales o bien copias debidamente autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original.

En el negocio en estudio el recurrente presentó copia simple de los actos impugnados y por tanto, no cumplió con el requisito exigido en artículo 44 de la Ley 135 de 1943, en relación con el artículo 820 del Código Judicial.

Asimismo, el demandante no pidió en su demanda, como lo prevé el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que el sustanciador solicitara a los funcionarios que expidieran los actos impugnados, copia autenticada de estos, antes de admitir la demanda. Esta solicitud era necesaria para allegar al expediente copia auténtica de los actos impugnados, mediante la cual debe probarse su existencia.

Esta Sala en resolución de 29 de abril de 1993 que decidió recurso de apelación presentado por Motores Colpan, S. A., a través de apoderado judicial, contra resolución que no admite demanda contencioso administrativa para que se declare nula, por ilegal, una resolución dictada por el Ministerio de Obras Públicas, expresó lo siguiente:

> "De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, la parte actora debe acompañar con su demanda copia de los actos administrativos impugnados, con las constancias de su notificación, publicación o ejecución, según los casos.
> Estas copias deben presentarse al proceso en originales o en copias debidamente autenticadas, conforme lo establece el artículo 820 del Código Judicial. Esta última norma es aplicable al caso, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 33 de 1946.
> La presentación de estos documentos con las referidas constancias de ley, tienen por objeto que se pruebe la existencia del acto impugnado, que el demandante ha agotado la vía gubernativa y que ha ocurrido oportunamente ante esta vía".

De acuerdo con lo antes expuesto, debe concluirse que con la copia simple presentada no se ha probado la existencia de los actos impugnados, lo que hace inadmisible la demanda (Artículo 31 Ley 33 de 1946).

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **PREVIA REVOCATORIA** de la Resolución de 27 de abril de 1993, **NO ADMITE** la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, en representación de COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A., para que se declare nulo, por ilegal, el Oficio No. DGI-174-91 de 16 de abril de 1991, suscrito por la Directora General de Industrias del Ministerio de Comercio e Industrias y Oficio No. 121-91 de 7 de junio de 1991, suscrito por el Viceministro de Comercio e Industrias.

Notifíquese Y Comuníquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, interpuesta por la firma Rivera y Rivera, en representación de ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLON, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 03-91 de 29 de julio de 1991, expedida por la JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **RIVERA Y RIVERA**, en representación de **ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLON**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 03-91 de 29 de julio de 1991, expedida por la **JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE COLON.**

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda presentada, y se percata que consta en el libelo una solicitud especial para que se declare la Suspensión Provisional de los efectos de la resolución impugnada.

Para tal efecto, el actor ha formulado su solicitud aduciendo básicamente que la Resolución 03-91 de 29 de julio de 1991, traslada a los arrendatarios de los locales de propiedad de la Zona Libre obligaciones que le han sido atribuidas por el Decreto-Ley N°18 de 17 de junio de 1948 y posteriores reformas a esta última, como lo son, el mantenimiento de dichos inmuebles y el de asumir el costo de la compra de seguros de incendio para estos edificios, verificándose una lesión clara al ordenamiento jurídico, dado que la jerarquía de dicho acto administrativo es inferior a la ley aludida. Además

señalan los interesados que de no suspenderse el acto, esto podría causar daño o perjuicio de difícil reparación en el patrimonio de los arrendatarios, en virtud que de verificarse un siniestro, y estando estos inmuebles desprovistos de un seguro de incendio, los daños que se deriven del incendio serán de entera responsabilidad de la empresa arrendataria. Por ende debe **suspenderse provisionalmente** los efectos, de la Resolución N°03-91 de 29 de julio de 1991, "incluyendo entre sus consideraciones el hecho que el Gerente General ha indicado en la Circular COD.296 de 10 de abril de 1992, que a partir del 1° de mayo ejercerá las facultades a él otorgadas a través de la Resolución 01-92 de 24 de enero de 1992 a todas aquellas empresas que no hayan remitido los seguros de incendio en los términos que establece la Resolución 03-91 de 29 de julio de 1991".

Frente a la petición antes transcrita, debemos señalar que consideramos que consta dentro de este expediente, prueba suficiente del perjuicio grave e inminente que podría causar el acto administrativo proferido por la **JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE COLON**, dado que los locales comerciales son de propiedad de la Zona Libre y estos como propietarios en principio, le corresponde asumir la compra de seguros para salvaguardar sus propios bienes, por lo que mal podría endosar esta responsabilidad a los usuarios.

Aunado a lo anterior, observa este Tribunal, que en este caso se verifica lo que la doctrina denomina **FUMUS BONI IURIS**, utilizada por esta Sala para suspender actos provenientes de la autoridad administrativa que son manifiestamente ilegales (ver Auto de 30 de abril de 1992), ya que el mismo trata de una resolución que vulnera a prima facie un Decreto-Ley, no quedándole otra alternativa a esta Sala de acceder a lo solicitado. Efectivamente el Decreto Ley N°18 de 1948 establece en el artículo 29, lo siguiente:

> "Artículo 29o.: Toda construcción o edificación que se haga dentro de las áreas de comercio libre que posea u opere la Zona Libre de Colón, deberán ser asegurados contra incendio por su propietario, en una Institución aseguradora que esté autorizada para operar en la República, a satisfacción de la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón".

En lo que respecta a que se incluya dentro de la suspensión las facultades del Gerente General de La Zona Libre otorgadas a través de la Resolución N° 01-92 de 24 de enero de 1992, la de aplicar sanciones a las empresas que no remitan los seguros de incendio a su despacho, debemos destacar que no es viable conceder esta declaración, en virtud de que dicha Resolución no ha sido demandada dentro de este proceso contencioso de nulidad.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ACCEDE a la solicitud de Suspensión de los efectos de la Resolución N° 03-91 de 29 de julio de 1991, expedida por la JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE COLON.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, interpuesta por la firma Galindo, Arias y López en representación del CONCEJO NACIONAL DE PUBLICIDAD, para que se declare nulo por ilegal, la Resolución No.30 de 19 de noviembre de 1991, expedido por el Director General de Salud. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, dieciséis (16) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **Galindo, Arias y López**, en representación del **CONCEJO NACIONAL DE PUBLICIDAD**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo por ilegal la Resolución No.30 de 19 de noviembre de 1991, expedido por el Director General de Salud.

Luego de admitida la demanda mediante providencia de 28 de enero de 1992, se procedió a solicitar al Director General de Salud, informe de conducta en relación a la demanda incoada y además se le corrió traslado al Procurador de la Administración quien al contestar la misma señaló lo siguiente:

> "Estimo que en el caso bajo estudio, se ha producido la sustracción de materia por lo siguiente: La firma forense Galindo, Arias y López, en representación del Consejo Nacional de Publicidad presentó ante vuestra sala, demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°.30 de 19 de noviembre de 1991, expedida por el Director General de Salud, a través de la cual se reglamenta la publicidad y la propaganda de cigarrillos y cervezas.
>
> Por medio del Decreto Ejecutivo N°299 de 29 de abril de 1992, se reglamenta la publicidad y la propaganda de bebidas alcoholicas, (sic) cigarrillos y tabacos, el cual en su artículo décimo primero dispone:
>
> `Artículo Décimo Primero: Este Decreto deroga la Resolución N°.30 de 19 de noviembre de 1991, expedida por el Ministerio de Salud y todas aquellas disposiciones legales que le sean contrarias.'
>
> No cabe la menor duda, que el acto acusado como ilegal, ha dejado de tener efectos jurídicos; y es así, por el hecho que se ha producido el fenómeno jurídico que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha denominado "sustracción de materia."

Efectivamente, tal y como lo afirma el Procurador, la Resolución N°30 de 19 de noviembre de 1991 expedido por el Director General de Salud, fue derogada por el Decreto Ejecutivo N°299 de 29 de abril de 1992, por lo que ha desaparecido claramente el acto administrativo acusado de ilegal por el Concejo Nacional de Publicidad, que constituía el objeto de este proceso.

Por las anteriores consideraciones los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN que se ha verificado el fenómeno jurídico de SUSTRACCIÓN DE MATERIA, por lo que no amerita seguir con la tramitación de este caso.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, ALEMÁN Y MORA, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES LAS RESOLUCIONES NO.305 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1991, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GABINETE, Y, EL CONTRATO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1991, CELEBRADO ENTRE AIR PANAMA INTERNACIONAL, S. A., EL MINISTRO DE HACIENDA EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD PANAMA AIR INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMA, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **ARIAS, ALEMÁN Y MORA**, actuando como apoderados judiciales de la **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S. A.** ha presentado corrección de la demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad, interpuesta para que se declare nula por ilegal, la Resolución del Consejo de Gabinete No.305 de 6 de noviembre de 1991, por la cual se autoriza la celebración de un contrato con la Sociedad denominada **PANAMA AIR INTERNATIONAL, S. A.;** así como el Contrato sin número fechado 7 de noviembre de 1991, celebrado entre **AIR PANAMA INTERNATIONAL, S. A.**, el Ministro de Hacienda y Tesoro actuando en nombre y representación del ESTADO y la sociedad PANAMA AIR INTERNATIONAL, S. A.

Observa el sustanciador que la corrección de la demanda presentada (visible a fojas 198-212 del expediente), fue incoada dentro del plazo previsto en el artículo 38 de la ley 33 de 1946, que contempla la procedencia de correcciones o aclaraciones en la demanda, siempre y cuando se presenten a más tardar, el último día del término para aducir pruebas.

En efecto, la norma precitada ha dispuesto:
"ARTICULO 38: Hasta el último día del término para aducir pruebas puede aclararse o corregirse la demanda por el actor. En tal caso volverá a ordenarse la actuación del artículo 57; pero del derecho de variar la demanda, sólo puede hacerse uso por una sola vez."

El negocio que nos ocupa se encuentra en la fase de admisibilidad y traslado de la demanda a las partes afectadas, tal como se aprecia a foja 197 del expediente, por lo cual es perfectamente admisible la corrección presentada por los apoderados de la parte actora.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,ADMITE la corrección de la demanda presentada por la firma ARIAS, ALEMÁN Y MORA en representación de la empresa COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.)ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR CASTILLO RÍOS, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN No. 21 DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1991, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado **HÉCTOR CASTILLO RÍOS**, actuando en su propio nombre y representación, ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 21 de 5 de noviembre de 1991 dictada por el Tribunal Electoral de la República de Panamá, mediante la cual se resuelve adjudicar en forma definitiva la licitación pública # 1-91-TE.

En la demanda presentada se solicita la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo impugnado formulando la solicitud en los siguientes términos:

"... solicito al Pleno de la Honorable Sala Tercera que hasta tanto se resuelva en el fondo el presente recurso se Decrete la suspensión de los efectos de la Resolución No. 21 dictada el 5 de noviembre de 1991, por la

Sala de Acuerdo del Tribunal Electoral; Decrete además la suspensión de los contratos suscritos por el Tribunal Electoral con las Sociedades **SONITEL, S. A., DATADINÁMICA, S. A., ELECTRODINÁMICA, S. A.** y en consecuencia se sirva notificar al señor Contralor General de la República de esta suspensión provisional, a fin de que a su vez suspenda las partidas presupuestarias y los pagos que debe hacer a favor de dichas empresas, para evitar un perjuicio grave, actual, patrimonial y de difícil reparación para el Estado Panameño."

Con el propósito de evitar que con el acto impugnado pueda producirse una lesión al principio de separación de los poderes o una flagrante violación del ordenamiento jurídico, la Sala Tercera de la Corte Suprema ha reconocido la procedencia de la medida cautelar denominada suspensión de los efectos del acto impugnado, en los procesos contenciosos administrativos de nulidad. En el proceso contencioso administrativo de nulidad promovido por Aura González para que se declarara la nulidad del acuerdo 23 de 19 de julio de 1990, expedido por el Tribunal Superior de Trabajo, la Sala suspendió los efectos del acto impugnado, mediante auto de 2 de enero de 1991.

En el presente caso no se dan las violaciones mencionadas porque el Tribunal Electoral está facultado para emitir la resolución de adjudicación de la licitación y los contratos que se impugna, de acuerdo con los artículos 50 y 53 del Código Fiscal y los artículos 10, 24 ordinal n) y 26A, ordinal s) del Reglamento Interno del Tribunal Electoral.

Además, el demandante no explicó detalladamente en qué consiste el daño que puede causar el acto impugnado, ni presentó pruebas al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de la Resolución No. 21 de 5 de noviembre de 1991.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL DR. ALEJANDRO ROMÁN SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE HÉCTOR VARGAS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACÁPITE I DEL ARTICULO PRIMERO, EL ARTICULO TERCERO Y CUARTO DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 46 DE 24 DE FEBRERO DE 1992, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Dr. Alejandro Román Sánchez, actuando en representación de Héctor Vargas, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad con el objeto de que se declare nulo, por ilegal, el acápite i) del artículo primero, el artículo tercero y el cuarto del Decreto Ejecutivo No. 46 de 24 de Febrero de 1992, expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Gobierno y Justicia.

En la demanda se formula una pretensión contencioso administrativa de nulidad consistente en una petición dirigida a la Sala Tercera para que esta declare la nulidad de los actos impugnados por transgredir el orden legal establecido en el Decreto de Gabinete No. 275 de 21 de agosto de 1969.

El Procurador de la Administración contestó la demanda mediante la Vista No. 579 de 11 de noviembre de 1992. El mencionado funcionario, que interviene en este proceso en interés de la ley, considera que, los artículos 1 acápite i), tercero y cuarto del Decreto Ejecutivo No. 46 de 24 de febrero de 1992 son ilegales por violar el Decreto de Gabinete No. 275 de 21 de agosto de 1969.

Dado que el acto impugnado reglamenta las licencias profesionales para vehículos a motor dedicados al transporte público de pasajeros se hace necesario plasmar ciertas observaciones en torno a la potestad reglamentaria. Quien suscribe ha señalado con anterioridad que, la Facultad del Presidente de la República, con el Ministro respectivo, de reglamentar las leyes se encuentra prevista en el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Política. Dicha norma señala claramente que el Presidente de la República, con la participación del Ministro respectivo, tiene potestad para "reglamentar las leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.", lo cual se conoce generalmente con el nombre de potestad reglamentaria tradicional, es decir, referente a las leyes. Es en virtud de dicha potestad que el Presidente de la República, con el Ministro del ramo, puede expedir reglamentos de leyes.

A su vez, los reglamentos, por su relación con las leyes pueden ser de tres clases en nuestro sistema jurídico, a saber: los de ejecución de las leyes, los autónomos y los de necesidad o de urgencia.

Los reglamentos de ejecución de las leyes a los que se refiere expresamente el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución, son aquellos dictados por el Presidente de la República y el Ministro respectivo para asegurar o facilitar el cumplimiento o aplicación de las leyes. Esta es la hipótesis tradicional y se trata de una actividad de la Administración Pública subordinada a la ley y con límites propios: no pueden alterar el texto ni el espíritu de la ley que reglamentan. Los reglamentos autónomos son aquellos que no reglamentan ley alguna sino que la Administración en forma directa aplica, interpreta y desarrolla la Constitución. Es en estos casos que el Ejecutivo crea

reglamentos autónomos sobre materias no reguladas por ley, siempre que estemos en presencia de normas reglamentadas que no invadan la zona reservada a la ley. En el caso que nos ocupa, el acto impugnado recae sobre la primera categoría, es decir, se trata de un reglamento de ejecución de la ley.

La potestad reglamentaria de las leyes posee una serie de límites que se derivan tanto del principio constitucional de "reserva de la ley" como de la naturaleza de los reglamentos, particularmente los reglamentos de ejecución de la ley, que se encuentran subordinados a ésta. Existen límites de carácter formal o de índole material. Los límites formales atañen entre otros, el respeto a las normas de superior jerarquía, sobre todo a la Constitución y a las leyes, según se prevé en el artículo 15 del Código Civil. En nuestro país la potestad reglamentaria de las leyes puede extenderse a diversas materias del campo jurídico en las cuales el Órgano Ejecutivo tenga asignado algún papel.

En el caso que nos ocupa, se alega la ilegalidad del Decreto Ejecutivo No. 46 de 24 de febrero de 1992 el cual regula las licencias profesionales para conducir vehículos a motor dedicados al servicio público de transporte de pasajeros en todo el territorio nacional. A este respecto, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia es la entidad responsable de la expedición de las licencias de conducir, tal como lo establece el Decreto de Gabinete No. 275 de 21 de Agosto de 1969 por medio del cual se regula la expedición de licencias para conducir vehículos a motor en todo el territorio nacional. Este decreto de gabinete, por tener valor de ley, es de mayor jerarquía que el Decreto Ejecutivo No. 46 de 1992 impugnado. Por lo tanto, en base a las observaciones anteriormente expuestas en torno a la potestad reglamentaria, hay límites formales que respetar como lo son la competencia para dictar el reglamento y el respeto por las normas de mayor jerarquía. En torno a la competencia, los límites formales de la potestad reglamentaria no han sido transgredidos por cuanto la Ley 2 del 3 de enero de 1933, vigente al expedirse el reglamento, facultaba al Ejecutivo para reglamentar el Tránsito de vehículos y peatones en toda la República. Prueba de ello lo es el reglamento de tránsito actualmente vigente, el cual fue expedido por el Ejecutivo mediante el Decreto No. 159 de 1941.

En cuanto al límite formal referente al respeto por las normas de mayor jerarquía procedemos a confrontar el Decreto Ejecutivo No. 46 de 24 de febrero de 1992 con la ley que pretende reglamentar y los argumentos de la parte actora.

El artículo 1, acápite i) del Decreto Ejecutivo No. 46 de 24 de febrero de 1992 dispone lo siguiente:

> "Artículo Primero: Para conducir un vehículo destinado al Transporte Público pagado de Pasajeros, el interesado deberá portar licencia profesional expedida por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia y para tal fin deberá cumplir con los siguientes requisitos:
>
> ...
> I. Certificado de Aprobación del curso de Capacitación expedido por una Escuela o Instituto de Educación Vial en el cual conste que el solicitante es apto para conducir vehículos a motor.
>
> Este requisito se aplicará una vez la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre autorice a la Escuela o Instituto de Educación Vial a expedir el correspondiente certificado o aprobación del curso."

La parte actora señala que la norma arriba transcrita viola directamente el artículo 5 del Decreto de Gabinete No. 275 de 1969. La infracción se da cuando el acápite i) del artículo 1 del Decreto No. 46 antes citado exige al transportista para la obtención de su "licencia profesional" (la cual será concedida por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre) la aportación por parte del transportista o 'palanca' de un certificado de aprobación del curso de capacitación expedido por una Escuela o Instituto de Educación Vial en que conste que el solicitante es apto para conducir vehículos a motor de manera tal que se impone, incluso a los transportistas que van a renovar su licencia, los exámenes prácticos y teóricos que el Decreto No. 275 de 1969 establece solo para los que solicitan por primera vez dicha licencia. El artículo 5 de la norma antes mencionada exige como requisito para quien solicita por vez primera la licencia para conducir vehículos a motor en todo el territorio nacional un examen práctico sobre manejo y un examen teórico sobre el reglamento y las leyes de tránsito, además de los exámenes físicos establecidos en el artículo 3 tanto para quienes solicitan la expedición por vez primera de su licencia de conducir como para quienes solicitan su renovación. La parte actora interpreta estas normas en el sentido de que los transportistas que ya han obtenido su licencia de conducir y proceden a renovarla no están obligados a someterse nuevamente al examen práctico de manejo ni al examen teórico sobre normas de tránsito, sino sólo a las pruebas de capacidad física (vista, oído y aptitud física) toda vez que las mismas pueden haber mermado con el transcurso del tiempo. La parte actora considera incomprensible la exigencia establecida en la norma impugnada para aquellos transportistas con años de experiencia en el manejo, distinguiendo donde la ley no distingue, so pretexto de regular esta última lo cual perjudica a los transportistas al incrementar considerablemente el costo de la adquisición y renovación de licencias por el costo de los cursos de las mencionadas Escuelas o Institutos de Educación Vial.

A su vez, el demandante alega que el segundo párrafo del acápite i) del artículo primero del Decreto Ejecutivo No. 46 de 1992 viola directamente el artículo 9 del Decreto de Gabinete No. 275 de 1969 ya que el segundo párrafo antes mencionado determina que el examen de aptitud física indispensable para expedir licencias de conducir será ofrecido por aquellas empresas o entes particulares a los cuales la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre extienda un permiso renovable cada 6 meses, cuando el artículo que se alega violado no faculta a la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para delegar esta función en otra entidad o empresa. Por otro lado, no se hace mención de los exámenes físicos (vista, oídos, etc.) los cuales, se presume, serán confirmados por la condición de apto para conducir contenido en el Certificado de aprobación extendido por la Escuela o Instituto de Educación Vial. La Sala pasa a examinar, pues, estas dos infracciones.

Como hemos señalado anteriormente, el Decreto de Gabinete No. 275 de 1969 es una norma con valor de Ley y, por ende, de mayor jerarquía que la norma impugnada. En el mismo se regula la expedición de licencias para conducir vehículos a motor en todo el territorio nacional. Si bien no hace mención de la clasificación de licencias (las cuales se encuentran reguladas específicamente en el reglamento de tránsito-Decreto 159 de 1941) si hace mención de los requisitos generales para la obtención de la licencia, es decir, de los exámenes teóricos (reglamento y leyes de tránsito) y prácticos (de manejar automóvil) y los exámenes físicos (vista, oído y aptitudes físicos) e introduce un requisito adicional, y aquí si distingue, para quienes soliciten licencia para operar vehículos a motor dedicados al transporte de pasajeros, como lo es la prohibición de otorgar dichas licencias a quienes hayan cometido delito o faltas contra el orden de la familia, las buenas costumbres y la propiedad.

La Sala opina que no es cierto, como alega la parte demandante que el acápite i) del artículo primero del Decreto No. 46 de 1992 viola el artículo 5 del Decreto de Gabinete No. 275 de 1969 por cuanto este último regula los requisitos exigidos a todo aquel que solicite licencia para conducir vehículos a motor, es decir, regula de manera general la expedición de licencias. Por otro lado, la norma impugnada regula específicamente los requisitos exigidos a quien solicite licencia profesional para el manejo de vehículos a motor dedicados al servicio público de transporte de pasajeros en todo el territorio nacional. Se trata pues, de dos situaciones distintas por lo cual una norma no puede violar la otra. La norma impugnada es de directa aplicación a los transportistas y la norma que se alega violada es aplicable a todos en general. Si bien es cierto que el Decreto No. 46 de 1992 es un reglamento de ejecución, es decir, que desarrolla otra norma ya existente, en este caso el Decreto de Gabinete No. 275 de 1969, también es cierto que las disposiciones demandadas en el presente negocio no imponen una obligación ex novo, pues los exámenes a los cuales se refiere el acápite i) del decreto impugnado ya se encuentran previstos de manera general en el Decreto de Gabinete 275 de 1969 antes mencionado. Tampoco resulta violado, a juicio de la Sala, el artículo 9 del mencionado Decreto de Gabinete 275 de 1969 por cuando este último también es de carácter general, pues se refiere a los exámenes físicos que se le exige a todo aquel que solicite licencia para vehículos a motor.

También es importante destacar que, a juicio de la Sala, las normas acusadas de ilegales no transgreden ni el texto ni el espíritu del Decreto de Gabinete 275 de 1969 por cuanto considera esta Sala que el Órgano Ejecutivo puede imponer obligaciones a las partes en este caso, los transportistas, por razones de orden público e interés social. En este caso, consideramos muy importante para la seguridad de los asociados, la preparación adecuada de aquellos a cuyo cargo queda el transporte público de pasajeros. A este respecto, los cursos de capacitación o educación vial constituyen un mecanismo eficiente para lograr la educación y concientización de los transportistas en cuanto a la labor que éstos desempeñan, lo cual a su vez garantizará un mejor servicio de transporte público a los usuarios. Se desestima, pues, estos dos cargos.

Los artículos 3 y 4 del Decreto No. 46 de 1992 establecen lo siguiente:

> "Artículo 3ro: Para reconocer un certificado de capacitación expedido por una escuela o Instituto de Educación Vial, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre exigirá a dicho ente, contar con un equipo que reúne las condiciones técnicas adecuadas."
>
> Artículo 4to: La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, una vez aprobada la solicitud de la Escuela o Instituto de Educación Vial, expedirá a dicho ente un permiso renovable cada seis (6) meses."

La parte actora señala que las normas antes transcritas violan directamente el artículo 9 del Decreto de Gabinete No. 275 de 1969 ya que mediante la aprobación de la solicitud de la Escuela o Instituto de Educación Vial y la expedición del correspondiente permiso se expresa el reconocimiento por parte de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de que la mencionada Escuela o Instituto puede expedir un Certificado de Capacitación con lo cual se delega a dichas escuelas la facultad de determinar mediante exámenes las aptitudes físicas que determinan si el solicitante de una licencia es apto o no para conducir, cosa que le corresponde determinar a la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, la cual, en este caso, tendrá que acatar la decisión que al respecto determinen las mencionadas escuelas en base a los exámenes que por ley debiera ofrecer la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

La Sala observa que estas normas van vinculadas a la vigencia del acápite i) del artículo primero del Decreto Ejecutivo No. 46 de 1992 pues se refieren al equipo, condiciones técnicas y la solicitud del permiso que requieren las escuelas o institutos de manejo autorizadas para conceder el certificado de capacitación al que hace referencia el acápite i) antes mencionado. Puesto que este último no ha sido considerado en párrafos anteriores como ilegal y dado que los artículos tercero y cuarto carecen de sustento propio, la Sala considera que dichos artículos son igualmente legales. Se desestiman, pues, estos cargos.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que no es ilegal el acápite i) del artículo primero, y los artículos tercero y cuarto del Decreto Ejecutivo No. 46 de 24 de febrero de 1992 expedidos por el señor Presidente de la República y el Ministro de Gobierno y Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, interpuesta por la firma Trujillo, Vidal y Miranda, en representación de CARLOS RODRIGO ORTIZ CEDEÑO Y FRANK MOSTINER SURGEON

BROWN para que se declare nulo por ilegal, el artículo primero en su numeral 1.2.5.61 del Acuerdo N°8 de 26 de febrero de 1987, emitido por el CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DAVID. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA** actuando en representación de los señores **CARLOS RODRIGO ORTIZ CEDEÑO Y FRANK MOSTINER SURGEON BROWN** ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nulo por ilegal, el punto 1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo Municipal N°8 de 26 de febrero de 1987, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de David, así como la liquidación de la Tesorería Municipal de David, en relación a la Clínica Dental del señor **CARLOS ORTIZ**, fechada 2 de mayo de 1991.

Considera el recurrente que el Acuerdo Municipal, en el punto impugnado, así como la liquidación del gravamen municipal impuesto directamente a la Clínica Dental del señor **ORTIZ** resulta violatorio de los artículos 74 y 75 numeral 30, de ambos de la Ley 106 de 1973.

De la demanda instaurada se corrió traslado al señor Presidente del Consejo Municipal de David, quien no contestó ni rindió el respectivo informe de conducta.

De igual forma se dio traslado al señor Procurador de la Administración, quien solicitó a la Sala Tercera que se accediera parcialmente a las pretensiones del recurrente. (Cfr. fojas 46-54 del expediente)

Una vez surtidos todos los trámites establecidos para este tipo de procesos, tal como se desprende del informe secretarial visible a foja 59 del expediente, procede la Sala Tercera a desatar la controversia instaurada.

Observa el Tribunal que la pretensión de fondo de la parte demandante estriba en que esta Superioridad declare la nulidad del punto 1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo Municipal referido, que ha gravado con un impuesto municipal que oscila entre los B/.15.00 y B/.25.00 mensuales a los laboratorios y clínicas privadas.

En efecto, el citado numeral ha establecido entre los impuestos indirectos del Municipio de David, un gravamen para los Laboratorios y Clínicas Privadas, tal como consta a foja 9 del expediente, a saber:

> "ARTICULO PRIMERO: Se reforma el Artículo Primero del Acuerdo 43 el cual quedará así:
>
> IMPUESTO INDIRECTOS
> ...
> 1.2.5.61 LABORATORIOS Y CLÍNICAS PRIVADAS
> Pagarán por mes o fracción de mes de: B/.15.00 a B/.25.00".

Estima el actor que tal gravamen, en la forma en que ha sido contemplado en el Acuerdo Municipal, es impreciso y no delimita con especificidad el ámbito impositivo del mismo.

La Ley 106 de 1973 en su numeral 30 contempla, según el recurrente, la posibilidad de gravar la actividad de las clínicas comerciales e industriales de propiedad privada o de servicio público, más no a aquellas en que se brinda un servicio profesional en calidad del ejercicio de una profesión liberal.

El demandante al fundamentar las razones de la ilegalidad del acto objetivo que impetra ha señalado:

> "El numeral 30 del mencionado artículo hace referencia a laboratorios y clínicas comerciales e industriales de propiedad privada o de servicio público.....Las clínicas privadas de un Odontólogo o de un médico en que el servicio profesional lo brinda personalmente, no está incluido dentro del numeral 30 del citado artículo 75.
>
> El Municipio de David al gravar las clínicas privadas como lo hace en el numeral 1.1.2.5.61, viola este artículo por indebida aplicación, ya que lo aplica a las clínicas privadas atendidas directamente por el médico, las cuales no están incluidas en el contenido del numeral 30 del artículo 75 de la Ley 106 de 1973.
> ...
> Finalmente, queremos llamar la atención de los Honorables Magistrados, que es de suma importancia que se declare la nulidad por ilegal del numeral 1.1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo N°8 de 26 de febrero de 1987, que a su vez reforma el Acuerdo N°43 del 29 de diciembre de 1986, porque de no hacerlo, queda el Consejo Municipal del Distrito de David, en libertad de gravar el resto de las profesiones liberales, tales como la abogacía, Ingeniería, Contabilidad, Arquitectura y otros, cuando ese no es el espíritu de la ley".

Por su parte, el señor Procurador de la Administración, al emitir concepto sobre la nulidad solicitada, ha señalado:

> "Compartimos la opinión del demandante, que al gravarse con impuesto municipal mensual los Laboratorios y Clínicas Privadas, mediante Acuerdo N°8 de 26 de febrero de 1987, el Consejo Municipal no se ajustó a lo estatuido en los artículos 74 y 75 (numeral 30) de la Ley 106 de 1973, puesto que no todos los Laboratorios y Clínicas Privadas son establecimientos comerciales o industriales, ya que no tiene esa connotación las instalaciones en que se prestan servicios profesionales, los cuales no pueden ser objeto de gravámenes o impuestos de ninguna

naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 de la Constitución Nacional".

La Sala Tercera en vista de estos señalamientos, y una vez analizadas las circunstancias del negocio, procede a externar lo siguiente:

La Ley 106 de 1973 en sus artículos 74 y 75 señala taxativamente:

"Artículo 74. Son gravables por los Municipios con impuestos y contribuciones todas las actividades industriales, comerciales o lucrativas de cualquier clase que se realicen en el Distrito".

"Artículo 75. Son gravables por los Municipios las actividades siguientes:
...
30°. Laboratorios y clínicas comerciales e industriales de propiedad privada, o de servicio público;" (subrayado es nuestro)

Se observa al confrontar las normas legales supracitadas con el punto 1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo Municipal del Distrito de David N°8 de 1987, que éste no precisa con claridad cuál es el supuesto impositivo del gravamen creado, por lo que no permite esclarecer si el Municipio de David pretende gravar a todas las clínicas y laboratorios privadas sin distinción, o sólo a aquellas que se dedican a explotar actividades lucrativas en adición al ejercicio profesional.

Existen clínicas y laboratorios privados que no pueden considerarse como de naturaleza comercial o industrial, y que debido a la ambigüedad del gravamen creado, pueden quedar sujetas al impuesto municipal.

La distinción jurídica entre las situaciones señaladas resulta de trascendencia significativa, en virtud de que la actividad del profesional no está sujeta a ningún gravamen impuesto o contribución, tal como lo ha establecido expresamente la Constitución Nacional en su artículo 40, y lo ha reafirmado la Corte Suprema a través de esta Sala en diversas ocasiones; v.g.: resolución de 6 de noviembre de 1992, en relación a la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Clínica Arango Orillac, S. A. contra la Dirección General de Ingresos.

La Sala Tercera considera por tanto, que el gravamen contemplado en el Acuerdo Municipal N°8 de 1987 para los "Laboratorios y Clínicas Privadas" no se ajusta plenamente al presupuesto legal contemplado en el numeral 30 del artículo 75 de la Ley 106 de 1973, que hace referencia a Laboratorios y clínicas privadas, comerciales e industriales, y que tal imprecisión constituye una lesión al orden legal, el exceder el Acuerdo Municipal en el punto impugnado, la potestad impositiva que le concede la Ley 106 de 1973 a los Municipios para gravar específicamente las clínicas y laboratorios comerciales e industriales (artículo 75 numeral 30), y en términos generales, a las actividades industriales, comerciales o lucrativas que se realicen en un Distrito (artículo 74 Ley 106 de 1973).

Cabe señalar además que la aplicación de este gravamen a cualquier clínica privada no sólo constituye una violación al orden legal, sino también ocasiona perjuicios económicos a estas clínicas y laboratorios que no explotan el comercio, sino que se dedican al ejercicio profesional, actividad ésta que, tal como hemos recalcado, por disposición constitucional no puede ser gravada.

En atención a lo expuesto procede el cargo de ilegalidad presentado contra el punto 1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo Municipal del Distrito de David N°8 de 26 de febrero de 1987.

Observa la Sala que el actor solicita también la declaratoria de ilegalidad del aforo hecho por el Tesorero Municipal del Distrito de David, al exigir el pago a la Clínica Dental del señor **CARLOS ORTIZ** (visible a foja 19 del expediente) de B/.15.00 mensuales en concepto del gravamen establecido en el punto 1.2.5.61 del Distrito de David, y de B/.5.00 en concepto de rótulo anual del establecimiento.

Sobre este particular es preciso recordarle al recurrente que no es posible mediante la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad dirimir la afectación directa de los derechos subjetivos del demandante, toda vez que ello sólo es posible mediante la acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, tal como este Tribunal ha reiterado en numerosas ocasiones, en aplicación a las Leyes 135 de 1943 y 33 de 1946 reguladoras de los procesos contencioso administrativos.

En este orden de ideas debe negar la Sala la procedencia de la declaratoria de ilegalidad del cobro del gravamen descrito, puesto que el mismo no constituye un acto general, impersonal u objetivo, sino una situación jurídica individual, producto de la aplicación del Acuerdo Municipal (acto objetivo).

La vía idónea por tanto para solicitar la reparación del derecho subjetivo supuestamente vulnerado es la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción.

Es importante aclarar que el actor no solicitó la declaratoria de ilegalidad de la parte pertinente del Acuerdo Municipal de David N°8 de 1987, (punto N°1.1.2.5.30 del artículo primero), que establece el gravamen a rótulos y anuncios que identifican los negocios, sino que ataca directamente la liquidación del Tesorero Municipal en relación a la Clínica Dental del demandante. La Sala Tercera no puede por tanto, pronunciarse con respecto a tal situación de vulneración de derechos subjetivos en esta demanda Contencioso Administrativa de Nulidad.

Este Tribunal, una vez analizadas íntegramente las circunstancias de derecho que rodean al negocio, considera que el punto 1.2.5.61 del Acuerdo Municipal N°8 de 26 de febrero de 1987 emitido por el Consejo Municipal del Distrito de David, de la manera en que aparece expresado en este Acuerdo, es ilegal, pues su imprescisión y ambigüedad permite la aplicación del mismo a clínicas y laboratorios privados que no son comerciales o industriales, y que sólo desarrollan sus actividades dentro del marco del ejercicio profesional, lo que les exime del pago de gravámenes o impuestos, tal como lo ha previsto la Constitución Nacional en su artículo 40.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL el punto número 1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo Municipal N°8 de 26 de febrero de 1987 emitido por el Consejo Municipal del Distrito de David y NIEGA el pronunciamiento solicitado por el recurrente en cuanto a la declaratoria de ilegalidad del aforo del Tesorero Municipal del Distrito de David, girado a la Clínica Particular del señor CARLOS ORTIZ por las razones expuestas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD interpuesta por el Dr. Rolando Villalaz, en representación de NELSON NOVARRO CERRUD, para que se declaren nulas por ilegales, las elecciones de Decano y Vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, celebradas el 14 de agosto de 1991. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **ROLANDO VILLALAZ GUERRA**, actuando en nombre de **NELSON NOVARRO CERRUD**, interpuso demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declaren nulas por ilegales las elecciones de Decano y Vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, celebradas el 14 de agosto de 1991. La parte actora sustenta su pretensión en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Que el 24 de mayo de 1991, el Órgano Legislativo Nacional aprobó la Ley 6 por cuyo conducto se modificaron varios artículos de la Ley 11 de 8 de Junio de 1981, de la Universidad de Panamá.
> SEGUNDO: Que las modificaciones a que se contrae el hecho anterior afectaron, fundamentalmente, el régimen electoral aplicable a la elección directa y secreta de los Decanos, Vicedecano, Directores y Subdirectores de Centros Regionales con la obligada participación de todos los estamentos que integran las Facultades y Centros Regionales.
> TERCERO: Que sin respetar el marco de referencia electoral preceptuado por la Ley 6 de 24 de mayo de 1991, la Facultad de Odontología, su representante, el Decano Eduardo Sierra y el Jurado de Elecciones de la misma, han violado, con la elección celebrada el 14 de agosto del corriente año en la Facultad de Odontología, dicha Ley 6, al igual que la Ley 11 de 8 de junio de 1981 y el Estatuto Universitario, al permitir, entre otras cosas, votar a los que laboran o están matriculados, según la categoría, en la Facultad de Odontología al 5 de agosto de 1991 y no el 21 de marzo como lo ordena la Ley y lo ratificó la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en fallo de 27 de junio de 1991.
> CUARTO: Que al participar en su propia reelección, el Decano Eduardo Sierra violenta la letra y el espíritu de la Ley 6 de 24 de mayo de 1991 que es contraria a la reelección de los actuales Decanos y Directores de Centros Regionales".

Adicionalmente señala que el Reglamento para elecciones de Decano y Vicedecano de la Facultad de Odontología, ha violado los artículos 2, 3, 4 y 6 (transitorio) de la Ley 6 de 24 de mayo de 1991 y el artículo 33 de la Ley 11 de 8 de junio de 1981.

Posteriormente, el Magistrado Sustanciador le solicitó al Presidente del Jurado de Elecciones de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, rindiera informe de conducta en relación a las elecciones de Decano y Vicedecano de la Facultad precitada, y mediante Nota de 14 de enero de 1992 el mismo señaló lo siguiente:

> "Dicha Ley pretendió normar todas esas elecciones en escasos seis (6) artículos, lo cual, materialmente es imposible y así lo corroboran los hechos sucedidos.
>
> En cuanto a la elección del Decano y Vice-Decano de la Facultad de Odontología el Jurado de Elecciones dictó el Reglamento respectivo y convocó a elecciones para el 14 de agosto de 1991.
>
> En cuanto a la categoría de estudiantes, la Ley antes mencionada establece que deben ser regulares, sin especificar quiénes son. Es cierto que el Estatuto define la categoría de estudiante regular, sin embargo, esa definición corresponde a un carácter netamente académico y no a razones electorales", ...
>
> Como quiera que, para determinar la condición de estudiante regular la Ley 6 de 1991 no remite al Estatuto Universitario consideraciones que el Reglamento no violó disposición legal alguna.
>
> La parte demandante alega que el artículo 4 del Reglamento de Elecciones viola los Artículos 3 y 6 de la Ley 6 de 1991.

El Artículo 4 del Reglamento en cuestión estableció cada una de las categorías de los votantes en las elecciones para Decano y Vice-Decano en la Facultad de Odontología, en ese sentido se estableció que serían votantes al 5 de agosto de 1991 quienes hubieran adquirido la condición de profesores regulares, profesores especiales, estudiante regulares y empleado administrativo con carácter de permanente" ...

> "La fecha de convocatoria que estableció el Consejo General Universitario para la elección del Rector fue el 21 de marzo de 1991.

> Al expedirle el Reglamento para las Elecciones de Decano y Vice-Decano de la Facultad de Odontología se consideró que lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 6 de la Ley 6 de 1991, no puede ser aplicado textualmente en lo que se refiere al '**mismo procedimiento para la elección del Rector**'. Ello debido a que la elección del Rector es completamente distinta a la elección de Decanos, Vice-Decanos, Directores y Sub-directores de Centros Regionales Universitarios. Existen diferencias profundas que impiden aplicar un mismo procedimiento a ambas elecciones, como ejemplo, podemos citar el hecho de que en la elección del Rector había un gran Jurado y las votaciones se efectuaron en todas las unidades académicas, institutos, dependencias administrativas etc., a nivel nacional, mientras que la elección de los Decanos se circunscribía a la Facultad ... .
>
> En cuanto a la reelección del Decano, debemos señalar que el demandante pierde de vista el hecho de que la Ley 6 de 1991, creó una nueva forma de elección para el Rector y Decanos, y como quiera que dicha Ley no establece que tiene efectos retroactivos, la elección debe entenderse prohibida una vez vencido el período de los Decanos que resultaron elegidos de acuerdo a esa Ley, puesto que se trata de una forma distinta de elección de Decanos con un inicio nuevo de su cargo".

De igual forma se le corrió traslado al Procurador de la Administración, quien mediante Vista N°474 de 17 de septiembre de 1992, aceptó en parte la pretensión incoada.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados de la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia.

Las primeras normas que se estiman conculcadas son los artículos 3 y 6 (transitorio) de la Ley 6 de 24 de mayo de 1991, y a los cuales nos referiremos en conjunto, dado que de esta manera el actor explicó el concepto de la violación; el cual transcribimos:

> "Esta violación, que es directa por omisión, consiste en que se pretende desconocer que es necesario para cumplir **con el mismo procedimiento** aplicado a la elección de Rector que se respete el hecho de que solo participen como votantes los que a la fecha de la convocatoria formulada por el Consejo General Universitario sean profesores regulares y especiales, asistentes de profesores, estudiantes regulares de la Universidad y empleados administrativos que sean servidores públicos de la Universidad nombrados con carácter permanente...
>
> La violación consiste en el hecho de que el propio Decano de la Facultad de Odontología primero, y luego el jurado de elecciones de la misma Facultad, electo en violación de la Ley 6, hubieren alterado la fecha en que fue expedida por el Consejo General Universitario la convocatoria de elecciones, es decir el 21 de marzo de 1991", ...

Consideramos que le asiste la razón al demandante en virtud de que es claro que el artículo 4 del reglamento para elecciones de Decano y Vicedecano de la Facultad de Odontología, viola flagrantemente el artículo 3 de la Ley 6 de 24 de mayo de 1991. Esto es así ya que para tener la calidad de votante, se debía reunir algunos requisitos cuyo tiempo límite era la fecha de convocatoria, que se determinó para el 21 de marzo de 1991, tal y como el propio Presidente del Jurado de Elecciones de la Facultad de Odontología lo reconoce en el informe de conducta (ver foja 54). En este mismo sentido el Auto de 27 de junio de 1991, hace referencia a la situación anterior, por lo que mal podría considerarse otra fecha distinta, como ha ocurrido en el presente caso, en donde se estableció como fecha límite para adquirir la categoría de personas con derecho a votar, tales como profesores, estudiantes y administrativos, el cierre de postulación, o sea, el 5 de agosto de 1991.

El artículo 6 (transitorio) es manifiestamente claro al contemplar que en la elección del Decano y Vicedecano, se seguirá el mismo procedimiento establecido para elegir al Rector de la Universidad de Panamá, situación ésta que no se aplicó en los comicios electorales de la Facultad de Odontología. Por tanto aceptamos el cargo impetrado.

De igual manera se señala que el artículo 4 del Reglamento mencionado, transgrede los artículos 269 y 270 del Estatuto de la Universidad de esta manera:

> "Esta violación que es directa por omisión, consiste en reducir a 'una o más materias' las requeridas para que el estudiante sea considerado como regular y, en consecuencia, pudiese votar en las elecciones para Decano y Vicedecano de la Facultad de Odontología cuando el Estatuto de la Universidad requiere que sean tantas materias que fuesen matriculadas como fuesen necesarias siempre que estas 'confieran quince o más créditos semestrales'. La norma atacada resulta así nula por ilegal".

Frente a lo argüido, es cierto que el artículo 4 del Reglamento de elecciones del Decano y Vicedecano de la Facultad de Odontología, es contrario a lo preceptuado en los artículos 269 y 270 del Estatuto Universitario, en virtud de que califica a los estudiantes regulares como aquellos que "se han matriculado como estudiantes durante el primer semestre del año lectivo, en una o más asignaturas al 5 de agosto de 1991". En este orden de ideas, al establecerse la clasificación, en los Estatutos, de los estudiantes de la Universidad de Panamá en regulares y que se considerarán como tales cuando estén llevando materias que le confieran no menos de quince créditos semestrales, no es acorde con lo que preceptúa el reglamento de dicha Facultad, que establece otra condición para que se consideren como tales. Los estudiantes regulares, según el artículo 270 de la Ley 11 de 1981, son "las que cursan dentro del plan de estudio un número de asignaturas que no confieran menos de quince créditos semestrales", y no que estén matriculados como estudiantes durante el primer semestre del año lectivo, en una o más asignaturas, observándose la clara violación, por lo que prospera la acusación incoada.

Por último se señala que el Decano de la Facultad de Odontología ha vulnerado los artículos 33 de la Ley 11 de 1981, y el artículo 2 de la Ley 6 de 1991:

> "El Decano Eduardo Sierra, desde su cargo, utilizó todas las ventajas inherentes a este para participar como candidato en estos comicios que consideramos nulos, además de contrariar el espíritu y letra de la Ley 6 de 24 de mayo de 1991, la cual se opone al procedimiento de la reelección...
>
> El proceso de democratización que se abre para la Universidad de Panamá con la promulgación de la Ley 6 de 24 de mayo de 1991, está inspirado desde sus inicios en el principio de la no reelección. Es ese principio el que conduce al legislador a establecer claramente en el artículo 2 de la citada Ley que: '**el Rector de la Universidad de Panamá será electo por un período de tres (3) años y no podrá ser reelegido para el período inmediatamente posterior quien haya ejercido el cargo por más de tres años**...' (el subrayado es nuestro). Más adelante el mismo artículo nos indica que '**Los Decanos y ViceDecanos, los Directores y Subdirectores de Centros Regionales serán elegidos por un período de tres (3) años y no podrán ser reelectos para el período inmediatamente posterior**'".

En lo que respecta a la reelección del doctor **EDUARDO SIERRA**, ya esta Sala manifestó en sentencia de 26 de noviembre de 1992, que los Decanos, Vicedecanos, Directores y Subdirectores, podían reelegirse, dado que la Ley 6 de 1991, no establece en modo alguno la prohibición de la reelección, con carácter retroactivo.

Dicha prohibición sólo le era aplicable al Rector, tal y como lo ha interpretado este Tribunal.

Veamos que señaló la referida sentencia en su parte pertinente:

> "La Sala no comparte el criterio de la parte actora ya que la Ley 6 de 1991 no establece en modo alguno la prohibición de reelección de los Decanos, Vicedecanos, Directores y Subdirectores. El artículo 2 de la Ley 6 de 1991 es taxativo sólo en cuanto a la elección del Rector de la Universidad de Panamá, el cual, establece dicha norma, 'no podrá ser reelegido para el período inmediatamente posterior a quien haya ejercido el cargo por más de tres años'. Sin embargo, la Sala interpreta que esta prohibición de reelección sólo era aplicable al Rector. En cuanto a los Decanos y Vicedecanos no existía tal prohibición para la elección de 1991. Los Decanos y Vicedecanos elegidos en esa elección no podrán ser reelegidos para el período que se inicia en 1994, según lo prevé el párrafo final del artículo 2 de la Ley 6 de 1991. No prospera, pues, el cargo alegado".

Coincidimos con el sentir del demandante, de que las elecciones llevadas a cabo en la Facultad de Odontología, para escoger al Decano y Vicedecano, son nulas, dado que no se cumplió con lo dispuesto en los artículos 269 y 270 de la Ley 11 de 1981 y en los artículos 3 y 6 (transitorio) de la Ley 6 de 1991.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE SON NULAS por ilegales las elecciones de Decano y Vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, celebradas el 14 de agosto de 1991.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICDO. HERNÁN ARBUES BONILLA G., EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD V-IMPORT, INC., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA NO. 032-DMHYT DE 11 DE ENERO DE 1991, DICTADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La empresa V-IMPORT INC. ha promovido proceso contencioso administrativo de nulidad contra el Ministerio de Hacienda y Tesoro. En la demanda se pide a la Sala que declare que es nulo el acto administrativo contenido en la nota No.032-DMHYT de 11 de enero de 1991 expedida por el Ministro de Hacienda y Tesoro.

La nota impugnada señala, entre otras cosas, lo siguiente:

> "... las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que posean Licencia Comercial Tipo "A" ó Tipo "B" o Licencia Industrial, quedan autorizados para tramitar y obtener el Certificado de Postor a que se refiere el Artículo 10a del Código Fiscal, independientemente de que la Licitación Pública haya sido convocada para suministro de bienes y servicios, construcciones ó adquisiciones de bienes.
>
> En los casos en que se exija Licencia Comercial o Industrial para adquirir el Certificado de Postor, la sola presentación de tales licencias y de los otros requisitos que exige el artículo 40-A facultará al Departamento a su cargo para expedir el Certificado de Postor.

> Igualmente, la eliminación de cualquier tipo de restricciones o limitaciones innecesarias que dificulten la participación en las licitaciones, concursos o solicitudes de precios de las personas naturales o jurídicas que posean Licencia Comercial Tipo "A" ó Licencia Industrial, ofrece al Estado importantes ventajas para contratar.
>
> En consecuencia, a partir de la fecha a toda persona natural o jurídica a quien se le haya expedido legalmente Licencia Comercial Tipo "A" ó Licencia Comercial Tipo "B" o Licencia Industrial y que cumpla, además, con los otros requisitos a que se contrae el Art. 40-A del Código Fiscal debe otorgársele el Certificado de Postor que lo habilite para participar en los actos de contratación pública.
>
> FUNDAMENTO LEGAL: Art. 757 del Código Administrativo, Art. 40-A del Código Fiscal y Art. 3 del Código de Comercio."

Sostiene el apoderado judicial de la parte demandante que el citado acto administrativo ha infringido el artículo 40-A del Código Fiscal en el concepto de violación directa que exige a las personas interesadas en participar como postores en licitaciones públicas que comprueben que cuentan con la correspondiente Licencia Comercial o Industrial que las habilita para actuar en la actividad respectiva (literal b de la citada norma).

Estima la parte demandante que sólo pueden participar en licitaciones públicas cuyo objeto sea vender bienes al Estado, aquellos comerciantes que tengan licencia comercial Tipo B que faculta al titular para ejercer el comercio al por menor.

El Procurador de la Administración contestó la demanda mediante la Vista No. 148 de 19 de marzo de 1992, en la cual coincide con la parte demandante pues estima que las personas que contraten con el Estado sólo pueden hacerlo en actividades que puedan desarrollar de conformidad con la Licencia Comercial o Industrial que poseen.

El Ministro de Hacienda y Tesoro rindió un informe de conducta mediante la nota No. 205-DMHYT de 15 de abril de 1991. En ese documento el Dr. Mario Galindo H. sostiene que el acto impugnado no ha modificado norma alguna del Código de Comercio, del Código Fiscal o del Decreto de Gabinete No. 90 de 1971 que reglamenta las actividades comerciales e industriales en la República de Panamá, sino que consagra la eliminación de cualquier tipo de restricción o limitación innecesaria que dificulte la participación de postores en licitaciones públicas que se verían imposibilitados de participar en ellas por el sólo hecho de ser titular de una determinada licencia comercial o industrial. En ese sentido observa el Ministro que no se ha producido violación alguna al Código de Comercio ya que el numeral 3 del artículo 3 del mencionado Código señala que no son actos de comercio las compras que hacen los funcionarios o empleados públicos para objetos de servicio público. Agrega el citado funcionario que el artículo 288 de la Constitución no establece limitación, restricción o una categoría especial para participar como postor en una licitación pública ni lo hace el Decreto de Gabinete No. 90 de 1971.

Estima la Sala que no le asiste razón a la parte demandante ya que el acto administrativo impugnado no infringe el artículo 40-A el Código Fiscal.

La Sala ha arribado a esa conclusión, en primer lugar, porque lo que dispone dicha norma es que para obtener el certificado de postor para participar en licitaciones públicas se requiere, entre otros requisitos, tener una licencia comercial o industrial que lo habilita para actuar en la actividad respectiva. Pero esto debe entenderse referido a aquellas actividades que se contraten con el Estado, reguladas por el Derecho Privado, y que exijan por esa razón, que el contratista pueda ejercer el comercio o explotar una industria.

Es evidente que aquellas compras que haga el Estado para objeto de servicio público no están amparadas por el Derecho Privado sino por el Derecho Público, de manera que los contratos que celebra el Estado para fines de servicio público son contratos administrativos y no contratos de Derecho Privado celebrados por la Administración pública.

Si el contrato celebrado por la Administración pública es administrativo la compra respectiva no está regulada por el Código de Comercio, ni requiere tampoco que el participante en la licitación pública posea necesariamente una licencia comercial Tipo B.

También habría que puntualizar que es claro, en segundo término, que existen algunas actividades que no requieren de licencia comercial o industrial, y sería absurdo pretender que deben tenerla para participar en una licitación pública; tales como las actividades de agricultura, ganadería o elaboración y venta de productos de artesanía nacional a las que se refiere el artículo 1o. del Decreto de Gabinete No.90 de 1971.

En ese sentido también pueden participar en una licitación pública en que se va a vender un bien al Estado una persona con una licencia que no ampare el ejercicio del comercio al por menor y excluir a estos potenciales candidatos por el hecho de no tener una licencia comercial para la respectiva actividad sería perjudicar los intereses del Estado. Según la tesis de la parte demandante no podría participar en una licitación pública para la compra de tractores y de grúas una empresa de construcción que desea vender algunos de sus bienes al Estado porque, según dicha tesis, tratándose de una licitación en la que está envuelta una venta al por menor, para obtener el certificado de postor el contratista debería tener una licencia comercial Tipo B. Tampoco podría, según dicha tesis, una empresa de seguros o un banco, que desea renovar su equipo de computadoras personales y vender las que ya ha usado, ser postor en una licitación pública para la compra de cinco computadoras personales usadas porque son titulares de una licencia comercial Tipo A.

Con todo, debe entenderse que el acto administrativo contenido en la nota 032-DMHYT de 11 de enero de 1991, es aplicable fundamentalmente a las licitaciones públicas celebradas para seleccionar al contratista de un contrato administrativo celebrado por el Estado, porque los contratos de Derecho Privado que éste celebre sí pueden quedar

enmarcados dentro de las regulaciones del Código de Comercio o del Código Civil. En este sentido ha dicho la Sala que son contratos administrativos aquéllos que contengan una o más cláusulas exhorbitantes o que estén vinculados a fines de servicio público.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el acto contenido en la Nota No. 032-DMHYT de 11 de enero de 1991, proferida por el Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL BUFETE ARTURO VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE CESAR BATISTA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO NO. 1 DE 26 DE ENERO DE 1990, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El señor César Batista ha promovido proceso contencioso administrativo de nulidad contra el Órgano Ejecutivo. En la demanda se pide a la Corte que declare que es nulo el Decreto No.1 de 26 de enero de 1990 por medio del cual se nombra en el cargo de Gerente General de los Casinos Nacionales al señor Alejandro Garúz R.

El Ministro de Hacienda y Tesoro al rendir su informe explicativo de conducta presentó una advertencia de inconstitucionalidad sobre los Decretos 143 de 1965 y 99 de 1973. La advertencia fue elevada en consulta al Pleno de la Corte Suprema por el Magistrado Sustanciador y aquél declaró que los citados decretos no son inconstitucionales, según se señala en sentencia de 4 de julio de 1992.

La parte demandante considera que el acto administrativo por ella impugnado ha infringido el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 143 de 1965 modificado por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No.99 de 1973. Esta norma señala que para desempeñar el cargo de Gerente General de los Casinos Nacionales se requería, entre otros requisitos, contar con una experiencia administrativa en manejo de casinos no menor de 5 años.

El Procurador de la Administración al contestar la demanda mediante la Vista No. 447 de 10 de septiembre de 1991 aceptó que se requería la experiencia de 5 años para ser idóneo para el citado cargo público, pero señaló que "el demandante no ha demostrado aún que el señor Garúz fue nombrado en un cargo público sin ser idóneo para el mismo" (a foja 36).

La Sala observa que en el presente caso se ha producido el fenómeno de convalidación del acto administrativo impugnado porque la norma que el mismo podía infringir ha sido derogada. En efecto, el Organo Ejecutivo mediante el Decreto No. 170 de 24 de septiembre de 1992, aprobó la Resolución No.10 de 17 de julio de 1992, por la cual la Junta de Control de Juegos aprobó el Reglamento Interno de Casinos Nacionales y en el artículo 2o. de dicho decreto se dispone muy claramente que se derogan el Decreto Ejecutivo No. 143 de 22 de octubre de 1965 y el Decreto Ejecutivo No.99 de 13 de junio de 1973.

El nuevo Reglamento Interno de Casinos Nacionales no contiene la exigencia del anterior reglamento derogado que requería que la persona que fuese nombrada para el cargo de Gerente General de esa institución tuviera 5 años de experiencia administrativa en el manejo de casinos.

Hay que señalar que un vicio de un acto administrativo generado por violación de una regla de fondo puede sanearse si "las normas superiores con las cuales se estaba en contradicción al momento de expedirse, son modificadas o derogadas en forma que desaparezca la contradicción, porque el acto originalmente nulo, por el cambio producido en el ordenamiento superior, deja de perturbar el orden jurídico" (Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, Segunda Edición, 1989, Librería Señal Editora, Colombia, pág. 155). De lo anterior se colige que la Sala no debe acceder a la pretensión formulada en la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que NO ES ILEGAL el Decreto Ejecutivo No.1 de 26 de enero de 1990, dictado por conducto del Ministro de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA Y BOLÍVAR, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLON, PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES NO. 01-87 DE 11 DE FEBRERO DE 1987, LA NO. 06 DE 17 DE JUNIO DE 1992, Y LA NO. 10-93 DE 24 DE MAYO DE 1993, EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE COLON. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA

FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Rivera y Bolívar, actuando en nombre y representación de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declaren nulas, por ilegales, las Resoluciones No. 06-92 de 17 de junio de 1992, No. 01-87 de 11 de febrero de 1987 y No. 10-93 de 24 de mayo de 1993, dictadas por la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón.

En la demanda presentada se solicita que se **suspendan provisionalmente los efectos** de las resoluciones No. 06-92 de 17 de junio de 1992 y 10-93 de 24 de mayo de 1993, cuya declaración de nulidad se pide, "para evitar que se produzca un perjuicio notoriamente grave al ordenamiento jurídico positivo, así como un daño o perjuicio de reparación imposible o difícil al patrimonio de la parte demandante y mientras dure la suspensión provisional de las premencionadas resoluciones **se restablezca la vigencia** de la Resolución No. 20-91 de 8 de julio de 1991, expedida por el Gerente General de la Zona Libre de Colón, salvo mejor criterio de la Sala" (fs. 59) (Subraya la Sala).

En el presente caso se solicita la suspensión provisional de dos resoluciones de la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón, es decir, la Resolución No. 06-92 de 17 de junio de 1992, por la cual se establece la vigencia de la Resolución 01-87 de 11 de febrero de 1987 de la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón, mediante la cual se aprueba el Reglamento de Transporte de Carga en dicha Zona Libre; y la resolución No. 10-93 de 24 de mayo de 1993, por la que se aprueba el reglamento para el uso de carretillas de mano y montacargas para transporte de carga dentro de esa zona.

Manifiesta la parte actora, en lo medular, que las resoluciones impugnadas "han sido expedidas en contravención del artículo 7 del Decreto Ley No. 18 de 17 de junio de 1948, que establece que el reglamento interno así como toda reforma, adición o modificación del reglamento interno una vez adoptado deberá ser aprobado por Decreto del Órgano Ejecutivo", y que "el reglamento interno de la Zona Libre de Colón está contenido en el Decreto Ejecutivo No. 665 de 2 de octubre de 1951, publicado en la Gaceta Oficial No. 11,630 de 8 de noviembre de 1951" (fs. 61).

Agrega la parte actora, que la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón, mediante las resoluciones impugnadas, está cercenando el derecho que tienen las empresas que operan en la Zona Libre de Colón para adquirir vehículos de transporte para trasladar su carga desde y hacia la Zona Libre, y en el caso de la Resolución No. 10-93, se prohíbe el uso de montacargas para transportar cargas por las calles de esa Zona.

Señala el demandante que con estas resoluciones, la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón está incurriendo en vicios de ilegalidad, falta de competencia, exceso de poder y desviación de poder, promoviendo "un aberrante monopolio de transporte de carga desde y hacia la Zona Libre de Colón, prohibiéndose de facto a los usuarios de la Zona Libre Colón, transportar su propia carga desde y hacia dicha zona fiscal", conculcándose el "derecho de circulación o libertad de tránsito de la República de Panamá" (fs. 61).

Se pretende evitar con esta medida que los demandantes y la economía en general sufran graves perjuicios por la lesión causada al ordenamiento jurídico, debido a que la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón modificó el reglamento interno de esa Zona Libre expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 665 de 2 de octubre de 1951, "sin atender el mandato expreso contenido en el artículo séptimo del Decreto Ley No. 18 de 1948, el cual, con arreglo al numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Nacional, exige la aprobación de las modificaciones, adiciones o reformas al Reglamento Interno de la Zona Libre mediante el correspondiente Decreto Ejecutivo.

Esta Sala ha manifestado que en las demandas de nulidad, la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado es procedente cuando se pretenda evitar potenciales violaciones al ordenamiento jurídico y al principio de separación de poderes.

El artículo 7 del Decreto Ley No. 18 de 17 de junio de 1948 establece que la Zona Libre de Colón dictará su propio reglamento interno por medio de acuerdo aprobado por la mayoría de sus componentes y con el concepto favorable del Gerente y que dicho acuerdo deberá ser aprobado por decreto del Órgano Ejecutivo, y en **la misma forma se adoptará toda reforma, adición o modificación del Reglamento Interno una vez adoptado.**

La Zona Libre de Colón adoptó su Reglamento Interno mediante el Decreto No. 665 de 2 de octubre de 1951, y en consecuencia, cualquier reforma, adición o modificación del mismo debe aprobarse mediante un Decreto del Órgano Ejecutivo.

Por medio de la Resolución No. 06-92 de la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón, se ha establecido la vigencia de la Resolución No. 01-87 dictada por la misma autoridad, que aprueba el Reglamento de Transporte de Carga en dicha Zona, y mediante la Resolución No. 10-93 de la junta Directiva de la Zona Libre se ha aprobado la reglamentación para el uso de carretillas de mano y montacargas para transporte de carga dentro de ese área. Dichas disposiciones rigen el desempeño de determinadas actividades e imponen limitaciones al derecho de circulación dentro de la Zona Libre de Colón, y por tanto, son normas que adicionan y reforman el Reglamento Interno (Decreto Ejecutivo No. 665 de 2 de octubre de 1951) al cual se refiere el artículo 7 del Decreto Ley 18 de 17 de junio de 1948 y por tanto, deben ser aprobadas **mediante decreto expedido por el Órgano Ejecutivo**. De manera que su puesta en vigencia sin ese requisito constituye una clara violación formal del ordenamiento jurídico porque esas resoluciones se han expedido sin cumplir con el procedimiento autorizado en la Ley.

Por las anteriores consideraciones, a juicio de esta Sala, procede decretar la medida cautelar solicitada.

Se niega, por improcedente, la petición de que se restablezca provisionalmente la vigencia de la Resolución No. 20-91 de 8 de julio de 1991, expedida por el Gerente General de la Zona Libre de Colón. De conformidad con el ordinal 2 del artículo 203 de nuestra Constitución Política esta Sala está facultada para "estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas" cuando resuelve el negocio, pero no como una medida cautelar. La única medida de esta clase que puede darse en la vía contencioso administrativa es la suspensión de los efectos del acto impugnado prevista en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943.

Además la Resolución No. 20-91 que reglamenta la circulación y operación de los vehículos de transporte de carga dentro del área de la Zona Libre de Colón, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto Ley 18 de 17 de junio de 1948 para la expedición de normas que modifiquen o adicionen el Reglamento Interno de la Zona Libre de Colón.

Por otra parte el artículo 36 del Decreto Ejecutivo No. 428 de 7 de septiembre de 1953, que desarrolla el artículo 45 del Decreto Ley No. 18 de 17 de junio de 1948, reglamenta la entrada y salida de los vehículos comerciales de transporte de carga a la Zona Libre de Colón.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de las Resoluciones No. 06-92 de 17 de junio de 1992 y 10-93 de 24 de mayo de 1993, ambas dictadas por la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón y NIEGA la petición de que se restablezca provisionalmente la vigencia de la resolución No. 20-91 de 8 de julio de 1991, expedida por el Gerente General de la Zona Libre de Colón.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BALBINO VALDÉS RIVERA, EN REPRESENTACIÓN DE JAVIER ARMANDO LICONA GÓMEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A MOISÉS GIROLDI VERA Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado BALBINO VALDÉS RIVERA en representación de JAVIER ARMANDO LICONA GÓMEZ, ha interpuesto Excepción de Prescripción de la acción, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz a MOISES GIROLDI VERA Y OTROS.

El excepcionante solicita a este Tribunal Colegiado, que se declare extinguida la deuda contenida en el auto ejecutivo que le libra mandamiento de pago N° 174 de 25 de junio de 1990, emitido por el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, por la suma de doce mil seiscientos noventa y seis balboas con ochenta y tres centésimos (B/.12,696.83) en concepto de capital, intereses y gastos de cobranzas, hasta la total cancelación de la obligación, como se aprecia a foja 15 del expediente ejecutivo.

El actor afirma tener derecho a la anterior petición, debido a que desde la fecha en que su "mandante se notificó del auto que libró mandamiento de pago, al 22 de julio de 1985, fecha en que la deuda debió cancelarse, han transcurrido más de cinco (5) años, razón por la cual, la acción de cobro coactivo, prescribió".

Añade además el actor, que el ejecutante no llevó a cabo "gestión alguna, tendiente a hacer efectivo el cobro de la deuda, contenida en el pagaré o contrato de préstamo", que interrumpiese la prescripción extintiva de esta obligación.

Por otra parte, el Banco Nacional de Panamá, representado en esta oportunidad por la licenciada DIANA PATRICIA MOTTA LATORRACA, se opone a las pretensiones del excepcionante alegando que "consta en la RELACIÓN DE PAGO emitida por el DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CENTRALIZADA DE PRESTAMOS, de la GERENCIA DE OPERACIONES, del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, que el último pago recibido por descuento directo de MOISES GIROLDI VERA para amortizar el préstamo N° 20992, fue el día doce de octubre de 1989 (89-10-12 PL), por la suma de Sesenta y Cuatro Balboas con treinta centésimos (B/.64.30)", y que por lo tanto no han transcurrido los 5 que estatuye el Código de Comercio, para que la misma se considere prescrita.

De igual forma coincide la Procuraduría de la Administración con la opinión vertida por la Institución ejecutante, en virtud de que considera que el "tiempo de cinco (5) años para determinar la prescripción de la acción ejecutiva, debe tener como punto de partida la fecha en que el deudor deja de reconocer la obligación, en este caso por la suspensión de abonos a la deuda, esto es, el día 12 de octubre de 1989 cuando se recibió en el Banco el último de ellos. De manera que de esa fecha al 8 de noviembre de 1991, cuando se notificó al señor JAVIER ARMANDO LICONA GÓMEZ del auto que libró mandamiento ejecutivo en su contra, no ha transcurrrido el tiempo que establece la ley para la prescripción de este tipo de acción".

Estando el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver el fondo de la controversia.

Estima la Sala que no le asiste la razón al excepcionante, por cuanto que en principio se deriva y establece claramente de la segunda foja del expediente ejecutivo, que los pagos llevados a cabo por parte del deudor principal MOISES GIROLDI VERA al Banco Nacional de Panamá, en concepto del préstamo recibido de la citada Institución Bancaria, se verificaron hasta el 30 de octubre de 1989 todo lo cual indica el reconocimiento expreso de la deuda por parte del prestatario de la obligación contraída hasta la fecha antes indicada.

Si bien es cierto el contrato de préstamo en cuestión, data de el 22 de julio de 1982 como aduce el licenciado VALDES, no podemos desconocer el hecho que la acción por parte del Banco Nacional de Panamá prescribía el 30 de octubre de 1994, dado que hasta el 30 de octubre de 1989, el deudor plenamente reconoció y amortizó su obligación derivada de la responsabilidad contractual adquirida con la institución crediticia en 1982 como acotamos anteriormente, a través de los pagos antes mencionados; y por lo tanto, el deudor interrumpió la alegada prescripción, a tenor del artículo 1711 del Código Civil que taxativamente preceptúa el reconocimiento de la deuda, como modo de interrupción de la misma.

Por estos motivos, es evidente que el acreedor-ejecutante se encuentra dentro de los términos legales para ejercer la acción ejecutiva tendiente a obtener el resarcimiento de su acreencia no saldada, ya que su derecho no se ha extinguido, al continuar vigente la obligación contractual bajo estudio.

En consecuencia, los Magistrados de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO PROBADA la Excepción de Prescripción incoada por el licenciado BALBINO VALDES RIVERA en representación de JAVIER ARMANDO LICONA GÓMEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCIONES DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, EXTINCIÓN DE LA FIANZA POR ACTO IMPUTABLE AL ACREEDOR, POR FALTA DE IDONEIDAD DEL TITULO EJECUTIVO, DE PETICIÓN DE MODO INDEBIDO Y AUSENCIA DE LA CAPACIDAD JURISDICCIONAL, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ Y ALEMÁN EN REPRESENTACIÓN DE PAN AMERICAN DE PANAMÁ, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO AL CONSORCIO EMPRESAS CONSULTORA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S. A. (ECAISA)- GROUNDWATER DEVELOPMENT CONSULTANTS (INTERNATIONAL) LTD y a PAN AMERICAN DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, (1°) PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La Procuraduría de la Administración mediante Vista N° 158 de 24 de marzo de 1993 ha solicitado que se declare que ha operado el fenómeno jurídico procesal de la sustracción de materia y obsolescencia procesal, en las excepciones propuestas por Pan American de Panamá, S. A., en el proceso por cobro coactivo seguido por el Juez Ejecutor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario contra la propia excepcionante Pan American de Panamá, S. A., y el Consorcio Empresa Consultora de Arquitectura e Ingeniería (ECAISA) - Groundwater Development Consultants (International) Ltd.

El escritorio petitorio de la Procuraduría de la Administración está concebido en los siguientes términos:

> "Comparecemos ante vuestra Augusta Cámara, para presentar solicitud especial, a fin de que se declare extinguida la pretensión de la excepcionante previamente descrita, debido a que se ha operado, respecto a la misma, el fenómeno jurídico de la sustracción de materia.
>
> Esta solicitud se fundamenta en lo siguiente:
>
> PRIMERO: Observamos que mediante el escrito de excepciones se pretende obtener declaraciones de la Sala Tercera, tales como:
>
> a) Que declare probada la excepción de inexistencia de la obligación.
>
> b) Que se declare probada la excepción de extinción de la fianza por actos imputables al acreedor.
>
> c) Que se declare probada la excepción de falta de idoneidad del Título Ejecutivo.
>
> d) Que se declare probada la excepción de petición de modo indebido.
>
> e) Que se declare probada la excepción de ausencia de capacidad de Jurisdicción.
>
> SEGUNDO: Las excepciones ya fueron declaradas probadas por la Sala Tercera, a favor de la Empresa CONSORCIO ECAISA-GROUNDWATER DEVELOPMENT CONSULTANTS, codemandada en el juicio por Jurisdicción coactiva que le sigue el Ministerio de Desarrollo Agropecuario contra el hoy día excepcionante y el mencionado Consorcio.

TERCERO: Mediante la Resolución de Veintinueve de noviembre del mil novecientos noventa (1990), en todas sus partes la Resolución de fecha treinta (30) de julio de mil novecientos noventa (1990), por medio de la cual se declaró probada la excepción de falta de idoneidad de Título Ejecutivo, en el proceso que por cobro coactivo ha incoado el Ministerio de Desarrollo Agropecuario contra el Consorcio ECAISA-GROUNDWATER DEVELOPMENT CONSULTANTS.

CUARTO: Dado que la Sala Tercera mediante la Resolución de fecha treinta (30) de julio de 1990, ha dado por probada la falta de idoneidad del Título Ejecutivo, pilar y fundamento de la pretensión procesal del excepcionante, no es necesario entrar a la consideración de las otras excepciones alegadas.

Es decir que por virtud de la antes citada Resolución de la Sala Tercera, ha cesado el efecto jurídico del Auto Ejecutivo, y originario principal instrumento jurídico para la exigibilidad por vía de la Jurisdicción coactiva.

QUINTO: El excepcionante se encuentra obligado por una misma causa jurídica (el Título Educativo) con el Consorcio (que fue el beneficiado por la resolución de 30 de julio de 1990). Es decir que el objeto litigioso para ambos está constituido por los derechos y obligaciones, de la misma clase, basados en causas de hecho y jurídicas homogéneas en lo esencial además que sus excepciones nacen de un mismo título.

SEXTO: Somos de opinión, que dada las circunstancias jurídico-fácticas apuntadas, se ha producido el fenómeno de Sustracción de materia, respecto a esta figura jurídica resulta oportuno reproducir, en lo medular, la sentencia de 3 de junio de 1991, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, veamos:

`La sustracción de materia es el fenómeno mediante el cual el proceso deviene sin objeto. No es más que la extinción sobreviniente de la pretensión, como consecuencia esa falta de objeto litigioso sobre el que debe recaer la decisión jurisdiccional decisoria de la litis.

La pretensión se ejerce frente a otra persona a través del proceso a fin de obtener un efecto jurídico. No puede obtenerse ese efecto jurídico, por tanto, si durante el proceso se extingue la pretensión.

El destacado procesalista panameño JORGE FÁBREGA, citando la definición de JORGE PEYRANO brinda en su obra El Proceso Atípico, pág. 129, dice refiriéndose, a la sustracción de materia "Es un medio de extinción de la pretensión constituido por la circunstancia de que la materia justificable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes; no pudiendo el tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión deducida" (Estudios Procesales, Tomo II, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1988, página 1195).

De lo anterior se desprende que deben concurrir los siguientes requisitos para que surja la sustracción de materia;

A. Que exista un proceso;
B. Que el objeto del proceso exista al momento de constituirse la relación procesal;
C. Que con posterioridad a la Constitución de la relación procesal el objeto del proceso desaparezca por causas extrañas a la voluntad de las partes;
D. Que esa desaparición ocurre antes de dictar sentencia;
E. Que no se trate de una simple transformación del objeto litigioso sino de su verdadera desaparición que motive la extinción de la pretensión;
F. Que el fenómeno estudiado sea reconocido por el tribunal que conoce del proceso al momento de dictar sentencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 979 del Código Judicial.`

Por lo antes expresado, debemos concluir que en el presente procedimiento ha operado la extinción del objeto del proceso. De allí que en aras de una economía en el proceso y dado que debe citarse sentencias contradictorias o diversas sobre una misma cuestión litigiosa, o cuestiones litigiosas conexas, solicitamos respetuosamente a la Honorable Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, declare que ha operado el fenómeno de obsolescencia procesal o sustracción de materia, y en consecuencia, se ordene el archivo del expediente."

Hay el hecho cierto que ante esta misma Sala, el otro ejecutado en el mismo proceso, a saber, el Consorcio Empresa Consultora de Arquitectura e Ingeniería, S. A. (ECAISA) - Groundwater Development Consultants (International) ltd., mediante Auto de fecha 30 de julio de 1990 de esta Sala, confirmado por el Auto de 29 de noviembre del mismo año, obtuvo el reconocimiento y se declaró probada la excepción de falta de idoneidad del título ejecutivo, que es a su vez una de las excepciones propuestas por Pan American de Panamá, S. A.

En su Auto de 30 de julio de 1990, dijo esta Sala lo siguiente:

"Analizadas las pruebas que reposan en el expediente se demuestra que, el auto ejecutivo utilizado como título ejecutivo para iniciar el juicio por jurisdicción coactiva contra el CONSORCIO ECAISA-GROUNDWATER DEVELOPMENT CONSULTANTS, no estaba ejecutoriado y por tanto no reunía las condiciones de un título que presta mérito ejecutivo al momento de insturado el proceso por cobro coactivo. Tal como lo exige el artículo 1803 N°4 del Código Judicial. La propia Procuradora reconoce que esta Corte Suprema mantuvo el auto ejecutivo dictado en el proceso por cobro coactivo, , el

> 31 de mayo de 1989, fecha en que después de su ejecutoria, 12 de junio de 1989, dicho auto ejecutivo adquiría la condición de título con mérito ejecutivo y no desde el 22 de junio de 1988, porque entonces de nada serviría que se permita la apelación de estos autos ejecutivos ante la Corte Suprema.
>
> Probada la excepción de falta de idoneidad del título ejecutivo no es necesario entrar a la consideración de las otras excepciones alegadas."

De lo visto hasta aquí resulta que, efectivamente, el documento que sirvió como recaudo ejecutivo para seguir la ejecución contra Pan American de Panamá, S. A., y contra el Consorcio, fue el resuelto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario N° ALP-A-ADM de 14 de julio de 1987, cuya idoneidad como título ejecutivo le fue desconocido por el citado auto de esta Sala de fecha 30 de julio de 1990, y le fue desconocida tal idoneidad porque al tiempo de dictarse el auto ejecutivo, el resuelto que le servía de recaudo ejecutivo no estaba ejecutoriado, por lo que mal podía constituir título con mérito ejecutivo.

La situación del Resuelto ALP-41-A-ADM respecto de Pan American de Panamá, según se ha demostrado en estas excepciones, es la misma que guardaba respecto del Consorcio, puesto que ha quedado demostrado que el Resuelto ALP-41-A-ADM de 14 de julio de 1987 no estaba en firme al día de la fecha del auto ejecutivo dictado por el Juez ejecutor, ni al día en que dicho auto ejecutivo le fue notificado a la excepcionante, tal como se aprecia a fojas 29 del expediente, puesto que el resuelto que debía constituir el recaudo ejecutivo le fue notificado a la recurrente el 27 de julio de 1988 y el auto ejecutivo tiene fecha 22 de junio de 1988. De suerte que no reunía el resuelto que se tomó como recaudo ejecutivo, la calidad de documento con mérito ejecutivo, respecto de la excepcionante como no la reunió respecto del Consorcio, lo que lleva a la conclusión de que, efectivamente, con el imperio del Auto de fecha 30 de julio de 1990 confirmado por el Auto de 29 de noviembre de esta misma Sala en las excepciones propuestas por el Consorcio, se produjo el fenómeno de sustracción de materia, que dejó sin razón de proceso las excepciones propuesta por Pan American de Panamá, S. A.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador de la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE HA OPERADO EL FENÓMENO PROCESAL DE SUSTRACCIÓN DE MATERIA en este proceso de "excepciones de inexistencia de obligación; extinción de la fianza por acto imputable al acreedor; falta de idoneidad del título ejecutivo; petición de modo indebido; y ausencia de la capacidad jurisdiccional" propuestas por Pan American de Panamá, S. A., en el proceso de cobro coactivo iniciado por el Juez ejecutor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario contra el Consorcio ECAISA Groundwater Development Consultants (International) Ltd. y Pan American de Panamá, S. A., y ORDENA por tanto el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DEUSDEDITH F. ESCOBAR, EN REPRESENTACIÓN DE CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A CECILIO GERARDO STERLING Y/O CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado JOSÉ MIGUEL NAVARRETE, apoderado judicial del Banco de Desarrollo Agropecuario, dentro del incidente de excepción de prescripción interpuesto por el Licenciado Deusdedith F. Escobar, en representación de **Cecilia Ana Sterling de Rodríguez**, dentro del Juicio Ejecutivo por Cobro Coactivo seguido en su contra, ha promovido y sustentado Recurso de Apelación contra el auto de 11 de mayo de 1993, mediante el cual se admiten las pruebas aducidas por el señor Procurador de la Administración y por el Licenciado Escobar, apoderado de la ejecutada.

Al sustentar el recurso de apelación el Licenciado José Miguel Navarrete señala que no debió ser admitida como prueba, por improcedente e inconducente, el expediente contentivo del proceso de sucesión intestada de Cecilio Sterling que se tramita en el Juzgado Tercero del Circuito de Colón, Ramo Civil, ya que la excepción interpuesta tiene como fin que se declaren prescritas las obligaciones emanadas de los canones de arrendamiento vencidos y "no probar la legitimidad como parte en el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo incoado en su contra." (fs. 28)

El artículo 772 del Código Judicial en referencia a la admisión e inadmisión de las pruebas señala lo siguiente:

> "Las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso y son inadmisibles las que no se refieren a los hechos discutidos, así como las legalmente ineficaces. El juez puede rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del proceso; también pueden rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes o ineficaces."

Observa la Sala, que el excepcionante al aducir como prueba el expediente de la sucesión intestada de Cecilio Sterling, no alegó qué pretende probar con estos documentos; por tanto, en el presente caso la prueba debe ser admitida, toda vez que no puede asegurarse que en la prueba que se está pidiendo no existan piezas procesales que puedan servir para resolver la excepción de prescripción; además, las partes involucradas en la sucesión son las ejecutadas en el proceso.

En consecuencia, la Sala considera que la prueba se encuentra dentro los términos consagrados en el artículo 772 del Código Judicial para su admisión.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de 11 de mayo de 1993, dictado dentro del incidente de excepción de prescripción interpuesto por el Licenciado Deusdedith Escobar dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a Cecilio Gerardo Sterling y Cecilia Ana Sterling de Rodríguez.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ERIC SIERRA EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS, GUSTAVO G. REAL Y HUMBERTO E. MARCIAGA. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Eric Sierra ha presentado, en representación de JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS, recurso de reconsideración en contra de la resolución de 23 de marzo de 1993 emitida por este Tribunal Colegiado, dentro del Incidente de Nulidad solicitado por el Licdo. Sierra dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco de Desarrollo le sigue a José Gabriel Agrioyanis, Gustavo G. Real y Humberto E. Marciaga.

El actor propuso el medio de impugnación en referencia, ya que se manifiesta en completo desacuerdo con los conceptos emitidos por esta máxima Corporación de Justicia en el precitado auto de 23 de marzo de 1993.

En este orden de ideas es indispensable resaltar que recientemente y mediante fallo de 26 de mayo de 1993, dentro del caso JILMA ALIXIA RODRÍGUEZ DE VILLAMIL VS EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, decretó que no era judicialmente viable por parte de los intervinientes interesados, interponer recursos de reconsideración en contra de las resoluciones dictadas por el Pleno de esta Sala en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, por considerar que este medio de impugnación procesal en estos casos en concreto, antagoniza directamente con el contenido de los artículos 203 numeral segundo de la Constitución Política vigente y, con el artículo 100 del Código Judicial; consagrando de esta manera un precedente jurídico de gran importancia procesal basado en la exacta aplicación de los textos de las disposiciones antes mencionadas. La discrepancia a la que hacemos alusión entre las normas antes mencionadas y el recurso de reconsideración propuesto en contra de resoluciones emitidas por esta Sala se observa en el sentido de que el artículo 203 de la Constitución vigente numeral segundo estatuye que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y específicamente los dictámenes de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, son finales, definitivas y obligatorias; por lo que mal podríamos reconsiderar una decisión que no admite consideración adicional, por ser las mismas terminantes y conclusivas.

Por otro lado, el Código Judicial en el artículo 100 en concordancia con el artículo 98 numeral 4to. de la misma excerta legal, taxativamente dispone que las resoluciones que decidan las apelaciones, tercerías o cualquier incidente que se ventilen en esta Sala dentro de los procesos por cobro coactivo son finales, definitivas y obligatorias; no procediendo en consecuencia, recurso alguno en contra de dichos pronunciamientos ya que estos son vinculantes, de cumplimiento forzoso, invariables, inmodificables e inimpugnables.

Así las cosas, es evidente por los motivos antes señalados que el recurso de reconsideración incoado ante este Tribunal Colegiado, no prospera por tratarse de una resolución dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, deviniendo la situación planteada, en firme y por lo tanto en cosa juzgada, una vez se notifiquen en debida forma a las partes la resolución en cuestión.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZAN DE PLANO el recurso de reconsideración interpuesto por el Licenciado Eric Sierra en representación de JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS.

Notifíquese.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria a.i.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, interpuesta por el Licenciado Omar Solano en representación del BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo, que el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (Casa Matriz), le sigue a JACINTO A. CÁRDENAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, trece (13) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor **JACINTO CÁRDENAS** actuando en su nombre y representación a igual que en nombre de la **INTERGANADERA BAYANO, S. A.** ha solicitado corrección de la Sentencia de 21 de diciembre de 1992, ya que estima que al momento de calcular el saldo debido por la sociedad precitada al **BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S. A.** el resto de los Magistrados que integran la Sala, incurrieron en un error aritmético.

Señala el licenciado **CÁRDENAS** que la equivocación matemática consiste en lo siguiente:

> "El primer error matemático radica en que es ilegal haber sumado la columna de la letra vencido, es decir SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS (B/.68,054.00) a las otras dos (2) columnas de intereses y saldo de capital, pues los SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS (B/.68,054.00) son parte del gran total adeudado.
>
> "El segundo error matemático y que es visible en la sentencia radica en que el auto del 7 de septiembre de 1992 reconoció la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN BALBOAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTÉSIMOS (B/.259,961.44) en concepto de intereses pagados y la sentencia del 21 de diciembre de 1992 solamente aplicó en concepto de intereses pagados la suma de CIENTO VEINTE BALBOAS CON TRECE CENTÉSIMOS (B/.161,120.13),por lo que arroja una diferencia de NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN BALBOAS CON TREINTA Y UN CENTÉSIMOS (B/.98,841.31) que no fueron aplicados en el cálculo matemático efectuado dentro de la sentencia mencionada."

Considera el actor que la suma diferencial a la cual se hace mención en el párrafo anteriormente transcrito, debió ser aplicada al saldo de capital, por corresponder a un abono extraordionario. Esto es dado que **INTERGANADERA BAYANO, S. A.** había cumplido sus compromisos con la Institución bancaria, cancelando previamente la letras pertinentes de intereses y capital; por lo que palmariamente no tenía atrasos con el tercerista. En consecuencia y a su parecer, el Tribunal a-quem solamente debió condenar a su representada a la suma de Doscientos Cuarenta mil Ochocientos Cinco Balboas con Veinte centésimos (B/.240,805.20) como se desprende de su cálculo aritmético, y no a la suma de Cuatrocientos Treinta y Ocho mil Ochocientos Cuarenta y Siete Balboas con Setenta y Cinco centésimos (B/.438,847.75) como señaló el Tribunal a-quem.

Estando el negocio en este estado el resto de los Magistrados entran a resolver la solicitud de la corrección planteada.

En lo concerniente al primer cargo indicado por el actor, aprecia el resto de la Sala que efectivamente en la Sentencia de segunda instancia, se sumó al gran total adeudado por el demandante al **BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S. A.** (Cuatrocientos Treinta y Ocho mil Ochocientos Cuarenta y Siete Balboas con Setenta y Cinco centésimos) la cantidad de Sesenta y Ocho mil Cincuenta y Cuatro Balboas (B/.68.054.00) que realmente corresponde al período de letras vencidas no amortizadas por el actor, pero que a su vez pertenecen al saldo total adeudado por la Sociedad **INTERGANADERA BAYANO, S. A.** al tercerista y que por lo tanto, no estaba sujeta a adición separada; ya que como expresamos esta suma era parte del saldo debido no acreditado (Doscientos Ochenta y Un mil Novecientos Cuarenta y seis).

Con relación a la segunda causa que motivó está petición de corrección por parte del Doctor **CÁRDENAS,** lamentablemente nos pronunciamos en desacuerdo con el mismo, ya que evidentemente existe un error de cálculo en el cuadro elaborado por el Tribunal a-quem pero que en definitivas no implica el pago extraordinario de Noventa y Ocho mil Ochocientos Cuarenta y Un Balboas con Treinta y Un centésimos (B/.98,841.31) al saldo del capital. Esto es así ya que primeramente en la Escritura Pública Nº 1584 de 13 de febrero de 1981 en su cláusula primera literal A, las partes establecieron como estipulación inalterable que las primeras cuatro cuotas pagaderas a intereses serían por la suma de no menor de Veinticuatro mil Novecientos Treinta y Siete Balboas con Cincuenta centésimos (B/.24.937.50), lo cual no fue reconocido en nuestra Sentencia como Tribunal de alzada. Por ende la cifra realmente amortizada por la sociedad **INTERGANADERA BAYANO, S. A.** en concepto de intereses, es de B/.197,857.51. Todo lo anterior significa, que al total de intereses reconocidos en la segunda instancia (B/.161,120.13) debemos añadirle la suma de Treinta y Seis mil Setecientos Treinta y Siete Balboas con Treinta y Ocho centésimos (B/.36,737.38), verificándose de esta forma un diferendo de Sesenta y Dos mil Ciento Tres Balboas con Noventa y Tres centésimos (B/.62,103.93) y no de Noventa y Ocho mil Ochocientos Cuarenta y Uno Balboas con Treinta y Uno centésimos (B/.98,841.31) como prima facie advierte el actor como producto de la sustracción de intereses aceptados en ambas instancias de la Sala Tercera.

No obstante, el supracitado instrumento público también instituye como requisito para aumentar el cobro de intereses en la cláusula primera literal C, que el BANCO comunicaría esta decisión por escrito al prestatario; situación esta que no consta en el expediente. Aunado a lo señalado, el último peritaje efectuado por los peritos auditores de la Procuraduría de la Administración **ABEL VERGARA Y MITZI VÁSQUEZ** a petición del Doctor **CÁRDENAS,** arrojó como resultado que en las tarjetas bases del **BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ,S. A.** se estableció un 9% como interés cobrable en este préstamo; por lo que era necesario la comunicación a la cual hicimos referencia, de la institución Bancaria a la sociedad **INTERGANADERA BAYANO S. A.** del aumento de los intereses como indicamos anteriormente. Siendo así las cosas, y considerando que no existe tal documento(s) en el expediente y, que el cálculo llevado a cabo en el Tribunal a-quo mediante el cual se elaboró el cuadro que en aquella oportunidad reflejó la deuda del recurrente, se basó en el 14.25%, debemos recordar, que el interés de 9% realmente cobrado por el **BANCO** según consta en la tarjetas bases de esta institución crediticia; fue aplicado de manera variante pero predominante, por lo que no podemos decir de manera concluyente que los 62,103.93 balboas diferenciales los haya verdaderamente saldado la sociedad recurrente, máxime cuando tampoco reposan en este negocio las constancias que comprueben lo contrario, o que indiquen con certeza las fechas en las cuales fue recibido este exceso de intereses por el **BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ S. A.** de manera indebida, ya que de ser así sería evidente que al mismo tiempo éste estaba percibiendo los beneficios del Fondo Especial de Compensación de Intereses F.E.C.I.

En este orden de ideas se colige que la deuda de la sociedad **INTERGANADERA BAYANO, S. A.** asciende al gran total de Trescientos Setenta mil Setecientos Noventa y Tres Balboas con Setenta y Cinco centésimos (B/.370,793.75), como resultado de la suma del saldo de Doscientos Ochenta y Un mil Novecientos Cuarenta y Seis Balboas (B/.281,946.00) y el total de intereses adeudados que cuantifican Ochenta y Ocho mil Ochocientos Cuarenta y Siete Balboas con Setenta y Cinco centésimos (B/.88,847.75).

Sin embargo el 5 de julio del año en curso, el despacho del Magistrado Ponente recibió de la Secretaría Administrativa de la Sala, escrito de transacción de la pretensión en este negocio, suscrito por las partes actuantes con la disposición de concluir este proceso. En este escrito las partes convienen en reconocer la deuda de la sociedad **INTERGANADERA BAYANO S. A.** para con el **BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ S. A.**, por la suma de doscientos diez mil ochocientos treinta y ocho balboas, con ochenta y siete centavos (B/.210.838.87).

Aprecia el Tribunal a-quem, que la transacción propuesta por una parte, por el apoderado judicial de la Institución tercerista en este litigio y por otra, por el representante legal y presidente de la sociedad **INTERGANADERA BAYANO S. A.**, no puede ser admitida en esta etapa del proceso, debido a que únicamente la Sentencia es viable corregirla o reformarla en lo concerniente a un error " pura y manifiestamente aritmético, o de escritura o de cita" que haya cometido el Tribunal de instancia, a tenor del último párrafo del artículo 986 del Código Judicial.

Es evidente entonces, que la referida transacción debió ser interpuesta por los interesados, durante el procedimiento que se verificó ante esta Sala, con motivo de conocimiento de la Tercería Coadyuvante propuesta por el **BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ S. A.** dentro del juicio ejecutivo que por cobro coactivo le sigue el **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ** (casa matriz) a la sociedad **INTERGANADERA BAYANO S. A.**, o posteriormente antes del remate de la finca dada en garantía ante el **Banco Nacional de Panamá**, no siendo en consecuencia procedente la admisibilidad de la transacción en cuestión.

En esta etapa del Proceso, la Sala esta realizando gestiones con la finalidad de nombrar dos peritos-contadores públicos autorizados, tanto de la Contraloría General de la Nación, así como del Ministerio de Hacienda y Tesoro para que los mismos determinen con exactitud la suma adeudada por la sociedad **INTERGANADERA BAYANO S. A.**, al tercerista. No obstante, no podemos dejar de lado la necesidad del tercerista (que es una Institución en liquidación), que requiere "acelerar los trámites de cobro actualmente pendientes" y que por tanto acepta para la cancelación de la totalidad de la deuda se lleve a cabo a través del pago de doscientos diez mil ochocientos treinta y ocho balboas, con ochenta y siete centavos (B/.210.838.87), por parte del demandado como se observa en el documento de transacción no admisible, al cual hicimos referencia anteriormente. Ello es así debido a que al presentar las partes la transacción ante el **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ** que realiza el juicio coactivo antes mencionado, la misma tendría que ser remitida a esta Corporación de Justicia para su admisibilidad, ya que dicha transacción estaría inmersa dentro de la relación procesal que configura y ampara la Tercería Coadyuvante incoada ante esta Sala.

En mérito de lo expuesto y por razones de economía procesal, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **CORRIGEN** la Sentencia de 21 de diciembre de 1992, en el sentido que condena a la Sociedad **INTERGANADERA BAYANO, S. A.** al pago de doscientos diez mil ochocientos treinta y ocho balboas, con ochenta y siete centavos (B/.210.838.87), al **BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ S. A.** en concepto de capital e intereses dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**, le sigue a la **INTERGANADERA BAYANO S. A.**

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS GARCÍA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, LE SIGUE A MÁXIMO A. GUERRA, SARA C. DE GUERRA, TEODORO MATHEWS Y LUIS GARCÍA. MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA.

Honorables Magistrados de la Sala Tercera:

En el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **ROBERTO ENRIQUE FUENTES** en representación de **LUIS GARCÍA** dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, le sigue a **MÁXIMO A. GUERRA, SARA C. DE GUERRA, TEODORO MATHEWS** y **LUIS GARCÍA**, debo informarles que me encuentro impedido de conocer del mismo, toda vez que el licenciado **ERWIN MOLINO** quien funge como Juez Ejecutor del IFARHU es mi hermano.

Esta solicitud la fundamento en lo dispuesto en el numeral cuarto (4) del artículo 78 de la Ley 135 de 1943 en conjunto con el numeral (5) del artículo 749 del Código Judicial.

Las normas aludidas son del tenor siguiente:

"ARTICULO 78:
Son causas de impedimentos y recusación en los miembros del Tribunal de los contencioso-administrativo las siguientes:
....
4.-Tener interés en la actuación o tenerlo alguno de los parientes expresados en el inciso anterior".

"ARTICULO 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
....
5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo".

En vista de lo expresado solicito respetuosamente a mis colegas de la Sala, se me declare impedido para conocer de este negocio.

Panamá, 14 de julio de 1993.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL LCDO. JUAN A. MORALES, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO GÓMEZ ESTRIBÍ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La Honorable Magistrada **Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera** ha manifestado impedimento para conocer del recurso de apelación propuesto por el Lcdo. Juan A. Morales, en representación de Luis Alberto Gómez Estribí, dentro del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros.

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

"... porque antes de ser Magistrada, como apoderada del Banco de Bogotá, S. A., promoví juicio ejecutivo contra Luis Alberto Gómez Estribí en el que se persigue la misma finca embargada por la Caja de Ahorros en el presente proceso ejecutivo hipotecario. Este juicio no ha terminado y como apoderado judicial del Banco de Bogotá, S. A. está actuando mi hijo Rodolfo Aguilera Franceschi."

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en lo establecido en el artículo 749 ordinal 13 del Código Judicial, pues considera que la decisión que tome la Sala Tercera, puede afectar el resultado del proceso ejecutivo en el cual actúo como apoderada judicial. En vista que en dicho artículo se detalla de manera expresa la causal invocada, el resto de la Sala considera que a tenor de lo establecido en los numerales 5 y 13 del mencionado artículo procede dicha causal.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, la separa del conocimiento del negocio interpuesto y procede a llamar al Magistrado en turno de la Sala Civil, para que asuma el conocimiento del mismo. El Magistrado **RAÚL TRUJILLO MIRANDA**.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DEUSDEDITH F. ESCOBAR, EN REPRESENTACIÓN DE CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO A CECILIO GERARDO STERLING Y CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Deusdedith Fernando Escobar Sánchez, en su condición de apoderado judicial de Cecilia Ana Sterling de Rodríguez, ha promovido excepción de prescripción de la acción para el cobro de canon de arrendamientos de la finca urbana identificada como el lote No. 690 Oeste, Manzana No. 29, Contrato No. 974, convenido con el entonces Instituto de Fomento Económico (I.F.E.), cuyo cobro se pretende en el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que el Banco de Desarrollo Agropecuario le sigue a Cecilio Gerardo Sterling y/o Cecilia Ana Sterling de Rodríguez.

La parte excepcionante fundamenta su recurso en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Mediante auto calendado 23 de junio de 1992, se dicta mandamiento de pago por la vía Ejecutiva, contra CECILIO GERARDO STERLING o CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ y a favor del BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
SEGUNDO: Que el ejecutante, está incurriendo en el cobro del canon de alquiler distinto al que se entiende de la lectura del contrato en su cláusula tercera, que habla de B/.14.45 y no por valor de B/.19.02 como se demanda (f. 3).
TERCERO: Que la deuda que se pretende cobrar, data de más de cinco años, atrás a la fecha de la reclamación, por lo que estamos ante una

prescripción de la acción para el cobro de arriendo de la finca identificada como lote No. 690.
CUARTO: Que la prescripción que alegamos es de carácter parcial, pues la ejecutante dejó vencer el término que establece el artículo 1704 del Código Civil y sólo tiene una razón o sólo tiene derecho a reclamar el cobro de lo adeudado a partir del día 20 de julio de 1987, pues cualquier deuda anterior a esta fecha con respecto al contrato de arrendamiento que se presenta como documento ejecutivo está en calidad de prescrita.
QUINTO: Que estando prescrito el derecho a reclamar los cobros anteriores a los últimos cinco años, mi mandante estaría en la obligación de cumplir con el pago de los canones de arrendamiento de la finca identificada en el contrato solamente durante el período que va de julio de 1987 a la fecha de la reclamación del pago de lo debido.
SEXTO: Siendo el contrato de arrendamiento del lote No. 690, de una mensualidad de B/.19.02, mi mandante tiene una morosidad de B/.1141.20 de capital más los intereses y gastos y costas del proceso" (fs. 4-5).

Admitida la excepción se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, a los ejecutados y al Procurador de la Administración, por el término de Ley.

El Banco de Desarrollo Agropecuario, representado judicialmente por el licenciado José Miguel Navarrete, contestó el traslado oponiéndose a la pretensión, y manifestó, en lo medular, que la cifra de B/.19.02 del canon cuyo pago se exige incluye el recargo que señala la Ley 93 de 1973 para los arrendatarios morosos, y que dichas sumas constituyen créditos a favor de una entidad del Estado, a los que se le aplica el plazo de prescripción de 15 años, contemplado en el artículo 1073 del Código Fiscal.

Mediante Vista Fiscal No. 55, de 29 de enero de 1993, el Señor Procurador de la Administración se opuso a la excepción y coincidió con el representante judicial del Banco en el sentido de que el plazo de prescripción de la obligación reclamada es el establecido en el artículo 1073 del Código Fiscal.

Mediante Auto de 23 de junio de 1992 el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra Cecilio Gerardo Sterling o Cecilia Ana Sterling, hasta la concurrencia de B/.8,120.31 en concepto de capital, intereses devengados y los que se devenguen hasta la total cancelación de la deuda, más los gastos de cobranza que fijó en B/.386.68.

Sirvió como recaudo ejecutivo el contrato de arrendamiento No. 974, de 29 de junio de 1957, por el cual el Instituto de Fomento Económico (I.F.E.) da en arrendamiento a la sucesión de CECILIO GERARDO STERLING, representada por CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ (heredera y administradora legal), la mitad OESTE de un total de terreno situado en la ciudad de Colón, distinguido en el plano oficial con el número 690, con una extensión superficial de 181.16 m2, por el término de 10 años contados a partir del 1o. de julio de 1957, obligándose el arrendatario a pagar por adelantado en concepto de renta la suma de B/.14.45 mensuales. En caso de mora de un mes habrá lugar a un recargo de 10%, y si el cobro se efectúa por vía judicial o jurisdicción coactiva, el arrendatario cargará con todos los gastos del juicio (fs. 4-5). También se aporta como título ejecutivo una certificación de saldo de dicho contrato de arrendamiento expedida por el Contador de Bienes Patrimoniales del Banco de Desarrollo Agropecuario en la que consta un saldo a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario, al 1o. de julio de 1992, de B/.7,030.57 de capital, más B/.703.06 de recargo, lo que totaliza la suma de B/.7,733.63 (fs. 3).

Manifiesta el excepcionante que la obligación a favor de la institución del Estado prescribió parcialmente, ya que, de acuerdo al artículo 1704 del Código Civil, las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones de satisfacer el precio de los arriendos prescribe por el transcurso de cinco años. Por tanto, el Banco de Desarrollo Agropecuario "sólo tiene derecho a reclamar el cobro de lo adeudado a partir del 20 de julio de 1987".

Evacuados los trámites de Ley, la Sala procede a resolver el presente negocio, previa las siguientes consideraciones.

Para resolver si se ha producido la prescripción parcial de la obligación que alega el recurrente, es necesario definir la naturaleza de los contratos de arrendamiento de los cuales se deriva esta obligación. Un sector de la doctrina considera que la diferencia entre los contratos administrativos y los contratos civiles debe buscarse en el "régimen jurídico de los distintos vínculos contractuales, afirmando que los contratos administrativos se caracterizan por la existencia de cláusulas exorbitantes en relación con el derecho común o subordinación jurídica del particular a la administración, poniendo como ejemplo de ellas a la cláusula de caducidad". Sostiene Allan R. Brewer-Carías, citado por Miguel González Rodríguez en su obra La Contratación Administrativa en Colombia - Doctrina y Jurisprudencia, que las llamadas cláusulas exorbitantes "no son cláusulas en el sentido de que no son estipulaciones contractuales, sino que, en realidad, son manifestaciones del poder de acción unilateral propio de la administración ..., relacionadas con la posibilidad de adoptar decisiones unilaterales relativas a dirección, interpretación, incumplimiento, sanción, modificación unilateral y extinción ..., y provienen de los poderes propios de acción unilateral de la administración como gestora del interés público; por ello, por lo general, no necesitan estar pactadas expresamente, y se toman por medio de actos administrativos que gozan tanto del privilegio de la ejecutividad como de la ejecutoriedad, sin perjuicio de que sobre ellos se ejerza un control de legalidad por el juez administrativo". (Cfr. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Miguel, **La Contratación Administrativa en Colombia - Doctrina y Jurisprudencia**, 1a. ed., Librería Jurídicas Wilches, Colombia, 1990, pp. 8,12 y 13).

El señor Procurador de la Administración, al absolver una consulta que le hizo mediante nota No. DAL -7200-115-93, de 6 de abril de 1993, la Jefa de Asesoría Legal del Área Canalera del Ministerio de Vivienda expresa su opinión en torno a los contratos de arrendamiento celebrados por el Estado con un particular y señala que "los contratos de arrendamiento son por su naturaleza de derecho privado, sin embargo los contratos de arrendamiento de vivienda revertidas no tienen ese carácter sino el de contratos

administrativos porque el Estado persigue un fin público, contiene una serie de cláusulas exorbitantes al derecho privado y se trata del aprovechamiento de bienes de dominio público". (Consulta absuelta por el Procurador de la Administración, mediante la Nota No. C-84 de 28 de abril de 1993, en cumplimiento de la atribución que le otorga el ordinal 4 del artículo 348 del Código Judicial).

El contrato de arrendamiento al cual nos referimos fue celebrado por el Instituto de Fomento Económico (I.F.E.) y la sucesión de Cecilio Gerardo Sterling representada por Cecilia Ana Sterling de Rodríguez. El Instituto de Fomento Económico fue creado por la Ley 3 de 1953, pero una vez se creó el Banco de Desarrollo Agropecuario a través de la Ley 13 de 1973, los bienes y activos del Instituto de Fomento Económico pasaron a formar parte de los recursos del Banco, entre ellos el lote No. 690 de la Ciudad de Colón, razón por la cual se ha procedido al cobro coactivo de los canones de arrendamiento adeudados. La finalidad del Banco de Desarrollo Agropecuario es proporcionar financiamiento a los programas de desarrollo agropecuario y proyectos agro-industriales, dar asistencia crediticia a los productores del sector agropecuario de escasos recursos y sus grupos organizados y dar atención especial al pequeño y mediano productor, tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política.

El contrato de arrendamiento No. 974, al que nos referimos en este negocio (fs. 2-3), contiene una cláusula exorbitante que señala lo siguiente:

> "SEGUNDO: El término de este contrato será de Diez (10) años, contados desde el día 1o. de Julio de 1958 hasta el día 30 de Junio de 1967; pero El I.F.E. **se reserva el derecho de exigir su desocupación antes del vencimiento del término por motivos de utilidad pública o de interés social**, previa la indemnización legal correspondiente. El arrendatario renuncia expresamente al beneficio que le concede el artículo 1317 del Código Civil."

Además, el artículo 64 de la Ley No. 93 de 4 de octubre de 1973 que regula los contratos de arrendamiento, entre particulares, señala que: "Esta Ley no se aplicará en aquellos casos, en que sea parte, el Estado, los Municipios y las Entidades Autónomas, pero cuando los mismos sean arrendadores podrán acogerse a las normas sobre desahucio y lanzamiento de esta Ley".

Por tanto, no se aplica al Banco de Desarrollo Agropecuario, la Ley No. 93 de 1973, por ser una entidad autónoma, conforme al artículo 1 de la Ley No. 13 de 1973 cuyo tenor literal es el siguiente:

> "**Artículo 1**. Créase una empresa estatal, denominada Banco de Desarrollo Agropecuario, la cual tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno, sujeta a la orientación del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Tendrá la finalidad de proporcionar financiamiento a los programas de desarrollo agropecuario y proyectos agro-industriales. El Banco organizará la asistencia crediticia a los productores del sector agropecuario de escasos recursos y sus grupos organizados y dará atención especial al pequeño y mediano productor, tal como lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política".

Por todo lo expuesto, a juicio de la Sala, el contrato en estudio es un contrato administrativo en el cual el Estado se reserva la facultad de resolverlo administrativamente. Y si esto es así, no le asiste razón al excepcionante cuando indica que el término de prescripción aplicable al presente negocio es el establecido en el artículo 1704 del Código Civil ya que tratándose de un contrato administrativo o de concesión administrativa la obligación que se cobra es un crédito que no tiene plazo de prescripción fijado en ley especial, y que prescribe a los 15 años, conforme al artículo 1073, ordinal 2 del Código Fiscal.

Tal como lo señala el apoderado del Banco de Desarrollo Agropecuario, a foja 23 del expediente, conforme a las tarjetas de registros contables correspondiente al contrato No. 974, el día 31 de marzo de 1982 se abonó a la obligación de Cecilio Gerardo Sterling la suma de B/.684.72, por lo que hasta la fecha sólo han transcurrido 10 años desde el último abono efectuado y no está prescrito el crédito a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario. (fs.12).

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA NO PROBADA la excepción de prescripción de la acción para el cobro de arriendos de la finca urbana, identificada como Lote No. 690 Oeste, cuyo cobro se persigue dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a CECILIO GERARDO STERLING Y CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA, interpuesta por la firma forense Chen, Estrada y Wong, en representación de DALYS SEE, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, veintitrés (27) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Se encuentra en el despacho del Magistrado Sustanciador pendiente de decisión la Excepción de Falsedad de la Obligación interpuesta por la firma forense **CHEN, ESTRADA Y WONG**, en representación de **DALYS SEE**, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

En el libelo de dicha excepción, la parte actora solicita a este Tribunal que se declare probada la falsedad de la obligación reclamada en juicio por pago coactivo propuesto por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

La Sala observa que en el presente caso, no consta la documentación correspondiente, relativa al juicio ejecutivo por cobro coactivo que lleva a cabo la precitada entidad autónoma contra **DALYS SEE**, considerándose la misma indispensable para resolver la presente controversia.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOLICITA al Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación que remita a esta Corporación el expediente contentivo del proceso ejecutivo por cobro coactivo propuesto contra la señora DALYS SEE, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta Resolución.

Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE ROSAURA RODRÍGUEZ DE ARANDA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, LE SIGUE A MÁXIMO A. GUERRA, SARA C. DE GUERRA, TEODORO MATHEWS Y LUIS GARCÍA. MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA.

Honorables Magistrados de la Sala Tercera:

En la Tercería Excluyente interpuesta por el licenciado **ROBERTO ENRIQUE FUENTES** en representación de **ROSAURA RODRÍGUEZ DE ARANDA**, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el **INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS** le sigue a **MÁXIMO A. GUERRA**, **SARA C. DE GUERRA**, **TEODORO MATHEWS** y **LUIS GARCÍA**, debo informarles que me encuentro impedido de conocer del mismo, toda vez que el licenciado **ERWIN MOLINO** quien funge como Juez Ejecutor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, es mi hermano.

Esta solicitud la fundamento en lo dispuesto en numeral cuarto (4) del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, en conjunto con el numeral quinto (5) del artículo 749 del Código Judicial.

Las normas aludidas son del tenor siguiente:

"ARTICULO 78:

Son causas de impedimentos y recusación en los miembros del Tribunal de los contencioso-administrativo las siguientes:
...
4.-Tener interés en la actuación o tenerlo alguno de los parientes expresados en el inciso anterior".

"ARTICULO 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
...
5.Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo.
...
En vista de lo expresado solicito respetuosamente a mis colegas de la Sala, se me declare impedido para conocer de este negocio.

Panamá, 27 de julio de 1993.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO, INTERPUESTA POR LA FIRMA RUBIO Y RUBIO EN REPRESENTACIÓN DE AGRÍCOLA Y GANADERA EL BAYANO, S. A. DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LE SIGUE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El apoderado judicial especial de la empresa Agrícola y Ganadera el Bayano, S. A. ha presentado recurso de apelación contra la resolución de 4 de junio de 1992, expedida por la Magistrada Ponente de esta Sala y mediante la cual se declaró improcedente la excepción de fuerza mayor y caso fortuito interpuesta por Agrícola y Ganadera el Bayano, S. A. y otros, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que les sigue el Banco Nacional de Panamá.

La firma de abogados Rubio y Rubio renunció al poder que le otorgara la parte demandada por causa del incumplimiento en el pago de honorarios, según escrito que obra a foja 54 del expediente. El Magistrado Sustanciador de la apelación le imprimió a dicha renuncia el trámite previsto en el artículo 635 del Código Judicial y se fijó un término prudencial de 30 días a partir de las notificaciones para que el poderdante constituyera otro apoderado judicial, lo cual no hizo.

En vista de lo señalado en el párrafo anterior no se presentó escrito alguno en el que se sustente el recurso de apelación y se expliquen las razones de la inconformidad del recurrente con la resolución de primera instancia.

El resto de los Magistrados que integran la Sala considera que el razonamiento de primera instancia es correcto en cuanto a que conforme lo establece el artículo 1768 del Código Judicial la parte ejecutada no podía proponer incidentes ni presentar excepciones que no sean la de pago y prescripción porque en la escritura que consagra la hipoteca se renunció a los trámites del proceso ejecutivo.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 4 de junio de 1992, mediante la cual se declaró improcedente la excepción de fuerza mayor y caso fortuito interpuesta por Agrícola y Ganadera el Bayano, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. MARTÍN MOLINA, EN REPRESENTACIÓN DE BONLAC, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MELVA C. CANDELARIA ODREMAN VS BONLAC S. A. MAGISTRADO PONENTE: DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Lcdo. Martín Molina actuando en representación de BONLAC S. A., ha presentado escrito de desistimiento del recurso de casación laboral interpuesto contra la sentencia de 30 de enero de 1993, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral: Melva C. Candelaria Odreman -vs- Bonlac S. A.

La Sala observa que mediante Resolución de 25 de mayo de 1993, no se admitió el desistimiento presentado por el apoderado judicial de la parte demandada, ya que éste no se encontraba expresamente facultado para hacerlo. Una vez ejecutoriada dicha resolución, el Sr. Juan Ameglio, representante legal de Bonlac S. A., en escrito que consta a foja 16 del expediente contentivo de la demanda, otorgó poder especial para desistir al Lcdo. Martín Molina Rivera, y éste presentó, entonces, el 23 de junio de 1993, nuevo escrito de desistimiento. De dicho escrito se le dio traslado a la parte actora quien dejó pasar el término sin presentar observación alguna, por lo que se procede a determinar la admisibilidad del desistimiento.

Dado que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, señala que se puede desistir en cualquier estado del proceso, siempre que medie facultad expresa para ello, procede la Sala a admitir el desistimiento interpuesto.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado por el Lcdo. Martín Molina, en representación de BONLAC S. A., contra la sentencia de 30 de enero de 1993, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso Laboral: Melva C. Candelaria Odreman - vs - Bonlac, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR LA FIRMA JAÉN Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE SEVERINO HERRERA, CONTRA LA SENTENCIA DE 2 DE MARZO DE 1993, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MANUEL FALCÓN, CARLOS FALCÓN Y OTRO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

La firma de abogados Jaén y Asociados ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo el 2 de marzo de 1993, dentro del proceso promovido por Severino Herrera Herrera, a quien representa el recurrente, contra Manuel Falcón Herrera, Carlos Falcón Bustamante y otros. En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia recurrida y la resolución que corrige un error aritmético, y que condene a los demandados a pagarle al demandante las prestaciones reclamadas en la demanda e igualmente que se incluya en la condena al señor Manuel Falcón Herrera.

Se trata de un proceso laboral mediante el cual el demandante reclama de los demandados el pago de la suma de ciento dieciséis mil trescientos noventa y nueve (B/.116,399.00) en concepto de vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad, diferencia de salarios, domingos y horas extras. El juzgador de primera instancia

condenó a tres de los demandados a pagarle al demandante prima de antigüedad y salario por trabajo en días domingo y declaró probada la excepción de prescripción por prestaciones surgidas con posterioridad a un arreglo suscrito en el mes de junio de 1982. El Tribunal Superior de Trabajo modificó la sentencia de primera instancia y condenó a los señores Carlos, Omar y Manuel Falcón Bustamante a pagarle al demandante la suma de cuatrocientos ochenta y cuatro balboas con sesenta y ocho centavos (B/.484.68) en concepto de prima de antigüedad y confirmó la sentencia de primera instancia en todo lo demás.

El recurrente considera que la sentencia de segunda instancia ha infringido los artículos 8, 12, 14, 62, 63, 64, 65, 66, 82,87, 159, 197, 735, 737, 812, 33, 40, 48, 52, 54 y 224 del Código de Trabajo al igual que el artículo 1o. del Decreto de Gabinete No. 221 de 1971.

El Licdo. Julio Berríos de la firma Berríos y Berríos presentó escrito oponiéndose al recurso de casación en su calidad de apoderado judicial especial de los demandados.

La Sala pasa a examinar las infracciones que se imputan a la sentencia de segunda instancia.

El recurrente sostiene que se ha infringido el artículo 8 del Código de Trabajo porque el Tribunal Superior de Trabajo le otorgó valor a un convenio suscrito entre el demandante y los demandados que entrañaba renuncia de derechos.

Considera la Sala que no le asiste razón al recurrente por cuanto, como afirma el tribunal demandado a foja 335, el citado documento fue suscrito por el demandante y el demandado Manuel Falcón Bustamante, en presencia de un funcionario del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y el trabajador fue asistido por un abogado, el Licdo. Efraín Erick Angulo.

Es claro que la relación existente entre los señores Manuel Falcón Herrera y el señor Severino Herrera Herrera no fue de naturaleza laboral, según puede apreciarse en la escritura pública que obra a foja 264 del expediente y otras que prorrogan el plazo previsto en la misma en la que se celebró un convenio entre esas dos partes mediante el cual el señor Falcón Herrera concedió al señor Herrera Herrera el uso, administración y aprovechamiento de varios terrenos ubicados en el distrito de Guararé. Fue sólo con posterioridad al arreglo conciliatorio de 4 de junio de 1982 que las partes convinieron en modificar la actividad que ambos desempeñaban y la división por partes iguales del producto de la venta de leche ordeñada por el demandante. En ese convenio se señala que se pagaría al demandante la suma de mil doscientos balboas (B/.1,200.00).

Es claro, sin embargo, que en cuanto a las prestaciones previstas en ese convenio y otras provenientes de la relación de trabajo, se produjo la prescripción tal como lo señala el Tribunal Superior de Trabajo pues transcurrió más de un (1) año con posterioridad al 4 de junio de 1982 mientras el demandante propuso la demanda que fue presentada el 10 de julio de 1991, según consta en el reverso de los folios 3 a 7 del expediente.

De lo anterior resulta que no se han infringido los artículos 123, 14, 62, 63, 64, 65, 66, 87, 159 y 197 del Código de Trabajo. Las normas procesales invocadas se desestiman por referirse exclusivamente a errores in procedendo.

Tampoco se infringió el artículo 1 del Decreto de Gabinete 221 de 18 de noviembre de 1991, ni los artículos 33, 40, 48, 52, 54 y 224 del Código de Trabajo.

Es evidente que, aparte de la prescripción que fue acreditada en el proceso, el demandante tampoco probó en forma concreta y específica las horas extras trabajadas, ni los domingos laborados por él, según lo puntualizó correctamente el Tribunal Superior de Trabajo.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo el 2 de marzo de 1993, dentro del proceso laboral promovido por Severino Herrera Herrera contra Manuel Falcón Herrera, Carlos Falcón Bustamante y otros.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICDO. CARLOS E. GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NESTLÉ PANAMÁ, S.A. CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: NESTLÉ PANAMÁ, S.A. -VS- LUIS A- NÚÑEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Licdo. Carlos González ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo el 25 de marzo de 1993, dentro del proceso de reintegro promovido por Luis A. Núñez contra la empresa NESTLÉ PANAMÁ, S.A., a quien representa el recurrente. En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia recurrida y que deje sin efecto el auto de reintegro No. 56 de 30 de septiembre de 1992 dictado por la Juez de Trabajo de la Sexta Sección.

Se trata de un proceso de reintegro por violación del fuero sindical promovido por el señor Luis A. Núñez contra la citada empresa, la cual ha impugnado el

mandamiento de reintegro expedido por el juzgador de primera instancia. El Tribunal Superior de Trabajo confirmó el mandamiento de reintegro mediante la sentencia que ahora se impugna en el recurso de casación.

La Sala pasa a examinar las infracciones que se imputan a la sentencia de segunda instancia.

El apoderado judicial de la empresa empleadora considera que la sentencia por él impugnada ha infringido el artículo 213, literal C parte final del Código de Trabajo. Esta infracción se produce, según el recurrente, porque la empresa solicitó autorización para despedir a un grupo de trabajadores del Departamento de Hojalatería, fue autorizada para despedir a doce (12) de ellos, y entre los despedidos estuvo el señor Luis A. Núñez quien era de los de menor antigüedad en el departamento, pero al considerar el Tribunal Superior de Trabajo que debía reintegrarse al señor Núñez, por estar amparado por el fuero sindical, infringió la norma citada que ordena despedir en primer lugar a los trabajadores de menor antigüedad.

Es importante aclarar, en primer término, que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social es la institución que tiene competencia para resolver peticiones de autorización de despido por causas económicas aun en aquellos casos en que los trabajadores se encuentren amparados por el fuero sindical o por el fuero de maternidad. Esta posición ha sido la mantenida por los tribunales de trabajo por muchos años.

En el caso que nos ocupa es evidente que la empresa empleadora despidió al trabajador demandante en violación de las normas de preferencia de los trabajadores para permanecer en el empleo previstas en la parte final del literal C, del artículo 213 del Código de Trabajo. Es claro que los trabajadores amparados por el fuero sindical y las mujeres en estado de gravidez deben ser despedidos en último término, independientemente de que su antigüedad en el empleo sea menor que la de otros trabajadores. Se trata en este caso de medidas de protección al sindicalismo y la maternidad de la mujer trabajadora que nuestro ordenamiento vigente consagra por estimar de interés social la permanencia en el empleo de las personas que integran dichas categorías.

De lo anterior se colige que el despido del señor Luis A. Núñez se hizo en infracción del artículo 213, literal C del Código de Trabajo y por ello debe ser reintegrado a su empleo.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el día 25 de marzo de 1993, dentro del proceso laboral promovido por NESTLÉ PANAMÁ, S.A. contra LUIS A. NÚÑEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICDO. CARLOS DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE AVELINO SEGUNDO, CONTRA LA SENTENCIA DE 13 DE ABRIL DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: AVELINO SEGUNDO -VS- CONGREGACIÓN DE MISIONERAS DE LA CARIDAD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Dr. Carlos Del Cid ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo el 13 de abril de 1993, dentro del proceso promovido por el trabajador Avelino Segundo, a quien representa el recurrente, contra la Congregación de Misioneras de la Caridad. En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia de segunda instancia y que condene a la parte demandada a pagar al demandante las prestaciones previstas en la sentencia de primera instancia.

Se trata de un proceso laboral iniciado mediante demanda que fue presentada el 28 de abril de 1989 y en el cual el demandante pide que la parte demandada sea condenada a pagarle vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y la indemnización "por el despido injusto e indirecto" más recargo. El juzgador de primera instancia condenó a la parte demandada a pagar al demandante la suma de mil cuatrocientos cuatro balboas con sesenta y un centésimos (B/.1,404.61) en concepto de vacaciones y décimo tercer mes proporcionales e indemnización por renuncia por justa causa. Por su parte el Tribunal Superior de Trabajo modificó la sentencia de primera instancia y condenó a la parte demandada a pagar al demandante la suma de ciento veinte balboas con veintiocho centésimos (B/.120.28) en concepto de vacaciones y décimo tercer mes proporcionales, más intereses y costas en un 5%.

La Sala pasa a examinar las infracciones que se imputan a la sentencia de segunda instancia.

El apoderado judicial del trabajador considera que la sentencia por él impugnada ha infringido los artículos 214, 223, 225, 735 y 737 del Código de Trabajo.

En cuanto a la primera infracción el recurrente sostiene que la misma se ha producido en el concepto de interpretación errónea ya que el Tribunal Superior de Trabajo sostiene que la renuncia con causa justificada debió constar por escrito y en ella se debieron consignar los hechos en que se fundamentaba la misma.

Considera la Sala que no se ha producido esta infracción porque lo que hizo el Tribunal Superior de Trabajo no fue más que aplicar el artículo 222 del Código de Trabajo dándole una interpretación extensiva ya que si el mismo prescribe que la

renuncia sin causa justificada debe hacerse por escrito es lógico entender que si el trabajador renuncia con causa justificada también debe hacerlo por escrito. En todas las renuncias el trabajador debe exponer por escrito la causa que motiva su separación y si dirige una carta a la empresa en la que simple y llanamente le pone de manifiesto que renuncia a partir de determinada fecha se entiende que la renuncia es sin causa justificada. No hay que perder de vista que esta Sala, mediante sentencia de 29 de octubre de 1991 que declaró la nulidad de algunos artículos del Decreto Ley No.14 de 7 de mayo de 1990, le dio una nueva redacción al artículo 1o. de dicho decreto, haciendo uso de la potestad que le atribuye el artículo 203 de la Constitución a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el fin de asegurar que el Ministro de Trabajo y Bienestar Social puede ejercer un mayor control sobre las renuncias y rechazar la ratificación de las mismas cuando considere que se ha ejercido sobre el trabajador fuerza o que ha mediado error del trabajador sobre la naturaleza de su acto. De allí pues, que todas las renuncias deben constar por escrito y que aquellas en las que se invoque una justa causa prevista en el artículo 223 del Código de Trabajo debe contener una exposición de los hechos que dan lugar a la renuncia, a fin de que el empleador pueda conocerlos y prepararse para el proceso laboral correspondiente evitándose así que se le coloque en estado de indefensión, para ajustarse a la garantía constitucional del debido proceso que ampara tanto a trabajadores como empleadores. Se desestima, pues, este cargo.

Tampoco se han infringido, a juicio de la Sala, los artículos 223 y 225 del Código de Trabajo ya que el trabajador no acreditó que hubiera renunciado por escrito. Por el contrario, a foja 20 del expediente obra una nota de despido fechada el 9 de agosto de 1988 fundamentado en que el trabajador se ausentó del trabajo y abandonó el mismo, rehusándose a retornar.

De esta forma, todo en el expediente indica que el trabajador fue despedido. Se rechazan pues estos cargos.

Por último, tampoco se han producido infracciones a los artículos 735 y 737 del Código de Trabajo los cuales, además, hacen referencia a actuaciones procesales y valoraciones de pruebas efectuadas autónomamente por los juzgadores de segunda instancia.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el día 13 de abril de 1993 por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral promovido por el señor AVELINO SEGUNDO contra la CONGREGACIÓN DE MISIONERAS DE LA CARIDAD.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICDA. MARITZA ROYO, EN REPRESENTACIÓN DE ORLANDO ORTIZ PONCE, CONTRA LA SENTENCIA DE 10 DE MARZO DE 1993, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ORLANDO ORTIZ PONCE -VS- LABORATORIO CONMEMORATIVO GORGAS Y OTRAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ,VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

La Licda. Maritza Royo ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo el 10 de marzo de 1993, dentro del proceso promovido por Orlando Ortíz P., a quien representa la recurrente, contra el Laboratorio Conmemorativo Gorgas y otras. En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia de segunda instancia y que condene a la parte demandada a pagarle al demandante la suma de doce mil ochocientos doce balboas con ochenta y seis centésimos (B/.12,812.86) en concepto de indemnización más costas, interese y gastos.

Se trata de un proceso laboral en el cual la parte demandante pide que la parte demandada sea condenada a pagarle la suma arriba mencionada en razón de la indemnización prevista en el artículo 225 del Código de Trabajo, a la que, según la demandante, tiene derecho por haber renunciado de la empresa con causa justificada.

El juzgador de primera instancia no accedió a la pretensión formulada en la demanda y el Tribunal Superior de Trabajo confirmó en todas sus partes la sentencia pronunciada por el Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección.

El apoderado judicial sustituto de la parte demandada Licdo. Joaquín A. Díaz S. presentó escrito mediante el cual se opone a los argumentos que se plantean en el recurso de casación.

La Sala pasa a examinar las infracciones que se endilgan a la sentencia de segunda instancia.

El recurrente considera que la sentencia por él impugnada ha infringido el artículo 223, numerales 2 y 12 del Código de Trabajo en el concepto de interpretación errónea. Estima dicho abogado que la empresa demandada se abstuvo de pagarle al demandante su salario completo porque le dedujo del mismo los pagos correspondientes al impuesto sobre la renta, pero no remitió las sumas retenidas al gobierno nacional. Por su parte, el apoderado judicial de la empresa demandada señala que las citadas sumas retenidas al demandante fueron consignadas en el exterior en seguimiento de instrucciones dadas a los contribuyentes por el gobierno presidido por el señor Erick Arturo Del Valle en 1989 y que, posteriormente, restablecida en Panamá una forma

democrática de gobierno, las citadas sumas fueron transferidas a la Dirección General de Ingresos.

Considera la Sala que no le asiste razón a la parte recurrente ya que la empresa demandada cumplió con la obligación que le imponen las leyes fiscales y laborales de retener del salario pagado al trabajador las sumas que éste debe cubrir en concepto de impuesto sobre la renta. El trabajador recibió el monto neto del salario que le corresponde percibir, una vez hechas las deducciones legales. De esta forma, el monto neto que usualmente recibe el trabajador le fue pagado por el empleador.

El hecho de que un empleador no entregue al Estado las sumas que haya retenido del salario del trabajador en concepto de Impuesto sobre la Renta en cumplimiento de la obligación que le imponen las normas tributarias puede ser causa justificada de renuncia si el trabajador sufre algún perjuicio. En el caso de las retenciones relacionadas con el impuesto sobre la renta el perjuicio que podría recibir el trabajador puede consistir en el recargo de 10% y los intereses por mora en el pago del impuesto sobre la renta, a razón de 1% mensual, a los que se refiere el Código Fiscal, o también el hecho de no poder realizar alguno de los actos para los cuales se requiere el Paz y Salvo del Impuesto sobre la Renta por no haber podido obtener dicho documento. En el caso que nos ocupa el trabajador demandante no acreditó haber sufrido ninguno de estos perjuicios por lo que estima la Sala que no se configuró una causal de renuncia con causa justificada. Se desestiman, pues, estos cargos.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia expedida el 10 de marzo de 1993 por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral interpuesto por el señor ORLANDO ORTIZ PONCE contra el LABORATORIO CONMEMORATIVO GORGAS y OTRAS.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA ORDOÑEZ, SÁNCHEZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CERVECERÍA NACIONAL, S. A. Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 1992, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CERVECERÍA NACIONAL y DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. -vs- ELIECER RUDAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

La firma forense Ordoñez, Sánchez y Asociados, en representación de Cervecería Nacional, S. A. y Distribuidora Comercial, S. A., interpuso oportunamente recurso de Casación contra la Sentencia de 21 de agosto de 1992, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, mediante la cual se REVOCA la Sentencia No. 4 de 30 de enero de 1992, dictada por el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección para resolver la solicitud de autorización de despido hecha por las empresas Cervecería Nacional, S. A. y Distribuidora Comercial, S. A., para despedir a su trabajador ELIECER RUDAS CONCEPCIÓN, amparado por el fuero sindical.

En el referido proceso laboral el Tribunal de Primera Instancia resolvió conceder la autorización a las Empresas Cervecería Nacional, S. A. y Distribuidora Comercial, S. A., para despedir al señor Eliécer Rudas Concepción, por haber incurrido en la causal de despido contenida en el artículo 213, acápite A, ordinal 5 del Código de Trabajo, que se refiere a la comisión, por parte del trabajador, de faltas graves de probidad y honradez o delito contra la propiedad, en perjuicio directo del empleador, y durante la ejecución del contrato.

El Tribunal Superior al revisar la autorización del Juez a-quo revocó la Sentencia de primera instancia con fundamento en las siguientes razones:

> "Según se aprecia en el caudal probatorio, la demandante descansa su probanza en las copias autenticadas de las declaraciones indagatorias que le tomaron a los señores Emérito Chávez Guillén y Manuel Salvador Quintero. En ambos casos la demandante procuró ratificar las mismas ante el Juez de Trabajo, tal como lo ordena el Artículo 815 del Código de Trabajo, sin embargo, sólo logró que se ratificara la declaración rendida por Emérito Chávez Guillén, mientras que la otra fue negada por el señor Manuel Salvador Quintero.
> De acuerdo con sus generales, el señor Chávez es oficial de bodega y se declara culpable de haber participado en el hurto de cajas de botellas vacías de pintas en dos ocasiones, una con Luis Manuel Ramos Coronado y la otra con Aristides Camarena. A parte de señalar la fecha y el monto de lo recibido en cada caso, menciona después muy ligeramente a los conductores Teodoro Salcedo y Eliécer Rudas, y sobre este último afirma que conjuntamente con su ayudante le propusieron participar en el hurto.
> Si bien la referencia al demandado Eliécer Rudas es muy endeble, no cabe duda de que la declaración original del señor Manuel Salvado Quintero era más acabada, en la medida de que mencionaba el lugar y cómo se llevaba a efecto lo investigado; observamos que en esa declaración se dice que el demandado fue visto vendiendo las botellas vacías, a la misma persona que le vendía el conductor Aristides Camarena.
> No obstante lo anterior, cuando el señor Manuel Salvador Quintero acudió al Tribunal de Trabajo, no solamente negó lo que antes había declarado en la Fiscalía Auxiliar, sino que afirmó que él era ayudante del señor Camarena y no de Eliécer Rudas, y al respecto del por qué de su

declaración anterior, comentó que él fue obligado a decir aquella versión obligado por el Licenciado José Felipe Cedeño, quien actuaba como abogado de la empresa" (fs. 94-95).

Señala el recurrente en su escrito de casación, que la resolución de segunda instancia viola, por indebida aplicación el artículo 213, acápite A, numeral 5 que a la letra señala:

"Artículo 213. Son causas justificadas que facultan al empleador para dar por terminada la relación de trabajo:
A. De naturaleza disciplinaria.
...
5. Incurrir el trabajador, durante la ejecución del contrato, en faltas graves de probidad u honradez, o la comisión de delito contra la propiedad, en perjuicio directo del empleador".

La Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que "una de las características de la legislación laboral panameña es que no se requiere la sentencia penal previa para calificar la causal que contiene el ordinal 5, acápite A, del artículo 213 del Código de Trabajo. En nuestra legislación dicha imputación no trae aparejada la necesidad de una prejudicialidad penal". (Sentencia de 6 de noviembre de 1974 de la Corte Suprema de Justicia en el caso Marco A. Baruco -vs- Motores Datsun, S. A.). Sin embargo, aunque el juez en la jurisdicción laboral debe formarse su propia convicción sin necesidad de una sentencia penal previa, la falta de probidad u honradez debe estar comprobada, para que constituya causal justificada de despido.

Considera el casacionista que la sentencia impugnada viola el artículo 732 del Código de Trabajo que trata sobre la apreciación de las pruebas por el juez según las reglas de la sana crítica, fundamentando el concepto de la violación de la siguiente manera:

"1. Las veces que se trató de lograr la notificación o traslado de las demandas al Sr. ELIECER RUDAS CONCEPCIÓN, quien a pesar de tener casa por prisión, nunca se encontraba en ella o se negaba a notificarse, al extremo que se tuvo que pedir apoyo a otras autoridades para lograr su notificación;
2. Al negarse el valor probatorio que merecía el testimonio de Chávez Guillén, copartícipe confeso que expresa categóricamente al Sr. ELIECER RUDAS CONCEPCIÓN en la comisión del ilícito;
3. Al otorgarle valor probatorio a las declaraciones de Manuel Salvador Quintero y Emérito Chávez Guillén, copartícipe del ilícito, que sin reparo niegan declaraciones indagatorias y juramentadas y quienes mantienen en contra de las empresas demandadas por su despido. Adicionalmente, a ambos, se les están solicitando auto de llamamiento a juicio, en la vista Fiscal No. 312 de la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial de Panamá por su participación.
4. Que evidentemente, los testimonios de Manuel Salvador Quintero y Emérito Chávez Guillén no tiene otro propósito de encubrir su propia actuación y la de Rudas Concepción;
5. Finalmente, el Tribunal Superior de Trabajo en su argumentación y/o valorización de las pruebas pareciera apuntar a tratar de condicionar la decisión de la culpabilidad o no de ELIECER RUDAS CONCEPCIÓN, conforme las reglas de la Jurisdicción Penal, en donde a pesar de estar en juego la libertad del demandado, esta siendo, por los mismos hechos o circunstancia, pedida su llamamiento a juicio" (fs. 3-4).

El cargo de violación del artículo 732 del Código de Trabajo debe analizarse en conjunto con el cargo de violación de la norma substantiva acusada que es el artículo 213 acápite A, ordinal 5 ibidem.

La Sala considera que no constituye indicio en contra del trabajador, el hecho de que no se le pudo notificar la demanda, sino después de varios intentos. El Código de Trabajo establece la forma en que debe hacerse la notificación personal cuando las partes excusen, manifiestamente, pero no sanciona esta conducta (artículo 886 del Código de Trabajo).

Manifiesta además el casacionista que el Tribunal Superior ha tratado de "condicionar la decisión de culpabilidad o no de ELIECER RUDAS CONCEPCIÓN, conforme las reglas de la Jurisdicción Penal".

Para resolver el recurso promovido debe determinarse si está probada o no la falta grave de probidad u honradez que la casacionista le imputan al trabajador Eliécer Rudas Concepción, y en caso afirmativo, casar la sentencia y conceder a la Cervecería Nacional S. A. la autorización para despedir al señor Eliécer Rudas Concepción.

El señor Eliécer Rudas Concepción, ha trabajado 16 años para las empresas Cervecería Nacional, S. A. y Distribuidora Comercial, S. A., y está amparado por el fuero sindical por haber sido electo Sub-secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cervecera de Panamá, para el período 1992 y 1993. (fs. 25). Es por esto, que las referidas empresas han solicitado su desafuero, para despedirlo con causa justificada, "por haber incurrido este trabajador, durante la ejecución de un contrato, en faltas graves de probidad u honradez".

Según las pruebas que hay en el expediente hay dos testigos que vinculan al trabajador Eliécer Rudas Concepción con las faltas de probidad y honradez cometidas contra la empresa Cervecería Nacional, S. A. y Distribuidora Comercial S. A. El primer testimonio es del señor Manuel Salvador Quintero, quien rindió declaración indagatoria el 8 de mayo de 1991 ante el Fiscal Auxiliar y como en esta diligencia imputó la comisión de actos ilícitos a varias personas, en cuanto a estas, ratificó bajo juramento esos cargos. En relación con Eliecer Rudas, este testigo declaró:

"Señor Fiscal, deseo agregar que también en una ocasión en el mes de diciembre del año pasado vi por el área de Don Bosco al conductor del camión No. 243, señor ELIECER RUDAS, con sus ayudantes uno de apellido CASTILLO y el otro, mejor dicho él andaba con un solo ayudante que era CASTILLO, y los vi en el mismo lugar donde nosotros habíamos ido a vender

las cajas de botellas de pintas vacías y estaban haciendo lo mismo, eso es todo" (fs. 13)...
"... en el mes de diciembre del año pasado (1990), vi por el área de Don Bosco, exactamente en el lugar donde ARISTIDES CAMARENA iba a vender las cajas de botellas pintas vacías; al conductor del auto o camión de la empresa No. 243 señor ELIECER RUDAS, con el ayudante de nombre o apellido CASTILLO y estaban haciendo lo mismo, es decir, vendiendo cajas de botellas de pintas vacías al mismo chino que le compraba a ARISTIDES, eso era lo que quería decir" (fs. 15).

A fojas 70 del expediente laboral se lee una declaración rendida ante Notario por el testigo Manuel Salvador Quintero en la cual manifiesta que se retracta de lo declarado ante el señor Fiscal Auxiliar, en los siguientes términos:
"SEGUNDO: En esas declaraciones dije que en una ocasión había visto al conductor del Camión No. 243 señor ELIECER RUDAS CONCEPCIÓN con su ayudante BIENVENIDO CASTILLO vendiendo cajas de botellas vacías, lo cual es absolutamente falso, y lo dije porque fui obligado por el licenciado JOSÉ FELIPE CEDEÑO BERNAL, ya que si no lo decía así, me iban a meter preso; por lo que manifiesto que me retracto de lo dicho sobre los señores ELIECER RUDAS Y BIENVENIDO CASTILLO" (fs. 70).

En el acto de la audiencia laboral el testigo Manuel Salvador Quintero Cuadra se retractó de lo dicho en su declaración jurada ante la Fiscalía Auxiliar, en contra de Eliecer Rudas y se ratificó en la declaración que rindió ante el Notario Décimo del Circuito de Panamá (fojas 60 y 61 del negocio laboral).

Además este testigo declaró en el acto de la vista oral de la causa:
"C.- No laboró en la Cervecería Nacional porque el día 8 de mayo, me llevo el señor Sergio Quintero a una oficina a preguntarme sobre lo que estaba pasando en el camión o sea con el camión, yo le dije que yo no sabía nada, no sabía de que me hablaba, luego me preguntaron nuevamente, yo le dije que no, que no sabía nada, luego me dijo un señor de nombre Roberto Guerra que si yo no hablaba, me iba a dar tres minutos para que yo hablara de lo contrario me iban a llevar preso, en ese momento pensé en mis hijas, y de allí llego el señor Felipe Cedeño y me llevó a su oficina, en ese momento ya me sentía un poco nervioso y tuve que hablar cosas que no eran, comencé a hablar del compañero ELIECER RUDAS cuando eso era falso. En el momento que esta ahí, el señor Felipe Cedeño tomó el teléfono insinuando que estaba hablando con una persona y en forma amenazante le decía que lo metiera preso, (preso) pero (esta) esta persona no sabía quien era. Yo no trabajo en la empresa porque me despidieron".

Es decir que según el testigo se vio obligado a declarar contra Eliecer Rudas Concepción porque el 8 de mayo Sergio Quintero, Roberto Guerra y Felipe Cedeño lo amenazaron diciéndole que si no lo hacía lo "iban a llevar preso" y él se puso nervioso y pensó en sus hijos, sin embargo, la declaración de la cual se retracta la rindió ese mismo día en el despacho del Fiscal Auxiliar de la República y no ante las personas que según afirma lo amenazaron y atemorizaron.

En el curso de la declaración rendida en la audiencia laboral el testigo Quintero también afirmó que lo que se lee en la declaración que rindió ante la Fiscalía Auxiliar él lo dijo "pero es falso porque me encontraba muy nervioso, estaba nervioso el día ese, no sabía que decir, después llegó ese (sic) el señor Felipe Cedeño o sea que él llegó con una fotografía ... luego me preguntó a mí, yo le dije que no sabía nada porque yo no había visto la foto, eso es todo".

Al analizar las razones invocadas como motivo de su retractación debe dudarse de la sinceridad del testigo Manuel Salvador Quintero porque si fue amenazado y atemorizado por particulares, como él afirma, ante el Fiscal Auxiliar compareció a declarar solo y cuando se presentó Felipe Cedeño, a la única pregunta que éste le hizo, le contestó negativamente. Es decir que cuando declaró ante la autoridad pudo hacerlo libremente.

Otra prueba que vincula al señor Rudas Concepción con las faltas de probidad y honradez que se le imputan la constituye la declaración rendida por el trabajador confeso Emérito Chávez Guillén, oficial de bodega, quien recibía sumas de dinero como producto de la venta ilícita de las cajas de botellas vacías, de propiedad de las empleadoras, y declaró el 10 de mayo de 1991, ante el Fiscal Auxiliar, lo siguiente:
"... hay un oficial de bodega que se llama RODOLFO VÁLDEZ, que desde hace rato como aproximadamente ocho a diez meses, substraen de la empresa las cajas vacías de botellas de pintas y las venden al igual que hacían LUIS MANUEL RAMOS CORONADO Y ARISTIDES CAMARENA, VÁLDEZ hacía esto con los conductores ARISTIDES CAMARENA, TEODORO SALCEDO, ELIECER RUDAS y conductores que se me escapan sus nombres de la mente en estos momentos, hay otro oficial de bodega de nombre JUAN BOSCO BATISTA, que se dedica a la misma operación en asocio de los conductores de los camiones de la empresa" (fs. 17).

Estos cargos fueron ratificados por el testigo Chávez Guillén, bajo la gravedad del juramento, ante el Fiscal Auxiliar y el Juez de la causa, en el acto de la audiencia, en la cual además declaró:
"... C.- Antes mi posición dentro de la administración de bodega era en la oficina, estando en la oficina me trasladaron a chequear camiones, en el mes de febrero de 1990 que entre de vacaciones como una o dos semanas después, llegó el señor Rudas con su ayudante preguntando por el señor Juan Bosco Batista, en esta averiguaciones por el señor este, sobre el señor Bosco, lo hicieron durante tres días preguntando por él, viendo la insistencia de que porque preguntaban por el señor Bosco, le pregunte si lo podía ayudar o que deseaban y me dijeron que tenía que devolverle una carga o sea cerveza llena, esas devoluciones se dan cuando el cliente las devuelve, le conteste que eso lo podría hacer cualquier oficial recibir la carga y me dijeron que no, que era solamente Juan Bosco Batista; empezó a malíciar por decir algo, al día siguiente o a los dos días, le pregunte al señor Rudas y su ayudante que si se traían algo que ya ellos sabían que era, me lo confirmaron y me lo propusieron".

En materia laboral un testigo no puede formar por sí solo plena prueba, no obstante se tendrá por prueba suficiente cuando, a juicio del juzgador, declare con absoluta sinceridad y pleno conocimiento de los hechos, según las circunstancias especiales del caso (artículo 812 del Código de Trabajo).

El Juez a-quo, quien recibió el testimonio de Emérito Chávez, al hacer la evaluación del mismo consideró que el testigo fue categórico, sincero, que sus deposiciones "las formula con pleno conocimiento de causa" (f. 74) y que "del conjunto testimonial del citado señor se observa un sincero arrepentimiento de los hechos en que él se vio involucrado y a la vez cumple con un acto moral y de honestidad para no solo con su persona, sino para la empresa ... al igual que a la sociedad que le exige un comportamiento de acuerdo con la equidad moral y buena fe en que se deben conducir los ciudadanos probos" (f.75).

Es decir que por una parte está la declaración del testigo Emérito Chávez recibida por el Juez a-quo, quien califica el testimonio de sincero, categórico, vertido con pleno conocimiento de los hechos ilícitos acerca de los cuales trata, en los que el testigo estuvo involucrado. y de los que se manifestó arrepentido, declaración que a juicio del Juez a-quo constituye por sí sola prueba suficiente de la comisión de las faltas de probidad y honradez que se imputa al trabajador Rudas; y por otra parte, está la declaración de Manuel Salvador Quintero, quien al retractarse de los cargos hechos contra Rudas, fundamenta su retractación en razones de hecho que no merecen entero crédito.

Tanto en la denuncia como en la declaración que amplió el señor José Felipe Cedeño Bernal (fs. 7-10), no se vincula al señor Eliécer Rudas Concepción con la asociación ilícita de trabajadores de la Cervecería Nacional S. A. y Distribuidora Comercial S. A. que se dedicaba a la venta de casilleros y botellas vacías de propiedad de las empresas sin embargo para poder perpetrar los hechos que se imputa a los trabajadores de Cervecería Nacional S. A. y Distribuidora Comercial S. A. era necesaria una organización completa, integrada por conductores, oficiales de bodega y ayudantes de reparto.

La Sala comparte la valoración que el Juzgador a-quo hace de los testimonios analizados y estima que estos constituyen prueba de que el trabajador Eliecer Rudas Concepción cometió las faltas graves de probidad u honradez que se le imputa, en perjuicio de las empleadoras, durante el cumplimiento del contrato de trabajo, causal de despido a que se refiere el ordinal 5 Acápite A del artículo 213 del Código de Trabajo, por lo que prosperan los cargos de violación directa por omisión de ese artículo y de violación directa por indebida aplicación del artículo 732 ibidem.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 21 de agosto de 1992, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral CERVECERÍA NACIONAL, S. A. y DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. -vs- ELIECER RUDAS CONCEPCIÓN; y CONFIRMA la Sentencia No.4 dictada por el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección el día 30 de enero de 1992.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RODRIGO MOLINA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICDO. ALVARO MUÑOZ FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE SANTANA GÓMEZ O SANTANA GÓMEZ QUINTERO, CONTRA LA SENTENCIA DE 15 DE ABRIL DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: SANTANA GÓMEZ Ó SANTANA GÓMEZ QUINTERO -VS- CHIRIQUI LAND COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Licdo. Alvaro Muñoz Fuentes ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 15 de abril de 1993 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral promovido por Santana Gómez a quien representa el recurrente contra la empresa Chiriquí Land Company.

Se trata de un proceso laboral en el cual el demandante pide que la demandada sea condenada a pagarle la suma de tres mil novecientos ochenta y nueve balboas con ochenta y tres centésimos (B/.3,989.83) en concepto de prestaciones que se dicen no pagadas en la liquidación que se efectuó al darse por terminada la relación de trabajo, más intereses, recargos y costas.

El juzgador de primera instancia absolvió a la empresa demandada de las reclamaciones formuladas en su contra y el Tribunal Superior de Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia.

El Licdo. Pedro Cedeño, apoderado judicial de la empresa demandada, presentó escrito mediante el cual se opone a los argumentos planteados en el recurso de casación.

La Sala pasa a examinar las infracciones que se endilgan a la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo.

El recurrente considera que se han infringido los artículos 149 y 732 del Código de Trabajo. La primera infracción que, según el recurrente, se ha producido en forma directa consiste en que la empresa al liquidar la indemnización que acordó pagarle al demandante, con base en un acuerdo colectivo de 15 de julio de 1988, no tomó en cuenta el promedio de los últimos 6 meses efectivamente trabajados. Considera la Sala que esta infracción no se ha producido. Es evidente que el trabajador demandante laboró en forma efectiva en la empresa hasta el mes de octubre de 1981 fecha a partir de la cual quedó

incapacitado para prestar servicios. Fue nueve (9) años más tarde, el 25 de junio de 1990, que se dio por terminada la relación de trabajo, según documento que obra a foja 27 del expediente. Es evidente que el trabajador no tenía derecho, de conformidad con la ley, a la indemnización que se pactó en el acuerdo de 25 de junio de 1990 y que los últimos 6 meses anteriores a la fecha de exigibilidad del derecho (enero a junio de 1990), el demandante no había laborado y no había recibido salario de la empresa y los últimos 6 meses efectivamente trabajados por el demandante (junio a noviembre de 1981) hubieran arrojado un salario promedio inferior a aquél utilizado por la empresa que demostró, como lo señala el Tribunal Superior de Trabajo, buena fe en el cálculo de esta prestación. Se desestima, pues, este cargo.

En cuanto a la infracción del artículo 732 relacionado con las reglas de la sana crítica, no ve la Sala en qué consiste la supuesta falta de lógica de la decisión de segunda instancia a que alude el demandante. Por el contrario la decisión se ajusta a derecho.

En consecuencia, la Sala Tercera (Laboral), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el 15 de abril de 1993, dentro del proceso laboral promovido por SANTANA GÓMEZ ó SANTANA GÓMEZ QUINTERO -vs- CHIRIQUI LAND COMPANY.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAFAEL E. COLLINS NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JACQUELINE DE MEDINA, CONTRA LA SENTENCIA DE 5 DE MARZO DE 1993, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JACQUELINE DE MEDINA -VS- DROGUERÍA ARROCHA, S. A. Y ARROCO, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Rafael E. Collins Núñez, en representación de JACQUELINE DE MEDINA, ha interpuesto recurso de casación laboral contra la sentencia, de 5 de marzo de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo mediante la cual se confirma la Sentencia No. 4, de 3 de febrero de 1993, del Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, que REVOCA la orden de reintegro de la trabajadora JACQUELINE DE MEDINA, dictada en el proceso laboral de reintegro por fuero maternal promovido por JACQUELINE DE MEDINA contra DROGUERÍA ARROCHA, S. A. y ARROCO, S. A.

El Juez de primera instancia, mediante auto No. 339 de 12 de noviembre de 1992, resolvió ordenar a las empresas Droguería Arrocha, S. A. y/o (ARROCO, S. A.) que reintegrarán a su trabajo, de inmediato, a la señora Jacqueline de Medina por considerar ilegal su despido por violación del fuero maternal y les ordenó el pago de los salarios caídos a partir del 28 de octubre de 1992, fecha en que se presentó al juzgado el certificado médico a que se refiere el artículo 106 del Código de Trabajo (fs. 19).

Posteriormente, mediante escrito presentado por la empresa demandada se impugnó del auto de reintegro y se presentó excepción de prescripción, argumentando que la señora Jacqueline de Medina no tenía derecho a invocar el mencionado fuero.

El Juez a quo, mediante sentencia de 4 de febrero de 1993, resolvió el recurso de impugnación revocando la orden de reintegro "en virtud de que la trabajadora no había sido despedida, y de que dejó transcurrir más de tres meses, luego de terminada la relación laboral, sin mostrar a la empresa demandada, o a cualquier autoridad de trabajo el certificado médico en el que se hacía constar su estado de embarazo, perdiendo de esta manera su derecho a ser reintegrada".

El Tribunal Superior de Trabajo, al resolver la apelación interpuesta por la trabajadora, CONFIRMO la Sentencia No. 4, de tres de febrero de 1993, del Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección. En su sentencia el Tribunal expuso:

> "Las partes dieron por terminada la relación de trabajo a partir del día 1o. de mayo de 1992, por lo que la trabajadora tenía hasta el 21 de mayo para presentar el certificado médico a su empleador o a cualquier autoridad administrativa de trabajo. De allí contaba hasta el 21 de agosto de 1992 para exigir el reintegro.
> Consta en el proceso que no fue sino hasta el 4 de septiembre de 1992 que la trabajadora citó a la empresa a la Sección de Conciliación Individual del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, y en dicho acto no consta que la trabajadora hubiera presentado el certificado médico que establece el artículo 106 del Código de Trabajo.
> La demanda en el presente proceso fue presentada el 28 de octubre de 1992, en consecuencia para esa fecha ya se le habían vencido a la trabajadora todos los términos establecidos en el artículo 106 del Código de Trabajo para exigir el reintegro.
> Adicionalmente, el Tribunal observa que la relación de trabajo concluyó por medio de un mutuo acuerdo suscrito entre las partes, visible a fojas 30 del expediente, y no se ha establecido a lo largo de todo el proceso que al momento de su firma la voluntad de la trabajadora hubiera estado viciada, por lo que el mismo mantiene toda su validez" (fs. 91).

Manifiesta el casacionista que la sentencia impugnada viola los artículos 106, 600 y 210 del Código de Trabajo.

El apoderado judicial de la demandante explica el concepto de la violación del artículo 106 argumentando que el Tribunal ha incurrido en interpretación errónea, ya que

cuando la demanda se presentó, no se había vencido el término señalado para solicitar el reintegro. Señala que al producirse el despido su representada desconocía que se encontraba en estado de gravidez, razón por la cual no podía excepcionar el fuero de maternidad, pero que posteriormente en fecha oportuna, una vez se enteró de su embarazo, "se le planteó a la señora Telma de Donado quien le señaló desde un inicio que la empresa no tenía ninguna obligación con su persona"; acudió al Sindicato de Trabajadores de la Empresa, quienes no lograron que la reintegraran, por lo que tuvo que recurrir al Ministerio de Trabajo, según consta en las dos citaciones -foja 10 del expediente laboral-, donde se señala que el reintegro se pide por encontrarse la trabajadora en estado de gravidez. Además, agrega el casacionista, las autoridades del Ministerio de Trabajo no van a expedir una boleta si no se le acredita previamente el embarazo con el certificado médico (fs. 3-4).

El artículo 106 del Código de Trabajo, prohíbe que se despida a una mujer en estado de gravidez, a no ser que sea por causa justificada y con autorización judicial. En caso de que la trabajadora reciba notificación de **despido o de terminación de su relación de trabajo**, sin cumplir con los requisitos señalados, la trabajadora deberá presentar **al empleador o a cualquier autoridad de trabajo** un certificado médico sobre su gravidez, dentro de los **veinte días** siguientes al de la notificación mencionada. Si así lo hiciere la trabajadora tiene derecho a ser reintegrada inmediatamente con derecho a sus remuneraciones a partir de la fecha del **despido**. Vencido el plazo de veinte días la trabajadora tiene hasta **tres meses** para exigir el reintegro

Según consta a foja 30 del expediente laboral, la trabajadora cesó en sus labores desde el **1 de mayo** de 1992, en razón del mutuo acuerdo firmado por Telma de Donado (la empleadora Arroco, S.A), y la señora **JACQUELINE DE MEDINA**.

El artículo 106 del Código de Trabajo, que consagra el fuero de maternidad y prohíbe que la trabajadora que se encuentre en estado de gravidez sea despedida de su empleo, no prohíbe que ésta pueda dar por terminada su relación de trabajo, por mutuo consentimiento, tal como sucedió en el caso que nos ocupa.

Le asiste razón al Tribunal Superior de Trabajo cuando afirma que la trabajadora exigió el reintegro, extemporáneamente, después del 1 de agosto de 1992, o sea, más de tres meses después de la fecha de la terminación de la relación laboral. Las pruebas allegadas al proceso laboral así lo demuestran. A fojas 8 y 10 del expediente que contiene ese proceso se lee 2 boletas extendidas por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social a petición de Jacqueline de Medina para citar a la empleadora, ambas fechadas después del 1 de agosto de 1992 y un certificado médico de gravidez que se lee en los antecedentes está fechado el 8 de agosto de 1992.

Por tanto, no prospera el cargo de violación del artículo 106 del Código de Trabajo, por la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo que así lo reconoce.

El casacionista expresa que estima violado el artículo 210 del Código de Trabajo, el cual preceptúa que la relación de trabajo termina por el mutuo consentimiento, siempre que conste por escrito y no implique renuncia de derechos.

Sostiene el recurrente que la trabajadora fue despedida y no se trata de un mutuo consentimiento. Manifiesta que como prueba de ello "consta en la planilla de remuneraciones donde aparece su firma que lo que a ella se le pagó fue la indemnización (28 semanas más 50% de marzo) que la empresa sólo paga cuando no quiere contar con los servicios de un trabajador el cual no quiere llegar a ningún acuerdo sobre ese hecho, porque como ha quedado claramente establecido que la indemnización sólo se da cuando se produce un despido injustificado y el trabajador ha optado por ello ..." (fs. 6).

El casacionista alega que como mediante el mutuo acuerdo se le pagó a la demandante la indemnización con recargo que es obligatoria en casos de despido sin causa justificada, de ese hecho debe deducirse que la relación terminó por despido y no por mutuo acuerdo.

La Sala considera que cuando la relación de trabajo termina por consenso, ambas partes pueden acordar que además de las prestaciones a que tiene derecho el trabajador se le pague prestaciones adicionales y tal convenio, que beneficia al trabajador, no viola la ley laboral ni desnaturaliza esa forma de terminación de la relación de trabajo.

El documento que reposa a foja 30 del expediente cumple con los requisitos establecidos para la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento y la trabajadora, en quien recae la carga de la prueba, no ha desvirtuado el valor probatorio de este documento, no ha probado que el consentimiento que otorgó en ese instrumento tuviera algún vicio que lo anulara.

Por tanto, el Tribunal Superior de Trabajo no ha errado al aplicar en este caso el artículo 210 ordinal 1 del Código de Trabajo, y el mismo no se considera violado.

En cuanto al último cargo de violación, expresa el casacionista que se ha violado el artículo 600 del Código de Trabajo directamente por omisión, toda vez que el juez al computar el tiempo que tenía el trabajador para presentar el certificado médico, señaló como fecha el 21 de mayo, "lo que a luz de este artículo no es cierto". (fs. 5)

La Sala considera, que este cargo no prospera porque como ya ha quedado expuesto, el reintegro se exigió después de haber precluido el término señalado en el artículo 106 del Código de Trabajo, con ese fin.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera - Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la Sentencia de 5 de marzo de 1993, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, en el proceso laboral promovido por JACQUELINE DE MEDINA contra DROGUERÍA ARROCHA, S. A. Y ARROCO, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ENOCH A. RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO GÓMEZ, CONTRA EL AUTO DE 28 DE JUNIO DE 1993, EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LUIS ALBERTO GÓMEZ -VS- COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, S. A. Y/O COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

Respetuosamente solicito a los Magistrados de la Sala me declaren impedida para conocer el presente negocio, porque mi esposo Manuel Aguilera Rojas es el Agente General de las Compañías demandadas, en la Provincia de Chiriquí, lugar donde prestó sus servicios para esas empresas el demandante Luis Alberto Gómez.

La causal de impedimento que invocó está contenida en el artículo 647 ordinal 2 del Código de Trabajo que a la letra dice:

"Artículo 647: Son causales de impedimento:

...
2. Tener interés directo o indirecto debidamente explicado en el proceso, el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados expresados en el ordinal anterior".

Panamá, veintisiete (27) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ENOCH A. RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO GÓMEZ, CONTRA EL AUTO DE 28 DE JUNIO DE 1993, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LUIS ALBERTO GÓMEZ -VS- COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, S. A. Y/O COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

La Honorable Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, ha manifestado impedimento para conocer del recurso de casación laboral interpuesto por Luis Alberto Gómez, contra el Auto de 28 de junio de 1993, emitido por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso Laboral: Luis Alberto Gómez vs Compañía Internacional de Seguros S. A., y/o Compañía Internacional de Seguros, S. A.

La Magistrada de Aguilera, fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

"Respetuosamente solicito a los Magistrados de la Sala me declaren impedida para conocer el presente negocio porque mi esposo **Manuel Aguilera Rojas** es el Agente General de las Compañías demandadas, en la Provincia de Chiriquí, lugar donde prestó sus servicios para esas empresas el demandante Luis Alberto Gómez.

La causal de impedimento que invoco (sic) está contenida en el artículo 647 ordinal 2 Código de Trabajo."

La Magistrada hace alusión al numeral 2 del artículo 647 del Código de Trabajo para sustentar su impedimento el cual requiere que dicho interés, directo o indirecto, sea debidamente explicado en el proceso. El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera observan que es procedente aceptar la solicitud de la Magistrada Franceschi de Aguilera pues, como lo que se ventila en este caso es un proceso laboral contra la Compañía Internacional de Seguros S. A., y el señor Aguilera es el Agente General de esta empresa, resulta palmario el interés manifiesto de la Magistrada en las resultas del presente negocio.

Por lo antes expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **DECLARA** que es legal el impedimento invocado por la Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, y en consecuencia procede a **LLAMAR** al Magistrado Rodrigo Molina A., de la Sala Primera de lo Civil; para reemplazar a la Magistrada impedida.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE EVANGELISTO SANTANA S., CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EVANGELISTO SANTANA -VS- FERRETERÍA Y JARDINERÍA, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El Licenciado Jorge Enrique Sánchez, actuando en representación EVANGELISTO SANTANA S., ha interpuesto ante la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia recurso de casación laboral contra la Sentencia, de 30 de marzo de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral promovido por EVANGELISTO SANTANA contra FERRETERÍA Y JARDINERÍA, S. A.

La sentencia de primera instancia No. 2 de 28 de enero de 1993 del Juzgado Primero de Trabajo, Primera Sección, resolvió, previa revocatoria del auto No. 190 de 15 de septiembre de 1992, negar el reintegro del señor EVANGELISTO SANTANA S. a la empresa Ferretería y Jardinería S. A.

La sentencia de 30 de marzo de 1993 del Tribunal Superior de Trabajo confirma la sentencia No. 2, de 28 de enero de 1993, del Juez Primero de Trabajo de la Primera Sección, por considerar que resulta evidente que "si un trabajador renuncia a ser miembro de un Sindicato y por lo tanto al cargo de directivo que ejerce, está renunciando implícitamente a la protección que le brinda el fuero sindical por razón del cargo de dirección que venía ejerciendo en el Sindicato, habida cuenta de que el fuero se otorga precisamente en razón del puesto directivo que se ejerce en representación de los trabajadores." (fs. 82)

Al formalizar el recurso de casación laboral, el casacionista sostiene que la sentencia impugnada viola los artículos 981, 991 numeral 6, 384 numeral 2 y 359 del Código de Trabajo.

Considera el casacionista que la sentencia impugnada viola directamente el artículo 981 del Código de Trabajo el cual preceptúa que el empleador puede impugnar el mandamiento de reintegro dentro de los tres días siguientes a su notificación, señala el procedimiento a seguir en estos casos e indica que en los mismos sólo se resolverá acerca de la relación de trabajo, del despido o del fuero. Alega el recurrente que cuando el señor EVANGELISTO SANTANA fue despedido gozaba del beneficio del fuero sindical y que se incurre en error cuando se da valor de plena prueba al documento emitido por el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, que consta a foja 45 del expediente; y además, que el acto de renuncia al sindicato por parte del trabajador, no se ha dado.

El artículo 981 corresponde al Libro Cuarto sobre "Normas Procesales", específicamente al Título Décimo, Capítulo II relativo al "Proceso de Reintegro", y a través de jurisprudencia reiterada la Sala ha manifestado que en los recursos de casación laboral debe invocarse como violadas normas substantivas, es decir, aquéllas que consagran derechos susceptibles de ser reclamados, y no normas adjetivas o de procedimiento, a menos que con motivo de su violación se estima infringida alguna norma substantiva, lo que a juicio de la Sala ocurre en el presente caso en el cual se debatió y declaró no probada la vigencia del fuero sindical reglamentada en el artículo 382 ordinal 2 del Código de Trabajo, cuya violación se invoca.

En segundo lugar, el recurrente estima violado el artículo 991 numeral 6 del Código de Trabajo, que consagra las reglas especiales aplicables al Proceso Abreviado, y específicamente se refiere al momento procesal en que debe presentarse la prueba documental.

La Sala observa que, al igual que el cargo anterior, se trata de una norma de procedimiento cuya infracción puede invocarse, como ya se expresó, en los recursos de casación laboral cuando el recurrente estime que como consecuencia de la misma ha resultado violada alguna norma substantiva. El casacionista al referirse a los cargos de violación objetó la prueba documental que forma la foja 45 del expediente laboral, su valor de plena prueba y la extemporaneidad de su presentación, hechos todos que también guardan relación con el artículo 382 ordinal 2 del Código de Trabajo, norma substantiva cuya violación alega.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que debe analizar los cargos de violación de los artículo 981 y 991 ordinal 6 del Código de Trabajo, con el cargo de violación del artículo 384 ordinal 2 del Código de Trabajo, el cual consagra las reglas a las que está sujeto el fuero sindical, señalando que se extiende para los "miembros principales y suplentes de las directivas, éstos últimos cuando hubiere lugar al fuero, y los representantes sindicales, hasta por un año luego de haber cesado en sus funciones."

Expresa el recurrente al exponer los cargos de violación del artículo 384 ordinal 2 que esta norma señala en forma clara la duración del fuero sindical sin distingo de ninguna clase.

Por su parte el demandado, al sustentar su oposición al recurso de casación laboral, sostiene que el señor EVANGELISTO SANTANA presentó renuncia "por escrito de su cargo de directivo sindical y del sindicato, antes de vencerse su período de mandato, para ocupar un cargo de la categoría de empleado de confianza dentro de la empresa, toda vez que los estatutos de la Organización sindical (art. 42) prohíben el ingreso del personal de confianza al Sindicato; es más la Convención Colectiva de Trabajo los excluye de sus beneficios ... de tal manera que desaparecidas las causas del fuero, éste desaparece, máxime que el trabajador ha ingresado a las filas del personal de confianza del empleador, lo cual es incompatible con la confianza que los trabajadores y la organización sindical le habían depositado a Santana."

El señor EVANGELISTO SANTANA fue despedido, a partir del 10 de junio de 1992, por la empresa Ferretería y Jardinería S. A., con fundamento en el artículo 213, literal A, numeral 13 del Código de Trabajo, en relación con el numeral 4 del artículo 127 del mismo Código. (fs. 5).

A fojas tres del presente cuaderno consta que el señor EVANGELISTO SANTANA, en elecciones celebradas el 27 de abril de 1990, fue elegido miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Melo y Compañías Afiliadas (SITRAMECA), para el período 1990-1992.

El documento que reposa a foja 45, del expediente laboral es copia auténtica de la certificación No. 754.DOS.92 expedida por el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, en la cual consta que el Sindicato de Trabajadores de Melo y Compañías Afiliadas informó mediante nota de 20 de febrero de 1992, que el señor EVANGELISTO SANTANA, Secretario de Finanzas, dejó de ser miembro de la organización. Este documento es un documento Público que hace fe de su otorgamiento, de su fecha, y de las certificaciones que en ellas haga el funcionario que lo expidió, por tanto, constituye plena prueba (artículos 751 y 754 del Código de Trabajo). El instrumento comentado fue presentado en el acto de la audiencia por la parte demandada, el demandante objetó la prueba por extemporánea y el juez a quo no la rechazó y la apreció en la sentencia.

El artículo 991 ordinal 6 dispone que la prueba documental se presente o aduzca con la demanda y permite que se presente en la audiencia cuando hubiere justo motivo. En los procesos laborales el juzgador tiene amplios poderes en materia probatoria y en el caso en estudio los ha usado, de acuerdo con la ley laboral.

La Sala comparte el criterio expuesto por el Tribunal Superior de Trabajo, en cuanto a la inexistencia del fuero sindical del demandante, toda vez que la garantía del fuero sindical, cuya finalidad es la protección de la actividad sindical impidiendo el libre despido de los organizadores de los sindicatos y de los directivos de los sindicatos ya formados, no tiene razón de ser cuando se ha dejado de pertenecer al Sindicato, hecho que se produjo en este caso.

Tal como lo manifestó el Tribunal Superior de Trabajo, resulta alejado de toda lógica jurídica, extender los privilegios de la protección del fuero sindical a quien ha dejado no sólo de ser dirigente sindical sino incluso miembro del sindicato, cuando precisamente el fuero sindical se constituye para garantizar la actividad sindical, protegiendo a sus dirigentes.

Por lo expuesto, la Sala estima que debe desestimar los cargos de violación de los artículos 981, 991 ordinal 6 y 384 ordinal 2 del Código de Trabajo.

Finalmente, el casacionista considera que el artículo 359 del Código de Trabajo se ha aplicado indebidamente.

La Sala no comparte la opinión del casacionista y estima que no se ha violado el artículo 359 del Código de Trabajo, ya que el Tribunal Superior de Trabajo no ha aplicado dicha norma al caso en estudio. En el fallo comentó el hecho de que, de conformidad con la norma citada, cuando un trabajador que pertenece a un sindicato de empresa pierde su trabajo, pierde también su condición de afiliado al sindicato. El comentario del Tribunal fue el siguiente: "cuando se trata de un sindicato de empresa, se tiene que incluso la cesantía de un afiliado o de un directivo de un sindicato provoca también la terminación de su respectiva condición, según el artículo 359 del Código de Trabajo" (fs. 81). En el caso que nos ocupa, el Sindicato al cual dejó de pertenecer el señor EVANGELISTO SANTANA es un sindicato de empresa, conforme certificación del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social (fs. 45).

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera - Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 30 de marzo de 1993, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral promovido por EVANGELISTO SANTANA contra FERRETERÍA Y JARDINERÍA S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

JULIO 1993

CARTA ROGATORIA

COMISIÓN ROGATORIA No.003 DEL 23 DE JULIO DE 1992 LIBRADA POR EL JUZGADO DIECIOCHO (18) DE SANTA FE COLOMBIA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO (FILIACIÓN NATURAL) INTERPUESTO POR LA SEÑORA RAQUEL CASTRO EN CONTRA DE GIORGIO HELMSDORFF. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a ésta Sala Cuarta de la Corte Suprema, mediante Nota DGPE/DCL/3084/92, comisión rogatoria librada por el Juzgado Dieciocho (18) de Santa Fé de Bogotá (Colombia) dentro del proceso ordinario (Filiación Natural) interpuesto por la señora Raquel Castro en contra de GIORGIO HELMSDORFF GAVELLI.

Corresponde a la Sala, en primer lugar, determinar si existe entre la República de Panamá y Colombia convención suscrita relativa a exhortos o cartas rogatorias. En cuanto a esta materia, observa la Sala que no existe convención suscrita entre ambos países, por lo que ante la inexistencia de convención alguna debe recurrirse al Código Judicial como fuente supletoria para el cumplimiento de la diligencia solicitada.

Es preciso destacar que la carta rogatoria en estudio no debe violentar el orden público panameño puesto que, de presentarse dicha violación, aún y cuando exista convención suscrita entre el Estado requirente y requerido, se negará la práctica de la diligencia en nuestro territorio.

Observa la Sala, que existe en nuestro ordenamiento interno regulación relacionada con la solicitud formulada en el presente exhorto. En el artículo 89 del Código de Comercio relativo a la inviolabilidad de los libros, correspondencia y documentos, señala en su último párrafo, que para obtener datos relacionados con esta materia se requiere previamente una acción exhibitoria. Aunado a lo anterior, el mismo artículo señala que dicha acción debe ser propuesta por separado de las demás pruebas ya que constituye una acción precautoria.

Estima la Sala que en el exhorto en estudio no se presentan mayores detalles al respecto, como tampoco se presenta el escrito de parte interesada proponiendo la acción exhibitoria para obtener así la información requerida.

Los anteriores señalamientos conducen a ésta Sala a desestimar la petición en virtud de que la misma no está acorde con los procedimientos consagrados en nuestra legislación nacional.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta (Negocios Generales) administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA NO VIABLE en la República de Panamá, el exhorto librado por el Juzgado Dieciocho (18) de Santa Fé, Colombia dentro del proceso ordinario (filiación natural) interpuesto por la señora RAQUEL CASTRO en contra de GIORGIO HELMSDORFF GAVELLI.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NO.6 DE SALAMANCA, (ESPAÑA) DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO INSTAURADO POR LA SEÑORA RAMONA MARÍA LUZ LÓPEZ REGALADO EN CONTRA DEL SEÑOR CARLOS HERNÁN SILVERA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, ha ingresado a ésta Sala Cuarta el exhorto librado por el Juzgado de Instrucción No.6 de Salamanca, España dentro del proceso de divorcio entablado por la señora RAMONA MARÍA LUZ LÓPEZ REGALADO en contra del señor CARLOS HERNÁN SÁNCHEZ SILVERA.

El objeto del exhorto consiste en notificar al señor CARLOS HERNÁN SÁNCHEZ SILVERA, mayor de edad, casado y domiciliado en Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí, República de Panamá, "a fin de que dentro del término de veinte días comparezca en autos y conteste a la demanda a medio de Abogado y Procurador, proponiendo si procediere reconvención y apercibiéndole que de no verificarlo será declarado en rebeldía y le parará el perjuicio a que hubiere lugar".

Es preciso determinar en primera instancia la existencia de alguna convención internacional entre el Estado requirente y el requerido, en este caso, Panamá, de manera que el procedimiento a seguir para el diligenciamiento del exhorto sea conforme a aquélla. En el caso que nos ocupa tanto la República de Panamá como España son suscriptoras de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, dentro de la cual se consagra el principio de reciprocidad para la práctica de diligencia procesal provenientes de los Estados partes.

Observa la Sala que el exhorto materia de estudio no es violatorio del orden público panameño, aspecto primordial que debe tener en consideración esta máxima Corporación para la autorización de su diligenciamiento en nuestro país. Aunado a lo

anterior y en virtud de que la solicitud presentada se trata de una simple notificación, procede la Sala a autorizar su diligenciamiento.

Por último, la Sala ha sostenido en reiteradas ocasiones que, cuando se trata de exhortos cuyo diligenciamiento implique una notificación como es el caso que nos ocupa, motivos de economía procesal y reciprocidad internacional, hacen factibles que por medio de Secretaría se lleve a cabo dicha notificación.

En consecuencia, la Sala Cuarta (Negocios Generales) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en la República de Panamá del exhorto librado por Juzgado de Instrucción No.6 de Salamanca, España dentro del proceso de divorcio instaurado por la señora RAMONA MARÍA LUZ LÓPEZ REGALADO en contra del señor CARLOS HERNÁN SÁNCHEZ SILVERA y DISPONE que por medio de Secretaría se realice la notificación respectiva. Una vez realizada la notificación del exhorto que nos ocupa, remítase a la Cancillería panameña para los ulteriores trámites diplomáticos necesarios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA DENTRO DEL PROCESO DE ASISTENCIA CRIMINAL EN CONTRA DEL SEÑOR EDISON ROSS Y OTROS, PROCEDENTE DE GRAN BRETAÑA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a ésta Sala Cuarta de la Corte Suprema, mediante Nota No. DGPE/DCL/1110/93, comisión rogatoria dentro del proceso de asistencia criminal que hiciera llegar la Honorable Embajada de Gran Bretaña en contra del señor EDISON ROSS Y OTROS, compuesto por cinco (5) fojas útiles.

Corresponde a la Sala, en primer lugar, determinar si existe entre la República de Panamá y Gran Bretaña convención suscrita relativa a exhortos o cartas rogatorias. En cuanto a esta materia, observa la Sala que no existe convención suscrita entre ambos países, por lo que ante la inexistencia de convención alguna debe recurrirse al ordenamiento interno como fuente supletoria para el cumplimiento de la diligencia solicitada.

El numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial establece que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, es competente para "recibir los exhortos y comisiones rogatorios librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

El objeto de la comisión rogatoria en estudio, consiste en:

"Es de conocimiento que el 23 de diciembre de 1992 la cantidad de $125,000 dólares americanos fueron transferidos desde el Midland Bank en Bond Street, Londres W1, a Barclays Bank Plc, 801 Brickell Avenue, Miami, Florida 33131, ABA 066001746 con instrucciones de pagar al Isthmus International Bank A/C No.010020239 a sub a/c 1295 (Cooper Rosewarne Ltd.). El 29 de diciembre de 1992 la cantidad de $95,000 dólares americanos fueron similarmente transferidos. Por correspondencia encontrada en posesión de GAMBLE esto es evidente que el se comunicó con: Sra. Illiana de Moreno.

Banco Mercantil del Istmo
Isthmus International Bank (Bahamas) Ltd.
Vía España y Calle 55
Apartado Postal 484
Panamá 9A
República de Panamá

Investigaciones a realizar:

1. Visitar a la Sra. Illiana de Moreno en la dirección antes indicada.

Entrevistar y tomar declaración escrita de ella en relación a la apertura de la cuenta en el Isthmus International Bank, el ingreso de los fondos arriba mencionados y de cualquier retiro posterior sobre dichos fondos. Es de interés, particularmente, cuando la cuenta fue abierta, por quien, quienes son los firmantes actuales y cualquier otro tipo de información relevante sobre el manejo de la cuenta, toda documentación relevantemente sostenida, que podría ser suministrada, incluyendo estados bancarios.

2. (De ser necesario) hacer investigaciones y tomar declaraciones por escrito de cualquier otro oficial competente del banco mencionado, en el sub-párrafo 1 arriba indicado".

Como se piden datos sobre el nombre del titular de la cuenta y se cita sólo el número de ésta, la Sala entiende que se trata de una cuenta cifrada.

Observa la Sala que existe en nuestro ordenamiento interno, regulación al respecto de la solicitud formulada en este caso, establecida en la Ley 18 de 28 de enero de 1959 que regula las cuentas cifradas. Esta ley, en los artículos 4 y 5 establece limitaciones relacionadas con esta materia, tal como se detalla a continuación:

"ARTICULO 4: Se castigará con reclusión de treinta (30) días a seis (6) meses, multas de mil (B/.1,000.00) a diez mil (B/.10,000.00), o ambas penas, a los gerentes, oficiales, funcionarios y demás empleados de las instituciones bancarias ya sean éstas nacionales o extranjeras, que revelen o divulguen a personas ajenas a la institución y al manejo de estas cuentas, cualquiera información referente a la existencia saldo o identidad del comitente de una cuenta bancaria cifrada.

ARTICULO 5: Las informaciones sobre cuentas corrientes bancarias cifradas a que se refiere el artículo anterior sólo podrán ser reveladas por los gerentes y demás empleados de las instituciones bancarias a los funcionarios de instrucción, jueces y magistrados que conozcan de procesos criminales quienes deberán mantener la información en estricta reserva dado el caso de que ésta no sea conducente a esclarecer los hechos punibles que se investigan".

El artículo antes citado establece claramente que los funcionarios de instrucción, jueces y Magistrados están facultados para recibir información referente a cuentas bancarias cifradas, siempre que dichos funcionarios conozcan de procesos criminales que se ventilen dentro del territorio nacional, ya que el artículo 1999 del Código Judicial prevé el principio de territorialidad para otorgar competencia a los jueces y fiscales para conocer de procesos penales. De lo anterior se colige que este tipo de información relacionada con cuentas bancarias cifradas está sujeta a reserva cuando los delitos se hayan cometido fuera del territorio nacional, salvo lo previsto en el artículo 9 del Código Penal y los casos en que exista un tratado de asistencia legal mutua debidamente ratificado. En este caso no existe un tratado como el antes señalado que haya sido ratificado por ambas partes.

En el caso que nos ocupa queda abierta a la institución peticionaria la alternativa prevista en el numeral 1 del artículo 9 del Código Penal que entraña una derogación parcial al principio de territorialidad. Es claro que tratándose de un delito cometido fuera de Panamá pero que produce resultados en el territorio nacional los jueces y fiscales panameños serían competentes para conocer de una denuncia por los hechos delictivos de que trata esta petición y podrían, en el curso de la instrucción del expediente o en el desarrollo posterior del proceso penal, ordenar al banco en cuestión suministrar la información aquí requerida y la práctica del testimonio que se solicita.

En consecuencia la Corte Suprema, Sala Cuarta (Negocios Generales) administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA no viable en la República de Panamá la comisión rogatoria librada dentro del proceso de asistencia criminal que hiciera llegar la Honorable Embajada de Gran Bretaña en contra del señor EDDISON ROSS Y OTROS, compuesto por cinco (5) fojas útiles.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE MÉXICO, D.F. DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO INSTAURADO POR LA SEÑORA ADRIANA GARCÍA CERRILLO -VS- WILSON GUTTING CHONG JR. MATHEWS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Floreal Garrido, Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a esta Sala, mediante Nota DGPE/DCL/3129/92 fechada 23 de diciembre de 1992, exhorto librado por el Juzgado Vigésimo Segundo de lo Familiar de México, Distrito Federal, dentro del juicio de divorcio instaurado por la señora ADRIANA GARCÍA CERRILLO en contra del señor WILSON GUTTING CHONG JR. MATHEWS.

Ejerciendo la competencia que le otorga el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial a la Sala Cuarta de Negocios Generales, para recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros, y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplir, procede la Sala a resolver lo pedido.

En este caso es aplicable la Ley 12 de 23 de octubre de 1975, mediante la cual se aprobó la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, ya que tanto México como Panamá han ratificado esta Convención.

Revisando la documentación enviada, se observa que la misma cumple con los requisitos establecidos por la Convención para tramitar estas solicitudes.

El presente exhorto tiene como objetivo notificar al señor Wilson Gutting Chong Jr. M. del juicio ordinario civil de divorcio promovido por la señora Adriana García Cerrillo. Igualmente, se requiere que el señor Wilson Gutting Chong Jr. M. señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México y para que autorice a los abogados que le darán asesoría en ese proceso, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles de ese país.

Para el cumplimiento de la presente carta rogatoria, se da como domicilio del demandado el siguiente: Gold Hill, casa N° 0373, Colón, República de Panamá.

Al haberse proporcionado el domicilio del señor Wilson Gutting Chong Jr. M., se puede cumplir con lo establecido por el numeral 1 del artículo 989 del Código Judicial,

que señala que el traslado de toda demanda debe notificarse personalmente. Esta Sala considera que la presente comisión rogatoria no viola el ordenamiento jurídico interno y puede resolverse sin dificultad alguna.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el exhorto librado por el Juzgado Vigésimo Segundo de lo Familiar del Distrito Federal de México, dentro del juicio de Divorcio instaurado por la señora ADRIANA GARCÍA CERRILLO en contra de WILSON GUTTING CHONG JR. MATHEWS.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE JIDRICHUV HRADEC DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO INSTAURADO POR LA SEÑORA IVANA SANCHEZOVA EN CONTRA DEL SEÑOR FÉLIX ALBERTO SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Nota N° DGPE/DCL/1301/93 DEL 18 de mayo de 1993, ha remitido a esta Corporación, la comisiÓn rogatoria librada por el Tribunal Distrital de JIDRICHUV HRADEC dentro del proceso de divorcio instaurado por la señora IVANA SANCHEZOVA en contra del señor FÉLIX ALBERTO SÁNCHEZ.

De acuerdo con el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales, recibir los exhortos y cartas rogatorias libradas por tribunales extranjeros y decidir sobre su viabilidad dentro del territorio nacional y el tribunal o funcionario que deba encargarse de su ejecución.

Entre la República de Panamá y la República Checa no existe Tratado sobre exhortos y cartas rogatorias por lo que se aplicará en este caso el principio de reciprocidad del Derecho Internacional.

Es importante señalar que uno de los requisitos para declarar viable un exhorto o carta rogatoria es que deberá ser traducido al español si se encuentra en lengua extranjera, además el documento debe estar debidamente autenticado.

En el caso que nos ocupa encontramos la traducción de la sentencia de divorcio, pero la misma no está debidamente autenticada. Por otro lado, el certificado que acompaña la sentencia y que está a nombre de Félix Alberto Sánchez, no se encuentra traducido al español ni tampoco está autenticado, lo que hace imposible para esta Sala resolver lo pedido y por tanto se devuelve para que se cumpla con las formalidades requeridas.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE ABSTIENE de pronunciarse y se ORDENA que sea devuelta la presente solicitud al Tribunal de origen.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

EL LICENCIADO ALFONSO ROGERS, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ LA SENTENCIA DE DIVORCIO DEL CONDADO DE PALM BEACH. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Alfonso Rogers, en su calidad de apoderado especial de BÁRBARA DE GUERRERO, presentó ante la Sala Cuarta de Negocios Generales, solicitud de reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera dictada por la Corte de Circuito del Quinceavo del Circuito Judicial, en y para el Condado de Palm Beach, Florida, calendada el 28 de octubre de 1991, en virtud de la cual se disuelve el vínculo matrimonial existente entre JOSÉ ENRIQUE GUERRERO GARRIDO y BÁRBARA ESTELA MAYERS DE GUERRERO.

En acatamiento a las disposiciones que regulan el reconocimiento y acatamiento de resolución extranjera en Panamá, se dio traslado del negocio al Señor Procurador General de la Nación quien en su Vista N°24 de 24 de junio del año en curso, expresa su anuencia sobre la viabilidad de la ejecución de la sentencia procedente del Condado de Palm Beach, Florida, porque estima que la documentación aportada por la solicitante cumple con las exigencias establecidas por el artículo 1410 del Código Judicial en relación con el artículo 114 y siguientes del Código Civil.

En efecto, al revisar los documentos que acompañan la solicitud presentada se puede apreciar a foja 1 el certificado de matrimonio expedido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá, en el que se deja constancia de que al Tomo 71 de Matrimonios de la Provincia de Panamá, Partida 462, aparece el matrimonio religioso ante la iglesia Bautista, ocurrido el 28 de septiembre de 1968, en la ciudad de Panamá, entre José Enrique Guerrero Garrido y Bárbara Estela Mayers Clark. A continuación aparece en el texto inglés, debidamente autenticado ante las autoridades correspondientes y la traducción del mismo por intérprete público autorizado, en el que se lee la sentencia final del caso N°91-28890, dictada por el Juez de Circuito C. H. Ward en virtud de la cual se disuelve el vínculo matrimonial existente entre José E. Guerrero y Bárbara E. Guerrero, el primero como demandante y la segunda como demandada. Con estos elementos probatorios se agotan las exigencias legales para el reconocimiento de la sentencia extranjera, pues se trata de una pretensión personal, presentada para su reconocimiento por la parte demandada, se encuentra debidamente traducida y versa sobre un asunto que está debidamente regulado en la legislación interna.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECONOCE la sentencia extranjera en materia civil de 28 de octubre de 1991, dictada por la Corte de Circuito del Quinceavo Circuito Judicial, Condado de Palm Beach, Florida y DECLARA que es viable su ejecución en el territorio nacional y en consecuencia autoriza su inscripción marginal al Tomo 71 de la Provincia de Panamá, Partida 462, del Registro central del Estado Civil.

Notifíquese y cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RINA MARGOT MELFI, SOLICITA SE RECONOZCA Y EJECUTE LA SENTENCIA DE LA CORTE DEL CIRCUITO DEL CONDADO DE KANHAWA, WEST VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La señora RINA MARGOT MELFI, actuando a través de su apoderado judicial, licenciado Raúl Eduardo Molina, solicita a esta Sala que declare ejecutable la sentencia proferida por la Corte del Circuito del Condado de Kanawha, West Virginia, Estados Unidos de Norteamérica, dictada el 23 de junio de 1992, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial que la unía con el señor John S. Quinet.

Recibida la solicitud se corrió traslado al Procurador General de la Nación para que emitiera su concepto. En Vista N° 27 de 5 de julio de 1993 consideró que se debe acceder a lo pedido, en virtud de que la solicitud cumple con los requisitos exigidos por la ley.

Devuelto el expediente a esta Sala para resolver, procedemos a examinar la solicitud a fin de verificar si la misma cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial.

Observamos que la sentencia se dictó a consecuencia de una pretensión personal, no fue dictada en rebeldía y la obligación para cuyo cumplimiento se procedió es lícita en nuestro país. Igualmente constatamos que los documentos presentados se encuentran debidamente autenticados y traducidos.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EJECUTABLE la sentencia dictada por la Corte del Circuito del Condado de Kanawha, West Virginia, Estados Unidos de Norteamérica el 23 de junio de 1992, que declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a los señores JOHN S. QUINET y RINA MARGOT MELFI; y ORDENA al Registro Civil que realice los trámites pertinentes para la inscripción de la mencionada sentencia.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CELESTINA KOONG, SOLICITA A LA CORTE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ, LA SENTENCIA DE DIVORCIO QUE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE ELLA Y THOMAS DOUGLAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

La señora CELESTINA KOONG, a través de su apoderado judicial Doctor Luis De León Arias ha presentado formal solicitud a la Sala Cuarta de Los Negocios Generales de ésta Corporación de Justicia con la finalidad de que se declare ejecutable en la República de Panamá, la sentencia emitida por la Corte del Circuito del Primer Circuito Judicial de la Florida, Condado de OKALOOSA, División Familiar, identificado como "case number

93-801-FD-01" y fechada el 4 de marzo de 1993. La solicitud basa su requerimiento en los siguientes hechos:

> PRIMERO: La señora CELESTINA KOONG, y el señor THOMAS DOUGLAS GRAHAM, contrajeron matrimonio el día ...
>
> SEGUNDO: Por Sentencia de fecha 16 de marzo de 1993, proferida por la Corte del Circuito del Primer Circuito Judicial de la Florida, en y por el Condado de Okaloosa, se DECRETO, la Disolución del vínculo Matrimonial celebrado entre CELESTINA KOONG y THOMAS DOUGLAS GRAHAM.
>
> TERCERO: La señora CELESTINA KOONG, es ciudadana panameña, con residencia en Calle Omar Torrijos, Casa #P-80, Arraiján.
>
> CUARTO: La Sentencia extranjera cuyo reconocimiento se solicita, fue dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal del demandante THOMAS DOUGLAS GRAHAM, esposo de mi representada, quién formula la Solicitud de Reconocimiento de la Sentencia ante la Corte Suprema de Justicia.
>
> QUINTO: La obligación para cuyo cumplimiento se ha impartido, es lícita en la República de Panamá.

El apoderado judicial de la señora CELESTINA KOONG, adjuntó a la petición incoada, copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó documento emitido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá, que hace constar el matrimonio en la República de Panamá entre la señora CELESTINA KOONG y THOMAS DOUGLAS GRAHAM, así como la nacionalidad panameña de la peticionista.

Admitida la solicitud propuesta ante este Tribunal colegiado, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación quien manifestó lo siguiente mediante vista de 5 de julio de 1993:

> "Analizada debidamente la documentación aportada con la solicitud de declaratoria de ejecutabilidad de la sentencia extranjera, observo que la misma cumple con los requisitos exigidos por el artículo 1409 del Código Judicial, es decir, que la sentencia fue dictada como consecuencia del ejercicio de una acción personal a tenor de lo señalado en el artículo 114 y siguientes del Código Civil no fue proferida en rebeldía y la misma se encuentra autenticada por las autoridades Consulares correspondientes, así como por la Dirección Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
>
> Por las consideraciones expuestas, somos de opinión que es viable proceder a la declaratoria de ejecutabilidad de la sentencia solicitada, toda vez que cumple con las exigencias establecidas en el artículo 1409 de la excerta legal antes mencionada".

De las pruebas incorporadas al expediente, se aprecia que la sentencia extranjera es el resultado del ejercicio de una pretensión personal, cuyos efectos son lícitos en nuestro país y, en cuanto a la rebeldía no existe prueba que acredite su configuración.

Por último, también se observa que la sentencia en cuestión, se encuentra autenticada por las autoridades consulares correspondientes, así como por la Dirección Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores e igualmente, está debidamente traducida a nuestro idioma oficial.

Por lo antes expuesto considera la Sala que la solicitud de ejecución de sentencia es viable conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ejecutable en la República de Panamá la sentencia emitida por la Corte del Circuito del Primer Circuito Judicial de la Florida, Condado de OKALOOSA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ELSIE IBARRA DE MARTÍNEZ, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ, LA SENTENCIA DE DIVORCIO DEL SEÑOR ROBERT LEWIS DE 1° DE NOVIEMBRE DE 1984 DICTADA POR LA CORTE DEL DISTRITO DE EL PASO, COLORADO, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La señora ROSE MARIE PARKER DE O`HERIN, actuando a través de su apoderada judicial, licenciada Elsie Ibarra de Martínez, solicita a esta Sala que declare ejecutable la sentencia proferida por la Corte del Distrito de El Paso, Colorado, Estados Unidos de América, fechada 1° de noviembre de 1984, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial existente entre la solicitante y el señor Robert Lewis O`Herin.

A tenor de lo establecido en el numeral 2 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales resolver sobre la solicitud presentada.

Recibido el presente negocio se le corrió traslado al Procurador General de la Nación, para que de acuerdo con lo señalado en el artículo 1410 del Código Judicial, emitiera su opinión sobre la viabilidad del mismo. En Vista N° 22 de 3 de junio de 1993, concluyó que se debe acceder a lo pedido por la interesada, toda vez que cumple con los requisitos señalados en materia de reconocimiento de sentencias extranjeras.

En vista de que entre Panamá y Estados Unidos de América no existe Tratado que regule esta materia, debe aplicarse lo establecido por el artículo 1409 del Código Judicial, cuyo texto señala que para que puedan ejecutarse las sentencias extranjeras en nuestro país, éstas deben haber sido dictadas como consecuencia del ejercicio de una pretensión personal; no haber sido dictada en rebeldía; que la obligación para cuyo cumplimiento se ha procedido sea lícita; y que la copia de la sentencia en cuestión esté debidamente autenticada.

La solicitud que nos ocupa llena todos los requisitos establecidos en el artículo antes citado y no vulnera nuestro orden jurídico interno: igualmente observamos que la sentencia se encuentra traducida al español y se ha adjuntado el certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil, por lo que esta Sala considera que debe concederse lo pedido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EJECUTABLE la sentencia proferida por la Corte del Distrito de El Paso, Colorado, Estados Unidos de América, el 1° de noviembre de 1984, que declaró disuelto el vínculo matrimonial entre los señores Rose Marie Parker de O`Herin y Robert Lewis O`Herin y ORDENA al Registro Civil, realizar los trámites pertinentes para la inscripción de los efectos de la presente resolución.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ATENAS, DENTRO DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA SOCIEDAD ANÓNIMA "TRAPEZA KRITIS AE" (BANCO DE CRETA) EN CONTRA DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS BOCHNER INVESTMENT COMPANY INC., DAWBER CORPORATION, ANSPACH CORPORATION, WERNICK COMPANY INC., HAWORTH INVESTMENTS, S. A. Y LA SOCIEDAD ANÓNIMA SWITT MANAGEMENT INC. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DOS (2) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones, por medio de nota N° DHPE-DCL-1945-92 del 3 de agosto de 1992, remitió el exhorto librado por el Tribunal de Primera Instancia de Atenas, dentro de la demanda interpuesta por la sociedad anónima "TRAPEZA KRITIS AE" (BANCO DE CRETA) en contra de las sociedades anónimas BOCHNER INVESTMENT COMPANY INC., DAWBER CORPORATION, ANSPACH CORPORATION, WERNICK COMPANY INC., HAWORTH INVESTMENTS, S. A. y la sociedad SWITT MANAGEMENT INC.

De acuerdo con el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional, y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

Para resolver se debe precisar que en este negocio es aplicable el principio de reciprocidad que rige en el Derecho Internacional, ya que no existe convenio relativo a los exhortos y comisiones rogatorias entre las Repúblicas de Grecia y Panamá.

De acuerdo con la documentación remitida, la sociedad anónima denominada "TRAPEZA KRITIS AE" (BANCO DE CRETA, Sociedad Anónima), emplazó ante el tribunal de primera instancia de Atenas a las sociedades anónimas denominadas "BOCHNER INVESTMENT COMPANY INC., DAWBER CORPORATION, ANSPACH CORPORATION, WERNICK COMPANY INC., HAWORTH INVESTMENTS, S. A. y SWITT MANAGEMENT INC".

Observamos que la diligencia cuya práctica se solicita es la de notificar a las sociedades anónimas arriba mencionadas y que constituyen la parte demandada en el proceso seguido en Atenas, lo cual es conforme con nuestro ordenamiento jurídico procesal.

Sin embargo, notamos que de acuerdo con los documentos enviados, la fecha para los debates ya ha transcurrido con creces, por lo cual nos parece que también ha cesado la necesidad de hacer la notificación.

Lo anterior nos lleva a estimar que carece de objeto practicar la diligencia requerida, por lo que es de lugar declarar que se ha producido la sustracción de materia, puesto que no es viable darle curso a lo pedido por lo que hemos explicado antes.

Consecuentemente, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que se ha producido el fenómeno jurídico de sustracción de materia en el caso considerado.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR PENAL DE PÉREZ ZELEDÓN, EN LA CAUSA PENAL N° 121-90-L, POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO Y HOMICIDIO CALIFICADO CONTRA ORLANDO SANTOS MADRIZ Y OTROS EN PERJUICIO DE PORFIRIO RIVERA CEDEÑO Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, exhorto librado por el Tribunal Superior Penal de Pérez Zeledón, de la ciudad de San isidro, Costa Rica en el proceso sumarial por robo agravado y homicidio calificado contra Orlando Santos Madriz y otros en perjuicio de PORFIRIO RIVERA CEDEÑO Y OTROS.

El objeto del presente exhorto lo constituye el obtener en "la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial del Ministerio Público de la República de Panamá certificación del sumario seguido contra los responsables del delito de **Homicidio** en perjuicio de Porfirio Rivera Cedeño, hecho acaecido el cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y seis en el Almacén La Unión de Sabalito de Coto Brus, frontera entre Costa Rica y Panamá; así como cualquier otra información que estime de importancia."

La Sala observa que, anterior a la solicitud formulada a través del exhorto en estudio, esta Corporación de justicia se pronunció al respecto, en virtud de solicitud hecha por el mismo Tribunal y referente a la misma causa. Dicho pronunciamiento se dio mediante resolución de 3 de agosto de 1992, en la cual se declara la viabilidad del exhorto e igualmente se dispone que por medio de Secretaría se lleve a cabo el diligenciamiento del mismo, dado que cumple con los requisitos necesarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

De lo anterior se colige que la presente solicitud deviene sin objeto por lo que lo procedente es, pues, declarar que ha operado el fenómeno jurídico de sustracción de materia y por consiguiente no puede accederse a lo pedido.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que se ha producido el fenómeno jurídico de sustracción de materia y en consecuencia ordena el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN CAUSAS FAMILIARES DEL SEÑOR DIETER WOLF CONTRA LA SEÑORA MARIELA ORTIZ JARAMILLO, A TRAMITAR EN CUMPLIMIENTO DEL ORDINAL 3° DEL ARTICULO 101 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

La Directora Encargada del Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de Nota de 11 de enero de 1993, N° DGPE/DCL/0023/93, en cumplimiento con lo establecido por el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, ha remitido a esta Sala Cuarta de Negocios Generales el exhorto de asistencia judicial en causas familiares en la causa familiar que sigue en el Juzgado Local de Bonn (Tribunal de causas familiares), el Sr. Dieter Wolf contra la Sra. Mariela Ortiz Jaramillo.

El objeto del exhorto es notificar a la Sra. Mariela Ortiz Jaramillo, con residencia en Casa 35G, La Locería, de la solicitud de declaración de nulidad de su matrimonio contraído el 26 de agosto de 1983.

Es preciso determinar en primera instancia la existencia de alguna convención internacional entre el Estado requirente (Alemania) y el requerido, en este caso, Panamá, de manera que el procedimiento a seguir para el diligenciamiento del exhorto sea conforme a aquélla. En el caso que nos ocupa no media convención en materia de exhorto o carta rogatoria entre ambos países.

Sin embargo, aún y cuando no existe convención internacional al respecto, corresponde a la Sala Cuarta de la Corte Suprema, cumpliendo con lo establecido en el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial el conocimiento del exhorto en cuestión. La norma jurídica antes citada le otorga a esta Sala la competencia privativa para el examen de los exhortos procedentes del extranjero y determinar su viabilidad en el territorio nacional.

Observa la Sala que el exhorto materia de estudio está debidamente traducido a nuestro idioma oficial, y el Código Judicial al respecto señala en su artículo 864 que "si los documentos estuvieren escritos en lengua que no sea el español, se presentarán traducidos o solicitará su traducción por intérprete público y, en defecto de éste, por uno ad hoc, nombrado por el Tribunal. Se señala también en la excerta legal que los documentos extendidos en país extranjero serán estimados como prueba, si están autenticados por el funcionario diplomático o consular de Panamá con funciones en el lugar de donde proceda el documento, y en ausencia de éstos por el representante diplomático o consular de una nación amiga."

En el caso que nos ocupa, se ha presentado copias de los documentos, pero éstas no han sido debidamente autenticadas por el funcionario panameño en el lugar de su procedencia y tampoco se ha acreditado a través de una nación amiga, la ausencia de dicho funcionario, lo que es violatorio del orden público panameño, y este es un aspecto primordial que debe tener en consideración esta máxima Corporación para la autorización de su diligenciamiento en nuestro país. Por lo anteriormente expuesto considera la Sala que no se puede acceder a lo solicitado.

En consecuencia, la SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES) DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en la República de Panamá del exhorto librado por el Juzgado Local de Bonn (Tribunal de causas familiares), con respecto a la causa de familia que el Sr. Dieter Wolf sigue en ese país contra la Sra. Mariela Ortiz Jaramillo y ORDENA que el mismo sea devuelto para su corrección.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA PÚBLICA DE LA REPÚBLICA HELÉNICA DE GRECIA, QUE SE REFIERE AL INFORME DE ESTIMACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE MIKONOS PARA NOTIFICAR A LA SOCIEDAD MELTEM HOLDINGS, S. A. CON DOMICILIO EN LA CALLE 53 TORRE BANCO SUR, URBANIZACIÓN OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Directora Encargada del Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el exhorto librado por el Ministerio de Hacienda Pública de la República Helénica de Grecia.

De acuerdo al numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, corresponde a esta Sala recibir los exhortos y comisiones rogatorias libradas por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo: de acuerdo al artículo anterior procedemos a resolver lo pedido.

Ley aplicable

En vista que entre las Repúblicas Helénicas de Grecia y la de Panamá no existe Convenio o Tratado relacionado con exhortos y cartas rogatorias, este caso se someterá al principio de reciprocidad del Derecho Internacional.

Lo que se solicita

El Ministerio de Hacienda Pública de la República Helénica de Grecia solicita que se notifique a la sociedad Meltem Holdings, S. A. de las resoluciones emitidas por ese Ministerio, con relación al pago del Impuesto de Transferencia de bienes raíces N° 153/87 por la transferencia de una parcela agrícola situada en Aghios Basilios, Mikonos, Grecia, y sobre un Acto de Imposición de multa por la diferencia resultante entre la verificación y la declaración del impuesto.

No existiendo impedimento alguno para otorgar la presente solicitud, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA VIABLE su ejecución y COMISIONA a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para que proceda con el trámite de rigor.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 21 DE MADRID, ESPAÑA, EN LOS AUTOS N° 640-1988 INSTAURADOS POR EL SEÑOR JORGE BARCO VARGAS EN CONTRA DE JOSÉ DÍAZ HERRERA TORRES, ALFONSO TORRES ROBLES Y OTROS, EN DONDE SE REQUIERE DEL REGISTRO PUBLICO REFERENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CIA. ZUALET CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha ingresado a la Sala, mediante Nota DGPE/DCL/1080/93 de 23 de abril de 1993, la comisión rogatoria librada por el Juzgado de Primera Instancia N° 21 de Madrid, España, en los autos N° 640-1988 instaurados por el señor JORGE BARCO VARGAS en contra de JOSÉ DÍAZ HERRERA TORRES, ALFONSO TORRES ROBLES Y OTROS.

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

El propósito de la carta rogatoria bajo análisis consiste en obtener del Registro Público referencia de la inscripción de la CIA. ZUALET CORPORATION.

Seguidamente procede el tribunal a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan para ambas naciones. Efectivamente observa la Sala Cuarta, que tanto el Estado panameño como el amigo Estado español, están actualmente adscritos, a la Conferencia de la Haya de 5 de octubre de 1961 la cual corresponde a nuestra Ley N° 6 de 25 de junio de 1990 y, a la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias que la que igualmente fue ratificada por Panamá mediante la Ley N° 12 de 23 de octubre de 1975.

Uno de los aspectos que debe tomar en cuenta la Sala para determinar la viabilidad del cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria, es si se encuentra debidamente traducida al idioma español, y si no es violatoria del orden público panameño, ya que, de lo contrario aun y cuando exista alguna convención entre el Estado requirente y el Estado requerido, debe negarse la práctica de dicha diligencia, puesto que prevalecen estos requisitos.

En el caso que nos ocupa los documentos que acompañan a la comisión rogatoria no han sido debidamente autenticados por el funcionario panameño en el lugar de su procedencia y, además, tampoco se ha acreditado a través de una nación amiga, la ausencia de dicho funcionario, y no se aprecia en ellos el sello de la apostilla, que legaliza los documentos surtidos en el Estado requirente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o carta rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a ley local del país que expidió dichos documentos.

Los señalamientos que preceden conducen a este Tribunal a considerar que no es posible acceder a lo impetrado, en la presente oportunidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento de la comisión rogatoria librada por el Juzgado de Primera Instancia N° 21 de Madrid, España, en los autos N° 640-1988 instaurados por el señor Jorge Barco Vargas en contra de José Díaz Herrera Torres, Alfonso Torres Robles y otros, y, en consecuencia, ORDENA, que el mismo sea devuelto a fin que el mismo sea debidamente autenticado, para así proceder a su práctica.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO SUSCRITO POR EL JUZGADO CIVIL DE CAÑAS, GUANASCATE, ESTABLECIDO POR ISIDRO GONZÁLEZ MURILLO, PARA QUE EL BANCO "DEUSTSH SUDAMERIKANISHE BANK" DEPOSITE EN LA CUENTA DE ESE JUZGADO (CUENTA N° 2962-9 DEL BANCO DE COSTA RICA) LA SUMA DE VEINTE MIL CIENTO SESENTA DÓLARES CON DIECISÉIS CENTAVOS, MÁS LOS RESPECTIVOS INTERESES QUE HAYA ACUMULADO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciado Floreal Garrido, remitió a esta Sala el exhorto librado por el Juzgado Civil de Cañas, Guanascate, República de Costa Rica, dentro del proceso sucesorio testamentario establecido por ISIDRO GONZÁLEZ MURILLO, para que el Banco "DEUSTSCH SUDAMERIKANISHE BANK" deposite en la cuenta de ese juzgado (Cuenta N° 2962-9 del Banco de Costa Rica), la suma de veinte mil ciento sesenta dólares con dieciséis centavos ($20,160.16), más los respectivos intereses que haya acumulado.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales recibir y resolver las comisiones rogatorias libradas en el extranjero, por lo cual se procede a resolver sobre lo pedido, previas las siguientes consideraciones.

Entre la República de Costa Rica y la de Panamá rige la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, ya que ambas la han ratificado. Los artículos II y III de esta Convención, establecen lo siguiente:

> "Artículo II. La presente Convención se aplicará a los exhortos o cartas rogatorias expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados partes en esta Convención, que tengan por objeto:
>
> a.- La realización de actos procesales de mero trámite, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero:

b.- La recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero, salvo reserva expresa al respecto.

Artículo III. La presente Convención no se aplicará a ningún exhorto o carta rogatoria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el artículo anterior; en especial, no se aplicará a los actos que impliquen ejecución coactiva"

Esta Sala mantiene el criterio que establece que la transferencia de fondos de una cuenta existente en un banco de nuestro país a la de un banco de otro Estado, no puede considerarse como "acto procesal de mero trámite", pues esta actuación conllevaría la disposición de un bien de un titular a otro, situación que vulnera nuestro orden público.

Lo señalado conduce a esta Sala a concluir que no es posible acceder a lo solicitado en la presente comisión rogatoria.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el presente exhorto librado por el Juzgado Civil de Cañas, Guanascate, República de Costa Rica, dentro del proceso sucesorio testamentario establecido por ISIDRO GONZÁLEZ MURILLO.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE LIMA (PERÚ) EN LOS AUTOS SEGUIDOS POR DOÑA VALENTINA CARMELA SMITH DE BISSO LOREDO, SOBRE INVENTARIO DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE POSEE CON SU ESPOSO SEÑOR CARLOS BISSO LOREDO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a esta Sala Cuarta, el exhorto librado por el Juzgado Quinto de lo Civil de Lima, Perú, en los autos seguidos por la señora VALENTINA CARMELA SMITH DE BISSO LOREDO, sobre inventario de bienes de la sociedad conyugal que posee con su esposo, el señor CARLOS BISSO LOREDO.

De acuerdo con el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros, determinar su cumplimiento en nuestro país y el funcionario o tribunal que debe darle cumplimiento, por lo que procedemos a estudiar la solicitud presentada para resolverla.

En este caso son aplicables las normas contenidas en la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, ya que tanto Perú como Panamá la han ratificado.

Después de revisar los documentos contenidos en la solicitud, podemos constatar que los mismos cumplen con los requisitos formales establecidos por esta Convención para tramitar los exhortos.

La carta rogatoria que nos ocupa, tiene por objeto obtener del Atlantic Security Bank, información sobre la o las cuentas corrientes que figuren a nombre del señor Carlos Bisso Loredo y sobre acciones, dividendos y otros valores o cuentas de plazo fijo que puedan existir a nombre del citado señor Bisso.

Es preciso destacar que la carta rogatoria, para que sea viable, no debe violentar el orden público panameño.

Observa la Sala, que existe en nuestro ordenamiento interno, regulación relacionada con la solicitud formulada en el presente exhorto. De acuerdo con lo que establece el artículo 89 del Código de Comercio, en concordancia con el Decreto de Gabinete N° 238 de 1970 que regula el régimen bancario, se requiere una acción exhibitoria para obtener datos relacionados con esta materia.

La Sala considera que la parte interesada no ha proporcionado datos suficientes en su petición, ya que ni siquiera señala los números de las cuentas sobre las cuales requiere información, ni ha presentado escrito proponiendo la acción exhibitoria.

Los anteriores señalamientos conducen a esta Sala a desestimar esta petición, en virtud de que no es acorde a los procedimientos consagrados en nuestra legislación.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE, el exhorto librado por el Juzgado Quinto de lo Civil de Lima, Perú, dentro de los autos seguidos por la señora Valentina Carmela Smith de Bisso Loredo, sobre inventario de bienes de la sociedad conyugal que posee con su esposo, el señor Carlos Bisso Loredo.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PRIMERO PROVISIONAL, RAMO PENAL, CONTRA PASTOR YOUNG, POR EL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA Y CONTRA LA FE PÚBLICA EN AGRAVIO DE ELVA MARÍA VIOLETA PASTOR YOUNG (PERÚ) MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de nota DGPE/DCL/1306/93 de 18 de mayo de 1993, remitió a esta Corporación el exhorto librado por el Juzgado Primero Provisional, Ramo Penal de Lima, Perú, dentro del proceso que se les sigue a JORGE ARTURO FEDERICO PASTOR YOUNG y MIGUEL EDUARDO JESÚS PASTOR YOUNG por el delito de apropiación ilícita y contra la fe pública en agravio de ELVA MARÍA VIOLETA PASTOR YOUNG.

Tal como lo determina el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta recibir los Exhortos y Comisiones Rogatorias librados por Tribunales extranjeros, determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o Tribunal que deba cumplirlo, por lo cual procedemos a estudiar la diligencia presentada y a resolver lo pedido.

Norma aplicable

En este caso es aplicable la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, ya que tanto Perú como Panamá, la han ratificado. la ley nº 12 de 1975 y suscrita por la República de Argentina.

La citada Convención contiene en su ordenamiento los requisitos, tramitación y límites a los cuales deben ceñirse los Estados partes de la misma.

Observamos entonces que el Artículo VIII, Acápite a, de dicha Convención, señala lo siguiente:

> "Artículo VIII: Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de los documentos que se entregarán al citado, notificado o emplazado y que serán:
>
> a.- Copia autenticada de la demanda y sus anexos, y de los escritos o resoluciones que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada; ...".

En el caso que nos ocupa, únicamente se nos envió como documentación los exhortos librados por el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 94, sin que se adjuntara copia de la demanda ni otro documento que fundamente la petición.

Como quiera que en los exhortos se autoriza a los Dres. Yauda Kuzniecky y/o Ricardo S. Levy, para el diligenciamiento de los exhortos dirigidos a la Ciudad de Panamá, se les concede el término de treinta días más el de la distancia, para que presenten la documentación completa.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DIVISIÓN DE LA MAGISTRATURA DE LA REINA, QUE SE REFIERE A LA NOTIFICACIÓN QUE SE DEBE PRACTICAR A LA SOCIEDAD EURO-AMERICAN INTERNACIONAL HOLDING, S. A., CON DOMICILIO SOCIAL EN EL EDIFICIO INTERSECO, ULTIMO PISO, Nº 10, CALLE ELVIRA MÉNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

El Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lcdo. Floreal R. Garrido, por medio de Nota DGPE/DCL/1414/93 de 4 de junio de 1993, remitió a la Sala Cuarta de Negocios Generales, el exhorto librado por la Corte Superior de Justicia División de la Magistratura de la Reina, que se refiere a la notificación que se debe practicar a la Sociedad Euro-American Internacional Holding, S. A., con domicilio social en el Edificio Interseco, último piso, Nº 10, Calle Elvira Méndez.

Procede la Sala a dilucidar la existencia de alguna convención internacional suscrita y aplicable tanto a Panamá como Estado requerido, es decir, Holanda, el cual actúa en esta ocasión, como Estado requirente. Efectivamente, observamos que a ambos Estados actualmente les rige el XII Convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos expedidos en el extranjero, concertado el 5 de octubre de 1961 en la ciudad de la Haya, Holanda.

El mencionado Convenio, que ha sido ratificado por ambos Estados, establece en su artículo primero que:

> "El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de otro Estado contratante.

Se considerarán documentos públicos en el sentido del presente Convenio:

a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un secretario, oficial o agente judicial."

Por esta razón, los Magistrados que integran la Sala consideran que todos los documentos provenientes de la Corte Suprema de Justicia de Amsterdam, han sido debidamente autenticados, pues en ellos consta el sello de la apostilla; formalidad esta que debía ser llevada a cabo, por la autoridad competente en el Estado requirente.

Por otro lado, la Sala de Negocios Generales, observa que no existe una convención aplicable para este caso concreto, por lo que se deberá utilizar el Código Judicial, como el ordenamiento jurídico supletorio indicado; habida consideración, del principio de cooperación y reciprocidad internacional, que debe existir entre los países para la práctica de alguna diligencia procesal proveniente del extranjero.

Aunado a esta situación, vemos que el Código Judicial en su artículo 864 párrafo tercero preceptúa, que los documentos procedentes del extranjero escritos en lengua distinta al castellano deberán ser presentados en Panamá debidamente traducidos, o de lo contrario, deberán los interesados solicitar la traducción de toda la documentación. Dicha traducción deberá ser realizada por un intérprete público o en su defecto por uno ad-hoc nombrado por el Tribunal. En este caso específico, podemos afirmar que la excerta legal precitada ha sido atendida, dado que de la lectura de los documentos remitidos por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores a la República de Panamá, se define con claridad, el objeto o la finalidad que se perseguía con el envío del mismo, debido a que la traducción del escrito en estudio, fue realizada en forma adecuada, por lo que, esta Corporación de Justicia, puede corresponder a la solicitud de cooperación internacional de nuestro Estado amigo Holanda.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el exhorto librado por la Corte Superior de Justicia División de la Magistratura de la Reina, que se refiere a la notificación que se debe practicar a la Sociedad Euro-American Internacional Holding, S. A., con domicilio social en el Edificio Interseco, último piso, N° 10, calle Elvira Méndez, y ORDENA que el mismo sea diligenciado por Secretaría utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente referente a la notificación. Una vez realizadas las gestiones pertinentes para practicar el exhorto que nos ocupa remítase a la Cancillería panameña para los ulteriores trámites diplomáticos necesarios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LAUDO ARBITRAL

EL LICENCIADO LUIS A. ORTEGA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR RAFAEL BIANCO FERNÁNDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PEZGOLFO, C.A., SOLICITA LA EJECUCIÓN DE MEDIDA PRECAUTORIA SOBRE M/N "OMAIRA" EX "TOPWAVE". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA.

VISTOS:

El 25 de Febrero de 1993, se dictó la providencia que admite el proceso de reconocimiento y ejecución de resolución extranjera procedente del Tribunal Marítimo de Panamá y se dispuso imprimirle el trámite que prevé el artículo 1410 del Código Judicial.

Consta en el expediente que la notificación al representante de la sociedad Comercio y Promociones S. A., supuestamente afectada por la viabilidad del exequátur, no se logró hacer hasta el 12 de abril de 1993 (fs. 82-89).

El Procurador General de la Nación, a quien se le corrió traslado del caso el 20 de abril de 1993, emitió concepto en su vista N° 25 de 25 de Junio (fs. 93-103) y después de hacer una relación de los puntos sujetos a examen al tenor de las normas que regulan la ejecución de sentencias extranjeras en nuestro País, arriba a la conclusión que el exequátur se ajusta a los requerimientos del derecho interno y estima viable la ejecución de la resolución de 14 de noviembre de 1990 ex pedida por el Juzgado de Primera instancia en lo Civil, Agrario, de Tránsito y del Trabajo del Primer Circuito Judicial del Estado de Sucre, confirmada por la Sala Política Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, el 24 de abril de 1991.

En los puntos relevantes de la vista mencionada, dice: "A nuestro juicio, resulta patente que la referida petición requiere su confrontación con las disposiciones de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982, reformada por la ley 11 de 23 de mayo de 1986, que se refieren a la ejecución de resoluciones extranjeras que versen sobre procesos marítimos por parte de la Sala Cuarta de Negocios Generales ya que, como hemos visto, es la Corte el único tribunal que posee competencia funcional para declara el reconocimiento de todas las resoluciones judiciales foráneas que se pretendan ejecutar en Panamá. En ese orden de ideas, el artículo 1409 del Código Judicial es aplicable en general en los procesos de conocimiento, en los contenciosos y en los de sucesiones; no así los procesos marítimos a los cuales vuestra Sala aplica las normas del procedimiento marítimo que regulan la ejecución de las resoluciones extranjeras.

> Así las cosas, un examen de la resolución en cuestión, con las normas aplicables del Código de Procedimiento Marítimo, revela la viabilidad de esta petición:
>
> 1.El artículo 419 de la excerta de procedimiento marítimo preceptúa que "... las sentencias interlocutorias y resoluciones que decreten medidas precautorias, pronunciadas por Estados extranjeros tendrán en la República de Panamá la fuerza que establezcan los tratados respectivos". (subraya la Procuraduría).
>
> Como hemos apreciado, la presente solicitud de reconocimiento en Panamá es de un auto que decreta una medida precautoria sobre la motonave OMAIRA, dictada en la República de Venezuela" (fs. 97-98).
>
> "Es necesario, por otra parte, en la continuación del análisis normativo, que la resolución no haya sido dictada en rebeldía, situación a todas luces cumplida, toda vez que está demostrado en autos la participación de todos los interesados en el proceso (demandado y co-demandado en el foro venezolano.
>
> Además, tratándose de una medida precautoria deben analizarse con detenimiento los ordinales 3° y 4° del artículo 422.
>
> Sobre el primer aspecto, no cabe duda alguna que las medidas precautorias son lícitas en Panamá, pues así lo establecen los distintos códigos procesales (vg. Libro II, Título II del Código Judicial, arts. 521 y s.s. y Ley 8va. de 1982, art. 164 y s.s.).
>
> Con respecto al último ordinal de la norma sub exánime observamos que la copia aportada por el peticionario reúne los requisitos para que sea considerada auténtica, pues al final del expediente de Archivo del Poder Judicial de la República de Venezuela, visible de fojas 11 a 57 (Véase esta última foja) aparecen las autenticaciones respectivas, tanto la de los funcionario venezolanos correspondientes como el de la autoridad consular panameña en aquel país.
>
> Con ello se cumple con los extremos del ordinal 4 del artículo 422 del Código arriba citado y lo preceptuado en la subsiguiente disposición, es decir, el artículo 423 de ese mismo Código ya que, tratándose de una ejecución de resolución extranjera no es necesaria la tramitación especial requerida por parte del órgano jurisdiccional que profirió la resolución, pues, como hemos visto, la nave al momento de dictarse el secuestro se encontraba en territorio venezolano" (fs. 101-103).

Sobre el presente exequátur cabe tener en cuenta que su ejecución fue presentada ante el Tribunal Marítimo de Panamá con fundamento en la Ley 8 de 1982, pero dicho Tribunal en acatamiento a las directrices que emanan de la sentencia de 20 de Marzo de 1990, que establece en forma terminante que "si bien el Tribunal Marítimo tiene competencia para ejecutar laudos arbitrales en materia marítima pronunciados en países extranjeros, según el procedimiento establecido en los artículos 419 al 428 de la Ley 8 de 30 de octubre de 1982, no la tiene para otorgar el EXEQUATUR o la autorización para que se cumplan o ejecuten en Panamá. Esta facultad -se dijo en la sentencia citada- corresponde a la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Cuarta de Negocios Generales".

En la solicitud de ejecución de la medida cautelar adoptada por un tribunal extranjero, se hace una relación del proceso de resolución de un contrato de compraventa entre la empresa PEZGOLFO C.A. y la sociedad COMERCIO Y PROMOCIONES S. A. (COPROSA) seguido en un tribunal venezolano, en el cual se dictó una medida cautelar de secuestro sobre la nave M.N. OMAIRA (ex M.N. TOPWAVE) que, según los solicitantes, es la misma nave con bandera hondureña y luego bajo registro panameño, que responde al nombre M.N. PACIFICO C. que a su vez es objeto de medidas cautelares y de un proceso de ejecución por créditos presentados por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), por CASAMAR BONDED WAREHOUSE S. A., además de una sentencia laboral por reclamos salariales que ha conducido a la venta en pública subasta de la nave, M.N. PACIFICO C de bandera panameña y tiene tercera fecha de remate fijada para el día 29 de Junio de 1993. Cabe traer a colación las atinadas observaciones que vertió el Juez Marítimo en la resolución que declara la incompetencia de ese Tribunal y su consecuente envío a la Sala Cuarta para conocer del exequátur, en las que se lee lo siguiente:

> "Es sabido que de rematarse por la vía judicial una nave, tal como se encamina el presente caso, tiene como consecuencia que el comprador en remate judicial adquiera la propiedad de la nave totalmente libre de todo gravamen y/u obligación. Sin embargo, de rematarse por la vía judicial la motonave PACIFICO C., el comprador que adquiera por esa vía la nave, de trasladarse a la República de Venezuela puede, confrontar, que la decisión jurisdiccional del Tribunal Marítimo de Panamá de venta judicial, sea sometida, previo secuestro, al escrutinio jurisdiccional de los tribunales de la República de Venezuela, toda vez que la Corte Suprema de ese país ha confirmado y mantiene en vigencia una medida de secuestro decretada sobre la motonave OMAIRA ex TOPWAVE hoy presuntamente PACIFICO C, registrada bajo la bandera panameña, decretada antes de que fuera secuestrada la nave en Panamá, sin que se hayan pronunciado los tribunales venezolanos en el fondo, más si lo ha hecho el Tribunal Marítimo de Panamá en el proceso que la Administración Judicial de ASTILLEROS BALBOAS S. A. enderezó «in rem» contra la motonave "PACIFICO C", es decir contra la cosa.
>
> Llamamos la atención a la Honorable Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia y por su conducto de al Pleno, que las decisiones del Tribunal Marítimo de Panamá, por ende del órgano jurisdiccional panameño, deben tener efectos jurídicos prácticos a nivel internacional, incluidas las resoluciones de venta judicial, que eventualmente podrán ser confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de lo Civil y posteriormente desconocidas por una jurisdicción extranjera. Esto

> acarrearía una falta de credibilidad y confianza en personas que comparezcan al Tribunal Marítimo de Panamá para participar en la compra de naves que esta jurisdicción remata y que presupone para el que adquiere el bien rematado, que el mismo, por efectos de la venta judicial, debe quedar totalmente libre de gravámenes y/u obligaciones con efectos «erga omnes».
>
> Así pues, insistimos en hacer esta advertencia, para que la Honorable Corte Suprema de Justicia, tome estos elementos en consideración y podamos promover a nivel internacional una reciprocidad efectiva que garantice la idoneidad, el prestigio y la efectividad jurídica y práctica de las decisiones jurisdiccionales marítimas de la República de Panamá, pero sin irrogar perjuicios o desconocer derechos debidamente adquiridos por legítimos acreedores que han rendido servicios con carácter de créditos privilegiados en la República de Panamá, y estas obligaciones hayan sido reconocidas por la vía judicial en este país" (fs. 71-73).

Ya la Sala Cuarta en sentencia de 19 de agosto de 1992, en el exequatur presentado por la empresa costarricense EL TOMATICO S. A., en la que se declaró viable la ejecución de la sentencia que acoge al demanda ejecutiva y ordena continuar el procedimiento hasta que la demandada cancele a la actora el capital adeudado, no así la ejecución del auto que decretó el embargo sobre una fianza de liberación emitida por una compañía de seguros, se dio la oportunidad de pronunciarse, aunque tangencialmente sobre la correcta interpretación de los exequáturs que versan sobre medidas cautelares, especialmente en nuestro país donde no se ha ratificado la Convención Americana sobre Medidas Cautelares, celebrada en Montevideo en 1979, suscrita por Panamá en 1980, pero sin efectos jurídicos internos a la fecha. En el caso en comento, la no viabilidad de la ejecución del auto de embargo sobre una fianza de liberación presentada por una compañía aseguradora se fundó en que no se trataba de un bien enajenable, de propiedad de la demandada. La mención de este caso se hace exclusivamente en relación con la medida cautelar cuya no viabilidad se debió a la naturaleza misma del objeto sobre el cual recaía el embargo y no al auto interlocutorio que se presenta en este exequátur.

Sobre los distintos casos procedentes del extranjero de los que conoce la Sala Cuarta, cabe distinguir los exhortos y Cartas Rogatorias que se rigen por la Ley 12 de 1975, la de recepción de pruebas en el extranjero que se regula por la ley 13 de 1975 y la ejecución de sentencia extranjera que se basa en el Código Judicial vigente. En los dos primeros casos los exhortos se pueden trasmitir al órgano requerido -según la ley 12- por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad central del Estado requirente o requerido, según el caso. En el segundo caso, sobre reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera, no se especifica con claridad quienes pueden pedirlo, pero la lógica jurídica indica que son las partes interesadas y según la naturaleza de la sentencia extranjera, están abiertas las vías que ofrece el Derecho internacional, los tratados, convenios y acuerdos sobre esta materia.

Precisa entonces examinar si la documentación que acompaña la solicitud de ejecución de la sentencia expedida por los Tribunales de la República de Venezuela, en el caso presente, reúnen los requisitos de autenticidad, legalidad, licitud de la obligación a ejecutarse en Panamá, legitimidad de la pretensión, bilateralidad y notificación de la parte demandada.

Ya expresó el Señor Procurador con apoyo en la Ley 8 de 1982, que los requisitos de los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial se habían acreditado y aunque el procedimiento utilizado de fotocopiado con autenticación final de foliado por secretaría, limitándose a la autenticación de la firma de uno de los jueces del Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo del Primer Circuito Judicial del Estado de Sucre, Venezuela, (ver fojas 57 y 57 vuelta), se deduce que el expediente contentivo del proceso, con sus resoluciones originales, reposa en ese Juzgado y que la persona autorizada para expedir copias y dar fe de su autenticidad es la que aparece a folios 56. El profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Panamá, Dr. Gilberto Boutin, quien se ha ocupado en sus escritos de esta materia, anota la necesidad de que se limiten los poderes del Tribunal competente de la causa sobre la apreciación de los hechos o valoración de los hechos limitándose únicamente a valorar los relacionados con las condiciones o requisitos comunes que exige la ley para la solicitud del exequátur, con el fin de evitar al máximo la revisión en el fondo.

No obstante, en este caso está en juego también el principio de reciprocidad y el reconocimiento de la sentencia extranjera, en virtud de que otras decisiones de los Tribunales panameños, esencialmente en el campo marítimo, han sido objeto de cuestionamiento en Venezuela dejando en entredicho la seguridad jurídica y el reconocimiento de los efectos jurídicos de la cosa juzgada, ya que la interferencia de intereses particulares una vez abandonan el ámbito territorial de la soberanía de la Ley del Estado que adquirió legítimamente la competencia del caso distorsionan el valor de las decisiones judiciales.

La Sala Cuarta advierte que en la documentación adjunta no aparece la resolución de 14 de noviembre de 1990 del Juzgado de Circuito del Estado Sucre, cuya ratificación hace la Corte Suprema de Venezuela.

La información que aporta el solicitante es demostrativa de un conflicto de intereses en cuanto a la propiedad de la nave OMAIRA, rebautizada con el nombre de PACIFICO C., por lo que, con base al exequátur presentado, y sin perjuicio de los débitos y créditos que ha generado en su recorrido hasta los Astilleros Balboa, S. A. con base al principio de reciprocidad, cabe resolver lo pedido, limitado a la sentencia de la Corte Suprema de 24 de abril de 1991.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce la sentencia confirmatoria emitida por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, con fecha de 24 de abril de 1991 y declara que es viable su ejecución en Panamá, por lo que dispone que el Tribunal Marítimo de Panamá tome las providencias conducentes a dicha ejecución conforme a las leyes marítimas pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SOLICITUD PARA QUE LAS AUTORIDADES MILITARES DE LOS ESTADOS UNIDOS PUEDAN ENTREVISTAR A JUAN MANUEL ALTAMIRANDA ORTEGA, QUIEN SE ENCUENTRA DETENIDO A ORDENES DE LA JUEZ SÉPTIMA DEL CIRCUITO PENAL DE ANCÓN, POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia ha recibido solicitud para que las autoridades militares de los Estados Unidos puedan entrevistar al señor JUAN MANUEL ALTAMIRANDA ORTEGA, quien se encuentra detenido a órdenes de la Juez Séptima del Circuito Penal de Ancón, por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Una vez examinado el expediente contentivo de la solicitud la Sala cree conveniente plasmar las siguientes observaciones: tratándose de una petición presentada por las autoridades militares de los Estados Unidos acantonadas en nuestro país, se hace necesario verificar la ley aplicable a esta situación en vías de determinar el funcionario o tribunal competente para conocer de este negocio. En este caso la ley aplicable es el Tratado del Canal de Panamá (Torrijos-Carter), en el que se establece en el artículo 3, numeral 5 del Acuerdo para la ejecución del artículo IV, que el "Comité Conjunto referirá a los dos Gobiernos, para su consideración a través de los conductos apropiados, cualquiera asuntos que no haya podido resolver."

En este caso una vez que el Comité Conjunto recibió la presente solicitud, la remitió a la autoridad a cuyas órdenes se encuentra el Sr. JUAN MANUEL ALTAMIRANDA ORTEGA: la Juez Séptima del Circuito Penal de Ancón, quien a su vez lo remitió a esta Sala Cuarta, pero como esta petición no cumple con los requisitos mínimos para que se le considere ni exhorto ni carta rogatoria, no le corresponde a esta máxima corporación de justicia el conocimiento de la presente solicitud, pero en atención a los principios de cooperación y reciprocidad internacional lo que procede entonces declinar el conocimiento de dicho negocio a favor de la Juez Séptima del Circuito Penal de Ancón, quien conoce del caso y decidirá si es viable o no conceder la entrevista que solicitan las autoridades militares de los Estados Unidos.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la solicitud para que las autoridades militares de los Estados Unidos puedan entrevistar al SR. JUAN MANUEL ALTAMIRANDA ORTEGA, quien se encuentra detenido por el delito de tráfico ilícito de drogas a órdenes de la Juez Séptima del Circuito Penal de Ancón para que ésta continúe la tramitación del negocio y lo resuelva.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACUSACIÓN POR FALTA DE ÉTICA JUDICIAL FORMULADA POR EL LICDO. RODOLFO MURILLO HERNÁNDEZ EN CONTRA DEL JUEZ QUINTO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, LICDO. JUAN BOSCO MOLINA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CONSEJO JUDICIAL.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de los integrantes del Consejo Judicial, de la Acusación por falta de la Ética Judicial formulada por el Licdo. Rodolfo Murillo Hernández en contra del Juez Quinto Municipal del Distrito de Panamá, Licdo. Juan Bosco Molina.

La Honorable Magistrada Sustanciadora de esta acción, procedió a admitir la acusación formalizada por el licenciado MURILLO, al considerar que ésta cumplía con las previsiones normativas de los artículos 444 del Código Judicial, tal como se aprecia a foja 26 del expediente.

En providencia de 19 de febrero de 1993, que consta a foja 38 del expediente, "se concede la apelación anunciada y sustentada en término por el acusado y se dispone remitir el expediente al miembro del Consejo Judicial que corresponda en turno y orden alfabético, conforme al artículo 445 del Código Judicial".

Al encontrarse la presente apelación en estado de resolver, observa el Magistrado Sustanciador de ésta, que en sentencia de 3 de mayo de 1993, se declaran inconstitucionales los artículos 441 y 449 del Código Judicial.

En la sentencia antes citada se señala que el organismo competente para conocer de las correcciones disciplinarias formuladas contra un juez, es su superior jerárquico. De allí que el organismo competente, en este caso concreto, para conocer de las

acusaciones por faltas a la ética judicial formuladas contra el Juez Quinto Municipal del Distrito de Panamá, es el Juez de Circuito que está de turno, y no el Consejo Judicial. Por ello, el Consejo Judicial debe declinar competencia en el organismo competente para conocer de esta acusación ya que, con posterioridad a la sentencia de 3 de mayo de 1993, no puede aplicarse a este caso concreto el artículo 441 del Código Judicial.

En consecuencia, el Consejo Judicial administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la resolución de 19 de enero de 1993 proferida por la Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz, sustanciadora de la acusación que, por supuestas faltas a la ética judicial, interpuso el Licdo. Rodolfo Murillo Hernández DECLINA competencia en el Juzgado de Circuito del Distrito de Panamá, que se encuentre de turno, para que conozca de la acusación y ENVÍA el expediente a dicha corporación a fin de que se haga el reparto del negocio de conformidad con las disposiciones vigentes.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) JORGE RAMÓN VALDEZ

(fdo.) JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ (fdo.) DONATILO BALLESTEROS

(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario Ejecutivo Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=